



PROCURADURÍA PARA LA  
DEFENSA DE LOS DERECHOS  
HUMANOS DE EL SALVADOR



# INFORME DE LABORES

J U N I O 2 0 1 2 - M A Y O 2 0 1 3

LIC. OSCAR HUMBERTO LUNA  
PROCURADOR PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS



# **Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador**



## **Informe de Labores de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos**

**Junio 2012 – Mayo 2013**

San Salvador, julio de 2013



**Procuraduría para la Defensa  
de los Derechos Humanos,**

9ª Avenida Norte y 5ª Calle Poniente  
Edificio AMSA No.535, San Salvador,  
El Salvador, Centro América.

**Unidad Coordinadora:**  
Unidad de la Realidad Nacional

**Impresión: Editorial e Impresora Panamericana**

**Julio de 2013**





## UNIDAD DIRECCIONAL

**Lic. Oscar Humberto Luna**

Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos  
Tel. 2520-4303

<p><b>Licda. Mirna del Carmen Rojas Márquez</b> Procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos Humanos Tel. 2520-4340</p>	<p><b>Licda. Ana Georgina Ramos de Villalta</b> Procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Niñez y Juventud Tel. 2520-4343</p>
<p><b>Licda. Yanira del Carmen Cortéz Estévez</b> Procuradora Adjunta para la Defensa del Derecho al Medio Ambiente Tel. 2520-4342</p>	<p><b>Licda. Raquel Caballero de Guevara</b> Procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer y Familia Tel. 2520-4349</p>
<p><b>Licda. Gricelda Mercedes Guardado de Ramírez</b> Procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos Civiles e Individuales Tel. 2520-4350</p>	<p><b>Lic. Antonio Aguilar Martínez</b> Procurador Adjunto para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales Tel. 2520-4353</p>
<p><b>Lic. Roberto Antonio Velasco Carpio</b> Director de la Escuela de Derechos Humanos Tel. 2524-6913</p>	

# ÍNDICE

Contenido	Páginas
Mensaje del Señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos .....	11
Introducción .....	19
Resumen ejecutivo.....	20
<b>I Análisis situacional de los derechos humanos .....</b>	<b>39</b>
<b>1.1. Derechos civiles y políticos .....</b>	<b>41</b>
a) Situación de la seguridad ciudadana: perspectiva institucional .....	41
i. La situación interna de la Policía Nacional Civil .....	41
ii. El derecho a la seguridad ciudadana en el marco de la tregua entre pandillas .....	45
iii. La Fiscalía General de la República y el funcionamiento del Centro de Intervención de las Telecomunicaciones .....	48
b) El marco legal y situación de los defensores de derechos humanos .....	49
c) El Estado de El Salvador ante la justicia internacional. Caso El Mozote .....	50
d) Libertad de expresión .....	51
i. Protección de periodistas .....	51
ii. Demanda de inconstitucionalidad contra el mecanismo de asignación de frecuencias .....	52
iii. El proceso de transición digital terrestre .....	53
iv. Derecho de rectificación y respuesta .....	54
e) Situación de los Derechos Políticos en El Salvador, una evaluación desde las últimas elecciones legislativas y municipales del año dos mil doce .....	54
<b>1.2. Derechos económicos, sociales y culturales .....</b>	<b>57</b>
a) Derecho a un nivel de vida adecuado.....	57
b) Derecho a una alimentación adecuada .....	63
c) Derecho a la salud .....	66
d) Derecho a la educación .....	70
e) Derecho al trabajo y a las libertades sindicales .....	75
f) Derecho a una vivienda adecuada .....	79
<b>1.3. Derecho a la protección del medio ambiente .....</b>	<b>82</b>
a) Minería y derechos humanos .....	83
i. Posición de la PDDH ante la propuesta de Ley Especial para la Suspensión de los Procedimientos Administrativos relacionados a Proyectos de Exploración y Explotación de Minería Metálica .....	83
ii. Audiencia ante la CIDH sobre “Minería Metálica y los Derechos Humanos en la República de El Salvador” .....	84
iii. Minería transfronteriza .....	85
b) El derecho humano al agua .....	87
c) Contaminación electromagnética y derechos humanos .....	90
d) Protección de los Recursos Naturales y el proceso de ratificación del Protocolo de Nagoya .....	92
e) La gestión de riesgos y los derechos humanos .....	95
f) Cambio climático .....	96
g) Falta de reparación en casos ambientales .....	97
i. Contaminación del Río San Sebastián con drenaje ácido y la ausencia de reparación ante este grave hecho .....	97

Contenido	Páginas
ii. La falta de reparación de las víctimas de la tragedia ocurrida en el Arenal Monserrat de San Salvador .....	97
iii. Contaminación por plomo en Sitio del Niño y la ausencia de justicia ambiental .....	98
1.4. Derechos de la niñez, adolescencia y juventud .....	99
a) Generalidades .....	99
b) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a vivir libres de violencia .....	100
i. La dinámica y consecuencia de la violencia .....	101
ii. La magnitud de la violencia contra niñas, niños y adolescentes .....	101
iii. Niñas, niños y adolescentes víctimas de la violencia homicida .....	102
iv. Femicidio de mujeres adolescentes .....	103
v. Niñas, niños y adolescentes como víctimas de maltrato y otras formas de violencia .....	104
vi. Las niñas víctimas de violencia sexual: Una tendencia en ascenso .....	105
vii. Niños, niñas y adolescentes víctimas de las pandillas .....	108
c) Acciones de la PDDH en defensa de los derechos de las NNA .....	110
i. Audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos .....	110
ii. Posicionamiento del Lic. Oscar Humberto Luna, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, sobre la problemática de la desaparición de personas en El Salvador .....	112
iii. Recomendaciones emitidas por esta Procuraduría para combatir la violencia contra las niñas, niños y adolescentes .....	113
d) Implementación del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia .....	117
e) Niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de pobreza .....	119
f) El derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes .....	121
g) Niñas, niños, adolescentes y jóvenes migrantes .....	122
h) El derecho a la educación de la niñez y la adolescencia salvadoreña .....	123
i) Derecho a la protección frente a la explotación laboral .....	124
1.5. Derechos humanos de las mujeres .....	126
a) Situación de violencia de género .....	128
i. Violencia intrafamiliar .....	130
ii. Violencia sexual .....	132
iii. Femicidios .....	134
iv. Mujeres desaparecidas .....	138
b) Derecho al empleo digno .....	140
c) Derecho a la salud .....	141
d) Situación de la mujer rural .....	144
e) Situación de participación de las mujeres en la vida política y pública .....	145
f) Situación de las Mujeres Privadas de Libertad .....	146
1.6. Derechos específicos de otros grupos en situación de vulnerabilidad .....	148
a) Pueblos indígenas .....	148
b) Población afrodescendiente .....	150
c) Derechos humanos de la comunidad LGBTI .....	150
d) Derechos humanos de las personas migrantes .....	151
e) Situación de las víctimas de trata de personas .....	158

Contenido	Páginas
f) Derechos humanos de las personas afectadas por la sentencia de la corte internacional de justicia de 1992 (ex bolsones) .....	158
g) Derechos de las personas adultas mayores .....	159
h) Derechos de las personas con VIH/sida .....	165
i) Derechos de las personas con discapacidad .....	170
II Presentación institucional .....	175
2.1. Mandato constitucional y legal .....	176
2.2. Estructura organizativa .....	177
2.3. Personal de la institución .....	179
III Plan de trabajo .....	181
3.1. Pensamiento estratégico .....	183
3.2. Exposición de los objetivos, las metas y los resultados obtenidos .....	183
IV Asignación y ejecución presupuestaria .....	193
4.1. Asignación y ejecución presupuestaria .....	196
4.2. Cooperación externa y gestiones de compra y contrataciones .....	198
V Logros principales por áreas estratégicas .....	201
5.1. Protección de los derechos humanos .....	203
a) Tramitación de casos de presuntas violaciones a derechos humanos .....	204
i. Orientaciones legales .....	205
ii. Denuncias admitidas .....	206
iii. Resoluciones iniciales .....	210
iv. Resoluciones finales .....	214
v. Seguimiento a las recomendaciones emitidas en resoluciones finales e informes especiales .....	223
vi. Medidas cautelares .....	227
b) Vigilancia de la situación de las personas privadas de libertad .....	230
i. Centros penitenciarios .....	232
ii. Centros de internamientos para menores infractores .....	234
iii. Centros de resguardo de detención administrativa y bartolinas .....	236
c) Activación de mecanismos de protección de derechos humanos .....	239
d) Atención a otros grupos vulnerables o en situación de vulnerabilidad .....	240
i. Atención a personas con VIH .....	241
ii. Atención a personas con discapacidad .....	241
iii. Atención a personas migrantes y sus familiares .....	242
iv. Atención a salvadoreños y salvadoreñas que viven en los ex bolsones .....	243
v. Atención a periodistas y profesionales de la comunicación .....	244
vi. Atención a personas víctimas del conflicto armado .....	244
e) Otras acciones relacionadas .....	245
i. Revisión de procedimientos específicos para la tramitación de denuncias .....	245
ii. Revisión y actualización de la tipología de violaciones a derechos humanos .....	245
iii. Establecimiento de criterios y lineamientos para la atención adecuada de casos y situaciones individuales .....	245

Contenido	Páginas
iv. Apoyo al Despacho del Señor Procurador en el manejo de casos y situaciones .....	245
v. Impulso y apoyo técnico para la formulación de propuestas .....	246
vi. Acciones de coordinación realizadas respecto de la instalación y funcionamiento del Centro de Intervención de las Telecomunicaciones .....	246
vii. Observatorio Electoral .....	246
viii. Acuerdo de cooperación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) .....	247
5.2. Análisis e incidencia en políticas, normas y prácticas del Estado .....	248
a) Informes especiales y situacionales .....	249
i. Derechos civiles .....	250
ii. Derechos económicos, sociales y culturales .....	250
iii. Derechos humanos de las mujeres .....	251
iv. Derecho a la protección del medio ambiente .....	251
v. Derechos de la niñez, adolescencia y juventud .....	251
b) Opiniones sobre Proyectos de Ley, Posicionamientos sobre Normativas y Propuestas de Reforma de Ley .....	252
i. Derechos civiles .....	253
ii. Derechos económicos, sociales y culturales .....	253
iii. Derecho a la protección del medio ambiente .....	253
iv. Derechos de la niñez, adolescencia y juventud .....	253
c) Posicionamientos públicos .....	254
i. Derechos civiles y políticos .....	255
ii. Derechos económicos, sociales y culturales .....	255
iii. Derecho a la protección del medio ambiente .....	256
iv. Derechos de la niñez, adolescencia y juventud .....	257
v. Derechos humanos de las mujeres .....	257
d) Observación preventiva, buenos oficios y mediaciones .....	258
i. Observación preventiva y atención de crisis .....	259
ii. Interposición de buenos oficios .....	260
iii. Mediaciones .....	261
e) Programa de Observatorio de los Derechos Humanos .....	263
5.3. Promoción y educación en derechos humanos .....	264
a) Datos estadísticos a nivel nacional .....	265
b) Delegaciones Locales .....	268
c) Delegaciones Departamentales .....	269
d) Escuela de Derechos Humanos y departamentos de la Sede Central .....	270
i. Dirección de la Escuela de Derechos Humanos .....	270
ii. Unidad de Educación .....	271
iii. Unidad de Cultura y Promoción .....	274
iv. Unidad de la Realidad Nacional .....	274
v. Biblioteca Institucional .....	275

Contenido	Páginas
vi. Unidades Juveniles de Difusión .....	275
vii. Departamento de Comunicaciones y Prensa .....	275
e) Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y Procuradurías Adjuntas Específicas .....	276
5.4. Acciones y relaciones externas .....	277
a) Mesas temáticas de trabajo .....	278
b) Convenios suscritos .....	287
c) Asistencia a eventos organizados por diversas instituciones y otras acciones de colaboración .....	289
d) Reuniones sostenidas con autoridades públicas, representantes de organismos internacionales, organizaciones sociales, entre otros .....	291
5.5. Fortalecimiento institucional .....	292
a) Secretaría general .....	293
b) Departamento de recursos humanos .....	294
c) Departamento administrativo .....	295
d) Departamento jurídico .....	296
e) Departamento de comunicaciones y prensa .....	296
f) Departamento de informática .....	297
g) Unidad de planificación institucional .....	299
h) Unidad de proyectos y gestión de cooperación .....	300
i) Unidad de acceso a la información pública .....	300
j) Procuradurías adjuntas específicas .....	301
VI Resumen de actividades principales .....	307
6.1. Sede central .....	308
a) Consolidado general .....	311
b) Consolidado de la Escuela de Derechos Humanos .....	312
c) Consolidado de las Procuradurías Adjuntas Específicas .....	314
6.2. Delegaciones Locales .....	319
6.3. Delegaciones Departamentales .....	328
VII. Informes situacionales en materia de derechos humanos a nivel local y departamental	355
Anexos	377

## ÍNDICE DE CUADROS, GRÁFICAS, MAPA Y ORGANIGRAMA

Contenido	Páginas
<b>Cuadros</b>	
1. Funciones constitucionales .....	176
2. Atribuciones legales .....	177
3. Distribución de plazas por régimen salarial y sexo .....	179
4. Nuevas contrataciones por sexo .....	179
5. Distribución de plazas por actividad y sexo .....	180
6. Área Estratégica de Protección de los Derechos Humanos .....	184
7. Área estratégica de Análisis e Incidencia .....	186

Contenido	Páginas
8. Área estratégica de Promoción y Educación en Derechos Humanos .....	190
9. Área estratégica de Acciones y Relaciones Externas .....	191
10. Área estratégica de Fortalecimiento Institucional .....	192
11. Distribución de la asignación presupuestaria .....	196
12. Distribución de ejecución presupuestaria institucional .....	197
13. Gestiones de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales relacionados con la Cooperación Externa .....	200
14. Reporte de orientaciones y trámite de expedientes a nivel nacional .....	205
15. Diligencias de investigación por derechos específicos en el Departamento de San Salvador .....	215
16. Verificaciones a instituciones públicas en el Departamento de San Salvador .....	216
17. Grado de acatamiento de recomendaciones en resoluciones finales por instituciones públicas mayormente señaladas .....	224
18. Instituciones públicas que incumplieron la Ley de la PDDH .....	225
19. Verificaciones a instituciones estatales responsables de las personas privadas de libertad .....	231
20. Verificaciones realizadas por clasificación de centros penitenciarios .....	232
21. Verificaciones realizadas a centros de internamiento: reeducación y alternativos para jóvenes infractores de la Ley Penal .....	235
22. Estadística de Consultas Atendidas en los Centros Penitenciarios, Centros de Reeducación y Centros Alternativos para menores infractores .....	237
23. Informes especiales y situacionales .....	250
24. Opiniones sobre proyectos de ley, posicionamientos sobre normativas y propuestas de reforma de ley por área temática .....	253
25. Pronunciamientos por área temática .....	254
26. Detalle de diligencias de observación preventiva realizadas y atención a crisis .....	258
27. Sectores sociales beneficiados por las actividades de promoción y educación en derechos humanos .....	266
28. Actividades de promoción y educación a nivel nacional .....	267
29. Actividades de promoción y educación en las delegaciones locales .....	268
30. Actividades de promoción y educación en las delegaciones departamentales .....	269
31. Actividades de promoción y educación en la Escuela de Derechos Humanos y los Departamentos de la Sede Central .....	270
32. Actividades de promoción y educación del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y las Procuradurías Adjuntas Específicas .....	276
33. Mesa Penitenciaria institucional .....	279
34. Mesa Permanente de Género .....	279
35. Mesa Permanente de Personas Adultas Mayores .....	280
36. Mesa Permanente de Personas con Discapacidad .....	281
37. Mesa Permanente de Salud .....	282
38. Mesa Permanente de Niñez, Adolescencia y Juventud .....	283
39. Mesa Permanente sobre Derechos de los Pueblos Indígenas .....	284
40. Mesa Permanente sobre derechos humanos de la Comunidad LGBTTTI .....	285
41. Mesa Permanente sobre Soberanía Alimentaria .....	286
42. Actividades y logros alcanzados por la Secretaría General .....	293
43. Capacitaciones para el personal institucional .....	294

Contenido	Páginas
44. Actividades y logros alcanzados por el Departamento Administrativo .....	295
45. Actividades y logros alcanzados por el Departamento Jurídico .....	296
46. Actividades y logros alcanzados por el Departamento de Comunicaciones .....	296
47. Actividades y logros alcanzados por el Departamento de Informática .....	297
48. Actividades y logros alcanzados por la Unidad de Planificación Institucional .....	299
49. Actividades y logros alcanzados por la Unidad de Proyectos y Gestión de Cooperación .....	300
50. Actividades y logros alcanzados por la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos del Medio Ambiente .....	301
51. Actividades y logros alcanzados por la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Niñez y Juventud .....	302
52. Actividades y logros alcanzados por la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales .....	303
53. Actividades y logros alcanzados por la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Civiles y Políticos .....	304
<b>Gráficas</b>	
1. Sobre incrementos presupuestarios 2011-2013 .....	195
2. Distribución de la asignación presupuestaria institucional .....	196
3. Ejecución presupuestaria institucional .....	197
4. Recepción de casos más denunciados por área temática .....	207
5. Recepción de casos más denunciados por derechos específicos .....	208
6. Recepción de casos más denunciados por instituciones públicas .....	209
7. Derechos humanos más señalados en resoluciones iniciales .....	211
8. Instituciones públicas más recomendadas y notificadas en resoluciones iniciales .....	214
9. Tipo de resolución final emitida .....	215
10. Derechos humanos más violentados en resoluciones finales .....	221
11. Instituciones públicas mayormente señaladas con responsabilidad en resoluciones finales .....	222
12. Grado de acatamiento de recomendaciones en resoluciones finales .....	224
13. Diligencias de observación preventiva realizadas según naturaleza .....	260
14. Diligencias de buenos oficios realizadas según naturaleza .....	261
15. Detalle de mediaciones realizadas según naturaleza .....	262
<b>Mapa</b>	
Denuncias admitidas por departamento y regiones .....	206
<b>Organigrama</b>	
Organigrama institucional .....	168



## MENSAJE DEL SEÑOR PROCURADOR PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS



Tengo el agrado de presentar a la Honorable Asamblea Legislativa el sexto Informe Anual de Labores, de mi gestión realizada del *1 de junio de 2012 al 31 de mayo de 2013*<sup>1</sup>, en cumplimiento del artículo 131, numeral 36 de la Constitución de la República, en el que se rinde cuentas del ejercicio del mandato constitucional y legal de velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos y supervisar las actuaciones de la administración pública frente a los particulares, así como dar a conocer la posición institucional frente a los problemas que afectan el bienestar y la dignidad de la población salvadoreña, en especial la de los grupos en situación de vulnerabilidad, y que, por tanto, requieren de acciones concretas para su pronta solución; por tanto, constituye un aporte valioso para evidenciar el desempeño de las entidades públicas, y encauzar su compromiso con el respeto y la garantía de los derechos humanos.

En el transcurso del período, continuamos con la implementación del Plan Estratégico Institucional 2011-2014, enfocado en cinco áreas: protección de los derechos humanos; análisis e incidencia de políticas públicas, normas y prácticas públicas; promoción y educación en derechos humanos; acciones y relaciones externas; y fortalecimiento institucional; las cuales se materializan en los Planes Anuales Operativos del 2012 y 2013, a través de un conjunto de acciones, indicadores de desempeño y metas para la atención de denuncias ciudadanas, así como mediante diversas actividades que se consideran importantes para cumplir con el mandato constitucional y legal.

La metodología que se utilizó para recolectar, sistematizar y analizar la información institucional fue la de identificar indicadores básicos de acuerdo al marco jurídico institucional<sup>2</sup>, ubicados en matrices y solicitudes de información, en función de las áreas estratégicas, lo que ha llevado a adoptar un enfoque de unidad en cuanto a reflejar la consecución de los objetivos institucionales, en la que todas las dependencias se encuentran involucradas procurando, entre ellas, relaciones de cooperación y complemento.

Durante mi gestión, me he propuesto consolidar la credibilidad institucional con un amplio reconocimiento de la población y las autoridades públicas -y excepcionalmente, instituciones privadas- a las que se dirige nuestras actuaciones. En el período que corresponde el presente Informe Anual, hemos logrado mantener los niveles sobresalientes de confianza ciudadana reportados de años anteriores. De acuerdo al último sondeo de opinión elaborado por el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) se ubica entre las primeras instituciones públicas que gozan de niveles altos de confianza ciudadana<sup>3</sup>. En los últimos años, la PDDH ha generado credibilidad y buena

1 El licenciado Oscar Humberto Luna fue electo Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos el 6 de julio de 2007, gestión que concluyó el 5 de julio de 2010; luego fue nombrado para un segundo período que inició el 6 de julio de 2010 y concluirá el 5 de julio de 2013.

2 Artículo 194, Romano I de la Constitución de la República; y 11 y 12 de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

3 IUDOP. Encuesta de evaluación del año 2012. Consulta de Opinión Pública, noviembre 2012, San Salvador, Serie de informes 131, página 71.

imagen en el ámbito nacional e internacional, basada en valores propios e incidencia en la vigencia de los derechos humanos.

Muestra de lo anterior, es que en el área de **protección de los derechos humanos**, se mantuvieron las cifras registradas en años anteriores, en cuanto a orientaciones legales y denuncias admitidas, con 9,944 y 3,851, respectivamente. De igual manera, en la producción de resoluciones iniciales y finales, con 712 y 679, respectivamente; éste último dato con un aumento casi del cien por ciento respecto al período anterior.

Asimismo, logramos dar seguimiento a 171 recomendaciones dirigidas a instituciones públicas con el objetivo de cesar, restituir y reparar las violaciones a derechos humanos que fueron constatadas, donde la mayoría de éstas fueron cumplidas de manera total o parcial, sólo 19 no fueron cumplidas, y en 6, únicamente se informó sobre las diligencias o procedimientos encaminados a investigar y resolver situaciones de su competencia.

Las violaciones a los derechos humanos más recurrentes se refirieron a los derechos al debido proceso administrativo; derecho al trabajo; al acceso a la justicia; a la integridad personal; a la libertad personal; el deber estatal de garantía; el derecho de las mujeres a un vida libre sin violencia; a la salud; y el derecho de las personas privadas de libertad a mantener relaciones con sus familiares. Las instituciones públicas mayormente declaradas como violadoras a derechos humanos fueron: la Policía Nacional Civil; la Corte Suprema de Justicia; los Gobiernos Locales; el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública; la Dirección General de Centros Penales; la Fuerza Armada de El Salvador; el Ministerio de la Defensa Nacional; y la Fiscalía General de la República.

Asimismo, tuvimos incidencia con la emisión de resoluciones de medidas cautelares en casos individuales de extrema gravedad o urgencia, con la finalidad de evitar que se consuman daños irreparables a la dignidad de las personas. Se destacan las recomendaciones emitidas al Director de la Policía Nacional Civil y el Fiscal General de la República, para que investigaran de manera imparcial, exhaustiva y efectiva las amenazas hechas contra miembros de la organización Iniciativa Social para la Democracia y el Director del Servicio Social Pasionista, con tal de identificar a los responsables, juzgarlos y sancionarlos según el marco legal vigente.

También, me pronuncié enérgicamente en casos de naturaleza colectiva ante la inminente situación de riesgo a la vida, salud y medio ambiente para las personas que habitan en el cantón “Loma de Gallo” de San Luís Talpa, Departamento de La Paz, por el abandono aproximado de catorce toneladas de tóxicos, entre los que se encuentra Toxafeno, Metilparatión y Sponto Quimatió en una ex-bodega de la empresa “Quimagro, y recomendamos al Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales que gestioné el inmediato retiro y adecuado embalaje, traslado, tratamiento y disposición final de los desechos tóxicos, de conformidad con lo establecido por los Convenios Internacionales vigentes en el país.

En virtud del mecanismo de protección de vigilancia de la situación de las personas adultas y jóvenes privadas de libertad, realizamos un total de 1,374 verificaciones a las diferentes instituciones públicas responsables con el objetivo de constatar y gestionar para mejorar sus condiciones, tales como: monitoreo de la práctica de registros, especialmente en las personas adultas mayores, mujeres embarazadas, niños y niñas; agilizar casos que ameritaron una asistencia médica urgente; apertura de expedientes e investigación de casos de malos tratos que son objeto las personas que ingresan a la visita íntima en centros penitenciarios; mayor control y supervisión de los diversos sectores dentro de los centros, ya que la carencia de éstos facilita la comisión de atentados en contra de la población reclusa; mejora en

el desarrollo de los programas de resocialización para personas internas y crear programas educativos y talleres; y optimizar las relaciones con los jueces de ejecución de medidas al menor ya que éstos no les brindan la atención necesaria a los jóvenes bajo su jurisdicción, generando en ellos desconfianza y apatía hacia el sistema judicial.

Por otro lado, en el área de **análisis e incidencia de políticas públicas, normas y prácticas del Estado**, durante mi gestión he demandado a las autoridades públicas un comportamiento respetuoso de la dignidad humana y el cumplimiento a las obligaciones en materia de derechos humanos.

Como resultado de la atención de casos de presuntas violaciones a derechos humanos y el monitoreo y análisis de la realidad nacional, identificamos hechos y situaciones que ameritaron la elaboración de estudios con mayor profundidad, ya sea por la afectación a derechos colectivos, la gravedad de los sucesos conocidos, la incidencia para los derechos específicos de grupos en situación de vulnerabilidad, entre otros motivos.

En el período, presenté 9 informes especiales y situacionales que instaron a las instituciones públicas a respetar y garantizar los derechos humanos. Entre los que se destacan: el Tercer Informe sobre el Estado del Derecho a una Alimentación Adecuada en El Salvador; Informe sobre la situación de la niñez en un contexto de violencia; Informe Especial sobre el proyecto minero Cerro Blanco y las potenciales vulneraciones a derechos humanos en la población salvadoreña; Informe sobre salud sexual y reproductiva en conjunto con UNPFA y ONUSIDA; Informe sobre el Acceso a la Justicia en el Ámbito Laboral, Penal y Familiar; Informe sobre Estado de los Derechos Humanos en El Salvador 2012; Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos a la Luz de los Acuerdos de Paz de El Salvador; Informe sobre la Minería Metálica y los Derechos Humanos en El Salvador; e Informe sobre la situación de los derechos políticos en el marco de las elecciones legislativas y municipales celebradas el 11 de marzo de 2012.

En sintonía con intensificar la estrategia de incidir ante organismos internacionales y regionales de protección y promoción de los derechos humanos, tuve participación importante en audiencias temáticas y la presentación de informes alternativos. De este modo, presenté en el marco del 146º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 31 de octubre de 2012, el Informe Especial sobre la Minería Metálica y los Derechos Humanos en la República de El Salvador y el Informe Especial sobre el impacto de la violencia en los derechos de las niñas, niños y adolescentes en El Salvador. También, presenté al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, el Informe Alternativo El Salvador 2008-2013 (para Lista de Cuestiones) “A cinco años de entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, elaborado en conjunto con organizaciones sociales.

A nivel nacional, tuvimos participación en el mecanismo de protección jurisdiccional de derechos humanos, por medio de la colaboración brindada a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en ocasión a la resolución de admisibilidad en proceso de amparo, con número 400-2011, en contra de dos sociedades empresariales y varias autoridades estatales, en relación al caso de contaminación ambiental en la zona de San Juan Opico -Caso ex-fábrica Baterías de El Salvador S.A. de C.V.-, específicamente en la residencial conocida como “Ciudad Versalles”. De esta manera, insté a la Sala, a pronunciarse en un plazo razonable y adoptar las medidas necesarias para la protección de los derechos humanos de las personas que buscan el amparo constitucional.

También, en la atención al caso de una paciente del Hospital de Maternidad, identificada como “B.C.”<sup>4</sup>, en el proceso de amparo número 310-2013, realicé una serie de acciones entre las que se

<sup>4</sup> “B.C.” es una joven salvadoreña de 22 años que padece desde hace cuatro años de Lupus Eritematoso Discoide agravado por Nefritis Crónica e

destacaron la elaboración de un pronunciamiento público, participación en las audiencias públicas orales y presentación de un escrito en derecho *amicus curiae* que fue agregado al acervo probatorio de la Sala para la resolución del referido caso. En lo sustancial recomendé adecuar la legislación penal de acuerdo a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y la adopción de medidas necesarias para resguardar el derecho a la vida, a la salud y a la integridad de la víctima.

Asimismo, presenté 7 opiniones sobre proyectos de ley, posicionamientos sobre normativas y propuesta de reforma de ley, tales como: sobre proyecto de Ley Especial para la Suspensión de los Procedimientos Administrativos relacionados con proyectos de Exploración y Explotación de Minería Metálica; sobre la ratificación del Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos, sobre la propuesta de Convenio Centroamericano para la prevención y el combate de los delitos explotación sexual comercial y sobre Anteproyecto de la propuesta de Ley de respuesta integral a la epidemia de VIH/SIDA en El Salvador.

Destaco además, el trabajo conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, en ocasión a la presentación de propuestas y la realización de una campaña de sensibilización para que se ratifique de inmediato por parte de la Asamblea Legislativa, la reforma constitucional relativa al derecho al agua, como parte de sus obligaciones de legislar para la realización efectiva del derecho humano al agua y, de igual forma, acelere el proceso de análisis del proyecto de Ley General de Agua, basado en los estándares de protección de los derechos humanos y bajo el principio de manejo sustentable de las cuencas y de recuperación de aquéllas que se encuentran deterioradas.

En virtud de mi función de velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos, a través del mecanismo protección de monitoreo y análisis de la realidad nacional, tuve la oportunidad de emitir 39 pronunciamientos públicos referidos a temas coyunturales que amenazaron o afectaron diferentes dimensiones de los derechos humanos, entre los que se destacan en el Marco del Día Mundial del Medio Ambiente, a cuatro años de los lamentables acontecimientos de la noche del tres de julio en el Arenal Montserrat; solicitando construcción de puente de El Coro; ante las desapariciones y homicidios de jóvenes, niños y niñas; en el marco de la celebración del Día Internacional de la Juventud; en el Día de la Niña y del Niño; en el Día Nacional de la Igualdad Jurídica de las Mujeres, en el Día Internacional de No Violencia contra la Mujer, ante la situación de sequía que enfrenta el oriente del país; por los elevados casos de dengue; solicitando suspender acciones de desalojo de ventas en centro de San Salvador, sobre ratificación del préstamo orientado a fortalecer el Sistema de Salud; ante la situación de abandono de barriles conteniendo catorce toneladas de tóxicos; ante el retraso en la elección de la Corte de Cuentas de la República, entre otros.

También durante mi gestión logré proponer el diálogo y la concertación como la primera medida para la solución de los conflictos sociales que ponen en riesgo la vigencia de los derechos humanos y libertades fundamentales. Así, realizamos a nivel nacional un total de 1,538 acciones, desglosadas de la siguiente manera: 798 observaciones preventivas, 361 diligencias de buenos oficios y 442 mediaciones. La mayoría de las acciones de observación y prevención de violaciones a derechos humanos, se refirieron al tema laboral, la situación generada por los desalojos de las personas vendedoras informales en distintos municipios del país y aquellas relacionadas a problemáticas ambientales.

Destaco la mediación en los casos de despidos injustificados de empleados y empleadas de las Alcaldías Municipales de Soyapango, Mejicanos, Apopa y Rosario de Mora; el desalojo violento de las ventas

Hipertensión. Fue ingresada de emergencia al Hospital Nacional Rosales por complicaciones en su estado de salud, confirmando un embarazo de trece semanas de un feto con anencefalia, anomalía mayor que hace inviable la vida extrauterina. El personal médico a cargo se negó a realizar el tratamiento médico recomendado -interrupción del embarazo-, por el temor de ser acusados por el delito de aborto, conducta antijurídica contemplada en la legislación salvadoreña que penaliza todas las formas posibles de indicaciones abortivas, incluso cuando se encuentra comprometida la vida y la salud de la gestante. Los abogados representantes interpusieron una demanda ante la Sala de lo Constitucional, por la referida omisión del personal médico.



informales en el centro de San Salvador y Sensuntepeque; las protestas impulsadas por veteranos de guerra que exigían pensiones y que incluyeron la paralización del transporte público y bloqueo de carreteras principales; el reordenamiento de ventas impulsado por el Alcalde de San Martín que enfrenta la oposición de vendedoras ambulantes; en protestas de personas vendedoras por el pago de impuestos municipales en la Megaplaza en la ciudad de Sonsonate, así como en la Escuela Antonio Najarro del Municipio de Mejicanos.

Asimismo, realicé gestiones de mediación vinculadas a las demandas presentadas por la Comisión Pro Rescate del Instituto Regulador de Abastecimientos (IRA) en torno a la reactivación de esta institución, lo cual vendría a contribuir a aliviar la crisis alimentaria de los sectores de escasos recursos económicos. Entre las gestiones se incluyó la solicitud de audiencias a la Comisión Agropecuaria de la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Dentro de las metas de incrementar las tareas de prevención de violaciones a los derechos humanos, como la vía idónea para su erradicación, tuve especial incidencia en el **área de promoción y educación en derechos humanos**<sup>5</sup>, a través del fortaleciendo con mayores niveles de conocimiento a diferentes sectores de la sociedad, principalmente en educación formal, servidores públicos, colectivos, sindicatos, gremios, organizaciones sociales, grupos en situación de vulnerabilidad y ciudadanía en general.

Realizamos un total de 4,157 actividades de promoción y educación en derechos humanos, beneficiando a 66,175 personas. En las actividades estrictamente de educación, se han atendido 37,624 personas, es decir, un 65.86 %, mientras que las actividades propiamente de promoción fueron 28,551 personas, es decir, 34.14%.

Del universo de personas beneficiadas a nivel de todo el país, 66,175 personas, ha de acotarse que el 55.8% son del género femenino (36,925); los jóvenes y estudiantes representan el 62%, siendo el grupo etario prioritario y mayoritario en las actividades de promoción y educación. La población adulta beneficiada representa el 38%, del cual 30% son del grupo de funcionarios o servidores públicos citado en un cuadro anterior, y el 8% son personas adultas de organizaciones sociales.

Respecto a los temas difundidos en actividades de educación comprendieron desde el conocimiento de los derechos humanos en general, hasta los referidos a la seguridad pública, la prevención del delito y atención a las víctimas, la trata de personas, migración y derechos humanos, la no discriminación, los derechos de las personas con VIH, derechos de las mujeres, derechos de las personas adultas mayores, derechos de la niñez, adolescencia y juventud, derechos de las personas con discapacidad, la prevención de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como de los agravios a periodistas y defensores civiles de derechos humanos.

También realicé diferentes jornadas en las que presenté a nivel nacional, el libro de mi autoría, denominado: Curso de Derechos Humanos “Doctrinas y Reflexiones”, que se convierte en un instrumento didáctico que con lenguaje sencillo y por medio de ejemplos permite fortalecer la red de promotores de derechos humanos existente a nivel nacional.

<sup>5</sup> Para el presente Informe Anual de Labores se ha logrado identificar actividades propias de promoción y educación en derechos humanos. Con educación nos referimos a un proceso continuo de formación en el que se entrega material didáctico, con al menos 8 horas de duración, concentradas en un día, en varios días seguidos, o repartidos en sesiones separadas; en éstas encuentran: talleres, cursos, panel fórum y diplomados. En el caso de promoción nos referimos a fortalecer y posicionar los derechos humanos ante comunidades, servidores públicos, organizaciones sociales y personas que pueden incidir en su vigencia; en éstas se encuentran: foros, seminarios, ferias, festivales, conferencias, conversatorios, participación en medios de comunicación, divulgación de informes, celebración de días conmemorativos, reuniones de seguimiento, acompañamiento a comunidades, promover el mandato constitucional y legal del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos.

Asimismo, logramos realizar diferentes ponencias y cursos de capacitación especializados en materia de derechos humanos, dirigidos a instituciones públicas, organizaciones sociales, gremios, sindicatos, entre otros sectores. Un alto porcentaje de dichas actividades estuvo dirigido a los servidores públicos de las dependencias y entidades gubernamentales que concentraron el mayor número de denuncias, entre los que se destacan las personas que laboran en los Gobiernos Locales, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada de El Salvador. Otro sector importante que ha sido beneficiado a través de convocatorias abiertas han sido los jóvenes, niñez y jóvenes, personas adultas mayores, personas de la diversidad sexual, entre otros.

Con el apoyo de instituciones públicas y organizaciones sociales realizamos varias actividades de promoción, entre las que se destaca las actividades conmemorativas del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el 9 de agosto del presente año, en el que se demandó a la Asamblea Legislativa la pronta ratificación de la reforma constitucional para el reconocimiento de la existencia y los derechos de los pueblos indígenas; el Día de la Desaparición Forzada, el 30 de agosto, en el que se exigió a la Asamblea Legislativa, la declaración de un día nacional alusivo a la fecha, paso importante para la reparación simbólica a las víctimas y sus familias, y promover una cultura de respeto, fomento y protección de la dignidad humana; entre otros.

También la elaboración y distribución de dos números de la Revista de la Escuela de Derechos Humanos, publicación anual y trimestral, con el propósito de difundir el análisis de la realidad nacional desde la perspectiva de los derechos humanos, destacando los hechos y situaciones para trazar una tendencia del comportamiento del Estado hacia la consolidación democrática y la vigencia de los derechos humanos. Además, presenta los resultados de las acciones educación, promoción, difusión e investigación realizadas por la Escuela, dirigida a las personas usuarias como estudiantes, profesionales, investigadores, servidores públicos y sociedad civil en general.

De igual manera, logramos publicar un total de 15,359 unidades de material de promoción de los derechos humanos, tales como: afiches, trípticos, folletos, boletines, pancartas, fotocopia de material relacionado con pronunciamientos y resoluciones de derechos humanos entre otros, lo que permitió contar con instrumentos propios de divulgación escrita y distribuirlos en las diferentes actividades realizadas en el período.

Asimismo, continuamos con una intensa actividad en materia de difusión y divulgación, mediante la acción constante en radio, televisión, medios escritos y virtuales de comunicación masiva, así como en nuestra propia página electrónica: [www.pddh.gob.sv](http://www.pddh.gob.sv), en la que se logró difundir la información más oportuna y amplia sobre todo el acontecer institucional.

En el área de **acciones y relaciones externas**, seguimos fortaleciendo los mecanismos de interacción entre la PDDH y diferentes sectores vinculados con la protección y promoción de los derechos humanos. En este sentido, promovimos la conformación de 10 mesas temáticas de trabajo en las distintas áreas de protección de los derechos humanos. La adopción de esta dinámica de trabajo ha significado la coordinación con 125 organizaciones de la sociedad civil e instituciones de gobierno que forman dichos espacios en aras de contribuir con el cumplimiento de los derechos humanos.

Destaco para éste período, la creación en el mes de abril del presente año, con el concurso de más de 200 organizaciones de todo el país, de la Mesa Permanente sobre Soberanía Alimentaria, que se ha enfocado en incidir para que la Asamblea Legislativa ratifique la reforma al artículo 69 de la Constitución de la República, que haría efectivo el reconocimiento y protección en nuestro ordenamiento jurídico del derecho a una alimentación adecuada.

Con la decidida convicción que con la suma de esfuerzos podremos alcanzar las metas que nos hemos trazado para fortalecer a la sociedad y a las instituciones del estado, en este período suscribimos 9 convenios de colaboración con diferentes universidades privadas, instituciones públicas y organismos internacionales. Se destaca el convenio de capacitación con el Ministerio de la Defensa Nacional, el 6 de febrero del 2013, con el objeto de dar cumplimiento a una parte de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador, del 25 de octubre del 2012, en particular a las medidas de garantías de no repetición que obliga al Estado salvadoreño a la capacitación de la Fuerza Armada de la República de El Salvador (FAES) en la implementación de programas o cursos permanentes y obligatorios sobre derechos humanos, incluyendo la perspectiva de género y niñez, dirigidos a todos los niveles jerárquicos de la FAES.

Con el objetivo de incrementar la promoción y la asistencia técnica impulsé la ejecución de 5 proyectos con fondos externos: Promoción del Derecho a una Alimentación Adecuada; Protegiendo a la Niñez con Enfoque de Derecho en situación de emergencia principalmente en comunidades afectadas por la Depresión Tropical 12-E; Asistencia Técnica para fortalecer el proceso de tutela de los derechos humanos de Personas con VIH-SIDA en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; Informe Especial sobre el impacto de la violencia en la protección de los derechos humanos en la Niñez y Adolescencia de El Salvador; y Diseño de Política Interna de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

También, en mi calidad de Presidente de la Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos durante el Conflicto Armado Interno (CNB)<sup>6</sup>, impulsamos procesos de búsqueda, localización y reencuentro de niños y niñas desaparecidas. En el período, la CNB investigó 124 casos, logrando resolver 15 casos, de los cuales 3 se han reencontrado con sus familias de origen, 4 están localizados y se encuentran pendientes de reencuentro y 8 fueron localizados fallecidos.

En este sentido, se han llevado a cabo varias acciones en el área psicosocial como cinco talleres de atención grupal y quince procesos de acompañamiento y terapia; en el área jurídica, con el apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense, se exhumaron los restos de varias personas desaparecidas en operativos militares en la década de los ochenta, y se realizaron trámites con instituciones públicas y privadas para la obtención de información y se encuentran en trámite convenios de cooperación interinstitucional. Por otra lado, en ocasión a la conmemoración del Día de la Niñez Desaparecida, el 29 de marzo, se montó una exposición fotográfica “Desaparecidos”, en coordinación con el Centro Monseñor Romero de la Universidad Centro Americana (UCA) y se lanzó la campaña “Unámonos por el reencuentro”, que busca sensibilizar a la población para que brinde información en los casos de niñas y niños desaparecidos y se sumen a éste esfuerzo.

El 10 de diciembre de 2012, la PDDH junto con organizaciones sociales, representantes de organismos internacionales e instituciones públicas, conmemoramos el 64° aniversario de la aprobación y proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En dicha actividad se entregaron reconocimientos a personas y personas jurídicas que con sus actividades promovieron los derechos humanos, entre ellas: al Representante Residente del Sistema de Naciones Unidas en El Salvador, señor Robert Valent; el Noticiero Panorama de canal 10 de Televisión Nacional de El Salvador; el Periódico Digital El Faro; el Diario Digital La Página; el periodista Ernesto Rivas, corresponsal de Univisión; y a Ricardo Martínez, periodista y corresponsal de la cadena Telesur.

<sup>6</sup> La creación de la Comisión responde a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las hermanas Serrano Cruz, dos niñas desaparecidas en el departamento de Chalatenango, en el contexto de un operativo militar en 1982. El Decreto ejecutivo establece que esta Comisión puede conocer e investigar casos que hayan sido registrados entre el período de 1977 a 1992. Puede encontrar más información en el sitio: <http://www.cnbsalvador.org/>, última consulta el 4 de julio del 2013.

En el área de **fortalecimiento institucional**, en los últimos años hemos recibido un incremento progresivo en el presupuesto institucional. Los fondos se destinaron a dignificar los salarios del personal y fortalecer las necesidades de funcionamiento institucional. Sin embargo, persiste la situación de insuficiencia de recursos, que ha imposibilitado contar con un incremento salarial equitativo; obtener establecimientos propios; crear nuevas dependencias de atención a personas en situación de vulnerabilidad; inversión en proyectos sobre temas prioritarios; entre otras.

En búsqueda de mejorar las condiciones laborales del personal, destaco especialmente al inicio del 2013, la entrada en vigencia del Laudo Arbitral con carácter de Contrato Colectivo de Trabajo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Sindicato de Empleadas y Empleados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (SEPRODEHES) 2013-2015. Este documento legal viene a dignificar y materializar la aspiración de mejorar la situación laboral de los empleados y las empleadas de la PDDH, que día a día con su trabajo, hacen posible cumplir con el mandato de velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales de la población salvadoreña.

Como parte del esfuerzo por optimizar la calidad del servicio a las personas usuarias, logramos impartir al personal institucional: 6 capacitaciones en diversas temáticas, beneficiando a 385 empleados y empleadas, lo que representa el 87% del total del personal institucional. Se promovieron además, capacitaciones especializadas para el personal técnico, a través de la gestión de cursos, diplomados, talleres y jornadas de sensibilización en temas y actividades relacionadas con la protección y la promoción de los derechos humanos.

Dentro de las actividades, destaco la continuación del programa de capacitación continua del personal institucional, con la realización del seminario denominado “Bases para la Resolución Alternativa de Conflictos y el rol de PDDH”, con el que se inició el programa de capacitación permanente para el personal de observación y atención a crisis y verificación de la situación de las personas privadas de libertad, entre otros. Dicha actividad contribuyó a fortalecer la atribución legal de procurar la conciliación entre las personas cuyos derechos han sido vulnerados y las autoridades o funcionarios señalados como presuntos responsables, cuando la naturaleza del caso lo permita.

También realizamos importantes esfuerzos para potenciar las capacidades institucionales de respuesta ante problemas que afectan los derechos humanos, como la revisión, actualización y elaboración de normativas internas: Reglamento de Viáticos, el Instructivo de asignación de números celulares; Instructivo de asistencia, puntualidad y permanencia de personal institucional; Instructivo para la coordinación y apoyo de las Procuradurías Adjuntas Específicas al Sistema de Protección de los Derechos Humanos; Reglamento de Organización y Funciones de la PDDH; y el Reglamento de Adquisición y Pago de Bienes y Servicios.

Finalmente, refrendó mi convicción de seguir colaborando con todas las instituciones públicas y privadas, así como con las organizaciones de la sociedad civil, para que juntos podamos construir una realidad en la que prevalezca la dignidad de las personas, el acceso efectivo al goce de los derechos humanos, las condiciones de igualdad y justicia que permitan el desarrollo de todos los sectores sociales y la cultura de la legalidad y respeto irrestricto de los derechos humanos.

San Salvador, junio de 2013.



**Lic. Oscar Humberto Luna**  
**Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos**



## INTRODUCCIÓN

El siguiente documento contiene el Informe Anual de Labores de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos del período comprendido del **1 de junio de 2012 al 31 de mayo de 2013**, que viene a darle cumplimiento a los artículos 131 ordinal 36 de la Constitución de la República; 102, 104 y 110 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa; 49 de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; y 79 del Reglamento de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

El informe retoma los criterios mínimos para alcanzar el dictamen de aprobación legislativa. Tradicionalmente, la estructura del documento incluye en su primer apartado, una evaluación del comportamiento de las instituciones públicas en la atención de las problemáticas relacionadas con la vigencia de los derechos humanos; difunde el posicionamiento institucional frente a la realidad nacional desde una perspectiva del cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos, constituyéndose en una radiografía del período sobre el estado del proceso de democratización y consolidación del estado de derecho, presupuestos indispensables para que los derechos humanos puedan ser respetados y garantizados en el país.

En los siguientes apartados, el documento rinde cuentas sobre el ejercicio del mandato constitucional de velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos, en el que se describe el funcionamiento institucional; el personal que la integra; el plan de trabajo; el presupuesto asignado y ejecutado; y los logros en la ejecución de proyectos y los resultados de las actividades ordinarias de acuerdo a los cinco ejes estratégicos: protección de los derechos humanos; análisis e incidencia de políticas públicas; promoción y educación en derechos humanos; relaciones y acciones externas; y fortalecimiento institucional.

Finalmente, se adiciona un resumen por dependencias de las principales actividades realizadas, y un anexo sobre el detalle del seguimiento a las recomendaciones emitidas en el período y el grado de acatamiento de las mismas.

## RESUMEN EJECUTIVO

En el período que comprende este Informe Anual de Labores, del 1 de junio del 2012 al 31 de mayo del 2013, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha continuado con su responsabilidad constitucional de velar por los derechos humanos de la población salvadoreña. En los siguientes párrafos se encuentran sintetizados los resultados del monitoreo a los problemas que afectaron a los derechos humanos, la descripción de los logros obtenidos en la ejecución de los planes de trabajo por áreas estratégicas así como la sistematización de las actividades principales que se realizaron en este año.

### a) Panorama general sobre la situación de los derechos humanos

Esta Procuraduría en el ejercicio de su mandato de supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas, artículo 194, romano I, ordinal 7º de la Constitución de la República, y en ocasión a la presentación de este informe anual de labores, comparte este apartado de análisis situacional de los derechos humanos, en el que se examina acuciosamente el comportamiento público frente a hechos y situaciones que han condicionado el respeto y la garantía de los derechos humanos en el período.

En materia de la situación de la **seguridad ciudadana**, resulta urgente que se busquen métodos eficaces para superar factores altamente nocivos para la salud e integridad, y el desempeño de lo laboral de los agentes encargados de hacer cumplir la ley. Entre estos se pueden señalar factores negativos externos a la labor de seguridad pública, como problemas de índole personal, familiar, financieros, o hasta de adicciones, como internos, como sobrecarga de trabajo o exponerse de forma frecuente a situaciones de extrema peligrosidad, actuaciones arbitrarias como suspensiones, traslados, estancamientos en el ámbito profesional o crisis nerviosas derivadas de las situaciones de inseguridad a la que son sometidas las personas pueden llevar hasta desenlaces fatales.

Por otra parte, genera grave preocupación en esta Procuraduría que de forma continua se publique en medios de comunicación que se encuentran y decomisan armas de equipo y uniformes policiales a grupos criminales<sup>7</sup>, los que pueden ser utilizados para cometer delitos vistiendo uniformes y de esta forma facilitar los medios para realizar los mismos, confundir las pistas de las investigaciones y generar sospecha y confusión en la población, si se trata de verdaderos agentes encargados de hacer cumplir la ley.

En materia de protección del derecho a la seguridad ciudadana en el marco de la tregua entre pandillas preocupa fuertemente que El Salvador ha sido considerado uno de los países con mayor índice de criminalidad a nivel mundial.<sup>8</sup> La violencia homicida, los altos niveles de victimización en diferentes delitos, los datos exorbitantes de personas privadas de libertad y la impunidad sistemática han generado afectaciones a la vida, la integridad, y el patrimonio de las personas en todo el territorio nacional.

Para el año 2011, el IML reportó 4,366 personas asesinadas a nivel nacional, de las cuales 629 eran mujeres y 3,737 hombres. La mayoría de víctimas oscilaban entre 15 y 24 años de edad y los delitos se cometieron utilizando arma de fuego en el 70% de los casos.<sup>9</sup> La tendencia al alza en los homicidios se mantuvo durante los primeros dos meses del 2012, periodo en el cual se registra un incremento de más de 136 casos con relación al año anterior<sup>10</sup>.

7 Ver nota periodística: “Localizan en Colón fusiles y uniformes policiales” Publicada el 5 de mayo de 2013 Disponible en [http://www.elsalvador.com/mwdh/nota/nota\\_completa.asp?idCat=47859&idArt=7869894](http://www.elsalvador.com/mwdh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7869894) y “Detienen a dos hombres con atuendos de la Policía”. Disponible en:

<http://www.laprensagrafica.com/detienen-a-dos-hombres-con-atuendos-de-la-policia>, última consulta el 7 de julio de 2013.

8 PNUD. “Abrir espacios a la seguridad ciudadana y el desarrollo humano” Informe sobre Desarrollo Humano para América Central. 2009-2010 Pág. 68.

9 Instituto de Medicina Legal, citado supra, pág. 1.

10 Instituto de Medicina Legal. Informe de Probables Homicidios. Enero- Junio de 2012. Disponible en: [http://www.transparencia.og.gob.sv/Filemaster/InformacionGeneral/documentacion/c\\_40/2596/HOMICIDIOS%20SEMESTRAL%202012.pdf](http://www.transparencia.og.gob.sv/Filemaster/InformacionGeneral/documentacion/c_40/2596/HOMICIDIOS%20SEMESTRAL%202012.pdf), última consulta el 7 de julio de 2013.

Sin embargo, a partir de marzo los datos muestran reducciones significativas, de tal forma que al comparar la incidencia del delito durante el primer semestre de ambos años, para el 2012 se registran 503 casos menos.<sup>11</sup> Sin duda alguna, el hecho generador de esa reducción de homicidios ha sido la tregua anunciada por la mara salvatrucha y la pandilla del Barrio 18 en marzo del 2012. Dicho acuerdo surgió a la luz pública, a raíz de un artículo publicado por el periódico digital El Faro sobre el traslado de treinta líderes que cumplían condena en el centro penal de máxima seguridad de Zacatecoluca hacia otros centros penitenciarios<sup>12</sup>.

En los días siguientes, los voceros de la Pandilla 18 y la Mara Salvatrucha confirmaron la existencia de una tregua entre ambos grupos, expresando por medio de un comunicado su compromiso de contribuir a la “pacificación del país”. Establecido el contexto, no puede negarse que la preservación de la vida reflejada en la reducción de los homicidios será siempre un resultado importante que debe ser reconocido y ampliado en aras de lograr la pacificación de la sociedad salvadoreña. Sin embargo, analizar la tregua entre pandillas requiere un examen minucioso sobre el cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de seguridad ciudadana con el fin de determinar los aciertos y desafíos que todavía exige la garantía de este derecho.

En materia de **derechos económicos, sociales y culturales** se continúa ante un modelo de desarrollo que no logra situar a la persona humana como centro de todas las actuaciones y como factor de efectividad de las políticas públicas. La pobreza y la desigualdad continúan siendo los principales obstáculos para que nuestro país avance de forma contundente hacia mejores niveles de desarrollo humano y, por lo tanto, deben ser atendidas de forma integral, no por medidas asistencialistas y de corto plazo.

De esta manera, todavía resulta lejana la erradicación de la pobreza y el hambre, algunos indicadores muestran esta realidad: de cada 100 hogares salvadoreños, 40 son pobres; una tercera parte de la población de la zona urbana se encuentra subempleada; en la zona rural, solamente un 54% de los hogares cuentan con el servicio de agua por cañería.

Los precios excesivos de los medicamentos y el desabastecimiento de determinadas medicinas en el sistema de salud, las citas médicas prolongadas, el tipo, calidad y calidez de los servicios de salud y el limitado financiamiento en la materia, continúan afectando gravemente el derecho a la salud de las personas.

Mayor preocupación nos generó la alta incidencia de los casos de dengue en el país, que a pesar de las elevadas cifras fue hasta aproximadamente un mes y medio después que las autoridades gubernamentales decidieron declarar la alerta nacional, reaccionaron de manera reactiva más que preventiva. Preocupa de la misma manera la falta de acuerdos políticos que provocó la aprobación tardía del préstamo de 80 millones de dólares otorgados por el Banco Mundial para fortalecer el sistema de salud.

En materia de alimentación adecuada y derecho al agua, si bien el 19 de abril de 2012, la Asamblea Legislativa del periodo 2009-2012 aprobó una reforma constitucional en la que se adicionaron los incisos dos y tres al artículo 69 de la Constitución de la República con disposiciones orientadas a la protección y garantía del derecho a una alimentación adecuada y el derecho al agua, hasta este día no se ha avanzado en la ratificación de las mismas.

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> El periódico digital El Faro, realizó diferentes publicaciones estableciendo que de acuerdo a un informe generado en el Centro de Inteligencia Policial (CIP), el gobierno había ofertado miles de dólares a los pandilleros de más alto rango, si se comprometían a reducir la cifra de homicidios. Ver nota periodística: “Gobierno negoció con pandillas reducción de homicidios” Publicada el 14 de marzo de 2012. Disponible en: <http://www.elfaro.net/es/201203/noticias/7985/>, última consulta el 7 de julio de 2013.

Durante este año, el derecho al trabajo fue violentado con mayor intensidad luego de las pasadas elecciones legislativas y municipales a raíz de los despidos masivos de empleados municipales con ocasión del cambio de administración, violentándoles el derecho al trabajo, la estabilidad laboral y la libertad sindical.

Por otro lado, el desalojo forzoso y masivo de puestos del comercio informal en el centro capitalino, específicamente en el Distrito Uno, ejecutado por la Alcaldía Municipal de San Salvador los días 26 y 27 de octubre, a pesar de haber dictado esta Procuraduría una resolución de medidas cautelares con la finalidad de detener tales acciones y evitar la violación a los derechos a la integridad moral, al trabajo, a la propiedad, al debido proceso administrativo, a la alimentación y al derecho a un nivel de vida adecuado en general. Tal medida fue ejecutada utilizando la fuerza excesiva. Esta decisión municipal adolece de vicios de inconstitucionalidad por aplicar sanciones contenidas en una Ordenanza Municipal de jerarquía inferior a una ley.

En materia de **derecho a la protección ambiental**, es preocupante que el 17 de julio de 2012, a pesar del enorme movimiento social que desde hace años se opone a la introducción de la industria minera metálica en El Salvador y aboga por una prohibición permanente, el Ministerio de Economía (ME) en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) presentaron a la Asamblea Legislativa la propuesta de Ley Especial para la Suspensión de los Procedimientos Administrativos relacionados a Proyectos de Exploración y Explotación de Minería Metálica, concebida como una solución temporal, mientras son superadas ciertas condiciones contenidas en el mismo proyecto de Ley para aprobación de esta industria extractiva. Al respecto esta Procuraduría opinó que esta iniciativa afectaría derechos contemplados en nuestra normativa interna como en instrumentos internacionales, relativos al respeto y garantía a derechos como la vida, la salud, la alimentación adecuada, el medio ambiente sano, el agua entre otros.

Por otra parte, en mi calidad de Procurador para la Defensa de los derechos Humanos, presenté el 14 de enero de 2013, una comunicación oficial dirigida a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa, para la ratificación de las reformas constitucionales del artículo 69 de nuestra Carta Magna, relacionadas al reconocimiento de los Derechos Humanos a la Alimentación Adecuada y al Agua, las cuales fueron aprobadas por la anterior Legislatura 2009-2012, el 19 de abril de 2012.

Tal solicitud fue respaldada por las organizaciones sociales que promueven y exigen dicho reconocimiento. Con la intención que se viabilice la efectiva realización de los mencionados derechos, se solicitó el dictamen favorable de la reforma para su correspondiente ratificación, atendiendo al compromiso con las justas exigencias sociales, el bien común y las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado de El Salvador, entre las que se encuentra la obligación de adoptar todas aquellas medidas legislativas orientadas a hacer efectivos los derechos humanos reconocidos a nivel internacional.

También, otro de los temas que ha sido recurrentemente denunciado en el periodo evaluado, es la instalación de antenas. Los avances en las telecomunicaciones y el desarrollo e implementación de tecnología a nivel nacional por parte de empresas que se dedican a proporcionar servicios de telefonía celular, internet y televisión por cable, ha generado que las comunidades que habitan en los alrededores de las zonas donde dichas empresas ubican torres auto soportadas de antenas, denuncien, ante esta Procuraduría, su preocupación a consecuencia de las posibles afectaciones a la salud que las radiaciones emitidas por los campos electromagnéticos producidos por las referidas antenas-especialmente las de telefonía celular-, pueden llegar a ocasionar en la salud de las personas.

La problemática generada con la instalación de las referidas antenas es tan compleja, que ha llevado a la PDDH a recomendar<sup>13</sup>, en reiteradas ocasiones, al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos

13 Expediente SA-0150-2009

Naturales, que evalúe, revise y reconsidere los criterios en los que se fundamenta para categorizar a las antenas dentro del grupo A, es decir, como actividad, obra o proyecto con impacto ambiental potencial bajo, que no requiere presentar documentación ambiental, establecido lo anterior dentro del documento de Categorización de Actividades, Obras o Proyectos, emitido por dicho ministerio<sup>14</sup>.

En materia de protección de los **derechos de la niñez, adolescencia y juventud**, se han constatado como avances la conformación de 6 juzgados y una cámara especializada de niñez y adolescencia, el lanzamiento de la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, la consulta realizada a la sociedad y a las niñas, niños y adolescentes para formular dicha política; la existencia del reglamento para la Red de Atención Compartida y 10 juntas de protección; resalta el hecho de que en varios Gobiernos Locales a partir de la vigencia de la LEPINA se han creado estructuras propias para que atiendan a dicho grupo poblacional y se han emitido políticas y programas municipales de protección para dicho sector.

Pero a la vez es importante señalar la falta de conformación de 4 juntas de protección de las 14 que en principio deben funcionar, la ausencia de los comités locales de derechos, falta de desarrollo de la tipología de programas en el Reglamento de la RAC, los plazos muy cortos para el registro de las ong's y de los programas, los elevados costos económicos por las autorizaciones de las distintas oficinas públicas para que las entidades de atención operen, tales como: OPAMSS, Cuerpo de Bomberos, etc.; se evidencian limitaciones financieras y de conocimiento en las municipalidades para la formación de los comités locales, escasez de recursos financieros y humanos en las juntas de protección y el poco acceso y desinformación sobre la forma en que operan estos organismos. Sobresale, asimismo, la nula socialización y formación de las ong's en el Reglamento de la RAC, así como la poca coordinación entre el ISNA y el CONNA por lo cual las entidades de atención deben registrarse en ambas dependencias.

Por otra parte, cifras oficiales indican que las víctimas principales de los homicidios en el país son adolescentes varones, y la tasa de homicidios de niñas y adolescentes ha crecido en los últimos años. Asimismo, las niñas y las adolescentes constituyen la mayor proporción de víctimas en los casos de violencia sexual, como el abuso y la violación sexual, que lejos de aliviarse, dicha tendencia parece ir a la alza, donde los agresores sexuales son principalmente familiares varones y miembros de pandillas, lo que coloca a la víctima en una situación de total desprotección de sus derechos, puesto que se asume que el lugar más seguro lo constituye la familia, pasando esta a convertirse en el lugar más peligroso.

Por otro lado, respecto a los **derechos humanos de las mujeres**, es importante destacar la reciente aprobación y sanción de la Ley de Partidos Políticos que contempla un porcentaje mínimo de participación para las mujeres a fin de que puedan optar a cargos de elección popular. Si bien tal decisión es un hito histórico y representa una medida de acción positiva, los subsiguientes esfuerzos deben estar encaminados a lograr el integral cumplimiento del principio de paridad, que implica la promoción de condiciones de igualdad para mujeres y hombres en los procesos electorales. Comprende el fomento de los liderazgos femeninos, sanción a los partidos políticos que incumplan tal disposición, el tema de la financiación, entre otros aspectos<sup>15</sup>.

Asimismo, en los últimos meses se ha continuado con la ejecución de esfuerzos interinstitucionales a fin de implementar la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. En materia de políticas públicas se señala la Política Nacional de las Mujeres, la formulación del Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información sobre Violencia hacia las Mujeres, el Plan Nacional de Equidad e Igualdad para las Mujeres Salvadoreñas, el lanzamiento de la Política Nacional contra la Trata de Personas.

<sup>14</sup> Ver en [www.marn.gob.sv](http://www.marn.gob.sv)

<sup>15</sup> Pronunciamiento del Señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Licenciado Oscar Humberto Luna, en el Día Nacional e Internacional de la Mujer, 8 de marzo 2013.



No obstante estos invaluable esfuerzos ejecutados hasta el momento, el patriarcado sigue permeando las estructuras estatales, obstaculizando el ejercicio pleno de la *igualdad real* entre mujeres y hombres en los términos que refiere el artículo 3 de la Constitución de la República, las disposiciones de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres y la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. En ese orden de ideas, la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos realizada en la ciudad de Viena en 1993, reconoció por vez primera en el concierto mundial que los derechos humanos de la mujer y la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales<sup>16</sup>.

Desde esta Procuraduría, se observan con suma preocupación las diferentes expresiones misógenas que evidencian las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres, colocándolas a aquellas en situación de vulnerabilidad por su condición de género. Esto se evidencia por ejemplo, a las múltiples situaciones que enfrentan las mujeres al momento de acceder a la justicia. Desde la labor de tutela que ejerce esta Institución, se ha constatado la victimización de la que son objeto al ser cuestionadas y culpabilizadas de los hechos denunciados; por ejemplo, en procesos de violencia intrafamiliar, violencia sexual, feminicidios, posicionándolas en una situación de indefensión, haciendo que en muchas ocasiones desistan de su pretensión.

Es por esto que la Procuraduría considera que el Estado debe realizar acciones concretas encaminadas a la concertación de los esfuerzos institucionales, actualmente dispersos, para el logro de los grandes propósitos del Estado, entre ellos, el fiel cumplimiento a los contenidos de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, así como de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Esta Procuraduría es de la opinión que si un Estado quiere fortalecer su gobernabilidad democrática, debe incorporar el enfoque de igualdad de género en la modernización de la administración pública, especialmente del sistema judicial; caso contrario, será un estado fallido.

En esta coyuntura, la violencia de género no debe abordarse como una problemática de violencia social, ya que por ejemplo, las razones por las que hombres y mujeres pierden la vida no son por delincuencia común, sino por razones de género y esto se evidencia entre otras cosas, por el ensañamiento en sus cuerpos<sup>17</sup>. Debe subrayarse que el hecho de que las mujeres enfrenten mayoritariamente hechos de violencia en su casa de habitación indica que el hogar es uno de los lugares más peligrosos para las mujeres y por tanto, desvirtúa lo establecido por el patriarcado cuando por mucho tiempo este sistema ha considerado que el lugar más confiable para la mujer es el ámbito privado<sup>18</sup>.

En cuanto a la violencia intrafamiliar, continúa siendo una de las causas más importantes de lesiones y muertes de mujeres. Una de las razones para que el ámbito familiar sea uno de los más inseguros para las mujeres es que es en la familia donde se establecen las primeras desigualdades de poder entre hombres y mujeres en razón de la socialización de los roles de género. Debe recordarse que este tipo de violencia se encuentra presente en todas las estructuras sociales, económicas, políticas y religiosas, no es exclusiva de un sector determinado y en muchas ocasiones puede ser la antesala al *feminicidio* en el marco del continuum de violencia.

En materia de **derechos de los pueblos indígenas**, en el mes de abril del año 2012, en la última sesión plenaria celebrada por la Asamblea Legislativa saliente, se aprobó la reforma constitucional que otorga el reconocimiento de la existencia y de los derechos de los pueblos indígenas de El Salvador, a través de la adhesión de un segundo inciso al artículo 63 de la Constitución. Sin embargo hasta la fecha, tal reforma constitucional no ha sido ratificada por el Órgano Legislativo, razón por la cual se

16 Declaración y Programa de Acción de Viena, 1993, párrafo 18.

17 PDDH. Informe Especial sobre el Feminicidio, una violación a los derechos humanos de las mujeres y respuestas de las Instituciones del Estado, noviembre 2011, página 32.

18 Pronunciamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado Oscar Humberto Luna, en el Día Nacional e Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre 2012.

han realizado ciertas acciones encaminadas a lograr dicho objetivo por parte de la Mesa Permanente de la PDDH sobre derechos de Pueblos Indígenas, tal es el caso de la marcha por el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios realizada el 11 de abril del corriente año, la que inició en el Parque Cuscatlán y finalizó con una ceremonia indígena en las afueras del Palacio Legislativo.

En el tema de la seguridad social para la **población afrodescendiente**, en fecha 23 de noviembre del año recién pasado, se llevó a cabo la primera jornada de socialización interna con el personal de tutela y delegados departamentales del documento “Guía de Trabajo sobre Cómo Abordar un Caso de Discriminación Racial”, el cual fue elaborado por la Procuraduría Adjunta de Derechos Civiles en coordinación con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas.

Con dicho instrumento esta Procuraduría pretende asumir dentro de su marco de actuación las medidas necesarias para atender a la población afrodescendiente que se vea conculcada en sus derechos e incidir en la visibilización de dicha población, por lo anterior, era de suma importancia establecer un mecanismo a través del cual se puedan detectar aquellas actuaciones que podrían constituir un acto de discriminación racial en contra de tal población.

En el tema de protección de **derechos de la Comunidad LGBTI**, las organizaciones de la población LGBTI han expresado que existe una inconformidad y descontento con la actuación de la Secretaría de Inclusión Social, pues afirman desconocer el funcionamiento y trabajo que desempeña en la actualidad y a su favor la Dirección de Diversidad Sexual creada por la misma, ya que consideran que no se han implementado políticas públicas en su beneficio, que hay una falta de apoyo al trabajo que realizan las organizaciones miembros de la comunidad LGBTI y la falta de una rendición de cuentas por parte de dicha instancia hacia tal población.

Como resultado de los hechos antes descritos, se solicitó por parte del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos audiencia con la doctora Vanda Pignato Secretaria de Inclusión Social, la que fue dada en fecha 22 de abril del corriente año, en la que participaron representantes tanto de la PDDH como de la Mesa Permanente de ésta Procuraduría sobre los Derechos de la Población LGBTI, el Subsecretario de Inclusión Social, licenciado Carlos Urquilla, entre otros; y en la que se adoptaron una serie de acuerdos con el objetivo de lograr un trabajo en conjunto entre dicha instancia y la población LGBTI.

Por otro lado, en el período se continuaron violentando los **derechos de las personas migrantes** ya que los riesgos en la ruta migratoria siguen estando a la orden del día, tales como asaltos, agresiones físicas y sexuales, mutilaciones, sobornos y secuestros por grupos del crimen organizado para posterior explotación sexual y otras modalidades de Trata de Personas en perjuicio de los migrantes que transitan por los países de la ruta migratoria. Si bien en lo que corresponde al año 2012 y el presente año en curso no hay registros visibles de nuevas masacres o naufragios de personas migrantes en su paso por México. Especial mención merece el ataque al tren ocurrido el primero de mayo del presente año, a migrantes en el Estado de Veracruz, México, en el que al menos 15 personas resultaron heridas.<sup>19</sup> De acuerdo a información del Instituto Nacional de Migración (INM) los agresores iban armados con machetes y armas de fuego, y les exigían entre 100 y 300 dólares a cada uno por dejarlos continuar con el recorrido; ante la negativa, según reportes, se desató la refriega en la que algunos migrantes fueron lanzados desde el tren.

## b) Presentación institucional

En este período la Procuraduría cuenta con un total de 444 empleados y empleadas, de las cuales 208 son mujeres y 236 hombres. La distribución por régimen laboral es de la siguiente manera: 33 personas

<sup>19</sup> Expediente SS-0270-2013; ataque a migrantes en el Tren en su paso por Veracruz.

están por contrato y 411 personas por el régimen de Ley de Salario. Respecto al desglose por tipo de actividad y sexo, en el personal ejecutivo se concentran 24 mujeres y 35 hombres, es decir 59 personas, correspondiente al 14.5 % del total de todo el personal; el personal técnico lo componen 188 personas, de los cuales 108 son mujeres y 80 hombres. El personal administrativo 93 personas, de las cuales 69 son mujeres y 24 hombres.

### c) Plan de trabajo 2012-2013

El pensamiento estratégico de la Procuraduría se encuentra compuesto por:

- **Visión:** “Ser la institución del Estado de mayor credibilidad con un amplio reconocimiento de la población y las autoridades a las que dirige su acción en materia de Derechos Humanos”.
- **Misión:** “Somos una institución de rango constitucional con el mandato de velar por el respeto y garantía de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, a través de la protección, promoción y educación de los mismos, para contribuir con el reconocimiento de la dignidad humana y desarrollar el Estado Democrático de Derecho”.
- **Valores institucionales:** dignidad: respeto y trato humano hacia los demás; justicia igualdad y rectitud en el desempeño; equidad: atención con eficiencia y sin distinción; y solidaridad: trabajar en equipo e identificados con los demás.

En el siguiente cuadro se relacionan los proyectos que fueron ejecutados de acuerdo a los Planes Operativos Anuales del 2012 y 2013, del Plan Estratégico Institucional 2011-2014.

AREA ESTRATÉGICA 1: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS			
<b>Objetivo estratégico:</b> coadyuvar a que las Instituciones del Estado respeten y garanticen los Derechos Humanos y las libertades fundamentales.			
<b>Estrategias Específicas:</b> mejorar la respuesta en la atención de casos en las diferentes fases; estandarizar y potenciar los mecanismos de los derechos humanos; fortalecimiento de los niveles de coordinación y comunicación internos en el manejo de casos; activación de mecanismos jurisdiccionales; y acercamiento de los servicios de protección a nivel local y comunitario.			
Código	Nombre del Proyecto	Resultados obtenidos	Nivel de ejecución (%)
1.1	Diseño e implementación de nuevos mecanismos para fortalecer el nivel de respuesta a las presuntas violaciones.	Se realizó un nuevo diagnóstico sobre la situación del área de tutela y se presentaron nuevas propuestas de acciones al Sr. Procurador (Oct. 2012) para fortalecer el nivel de respuesta al público. Algunas acciones de recursos adicionales.	20% (el porcentaje de ejecución para este año era de 25%)
1.3	Elaboración e implementación de la Política de Derechos Humanos de personas viviendo con VIH-SIDA.	a) 3 capacitaciones al personal por parte del Departamento de VIH y derechos humanos en coordinación con la EDH, b) Participación del personal en el Día de la solidaridad a las personas con vih (15 de mayo), 3) participación en vigilia solidaria realizada el 1o. de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, 4) Diseño, elaboración y colocación de bñer alusivo al tema, 5) distribución y portación de listón rojo alusivo al día y 6) distribución de preservativos al personal de la institución que lo solicitó.	75%



AREA ESTRATÉGICA 1: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS			
1.4	Implementar la Política Institucional de Género en los mecanismos de protección a derechos humanos.	En el mes de septiembre de 2012, se realizó el Módulo denominado: “Curso Introductorio a la Política Institucional de Equidad de Género”. Comprendió conocimientos básicos sobre Teoría de Género y socialización de la referida Política. Se elaboró material de apoyo con lecturas seleccionadas y sus respectivas guías de lectura. Se desarrollaron 8 jornadas de capacitación de 8 horas cada una. La población beneficiada fue de 52 hombres y 55 Mujeres. Participó personal del área administrativa así como jurídica de las oficinas centrales y delegaciones de la zona paracentral.	40%
1.5	Implementar un mecanismo de coordinación con el Sistema de Protección de Derechos Humanos para el establecimiento de directrices y criterios institucionales en el tratamiento de casos ambientales y de gestión de riesgo.	Elaboración del esquema de verificación y distribución de todo el personal de la PDDH para la atención de casos en situaciones de emergencia nacional a consecuencia de los desastres ocasionados por los fenómenos climatológicos que afectan a El Salvador, principalmente durante la época invernal 2012. Asimismo, se realizaron reuniones de coordinación y conversatorios con diversos expertos en temáticas ambientales, como por ejemplo en el caso de instalación de antenas de telefonía celular; problemática en la cual se giraron directrices para la atención de casos a nivel nacional. También, se ha establecido un mecanismo de comunicación electrónica a fin de mantener información actualizada que permita girar directrices ante la época invernal 2013. Además de las diferentes reuniones de coordinación con los Departamentos de Protección de la PDDH.	100%
1.6	Estudio de la problemática que deviene de violación al derecho humano al medio ambiente para la actuación de las instancias nacionales e internacionales para la activación de la protección de los derechos conculcados	En el mes de octubre de 2012, se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el “Informe sobre la Minería Metálica y Derechos Humanos en El Salvador”. Por otra parte se tuvo participación en el “Foro sobre Empresas y Derechos Humanos”, que se llevó a cabo en Naciones Unidas, en la ciudad de Ginebra, Suiza del 2 al 6 de diciembre de 2012, en la cual se dio a conocer la experiencia de la PDDH de El Salvador en relación a las empresas transnacionales y derechos humanos. Asimismo, se sostuvieron dos reuniones con personal de la Cancillería de Suiza, las que se dio a conocer el tema de derechos humanos para Latinoamérica.  También, en el mes de enero de 2013, se dio a conocer a nivel nacional e internacional, el “Informe Especial sobre el Proyecto Minero Cerro Blanco y las Potenciales Vulneraciones a Derechos Humanos”.	100%
1.9	Identificación e implementación de estrategias de atención a víctimas y la elaboración del protocolo de atención	La Procuraduría Adjunta de la Niñez y Juventud elaboró propuesta de atención a la niñez y juventud, la cual fue socializada para su validación en taller realizado en la EDH; documento en proceso de aprobación. Se giraron instrucciones para que se gestionen fondos para la contratación de consultoría que elabore un solo protocolo integral de atención a víctimas.	50%

*Fuente: elaboración a partir de los insumos institucionales, Unidad de Análisis.*

## AREA ESTRATÉGICA 2: ANÁLISIS E INCIDENCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, NORMAS Y PRÁCTICAS DEL ESTADO

**Objetivo estratégico:** demandar un comportamiento estatal respetuoso de la dignidad humana, para que las instituciones del Estado cumplan las obligaciones establecidas en la Constitución de la República y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

**Estrategias Específicas:** proponer cambios en el comportamiento estatal en materia de derechos humanos y fomentar buenas prácticas estatales, a través del acompañamiento de agentes del Estado para la erradicación de conductas violatorias de derechos humanos.

Nº	Nombre del Proyecto	Resultados obtenidos	Nivel de ejecución (%)
2.2	Programa de Observación y Verificación Electoral	Se publicó el Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Políticos, en el marco de las Elecciones Legislativas y Municipales del 2012. Se elaboró el pronunciamiento público sobre la necesidad de prevenir actividades de propaganda electoral ilegal. También se le ha dado seguimiento a casos relacionados a situaciones provenientes del evento electoral, se han sostenido reuniones con el TSE, encargados de proyección social de universidades privadas, capacitaciones al personal técnico sobre la Ley Especial para el Ejercicio del Voto desde el Exterior y participación en el Diplomado Superior en Derecho Electoral, coordinado por el TSE y la UES.	85%
2.3	Estudio de factibilidad de creación de un programa observatorio de los derechos humanos	Se elaboraron los términos de referencia para la contratación de una consultoría que le correspondió diseñar y elaborar un “Observatorio de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos de la PDDH”. La empresa que se le asignó los servicios fue FESPAD quien presentó un plan de trabajo; un diagnóstico de políticas públicas, legislación e información estadística en materia de seguridad ciudadana; un estudio de los instrumentos internacionales, jurisprudencia y doctrina relacionados con los temas de seguridad ciudadana; una propuesta de indicadores de estructura, progreso y resultado, siguiendo la metodología de la ACNUDH; instrumentos de medición y lista de contactos interinstitucionales que incluya, entre otros, fichas de información, tablas, encuestas y cuestionarios; un mecanismo de sistematización y consolidado de datos e información, que esté sustentado en un software o plataforma electrónica que permita crear bases de datos, estadísticas y gráficas; y una propuesta de una página web de consulta, que contenga los resultados del seguimiento a los indicadores y otros estudios relacionados. Asimismo, se encuentra en la etapa de revisión final el “Protocolo de funcionamiento del Observatorio de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos”, que pretende ser una guía práctica para implementar los procedimientos adecuados para la obtención de información oportuna, la construcción de análisis pertinentes, la elaboración de sugerencias, recomendaciones o mandatos, e incluso la activación de mecanismos de protección de los derechos humanos de la PDDH.	75%
2.4	Estudio de creación e inclusión en el observatorio, del tema de derechos laborales de las mujeres	Fondos aprobados por ONU MUJERES. Esperando firma de Convenio y desembolso.	50%
2.6	Desarrollar e implementar mecanismos para fortalecer la capacidad de acompañamiento a instituciones estatales para el fomento de las buenas prácticas de gobierno.	Se giraron reuniones instrucciones para la gestión de fondos y contratar una consultoría, en vista que con los recursos disponibles no es posible hacerlo. Se solicitó a la procuradurías adjuntas específicas y al Director de la EDH insumos para el diseño de mecanismos sobre la temática.	20% (Meta para el periodo era del 40%)

**AREA ESTRATÉGICA 2: ANÁLISIS E INCIDENCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS,  
NORMAS Y PRÁCTICAS DEL ESTADO**

2.8	Construcción de propuestas de incidencia desde las mesas permanentes	<p><u>Propuestas elaboradas:</u></p> <p>La PADESC elaboró dos propuestas de incidencia, una desde la mesa de personas adultas mayores y otras desde la mesa por la soberanía alimentaria.</p> <p>La PADMA elaboró propuestas de incidencia junto con las mesas permanentes a su cargo, sobre la elaboración de pronunciamientos públicos, como por ejemplo el relacionado con la ratificación de las reformas constitucionales respecto del derecho a la alimentación y al agua, asimismo la presentación del informe sobre minería metálica y la situación del país, el cual fue presentado ante la CIDH, la opinión sobre el proyecto de ley especial para la suspensión de los procedimientos administrativos relacionados con los proyectos de exploración y explotación de minería metálica a nivel nacional.</p> <p>La PADMF elaboró una pieza de correspondencia, el 26 de Noviembre de 2012, referente al Proceso de Ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW, presentado por la PDDH y Organizaciones de Mujeres. Se ha trabajado en la propuesta de incorporación del enfoque de género a la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. En ese sentido se ha incidido en el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN) y en la Comisión Agropecuaria de la Asamblea Legislativa. Ha solicitado audiencia a la Comisión Agropecuaria de la Asamblea Legislativa, a fin de conocer su trabajo con relación a la aprobación de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional y la reactivación integral del sector nacional de pequeños productores y pequeñas productoras de alimentos. Se solicitó que se convoque a las organizaciones de la Mesa por la Seguridad Alimentaria para tomar en cuenta su opinión y sean parte del Comité Técnico, además que incorpore el enfoque de género, para lo cual se ofreció el acompañamiento técnico.</p> <p>La PADMF coordina el espacio del Consejo por la Igualdad y la Equidad (CIE). El Plan de trabajo de este año está enfocado en la implementación de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE) y la Ley Especial Integral para una vida Libre de Violencia para las Mujeres, (LEIV). En ese contexto, se han sostenido varias reuniones con la Presidenta de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMUERES), Licda. Milagro Navas, Alcaldesa Municipal de Antiguo Cuscatlán, a fin de conocer cómo los Concejos Municipales han ido gestionando la creación y funcionamiento de las Unidades de Género. Antes de estas gestiones, COMURES había informado que 102 alcaldías ya contaban con las respectivas unidades; después de la realización de estas gestiones, la Presidenta de COMURES informó que de las 262 alcaldías a nivel nacional, únicamente 15 están pendientes de instalar las Unidades de Género.</p> <p>La PADNJ, junto con la Mesa de Niñez, Adolescencia y Juventud, acordó realizar un foro, taller o conversatorio en el cual se analizará la actuación de las Juntas de Protección, denominado “Avances y limitaciones en la implementación del Sistema de protección de la niñez y adolescencia” mediante el cual se generó un espacio de reflexión y análisis entre distintas organizaciones no gubernamentales y los gobiernos locales sobre los avances y limitaciones en la implementación del referido sistema.</p> <p>Este evento sirvió para compilar insumos que se plasmaron en el “Posicionamiento del Lic. Oscar Humberto Luna, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y la Mesa de la Niñez, Adolescencia y Juventud sobre la implementación del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia”. También, se elaboró el “Pronunciamiento del Lic. Oscar Humberto Luna, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y la Mesa de la Niñez, Adolescencia y Juventud con ocasión de conmemorarse en el país, el 1 de octubre: “EL DÍA DE LA NIÑA Y EL NIÑO”.</p>	100%
-----	--	---	------

## AREA ESTRATÉGICA 2: ANÁLISIS E INCIDENCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, NORMAS Y PRÁCTICAS DEL ESTADO

2.9	Monitorear e incidir en la actividad legislativa, inversión pública y políticas públicas	<p><u>Documentos elaborados:</u></p> <p>La PADESC elaboró cuatro documentos y se han realizado distintas acciones para incidir en legislación y políticas públicas sobre derecho a alimentación, derecho al agua, derechos de las personas con VIH, derechos de las personas adultas mayores.</p> <p>La PADMA elaboró seis documentos con la finalidad de incidir en la actividad legislativas y políticas públicas, a saber; “Informe a la Asamblea Legislativa respecto al estado de la Mesa de Diálogo entre la Alcaldía Municipal de San Salvador y el Ministerio de Obras Públicas”, del 13 de julio de 2012; el “Pronunciamiento del Procurador ante la situación de sequía que enfrentó el oriente del país y su impacto en los derechos humanos de las poblaciones afectadas”, del 15 de agosto de 2012; el “Pronunciamiento respecto de la ratificación de las reformas constitucionales sobre el derecho a la alimentación y al agua”, del 3 de octubre de 2012; la “Opinión sobre el proyecto de ley especial para la suspensión de los procedimientos administrativos relacionados con la minería metálica”, del 15 de octubre de 2012; el “Comunicado del Procurador ante la demanda de amparo admitida por la Sala de lo Constitucional de la CSJ en el caso de contaminación por plomo en el cantón Sitio del Niño”, del 31 de octubre de 2012; y la “Posición de la PDDH respecto a la ratificación del Protocolo de Nagoya”, del 22 de noviembre de 2012. Asimismo, lanzó una campaña publicitaria para incidir en la actividad legislativa por una pronta ratificación constitucional del derecho al agua y la aprobación de la ley general del agua. Por otra parte se elaboraron una serie de documentos relacionados con el derecho al agua y a la alimentación.</p> <p>La PADNJ elaboró una solicitud a la honorable Asamblea Legislativa para que en el presupuesto general de la nación respeten los derechos de las NNA a la prioridad absoluta e interés superior a fin de que la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia tenga el recurso financiero adecuado; asimismo que adopte las acciones de su competencia para monitorear la implementación del Sistema Nacional de Protección de la Niñez y Adolescencia. También, los días 6 y 7 de junio de 2012, en asocio con la Red para la Infancia y Adolescencia se organizó el Taller “Inversión en niñez y adolescencia con enfoque de derecho”, mediante el cual se hicieron llamados públicos para elevar la inversión en dicha área.</p>	100%
-----	--	---	------

*Fuente: elaboración a partir de los insumos institucionales, Unidad de Análisis.*

**AREA ESTRATÉGICA 3: PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS**

**Objetivo estratégico:** educar, promover y divulgar el conocimiento y acciones de incidencia sobre los Derechos Humanos, para su apropiación por la población, con miras a generar cultura de respeto y garantía en el Estado.

**Estrategias Específicas:** fortalecer la educación y promoción en derechos humanos de los diferentes sectores; socialización sistemática de las resoluciones, informes especiales y otros documentos que fortalezcan la generación del conocimiento de la labor institucional; suscripción de Convenios con Universidades, Gobiernos locales y ONG; e incorporar la perspectiva de género en la educación y promoción de derechos humanos.

Nº	Nombre del Proyecto	Resultados obtenidos	Nivel de ejecución (%)
3.2	Elaboración del programa de formación de agentes multiplicadores en derechos humanos, externos e internos	Se han desarrollado 5 jornadas de capacitación para un grupo de 27 personas que se desenvuelven como promotores de derechos humanos en distintos lugares e instituciones, con énfasis en módulos de planificación de derechos humanos, orientaciones sobre metodologías y principios básicos de los derechos humanos. Se les ha dotado de lecturas especializadas para la enseñanza de los derechos humanos, con el objetivo que se fortalezcan sus capacidades y puedan ayudar a sus comunidades.	85%
3.5	Formular el Programa de Promoción y Cultura de los Derechos Humanos	El Programa fue elaborado y se encuentra en fase de revisión; asimismo se encuentra pendiente la gestión de recursos para garantizar su ejecución.	50%
3.6	Investigación, desarrollo y difusión de la memoria histórica	La PADH solicitó al Jefe del Departamento de Proyectos que gestione fondos para una consultoría que elabore una política institucional sobre memoria histórica. También, redactó un documento base para la política que serviría de insumo a la consultoría. Se diseñó la Sala, pero no se logró el montaje debido a la falta de recursos para compra del equipo y local adecuado. Se giraron instrucciones a efecto de que se gestionen fondos para instalar la Sala de Exhibición	50%

*Fuente: elaboración a partir de los insumos institucionales, Unidad de Análisis.*

**AREA ESTRATÉGICA 4: ACCIONES Y RELACIONES EXTERNAS**

**Objetivo estratégico:** coadyuvar la sostenibilidad de los espacios de interacción y vinculación con las instituciones del Estado, la sociedad civil y actores internacionales involucrados en la protección y promoción de los Derechos Humanos, así como nuevos escenarios.

**Estrategias Específicas:** promoción del cumplimiento de los compromisos derivados de los convenios y otros instrumentos de cooperación suscritos; fortalecimiento mecanismos de interacción entre la PDDH y diferentes sectores vinculados con la protección y promoción de los derechos humanos; e incrementar la gestión de cooperación técnica y financiera.

Nº	Nombre del Proyecto	Resultados obtenidos	Nivel de ejecución (%)
4.5	Sistematizar y fortalecer los mecanismos de relación con los organismos internacionales de protección y promoción de los derechos humanos.	La PADH gestionó ante el Comité Técnico Presupuestario para crear el Departamento de Relaciones Internacionales. También solicitó a las procuradurías adjuntas específicas los datos para sistematizar la relación con organismos internacionales, como los siguientes: nómina de las instituciones u organismos con los cuales se relaciona cada procuraduría adjunta, nombre de contacto, materia o temática objeto de la relación, logros obtenidos, propuesta de estrategia para fortalecer dicha relación y propuesta de otras instituciones con las cuales deba establecerse relación. También, giró directrices para que en el nuevo sistema informático se incluya un módulo para registrar información relacionada, las directrices se han dado en reuniones de la comisión encargada de redactar los términos de referencia para contratar el diseño de un nuevo sistema informático que integre todas las acciones que realiza la PDDH.	50%

*Fuente: elaboración a partir de los insumos institucionales, Unidad de Análisis.*

### AREA ESTRATÉGICA 5: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

**Objetivo estratégico:** consolidar institucionalmente a la PDDH, mediante el fortalecimiento de todas las áreas y procesos claves en el ejercicio de sus atribuciones, encaminadas al logro de la eficiencia y eficacia de todo su trabajo.

**Estrategias Específicas:** fortalecer la gestión y administración de los recursos con eficiencia; promover acciones que fortalezcan la identificación institucional y compromiso del personal; modernizar la estructura, procesos y sistemas institucionales; desarrollar mecanismos de comunicación estratégica interna y externa; y modernización del marco legal e institucional.

Nº	Nombre del Proyecto	Resultados obtenidos	Nivel de ejecución (%)
5.1	Diseño e implementación de un sistema integrado de gestión de recursos humanos	Se elaboraron los términos de referencia para la contratación de una consultoría que le corresponderá diseñar e implementar el sistema integrado de gestión de recursos humanos.	100%
5.2	Elaboración de manuales administrativos, manual de organización, manual de descripción de puestos, manual de procedimientos de la PDDH	Se elaboraron las siguientes propuestas: Manual de Inducción, Política de Capacitación y Manual de Organización y Puestos.	100%
5.3	Diseño e implementación de un programa de capacitación orientado al reforzamiento de competencias, la identificación institucional, y los diferentes aspectos comportamentales que contribuyan al logro de los objetivos institucionales y el mantenimiento de un clima laboral saludable.	En el período se continuaron realizando capacitaciones al personal administrativo y técnico, entre las que se destacan: 12 sesiones de Cultura de Paz y Derechos Humanos y 6 sesiones de Liderazgo.	100%
5.5	Estudio de modernización y reorganización de la PDDH	El referido estudio se encuentra en fase de análisis y revisión del marco legal por parte del Departamento Jurídico de la PDDH.	60%
5.6	Proyección financiera plurianual	Se han realizado acciones para alcanzar un presupuesto acorde con las necesidades institucionales.	100%
5.7	Diseño e implementación de un Programa de Comunicación Estratégica, interno y externo (Implementación de un canal de internet)	Se cuenta con un canal en <i>Youtube</i> , el cual es soporte para la difusión del trabajo institucional para lo que se difunde a través de la página web, la cuenta de <i>Facebook</i> y <i>Twitter</i> .	100%

Fuente: elaboración a partir de los insumos institucionales, Unidad de Análisis.

### d) Asignación y ejecución presupuestaria

Para el presente ejercicio fiscal que se informa, 2012-2013, el rubro de remuneraciones ha sido de los más importantes en cuanto al volumen al significar el 77.83% del total del presupuesto asignado, seguido por rubro de bienes y servicios que representa el 19.80% de las asignaciones. Gastos financieros y otros, tuvo una distribución del 0.45%. Mientras que un 0.15 de la asignación presupuestaria fue destinada para el rubro de Transferencias Corrientes. La inversión en el rubro de Activos Fijos representó el 1.78%. Véase la siguiente tabla sobre la distribución de la asignación presupuestaria institucional:



Distribución de la asignación presupuestaria 1 de junio de 2012 a 31 de mayo de 2013							
CONCEPTO	Dirección superior	Administración General	Unidad Financiera Institucional	Monitoreo y protección de los derechos humanos	Educación, promoción e investigación de derechos humanos	TOTAL	Porcentajes
Remuneraciones	\$1,164,949.21	\$ 1,417,308.85	\$ 255,149.60	\$ 3,570,194.51	\$ 377,471.55	\$ 6785,073.72	77.83%
Bienes y servicios	\$ 500,748.59	\$ 542,834.95	\$ 12,168.81	\$ 554,336.91	\$ 115,538.93	\$ 1725,628.19	19.80%
Gastos financieros y otros	\$ 25.00	\$ 38,872.35				\$ 38,897.35	0.45%
Transferencias corrientes	\$ 11,000.00	\$ 1,658.50		\$ -		\$ 12,658.50	0.15%
Inversiones en activos fijos	\$ 124,733.33	\$ 8,639.74	\$ 3,625.00	\$ 14,500.00	\$ 3,625.00	\$ 155,123.07	1.78%
Total	\$1,801,456.13	\$ 2,009,314.39	\$ 270,943.41	\$ 4,139,031.42	\$ 496,635.48	\$ 8,717,380.83	100.00%
<b>Porcentajes</b>	<b>20 %</b>	<b>23 %</b>	<b>3.1 %</b>	<b>47.5 %</b>	<b>5.70 %</b>	<b>100 %</b>	

*Fuente: datos de la Unidad Financiera Institucional de PDDH*

Según los datos proporcionados por la Unidad Financiera Institucional, UFI de PDDH, esta institución del Estado es una de las más eficientes en cuanto a la ejecución del presupuesto. Como puede apreciarse en la siguiente tabla:

Distribución de ejecución presupuestaria institucional 1 de junio de 2012 a 31 de mayo de 2013				
RUBRO	CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
51	Remuneraciones	\$ 6,785,073.72	\$ 6,616,860.77	\$ 68,212.95
54	Bienes y servicios	\$ 1,725,628.19	\$ 1,657,360.24	\$ 68,267.95
55	Gastos financieros y otros	\$ 38,897.35	\$ 38,881.69	\$ 15.66
56	Transferencias corrientes	\$ 12,658.50	\$ 12,658.50	\$ -
61	Inversiones en activos fijos	\$ 155,123.07	\$ 154,840.10	\$ 282.97
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ 8,717,380.83</b>	<b>\$ 8,480,601.30</b>	<b>\$ 236,779.53</b>

*Fuente: datos de la Unidad Financiera Institucional de PDDH*

Los fondos programados para cubrir los costos de remuneraciones, bienes y servicios, gastos financieros y otros, transferencias corrientes, inversiones en activos fijos y asignaciones por aplicar, fueron \$8,717,380.83, de los cuales se han ejecutado \$8,480,601.30, representando el 97.28%.

Como se planteó anteriormente, la PDDH no cuenta con los recursos razonables que le habiliten plenamente a responder con eficacia y eficiencia a las distintas demandas de atención. Realidad que ha sido paliada en un grado mínimo a través de la cooperación externa. En el período del reporte, se desarrollaron 5 proyectos financiados por la Cooperación Externa, con un monto global de ciento diez mil quinientos ochenta y dos con catorce centavos, \$ 110,582.14, que representa un financiamiento del 11.4% de las gestiones de compras realizadas durante el período del Informe. Mientras que los fondos públicos representaron el 88.6% de financiamiento de las gestiones de compras y adquisiciones.

## e) Logros principales por áreas estratégicas

En el área de **protección de los derechos humanos**, el personal jurídico atendió a nivel nacional 11,708 casos, de los cuales 8,652 correspondieron a orientaciones legales y a 3,056 denuncias admitidas, aproximadamente el 74% y el 26%, respectivamente. En el período se emitieron 677 resoluciones iniciales, 362 resoluciones finales y 67 buenos oficios.

En relación al período anterior, se experimentó una disminución de 2,087 casos, de los cuales 1,292 pertenecieron a orientaciones legales y 795 a denuncias. Lo anterior, estarían indicando que las orientaciones legales continúan siendo una de las principales actividades institucionales de prevención de violaciones a los derechos humanos.

A nivel nacional, la zona central del país concentra la mayor cantidad de denuncias con 1,430. El Departamento de San Salvador se ubica con el mayor número de denuncias con 659 casos que incluyen los resultados obtenidos de las Delegaciones Locales de los Municipios de Soyapango y Apopa, que reportaron 135 y 62 respectivamente.

En este período, respecto a la clasificación de derechos humanos y libertades fundamentales, se ubicaron nuevamente con la mayoría de denuncias los derechos civiles con 2,593, seguido de los derechos económicos, sociales y culturales con 804; derechos específicos de los niños, niñas y adolescentes con 264; derechos específicos de la mujer con 213; de las personas privadas de libertad con 208; derechos de la persona con relación al medio ambiente con 59; derechos de las personas migrantes con 52; derechos de las personas viviendo con VIH con 28; derechos de las personas adultas mayores con 22; derechos de las personas con discapacidad con 16; derechos de las personas consumidoras con 13; y los derechos políticos con 1.

A nivel particular, se reportaron más denuncias sobre los derechos humanos tradicionalmente denunciados y el escalonamiento de algunos derechos a las primeras posiciones. El derecho a la integridad personal se ubica como el más señalado con 635 denuncias admitidas; luego el derecho al debido proceso administrativo se ubica en el segundo lugar manteniendo su posición del año pasado, pero reportando un aumento de denuncias con 539; el derecho al trabajo con 405, el derecho de acceso a la justicia con 363, la seguridad personal con 294; el derecho a la salud con 224; a la libertad personal con 208; derecho a un debido proceso judicial con 154; derecho de petición con 149 y derecho de propiedad con 135; entre otros.

Por otro lado, al observar el reporte por institución denunciada, el sistema refleja que la institución que más ha sido señalada como presunta violadora de derechos humanos sigue siendo la Policía Nacional Civil (PNC) con 1,487; seguido de los Gobiernos locales con 654; los juzgados y Tribunales con 294; la Fiscalía General de la República (FGR) con 283; la Procuraduría General de la República (PGR) con 194; el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con 150; la Dirección General de Centros Penales y Centros Penitenciarios Específicos con 134; el Ministerio de Educación (MINED) con 132; el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada con 117 y la Red Pública de Hospitales Nacionales con 82.

El resultado de las investigaciones y el consolidado de declaraciones de responsabilidad pública por violaciones a los derechos humanos en las resoluciones finales, ubicaron al derecho al debido proceso administrativo como el principal derecho más violentado con 106 declaraciones de responsabilidad, seguido del derecho al trabajo con 51; el derecho al acceso a la justicia con 28; el derecho a la integridad personal con 26; el derecho a la libertad personal con 19; el deber estatal de garantía con 19; el derecho de las mujeres a un vida libre sin violencia con 13; el derecho a la salud con 13; el derecho de las personas privadas de libertad a mantener relaciones con sus familiares con 10; entre otros.



Cabe destacar en el período, la emisión de 5 resoluciones con medidas cautelares, sobre situaciones de extrema gravedad donde se confirmó la posible afectación de los siguientes derechos: derecho a la vida, derecho a la seguridad personal y derecho a condiciones dignas de trabajo; derecho a la integridad física de la víctima y su grupo familiar; derecho al trabajo por tolerancia u omisiones estatales ante la denegación sistemática de prestaciones labores y afectación al derecho a un nivel de vida digna.

Por otro lado, se realizaron 1,374 verificaciones a instituciones estatales responsables de las personas privadas de libertad, entre ellas las que reportaron mayor frecuencia fueron los Centros de Resguardo o Detención Administrativa con 823 visitas, seguido de los Centros Penitenciarios con 377, luego, los Centros de Internamiento para Menores Infractores con 67, los Juzgados de Ejecución Penitenciaria y Ejecución de Pena con 34, y Pabellones de reos en Hospitales Nacionales con 20, entre otras.

En el área de **análisis e incidencia en políticas públicas, normas y prácticas estatales**, la Procuraduría emitió 9 informes sobre situaciones generales y específicas relacionadas con el goce y disfrute de los derechos humanos.

En marzo de 2013, la Unidad de la Realidad Nacional preparó el *Informe sobre la situación de los Derechos Políticos en el Marco de las Elecciones Legislativas y Municipales celebradas el 11 de marzo de 2012*. El propósito del Informe es evaluar las medidas específicas plasmadas en los Acuerdos de Paz y contrastarlas con los resultados de la verificación internacional, investigaciones de organizaciones sociales, observaciones y recomendaciones de organismos internacionales y los señalamientos de esta Procuraduría. El análisis que se realiza es a partir de un enfoque de derechos, es decir, desde las obligaciones jurídicas reconocidas en el texto constitucional y los tratados internacionales en materia de derechos humanos; asimismo se auxilia de las ciencias políticas, en la identificación de los tipos de transiciones hacia la democracia y las transformaciones de la nueva institucionalidad, entre otros aspectos.

Por otra parte, en el tema migrantes se elaboró el *Informe de Diagnóstico y Monitoreo a Puestos Fronterizos*, elaborado en conjunto con el Programa de Atención de Personas Refugiadas de El Salvador (PARES), el cual está en la fase de reproducción.

En julio de 2012 se elaboró el *Análisis situacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Derechos de Personas Adultas Mayores, Derechos de Personas con VIH y Derechos de Personas con Discapacidad*, el cual fue incorporado en el Informe de Labores Junio 2011 a Mayo 2012.

En diciembre de 2012, se elaboró el *Tercer Informe sobre el estado del derecho a una alimentación adecuada en El Salvador*. Este informe toma como punto de partida la verificación del seguimiento a las recomendaciones emitidas en los dos informes anteriores del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos sobre el Estado del Derecho a una Alimentación Adecuada en El Salvador, publicados en 2007 y 2010. En esta ocasión, este informe se concentra en la situación el derecho a la alimentación en el país entre los años 2010 y 2012 y en él se detallan: un resumen de los principales instrumentos nacionales e internacionales que contienen disposiciones relacionadas a este derecho; el panorama general y perspectiva de la situación del derecho a la alimentación en la región centroamericana; se examina la situación del derecho a la alimentación en El Salvador; se hace un análisis y evolución reciente de las variables y factores que inciden en la disponibilidad y el acceso a los alimentos para la población salvadoreña; y, finalmente, se realiza un análisis general de la política social impulsada por el Estado para atender la problemática de la inseguridad alimentaria en el país.

En noviembre de 2012, la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer y Familia elaboró el *Informe Especial sobre Acceso a la Justicia para las Mujeres en el ámbito Laboral, Penal y Familiar*. Este informe priorizó las áreas penal, familiar y laboral por ser los ámbitos de mayor incidencia en la tutela de los derechos humanos de las mujeres; con el mismo, se da a conocer

la ruta crítica que las mujeres atraviesan al momento de acceder a la justicia, y pretende aportar desde el rol contralor a la efectiva tutela de los derechos humanos de las mujeres. Es necesario tener en mente que si un Estado quiere fortalecer su gobernabilidad democrática, es necesario que incorpore el enfoque de igualdad de género en la modernización de la administración pública, especialmente del sistema judicial.

En octubre de 2012, la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos del Medio Ambiente elaboró y presentó el *Informe sobre la minería metálica y los derechos humanos en la República de El Salvador*, en el marco de la Audiencia General que se celebró durante el 146° Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, D.C., Estados Unidos de América. El 10 de enero de 2013, la misma Procuraduría Adjunta emitió el *Informe Especial sobre el Proyecto Minero “Cerro Blanco” y las Potenciales Vulneraciones a Derechos Humanos en la Población Salvadoreña*.

La Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Niñez y Juventud emitió en octubre de 2012 el *Informe especial sobre el impacto de la violencia en los derechos de las niñas, niños y adolescentes en El Salvador*, en el que se menciona la necesidad de que el Estado salvadoreño adopte estrategias amplias que no se limiten a las medidas penales, sino que hagan frente a la raíz del problema de la violencia y el delito entre los adolescentes, sea que formen parte o no de pandillas; medidas para mejorar el acceso a la educación, instalaciones laborales, recreativas y deportivas; programas de reintegración para las personas menores de edad que se encuentran en centros de inserción social, todo en consonancia con lo recomendado por el Comité de Derechos del Niño al Estado salvadoreño.

En noviembre de 2012 emitió el *Informe situacional sobre la protección de los derechos de la niñez y adolescencia en un contexto de violencia*, en el cual se hace un bosquejo sobre la situación actual por la que atraviesa la niñez y adolescencia salvadoreña, afectación a los derechos, desde su derecho a ser protegida de la violencia y, posteriormente, se analizan las acciones más evidentes de la Administración Pública para garantizar el referido derecho a la persona menor de edad, en la cual se señala el pato o tregua entre pandillas.

En el presente período, se emitieron un total de 7 opiniones sobre proyectos de ley, posicionamientos sobre normativas y propuesta de reforma de ley. También se emitieron 39 pronunciamientos, referidos a las distintas materias de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales. La PDDH realizó a nivel nacional un total de 1,538 acciones de protección, en relación con observación preventiva se realizaron 361 diligencias de buenos oficios y 442 mediaciones.

En el período, la Unidad de la Realidad Nacional presentó un *Estudio de factibilidad para la creación de un Programa de Observatorio de los Derechos Humanos*, proyecto correspondiente al área de Análisis e Incidencia de Políticas, Normas y Prácticas del Estado, del Plan Estratégico Institucional 2011-2014.

El estudio fundamenta la necesidad de adoptar un enfoque de investigación en derechos humanos que articule el análisis jurídico con estadísticas e indicadores. El observatorio pretende constituirse en una herramienta de seguimiento y evaluación de la estrategia pública para atender problemáticas relevantes a la luz del cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos. Para tal efecto, se ha elaborado un breve diagnóstico de los derechos y sujetos más vulnerados, además de la posición institucional frente a las problemáticas que la ciudadanía ha señalado como más preocupantes.

En el área de **promoción y educación en derechos humanos**, este período de informe ha sido una función central en el que hacer de la PDDH. A nivel nacional, se realizaron 4,157 actividades, beneficiando de forma directa a 66,175 personas; las actividades más realizadas se concentraron en las educativas representando el 65.86%, y luego las de promoción con el 34.14%, beneficiándose a 28,541 personas. Del universo de personas beneficiadas a nivel de todo el país, 66 175 personas, ha de acotarse

que el 55.8% son del género femenino (36,925); los jóvenes y estudiantes representan el 62%, siendo el grupo etáreo prioritario y mayoritario en las actividades de educación y de promoción.

La población adulta beneficiada representa el 38%, del cual 30% son del grupo de funcionarios o servidores públicos y el 8% son adultos de organizaciones sociales. Las cuatro delegaciones locales, Apopa, Metapán, Santa Rosa de Lima y Soyapango, tienen como rasgo común que son urbes muy pobladas y urbanizadas. Pese a limitación de personal y recursos financieros, han logrado realizar el 9.74 % del total de las actividades de educación y promoción. Atendiendo a 10,535 personas, en su mayoría estudiantes, jóvenes, mujeres y servidores públicos.

La Escuela de Derechos Humanos es el referente institucional en materia de educación y promoción en derechos humanos. En principio coordina apoyo a las distintas dependencias al interior de la PDDH y también responde a solicitudes que le realiza la sociedad. Comprende las Unidades de Educación, Cultura y Promoción, de la Realidad Nacional y la Biblioteca Institucional. Además de estas dependencias, se plantean las actividades realizadas por las unidades juveniles y el Departamento de Comunicaciones. En conjunto, la Escuela de Derechos Humanos y los departamentos o dependencias de la sede central en San Salvador, han beneficiando a 10,599 personas, a través de 1,669 actividades realizadas, que representa el 40.15% del total de 4,157 implementadas a nivel nacional.

El Departamento de Comunicaciones contribuyó a la promoción y difusión de los derechos humanos. Generó 14,000 ejemplares de la revista el Defensor del Pueblo y un número especial en diciembre de 2012, han traslado información de las actividades de la PDDH a la prensa escrita, radial y televisada. Acompañó al Procurador y demás autoridades en las actividades que organiza la PDDH, divulgando información valiosa. Han mantenido y actualizan la página web institucional así como ha establecido las relaciones con los medios de comunicación masiva. También colaboró con el impulsó de una campaña para la ratificación constitucional del derecho al agua, organizó conferencias de prensa para la presentación de pronunciamientos y posicionamientos ante los medios de comunicación y construcción del archivo institucional.

En el área de **acciones y relaciones externas**, la Procuraduría promovió la conformación de 10 Mesas Temáticas de Trabajo en las distintas áreas de protección de los derechos humanos, la adopción de esta dinámica de trabajo ha significado la coordinación con diversas organizaciones de la sociedad civil e instituciones de gobierno que componen dichos espacios en aras de contribuir con el cumplimiento de los derechos humanos.

Se destaca al creación el 9 de abril de 2012 de la Mesa sobre Soberanía Alimentaria. El objetivo general es el de incidir para que la población salvadoreña tenga garantizado el derecho humano a la soberanía alimentaria lo cual es fundamental para una vida digna. Esta mesa impulsara procesos de sensibilización entre la población para el conocimiento de estos derechos así como desarrollará gestiones de cabildeo para la aprobación de una Ley de Soberanía Alimentaria. El logro más destacado para el periodo fue una concentración masiva el 23 de abril en las afueras de la Asamblea Legislativa para solicitar la ratificación de la reforma constitucional que reconoce el derecho a la alimentación y el derecho al agua; y la aprobación de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, y la Ley General de Aguas y una reunión entre la Mesa por la Soberanía Alimentaria y el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para intercambiar experiencias de trabajo en materia del derecho a la alimentación.

Asimismo, en el ejercicio de su mandato constitucional y legal de velar por el respeto y protección de los derechos humanos, esta Procuraduría impulsó la suscripción de 9 convenios con diferentes organismos de la sociedad civil e instituciones públicas cuyas actividades y atribuciones se relacionan con las temáticas abordadas por esta Institución. Entre los que se encuentran los siguientes convenios: con Fiscalía General de la República y Procuraduría General de la República, Fuerza Armada de

El Salvador, Universidad Tecnológica, Universidad Panamericana, Universidad Modular Abierta, Universidad salvadoreña Alberto Masferrer, Registro Nacional de Personas Naturales y Comisión Nacional de Búsqueda de Niños, Niñas y Adolescentes, y Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México.

En el área de **fortalecimiento institucional**, como parte del esfuerzo por optimizar la calidad del servicio a las personas usuarias, se impartieron al personal seis capacitaciones en diversas temáticas, beneficiando a 385 empleados y empleadas, lo que representa el 87% del total del personal institucional. De este grupo de personas, 170 fueron hombres (109 del sector técnico y 61 del sector administrativo) y 215 mujeres (113 del sector técnico y 92 del sector administrativo). Algunas capacitaciones respondieron a solicitudes directas de sectores técnicos y administrativos, en temas como violencia intrafamiliar, cultura de paz y derechos humanos, y liderazgo.

En esta misma línea, las procuradurías adjuntas específicas continuaron capacitando al personal técnico a través de la gestión de cursos, diplomados, talleres y jornadas de sensibilización en temas y actividades relacionadas con la protección y la promoción de los derechos humanos, tales como: derecho penal ambiental; investigación de delitos ambientales; antenas de telefonía celular; energía sostenible, inversión en niñez y adolescencia con enfoque de derecho; curso básico de lenguaje de señas salvadoreño; gerontología, derecho a una alimentación adecuada, salud comunitaria, Ley de Ética Gubernamental.

Por otro lado, la Unidad de Proyectos contribuyó al fortalecimiento institucional con gestiones ante los agentes de cooperación internacionales, tales como: UNICEF en la continuidad del proyecto “Protegiendo a la niñez con enfoque de derecho en situación de emergencia principalmente en comunidades afectadas por la Depresión Tropical 12E”. También se fortalecen lazos con el PNUD con el proyecto “Asistencia técnica para fortalecer el proceso de tutela de los Derechos Humanos de Personas con VIH-SIDA en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos”, con OXFAM América en el seguimiento al proyecto “Promoción del Derecho a una Alimentación adecuada en El Salvador”, con UNICEF para el proyecto “Informe especial sobre el Impacto de la Violencia en la Protección de los Derechos Humanos”, e INTERVIDA por el proyecto “Diseño de Política Interna de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos”.

Finalmente, la Secretaría General realizó importantes esfuerzos para potenciar las capacidades institucionales de respuesta ante problemas que afectan los derechos humanos, tales como la revisión de los manuales e instructivos institucionales siguientes: Reglamento de Viáticos (Acuerdo N°11-2013), el Instructivo de asignación de números celulares (Acuerdo N°26-2013), Instructivo de asistencia, puntualidad y permanencia de personal de la PDDH (Acuerdo N°58-2013), Instructivo para la coordinación y apoyo de las Procuradurías Adjuntas específicas al Sistema de Protección de los Derechos Humanos (Acuerdo N°56-2013), Reglamento de Organización y Funciones de la PDDH (Acuerdo N°57-2013) y, el Reglamento de Adquisición y pago de bienes y servicios (Acuerdo 55-2012).





*El señor Procurador, licenciado Oscar Humberto Luna en el evento en conmemoración del 64º aniversario de la proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos.*



# I. ANÁLISIS SITUACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

## I. ANÁLISIS SITUACIONAL POR ÁREA TEMÁTICA DE DERECHOS HUMANOS

La PDDH contribuye al fortalecimiento de la democracia y la consolidación del estado de derecho en El Salvador, por medio del cumplimiento de su mandato constitucional de velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos, así como la supervisión de las actuaciones públicas frente a las personas, formular conclusiones y recomendaciones y elaborar y publicar informes<sup>20</sup>, sobre hechos o situaciones, que afectan la vigencia de los derechos humanos con el objetivo de reorientar la respuesta pública hacia el respeto irrestricto de la dignidad humana.

Esta funciones se encuentra desarrolladas en el Reglamento para la Aplicación de Procedimientos del Sistema de Protección de los Derechos Humanos de esta Procuraduría, que en particular crea un mecanismo de protección diferente al de tramitación de presuntas violaciones a derechos humanos, denominado “Monitoreo y Análisis de la Realidad Nacional”<sup>21</sup>, en el que se aplican métodos tales como la observación de la realidad nacional, a través de los diferentes medios de comunicación, seguimiento de políticas públicas e interpretación de datos estadísticos internos o externos, con el fin de verificar el goce de los derechos humanos y el cumplimiento de los deberes del Estado. Las dependencias que les corresponden activar este mecanismo son las procuradurías adjuntas específicas, la Unidad de la Realidad Nacional y las delegaciones departamentales y locales en su comprensión territorial.

El resultado esperado de este monitoreo es la elaboración de informes que evalúen el estado de los derechos humanos en el país. Tradicionalmente, como se ha presentado en anteriores informes anuales, el examen de compatibilidad entre las decisiones públicas con los estándares de protección de los derechos humanos, adopta la forma de análisis situacional, en el que se examina la aplicación de políticas, programas, acciones, buenas prácticas, leyes y sentencias que incidieron en el goce de los derechos humanos en el período establecido por el Informe.

Los señalamientos que se encontrarán en este apartado, corresponden a los posicionamientos institucionales acumulados durante el año presidencial, frente a las principales problemáticas nacionales que amenazaron o afectaron los derechos humanos y las libertades fundamentales. El análisis se divide en función de las áreas de trabajo que esta institución ha dado prioridad, tomando en cuenta las limitadas capacidades institucionales que permitirían observar todo el espectro de conflictividad que acontece en la realidad nacional. Esta separación temática no desconoce el carácter interdependiente e indivisible de los derechos humanos, sino que se organiza para facilitar la comprensión de las problemáticas y los enfoques especiales desde la perspectiva de los derechos específicos de cada grupo en situación de vulnerabilidad.

20 Artículo 194, romano I, ordinales 1º, 7º, 11º y 12º de la Constitución de la República de El Salvador.

21 Artículos 51 al 53 del Reglamento para la Aplicación de Procedimientos del Sistema de Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.



## 1.1. DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS<sup>22</sup>



*El señor Procurador, licenciado Oscar Humberto Luna en una actividad con miembros de la Policía Nacional Civil.*

### a) Situación de la seguridad ciudadana: perspectiva institucional

#### i. La situación interna de la Policía Nacional Civil

Esta Procuraduría en cumplimiento de su mandato de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos, y supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas, en cuanto a su relación con las instituciones públicas, trabaja en dos aspectos, los cuales resultan complementarios para entender la responsabilidad estatal en el tema de derechos humanos, por un lado de la actuación de las instituciones públicas hacia los particulares en cumplimiento a sus respectivos mandatos legales, y el otro, la actuación hacia las personas que forman parte del personal empleado en las mismas instituciones del Estado.

Aplicando esta visión en el tema de seguridad ciudadana, para el caso de nuestro país con índices tan altos de violencia, que enfrentamos graves problemas de seguridad, poco recursos económicos y con problemas para conformar instituciones fuertes garantes de la ley, se nos plantea las siguientes preguntas: ¿cuál es la situación de las personas que tienen que enfrentar el reto que les impone el difícil panorama de la seguridad pública?, ¿cuáles son sus condiciones laborales?, ¿cómo les afectan las situaciones económicas, los cambios de funcionarios, la aplicación de nuevos planes y políticas públicas?, ¿cómo afecta el trabajo las opiniones que se vierten en los medios de comunicación sobre el rendimiento del trabajo en seguridad pública?, todas estas interrogantes de difícil respuesta, son las que deben aceptar las personas que han decidido formar parte de los cuerpos de seguridad del Estado, sus unidades de investigación y control. Por eso es sumamente importante que desde los más altos funcionarios encargados del tema de seguridad pública se traten de encontrar respuestas a las interrogantes planteadas y proponer alternativas de solución, porque no es difícil inferir que existe un nexo, entre mejores condiciones laborales, personales y de estima de la labor que realizan los agentes encargados de hacer cumplir la ley, con mejores resultados en su labor.

<sup>22</sup> Elaborado por la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Civiles e Individuales, y editado por la Unidad de la Realidad Nacional.



En tal sentido, resulta urgente que se busquen métodos eficaces para superar factores altamente nocivos para la salud e integridad, y el desempeño de la laboral de los agentes encargados de hacer cumplir la ley. Entre estos se pueden señalar factores negativos externos a la labor de seguridad pública, como problemas de índole personal, familiar, financieros, o hasta de adicciones, como internos, como sobrecarga de trabajo o exponerse de forma frecuente a situaciones de extrema peligrosidad, actuaciones arbitrarias como suspensiones, traslados, estancamientos en el ámbito profesional o crisis nerviosas derivadas de las situaciones de inseguridad a la que son sometidas las personas pueden llevar hasta desenlaces fatales, se ha mencionado en periódicos que en el año dos mil doce siete agentes policiales cometieron suicidio, y a principios del presente año, ya se habían reportado casos de suicidio, incluso cometidos dentro de las mismas sedes policiales<sup>23</sup>. En otro caso un agente atentó contra su pareja y luego contra su propia vida.<sup>24</sup>

Una situación que se ha observado son los cambios en los más altos puestos de dirección de la Policía Nacional Civil, en primer lugar, el nombramiento a principios del año dos mil doce, de un nuevo director con formación militar<sup>25</sup>, pero a quien la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, declaró que su nombramiento, junto con el del Ministro de Justicia y Seguridad Pública, no eran conformes a lo dispuesto por la Constitución<sup>26</sup>, la sustitución del director general por una sentencia de la Sala de lo Constitucional, y el nombramiento de un funcionario civil como director, es decir, a diferencia de su antecesor, sin pasado o formación militar; no obstante no puede dejar de señalarse que tal como se ha destacado en medios de prensa<sup>27</sup>, el ingeniero Rigoberto Trinidad Pleites Sandoval, como nuevo director de la Policía Nacional Civil, quien no tiene experiencia en temas de seguridad pública, formación policial, y ni siquiera hubiese desempeñado cargos administrativos dentro de dicha institución, lo cual pone en entredicho su idoneidad al frente de una institución de tal complejidad, tanto en estructura como en las funciones que le competen, como es la Policía Nacional Civil. El nombramiento de la cabeza del cuerpo policial, que desde la renuncia del Comisionado Ascencio, recayó en un ex militar, a una persona que no tiene experiencia en temas de seguridad pública, y quien debe tomar todas las decisiones operativas y de administración interna, es un aspecto sumamente grave y sin duda lleva a pensar que dentro del aparato de seguridad del Estado, y de la misma Presidencia de la República no hay confianza suficiente en otro jefe policial para que pudiera asumir el mando.

El nombramiento del director, es solo una parte, pero no es el único señalamiento, también se ha observado los traslados de varios oficiales que antes asumieron cargos y que fueron comisionados a lugares fuera del territorio nacional<sup>28</sup>, esto lleva a pensar en un grave fallo de la dirección estratégica de

23 Ver nota periodística: “Policía se quita la vida en delegación de Apopa”. Publicada el 28 de marzo de 2013. Disponible en: <http://www.laprensagrafica.com/policia-se-quita-la-vida-en-delegacion-de-apopa->, última consulta el 7 de julio de 2013.

24 Ver nota periodística: “51 personas fallecidas en seis días de vacación” publicada el 30 de marzo de 2013, donde se cita: “Entre los fallecidos por arma de fuego se encuentra, según la PNC, el agente investigador Oliverio Enrique Rosales, de 50 años. El policía asesinó a su cónyuge, Xenia Roxana Mártir de Rosales, de 36 años de edad, con su arma de equipo y después de dispararle se suicidó”. Disponible en: <http://www.laprensagrafica.com/51-personas-fallecidas-en-seis-dias-de-vacion>, última consulta el 7 de julio de 2013.

25 Ver nota periodística: “Francisco Ramón Salinas, nuevo director de la PNC” Publicada el 23 de enero de 2012. Disponible en: <http://elmundo.com.sv/francisco-ramon-salinas-nuevo-director-de-la-pnc>, última consulta el 7 de julio de 2013.

26 Ver nota periodística: “Declaran inconstitucional elección del Ministro de Seguridad y director de la PNC”. Nota del 18 de mayo de 2013. Disponible en: <http://www.diariocolatino.com/es/20130518/nacionales/115875/Declaran-inconstitucional-elecci%C3%B3n-del-ministro-de-Seguridad-y-director-de-la-PNC.htm>, última consulta el 7 de julio de 2013.

27 Ver nota periodística: “Director de OIE pasa a conducir el Ministerio de Seguridad y el de Migración a dirigir la PNC”. Publicada el 29 de mayo de 2013. De la cual se cita que: “Pleités, un ingeniero electricista con maestría en administración de empresas, era hasta entonces el director de desarrollo humano del Ministerio de Educación, y Munguía Payés lo nombró director de Migración. En el currículo de Pleités no se asoma ninguna experiencia en temas de seguridad pública. También fue director general administrativo del Ministerio del Ambiente, y empleado de la Alcaldía de San Salvador desde la gestión de Héctor Silva. Ahí se desempeñó como gerente de Registros y Servicios y luego como gerente administrativo” Disponible en: <http://www.elfaro.net/es/201305/noticias/12204/>, última consulta el 7 de julio de 2013.

28 Ver nota periodística: “Envían a más policías al exterior” Publicada el 27 de marzo de 2013. De la cual se cita: “los comisionados de la Policía Hugo Ramírez Mejía, quien estará en la embajada salvadoreña en Colombia, y Edgar Lizama Rivera, quien ha sido asignado a la sede diplomática en Guatemala. Ramírez Mejía se desempeñó como subdirector de Seguridad Pública hasta en enero de 2012 y luego pasó a disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores. Lizama tuvo su último cargo dentro de la Policía como jefe de la Inteligencia Policial y también pasó a comisión de servicio en



la Policía, porque para esta Procuraduría, es preocupante que la única institución que en el país cuenta con funciones policiales a nivel nacional, de seguridad pública, imprescindible en la investigación del delito, y tantas otras funciones, cambie sus cuadros de dirección, a un punto que no puede ser considerado de carácter normal o rutinario, y que desperdicie la experiencia de anteriores oficiales, asignándoles misiones al exterior en el cuerpo diplomático, que asemejan a un exilio de la labor policial. Con todo debe señalarse que hay aspectos positivos, tanto en la creación de nuevas unidades policiales como la Unidad antiextorsiones, y el reforzamiento en aspectos tecnológicos.<sup>29</sup>

### ■ *El control interno en la Policía*

Dentro del trabajo que realiza la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en los expedientes abiertos por la actuación de agentes u oficiales policiales, desde hace años se adoptó la modalidad de verificar el deber de garantía del Estado, en la investigación de los hechos, y sanción de los responsables, por lo que la actuación de la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil y de las unidades que la conforman se vuelve vital para garantizar los derechos humanos de las personas. Es por ello que se han observado de cerca el nombramiento del licenciado Carlos Rodolfo Linares Ascencio, exjuez Especializado de Sentencia de Santa Ana, como Inspector General de la Policía Nacional Civil<sup>30</sup>. No se puede establecer que el cambio de funcionarios sea malo, como un elemento aislado, pero genera preocupación que poco se conoce del proceso iniciado por dicha institución en la depuración y la aplicación de procedimientos internos a miembros de la corporación<sup>31</sup>. Por lo que se tiene muy pocos elementos de juicio para evaluar el trabajo de este funcionario, pero al contrastar la poca información con el discurso oficial que mantiene que los casos de corrupción de agentes y oficiales son casos aislados<sup>32</sup>, pero debido a la opacidad del trabajo hasta el momento, no es posible afirmar que estos casos de miembros involucrados en hechos delictivos sean aislados, porque se generan dudas que pocos casos detectados se deban a que la institución hace poco para investigar y sancionar. Sobre este punto, es un punto que aún está en fase de investigación, las denuncias recibidas en esta institución, respecto a traslados arbitrarios en unidades de la Inspectoría<sup>33</sup>, al mismo tiempo de afirmaciones que para las nuevas jefaturas tenían como misión no molestar a los policías.

### ■ *Otros aspectos de preocupación*

Genera grave preocupación en esta Procuraduría que de forma continua se publique en medios de comunicación que se encuentren y decomisen armas de equipo y uniformes policiales a grupos criminales<sup>34</sup>, los que pueden ser utilizados para cometer delitos vistiendo uniformes y de esta forma facilitar los medios para la realizar los delitos, confundir las pistas de las investigaciones y generar sospecha y confusión en la población, si se trata de verdaderos agentes encargados de hacer cumplir la ley.

Cancillería". Disponible en: [http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota\\_completa.asp?idCat=47859&idArt=7781479](http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7781479), última consulta el 7 de julio de 2013.

29 Ver nota periodística: "911 accederá a base de datos PNC", 25 de marzo de 2013, Disponible en: <http://www.laprensagrafica.com/911-accedera-a-base-de-datos-pnc>, última consulta el 7 de julio de 2013.

30 Ver nota: [http://www.seguridad.gob.sv/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2098:ministro-anuncia-nombramiento-de-inspector-general-de-policia-nacional-civil&catid=1:noticias-ciudadano](http://www.seguridad.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=2098:ministro-anuncia-nombramiento-de-inspector-general-de-policia-nacional-civil&catid=1:noticias-ciudadano), última consulta el 7 de julio de 2013.

31 Ver nota periodística: "Inspectoría de la PNC sin informar de procesos" Publicada el 14 de mayo de 2013. Disponible en: <http://www.laprensagrafica.com/inspectoría-de-la-pnc-sin-informar-de-procesos->, última consulta el 7 de julio de 2013.

32 Ver nota periodística: "Más de 27 policías capturados por diferentes delitos". Publicada el 28 de mayo de 2013. Disponible en: [http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota\\_completa.asp?idCat=47859&idArt=7785245](http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7785245), última consulta el 7 de julio de 2013.

33 Sobre las denuncias de traslados arbitrarios, y una posible directriz institucional de no investigar a los agentes policiales por abusos dentro de su actuación, esta Procuraduría abrió el expediente SS-0608-2012, el cual se encuentra en fase de investigación.

34 Ver nota periodística: "Localizan en Colón fusiles y uniformes policiales" Publicada el 5 de mayo de 2013. Disponible en [http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota\\_completa.asp?idCat=47859&idArt=7869894](http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7869894) y "Detienen a dos hombres con atuendos de la Policía". Disponible en: <http://www.laprensagrafica.com/detienen-a-dos-hombres-con-atuendos-de-la-policia>, última consulta el 7 de julio de 2013.

De igual manera, el decomiso de armas de guerra y materiales explosivos, que en algunos casos se han visto involucrados personal militar, dejan en evidencia los problemas en la investigación y sanción de estos casos, que deberían ser ejemplos de la efectividad del control militar de las armas, y de la sanción a quienes en flagrante incumplimiento a sus deberes, sean coludidos y participen en actividades de índole criminal, pero a casi dos años de haberse detectado los casos más sonados, los procesos judiciales siguen estancados<sup>35</sup> y los procesos sancionatorios internos tampoco han arrojado resultados definitivos.

Una situación de la que también resulta alarmante es la falta de información respecto de los mecanismos de control y los resultados de las acciones de la Policía Nacional Civil, respecto de la actuación de las empresas de seguridad privada, que es un faceta de la seguridad pública que es poco abordada, peor debería ser retomada con mayor atención puesto que estas empresas manejan grandes cantidades de armas y municiones, y deberían exigir requisitos estrictos a las personas que aspiren a formar parte de su nómina; al mismo tiempo, porque varios agentes de estas empresas de seguridad se han visto envueltos en hechos delictivos<sup>36</sup>. Al respecto es oportuno retomar lo que fue señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

71. La Comisión se ha manifestado también oportunamente sobre algunos problemas relacionados a la creciente intervención de las empresas privadas en la prestación de servicios de seguridad. En este sentido, ha subrayado que “la falta de registro legal de las policías privadas favorece la inexistencia de control estatal de las actividades llevadas adelante por las mismas, en ocasiones delictivas, y facilita la comisión de abusos”. En este mismo sentido, la Comisión señaló la ausencia de procedimientos de control sobre las empresas privadas de seguridad, a la vez que expresó su preocupación por las denuncias presentadas acerca de casos de violaciones a los derechos individuales cometidos por sus empleados.

72. Los Estados Miembros, en cumplimiento a su deber de garantía de los derechos humanos comprometidos en las políticas de seguridad ciudadana, deben asumir las funciones de prevención, disuasión y represión del delito y la violencia, por ser los depositarios del monopolio de la fuerza legítima. La privatización de las funciones de seguridad ciudadana tiene como consecuencia que ésta se desvincule de la noción de derechos humanos, cuya defensa, protección y garantía competen al Estado, para transformarse en un mero producto que puede adquirirse en el mercado, y, en la generalidad de los casos, exclusivamente por aquellos sectores de la sociedad que cuentan con los recursos económicos para hacerlo.<sup>37</sup>

Es por eso que esta Procuraduría, siguiendo la doctrina de la Comisión Interamericana es oportuno recomendar que la Policía Nacional Civil, que es la institución encargada de la vigilancia y el control de las empresas de seguridad privada, debe prestar especial atención: a la regulación de las funciones que pueden cumplir las empresas privadas de seguridad; al tipo de armamento y medios materiales que están autorizadas a utilizar; los mecanismos adecuados para el control de sus actividades; la implementación de un registro público; que informen regularmente sobre los contratos que ejecutan y el tipo de actividades que desempeñan. Del mismo modo, exigir el cumplimiento de los requisitos de selección y capacitación de las personas contratadas por estas empresas, y cuáles son las instituciones públicas que pueden extender certificados que habiliten ejercer este trabajo.

35 Ver nota periodística: “Juzgados evidencian deficiente investigación por tráfico de armas”. Publicado el 2 de abril de 2013. Disponible en: <http://elmundo.com.sv/juzgados-evidencian-deficiente-investigacion-por-trafico-de-armas>, última consulta el 7 de julio de 2013.

36 Ver notas periodísticas: “Agentes del CAM y vigilantes detenidos por homicidio” Publicado el 15 de abril de 2013. Disponible en: <http://elmundo.com.sv/agentes-del-cam-y-vigilante-detenidos-por-homicidio> y la nota: “Vigilante que mató a indigente a balazos enfrentará juicio por homicidio”. Publicado el 25 de marzo de 2013. Disponible: <http://www.lapagina.com.sv/nacionales/79494/2013/03/25/Vigilante-que-mato-a-indigente-a-balazos-enfrentara-juicio-por-homicidio>, última consulta el 7 de julio de 2013.

37 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos. Del 31 de diciembre de 2009.

## ii. El derecho a la seguridad ciudadana en el marco de la tregua entre pandillas<sup>38</sup>

En los últimos años, El Salvador ha sido considerado uno de los países con mayor índice de criminalidad a nivel mundial.<sup>39</sup> La violencia homicida, los altos niveles de victimización en diferentes delitos, los datos exorbitantes de personas privadas de libertad y la impunidad sistemática han generado afectaciones a la vida, la integridad, y el patrimonio de las personas en todo el territorio nacional. De igual forma, la violencia ha provocado restricciones significativas a los esfuerzos gubernamentales dirigidos a alcanzar un desarrollo pleno que garantice condiciones dignas de existencia para la población salvadoreña.<sup>40</sup>

En ese sentido, los datos proporcionados por el Instituto de Medicina Legal (IML) revelan que en la primera década del nuevo siglo la violencia cobró la vida de 32, 843 personas<sup>41</sup> y en los últimos dos años, la tasa de homicidios superó los 60 puntos por cada cien mil habitantes<sup>42</sup>, llegando a considerarse la situación como una “epidemia de violencia” según los parámetros establecidos internacionalmente.<sup>43</sup>

Para el año 2011, el IML reportó 4,366 personas asesinadas a nivel nacional, de las cuales 629 eran mujeres y 3,737 hombres. La mayoría de víctimas oscilaban entre 15 y 24 años de edad y los delitos se cometieron utilizando arma de fuego en el 70% de los casos.<sup>44</sup> La tendencia al alza en los homicidios se mantuvo durante los primeros dos meses del 2012, periodo en el cual se registra un incremento de más de 136 casos con relación al año anterior.<sup>45</sup>

Sin embargo, a partir de marzo, los datos muestran reducciones significativas, de tal forma que al comparar la incidencia del delito durante el primer semestre de ambos años, para el 2012 se registran 503 casos menos.<sup>46</sup>

Sin duda alguna, el hecho generador de esa reducción de homicidios ha sido la tregua anunciada por la mara salvatrucha y la pandilla del Barrio 18 en marzo del presente año. Dicho acuerdo surgió a la luz pública, a raíz de un artículo publicado por el periódico digital El Faro sobre el traslado de treinta líderes que cumplían condena en el centro penal de máxima seguridad de Zacatecoluca hacia otros centros penitenciarios.<sup>47</sup>

38 Artículo publicado en la Revista de la Escuela de Derechos Humanos, enero – diciembre 2012, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

39 PNUD. “Abrir espacios a la seguridad ciudadana y el desarrollo humano” Informe sobre Desarrollo Humano para América Central. 2009-2010 Pág. 68.

40 Si bien con frecuencia se utilizan los homicidios como el indicador principal para conocer las dimensiones de la violencia, debe hacerse énfasis que esta forma es, apenas, una pequeña parte del conjunto total de la misma, siendo su manifestación más extrema. Sin embargo, para los objetivos del presente artículo, dichas cifras serán tratadas con mayor detalle con el interés de contextualizar los efectos que la tregua entre pandillas ha significado para el país.

41 Instituto de Medicina Legal. “Epidemiología de los homicidios en El Salvador” Período 2001-2008. También: “Epidemiología de los homicidios en El Salvador, año 2009” y “Reconocimiento de defunciones por homicidios realizados por los(as) médicos(as) forenses del Instituto de Medicina Legal durante el año 2010”.

42 Instituto de Medicina Legal. Reconocimiento de defunciones por homicidios realizados por los(as) médicos(as) forenses del Instituto de Medicina Legal durante el año 2010”. También: “Reconocimiento de homicidios enero a diciembre de 2011”. Disponible en: [http://www.transparencia.oj.gob.sv/Filemaster/InformacionGeneral/documentacion/c\\_40/2602/HOMICIDIOS%202011.pdf](http://www.transparencia.oj.gob.sv/Filemaster/InformacionGeneral/documentacion/c_40/2602/HOMICIDIOS%202011.pdf), última consulta el 7 de julio de 2013.

43 PNUD, citado supra, pág. 85

44 Instituto de Medicina Legal, citado supra, pág. 1.

45 Instituto de Medicina Legal. Informe de Probables Homicidios. Enero- Junio de 2012. Disponible en: [http://www.transparencia.oj.gob.sv/Filemaster/InformacionGeneral/documentacion/c\\_40/2596/HOMICIDIOS%20SEMESTRAL%202012.pdf](http://www.transparencia.oj.gob.sv/Filemaster/InformacionGeneral/documentacion/c_40/2596/HOMICIDIOS%20SEMESTRAL%202012.pdf), última consulta el 7 de julio de 2013.

46 *Ibid.*

47 El periódico digital El Faro, realizó diferentes publicaciones estableciendo que de acuerdo a un informe generado en el Centro de Inteligencia Policial (CIP), el gobierno había ofertado miles de dólares a los pandilleros de más alto rango, si se comprometían a reducir la cifra de homicidios. Ver nota periodística: “Gobierno negoció con pandillas reducción de homicidios” Publicada el 14 de marzo de 2012. Disponible en: <http://www.elfaro.net/es/201203/noticias/7985/>, última consulta el 7 de julio de 2013.

En los días siguientes, los voceros de la Pandilla 18 y la Mara Salvatrucha confirmaron la existencia de una tregua entre ambos grupos, expresando por medio de un comunicado su compromiso de contribuir a la “pacificación del país”. La lista de peticiones elaboradas por las pandillas aseguraba que ambas organizaciones se comprometían a disminuir “el acontecimiento de hechos delictivos contra la vida de nuestros miembros, personas civiles y miembros del ejército” y como “contrapartida” esperaban que las autoridades suspendieran los operativos policiales en los territorios donde operan y limitar el papel de la policía a “prestar seguridad e intervenir sólo en los casos en los que exista flagrancia”. Solicitaron, además, una serie de reformas legales que incluían la derogación de la Ley de Proscripción de Pandillas, la eliminación de la figura del testigo criteriado, la derogación de varios artículos del Código Penal que los excluyen de beneficios carcelarios como la libertad condicional o el traslado a los pabellones de “fase de confianza” donde las medidas de encierro son menos estrictas.<sup>48</sup>

La iniciativa atrajo la atención del secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, quien se reunió con los representantes de las pandillas en los centros penitenciarios<sup>49</sup>, anunciando a su vez un desarme parcial y el cese de todo tipo de violencia contra las mujeres<sup>50</sup>. Posteriormente, surgieron nuevos compromisos que incluían la incorporación de otros grupos, la reducción de las extorsiones y la creación de “municipios santuarios” para “desmontar la violencia generada por las pandillas”.<sup>51</sup>

Establecido el contexto, no puede negarse que la preservación de la vida reflejada en la reducción de los homicidios será siempre un resultado importante que debe ser reconocido y ampliado en aras de lograr la pacificación de la sociedad salvadoreña. Sin embargo, analizar la tregua entre pandillas requiere un examen minucioso sobre el cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de seguridad ciudadana con el fin de determinar los aciertos y desafíos que todavía exige la garantía de este derecho.

Por ello, es importante mencionar que en una primera versión, el entonces Ministro de Justicia y Seguridad Pública, negó la posible negociación entre el gobierno y las pandillas y expresó que la reducción de homicidios se debía a la efectividad policial.<sup>52</sup> Luego de diversas explicaciones, que incluían una mezcla de razones humanitarias e informaciones sobre un posible plan de fuga masiva, se presentó a Raúl Mijango y al Obispo castrense Fabio Colindres como los “mediadores” que habían propiciado un “acuerdo de paz” entre las dos principales pandillas del país. Según manifestaron, el gobierno “siempre estuvo al tanto de las acciones emprendidas<sup>53</sup>”, actuando como “facilitador”.<sup>54</sup> Finalmente, se supo que dicho proceso fue “cuidadosamente diseñado desde el despacho ministerial con el aval del Presidente Funes”<sup>55</sup>.

Posteriormente, se hizo público que el Gobierno, a través de varios ministerios, destinaría \$33.3 millones para programas de prevención de violencia, mediante cuatro componentes sociales: salud,

48 Ver nota periodística: “La lista de peticiones que las pandillas hicieron al gobierno” Publicada el 17 de julio de 2012. Disponible en: <http://www.elfaro.net/es/201207/noticias/9145/>, última consulta el 7 de julio de 2013.

49 Ver nota periodística: “Secretario OEA visitará dos penales” Publicada el 10 de julio de 2012. Disponible en <http://elmundo.com.sv/secretario-oea-visitara-dos-penales>, última consulta el 7 de julio de 2013.

50 Ver nota periodística 2 Insulza a los pandilleros: Cuenten conmigo como garante del proceso” Publicada el 12 de julio de 2012. Disponible en: [http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota\\_completa.asp?idCat=47859&idArt=7073290](http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7073290), última consulta el 7 de julio de 2013.

51 Ver nota periodística: “Pandillas dicen que 900 mil salvadoreños habitan municipios propuestos como santuarios de paz” Publicada el 4 de diciembre de 2012. Disponible en: <http://www.elfaro.net/es/201212/noticias/10410/>, última consulta el 7 de julio de 2013.

52 Ver nota periodística: “Munguía Payes justifica haber sacado de máxima seguridad a líderes pandilleros” Publicada el 16 de marzo de 2012. Disponible en:

<http://www.elfaro.net/es/201203/noticias/7999>, última consulta el 7 de julio de 2013.

53 Ver nota periodística: “Iglesia Católica asegura que medió en un acuerdo de paz entre la MS-13 y el Barrio 18” Publicada el 20 de marzo de 2012. Disponible en: <http://www.elfaro.net/es/201203/noticias/8063/>, última consulta el 7 de julio de 2013.

54 Ver nota periodística: “Ministro de Seguridad dice que hacer pública la tregua entre pandillas, estorbó su estrategia” Publicada el 4 de Abril de 2012. Disponible en: <http://www.elfaro.net/es/201204/noticias/8201/>, última consulta el 7 de julio de 2013.

55 Ver nota periodística: “La nueva verdad sobre la tregua entre pandillas” publicada el 11 de septiembre de 2012. Disponible en: <http://www.salanegra.elfaro.net/es/201209/cronicas/9612/>, última consulta el 7 de julio de 2013.

educación, trabajo y seguridad ciudadana. Los primeros beneficiados con estos planes serán seis municipios declarados libres de violencia, conocidos como “municipios santuarios”; entre ellos Apopa, Quezaltepeque, Sonsonate, Ilopango, y Puerto de La Libertad.<sup>56</sup>

La información obtenida a través de los medios de comunicación puede revelar una pequeña parte de la intervención de las autoridades en el proceso de tregua entre las pandillas, sin embargo se corre el riesgo de que la discusión sobre los beneficios otorgados a sus representantes y las concesiones brindadas al interior de los centros penitenciarios, aleje el análisis de las obligaciones estatales pendientes en materia de seguridad. En ese sentido, esta Procuraduría ha manifestado en múltiples ocasiones la necesidad de crear un marco jurídico, institucional y presupuestario que proteja a todas las personas de cualquier atentado contra su integridad, su vida o su patrimonio.<sup>57</sup>

Y es que la seguridad ciudadana es concebida desde los derechos humanos como una situación donde las personas pueden vivir libres de las amenazas generadas por la violencia y el delito, a la vez que el Estado tiene las capacidades necesarias para garantizar y proteger los derechos humanos directamente comprometidos frente a las mismas<sup>58</sup>. En la práctica, también se refiere a la protección frente a todo tipo de violencia generada por cualquier persona y no sólo referida a grupos delincuenciales, sino a otros agentes, incluidos los estatales.

En ese sentido, las obligaciones del Estado en materia de seguridad pueden resumirse en tres grandes líneas: la adopción de medidas para prevenir la vulneración de derechos vinculados a la seguridad ciudadana<sup>59</sup>; la obligación de investigar y sancionar los hechos de violencia, así como el otorgamiento de medidas de reparación del daño para las víctimas y, finalmente, las obligaciones reforzadas para los grupos en situación de vulnerabilidad (mujeres, niñez y otros)<sup>60</sup>.

Todo ello, en el marco de una política integral que incorpore los estándares de derechos humanos, los principios de rendición de cuentas, participación y no discriminación.<sup>61</sup> En consecuencia, se requiere que dicha política demuestre su eficacia por medio de fuertes consensos políticos y amplios acuerdos sociales que busquen solucionar la demanda ciudadana de tranquilidad y paz social.<sup>62</sup>

Asimismo, es importante invertir de manera adecuada en los sistemas de información con la finalidad de generar datos confiables y válidos que permitan emprender acciones a mediano y largo plazo, de tal forma que se permita reorientar los enfoques y procesos en aras de garantizar la efectividad de las medidas emprendidas. Nada de esto puede ser posible si las acciones estatales no se encaminan hacia el fortalecimiento de un sistema integral y funcional que delimite las competencias institucionales y mejore la respuesta gubernamental ante la violencia y la criminalidad.

Lastimosamente, El Salvador sigue siendo un país que responde a la violencia con medidas reactivas. La situación de inseguridad llevó en el pasado a la aprobación y reforma de diferentes normativas relacionadas con el combate a la delincuencia<sup>63</sup>. Sin embargo, el problema de la violencia es complejo

56 Ver nota periodística: <http://www.laprensagrafica.com/Gobierno-destinara--33-3-mill-para-medidas-de-prevencion-de-violencia>, última consulta el 7 de julio de 2013.

57 PDDH. Balance situacional sobre los derechos civiles contenido en el Informe anual de Labores. Junio 2010- mayo 2011.

58 CIDH. “Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos” aprobado el 31 de diciembre de 2009.

59 Entre los que destacan el derecho a la vida, la integridad, la libertad y seguridad personal. El derecho a la protección judicial y al uso pacífico de los bienes, entre otros.

60 CIDH. Op cit.

61 Ibíd.

62 PNUD. Op cit.

63 Entre estas: la prórroga en la vigencia del Código Procesal Penal, la aprobación de la Ley de Intervención de las Telecomunicaciones; la reforma del art. 345 del Código Penal( agrupaciones ilícitas); la aprobación de la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y



y de múltiples causas, por lo cual no debe ser abordado solo desde el ámbito legislativo, sino que debe buscarse la implementación de otras medidas de carácter social que ataquen las causas que generan dicho fenómeno.

Asimismo, durante el presente año se ha continuado con las actividades de la Fuerza Armada en tareas de Seguridad en áreas de patrullaje conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC); seguridad en centros penitenciarios y en puntos fronterizos. Al respecto, la PDDH ha considerado que a pesar de que esta decisión es bien vista por la mayoría de la población, la misma debe estar acompañada de un análisis y evaluación sobre cuáles han sido los logros de la medida y, paralelamente, se necesita el refuerzo de las capacidades profesionales y logísticas de la PNC, la cual por mandato constitucional es la encargada de la seguridad pública.<sup>64</sup>

En definitiva, queda mucho camino por recorrer en el marco de garantizar condiciones reales de bienestar para la población salvadoreña y, en ese sentido, la tregua entre las pandillas no puede ni debe obviar el análisis de las obligaciones estatales en esta materia. Es preciso entonces, retomar un debate nacional que identifique los aciertos y desafíos que aún precisa la adopción de medidas necesarias que brinden la atención adecuada al fenómeno de la violencia.

### **iii. La Fiscalía General de la República y el funcionamiento del Centro de Intervención de las Telecomunicaciones.**

En atención a responder a las atribuciones conferidas en la Ley Especial de Intervención de las Telecomunicaciones (LEIT), en que confiere a esta institución la auditoria y fiscalización del Centro de Intervención de las Telecomunicaciones que es parte de la Fiscalía General de la República. Esta Procuraduría creó el Departamento de Fiscalización y Auditoria del Centro de Intervención de Telecomunicaciones, con el objetivo principal de “velar por el respeto y la garantía del derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones”, Considerando que la LEIT, en el artículo 30, establece la obligación del Fiscal General de la República para que en coordinación con el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, elaboren un protocolo de funcionamiento del Centro de Intervención en cuanto a la fiscalización periódica y auditoria del mismo. Es oportuno señalar que en este período la elaboración de ese protocolo, fue la principal prioridad en este tema, y en ese trabajo se han identificado varios puntos que deben ser donde más atención prioritaria:

- Recoger información, supervisar y evaluar los avances en la instalación del Centro Intervención de Telecomunicaciones.
- Un primer control de la medida de intervención, es a través de la verificación de la solicitud que se presente, a fin de determinar si se reúnen todos los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, el control de la solicitud y de las diligencias que lo acompañan, denominados control previo a la intervención
- Examinar los indicios que durante una investigación administrativa, se den los elementos para que su momento procesal oportuno serán prueba, y de esa forma poder acreditar la existencia de elementos constitutivos de delito y de participación delincuencia, en un hecho concreto de los delitos enumerados en el Art 5 LEIT.
- Evaluar los criterios con base en los que se proporcione información a las presuntas víctimas de violación al derecho a la intimidad y del secreto de las telecomunicaciones, teniendo en consideración que no se puede entorpecer la investigación, teniendo en cuenta es una herramienta que se empleará en casos de delitos graves.

Organizaciones de Naturaleza Criminal y la reforma al Código Penal, tipificando el delito de provisión de armas, municiones, explosivos y artículos similares a las maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal.

64 PDDH. Informe de Labores. Op cit.



- Debe de ponerse atención cuando la intervención recae en niños, niñas y adolescentes, ya que no se pueden exponer o divulgar datos imágenes o información que lesionen el honor o su reputación, por estar sujetos a un régimen especial Ley de protección de la Niñez y Adolescencia (Art 46 LEPINA) por lo que debe observarse lo dispuesto en la ley respectiva.
- El resguardo de los expedientes de protección y otros documentos relacionados, a cargo del Departamento de Fiscalización y Auditoría, debido a la reserva y confidencialidad de los casos; asimismo llevar un control de los libros de entrada de expedientes así como su propia codificación.
- Que debido al criterio de extrema confidencial, se tendría que crear instrucciones internas de lo que se dará o no a conocer a los usuarios que se avoquen a esta Procuraduría, identificando los límites al momento de dar la información del procedimiento, teniendo siempre en cuenta el plazo de la intervención para cuidarse de nunca vulnerar con la reserva y confidencialidad procesal que el caso amerite.
- El Departamento de Fiscalización y Auditoría del Centro de Intervención de las Telecomunicaciones (DFACIT), está incluido dentro de la estructura organizativa de la protección de derechos humanos, será independiente en lo funcional, pero en cuanto a su trabajo operativo bajo la coordinación de la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Civiles e Individuales (PADCI).

## **b) El marco legal y situación de los defensores de derechos humanos**

Respecto de la diferentes leyes que regulan las actividades de organizaciones defensoras de derechos humanos, en primer lugar se debe tomar en cuenta que no nos referimos solo a organizaciones que cuenten con prestigio y trayectoria, si no que el término defensores de derechos humanos, debe comprender a todas las organizaciones y personas, de diferente índole y extracto social que pueden dedicarse a la protección de un derecho humano en particular o de todos en su conjunto, por lo que para mejor concepción del término debe pensarse en un conjunto amplio de organizaciones como sindicatos, asociaciones de desarrollo comunal, fundaciones privadas, o incluso la mera reunión de personas que transitoriamente se reúnen con el fin exclusivo de la defensa de un derecho humano que está siendo vulnerado.

En segundo lugar, sobre las obtenciones de personería jurídica, esta Procuraduría debe señalar que existe cuando menos desconocimiento de parte de las entidades estatales encargadas del procedimiento de otorgamiento de personalidad jurídica, que la finalidad de algunas asociaciones por ejemplo las que buscan defender los derechos del colectivo LGBTI, y de las personas con VIH es lícita. En todo caso, la ley de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro emplea conceptos como: moral, orden público y buenas costumbres, conceptos amplios que pueden ser interpretados con un alto grado de discrecionalidad, aunque se debe reconocer como un paso positivo que las actuales funcionarios del Ministerio de Gobernación, han adoptado como medida efectuar consultas a la PDDH, pero al mismo tiempo es causa de preocupación que si estos conceptos no son definidos adecuadamente pueden generar arbitrariedad en cuanto a la comprensión que se le da a los términos “moral” “orden público” y “buenas costumbres” y que una administración diferente puede obviar el proceso de consulta y negar este reconocimiento a otras organizaciones con objetivos similares.

En tercer lugar, sobre el respeto a la libertad de expresión y de opinión de las personas en especial de los defensores de derechos humanos, esta Procuraduría reconoce y promueve la importancia de este derecho, no solo en su esfera personal de cada individuo, si no en su dimensión social y como factor necesario para la construcción de una verdadera sociedad democrática. Es en ese sentido se debe destacar que uno de los aspectos que causa más preocupación, son los riesgos que corren en nuestro país los defensores de derechos humanos, entre ellos, los trabajadores de los medios de comunicación, algunos de los cuales que han sufrido atentados contra sus vidas, amenazas o intimidaciones como

consecuencia de su trabajo<sup>65</sup>. En este sentido el marco de actuación de esta Procuraduría ha sido solicitar a las autoridades competentes que adopten medidas y acciones necesarias para el esclarecimiento de los delitos y que las amenazas no se conviertan en mensajes de temor e impunidad que afecten la seguridad de quienes trabajan en el periodismo.

En último lugar, no se puede dejar de recordar que en ciertos momentos históricos del país se ha intentado limitar el derecho de las personas y de los defensores de derechos humanos, a la protesta pública pacífica, a través de normativas, como las declaraciones de régimen excepción, durante el período de la guerra civil, a través de ordenanzas municipales<sup>66</sup>, o mediante legislación aprobada en materia penal. En ese sentido, la principal preocupación de esta Procuraduría, respecto de restricciones legales al trabajo de los defensores de derechos humanos, se centra en lo relativo a la criminalización de la protesta pública y el uso de la ley penal, especialmente la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, que a pesar de los señalamientos de esta institución fue utilizada en años pasados para tratar de disuadir manifestaciones y que aún no sido reformada.

### **c) El Estado de El Salvador ante la Justicia internacional. Caso El Mozote**

Es de suma relevancia para nuestro país que los hechos graves y de mayor connotación social por graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, tengan las debidas investigaciones, se cumpla con el derecho a la verdad, el acceso a la justicia, el proceso a los responsables y la sanción a los mismos. Pero ha sido un hecho demostrado continuamente que a nivel interno no ha sido posible alcanzarlo, es por ello que en algunos de los casos más representativos se buscó la justicia a nivel internacional. Dentro de ellos destaca la reciente sentencia en el caso de la Masacre de El Mozote.

Del 11 al 13 de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, en el marco de un operativo militar realizado por el Batallón Atlacatl, junto con otras dependencias militares, que dejó sin vida a la mayoría de los habitantes, -que se calculan en un millar-, del caserío El Mozote y lugares aledaños, del cantón la Guacamaya del municipio de Meanguera en el departamento de Morazán. Este hecho pasó a ser recordado por la comunidad nacional e internacional como paradigma de la barbarie que vivimos los salvadoreños y salvadoreñas. Es uno de los sucesos más oscuros y repudiables de nuestra historia, ocurrido en el marco del conflicto armado que padeció El Salvador desde antes de 1980 y que finalizó con la firma de los Acuerdos de Paz en enero de 1992.

La investigación que a nivel interno se inició por estos hechos, quedó paralizada con el sobreseimiento dictado el 27 de septiembre de 1993, usando como base la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, que a pesar de los señalamientos de esta Procuraduría y las sentencias a nivel internacional de organismos de protección de derechos humanos, continua vigente en nuestro país. En ese contexto, de enfrentarnos a uno de los hechos más graves cometidos contra población civil, y ante la situación de impunidad generada por la Ley de Amnistía y sostenida por la falta de acciones claras y decisivas por parte de la Fiscalía General de la República y el sistema judicial, es que la denuncia se hizo llegar a nivel internacional, pasando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro del proceso llevado por dicho organismo, esta Procuraduría participó con un documento donde se estableció la necesidad que exista reparación integral de las víctimas y proporcional al daño que fue causado, el cual debe incluir las distintas formas organizativas de la misma comunidad:

65 Algunos de los casos registrados en años recientes por esta Procuraduría son: CA-0040-2009 y CA-0025-2011, sobre las amenazas al personal de Radio Victoria, SS-0349-2011, por el homicidio del señor Alfredo Antonio Hurtado Nuñez, camarógrafo de Tecnovisión; SO-0122-2011, por el homicidio del señor José Nelson Chínque Hernández quien trabajaba en Radio Sky; SS-0066-2013, amenazas con arma de fuego a un equipo de periodista y camarógrafo de noticiero hechos (canal 12)

66 Sala de lo Constitucional, sentencia de inconstitucionalidad 4-94, del 13 de junio de 1995, en contra de la Ordenanza Reguladora de Marchas y Manifestaciones Celebradas en Calles, Avenidas y Aceras de la Ciudad de San Salvador.

«54. Además de las condiciones de precariedad y exclusión social en la que se encontraban estas poblaciones antes del conflicto, fueron revictimizadas con las estrategias militares que además de su aniquilamiento casi por completo, destruyeron viviendas, fuentes de trabajo y provocó el desplazamiento forzado. Es importante que se impulse una política de reparación integral y proporcional al daño causado, que incluya las propuestas de organizaciones sociales y movimientos de víctimas para lograr transformar sus realidades.»<sup>67</sup>

En este caso la Corte Interamericana condenó al Estado de El Salvador, por los hechos, señalando su responsabilidad internacional en las graves violaciones de derechos humanos cometidas, y ordenando en su fallo distintas medidas de reparación que van desde la obligación de investigar, procesar y sancionar a los responsables, hasta la necesidad de reparar y dignificar a las víctimas, entre las medidas de reparación ordenadas se encuentran:

«6. El Estado debe llevar a cabo un levantamiento de la información disponible sobre posibles sitios de inhumación o entierro a los cuales se deberá proteger para su preservación, a fin de que se inicien de manera sistemática y rigurosa, con los recursos humanos y económicos adecuados, las exhumaciones, identificación y, en su caso, entrega de los restos de las personas ejecutadas a sus familiares, en los términos de los párrafos 331 a 334 de la presente Sentencia.

7. El Estado debe implementar un programa de desarrollo a favor de las comunidades del caserío El Mozote, del cantón La Joya, de los caseríos Ranchería, Los Toriles y Jocote Amarillo, y del cantón Cerro Pando, en los términos de lo señalado en los párrafos 339 a 340 de la presente Sentencia.

8. El Estado debe garantizar las condiciones adecuadas a fin de que las víctimas desplazadas puedan retornar a sus comunidades de origen de manera permanente, si así lo desean, así como implementar un programa habitacional en las zonas afectadas por las masacres del presente caso, en los términos de lo señalado en los párrafos 345 y 346 de la presente Sentencia.

9. El Estado debe implementar un programa de atención y tratamiento integral de la salud física, psíquica y psicosocial con carácter permanente, en los términos de lo señalado en los párrafos 350 a 353 de la presente Sentencia.<sup>68</sup>»

En este sentido, debe considerarse que el cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es una misión que compete a todo el Estado, y todas las instituciones públicas, les compete facilitar, propiciar y colaborar en la medida de sus competencias en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por dicho tribunal internacional.

## **d) Libertad de expresión**

### **i. Protección de periodistas**

Sin lugar a dudas, tal como ya se mencionó un factor que a mi juicio representa un grave peligro para la libertad de expresión, son los atentados y las amenazas que han sufrido los periodistas y los demás trabajadores profesionales de la comunicación. A principios del presente año, dos mil trece, se tuvo conocimiento de dos hechos separados en los que se efectuaron amenazas a muerte en contra de

67 Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, *Amicus curiae* presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Masacres del Mozote y lugares aledaños, contra el Estado de El Salvador Caso No. 10.720, en el mes de abril de dos mil doce.

68 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El salvador. Sentencia del veinticinco de octubre de dos mil doce, sentencia de fondo, reparaciones y costas.

profesionales del periodismo<sup>69</sup>, ante estos hechos, de forma oficiosa exprese mi condena y rechazo, formulando llamados tanto al Fiscal General de la República, y al Director de la Policía Nacional Civil, instándolos a llegar a la verdad detrás de estos crímenes, encontrando a los autores, procesando y sancionando a los responsables.

De acuerdo a lo anterior, se observó la necesidad de contar con un marco jurídico adecuado para la protección de los periodistas y demás trabajadores de los medios de comunicación, no solo de las amenazas externas, sino también de las situaciones que inciden negativamente en el ejercicio de la profesión, cuando estos enfrentan malas condiciones laborales y de seguridad social,<sup>70</sup> dicho marco jurídico también debe garantizar el respeto de sus derechos a la libre asociación y sindicalización.

Esta Procuraduría, también considera que una legislación que proteja la libertad de prensa debe contar con el reconocimiento del derecho de los medios públicos, privados y comunitarios a la independencia, y que el ejercicio de esa facultad implica que cada medio elige cuales tema potenciar e investigar. De ninguna manera, debe entenderse que la independencia de los medios de comunicación sea en menoscabo de garantizar la veracidad y exactitud de la información que se presenta.

Asimismo, para garantizar la libertad de expresión y el ejercicio libre del periodismo debe eliminarse cualquier forma de censura de forma integral, para ello deben ofrecerse garantías de protección contra las amenazas externas, que son directas cuando entes censores pretenden controlar la información que se publica, o indirectas, cuando a través de otros medios, se aplican medidas que afectan el trabajo de los mismos, por ejemplo, eliminando la pauta publicitaria de todas las entidades del estado en un determinado medio para castigarlo. En este mismo sentido, también deben superarse aspectos de censura interna en contra de los periodistas, evitando que al presentar una nota ésta se modifique posteriormente sin consentimiento del autor, en especial cuando se sigue publicando con su nombre; o bien que se ejerzan presiones indebidas para que sea el mismo periodista quien modifique el contenido, estas son situaciones que en la práctica constituyen formas de censura dentro de los mismos medios de comunicación.

## **ii. Demanda de inconstitucionalidad contra el mecanismo de asignación de frecuencias**

A principios del presente año, se tuvo conocimiento que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, admitió la demanda de inconstitucionalidad en el proceso 65-2012, en contra de los artículos 81 inciso final, 82, 83, 84, 85 y 100 de la Ley de Telecomunicaciones, que establecen la subasta pública como el único mecanismo existente para la asignación de concesiones de frecuencias radioeléctricas, es decir, para la operación de la radio y de la televisión.

Para esta Procuraduría que la subasta pública sea el único mecanismo para asignar las concesiones de frecuencias radioeléctricas, sin duda, puede violentar los derechos a la igualdad y libertad de expresión, porque significa basar solo en el aspecto económico el otorgamiento de una concesión para el uso de un bien público de carácter limitado, lo cual favorece a las personas naturales o jurídicas con mayor poder adquisitivo, y contradice la posibilidad que medios de comunicación alternativos accedan a ellas, esto vendría a favorecer la concentración y afectar la pluralidad de los mismos; en ese sentido respaldo la inconstitucionalidad alegada por violentar los derechos humanos antes señalados.

69 Pronunciamiento del licenciado Oscar Humberto Luna, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, ante las amenazas en contra de la labor periodística. Emitido el 24 de enero de 2013

70 El Informe del Estado de la Libertad de Prensa en El Salvador, presentado por la Asociación de Periodistas de El Salvador APES, menciona que: “se evidencia la precariedad en las condiciones laborales y de seguridad social de algunos colegas periodistas, particularmente periodistas que trabajan en medios de comunicación en ciudades en el interior del país”. Puede consultarse en: <http://www.apes.org.sv/sitioapes/?p=57>, última consulta el 7 de julio de 2013.

### iii. El proceso de transición digital terrestre

Que en el mes de diciembre de dos mil doce, el gobierno a través de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), anunció el inicio del proceso transición digital terrestre, -también conocido como digitalización del espectro radioeléctrico-, que en un primer momento iniciará con las frecuencias de televisión<sup>71</sup>, y culminará en el año 2017 con el llamado “apagón analógico”.

En cuanto al proceso de la transición digital terrestre, esta Procuraduría considera oportuno que el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión; junto a la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa; la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA; y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos; adoptaron el tres de mayo de dos mil trece, una declaración conjunta denominada: Declaración Conjunta sobre Protección de la Libertad de Expresión y la Diversidad en la Transición Digital Terrestre<sup>72</sup>, que entre sus principios generales expone:

«b. Los Estados deberían asegurar que las decisiones sobre transición digital terrestre se adopten en un marco de transparencia y plena consulta, que permita escuchar los intereses de todos los actores relevantes. Para ello, una posibilidad es crear un foro integrado por múltiples actores interesados que se ocupe de supervisar el proceso de consulta.

c. Los Estados deberían asegurar que el proceso de transición digital terrestre se lleve a cabo de una manera planificada y estratégica, que reporte óptimos beneficios para el interés público, considerando las circunstancias locales. Esto puede incluir la adopción de decisiones que requieren buscar un punto de equilibrio entre aspectos de calidad (como la disponibilidad de televisión de alta definición) y cantidad (como el número de canales), según el grado de presión sobre el espectro.»

Al respecto esta Procuraduría tuvo conocimiento que en el mes de febrero del presente año, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS) y otras organizaciones de la sociedad civil, le solicitaron al Presidente de la República, la conformación de una Comisión Nacional para la Digitalización de Espectro Radioeléctrico. La comisión, a juicio de los solicitantes debería cumplir con tres características: ser representativa, que debía tener el más alto nivel político al ser conformada y juramentada por la Presidencia; y que el resultado del trabajo sean producir propuestas de ley y políticas públicas.

En tal sentido exprese mi preocupación, que el proceso que se inició en nuestro país, al no incluir en el debate a otros sectores de la comunicación y organizaciones sociales, y se realice solo bajo consideraciones comerciales, pudiera ir en detrimento de los derechos humanos, especialmente cuando no se utilicen como criterios orientadores de la actuación estatal los aspectos relativos a la libertad de expresión, la diversidad de medios de comunicación, el pluralismo de las opiniones e ideologías y la protección de los derechos de espectadores y oyentes.

71 “El trabajo por implementar la inclusión digital en El Salvador sigue avanzando”, puede consultarse en: <http://www.siget.gob.sv/index.php/novedades/noticias/1-noticias-ciudadano/1835-el-trabajo-por-implementar-la-inclusion-digital-en-el-salvador-sigue-avanzando>, última consulta el 7 de julio de 2013.

72 Ver nota periodística: <http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/WPFD/Joint-Declaration-foe-rapporteurs-2013-es.pdf>, última consulta el 7 de julio de 2013.



#### iv. Derecho de rectificación y respuesta

El artículo 6 inciso 5º de la Constitución establece que: «*Se reconoce el derecho de respuesta como una protección a los derechos y garantías fundamentales de la persona.*». No obstante, han transcurrido casi tres décadas desde su vigencia y tal disposición no ha tenido desarrollo en legislación secundaria.

El estado tiene la obligación tanto de proteger la libertad de expresión como de regular el derecho de rectificación o respuesta a las personas, y la mejor forma de garantizar adecuadamente este derecho, es volverlo exigible a través del marco jurídico adecuado que sea debidamente consensuado con diversos actores del área del derecho a la comunicación, garantizando de esta forma seguridad jurídica para los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, ya sean televisivos, radiales, escritos o que difunde sus contenidos por medio del uso de internet.

Esta Procuraduría tuvo conocimiento que una Comisión Ad Hoc, trabaja un proyecto de ley, por lo que al efecto se recomendó incorporar los siguientes aspectos mínimos que el proyecto de ley:

1- En primer lugar sería conveniente incluir una definición de los conceptos de rectificación y respuesta, para que a las personas les quede claro, cuando puede ejercitar su derecho en uno u otro sentido. A esto debe sumarse criterios mínimos para el ejercicio del derecho como: igualdad de las condiciones en los medios para la corrección de la inexactitud o emisión de la respuesta; un corto período de tiempo para que se publique o emita la rectificación o la respuesta; que se evite el uso de términos calumniosos o degradantes para la persona que este ejerciendo el derecho de rectificación o respuesta; y asegurar la gratuidad en la publicación de la rectificación o la respuesta.

2- En segundo lugar, esta Procuraduría sugirió la incorporación de una fase conciliatoria previa a la etapa judicial.

3- En tercer lugar, respecto de la fase judicial se debe considerar como primordial el criterio de acercamiento a las personas. Por ello, se consideró que los funcionarios judiciales más adecuados para dar cumplimiento a la ley, serían los jueces de paz de los municipios donde tiene su domicilio el medio de comunicación al cual se le va a solicitar la rectificación o la respuesta.

#### e) Situación de los Derechos Políticos en El Salvador, una evaluación desde las últimas elecciones legislativas y municipales del año dos mil doce<sup>73</sup>.

Las elecciones legislativas y municipales celebradas el once de marzo de 2012 se caracterizaron por una reforma legislativa sin precedentes después de la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, basada en la sustanciación de casos en materia electoral por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que promovieron la participación política y modificaciones en la forma de votar de manera más transparente y respetando la voluntad popular expresada en las urnas. Sin embargo, la Asamblea Legislativa impuso obstáculos legales que impidieron alcanzar la finalidad última de las mismas de ampliar la participación política.

Las innovaciones para estas elecciones fueron principalmente dos: primero, las candidaturas no partidarias, figura que se introdujo por primera vez en el país y que tuvo un tratamiento desigual respecto a las candidaturas partidarias ya que se les exigió rendir caución y cumplir con requisitos

<sup>73</sup> Este apartado corresponde a las conclusiones del Informe sobre la Situación de los Derechos Políticos en el marco de las Elecciones Legislativas y Municipales celebradas el 11 de marzo de 2012.



que no les eran exigidos a los segundos. La segunda innovación fue el voto por candidato, el cual buscó transparentar el proceso de votación y devolver la capacidad de elección de la ciudadanía. Estas medidas, sin embargo, gozaron de una regulación transitoria que no da certeza a la población sobre su continuidad para las siguientes elecciones.

Reconozco las medidas tomadas por el Tribunal Supremo Electoral que facilitaron la inscripción de jóvenes que por primera vez votarían, así como también la asignación de un subsidio y la ampliación de los horarios para la renovación del Documento Único de Identidad. A pesar de lo anterior, se observaron anomalías en el padrón electoral, el cual requiere de una depuración constante.

Señalo el esfuerzo notable del ente electoral en ampliar el voto residencial, el cual abarcó casi todo el territorio nacional para estas elecciones. Esto permitió que la población votara más cerca de su residencia y evitó que se formaran aglomeraciones. Además, ayudó en la disminución de casos de migración de votos y de la comisión de delitos de fraude electoral.

Veó con preocupación la baja participación electoral, reafirmando la crisis de representatividad que afecta a todo el sistema político en el país y que encuentra su origen en la exclusión de las mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad en la discusión de los asuntos públicos, en la ausencia de mecanismos adecuados para la toma de decisiones y en la falta de reformas orientadas a la transparencia, que implique en su conjunto, el aumento de la confianza ciudadana y la credibilidad en la institucionalidad electoral.

Advierto sobre la necesaria adopción de medidas que no sólo garanticen el derecho al voto, sino el derecho de ser elegido/a y participar de los asuntos públicos del país, creando mecanismos que fomenten la participación permanente de todos los actores sociales y políticos del país, así como también la regulación e implementación de formas de participación en organismos civiles que establezcan mayores niveles de democracia tales como cabildos abiertos, consultas públicas, comités de desarrollo local, sesiones públicas de los organismos legislativos o municipales, planes de trabajo y presupuesto con enfoque participativo en su discusión y elaboración, entre otros.

Señalo con preocupación que la propaganda electoral fuera de los periodos establecidos se ha convertido en una constante durante los procesos de elección, permitida por el Tribunal Supremo Electoral ante la falta de una regulación adecuada y la voluntad política necesaria para ejercer un control independiente de las actuaciones irregulares de los partidos políticos.

Valoro positivamente que la figura del observador electoral fue institucionalizada para las elecciones de 2012, provocando una masiva inscripción de organizaciones e instituciones nacionales e internacionales.

### *Medios de comunicación:*

Reconozco el clima de respeto a la libertad de expresión en el que desplegaron sus actividades los medios de comunicación, así como el interés por parte de ellos en abordar problemas estructurales y de coyuntura que afectan el bienestar de la población salvadoreña.

Señalo con preocupación el uso de imágenes y mensajes de ataques entre las personas candidatas y partidos políticos, sin que se priorizara la discusión y el contraste de ideas a través de géneros periodísticos tales como el debate y la entrevista.

Advierto que la insuficiencia de un marco jurídico electoral en materia de propaganda electoral favoreció en términos de acceso a cobertura y publicidad pagada a los partidos políticos mayoritarios

que cuentan con mayores recursos económicos, en perjuicio de los partidos políticos minoritarios y de candidaturas no partidarias, quienes tuvieron una incidencia casi nula en publicidad pagada. De esta manera, fueron evidentes los desequilibrios en la medición de espacios y tiempo asignado a favor de partidos políticos mayoritarios, tendencia que se mantuvo hasta finalizar el periodo electoral.

Se confirmó una marginada presencia de temas relacionados a sectores sociales en situación de vulnerabilidad, constituyéndose en un factor de desigualdad que reducen las posibilidades de estos sectores de ser conocidos y de poder acceder a cargos públicos.

### *Jornada electoral:*

Reconozco que a pesar de algunas irregularidades que generaron tardanza en el inicio de la jornada electoral, en general las juntas receptoras de voto cumplieron satisfactoriamente con las operaciones preliminares, garantizando que los comicios se desarrollaran de manera efectiva.

Señalo la necesidad de fortalecer los procesos de capacitación sobre los procedimientos electorales y en mejorar la planificación y organización electoral, con el fin de que exista mayor regulación del rol de los vigilantes y miembros de logística de los partidos que permanecen en los centros de votación, ya que con frecuencia buscan incidir en los votantes.

Valoro positivamente el empleo por primera vez de una página electrónica que puso a disposición el Tribunal Supremo Electoral que se actualizaba cada cierto tiempo para difundir los resultados provisionales electorales, permitiendo con ello que la población se mantuviera informada, a la vez que dotó de confiabilidad al proceso de transmisión de datos.

### *Fiscal Electoral*

El Observatorio Electoral constató la presencia de representantes del Fiscal Electoral en la mayoría de centros monitoreados. Sin embargo, no se tiene conocimiento que el ente electoral cuente con una regulación específica que determine claramente sus funciones, procedimientos y el alcance de sus actuaciones, incidiendo en que se continúen observando problemas como ausencias en algunos centros de votación; falta de acreditación; omisión en la atención de denuncias ciudadanas; falta de protagonismo en las discusiones en el escrutinio final; respeto al cumplimiento de disposiciones electorales; entre otros.

### *Policía Nacional Civil:*

El Observatorio Electoral constató la presencia de agentes policiales en casi todos los centros de votación observados, lo cual contribuyó a que las elecciones se desarrollaran en un ambiente de orden y tranquilidad.

Reconozco el accionar destacado en situaciones que ameritaron intervención policial. Sin embargo, también se observaron hechos que preocuparon como la negativa de agentes policiales de permitir el ingreso a observadores de la PDDH; la falta de coordinación entre JEM y la PNC para habilitar el ingreso de votantes; falta de acción policial en disturbios ocurridos por anulación de votos; ingreso de guardaespaldas de candidatos políticos que portaban armas; y quejas sobre los registros practicados en la entrada de los centros de votación.

## Partidos Políticos

Señalo con preocupación que los partidos políticos continuaron desplegando una campaña contraria a lo establecido para una sociedad democrática, lamentando los ataques recíprocos, mostrando hechos de violencia, con el único objetivo de denigrar la imagen de las figuras políticas en contienda, lo que hace incrementar aún más la intolerancia y la polarización política; además de fomentar la discriminación y la violencia de género, así como también la difusión de propuestas electorales sin contenido y contrarias a los derechos humanos.

## 1.2. DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES<sup>74</sup>



*El señor Procurador, licenciado Oscar Humberto Luna en una reunión de trabajo con autoridades del Ministerio de Salud y dirigentes sindicales.*

### a) Derecho a un nivel de vida adecuado

El análisis de la situación del derecho a un nivel de vida adecuado implica evaluar las acciones del Estado orientadas a generar condiciones de satisfacción de necesidades básicas que incidan en que la población pueda construir un proyecto de vida digno. En este sentido, al analizar el cumplimiento de este derecho durante el último año, se observa un escenario mixto, debido a que es evidente que el Estado salvadoreño ha realizado un mayor esfuerzo por atender algunas de las limitaciones que la población salvadoreña enfrenta en cuanto a ingresos, alimentación, salud y educación. No obstante, de forma general, se puede afirmar que las políticas gubernamentales implementadas en estas áreas no han sido diseñadas bajo un verdadero enfoque de derecho, y continúa prevaleciendo una lógica compensatoria y minimalista en la atención de las dificultades que afronta la población salvadoreña.

Exceptuando algunos programas específicos de carácter novedoso (como por ejemplo, el proyecto Ciudad Mujer), la implementación del Sistema de Protección Social Universal (SPSU), el cual constituye la base

<sup>74</sup> Elaborado por la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y editado por la Unidad de la Realidad Nacional.

de la política social de la administración actual, se ha concentrado en dar continuidad a programas de transferencias monetarias iniciados en la administración anterior, ampliando su cobertura e incluyendo a otros grupos no considerados anteriormente, pero manteniendo un esquema focalizado que no cuenta con mecanismos de reclamo idóneos para que las familias que están igualmente necesitadas de este apoyo pero que no lo reciben, puedan presentar sus demandas.

Más allá de eso, la debilidad e insuficiencia de los avances logrados hasta el momento con la creación del SPSU quedó evidenciada entre 2010 y 2011, cuando de acuerdo a los resultados de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), el porcentaje de hogares en pobreza aumentó del 36.5% al 40.6%<sup>75</sup>, principalmente debido a los incrementos en los precios de los alimentos y las afectaciones sufridas a raíz de la depresión tropical 12E. Este incremento representó un retroceso importante, dado que incluso superó la cifra registrada en 2008 (40.0%), cuando se evidenció todo el impacto de la crisis internacional en el país.

De forma desagregada, cabe señalar que para 2011 la pobreza relativa aumentó en tres puntos porcentuales, pasando del 25.3% al 28.3%, mientras que la pobreza extrema tuvo un incremento de un punto porcentual, subiendo del 11.2% al 12.2%<sup>76</sup>. Por un lado, esto indica que los programas de protección social sí están ejerciendo cierto grado de protección para los grupos en peor situación de pobreza. No obstante, también evidencia que existe una franja poblacional que, dadas las restrictivas condiciones de focalización de los programas sociales, no recibe sus beneficios, pese a afrontar carencias importantes. Esto los sitúa en una situación de alta vulnerabilidad ante constantes e inminentes amenazas como desastres, aumentos en el precio de los alimentos, desempleo o enfermedades crónicas, entre otras; por lo que, al verse afectados por uno o más de estos incidentes, fácilmente se ven arrojados a la pobreza.

Afortunadamente, en 2012 se registró un descenso en los niveles de pobreza, precisamente debido a la disminución de los precios de los alimentos. De acuerdo a los resultados de la EHPM 2012, el porcentaje total de hogares en pobreza disminuyó del 40.6% al 34.5%. Tanto en el nivel de pobreza extrema como en el de pobreza relativa se observó un descenso de alrededor de tres puntos porcentuales, ubicándose en 8.9% y 25.6% respectivamente<sup>77</sup> (Tabla 1).

**Tabla 1**  
**Niveles de pobreza 2011-2012 según área geográfica**

	Pobreza total		Pobreza relativa		Pobreza extrema	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Nacional	40.55%	34.5%	28.33%	25.6%	12.23%	8.9%
Urbana	35.44%	29.9%	26.51%	23.4%	8.93%	6.5%
Rural	50.17%	43.3%	31.74%	29.8%	18.43%	13.6%

Fuente: Elaboración propia con base en DIGESTYC (2013b). Resultados de la Encuesta de hogares de propósitos múltiples 2012. Documento recuperado de <http://www.transparenciaactiva.gob.sv/wp-content/uploads/2013/05/PRESENTACION.pdf>

75 Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) (2012). *Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2011*. Documento recuperado de <http://www.digestyc.gob.sv/index.php/temas/des/ehpm/publicaciones-ehpm.html?download=380%3Apublicacion-ehpm-2011>

76 Ibid.

77 DIGESTYC (2013a). *Encuesta de hogares de propósitos múltiples 2012*. Documento recuperado de <http://www.digestyc.gob.sv/index.php/temas/des/ehpm/publicaciones-ehpm.html?download=463%3Apublicacion-ehpm-2012>

Con todo, estos resultados aún se encuentran muy lejanos a lo planteado en las metas del Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014 del Gobierno de El Salvador (GOES), entre las cuales se preveía reducir la pobreza entre 12 y 15 puntos porcentuales tanto en el área rural como el área urbana<sup>78</sup>. Si se toma como referencia el nivel de pobreza registrado en 2008, hasta la fecha se habría logrado una reducción del 6.1%, mientras que sí se toma el nivel de 2009, únicamente sería del 3.3%.

Adicionalmente, resulta sumamente preocupante para esta Procuraduría que las cifras oficiales continúan registrando una enorme disparidad entre los niveles de pobreza en el área rural (50.17%) y en el área urbana (35.44%)<sup>79</sup>. Aunado a esto, se ha observado que los avances en la reducción de la pobreza en el área rural no difieren en gran medida de los logros en el área urbana. Si bien es cierto, entre 2011 y 2012, la pobreza extrema en el área rural se redujo en 4.83 puntos porcentuales, mientras que en el área urbana sólo se redujo en 2.43%; la pobreza relativa tuvo una reducción de 3.11 puntos porcentuales en el área urbana, mientras que en el área rural solamente se observa una reducción de 1.94% (Tabla 1).

Esto indica que, pese a los esfuerzos realizados, hace falta un mayor esfuerzo por atender de forma específica la pobreza rural, ya que para lograr eliminar la enorme discrepancia que existe entre las condiciones de vida en el área rural y urbana, los avances tendrían que ser mucho más acelerados en la primera. No obstante, vale la pena señalar que, en realidad, entre 2011 y 2012 el ingreso promedio por hogar aumentó en \$20.01 en el área urbana, mientras que solamente \$16.96 en el área rural (Tabla 2).

**Tabla 2**  
***Ingresos promedio por hogar 2011-2012 según área geográfica***

	Ingreso promedio por hogar	
	2011	2012
Nacional	\$486.67	\$506.91
Urbana	\$574.46	\$594.47
Rural	\$321.59	\$338.55

Fuente: Elaboración propia con base en DIGESTYC (2013b). Resultados de la Encuesta., Op. cit.

En todo caso, es importante destacar que, aún con todas las dificultades señaladas, en este periodo sí se ha observado un avance significativo en la reducción de la desigualdad en la distribución del ingreso (Tabla 3). De acuerdo a las cifras oficiales, el coeficiente de Gini ha descendido del 0.482 al 0.410 entre 2009 y 2012 (Tabla 4).

Por otra parte, en el marco de la generación de condiciones de vida adecuadas, también se observa que el Estado salvadoreño continúa teniendo retos importantes en cuanto a brindar servicios de agua por cañería y energía eléctrica para toda la población. Por ejemplo, a nivel nacional, las cifras oficiales registran que el porcentaje de viviendas con tenencia de agua por cañería se ubica en 75.9%. En el área urbana este porcentaje asciende al 85.9%, mientras que en el área rural únicamente alcanza al 56.7%<sup>80</sup>.

Con respecto a la cobertura de energía eléctrica, los avances son mayores, aunque todavía presentan una amplia brecha por cubrir. En total, solamente el 83.4% de los hogares tienen servicio de alumbrado eléctrico propio. En el área urbana, el 90.7% cuenta con este servicio, mientras que en el área rural solamente lo tiene el 69.5%.

78 GOES (2010). *Plan quinquenal de desarrollo 2010-2014*. San Salvador: GOES. p. 56

79 DIGESTYC (2013a). *Encuesta de hogares...*, Op. cit.

80 DIGESTYC (2013a). *Encuesta de hogares...*, Op. cit.



**Tabla 3**  
**Distribución del ingreso por deciles 2009-2012**

Decil	Porcentaje de ingreso			
	2009	2010	2011	2012
1	1.66	1.76	2.02	3.48
2	3.03	3.18	3.44	4.83
3	4.05	4.26	4.47	5.70
4	5.17	5.46	5.59	6.77
5	6.41	6.78	6.79	7.59
6	7.79	8.26	8.19	8.49
7	9.51	9.97	9.93	9.88
8	11.97	12.50	12.33	11.37
9	16.23	16.65	16.40	24.64
10	34.18	31.18	30.84	27.26

Fuente: Adaptado de DIGESTYC (2013b). Resultados de la Encuesta., Op. cit.

**Tabla 4**  
**Coeficiente de Gini 2009-2012**

Coeficiente de Gini			
2009	2010	2011	2012
0.482	0.457	0.441	0.410

Fuente: Elaboración propia con base en DIGESTYC (2013a). Encuesta de hogares..., Op. cit.

Vale la pena señalar que el contexto observado en los últimos años ha estado marcado por el bajo crecimiento económico que ha presentado el país en los últimos años, sin que hasta el momento se vislumbre un cambio significativo al respecto. En 2012 la economía salvadoreña creció apenas 1.6%<sup>81</sup>, incluso menos de lo registrado en 2011 (2.0%), situándose nuevamente como uno de los países de América Latina con menor crecimiento económico<sup>82</sup>. Aunado a esto, las perspectivas para los próximos años no son muy alentadoras, ya que, aunque con leves variaciones, tanto las cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI), como las de Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyectan un bajo crecimiento económico para el país (1.6% y 2.0% respectivamente) (Tabla 5). Todo esto pone en evidencia que la meta planteada por la administración gubernamental 2009-2014 de “lograr una tasa promedio de crecimiento real del Producto Interno Bruto del 4.0% al final del período”<sup>83</sup> no será cumplida.

**Tabla 5**  
**Tasa de crecimiento del PIB (a precios constantes de 1990)**

2008	2009	2010	2011	2012	2013 (p)	2014 (p)
1.3	-3.1	1.4	2.0	1.6	1.6/2.0	1.6

p: proyección.

Fuente: Elaboración propia con base en cifras de BCR (2013), FMI (2013) y CEPAL (2013)<sup>84</sup>.

81 BCR (2013). *Indicadores económicos 2008-2012*. Documento recuperado de <http://www.bcr.gob.sv/bcrsite/uploaded/content/category/2017462326.pdf>

82 CEPAL (2013). *Balance económico actualizado de América Latina y el Caribe 2012. Abril de 2013*. Documento recuperado de <http://www.cepal.org/publicaciones/xml/3/49713/Balancedeconomicoactualizado2012.pdf>

83 GOES (2010). *Plan quinquenal...* Op. cit. p. 56

84 BCR (2013). *Indicadores económicos 2008-2012...*, Op. cit. FMI (2013). *Perspectivas económicas...*, Op. cit. CEPAL (2013). *Balance económico...*, Op. cit.



Para esta Procuraduría es claro que aunque el crecimiento económico no necesariamente implica desarrollo, mientras no se atienda de forma adecuada la problemática de estancamiento económico que atraviesa el país, difícilmente se podrá lograr la transformación estructural que se necesita para mejorar significativamente las condiciones de vida de la población. En este sentido, la mayoría de diagnósticos que se han realizado sobre las causas del bajo crecimiento económico, no alcanzan a explicar el fenómeno en una forma integral.

En la mayoría de ocasiones, el bajo crecimiento económico del país se ha atribuido por un lado a factores como la baja productividad, el impacto de desastres y a los altos niveles de criminalidad; o bien a la falta de seguridad jurídica para la inversión privada, falta de incentivos para las empresas, gastos desmedidos del gobierno, excesiva burocracia, y a los conflictos entre el gobierno y el sector privado, entre otros. Aunque no cabe duda de que todos estos factores juegan un papel importante en el crecimiento económico, es necesario enfatizar que la situación del país en torno a varios de estos aspectos no difiere mucho de otros países de Centroamérica como Guatemala, Honduras o Nicaragua, los cuales presentan un mayor crecimiento económico que el de El Salvador.

Añadido a esto, la atribución del bajo crecimiento a factores coyunturales como conflictos entre el gobierno y el sector privado, o incluso a conflictos entre distintos órganos del Estado, no son útiles para explicar el hecho de que el bajo crecimiento económico del país haya sido una constante desde hace varias décadas, exceptuando algunos intervalos cortos como la primera mitad de los años noventa. Según datos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), el crecimiento económico promedio de Centroamérica, entre 1971 y 2010, fue de 3.2%, siendo El Salvador, con un crecimiento promedio de 2.1%, el segundo país que menos ha crecido en todo ese periodo. Únicamente Nicaragua reporta un crecimiento menor que El Salvador (1.3%)<sup>85</sup> (Tabla 6).

**Tabla 6**  
**Tasas de crecimiento económico promedio por décadas (1971 – 2010)**  
**(Países centroamericanos)**

	1971-1980	1981-1990	1991-2000	2001-2010	1971-2010
Costa Rica	5.6	2.4	5.2	4.2	4.4
El Salvador	2.3	0.4	4.6	1.9	2.1
Guatemala	5.7	0.9	4.1	3.3	3.5
Honduras	5.4	2.4	3.3	4.1	3.8
Nicaragua	0.3	-1.4	3.4	2.9	1.3
Panamá	5.5	1.4	5.1	6.3	4.5
<b>Promedio</b>	<b>4.4</b>	<b>0.6</b>	<b>4.4</b>	<b>3.8</b>	<b>3.2</b>

Fuente: ICEFI (2012). La política fiscal de Centroamérica en tiempos de crisis. Guatemala: Autor. p 29.

Todo esto obliga a orientar el análisis sobre causas del bajo crecimiento del país a las características fundamentales del modelo de desarrollo que ha prevalecido durante las últimas décadas. Y es que tal y como lo ha afirmado recientemente el ex director del BCR, Carlos Acevedo, la administración actual no ha generado cambios estructurales en el modelo económico neoliberal implementado desde finales de los años ochenta<sup>86</sup>. Pese a que se han implementado algunas medidas que contravienen a la

<sup>85</sup> ICEFI (2012). *La política fiscal de Centroamérica en tiempos de crisis*. Guatemala: Autor.

<sup>86</sup> Flores, R. (2013, 10 de abril). "El gobierno no cambió el modelo". *ContraPunto*. Documento recuperado de <http://www.contrapunto.com.sv/coyuntura/el-gobierno-no-cambio-el-modelo>

doctrina neoliberal, hasta la fecha no se han alterado los pilares del modelo, tales como los procesos de privatización, la reforma tributaria regresiva, la apertura comercial indiscriminada, la desregulación y la reducción del Estado.

Esto ha generado que la combinación entre una alta concentración de riqueza y la estrechez del mercado interno, permanezca como una de las principales barreras para el aumento de la inversión, tanto privada como pública, colocando al país en un ciclo vicioso caracterizado por el bajo crecimiento económico, estancamiento en la generación de empleo, bajos salarios, debilidad de las finanzas públicas y baja inversión social.

En este contexto, el sector privado salvadoreño ha privilegiado la inversión en otros países centroamericanos, fundamentalmente en el sector servicios. En consecuencia, hasta el momento no se ha podido incrementar de forma significativa la inversión en sectores estratégicos como la industria y la agricultura, por lo que la mayor parte del crecimiento continúa estando basado en el consumo financiado por la remesas. A la vez, el gobierno salvadoreño, pese a haber logrado aumentos en la recaudación, continúa estando enormemente limitado por la fragilidad de las finanzas públicas, como para poder efectuar una fuerte inversión pública que detone el crecimiento económico<sup>87</sup>.

Es importante reconocer que la administración actual ha realizado esfuerzos por incrementar la recaudación y ha aumentado levemente la participación de los impuestos directos en la carga tributaria. Esto ha posibilitado que se incremente la inversión en áreas como salud, educación y protección social. No obstante, es evidente que las medidas implementadas por el gobierno hasta la fecha, son insuficientes para sentar las bases de la transformación estructural que el país requiere.

La construcción de un sistema tributario progresivo y la introducción de mejoras en el control de la evasión, la elusión fiscal y el contrabando, continúan siendo retos importantes para poder fortalecer la inversión pública y dinamizar el mercado interno. Lastimosamente, la administración actual no ha colocado estas medidas como prioridades, y más bien se ha decantado por privilegiar medidas que representan una continuidad del modelo neoliberal, tales como la promoción de los socios público-privados, la inversión en turismo a través FOMILENIO II, y una mayor apertura comercial a través del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (AdA), entre otras<sup>88</sup>.

En síntesis, se puede afirmar que, en el marco de sus posibilidades, en el último año el gobierno ha continuado realizando esfuerzos por compensar las dificultades que genera el modelo económico para una gran parte de la población. No obstante, hasta el momento, las políticas públicas implementadas no han sido diseñadas conforme a una perspectiva de derecho y, adicionalmente, la estrategia gubernamental adoptada no ha podido sentar las bases para una lograr una verdadera transformación hacia un nuevo modelo de desarrollo inclusivo<sup>89</sup>.

87 En este sentido resulta actual la observación realizada por Rodrik, Hausman y Velasco en 2005, cuando afirmaron que no se podía argumentar que el bajo crecimiento en el país se debía a una tributación excesiva, sino que más bien podría ser al contrario: "puede que la recaudación fiscal sea tan baja que el gobierno carece de los recursos necesarios para proporcionar un suministro adecuado de los bienes públicos que se necesitan para hacer que la actividad económica sea productiva" (Rodrik, D. [2011]. *Una economía, muchas recetas. La globalización, las instituciones y el crecimiento económico*. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica. p. 116).

88 Transparencia Activa (2013, 3 de junio). *Discurso del Presidente Mauricio Funes a 4 años de gestión*. Documento recuperado de <http://www.transparenciaactiva.gob.sv/discursos-del-presidente-mauricio-funes-a-4-anos-de-gestion/>; Flores, R. (2013, 8 de abril). Ley de APP, prioridad número uno del GOES: Segovia. *ContraPunto*. Documento recuperado de <http://www.contrapunto.com.sv/coyuntura/ley-de-app-prioridad-numero-uno-del-goes-segovia>; Presidencia de la República (2013, 23 de enero). *La prioridad de la STP es la aprobación de las leyes para incentivar la inversión*. Documento recuperado de <http://www.presidencia.gob.sv/index.php/novedades/noticias/item/3309-la-prioridad-de-la-stp-es-la-aprobacion-de-las-leyes-para-incentivar-la-inversion>; Transparencia Activa (2013, 25 de mayo de 2013). *Presidente Funes expresa satisfacción por consenso político en torno a la Ley de socios públicos privados*. Documento recuperado de <http://www.transparenciaactiva.gob.sv/presidente-funes-expresa-satisfaccion-por-consenso-politico-en-torno-a-la-ley-de-socios-publicos-privados/>; Transparencia activa (2012, 17 de noviembre). *Presentan principales estrategias del país a empresarios españoles*. Documento recuperado de <http://www.transparenciaactiva.gob.sv/presentan-principales-estrategias-del-pais-a-empresarios-espanoles/>; Transparencia activa (2013, 30 de abril). *Presidente llama a construir alianza para el crecimiento*. Documento recuperado de <http://www.transparenciaactiva.gob.sv/presidente-llama-a-construir-alianza-para-el-crecimiento/>

89 PDDH (2012). *Tercer Informe sobre el Estado del Derecho a una Alimentación Adecuada*. San Salvador: Autor.

## b) Derecho a una alimentación adecuada

En los últimos años, el derecho a una alimentación adecuada ha ido ganando un mayor reconocimiento en el país y poco a poco ha ido colocándose como un tema importante en la agenda nacional. Muestra de ello son los avances logrados con la aprobación de la reforma constitucional que reconoce el derecho a una alimentación adecuada (en abril de 2012)<sup>90</sup> y el reciente inicio de la discusión de una Ley de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional dentro de la Comisión Agropecuaria de la Asamblea Legislativa.

No obstante, pese a las reiteradas peticiones de organizaciones sociales y esta Procuraduría, hasta el momento la reforma constitucional no ha sido ratificada. El 29 de abril de 2013, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales emitió un dictamen favorable para la ratificación de la misma<sup>91</sup>, el cual fue sometido a discusión durante la plenaria del 3 de mayo de 2013. Lastimosamente, la ratificación de la reforma únicamente obtuvo 47 votos a favor, de los 56 necesarios para su incorporación definitiva en el texto constitucional<sup>92</sup>.

A juicio de esta Procuraduría, con este hecho se perdió una invaluable oportunidad para poder avanzar en la construcción de garantías para el derecho a una alimentación adecuada, y por ende para fortalecer la lucha contra la pobreza, el hambre y la desnutrición. Más allá de eso, los argumentos esgrimidos para no votar a favor de la ratificación de esta reforma constitucional no son convincentes y reflejan muchos malentendidos sobre lo que significa el reconocimiento del derecho a una alimentación adecuada. Recientemente, esta Procuraduría sostuvo una reunión con la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para aclarar varios aspectos referentes a las implicaciones de la reforma constitucional e impulsar su ratificación<sup>93</sup>, esperando que antes de que finalice el año se pueda retomar la discusión sobre la misma.

Al contrario, durante este último año sí se han observado importantes avances en la elaboración de una Ley de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional. Conviene destacar como muy positiva la decisión de la Comisión Agropecuaria de conformar un comité técnico interinstitucional, con participación de distintas organizaciones sociales y esta Procuraduría, para elaborar el proyecto de ley que sintetice las diferentes propuestas que la Comisión ha recibido en torno a este tema. No cabe duda que este es un logro sumamente importante, por lo que será necesario que la Asamblea Legislativa otorgue prioridad a este tema para que el país pueda contar lo más pronto posible con una ley secundaria que desarrolle el contenido del derecho a la alimentación y que armonice la dispersa legislación que ya existe y que de alguna forma se relaciona a este derecho.

90 El 19 de abril de 2012, la Legislatura 2009 – 2012 de la Honorable Asamblea Legislativa, mediante el acuerdo de Reformas Constitucionales No. 3, aprobó una reforma constitucional en la que se adicionaron los incisos dos y tres al artículo 69 de la Constitución de la República, con disposiciones orientadas a la protección y garantía del derecho a una alimentación adecuada y el derecho al agua, atendiendo el llamado de la sociedad civil y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). En el primer caso, expresamente se estipula que “toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada. Es obligación del Estado crear una política de seguridad alimentaria y nutricional para todos los habitantes. Una ley regulará esta materia”.

91 Ochoa, I. (2013, 29 de abril). *Dictamen Favorable para ratificar reforma constitucional que reconoce Derecho a la Alimentación y al Agua*. Documento recuperado de <http://www.asamblea.gob.sv/noticias/archivo-de-noticias/dictamen-favorable-para-ratificar-reforma-constitucional-que-reconoce-derecho-a-la-alimentacion-y-al-agua>

92 Chavarría, R. (2013, 3 de mayo). ARENA pide priorizar otras reformas antes de art. 69 sobre agua y alimentación. *La Prensa Gráfica*. Documento recuperado de <http://www.laprensagrafica.com/ARENA-pide-priorizar-otras-reformas-antes-de-art-69-sobre-agua-y-alimentacion>; Menjivar, V. & Durán, A. (2013, 4 de mayo). Frenan reformas a la carta magna. *La Prensa Gráfica*. Documento recuperado de [http://www.laprensagrafica.com/frenan-reformas-a-la-carta-magna-;](http://www.laprensagrafica.com/frenan-reformas-a-la-carta-magna-) Sorto, A. (2013, 4 de mayo). ARENA frustra ratificación de reforma que asegura el derecho al agua y a la alimentación. *Diario CoLatino*, Documento recuperado de <http://www.diariocolatino.com/es/20130504/nacionales/115383/ARENA-frustra-ratificaci%C3%B3n-de-reforma-que-asegura%C3%ADa-el-derecho-al-agua-y-a-la-alimentaci%C3%B3n.htm>

93 *Opinión del Señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos*, licenciado Oscar Humberto Luna: Principales aspectos que hacen necesaria la ratificación de la reforma al artículo 69 de la Constitución de la República relativa a los derechos a la alimentación adecuada y al agua. Expuesta en reunión sostenida con la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Honorable Asamblea Legislativa, el día 10 de junio de 2013.

Por su parte, el Órgano Ejecutivo ha concentrado su labor en torno a este derecho en la implementación y ampliación de programas de alimentación escolar, y en el impulso de la agricultura mediante el Plan de Agricultura Familiar. De esta forma, la producción agrícola ha ido retomando cierta importancia en la agenda nacional, promoviendo aumentos en la producción. Asimismo, se han desarrollado importantes esfuerzos por favorecer la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, y en el acceso a recursos como el crédito, formación técnica e insumos agrícolas.

Ha sido muy positivo que la iniciativa principal del gobierno en materia agrícola, el Plan de Agricultura Familiar (PAF), en su Programa de Abastecimiento Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (PAN), se concentre en brindar apoyo a pequeños productores y pequeñas productoras de alimentos. Aunque existen importantes componentes del PAF que deben mejorarse (por ejemplo, en cuanto a equidad de género), y otros que deberían suprimirse (principalmente lo referente a la promoción de la producción de agrocombustibles)<sup>94</sup>, no cabe duda que el sector elegido para el PAN es al que debe dirigirse la inversión y el apoyo estatal. Atender a este grupo de pequeñas productoras y pequeños productores se vuelve especialmente relevante dado que en el sector agropecuario salvadoreño predomina la agricultura familiar<sup>95</sup>.

De cualquier forma, cabe recalcar que esta apuesta únicamente representará un avance real en tanto exista un verdadero compromiso a largo plazo por promover un modelo de agricultura diferente a la agricultura a gran escala, en la que por lo general no se encuentran representadas las mujeres, y además tiende a dejar una importante huella ecológica<sup>96</sup>. Es por ello que el enfoque en la agricultura a pequeña escala será provechoso en la medida en que se utilice también como plataforma para la implementación generalizada de modelos agroecológicos y que establezca como una prioridad la reducción de las disparidades de género en el acceso a los recursos productivos.

Un apoyo a la agricultura familiar de subsistencia que contenga estas características puede servir para dar un impulso novedoso y diferente al crecimiento de la economía nacional, contribuiría a la sostenibilidad ambiental, y además reduciría las brechas de género en el área rural, la pobreza y la dependencia alimentaria. Así lo ha reconocido Oxfam<sup>97</sup> al afirmar:

Debido a que la vulnerabilidad, la pobreza y el hambre se concentran entre las personas pobres que viven en el medio rural, invertir en la pequeña agricultura fortalecerá la resiliencia y aumentará los ingresos y la disponibilidad de alimentos en los lugares donde el hambre es mayor, sobre todo si las inversiones se hacen teniendo en cuenta las desigualdades de género. Además, la historia demuestra que la inversión en agricultura ha proporcionado una “chispa de crecimiento” clave para el despegue de las economías en desarrollo más exitosas.

Por otro lado, para esta Procuraduría es muy preocupante que a pesar de lo importante que resulta la agricultura para el desarrollo del país, no se han desarrollado esfuerzos verdaderos por establecer un marco de protección especial para la fuerza laboral de este sector, y más bien se mantienen las precarias condiciones en las que se desempeñan. Los bajos salarios, la carencia de seguridad social, y el incumplimiento de los derechos laborales<sup>98</sup>, constituyen algunos de los principales obstáculos para que este sector acceda a un nivel de vida adecuado.

94 Para un mayor detalle se recomienda ver: PDDH (2012). *Tercer informe...* Op. cit.

95 PDDH (2012). *Tercer informe...* Op. cit.

96 Oxfam Internacional (2011). *Cultivar un futuro mejor. Justicia alimentaria en un mundo con recursos limitados*. Oxford: Autor.

97 *Ibid.* p. 53

98 Sauma, P. (2012). Caso de El Salvador. En F. Soto & E. Klein, *Políticas de mercado de trabajo y pobreza rural en América Latina. Tomo I* (pp. 227 – 263). Roma: FAO.

La generación de empleos de acuerdo a los criterios de trabajo decente es una de las principales deudas con el sector agropecuario, y hasta el momento no se observan iniciativas por reducir la exclusión bajo la que se desenvuelve. No obstante, la única forma de renovar el interés de las nuevas generaciones en las oportunidades laborales dentro de este sector, será establecer mejores condiciones de trabajo, en concordancia con los beneficios que se obtienen en otras áreas de actividad como la industria, el comercio y los servicios. Debe aclararse que el incremento en la producción agrícola o los aumentos de precios de los alimentos, no necesariamente reducen la pobreza rural<sup>99</sup>. En consecuencia, las iniciativas de reactivación económica en este sector deben complementarse con una política social diseñada específicamente para reducir la desigualdad y la pobreza.

Sobre este punto conviene recalcar que hasta el momento, los programas de combate a la pobreza se han concentrado fundamentalmente en el aspecto económico, pero se ha hecho menos énfasis en lo que representa la pobreza en términos de exclusión de las oportunidades laborales, educativas, o en cuanto a la utilización bienes y servicios con los que sí cuenta el resto de la población. Por tanto, para combatir la pobreza rural, el PAF debería complementarse con una estrategia de desarrollo rural más amplia, que atienda de forma integral las condiciones de vida de la población de esta zona y las limitaciones que enfrentan para acceder a los recursos productivos. Para ello, es absolutamente necesario elevar la inversión destinada al interior del país y emprender esfuerzos para resolver las problemáticas estructurales que han generado la pobreza y la exclusión de la población rural.

Aunado a esto, para la PDDH también resulta preocupante que aunque el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN) ya cuenta con un Plan Estratégico para implementar la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2015, aún no recibe los recursos presupuestarios necesarios para afrontar el rol protagónico que se le ha asignado. En este sentido, la PDDH ha realizado diferentes llamados al Órgano Ejecutivo para que establezca el derecho a la alimentación como una prioridad, dotando al CONASAN de un presupuesto adecuado y fortaleciéndolo para que se posicione como un verdadero ente rector en esta materia<sup>100</sup>.

Esto es especialmente importante porque, a pesar de que desde agosto 2011 ha existido una tendencia a la baja en el costo de la canasta básica alimentaria, los precios de los alimentos continúan altos (Gráfico 1), y el cumplimiento del derecho a una alimentación adecuada se encuentra demasiado sujeto a los vaivenes del mercado internacional. De cualquier forma, sí es necesario destacar que entre mediados de 2011 y mayo de 2013, se presentan reducciones notables en los costos de los productos básicos para la alimentación. Por ejemplo, en 2011 el costo promedio de la canasta básica alimenticia urbana fue de \$183.43 y el de la rural fue de \$144.36. En lo que va de 2013, el costo promedio de la primera ha disminuido hasta situarse en \$174.33, mientras que el de la segunda ha bajado hasta \$126.19.

En definitiva, pese a los importantes logros de la administración actual en materia del derecho a la alimentación y agricultura, a juicio de esta Procuraduría, la principal debilidad de las políticas públicas implementadas hasta el momento, es que no atienden los factores estructurales de la inseguridad alimentaria. Hasta el momento no se observa un incremento significativo en la inversión en la agricultura, ni se han planteado acciones para dar respuesta a las problemáticas de tenencia de la tierra.

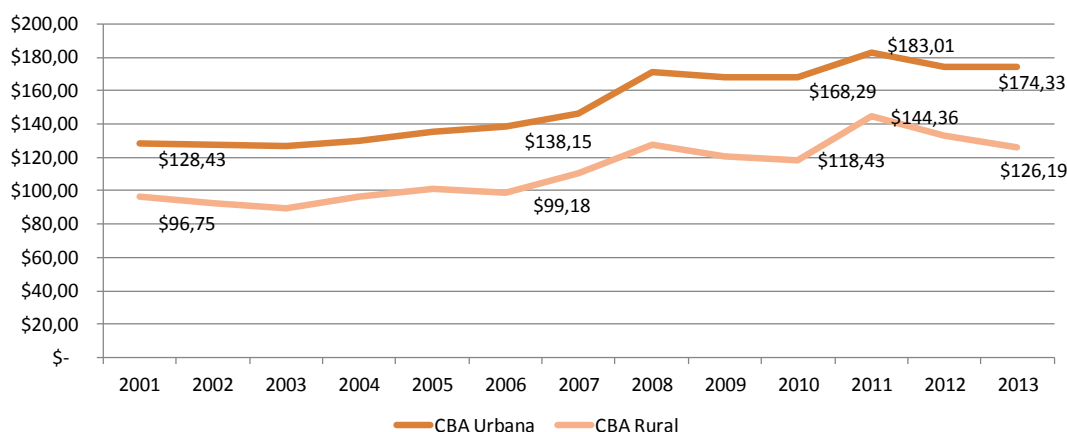
99 Klein, E. (2012). Mercado de trabajo y pobreza rural: los desafíos pendientes. En F. Soto & E. Klein, *Políticas de mercado de trabajo y pobreza rural en América Latina. Tomo I* (pp. 346 – 353). Roma: FAO.

100 PDDH (2011). *Pronunciamiento público del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado Oscar Humberto Luna, ante la grave situación de los derechos económicos y sociales de la población salvadoreña*. Documento recuperado de <http://www.pddh.gob.sv/menupress/menuprensa/216-pronunciamiento-del-procurador-ante-la-grave-situacion-de-los-derechos-ecosoc-de-la-poblacion>; PDDH (2012). *Pronunciamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado Oscar Humberto Luna, ante la situación de sequía que enfrenta el oriente del territorio nacional y su impacto en los derechos humanos de las poblaciones afectadas*. Documento recuperado de <http://www.pddh.gob.sv/menupress/menuprensa/366-pronunciamiento-de-la-pddh-ante-la-situacion-de-sequia-que-enfrenta-el-oriente-del-pais>



y de vulnerabilidad ambiental de la producción agropecuaria. Igualmente, no se ha hecho énfasis en la generación de condiciones de trabajo decente para los productores y productoras de alimentos. Finalmente, también hace falta realizar un mayor esfuerzo por la ampliación la cobertura de la asistencia técnica y la facilitación del acceso a recursos productivos. Todo este contexto evidencia que existe un cúmulo bastante amplio de obstáculos para que la población salvadoreña pueda ejercer su derecho a una alimentación adecuada, lo cual resulta sumamente negativo para el país, ya que es indudable que una población bien alimentada y sana debe ser la base sobre la que se debe construir cualquier programa de desarrollo.

**Gráfico 1**  
**Evolución del costo de la canasta básica alimentaria**  
**(promedios anuales en dólares) 2001-2013**



\*Promedio de 2013 actualizado hasta mayo.

Fuente: elaboración propia con base en datos de la DIGESTYC.

## c) Derecho a la salud

La mejora de los servicios de salud pública ha sido una de las áreas que la administración gubernamental actual ha destacado como una prioridad desde el inicio de su gestión. En el discurso brindado por el Presidente Mauricio Funes ante la Asamblea Legislativa con motivo de la finalización del cuarto año de su gestión, destacó los avances en cuanto a inversión total en salud, reconstrucción de la red hospitalaria, aumento de la cobertura de la atención primaria en salud (Tabla 7 y 8) y de la infraestructura sanitaria, y en la regulación de las condiciones de venta de los medicamentos<sup>101</sup>.

**Tabla 7**  
**Presupuesto del Ramo de Salud 2008-2013**  
**(en millones)**

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Votado	\$356,7	\$393.4	\$390.7	\$470.8	\$522.6	\$565.4
Modificado	\$369.6	\$428.8	\$447.8	\$488.9	\$526.2	\$566.3*
Devengado	\$365.3	\$422.4	\$443.0	\$471.7	\$493.7	

\*Presupuesto modificado hasta mayo 2013 (cifras preliminares).

Fuente: Elaboración propia con base en Ministerio de Hacienda (varios años). Informes de la gestión financiera del Estado. Disponibles en [http://www.transparenciafiscal.gob.sv/portal/page/portal/PTF/Presupuestos\\_Publicos/Presupuestos\\_ejecutados](http://www.transparenciafiscal.gob.sv/portal/page/portal/PTF/Presupuestos_Publicos/Presupuestos_ejecutados)

<sup>101</sup> Transparencia Activa (2013, 3 de junio). *Discurso del Presidente...*, Op. cit.

**Tabla 8**  
**ECOS familiares y especializados**

	<b>Año 2</b>	<b>Año 3</b>	<b>Año 4</b>	<b>Total</b>
ECOS familiares	380	42	59	481
ECOS especializados	28	0	8	36
Total	408	42	67	517
Presencia en municipios	141	12	11	164

Fuente: FUSADES (2013). Cuarto año de gobierno del presidente Funes. Apreciación general. San Salvador: Autor. p. 102.

En este orden de ideas, de forma general, en los últimos cuatro años se podrían destacar los siguientes logros en materia del derecho a la salud:

- Finalización de las obras:
  - o Hospital “San Juan de Dios” de San Miguel (noviembre 2010).
  - o Hospital Santa Gertrudis de San Vicente (diciembre de 2010).
  - o Hospital “San Pedro” de Usulután (mayo de 2011).
  - o Hospital Nacional “Santa Teresa” de Zacatecoluca (junio 2011).
- Proceso de construcción del Hospital Nacional de Maternidad.
- Aumento de la inversión ejecutada en salud: en 2008 el presupuesto ejecutado en salud como porcentaje del PIB rondaba el 1.7%, mientras que a partir de 2009 se ha aumentado para situarlo arriba del 2% del PIB (2.08% en 2012).
- Eliminación de “cuotas voluntarias”.
- Esfuerzos en cuanto a facilitación del acceso, aumento de la cobertura y el despliegue territorial de los servicios de salud:
  - o Incremento en el número de unidades de salud, pasando de contar con 377 en 2009, a 692 en el primer semestre de 2013<sup>102</sup>.
  - o Aumento en el despliegue territorial de los equipos de atención primaria en salud: creación de 517 Equipos Comunitarios de Salud Familiar (ECOS Familiares) y 36 Equipos Comunitarios de Salud Familiar Especializados (ECOS Especializados)<sup>103</sup>.
  - o Se ha logrado revertir la preponderancia del gasto privado en salud: actualmente el 60% del gasto en salud es público, mientras que el 40% es privado. Anteriormente, la situación era a la inversa, con un 70% de gasto privado, y 30% de gasto público<sup>104</sup>.
- Incremento en la contratación de personal de salud: en 2010 se contaba con un personal de 25,440 profesionales de la salud, mientras que en 2012 se aumentó a 28,725<sup>105</sup>.
- Creación del Instituto Nacional de Salud.
- Apoyo al Foro Nacional de Salud.
- Política y Ley de Medicamentos.
- Creación de la Dirección Nacional de Medicamentos.

Dicho todo esto, también se debe señalar que durante el último año se ha constatado nuevamente que los avances logrados, aunque son positivos, aún distan mucho de ser suficientes para dar respuesta a las necesidades de la población en materia de derecho a la salud. Como Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, desde hace muchos años hemos venido señalando las deficiencias y dificultades presentes en el sistema de salud, el cual se ha caracterizado por la insuficiencia de presupuesto, recursos

<sup>102</sup> Transparencia Activa (2013, 3 de junio). *Discurso del Presidente...*, Op. cit.

<sup>103</sup> Ibid.

<sup>104</sup> Ramírez, S. (2013, 23 de junio). “Hay regiones en las que tenemos un médico por cada 20,000 habitantes”. Séptimo Sentido, pp. 8 - 11, *La prensa gráfica*, San Salvador.

<sup>105</sup> Ibid.

y personal; alta segmentación, inequidad y fragmentación; limitaciones significativas en el alcance geográfico; y serios problemas de calidad y calidez en la atención.

Estas dificultades provocaron que en este periodo surgieran nuevamente problemas al interior de algunos hospitales, principalmente por la falta de insumos y equipo médico adecuado, desabastecimiento de medicamentos, deterioro en los recursos de trabajo, entre otros. Situaciones de este tipo han sido recurrentes particularmente en establecimientos como el Hospital Nacional Zacamil<sup>106</sup> o el Hospital Nacional Rosales<sup>107</sup>.

En este punto es importante señalar que el origen de la problemática radica en la asignación misma de recursos al rubro de salud y en las bases sobre las que se ha construido el sistema de salud salvadoreño. La inversión en salud aún es muy baja, apenas superando el 2% del PIB (Tabla 9), cuando debería alcanzar entre el 5 - 8% del PIB. Tal y como lo ha afirmado el representante de la Organización Panamericana de la Salud en El Salvador, Doctor José Ruales, “el presupuesto sigue siendo insuficiente para las necesidades de salud del país, ningún país ha logrado una cobertura adecuada de sus servicios con un gasto nacional en salud menor al 8% del PIB”<sup>108</sup>.

**Tabla 9**  
**Presupuesto devengado en el ramo de salud como porcentaje del PIB**

	2008	2009	2010	2011	2012
Presupuesto Devengado	\$365.30	\$422.40	\$443.00	\$471.70	\$493.70
Porcentaje del PIB	1.70%	2.04%	2.07%	2.04%	2.08%

Fuente: Elaboración propia con base en Ministerio de Hacienda (varios años). Informes de la gestión financiera del Estado. Disponibles en [http://www.transparenciafiscal.gob.sv/portal/page/portal/PTF/Presupuestos\\_Publicos/Presupuestos\\_ejecutados](http://www.transparenciafiscal.gob.sv/portal/page/portal/PTF/Presupuestos_Publicos/Presupuestos_ejecutados). Las cifras como proporción del PIB se han calculado con base en los datos del BCR (2013). Indicadores económicos 2008-2012. Documento recuperado de <http://www.bcr.gob.sv/bcrsite/uploaded/content/category/2017462326.pdf>

Inicialmente, las autoridades del Ministerio de Salud (MINSAL) habían proyectado elevar la inversión en salud hasta un 5% del PIB entre 2009 y 2014<sup>109</sup>. No obstante, hasta la fecha los resultados son muy lejanos a esta cifra. Por ejemplo, para 2012, si se hubiese adjudicado a esta cartera de Estado un presupuesto que representara el 5% del PIB, el mismo tendría que ascender a 1,189.3 millones, lo cual está muy lejos de los 522.6 millones asignados en el presupuesto votado de 2012 (Tabla 10).

106 Hernández, C. (2013, 24 de febrero). Hoy definen si paralizan labores en el hospital Zacamil. *Diario El Mundo*. Documento recuperado de <http://elmundo.com.sv/hoy-definen-si-paralizan-labores-en-el-hospital-zacamil>; Cavaría & Ayala (2013, 26 de febrero). Acuerdan levantar paro en Hospital Zacamil. *La Prensa Gráfica*. Documento recuperado de <http://www.laprensagrafica.com/Acuerdan-levantar-paro-en-Hospital-Zacamil> González, X. (2013, 3 de mayo). Paralizan consultas en hospital Zacamil. *Diario El Mundo*. Documento recuperado de <http://elmundo.com.sv/paralizan-consultas-en-hospital-zacamil>; Redacción Diario El Mundo (2012, 6 de mayo). En medio de protestas hospital Zacamil recibe equipo médico. *Diario El Mundo*. Documento recuperado de <http://elmundo.com.sv/en-medio-de-protestas-hospital-zacamil-recibe-equip-medico>; Reyes, J (2013, 22 de mayo). En el suelo por falta de camas en Zacamil. *El Diario de Hoy*. Documento recuperado de [http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota\\_completa.asp?idCat=47673&idArt=7910910](http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=7910910)

107 La Prensa Gráfica (2012, 3 de octubre). Salud confirma 16% de desabastecimiento en H. Rosales. *La Prensa Gráfica*. Documento recuperado de <http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/285494-salud-confirma-16-de-desabastecimiento-de-medicamentos-en-h-rosales>; Martínez, L. (2012, 6 de diciembre). Hospitales carecen de algunas medicinas. *La Prensa Gráfica*. Documento recuperado de <http://www.laprensagrafica.com/hospitales-carecen-de-algunas-medicinas>; González, X. (2013, 14 de mayo). Falta de analgésicos afectaría cirugías en hospital Rosales. *Diario El Mundo*. Documento recuperado de <http://elmundo.com.sv/falta-de-analgescos-afectaria-cirugias-en-hospital-rosales>; Miranda, R. (2013, 14 de mayo). “Si callamos somos cómplices” dice cirujano de Hospital Rosales. *El Diario de Hoy*. Documento recuperado de [http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota\\_completa.asp?idCat=47673&idArt=7890443](http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=7890443).

108 OPS (2013). *Cuatro años de gestión en Salud. Entrevista al Dr. José Ruales, Representante de OPS, por la periodista Lilian Martínez del Diario de Hoy*. 29 de mayo de 2013. Documento recuperado de [https://www.paho.org/els/index.php?option=com\\_docman&task=doc\\_download&gid=1256&Itemid=99999999](https://www.paho.org/els/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1256&Itemid=99999999)

109 Rodríguez, M. (2009). *Construyendo la esperanza. Estrategias y recomendaciones en salud 2009-2014*. San Salvador: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

**Tabla 10**  
**Comparación entre presupuesto votado y**  
**presupuesto equivalente al 5% del PIB para el ramo de Salud**

	2008	2009	2010	2011	2012
Votado	\$356.7	\$393.4	\$390.7	\$470.8	\$522.6
Equivalente al 5% del PIB	\$1,071.6	\$1,033.1	\$1,071.0	\$1,154.8	\$1,189.3

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Ministerio de Hacienda (varios años). Informes de la gestión financiera del Estado. Disponibles en [http://www.transparenciafiscal.gob.sv/portal/page/portal/PTF/Presupuestos\\_Publicos/Presupuestos\\_ejecutados](http://www.transparenciafiscal.gob.sv/portal/page/portal/PTF/Presupuestos_Publicos/Presupuestos_ejecutados). Las cifras como proporción del PIB se han calculado con base en los datos del BCR (2013). Indicadores económicos 2008-2012. Documento recuperado de <http://www.bcr.gob.sv/bcrsite/uploaded/content/category/2017462326.pdf>

Es por ello que, a juicio de esta Procuraduría, las limitaciones presupuestarias constituyen el obstáculo primordial para que el MINSAL pueda mejorar la atención en salud, disminuir la brecha de recursos humanos, reducir los problemas de desabastecimiento de medicamentos y mejorar la cobertura en todo el país. Mientras no se atienda de forma adecuada esta problemática, continuarán siendo cotidianas las expresiones de inconformidad de la población ante la insuficiencia y el deterioro de los insumos y el equipo médico, la falta de medicamentos y de personal en salud, los prolongados intervalos de espera para las citas con especialistas, la negligencia y baja calidad en la atención por parte del personal, la saturación de los establecimientos y el deterioro de la infraestructura.

Añadido a esto, a juicio de esta Procuraduría, otra deficiencia fundamental del sistema nacional de salud, es la inequidad que genera la forma en la que fue construido el mismo. Pese a que en la reforma de salud planteada por las autoridades del MINSAL se contemplaba la reducción de la fragmentación, la segmentación y la inequidad en el sistema, hasta la fecha no se observan avances significativos en la construcción de un sistema único de salud. Más allá de eso, no parece que a corto plazo se realice una modificación de este tipo, ya que el mismo Viceministro de Políticas de Salud, Doctor Eduardo Espinoza, ha afirmado recientemente que no cuentan con un cálculo de en cuánto tiempo llevaría conformar el sistema único, señalando incluso que, a su juicio, sería una “hecatombe política” unificar en este momento el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) con el MINSAL, ya que “los asegurados verían deteriorarse su prestación”. Los planes de las autoridades al respecto son cerrar primero la brecha de gasto per capita del MINSAL con respecto al ISSS, para posteriormente unificar ambos sistemas<sup>110</sup>.

Por otra parte, la administración actual sí ha logrado avances sumamente importantes en cuanto a regulación y control en materia de medicamentos. La entrada en vigencia de la Ley de Medicamentos, y las acciones implementadas para su aplicación han tenido enorme relevancia para favorecer el cumplimiento del derecho a la salud en el país, ya que ha sido ampliamente conocido que el sector de medicamentos salvadoreño se ha caracterizado por una deficiente regulación y vigilancia, lo que ha permitido, por ejemplo, arbitrariedades por parte de las empresas farmacéuticas a la hora de establecer los precios de venta al público, y la inexistencia de mecanismos adecuados para ejercer control de calidad. Tales deficiencias han provocado que grandes sectores de la población, principalmente aquellos grupos en mayor situación de vulnerabilidad, tengan dificultades para acceder a medicamentos, debido a su alto costo y, pese a ello, sin contar con garantías sobre la calidad de los mismos.

Es por ello que esta Procuraduría ha expresado su satisfacción por el hecho de que el Gobierno de la República, a través del trabajo de la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM), se encuentre desarrollando esfuerzos importantes para la aplicación de esta normativa<sup>111</sup>. Se ha constatado que

<sup>110</sup> Ramírez, S. (2013, 23 de junio). “Hay regiones... Op. cit.

<sup>111</sup> Pronunciamiento del Señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado Oscar Humberto Luna, en torno a la aplicación de la Ley de

con la entrada en vigencia de los nuevos precios para los medicamentos -establecidos de acuerdo al “Reglamento para la Determinación de los Precios de venta máxima al público de los medicamentos y su verificación”- se han presentado reducciones significativas en los costos de muchos fármacos, lo cual es un logro fundamental de parte del Estado salvadoreño en la consolidación de un régimen de garantías que proteja de forma efectiva el derecho a la salud.

Aunque en un primer momento, la reacción del sector farmacéutico ante las modificaciones efectuadas generó un clima de incertidumbre, debido a la amenaza del retiro de algunos medicamentos, afortunadamente la administración gubernamental y el sector privado pudieron llegar a un consenso para asegurar que tales fármacos se mantuvieran disponibles para compra en el país.

En todo caso, vale la pena reafirmar que con la Ley de Medicamentos se ha logrado dar un fuerte impulso a la reivindicación de la salud como un verdadero derecho, ya que como cualquier otro derecho fundamental, no puede estar sometido a la lógica y las fuerzas del mercado. Adicionalmente, será importante que la DNM acelere la implementación de las acciones orientadas a mejorar el control de calidad de los medicamentos, ya que ha sido otra de las principales deficiencias que presenta el sistema de salud salvadoreño.

En conclusión, durante este periodo se observan distintos logros destacables en materia del derecho a la salud. No obstante, aún existen grandes retos en la construcción progresiva de un sistema que cuente con establecimientos, bienes y servicios en condiciones propicias para los cuidados de salud que requieren las personas, de acuerdo a sus padecimientos y necesidades. En definitiva, una de las principales deudas de la administración actual es la disposición de un sistema de protección de la salud que brinde atención a toda la población en condiciones igualitarias, sin discriminación alguna, accesible de acuerdo a criterios geográficos y económicos, y aceptable en cuanto a calidad desde un punto de vista científico y ético.

## d) Derecho a la educación

De forma general, se puede afirmar que el derecho a la educación es uno de los derechos económicos, sociales y culturales a los que la sociedad salvadoreña brinda mayor importancia. Esto se ha traducido en que el ramo de educación normalmente sea el que reciba mayor presupuesto entre las distintas áreas relacionadas al desarrollo social. En los últimos años, la administración actual ha continuado incrementando la inversión en el ramo de educación. En 2008, por ejemplo, el presupuesto ejecutado en educación fue de \$632.2 millones, mientras que en 2012 ascendió a \$823.2 millones (Tabla 11). Para 2013, el presupuesto asignado a este ramo fue de \$864 millones.

**Tabla 11**  
**Presupuesto del Ramo de Educación 2008-2013**  
**(en millones)**

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Votado	\$635.0	\$702.9	\$671.4	\$707.0	\$827.7	\$864.0
Modificado	\$636.0	\$760.4	\$696.0	\$769.8	\$833.2	\$864.0*
Devengado	\$632.2	\$756.2	\$687.8	\$764.0	\$823.2	

\*Presupuesto modificado hasta mayo 2013 (cifras preliminares).

Fuente: Elaboración propia con base en Ministerio de Hacienda (varios años). Informes de la gestión financiera del Estado. Disponibles en [http://www.transparenciafiscal.gob.sv/portal/page/portal/PTF/Presupuestos\\_Publicos/Presupuestos\\_ejecutados](http://www.transparenciafiscal.gob.sv/portal/page/portal/PTF/Presupuestos_Publicos/Presupuestos_ejecutados)

*Medicamentos, dentro del marco de la celebración del Día Mundial de la Salud.* 11 de abril de 2013. Disponible en <http://www.pddh.gob.sv/menupress/menuprensa/490-pronunciamento-de-la-pddh-en-torno-a-la-aplicacion-de-la-ley-de-medicamentos>



Este aumento en la inversión en educación se ha destinado principalmente a la implementación de los programas de entrega de paquetes escolares, alimentación escolar, el programa “vaso de leche”<sup>112</sup>, al mejoramiento de la infraestructura escolar y a la extensión del modelo de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno<sup>113</sup>. Para esta Procuraduría, no cabe duda que estas apuestas gubernamentales han constituido un importante apoyo para las familias salvadoreñas, dado que las restricciones económicas son una de las principales causas de la deserción escolar. A la vez, los programas que favorecen una mejor alimentación y nutrición entre los y las estudiantes son fundamentales para combatir la desnutrición y mejorar el rendimiento escolar.

Para esta Procuraduría también ha sido muy positivo observar que el Programa de Alfabetización implementado en los últimos años ha tenido resultados importantes, principalmente en el área rural. Hasta junio de 2013, 15 municipios han sido declarados libres de analfabetismo<sup>114</sup>, y la tasa de analfabetismo ha disminuido del 14% en 2009, al 12.4% en 2012 (Tabla 12). En ese mismo periodo, en el área urbana, la disminución ha sido de un punto porcentual (pasando de 9.2% a 8.2%), mientras que en el área rural se observa una reducción de tres puntos porcentuales (de 22.7% a 19.9%)<sup>115</sup>. No obstante, la diferencia en los niveles de analfabetismo entre el área rural y urbana continúa siendo muy marcada.

**Tabla 12**  
***Evolución de la tasa de analfabetismo y la escolaridad promedio 2001-2012***<sup>116</sup>

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Tasa de analfabetismo (%)	16.6	16.6	15.9	15.5	14.9	14.6	13.9	14.1	14.0	13.7	12.80	12.4
Escolaridad promedio (años aprobados)	5.4	5.5	5.6	5.6	5.7	5.8	5.9	5.9	6.0	6.1	6.2	6.4

Fuente: Adaptado de García, M. (2013). Visión general de la educación en El Salvador. Economía Hoy, 4, 48, 4-6. Documento recuperado de [http://www.uca.edu.sv/deptos/economia/media/archivo/62293a\\_economiahoy\(feb2013\).pdf](http://www.uca.edu.sv/deptos/economia/media/archivo/62293a_economiahoy(feb2013).pdf)

De cualquier forma, a pesar de todos estos logros en materia de derecho a la educación, es necesario señalar que el sistema educativo salvadoreño sigue presentando muchas deficiencias en cuanto a inversión, cobertura, disminución de la deserción escolar, aumento de la escolaridad promedio, infraestructura escolar, calidad de la educación, condiciones de trabajo de los profesores y profesoras, entre otras.

En principio, se debe recalcar que pese a los aumentos presupuestarios destinados al rubro de Educación, la inversión sigue siendo baja. Por ejemplo, para 2012 apenas alcanzó el 3.46% del PIB (Tabla 13), cuando de forma general se recomienda que la inversión en educación sea al menos equivalente al 6%

112 A la fecha, el programa de paquetes escolares beneficia a 1.3 millones de estudiantes, mientras que el programa de alimentación escolar cubre 1.4 millones. El programa Vaso de Leche ha sido ampliado recientemente para beneficiar a 821,000 estudiantes en 2,289 escuelas públicas de 10 departamentos del país. Transparencia Activa (2013, 3 de junio). *Discurso del Presidente...*, Op. cit.

113 Se tiene previsto que, en el lapso de un año, el modelo de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno pase de implementarse en 145 escuelas en 52 municipios, a 1,365 centros escolares en 57 municipios. Transparencia Activa (2013, 3 de junio). *Discurso del Presidente...*, Op. cit.

114 Transparencia Activa (2013, 3 de junio). *Discurso del Presidente...*, Op. cit.

115 DIGESTYC (2013a). *Encuesta de hogares...*, Op. cit.

116 La tasa de analfabetismo representa al porcentaje de personas de 10 años y más que no saben leer y escribir. La escolaridad promedio se refiere al número de años aprobados por las personas de 6 años y más de edad.

del PIB<sup>117</sup>. De acuerdo a este criterio, la asignación presupuestaria para 2012 debería haber sido de al menos \$1,417 millones, cuando en realidad fue solamente de \$827.6 millones (Tabla 14).

Desde esta perspectiva, es evidente que mientras no se logre incrementar considerablemente el presupuesto para el sistema educativo, incluyendo financiamiento para mejorar la calidad de la educación, fortalecer la formación en las carreras de profesorado, aumentar las remuneraciones en el sector magisterial, incrementar y mejorar la infraestructura escolar y aumentar la cobertura en los niveles preescolar y parvularia; no se podrá avanzar de forma acelerada hacia una verdadera transformación de la educación en el país. También es sumamente importante desarrollar mayores esfuerzos en la disminución de las brechas educativas entre el área rural y el área urbana, ya que, por ejemplo, para 2012, la escolaridad promedio en el área urbana fue de 7.5 años, mientras que en el área rural fue de 4.6<sup>118</sup>.

**Tabla 13**  
***Presupuesto devengado en el ramo de Educación como porcentaje del PIB***

	2008	2009	2010	2011	2012
Presupuesto Devengado (en millones)	\$632.2	\$756.2	\$687.8	\$764.0	\$823.2
Porcentaje del PIB	2.95%	3.66%	3.21%	3.31%	3.46%

Fuente: Elaboración propia con base en Ministerio de Hacienda (varios años). Informes de la gestión financiera del Estado. Disponibles en [http://www.transparenciafiscal.gob.sv/portal/page/portal/PTF/Presupuestos\\_Publicos/Presupuestos\\_ejecutados](http://www.transparenciafiscal.gob.sv/portal/page/portal/PTF/Presupuestos_Publicos/Presupuestos_ejecutados). Las cifras como proporción del PIB se han calculado con base en los datos del BCR (2013). Indicadores económicos 2008-2012. Documento recuperado de <http://www.bcr.gob.sv/bcrsite/uploaded/content/category/2017462326.pdf>

**Tabla 14**  
***Comparación entre presupuesto votado y presupuesto equivalente al 6% del PIB para el ramo de Educación***

	2008	2009	2010	2011	2012
Presupuesto Votado (en millones)	\$635.0	\$702.9	\$671.4	\$707.0	\$827.7
Equivalente al 6% del PIB	\$1,285.9	\$1,239.7	\$1,285.1	\$1,385.7	\$1,427.2

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Ministerio de Hacienda (varios años). Informes de la gestión financiera del Estado. Disponibles en [http://www.transparenciafiscal.gob.sv/portal/page/portal/PTF/Presupuestos\\_Publicos/Presupuestos\\_ejecutados](http://www.transparenciafiscal.gob.sv/portal/page/portal/PTF/Presupuestos_Publicos/Presupuestos_ejecutados). Las cifras como proporción del PIB se han calculado con base en los datos del BCR (2013). Indicadores económicos 2008-2012. Documento recuperado de <http://www.bcr.gob.sv/bcrsite/uploaded/content/category/2017462326.pdf>

En cuanto al mejoramiento de la calidad de la educación también se observan retos enormes. Los resultados de la Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educación Media (PAES) de 2012, nuevamente reflejaron la existencia de serias deficiencias en el sistema educativo salvadoreño. La nota promedio en la prueba fue de 5.0 (en una escala de 0 a 10), superior solamente en 0.2 a la obtenida en 2011, cuando fue de 4.8<sup>119</sup>.

117 Informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Educación, Katarina Tomasevski, E/CN.4/2004/45. Documento recuperado de <http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=E/CN.4/2004/45&Lang=S>

118 DIGESTYC (2013a). *Encuesta de hogares...*, Op. cit.

119 MINED(2013). *Resultados PAES 2012*. Documento recuperado de <http://www.transparenciaactiva.gob.sv/wp-content/uploads/2012/11/Resultados-PAES-2012-resumido-1.pdf>

Al analizar los resultados desagregados por áreas de estudio, llama la atención que para 2012, la nota obtenida en la asignatura “Lenguaje y Literatura” tuvo una disminución considerable con respecto al año anterior, ya que pasó de ser 5.6 en 2011 a 4.9 en 2012. Por el contrario, aunque los resultados siguen siendo pobres, de forma positiva se pueden destacar mejoras en las notas para las asignaturas “Estudios Sociales” y “Ciencias naturales”. Con respecto a “Matemáticas” no se presentaron mayores variaciones, y continuó siendo el área con la nota más baja. En ninguna de las asignaturas, la nota promedio fue superior a 6.0 (Tabla 15).

**Tabla 15**  
**Comparación entre resultados de la PAES 2011 y 2012**

Asignatura	2011	2012
Matemática	4.4	4.5
Estudios Sociales	5.2	5.9
Lenguaje y Literatura	5.6	4.9
Ciencias Naturales	4.7	5.2
Global	4.8	5.0

Fuente: MINED (2013). Resultados PAES 2012. Documento recuperado de <http://www.transparenciaactiva.gob.sv/wp-content/uploads/2012/11/Resultados-PAES-2012-resumido-1.pdf>

Además de esto, resulta preocupante observar que las competencias que reflejan los puntajes más bajos sean “comunicación con lenguaje matemático” (3.9), “comprensión lectora” (4.5), “razonamiento lógico matemático” (4.5), “aplicación de la matemática al entorno” (4.5) y “comunicación literaria” (4.6). No obstante, se debe señalar que los resultados revelan deficiencias importantes en todas las competencias evaluadas (Tabla 16).

**Tabla 16**  
**Resultados por competencia PAES - 2012**

Competencia	Nota
Razonamiento lógico matemático	4.5
Comunicación con lenguaje matemático	3.9
Aplicación de la matemática al entorno	4.5
Análisis de la problemática social	6.0
Investigación de la realidad social e histórica	6.3
Participación crítica y responsable en la sociedad	5.8
Comunicación literaria	4.6
Comprensión lectora	4.5
Expresión escrita	4.8
Comunicación de la información con lenguaje científico	5.3
Aplicación de procedimientos científicos	4.7
Razonamiento e interpretación científica	5.2

Fuente: MINED (2013). Resultados PAES 2012. Documento recuperado de <http://www.transparenciaactiva.gob.sv/wp-content/uploads/2012/11/Resultados-PAES-2012-resumido-1.pdf>

Por otra parte, al comparar los resultados en el sector privado y el sector público, se observa que existen diferencias notables en el desempeño. Por ejemplo, la nota promedio para el sector público fue de 4.8, mientras que para el privado fue de 5.6. Aún más, al comparar estos resultados con los del año anterior, se refleja que la diferencia entre los sectores se ha ampliado, ya que en 2011 la diferencia fue de 0.6, mientras que para 2012 ascendió a 0.8 (Tabla 17). De cualquier forma, es conveniente resaltar que los resultados en los centros escolares privados sólo son mejores comparativamente, pero de ninguna forma pueden ser calificados como satisfactorios, ya que incluso en este sector todas las asignaturas reflejan notas bajas (solamente en “Estudios sociales” la nota supera el 6.0) (Tabla 18).

**Tabla 17**  
**Comparación de resultados en la PAES 2011 y 2012, por sector**

Sector	2011	2012
Público	4.7	4.8
Privado	5.3	5.6

Fuente: MINED (2013). Resultados PAES 2012. Documento recuperado de <http://www.transparenciaactiva.gob.sv/wp-content/uploads/2012/11/Resultados-PAES-2012-resumido-1.pdf>

**Tabla 18**  
**Resultados por sector, PAES - 2012**

Sector	Público	Privado	Diferencia
No. alumnos	60,911	19,199	
Matemática	4.3	4.8	0.5
Estudios Sociales	5.8	6.4	0.6
Lenguaje y Literatura	4.8	5.5	0.7
Ciencias Naturales	5.1	5.7	0.6
Global	4.8	5.6	0.8

Fuente: MINED (2013). Resultados PAES 2012. Documento recuperado de <http://www.transparenciaactiva.gob.sv/wp-content/uploads/2012/11/Resultados-PAES-2012-resumido-1.pdf>

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta evidente que la formación que recibe la población salvadoreña está muy lejos de los niveles de calidad necesarios para situar a la educación como una herramienta transformadora de la sociedad. Con todo, lo más preocupante es que, aunque desde hace varios años se cuenta con los resultados de la PAES como parámetros para diseñar una estrategia integral que aborde el tema de la calidad educativa, hasta la fecha no se tiene conocimiento de una propuesta clara del Ministerio de Educación (MINED) sobre cómo se mejorará el nivel de aprendizaje en los centros escolares públicos y privados. Una muestra de la falta de atención a estos aspectos se refleja en el hecho de que entre 2005 y 2012, la nota global promedio (sin curva) de la PAES solamente ha aumentado de 3.7 a 5.0, es decir un incremento de apenas 1.3 puntos (Tabla 19).

**Tabla 19**  
**Resultados nota global de la PAES 2005 - 2012**

PAES	Global con curva	Global sin curva
2005	5.04	3.74
2006	5.53	4.23
2007	5.92	4.62
2008	6.16	4.86
2009	4.99	4.99
2010	5.14	5.14
2011	4.85	4.85
2012	5.00	5.00

Fuente: MINED (2013). Resultados PAES 2012. Documento recuperado de <http://www.transparencia.activa.gob.sv/wp-content/uploads/2012/11/Resultados-PAES-2012-resumido-1.pdf>

En definitiva, al hacer una valoración general sobre los avances en el cumplimiento del derecho a la educación en el último año se deben destacar los logros en materia de presupuesto y los esfuerzos por facilitar el acceso a la educación, así como el desarrollo de programas fundamentales para garantizar una alimentación y nutrición adecuada de la población estudiantil. No obstante, se debe señalar que para lograr un mejoramiento integral del sistema educativo salvadoreño, es imprescindible que el presupuesto asignado al ramo de educación se incremente aproximadamente al doble del monto actual. Únicamente de esta forma se podrá contar con una infraestructura escolar suficiente para atender la demanda en todo el país, mejorar las condiciones de trabajo de los profesores y las profesoras, y elevar sustantivamente la calidad en la formación.

### **e) Derecho al trabajo y a las libertades sindicales**

El ejercicio de los derechos laborales ha representado en el país una de las áreas menos atendidas y protegidas en materia de derechos humanos. Históricamente, han sido recurrentes las violaciones a los derechos laborales y sindicales de las que son objeto las trabajadoras y los trabajadores tanto del sector público y municipal, como del sector privado, mientras que las instancias del Estado con competencia en la materia, no han sido capaces de implementar y fortalecer los mecanismos administrativos y jurisdiccionales de control, que permitan erradicar tales violaciones a derechos humanos.

En esta misma línea, ha sido preocupante observar de forma continua que en cada inicio de año, esta Procuraduría recibe numerosas denuncias por parte de trabajadores y trabajadoras del sector público y municipal que han sido despedidas de sus lugares de trabajo sin que se haya seguido un proceso adecuado. Este periodo no ha sido la excepción, siendo el principal ejemplo de esta práctica lo sucedido en las alcaldías municipales de San Salvador, Mejicanos, Apopa<sup>120</sup>, Ayutuxtepeque, Soyapango<sup>121</sup> e Ilopango, que han despedido a muchas personas bajo argumentos contrarios a los derechos laborales, y sin entregarles la indemnización correspondiente.

Asimismo, es importante acotar que si bien se han ratificado los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativos a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación, y a la aplicación de los derechos de sindicación y negociación colectiva, respectivamente; y la Constitución de la República los reconoce como normas jurídicas internas, todavía el Estado salvadoreño dista mucho de reconocer y dar todo el apoyo al sector sindical, tanto en el sector público como el privado. Los trabajadores y las trabajadoras con cargos de dirigentes de las instituciones

120 PDDH (2013). *Comunicado de prensa. El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado Oscar Humberto Luna, ante violaciones a los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de la Alcaldía Municipal de Apopa*. 29 de abril de 2013.

121 PDDH (2013). *Comunicado de prensa. Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado Oscar Humberto Luna, ante violaciones a los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de la Alcaldía Municipal de Soyapango*. 11 de febrero de 2013.



sindicales, han denunciado en reiteradas ocasiones la imposición de obstáculos a su trabajo por la defensa de los derechos laborales. Un ejemplo de ello son las violaciones a la libertad sindical contra las organizaciones laborales, por parte de empresas de carácter privado o incluso en instituciones públicas, ante lo cual esta Procuraduría se ha pronunciado recientemente<sup>122</sup>.

Dicho todo esto, conviene también resaltar que ha sido positivo observar recientemente que la clase trabajadora ha estado recurriendo a instancias judiciales a exigir el respeto de sus derechos laborales, específicamente a los Juzgados de lo Laboral y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mismas que en los últimos meses han desempeñado un papel importante a favor de los trabajadores y los trabajadores, al ordenar en muchos casos, mediante procesos laborales, el reinstalo de estos en sus puestos de trabajo, como lo mandado por un Juzgado de lo Laboral a favor de algunos trabajadores de la Alcaldía de Apopa.

De manera similar ha ocurrido también en casos presentados ante la Sala de lo Constitucional por personal de la Alcaldía de Soyapango, la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la República y el señor Luis Alberto Ortega, directivo sindical despedido por la Asamblea Legislativa a finales de 2010; en los que la referida Sala, por medio de una resolución de admisión de una demanda de amparo, ha emitido medida cautelar que ordena de manera provisional el reinstalo de dichos trabajadores en sus respectivas instituciones, mientras se emite una sentencia definitiva en sus procesos.

Añadido ha esto, ha sido sumamente importante para la protección del derecho a la estabilidad laboral, que la Sala de lo Constitucional haya modificado la interpretación sobre el alcance del mismo, para fortalecer la protección de la estabilidad laboral de los empleados públicos vinculados con el Estado mediante un contrato<sup>123</sup>. En esa misma línea garantista y de avance en el respeto de los derechos laborales, la misma Sala ha ordenado a la Asamblea Legislativa que a más tardar el 31 de diciembre del presente año, emita la Ley de Indemnización Universal, a fin de darle cumplimiento a lo establecido en el art. 38 ord. 12, en relación al art. 252 de la Constitución de la República<sup>124</sup>, la cual debe incluir los principios *pro operario*, *pro libertate*, de proporcionalidad en la determinación del tiempo de servicio que el trabajador debe cumplir para obtener la prestación económica, el carácter irrenunciable de los derechos de los trabajadores, el salario que devenga el trabajador y la relación jurídica permanente que lo vincula con el patrono. En este sentido, esta Procuraduría debe señalar su satisfacción por los criterios jurisprudenciales emitidos por esa instancia judicial en dichas sentencias, ya que constituyen un avance significativo en la reivindicación y la construcción de garantías judiciales a favor de la clase trabajadora de nuestro país.

Por otra parte, en cuanto a generación de empleo, esta Procuraduría ha venido observando que los esfuerzos realizados son totalmente insuficientes para avanzar de forma sustancial en la reducción del subempleo y el desempleo. De acuerdo a los datos reportados por FUSADES, entre junio 2011 y mayo 2012 se habrían generado únicamente 12,646 puestos de trabajo, mientras que, entre junio 2012 y febrero 2013, la cifra habría ascendido solamente a 19,341<sup>125</sup> (Tabla 20). Pese a lo positivos que resultan los incrementos reportados, no debe olvidarse que se necesitaría crear 48,000 empleos nuevos cada año, al menos para absorber a las generaciones que se van incorporando al mercado laboral<sup>126</sup>. Así, para lograr una disminución progresiva del subempleo, habría que agregar a esta cifra una considerable cantidad de puestos de trabajo.

122 PDDH (2013). *Comunicado de prensa. Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado Oscar Humberto Luna, ante violaciones al derecho a la libertad sindical por parte de la Corte Suprema de Justicia, en perjuicio de las organizaciones laborales del Órgano Judicial*. 8 de abril de 2013.

123 Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 19 de diciembre de 2012. Expediente 1-2011.

124 Sala de lo Constitucional. Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 1 de febrero de 2013. Expediente 53-2005/55-2005.

125 FUSADES (2013). *Cuarto año...* Op. cit.

126 GOES (2010). *Plan quinquenal...* Op. cit.

**Tabla 20**  
**Número de empleos generados en los**  
**cuatro años de gestión del Gobierno**

Período	Sector privado	Sector público	Total
Año 1	3,063	7,225	10,288
Año 2	18,670	11,298	29,968
Año 3	13,279	-633	12,646
Año 4*	17,015	2,326	19,341
Total	52,027	20,216	72,243

\*Datos de los primeros 9 meses, junio 2012 a febrero 2013.

Fuente: FUSADES (2013). Cuarto año de gobierno del presidente Funes. Apreciación general. San Salvador: Autor. p. 82.

De acuerdo a lo expresado por el Presidente Mauricio Funes en su discurso del 1 de junio de 2013, en cuatro años se habría creado un total de 80,578 empleos<sup>127</sup>. Esta cifra resulta sumamente preocupante si tomamos en cuenta que, de acuerdo a las valoraciones expresadas en el párrafo anterior, en estos cuatro años debería haberse generado un mínimo de 192,000 puestos de trabajo.

Teniendo en cuenta lo anterior, no resulta sorprendente que las cifras sobre desempleo y subempleo sigan siendo preocupantes. Si bien es cierto, la tendencia general ha sido que la tasa de desempleo abierto se mantenga baja (Tabla 21), al revisar la evolución del subempleo y la ocupación plena en el área urbana (Tabla 22) se observa que existe una gran cantidad de población que no ha logrado obtener un empleo formal. Para 2012, por ejemplo, de cada 100 personas que vivían en el área urbana, 31 se encontraban subempleadas<sup>128</sup>.

**Tabla 21**  
**Evolución de la tasa de desempleo abierto a nivel nacional**

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Tasa de desempleo abierto	6.6%	6.3%	5.9%	7.3%	7.1%	6.6%	6.1%

Fuente: Elaboración con base en datos de la DIGESTYC (Varios años). Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples.

**Tabla 22**  
**Evolución del empleo en el área urbana 2006 – 2011**

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Ocupación Plena	57.4%	65.8%	62.4%	58.9%	60.8%	57.3%	59.2%
Subempleo	36.9%	28.4%	32.1%	34.0%	28.9%	32.7%	30.7%
Desempleo	5.7%	5.8%	5.5%	7.1%	6.8%	6.6%	6.2%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la DIGESTYC (Varios años). Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples.

En este contexto, al igual que en ocasiones anteriores, para esta Procuraduría ha sido lamentable que distintas alcaldías, como parte de los procesos de reordenamiento que desarrollan, hayan recurrido a los desalojos de puestos de venta comercial informal, sin ofrecer alternativas adecuadas para que las personas afectadas puedan obtener su sustento diario.

<sup>127</sup> Transparencia Activa (2013, 3 de junio). *Discurso del Presidente...*, Op. cit.

<sup>128</sup> DIGESTYC (2013a). *Encuesta de hogares...*, Op. cit.

El caso más emblemático de esta situación es el desarrollado por la Alcaldía Municipal de San Salvador<sup>129</sup>, que el 22 de octubre de 2012, por medio de lo que llamó “Notificación Especial”, publicada en diferentes medios de comunicación, dio a conocer la decisión de desalojar del espacio público, los puestos de comercio informal instalados dentro del Distrito Uno de ese municipio, con base en los artículos 5 y 28 de la Ordenanza Reguladora del Comercio en el Espacio Público del Municipio de San Salvador. Bajo este mecanismo, citó y emplazó a todos los vendedores y las vendedoras informales que se encuentran dentro de dicho perímetro, a fin de que en el término de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al de dicha publicación, hicieran uso de su derecho de defensa y presentaran el permiso correspondiente para ejercer el comercio en el referido espacio público o, en su defecto, procedieran al retiro de su mercadería y bienes muebles, así como al desmontaje, caso contrario la municipalidad se reservaba el derecho de dar cumplimiento al artículo 28 de la mencionada Ordenanza, el cual establece que deberá ella misma desmontar, retirar y tener en resguardo las estructuras, bienes muebles y mercadería.

Pese a las distintas gestiones realizadas por esta Procuraduría, incluyendo una medida cautelar dirigida al Alcalde Municipal de San Salvador, al Ministro de Justicia y Seguridad y al Director General de la Policía Nacional Civil, para evitar la adopción de medidas que causarían graves daños a las formas de sustento, integridad física y calidad de vida de miles de personas<sup>130</sup>, la acción de desalojo se ejecutó tal como estaba prevista, entre la noche del viernes 26 y la madrugada del sábado 27 de octubre. Las áreas desalojadas fueron la 9ª Avenida Norte a partir de la Alameda Juan Pablo II, así como parte de la 9ª Avenida Sur hasta la Calle Rubén Darío, y desde esta última hasta la Calle Monseñor Romero. La Alcaldía informó que se desalojaron casi 1,000 puestos del comercio informal.

Acciones de este tipo constituyen claras vulneraciones a derechos humanos, ya que si bien es cierto a la Alcaldía Municipal de San Salvador le asisten potestades para el reordenamiento de los espacios públicos en la ciudad, el mismo debe realizarse bajo los parámetros constitucionales y del derecho internacional de los derechos humanos. Esto implica que las medidas encaminadas a desarrollar estas operaciones deben realizarse con un estricto respeto a la dignidad humana, la integridad personal, al debido proceso legal, al derecho a trabajar, al ejercicio lícito de actividades comerciales y al goce de un nivel de vida digno de las personas.

En este tipo de casos es evidente que es necesario reforzar los mecanismos de diálogo para la resolución de problemáticas de este tipo, y que como parte de la obligación de respetar que tienen los Estados en materia de derechos humanos, antes de afectar las formas de subsistencia que la población ha desarrollado, se deben consensuar con las personas afectadas alternativas viables y dignas para que puedan continuar con sus labores y llevar así el sustento a sus respectivas familias.

Asimismo, el Estado debe reconocer que, ante la precariedad que enfrenta en materia de empleo, gran parte de la población ha tenido que recurrir básicamente a dos opciones: la migración, ya sea legal o ilegal, y la inserción en el sector informal. En el primer caso, se ha podido observar que las instituciones del Estado han desarrollado ciertos esfuerzos por promover la protección de sus derechos, dado que su aporte económico y social ha permitido compensar las deficiencias estatales en la protección de las familias salvadoreñas. Para el segundo caso, aunque también representa un importante medio por el cual las personas de los sectores más vulnerables han logrado generar ingresos y subsistir ante la ineficacia del Estado por proteger sus derechos, los esfuerzos han sido mucho menores.

129 *Pronunciamiento Público del Señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado Oscar Humberto Luna, sobre el desalojo forzoso y masivo de puestos del comercio informal en el centro capitalino, ejecutado por la Alcaldía Municipal de San Salvador, los días 26 y 27 de octubre de 2012.* 29 de octubre de 2012. Disponible en <http://www.pddh.gob.sv/menupress/menuprensa/434-pronunciamiento-del-procurador-por-desalojo-de-ventas-en-el-centro-de-san-salvador>

130 *Ibid.*

En este sentido, para evitar afectaciones a derechos fundamentales como las que se han causado con los procesos de reordenamiento efectuados por las alcaldías, para esta Procuraduría es primordial que la problemática de la insuficiencia de empleos sea abordada de forma urgente e integral, teniendo en cuenta su indisoluble relación con otros derechos como el derecho a un nivel de vida adecuado y el derecho a una alimentación adecuada. Igualmente, es necesario recordar que se encuentra pendiente de análisis por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, una demanda referente a la inconstitucionalidad de la Ordenanza Reguladora del Comercio en el Espacio Público del Municipio de San Salvador<sup>131</sup>.

Finalmente, es importante mencionar que durante este periodo se ha discutido la aplicación de un nuevo incremento al salario mínimo. Recientemente, el presidente Mauricio Funes ha afirmado que sancionará el decreto acordado por el Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM), que autoriza un aumento escalonado del 12% en 18 meses<sup>132</sup>. El primer aumento se aplicará de forma inmediata, el segundo a partir del 1 de enero de 2014 y el tercero, el 1 de enero de 2015<sup>133</sup> (Tabla 23).

**Tabla 23**  
***Incrementos al salario mínimo acordados por el CNSM***

Sector	Vigente	Julio 2013	Enero 2014	Enero 2015
Agropecuario	\$104.98	\$109.18	\$113.38	\$117.58
Comercio y servicios	\$224.21	\$233.18	\$242.15	\$251.12
Industria	\$219.35	\$228.12	\$236.90	\$245.67
Maquila textil y confección	\$187.60	\$195.10	\$202.61	\$210.11

Fuente: elaboración propia con base en datos de Belloso, M. (2013, 27 de junio). Acuerdan aumento del 12 % al salario mínimo. *La Prensa Gráfica*, p. 24.

Al respecto conviene señalar que, aunque cualquier aumento es positivo pues ayudará a paliar las enormes carencias que atraviesan las personas que devengan el salario mínimo, es claro que el acuerdo logrado es a todas luces insuficiente para representar un verdadero ajuste del salario mínimo a lo establecido en la Constitución, en la cual se estipula que el mismo deberá determinarse de acuerdo al costo de la vida y “ser suficiente para satisfacer las necesidades normales del hogar del trabajador en el orden material, moral y cultural” (art. 38, ord. 2º). Asimismo, tal y como esta Procuraduría ha venido insistiendo en anteriores ocasiones, es necesario reducir las enormes diferencias que existen entre los salarios mínimos de las distintas ramas de la actividad económica<sup>134</sup>.

## **f) Derecho a una vivienda adecuada**

En reiteradas ocasiones, esta Procuraduría ha señalado como preocupante el hecho de que el derecho a una vivienda adecuada es uno de los que menor atención ha recibido por parte del Estado salvadoreño<sup>135</sup>. Por ejemplo, se calcula que para 2009, el déficit de vivienda (incluyendo déficit cualitativo y cuantitativo) alcanza al 58% de los hogares salvadoreños. En el área urbana es de 50%, mientras que en el área rural

131 PDDH (2012). PDDH y sociedad civil piden inconstitucionalidad de Ordenanza que regula el comercio en capital. Documento recuperado de <http://www.pddh.gob.sv/menupress/menunoti/447-pddh-y-sociedad-civil-piden-inconstitucionalidad-de-ordenanza-que-regula-el-comercio-en-capital>; Chavarría, R. (2012, 26 de noviembre). PDDH busca que CSJ declare inconstitucional ordenanza municipal de S.S. *La Prensa Gráfica*. Documento recuperado de <http://www.laprensagrafica.com/PDDH-busca-que-CSJ-declare-inconstitucional-ordenanza-municipal-de-S-S>

132 Transparencia activa (2013, 29 de junio). *Presidente Mauricio Funes sancionará decreto de incremento del 12% al salario mínimo*. Documento recuperado de <http://www.transparenciaactiva.gob.sv/presidente-mauricio-funes-sancionara-decreto-de-incremento-del-12-al-salario-minimo/#sthash.A7UOimRc.dpuf>

133 Belloso, M. (2013, 27 de junio). Acuerdan aumento del 12 % al salario mínimo. *La Prensa Gráfica*, p. 24.

134 PDDH (2012). *Tercer Informe...* Op. cit.

135 PDDH (2011). *Informe de labores Junio 2010 – Mayo 2011*. San Salvador: Autor; PDDH (2012). *Informe de labores Junio 2011 – Mayo 2012*. San Salvador: Autor.

es del 74%. Asimismo, al desagregar los datos según quintiles de ingreso en el área urbana, se observa que en el quintil con menores ingresos, el déficit alcanza al 78% de los hogares (Tabla 24).

**Tabla 24**  
**Déficits totales de vivienda en países centroamericanos, 2009**  
**(porcentaje de hogares)**

País	Nacional	Urbano	Rural	Quintiles urbanos (ingreso per cápita de los hogares)				
				I	II	III	IV	V
El Salvador	58	50	74	78	61	51	38	20
Guatemala	67	56	79	77	70	59	46	30
Honduras	57	42	72	65	55	44	30	18
Nicaragua	78	70	88	87	83	72	68	41
Panamá	39	37	58	62	46	31	26	14
Costa Rica	18	12	26	24	15	9	9	5

Fuente: Adaptado de Bouillion, C. (2012). Un espacio para el desarrollo: Los mercados de vivienda en América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo. p. 29.

Como puede observarse, el problema del déficit habitacional es de una enorme magnitud y los retos son grandes tanto en cuanto a número de viviendas que es necesario construir (déficit cuantitativo), como en el mejoramiento de la calidad de las mismas (déficit cualitativo)<sup>136</sup>. De hecho, este último es todavía mucho mayor, teniendo en cuenta que en él se incluyen las viviendas que no están construidas con materiales adecuados, las que carecen de infraestructura o servicios básicos, las que no se encuentran debidamente legalizadas y los hogares en los que hay hacinamiento (Tabla 25).

**Tabla 25**  
**Déficits de vivienda urbana en países de Centroamérica, 2009**  
**(porcentaje de hogares)**

País	Déficit cuantitativo	Déficit cualitativo				
		Total	Materiales	Hacinamiento	Infraestructura	Falta de tenencia segura
Costa Rica	2	10	5	1	1	6
El Salvador	8	41	21	16	30	17
Guatemala	11	46	32	27	32	10
Honduras	2	41	18	14	26	12
Nicaragua	12	58	33	28	52	10
Panamá	8	29	7	6	22	13

Fuente: Adaptado de Bouillion, C. (2012). Un espacio para el desarrollo: Los mercados de vivienda en América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo. p. 30.

En este contexto, la administración actual, en el Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014, afirmó que la política de vivienda (junto a las políticas de educación y salud) gozaría de una posición estratégica en el quehacer gubernamental<sup>137</sup>:

<sup>136</sup> Los cálculos al respecto presentan importantes variaciones según la fuente. Sobre el déficit cuantitativo las estimaciones van desde 27,356 viviendas hasta 82,203, mientras que en cuanto a déficit cualitativo los reportes reflejan datos entre 315,918 y 433,836 unidades. Ver: PDDH (2011). *Informe de labores...* Op. cit. p. 133.

<sup>137</sup> GOES (2010). *Plan quinquenal...* Op. cit. pp. 85-86.



La falta de acceso a una vivienda digna es una deficiencia estructural de El Salvador. De acuerdo con el censo de población de 2007, el déficit habitacional (cuantitativo y cualitativo) es de más de 500 mil viviendas. La situación es más grave en las zonas rurales del país, donde solo el 47.6% de las viviendas tiene paredes de concreto o mixto, contra un 84.3% en las zonas urbanas. En el ámbito nacional, el material que predomina como piso de la vivienda es el ladrillo de cemento (48% de las viviendas); sin embargo, en el área rural las viviendas que tienen ese tipo de piso constituyen únicamente el 40.7%. Por las razones anteriores, y debido a sus efectos dinamizadores de la economía y a su impacto positivo en la calidad de vida de las familias, a la política de vivienda se le ha asignado una posición estratégica dentro del Plan Quinquenal de Desarrollo.

Pese a lo acertado de este reconocimiento, no cabe duda que en estos cuatro años el abordaje de la problemática de vivienda es una de las mayores deudas con la población. Lastimosamente, alrededor del tema ha existido poca claridad sobre la magnitud del déficit habitacional<sup>138</sup>, sobre las metas del gobierno<sup>139</sup> y sobre los resultados alcanzados a la fecha<sup>140</sup>, lo cual dificulta poder efectuar un análisis preciso sobre los logros obtenidos en esta área.

No obstante, resulta claro que ni siquiera la administración gubernamental suele destacar los logros en materia de vivienda. Esto se puede observar por ejemplo en el documento oficial publicado en 2012, en el que el gobierno presenta tanto la labor realizada en los primeros tres años de gestión, como la agenda pendiente para los dos años restantes<sup>141</sup>. Igualmente, en su discurso del 1 de junio de 2013 ante la Asamblea Legislativa, el presidente Mauricio Funes Cartagena excluyó la temática de vivienda al hacer un recuento de los principales logros reportados en su periodo<sup>142</sup>.

Por otra parte, la desatención a la problemática de vivienda se refleja en que en el último año tampoco se hayan logrado avances sustantivos en cuanto a la elaboración de una política nacional de vivienda<sup>143</sup>, ni en la aprobación de una Ley de Vivienda de Interés Social, a pesar de las demandas de distintas organizaciones<sup>144</sup>.

La desatención estatal a las problemáticas de vivienda resulta especialmente preocupante porque en muchos casos ha llegado a propiciar vulneraciones a derechos humanos sumamente graves. Un ejemplo paradigmático de esto fue lo ocurrido en junio de 2012, en el Caserío Los Ranchos, Cantón La Leona, Municipio de Intipucá, Departamento de La Unión; cuando se efectuó el desalojo forzoso de más de un centenar de personas en la Hacienda San Ramón El Coyalito, en el marco de un proceso condenatorio por invasión de propiedad que únicamente involucraba a 21 personas<sup>145</sup>.

Esta Procuraduría ha condenado este hecho, por las múltiples violaciones a derechos humanos que se presentaron durante el desalojo, ya que una gran cantidad de personas fueron despojadas de sus pertenencias, viviendas, y sufrieron la destrucción de sus cultivos, bajo un operativo en el que los cuerpos de seguridad hicieron uso excesivo de la fuerza. Se ha establecido que con estos actos se cometieron violaciones al derecho a un debido proceso judicial, al derecho a una vivienda adecuada, al

138 ContraPunto (2013, 10 de junio). La demanda de vivienda crece en 15 mil cada año. *ContraPunto*. Documento recuperado de <http://www.contrapunto.com.sv/coyuntura/la-demanda-de-vivienda-crece-en-15-mil-cada-ano>; PDDH (2011). *Informe de labores...* Op. cit.

139 El programa “Casa para todos” ha sido particularmente criticado por la poca claridad que ha existido en torno a sus metas y logros. Una revisión en mayor detalle sobre las discrepancias en cuanto a la información sobre los alcances obtenidos se encuentra en FUSADES (2013). *Cuarto año...* Op. cit. Ver también: Flores, R. (2013, 11 de marzo). Góchez: “El déficit de vivienda disminuirá 25%”. *ContraPunto*. Documento recuperado de <http://www.contrapunto.com.sv/gobierno/gochez-el-deficit-de-vivienda-disminuirá-25>. PDDH (2012). *Informe de labores...* Op. cit.

140 FUSADES (2013). *Cuarto año...* Op. cit.

141 GOES (2012). *El camino del cambio en El Salvador. Creando las bases de una sociedad democrática, incluyente y equitativa*. San Salvador: Autor.

142 Transparencia Activa (2013, 3 de junio). *Discurso del Presidente...*, Op. cit.

143 Basagoitia, F. (2013, 15 de mayo). Buscan impulsar Política Nacional de Vivienda. *La Prensa Gráfica*. Documento recuperado de <http://www.laprensagrafica.com/Buscan-impulsar-Politica-Nacional-de-Vivienda>

144 PDDH (2011). *Informe de labores...* Op. cit.

145 PDDH (2012). *Comunicado de prensa. Violaciones a los derechos humanos en desalojo forzoso de Intipucá, La Unión, los días 18, 19 y 20 de junio 2012*. 9 de julio de 2012.

derecho a la integridad física, al derecho a la libertad personal, al derecho a una alimentación adecuada y al derecho a la salud<sup>146</sup>.

Lastimosamente, hasta la fecha las personas desalojadas no han recibido una atención adecuada del Estado en cuanto al ofrecimiento de alternativas para que puedan acceder a una vivienda. A más de un año del desalojo, las familias afectadas continúan viviendo en condiciones extremadamente precarias, y en estructuras provisionales construidas por sí mismas al lado de la carretera<sup>147</sup>.

De todo lo anterior, se puede concluir que el derecho a la vivienda ha permanecido como uno de los derechos económicos, sociales y culturales menos protegidos en El Salvador. Pese al reconocimiento que la administración actual hizo sobre la importancia de la política de vivienda al inicio de su gestión, las acciones desarrolladas durante estos cuatro años no reflejan que el tema haya sido una prioridad. Esto resulta especialmente lamentable ya que una mayor inversión en el sector vivienda, además de constituir una medida fundamental para garantizar el derecho a una vivienda adecuada, podría haber funcionado como una fuente propicia para dinamizar la economía.

### 1.3. DERECHO A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE<sup>148</sup>



*Personalidades de la vida nacional de diversos sectores apoyan la iniciativa de campaña de la PDDH para la ratificación constitucional del derecho humano al agua.*

El siguiente apartado presenta la situación ambiental en el país en el período del 1 de junio 2012 al 31 de mayo de 2013, así como también las acciones que desde la PDDH se han realizado con el objetivo de señalar algunas prácticas negativas en contra del derecho humano al medio ambiente o advertir situaciones que puedan conducir a su daño. Partiendo de la premisa básica que los problemas ambientales

146 PDDH (2012). Resolución del 9 de julio de 2012, Expediente LU-0244-2011.

147 Fuentes, L. (2013, 20 de mayo). Familias a la intemperie casi un año tras desalojo. *La Prensa Gráfica*. <http://www.laprensagrafica.com/familias-a-la-intemperie-casi-un-ano-tras-desalojo>

148 Elaborado por la Procuraduría Adjunta para la Defensa del Derecho al Medio Ambiente, y editado por la Unidad de la Realidad Nacional.

pueden prevenirse si las autoridades aplican en su accionar aquellos principios fundamentales del derecho ambiental; tales como, la prevención, precaución, la información y consulta ciudadana.

De la misma forma, se señalan los avances que desde la institucionalidad del país -en este periodo- se han realizado, con el objetivo de garantizar el derecho a la protección ambiental, partiendo que de los mismos depende sentar las bases para garantizar un ambiente adecuado para la continuidad de la vida en condiciones dignas.

Es por ello que en esta oportunidad hacemos un análisis de aquellos temas ambientales en los cuales la población ha externado su mayor preocupación, por sus efectos o potenciales efectos en poblaciones enteras; las acciones tanto nacionales como internacionales que desde la Procuraduría se han tomado a fin de advertir y evitar estos daños y las medidas tomadas por las instituciones estatales.

## **a) Minería y Derechos Humanos**

### **i. Posición de la PDDH ante la propuesta de Ley Especial para la Suspensión de los Procedimientos Administrativos relacionados a Proyectos de Exploración y Explotación de Minería Metálica**

El 17 de julio de 2012, a pesar del enorme movimiento social que desde hace años se opone a la introducción de la industria minera metálica en El Salvador y aboga por una prohibición permanente, el Ministerio de Economía (ME) en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) presentaron a la Asamblea Legislativa la propuesta de Ley Especial para la Suspensión de los Procedimientos Administrativos relacionados a Proyectos de Exploración y Explotación de Minería Metálica, concebida como una solución temporal, mientras son superadas ciertas condiciones contenidas en el mismo proyecto de Ley para aprobación de esta industria extractiva.

A partir de tal propuesta y con fundamento en las atribuciones constitucionales conferidas, el 15 de octubre de 2012, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos presentó a la Asamblea Legislativa la *Opinión sobre el Proyecto de Ley Especial para la Suspensión de los Procedimientos Administrativos relacionados a Proyectos de Exploración y Explotación de Minería Metálica presentado por los Ministerios de Economía y Medio Ambiente y Recursos Naturales*; con el objeto que el Cuerpo Legislativo contara con mayores elementos que le permitieran dilucidar la mejor opción para responder a las necesidades de la población salvadoreña, y legislar en lo relativo a la industria de extracción minera metálica en El Salvador, se emitieron las siguientes conclusiones:

En dicha Opinión se señaló que el interés de la PDDH en abordar lo relativo al Proyecto de Ley mencionado se debía a los impactos que en materia de derechos humanos pueden generarse a consecuencia de las decisiones y medidas que el Estado salvadoreño implemente en torno a esta actividad y su regulación, es decir, por las implicaciones para la consecución del desarrollo sostenible y el respeto y garantía a derechos como la vida, la salud, la alimentación adecuada, al medio ambiente sano, al agua y el resto de derechos humanos concomitantes, contemplados tanto en nuestra normativa interna como en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de los que El Salvador es parte.

En el documento, también se destacó que el proyecto de Ley relacionado fue presentado por las autoridades ministeriales ante el seno de la Asamblea Legislativa con el completo desconocimiento de la población, las organizaciones ambientales y esta misma institución nacional de derechos humanos, a pesar de los diferentes pronunciamientos sobre la explotación minera metálica en El Salvador y sus

repercusiones a derechos humanos. De ahí que se remarcara la presentación repentina e inconsulta del proyecto de Ley que generó desconfianza fundada en la población civil y las organizaciones ambientales, aglutinadas en la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, las cuales insisten en la prohibición definitiva de la actividad extractiva de metales en El Salvador.

También se resaltó que la propuesta de Ley de suspensión incluía a la figura del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, como parte de un Comité de Seguimiento a ese proyecto de Ley, sin que previamente se realizara ninguna consulta o informe previo a esta institución nacional de derechos humanos. Dicho Comité tendría la función de poder recomendar el levantamiento de la suspensión de autorización de los proyectos de minería metálica, y la participación del Procurador en el mismo contravendría la naturaleza y la idea de fiscalización que guía gran parte del trabajo de la PDDH.

En su Opinión, el Procurador enfatizó y observó la manera inconsulta en la que el proyecto de Ley fue elaborado y que lejos de dar una solución definitiva en torno al tema, presenta una opción paliativa y riesgosa, pues ya se cuenta con elementos suficientes para determinar que la minería en el territorio no es una opción viable, considerando las condiciones territoriales, ambientales, institucionales y humanas de El Salvador, aunado a informes de expertos independientes, estudios técnicos gubernamentales y la misma Evaluación Ambiental Estratégica del Sector Minero Metálico realizada por el Gobierno salvadoreño; por lo que a criterio del Procurador de Derechos Humanos operaría la prohibición definitiva de la minería metálica. El proyecto de Ley, sin embargo, únicamente enmarcó la posibilidad de levantar la suspensión y no así, al menos, la alternativa de la prohibición definitiva de esa industria en El Salvador.

Por tanto, se hizo hincapié en que dejar normada una suspensión temporal para las autorizaciones de exploración y explotación minera metálica, cuando se tiene claro que existen circunstancias que no mejorarán en el corto plazo puede resultar irresponsable y en una falta a la debida diligencia de los funcionarios que están al tanto de la complejidad de las situaciones ambientales, técnicas, institucionales y sociales a resolver. Cuando se tiene

claridad en que lo que se pretende es crear las condiciones necesarias para el mejoramiento continuo de la calidad de vida de sus poblaciones, que requiere considerar aspectos como la superación de la pobreza, el hambre, la preservación y recuperación del medio ambiente, sus recursos y biodiversidad, así como la prevención de afectaciones futuras.

## **ii. Audiencia ante la CIDH sobre “Minería Metálica y los Derechos Humanos en la República de El Salvador”**

El 31 de octubre de 2012, la Procuradora Adjunta para la Defensa de los Derecho del Medio Ambiente de la PDDH, junto con representantes del Foro del Agua y la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica de El Salvador, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington D.C., en Estados Unidos de América, en razón del otorgamiento de la audiencia de carácter general solicitada a esa instancia cuasi contenciosa por esta institución nacional de derechos humanos, para resaltar la preocupación por las amenazas que los proyectos de explotación minera metálica representan para la población de El Salvador y dando seguimiento a que un año atrás se celebrara en esa misma Comisión una audiencia sobre “Medio Ambiente y Derechos Humanos en El Salvador”, en la que los comisionados presentes mostraron un interés particular en el tema minero metálico y solicitaron se mantuviera informado a ese órgano de las actuaciones del Estado salvadoreño en lo relativo.



La audiencia otorgada en 2012, resultó importante para resaltar el hecho que durante el mes de julio de 2012 el Órgano Ejecutivo presentara la propuesta de Ley para la suspensión temporal de los procedimientos administrativos para la exploración y explotación de minería metálica, previo relacionada; así como la preocupación de la PDDH por la amenaza de proyectos de explotación de metales preciosos a nivel regional con consecuencias transfronterizas para la población salvadoreña.

Una vez desarrollados los planteamientos anteriores, la PDDH, a través de la Procuradora Adjunta en referencia, se realizó el siguiente **petitorio** a la Comisión Interamericana:

- 1) Que la Comisionada encargada de la Relatoría de El Salvador, realice una visita al territorio salvadoreño con el objeto que constate las violaciones a los derechos humanos de la población salvadoreña, tanto consumadas como potenciales, así como las actuaciones del Estado salvadoreño en relación a los proyectos de minería metálica, sus impactos y los conflictos ambientales generados.
- 2) Que a partir de la visita, se realice un informe de país que analice la situación ambiental, con especial atención a la introducción de proyectos mineros metálicos y sus efectos, así como si las medidas legislativas en relación al tema se adecuan a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
- 3) Que a partir de la evidencia científica de los efectos de la industria minera metálica y las consecuencias sociales que conlleva, se solicite al Estado salvadoreño la implementación de las medidas que se dirijan a prevenir los impactos de proyectos mineros a desarrollarse tanto dentro como fuera del territorio salvadoreño. E informe de manera clara, oportuna y suficiente sobre lo actuado al respecto a la población salvadoreña como a esta Institución Nacional de Derechos de Derechos Humanos.
- 4) Que haga un llamado a las autoridades del Estado salvadoreño para que en la toma de decisiones respecto a la introducción de proyectos de gran envergadura, especialmente la relacionada con la industria minera metálica, tomen como base la experiencia en otros países, el conocimiento científico al respecto y los mismos daños ambientales ya generados al país y la consecuente violación a derechos humanos.

Desde la PDDH se mantiene una comunicación constante con este organismo regional de protección de derechos humanos, a fin de informarle sobre el avance o retrocesos en el tema de minería metálica, por considerar que esta es una de las mayores amenazas para los recursos naturales que enfrenta actualmente el Estado salvadoreño.

### iii. Minería Transfronteriza

Otro tema en el que la PDDH ha mostrado un especial interés y preocupación es la amenaza de proyectos de explotación de minería metálica a nivel regional con consecuencias a la población salvadoreña, a raíz de las denuncias recibidas sobre tales situaciones y por lo cual se inició una investigación orientada a advertir la existencia de violaciones a derechos humanos de la población salvadoreña. Este punto, ya ha sido hecho del conocimiento de las autoridades salvadoreñas, como el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Asamblea Legislativa, así como también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la audiencia celebrada en octubre de 2012, problemática que además ha sido presentada al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre empresas y Derechos Humanos en la reunión paralela



al Foro Internacional Empresas y Derechos Humanos que se realizó en el Palacio de Naciones en Ginebra, Suiza, el pasado mes de diciembre.

En todas estas oportunidades la PDDH la posición de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha sido que a pesar que puedan existir amenazas de origen transfronterizo, si conllevan violaciones a derechos humanos de la población de El Salvador, existirán responsabilidades en las que el Estado salvadoreño puede incurrir por la falta de oportuna y efectiva diligencia para prevenirlas.

Por lo que se plantea que las secuelas negativas de la minería metálica han quedado evidenciadas en las distintas dimensiones de la vida social, económica y ambiental, y sus impactos no necesariamente se presentan en un solo país, sino que pueden trascender las fronteras nacionales y, consecuentemente, impactar a uno o a varios Estados colindantes. En este sentido, la PDDH ha considerado que siempre debe hacerse un llamado oportuno al principio de buena vecindad, que la misma Carta de la OEA contempla para los Estados americanos y evitar de esa forma futuros daños que sean irreversibles para la vida y el medio ambiente de nuestros pueblos.<sup>149</sup>

El 10 de enero de 2012, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, hizo público el *Informe Especial sobre el Proyecto Minero “Cerro Blanco” y las potenciales Vulneraciones a los Derechos Humanos en la población salvadoreña*,<sup>150</sup> cuyo objetivo es reflejar los posibles impactos a los derechos humanos de la población salvadoreña, en virtud del desarrollo del proyecto minero Cerro Blanco, ubicado en el municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa en la República de Guatemala y que previsiblemente tendrá efectos nocivos en las cuencas hidrográficas compartidas por ambos países, especialmente en la cuenca del Río Lempa, la más importante fuente hídrica de El Salvador; así como establecer las responsabilidades en las que el Estado salvadoreño puede incurrir a partir de su posición de garante frente a sus habitantes, y los mecanismos que están habilitados internacionalmente frente a la amenaza que representa el proyecto.<sup>151</sup>

La mina Cerro Blanco es una iniciativa desarrollada por Entre Mares de Guatemala, Sociedad Anónima, subsidiaria de la empresa canadiense Goldcorp Inc.; empresa que se dedica a la adquisición, desarrollo y operación de actividades extractivas, principalmente oro, plata, cobre, plomo y zinc en América Central y en otros países del continente americano.

Tal como se señala en el Informe Especial sobre el proyecto Cerro Blanco, éste se localiza aproximadamente a 18 kilómetros de la ciudad de Metapán en el departamento de Santa Ana, República de El Salvador y se enmarca dentro del territorio de la Región Trifinio, que ha sido considerada un área de especial interés para los tres países que la conforman -Guatemala, El Salvador y Honduras-, representando una «unidad ecológica indivisible», que además ha sido declarada por la UNESCO como una Reserva de Biósfera Transfronteriza desde el año 2011.

El lago de Güija en el municipio de Metapán, es uno de los principales cuerpos de agua que podría verse afectado por la actividad minera de Cerro Blanco, cuerpo de agua que forma parte del Complejo Güija, reconocido como un Sitio Ramsar de Importancia Internacional dentro del Estado salvadoreño desde 2010, el cual está sujeto a la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional como Hábitat de Aves Acuáticas, como herramienta de control.

149 PDDH. Informe sobre la Minería Metálica y los Derechos Humanos en la República de El Salvador, en el marco de la audiencia de carácter general celebrada en el 146° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, San Salvador, octubre de 2012.

150 Ver en [www.pddh.gob.sv](http://www.pddh.gob.sv)

151 PDDH. Comunicado de Prensa: Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos presenta Informe Especial sobre el Proyecto Minero “Cerro Blanco” y las potenciales vulneraciones a los derechos humanos en la población salvadoreña, San Salvador, 10 de enero de 2010.

El Informe Especial se fundamenta en los estudios realizados por personas expertas, como la Dra. Dina López Larios y el Ing. Robert H. Robinson, así como en un *Informe Técnico Interinstitucional* de la visita a mina Cerro Blanco realizada por una comitiva de instituciones públicas salvadoreñas, que estableció que el proyecto posee muchas deficiencias y aspectos que causarán impactos negativos en los cuerpos de agua donde irán los vertidos del mismo y que, a través del río Ostúa, desembocarán en el lago de Güija y luego al Río Lempa. Incluso se ha establecido que con el simple proceso de exploración ya existe un riesgo para los recursos hídricos superficiales y subterráneos, para la salud pública y el desarrollo productivo de las poblaciones de Guatemala y El Salvador, a causa de los elementos tóxicos de las aguas termales que se encuentran en la zona del proyecto.

Lo anterior, tal como lo plasmó la PDDH, constituye una evidencia fehaciente que el proyecto minero Cerro Blanco afectaría enormemente los derechos humanos de la población salvadoreña, particularmente los derechos humanos a la vida, a la salud, al medio ambiente, al agua y acceso a la información.

Por lo que, el Informe de la PDDH concluyó con recomendaciones dirigidas en primer lugar al Presidente de la República de El Salvador, para que organice a las entidades del Órgano Ejecutivo que corresponda a que realicen estudios técnicos sobre los impactos y costos que tendrá el proyecto en los recursos naturales de la República de El Salvador, la economía, la salud, la biodiversidad y la vida tanto de las poblaciones que habitan en las zonas aledañas, así como del resto del país; y luego al aparato de Estado salvadoreño, para que sea coherente con la exigencia del respeto a la protección de sus recursos hídricos compartidos, los cuales pueden verse afectados por una actividad minera metálica desarrollada en países vecinos, y finalmente se procesa a la prohibición definitiva de la explotación de minería metálica en el territorio salvadoreño, por medio de una ley en la materia, para lo que también se sugiere el fortalecimiento de espacios de diálogo con la población y actores de la sociedad civil organizada.

Hasta el momento de elaboración de este informe aún no hay repuestas de las autoridades involucradas en la temática que brinden información oficial a esta institución en relación a las acciones y los mecanismos que hasta el momento se han realizado desde el Ejecutivo para salvaguardar los derechos de la población salvadoreña, como se ha solicitado de manera oficial.

## **b) El derecho humano al Agua**

En el marco del día Mundial del Medio Ambiente 2012, el MARN presentó la Política Nacional del Medio Ambiente, entre sus líneas prioritarias de acción contempla la gestión integrada del recurso hídrico.

El 14 de enero de 2013, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado Oscar Humberto Luna, presentó una comunicación oficial dirigida a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa, para la ratificación de las reformas constitucionales del artículo 69 de nuestra Carta Magna, relacionadas al reconocimiento de los Derechos Humanos a la Alimentación Adecuada y al Agua, las cuales fueron aprobadas por la anterior Legislatura 2009-2012, el 19 de abril de 2012. Tal solicitud fue respaldada de las organizaciones sociales que promueven y exigen dicho reconocimiento.

Con la intención que se viabilice la efectiva realización de los mencionados derechos, se solicitó el dictamen favorable de la reforma para su correspondiente ratificación, atendiendo al compromiso con las justas exigencias sociales, el bien común y las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado de El Salvador, entre las que se encuentra la obligación de adoptar todas aquellas medidas

legislativas orientadas a hacer efectivo los derechos humanos reconocidos a nivel internacional, entre los que se encuentran los derechos humanos a la alimentación adecuada y al agua, como consta en instrumentos suscritos por el Estado salvadoreño en el plano internacional y partiendo del hecho que el cumplimiento de tal obligación compete a la Asamblea Legislativa.

En esa ocasión se resaltó que a la luz del principio de buena fe que debe informar la labor de las instituciones del Estado y sus funcionarios, así como siendo consecuentes con la decisión de aprobación de la reforma de la Legislatura 2009-2012, que evaluó y dio por demostrada la importancia y necesidad de su ingreso al texto constitucional, ahora correspondía proceder a la ratificación de las disposiciones referidas sin dilaciones; por lo que, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos demandó la inmediata ratificación de las disposiciones relacionadas.

En el mismo sentido, la anterior posición fue retomada en el *Pronunciamiento de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en el marco del Día Mundial del Agua 2013*, del 22 de marzo de 2013, en el que se destacó la importancia del reconocimiento del agua como un bien común limitado y el acceso a ella un derecho humano fundamental, siendo, asimismo, un factor determinante para la salud pública y una condición previa para la realización del resto de derechos humanos.

De igual forma, en el Pronunciamiento referido se estableció que a partir de la idea de que el Estado salvadoreño tiene la obligación, tanto a nivel nacional como internacional, de ejecutar todas las medidas a su alcance para garantizar el mejoramiento de las condiciones de vida de su población; y por lo tanto, desde la PDDH, se considera primordial la adopción de medidas concretas, como las de carácter legislativo, para dar paso a que se respete, proteja y realice el derecho al agua y, de esa forma, dotar de herramientas a la ciudadanía para hacer exigible y justiciable ese derecho y hacerle frente al continuo deterioro, al mal uso de los recursos hídricos y la distribución desigual en el acceso al vital líquido, tratándose de condiciones que al mismo tiempo incrementan la vulnerabilidad ambiental y alimentaria, y acentúan las situaciones de pobreza y exclusión social de comunidades enteras.

Por lo que en esa fecha se insistió en lo imperante de contar con normativa y una política hídrica que sienta una posición clara respecto al manejo de las cuencas hidrográficas y, en esa línea, se realizó un imperioso llamado a la Asamblea Legislativa, para que de inmediato ratificara la reforma constitucional relativa al derecho al agua, como parte de sus obligaciones de legislar y que, de igual forma, acelerara el proceso de análisis del articulado del proyecto de Ley General de Agua, a la luz de los derechos humanos y bajo el principio de manejo sustentable de las cuencas y procurando la recuperación de aquéllas que se encuentran deterioradas.

El Día Mundial del Agua 2013, también fue aprovechado como ocasión conmemorativa y dentro de la coyuntura de país para que la PDDH anunciara el inicio de una campaña por la ratificación de la reforma constitucional del derecho humano al agua y la aprobación de la Ley de Agua. La campaña que fue acompañada por varias personalidades destacadas de la sociedad salvadoreña, que también se unieron a las exigencias de esta Procuraduría en torno al tema hídrico.

Siempre en relación a las acciones realizadas por la PDDH para visibilizar los problemas hídricos en El Salvador y las subsiguientes afectaciones a derechos humanos, en la audiencia ante la CIDH en la que la PDDH participó y fue relacionada *supra*, fue expuesta la preocupación por la crisis hídrica del país, como también fuera sostenido en la audiencia de 2011 ante Comisión,<sup>152</sup> particularmente en cuanto a la calidad y la cantidad de agua disponible, la contaminación y degradación de dicho bien, convirtiéndose en una amenaza latente para el desarrollo de los pueblos y la continuidad de la vida misma. En esa

152. Audiencia temática “Medio Ambiente y Derechos Humanos en El Salvador”, Washington D.C., Estados Unidos de América, 28 de octubre de 2011.

ocasión, también se vinculó los problemas que la industria minera metálica podría producir en caso de autorizarse proyectos de esta naturaleza en territorio salvadoreño, como la disminución en la cantidad disponible para el consumo humano y la contaminación de las fuentes de agua, pues uno de los impactos más grandes de dicha actividad extractiva es en la calidad y disponibilidad del bien hídrico, tal como ha sido establecido por personas expertas.

Pese a las acciones realizadas desde la PDDH y la demanda de la sociedad civil, sobre la urgente necesidad que El Salvador avance hacia el reconocimiento constitucional y legal de este derecho, como una de las formas de atender los compromisos internacionales que el Estado ha adquirido, hasta el día de hoy, no se ha procedido a la ratificación de la reforma constitucional en la que se adicionan los incisos dos y tres al artículo 69 de la Constitución de la República, con disposiciones orientadas a la protección y garantía del derecho a una alimentación adecuada y el derecho al agua y en el caso de la Ley de Agua, su discusión se encuentra entrampada.

Como esta institución lo ha señalado, la situación del recurso hídrico en el país enfrenta un escenario crítico, que deberá ser atendido con responsabilidad y urgencia, superando intereses de grupos y colocando el interés de las personas en el centro de esta discusión.

La organización de las Naciones Unidas estableció que el derecho al agua es un derecho humano, su disfrute implica la realización de todos los demás derechos, creando condiciones de vida digna para las poblaciones. Por lo tanto, ha señalado que su cumplimiento se enmarca en una obligación de efecto inmediato que los Estados deberán cumplir para asegurar la vida de todos y todas. Que hasta el momento la Asamblea Legislativa, no ratifique este derecho elevándolo a la categoría de derecho constitucional y no agilice la discusión para que el país cuente con una ley que proteja el recurso hídrico son situaciones que no sólo van en contra de las obligaciones jurídicas internacionales, sino en contra de los mismos fines que definen al Estado salvadoreño, establecidos en nuestra Constitución.

Se debe destacar que el Ejecutivo en este tema, en el periodo evaluado, ha jugando un importante papel, ya que fue por medio del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) que se presentó un proyecto de ley, que hoy es discutido en la Asamblea Legislativa; y que por primera vez, en un Discurso Presidencial se señale la urgente necesidad de la aprobación de la Ley de Agua, como lo hiciera el sr. presidente Constitucional de la República, el pasado 1° de junio cuando externó: “La Ley General de Aguas busca garantizar el derecho de nuestra población al agua potable y saneamiento, el eficiente aprovechamiento del agua en la agricultura, la industria y otros sectores, así como el buen manejo de las aguas residuales para prevenir la contaminación de este recurso tan vital. Es una Ley absolutamente necesaria para alcanzar la seguridad hídrica en nuestro país, por lo que insto a este cuerpo colegiado a culminar su proceso de aprobación en los próximos días.”

El MARN al presentar la política de Nacional del Medio Ambiente, antes relacionada, señaló la necesidad de la pronta aprobación e implementación de una Ley General de Agua que debe propiciar un desarrollo institucional que incorpore aspectos importantes como: el agua como bien nacional de uso público, el derecho humano y saneamiento, la sustentabilidad, la adaptación al cambio climático y gestión de riesgos, rectoría y regulación hídrica, asignaciones públicas y, permisos de cobro y asignaciones de permisos para financiar acciones prioritarias, capacitación y aprovechamiento de aguas lluvias, información y planificación hídrica y gobernalidad local del agua. Para alcanzar estos aspectos y crear las bases para una seguridad hídrica, desde la PDDH insistimos en lo urgente de contar con un marco jurídico que establezca las competencias y responsabilidades de todos los actores involucrados y dicte las líneas más importantes que asegure la protección de este recurso.

## c) Contaminación Electromagnética y Derechos Humanos

Otro de los temas que ha sido recurrentemente denunciado, en el periodo evaluado, es la instalación de antenas. Los avances en las telecomunicaciones y el desarrollo e implementación de tecnología a nivel nacional por parte de empresas que se dedican a proporcionar servicios de telefonía celular, internet y televisión por cable, ha generado que las comunidades que habitan en los alrededores de las zonas donde dichas empresas ubican torres autosoportadas de antenas, denuncien, ante esta Procuraduría, su preocupación a consecuencia de las posibles afectaciones a la salud que las radiaciones emitidas por los campos electromagnéticos producidos por las referidas antenas-especialmente las de telefonía celular-, pueden llegar a ocasionar en la salud de las personas.

La problemática generada con la instalación de las referidas antenas, es tan compleja, que ha llevado a la PDDH a recomendar<sup>153</sup>, en reiteradas ocasiones, al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que evalúe, revise y reconsidere los criterios en los que se fundamenta para categorizar a las antenas dentro del grupo A, es decir, como actividad, obra o proyecto con impacto ambiental potencial bajo, que no requiere presentar documentación ambiental, establecido lo anterior, dentro del documento de Categorización de Actividades, Obras o Proyectos, emitido por dicho ministerio<sup>154</sup>.

En razón de lo anterior, el cinco de septiembre del año 2012, el MARN convocó a esta Procuraduría para que integrara la “*Mesa Interinstitucional de Trabajo sobre la Regulación de las Radiaciones No Ionizantes*” –RNIs-, con el objeto de abordar la temática de instalación y funcionamiento de antenas de telefonía celular. La PDDH, acudió a dicha convocatoria no sin antes aclarar que se tendría participación en la referida Mesa únicamente en calidad de observadores, en atención a que parte de la labor conferida por mandato constitucional y legal a la PDDH, es la de fiscalizar la labor de las instituciones del Estado, por lo que la participación de esta Institución se limitó a observar las actuaciones de las entidades que conforman dicha Mesa como son: Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones-SIGET-, Fiscalía General de la República-FGR-, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales-MARN-, Defensoría del Consumidor, Organismo Salvadoreño de Reglamentación-OSARTEC-, Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador-OPAMSS-, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas-UCA-, Universidad de El Salvador-UES, entre otros.

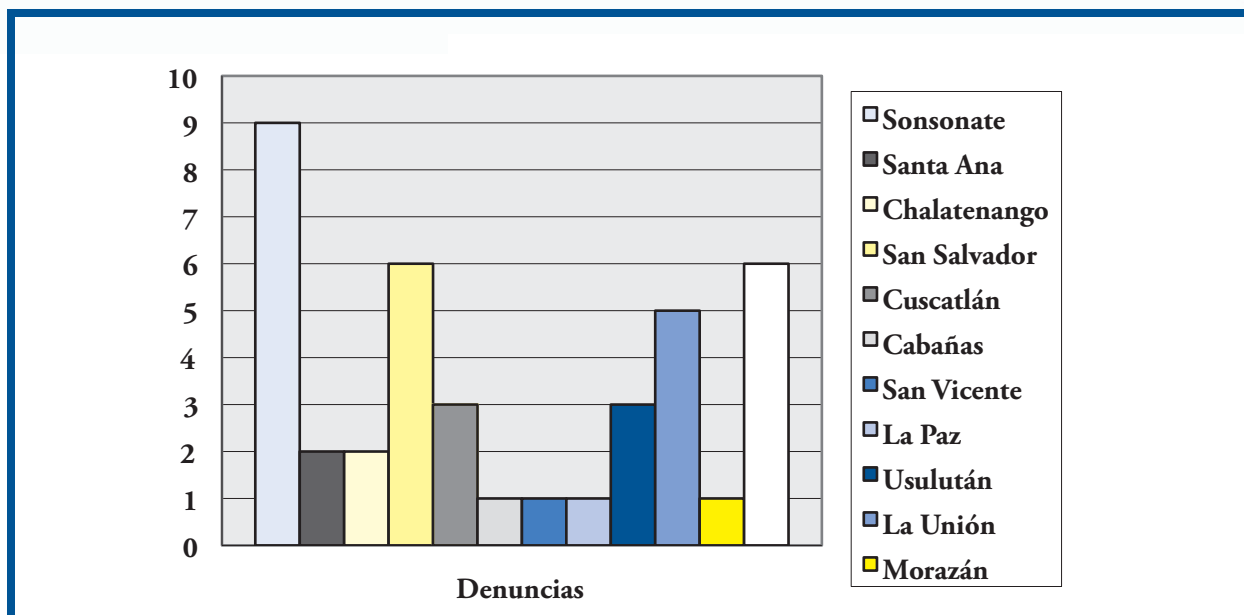
Hasta el mes de mayo del año 2013, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha recibido un total de cuarenta<sup>155</sup> denuncias por instalación de antenas de telefonía celular a nivel nacional; denuncias en las que se tiene como común denominador, la falta de consulta y participación ciudadana ante la ejecución de este tipo de proyectos, siendo las principales instituciones denunciadas, las Alcaldías Municipales de las circunscripciones territoriales donde se encuentran instaladas las torres autosoportadas de antenas de telefonía celular, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, principalmente ante vulneraciones al derecho al medio ambiente, derecho a la salud y a la información y participación en decisiones que afectan al medio ambiente. Los principales departamentos donde se reporta la mayor cantidad de denuncias son Sonsonate, San Salvador y San Miguel, de acuerdo al siguiente gráfico:

153 Expediente SA-0150-2009

154 Ver en [www.marn.gob.sv](http://www.marn.gob.sv)

155 Ver Gráfico 1.





Fuente: Procuraduría Adjunta para la Defensa del Medio Ambiente, PDDH

Por otra parte y en relación a la exposición a campos electromagnéticos y la necesidad de realizar estudios, principalmente ante la proliferación en el uso de tecnología celular, especialmente por la niñez y adolescencia<sup>156</sup>, esta Procuraduría ha tomado en consideración lo establecido por la Organización Mundial de la Salud –OMS-, que ha afirmado al respecto que no hay pruebas que apunten a la incidencia en los casos de cáncer, ni alteraciones del sueño o de la función cardiovascular de las personas; no obstante reconocer los vacíos existentes en lo relativo a los efectos generales en la salud por la exposición a campos de radiofrecuencia de las estaciones base<sup>157</sup>.

Además, la Comisión Internacional de Radiación No Ionizante (ICNIRP por sus siglas en inglés), que estudia los efectos biológicos y en la salud que puedan producir la exposición a los campos electromagnéticos, ha elaborado las *Directrices para limitar la exposición a campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos (hasta 300GHz)*, en las que ha concluido que “los efectos potenciales de largo plazo por la exposición, que demuestren un incremento en el riesgo de cáncer, no cuentan con información disponible suficiente para proporcionar una base para el establecimiento de restricciones a la exposición (...) aunque la investigación epidemiológica ha proporcionado evidencia sugestiva, pero no convincente, de una posible asociación de efectos carcinogénicos y una exposición a niveles de densidad de flujo magnético de 50/60Hz sustancialmente más bajos que los recomendados por dichas directrices”.

A partir de lo anterior, desde la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, se ha sostenido que:

*“Aunque las posibles implicaciones de los campos electromagnéticos en la salud humana no sean claras, constituye una obligación estatal, como parte del deber de prevención frente a posibles afectaciones a derechos humanos a la salud y un medio ambiente sano, la adopción de medidas preventivas, con el objeto de garantizar el goce de estos derechos<sup>158</sup>”.*

156 OMS, Nota descriptiva N°193: *Los campos electromagnéticos y la salud pública: teléfonos móviles*, junio 2011.

157 OMS. Nota descriptiva N°304: *Los campos electromagnéticos y la salud pública: estaciones base y tecnologías inalámbricas*, mayo 2006

158 Expediente SA-0150-2009, Resolución del 1 de julio de 2009.

Asimismo, desde esta Institución de derechos humanos se ha sostenido que en problemáticas como la instalación de antenas de telefonía celular, cobra especial relevancia el principio de precaución, el cual establece la necesidad de adoptar medidas de precaución cuando haya peligro de daño grave o irreversible al medio ambiente, no debiendo utilizarse la falta de certeza científica para la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente<sup>159</sup>.

Por otra parte, durante el período evaluado, la PDDH ha advertido que en la mayoría de las denuncias recibidas respecto de la instalación de antenas de telefonía celular, las autoridades municipales no aplican el debido proceso administrativo cuando una empresa incumple con los permisos municipales que la ley establece para su instalación, y lo que es más ya que son precisamente las Alcaldías Municipales, las encargadas de autorizar o no, cualquier tipo de proyectos o infraestructuras que se pretendan implementar en sus respectivas circunscripciones territoriales, tal y como lo expresa el artículo 4 del Código Municipal en relación a la competencia de los mismos.

En ese sentido, esta Institución ha manifestado que a nivel municipal se debe promover la participación ciudadana mediante los mecanismos idóneos como el cabildo abierto, consulta popular, vecinal, etc, para informar a la población públicamente de la gestión municipal, y tratar asuntos que los mismos vecinos hubiesen solicitado. Partiendo del hecho que la persona es la justificación de la actividad de las instituciones del Estado, incluyendo las municipalidades<sup>160</sup>.

Por lo anterior, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, considera que este tipo de proyectos, como lo es la instalación de torres autosoportadas de telefonía celular, debe ser sometida a la opinión de la población del municipio de que se trate, poniéndoles a disposición toda la información que sobre la materia existe y que sean ellas, luego de poseer toda la información la que tomen las decisiones que les afecte, como mecanismo de protección del medio ambiente y democratización de la administración pública y municipal.

Hasta la fecha del presente informe, como consecuencia de las reuniones entre las instituciones arriba señaladas, se obtuvo como resultado la presentación a la referida Mesa, de un plan piloto para realizar un mapa de radiaciones del Área Metropolitana de San Salvador, así como el análisis legal que diferentes instituciones están realizando para la elaboración de una ley marco en el tema. Sin embargo, desde febrero del año 2013, ésta Procuraduría no ha recibido convocatoria ni informe sobre los avances en relación al trabajo de la referida mesa, ni las acciones finales que SIGET y MARN implementaran en relación a la instalación de antenas de telefonía celular a nivel nacional.

#### **d) Protección de los Recursos Naturales y el proceso de ratificación del Protocolo de Nagoya**

El Salvador tiene un alto nivel de biodiversidad de especies. Tiene más de 50,000 especies de hongos, 1,002 árboles, 521 orquídeas, 759 peces de agua dulce y agua salada, 709 mariposas, más de 600 de algas, 548 pájaros, 481 moluscos, 403 hierbas, 294 líquenes, 23 musgos, 252 helechos, 127 bromelias, 191 crustáceos, 144 mamíferos, 127 anélidos, 99 reptiles, y 32 anfibios. El Salvador no tiene animales endémicos. Tiene unas pocas plantas endémicas, pero algunas especies de plantas que sólo se encuentran en el norte de América Central<sup>161</sup>.

159 Principio 15. Declaración de Río

160 Pronunciamiento del Procurador Para la Defensa de los Derechos Humanos, frente a la reciente autorización e instalación de antenas de telefonía celular o telecomunicaciones en espacios públicos municipales, San Salvador, 13 de febrero de 2012.

161 USAID. *Informe sobre los Bosques Tropicales y Biodiversidad en El Salvador*, Pág. 11, marzo de 2010

La superficie forestal de El Salvador es de 425.266 hectáreas. Los departamentos con mayores porcentajes de cubierta forestal son Santa Ana, Ahuachapán, Sonsonate y La Libertad. Los bosques cubren entre el 20 y 30% de los departamentos de Cuscatlán, La Paz, San Miguel, San Salvador y Usulután. Los departamentos con menos de 20% de cobertura forestal son Cabañas, San Vicente, La Unión y Chalatenango. Estos datos indican que el porcentaje de la cobertura forestal es mayor en los departamentos con extensos campos de café, ya que las plantaciones de café con árboles de sombra se clasifican como bosques, y en los departamentos más montañosos<sup>162</sup>.

A partir de lo anterior, es evidente que nuestro país cuenta con una riqueza natural y genética lo cual genera obligaciones para el Estado en relación a la protección y conservación de los mismos, tal y como lo establece el precepto constitucional<sup>163</sup> cuando establece:

*“Es deber del Estado proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente, para garantizar el desarrollo sostenible. Se declara de interés social la protección, conservación, aprovechamiento racional, restauración o sustitución de los recursos naturales, en los términos que establezca la ley”.*

Partiendo de lo anterior, en el período evaluado y a solicitud de la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior, de la honorable Asamblea Legislativa, la PDDH emitió opinión respecto de la ratificación del *“Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización”*<sup>164</sup>. Lo anterior, de conformidad a la facultad constitucional y legal conferida a esta Institución respecto de promover la firma, ratificación o adhesión a tratados internacionales sobre derechos humanos, así como emitir opiniones sobre proyectos de ley que afecten el ejercicio de los mismos, como un mecanismo para protegerlos y contribuir en la construcción de un país democrático, justo y digno, lo anterior al amparo de lo establecido en los artículos 11 numeral 9º y 12 numeral 5º de la *Constitución de la República* y artículos 2 literal h) y 87 del *“Reglamento para la aplicación de los Procedimientos del Sistema de Protección de los derechos Humanos de la PDDH”*.

Los sucesos que dieron origen al referido Protocolo y consecuentemente a la opinión emitida por la PDDH durante el período evaluado, se derivan del Convenio sobre la Diversidad Biológica –en adelante CDB o el Convenio–, el cual fue el primer acuerdo mundial para proteger los aspectos de la biodiversidad, y fue adoptado en Nairobi en el año 1992 y abierto para la firma de la comunidad internacional en la Cumbre de Río”, el 5 de junio de 1992, entrando en vigor el 29 de diciembre de 1993.

Este instrumento se convirtió en el primer acuerdo mundial que aborda todos los aspectos relativos a la biodiversidad; a saber: recursos genéticos, especies y ecosistemas. Reconoce, por primera vez, que la conservación de la biodiversidad es interés común de toda la humanidad, así como parte integrante del proceso de desarrollo, con una nueva visión que debiera evidenciar el aporte de la diversidad biológica en el desarrollo de los países y su contribución en la reducción de la pobreza

En el año 2010 y después de seis años de negociación entre los miembros suscriptores del referido Convenio, los 193 países –incluido El Salvador–, reunidos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica –COP 10–, el 29 de octubre del referido año, en Nagoya, Japón, adoptaron el *“Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización”*, –en adelante “El Protocolo de Nagoya” o “El Protocolo”–.

<sup>162</sup> Ídem.

<sup>163</sup> Art. 117 de la Constitución de la República de El Salvador

<sup>164</sup> Ver Opinión en [www.pddh.gob.sv](http://www.pddh.gob.sv)

En tal sentido, en el mes de noviembre del año 2012, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos consideró que para que el Estado de El Salvador proceda a la ratificación del “Protocolo de Nagoya”, es fundamental partir de un estudio minucioso del contenido del mismo y su relación con el fortalecimiento de los derechos humanos de la población salvadoreña; además es prioritario proceder a escuchar a los diferentes sectores de la sociedad civil con posición en el tema, como también a expertos y expertas por tratarse de un tema en donde el conocimiento científico es determinante a fin de tomar decisiones informadas y con criterio técnico<sup>165</sup>.

Respecto de la protección del medio ambiente, esta Procuraduría señaló que previo a considerar la posibilidad de ratificar el referido “Protocolo”, se tenga en cuenta los problemas de la débil institucionalidad por la que actualmente atraviesa el país.

Para esta institución nacional de derechos humanos, es importante destacar que en relación a la utilización de los recursos naturales del país, es imperante implementar y garantizar el cumplimiento de los tres pilares fundamentales del derecho a la participación ciudadana, como son el acceso a la información ambiental, el derecho a la participación informada en la toma de decisiones ambientales y el derecho de acceso a la justicia.

Por otra parte, la PDDH destacó la necesidad de aprobar una ley de soberanía y seguridad alimentaria, que promueva la recuperación de la capacidad productiva nacional, la agricultura a pequeña escala, la satisfacción de la demanda interna de alimentos, entre otros. De ahí que si El Salvador no cuenta con la protección efectiva nacional señalada, no estaría aún en la capacidad ni en la conveniencia de ratificar el “Protocolo de Nagoya”, en tanto no se garantice una protección interna de la seguridad alimentaria, la agricultura y los derechos de los agricultores de El Salvador.

Finalmente, esta Procuraduría ha tenido conocimiento que la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior, de la honorable Asamblea Legislativa, atendiendo a las recomendaciones efectuadas por esta Institución de derechos humanos en la referida opinión, escuchó al Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Vice ministerio de Salud, representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministro de Relaciones Exteriores y de la Defensa Nacional, representante de la Unidad Ecológica Salvadoreña, Viceministra de Ciencia y Tecnología, Director Ejecutivo de CONACYT y a representantes de la Universidad de El Salvador y Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

Hasta la fecha del presente informe, la Asamblea Legislativa aún no ha ratificado el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización.

El pasado 22 de mayo, en el marco de la conmemoración del Día de la Diversidad Biológica, el MARN presentó la Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB). De acuerdo a la página electrónica de ese ministerio: “Este documento pone al descubierto la problemática que enfrenta la diversidad biológica en el país, sus causas antrópicas y naturales y cómo estas afectan el desarrollo de la vida económica en el presente y en el futuro, pero además, propone articular un esfuerzo nacional alrededor de tres ejes fundamentales:

**Integración estratégica de la biodiversidad en la economía**, particularmente en la agricultura, la pesca y el turismo.

**Restauración y conservación inclusiva de ecosistemas críticos**, especialmente manglares, ríos, humedales y bosques de galería en las riberas de los ríos.

<sup>165</sup> Ídem.

**Biodiversidad para la gente**, que se enfoca en la población más vulnerable y excluida, a partir del rescate de prácticas tradicionales de conservación, el reconocimiento de derechos de aprovechamiento y el apoyo a opciones económicas locales basadas en la biodiversidad.”<sup>166</sup>

Por lo que se considera que el Estado salvadoreño al proceder a ratificar convenios que tengan como objeto la regulación internacional de la biodiversidad, debe tomar en cuenta la estrategia ya diseñada por el MARN en la materia, que apunta al rescate de los ecosistemas y a la conservación y aprovechamiento de los mismos por parte de las poblaciones más vulnerables y excluidas.

## e) La Gestión de Riesgos y los Derechos Humanos

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en relación a la gestión de riesgos de desastres y la vulnerabilidad ambiental del país, ha manifestado en reiteradas ocasiones la necesidad de atender la gestión integral de riesgos y el ordenamiento territorial como puntos prioritarios de las políticas de desarrollo<sup>167</sup>.

Esta Procuraduría, durante los meses de junio a octubre 2012, ha dado seguimiento a la Mesa de diálogo instalada en esta Institución ante la situación de riesgo de desastre que representa el deterioro de la obra de paso “Puente El Coro”, ubicado sobre el Río Acelhuate, en la zona conocida como “La Chacra”, en el municipio de San Salvador.

En el mes de julio de 2012 la PDDH, a solicitud de la Junta Directiva de la honorable Asamblea Legislativa emitió informe respecto al estado de la Mesa de Negociación entre la Alcaldía Municipal de San Salvador y Ministerio de Obras Públicas en relación a la reparación del “Puente El Coro”.

En dicho informe, esta institución de derechos humanos señaló como principal punto de preocupación, la falta de acuerdos concretos y de coordinación interinstitucional entre la Alcaldía Municipal de San Salvador y el Ministerio de Obras Públicas<sup>168</sup>.

En razón de lo anterior, el ocho de octubre del año 2012, como Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, se emitió un pronunciamiento<sup>169</sup> en relación al deterioro de la referida obra de paso, señalando que en problemáticas donde la situación de riesgo para la vida de las personas es inminente, el contar con el financiamiento necesario o el regirse por las competencias de actuación institucional determinadas por las leyes, no exime de responsabilidad para la plena consecución de los derechos humanos de la población. Situación que deriva en la aplicación del principio de subsidiaridad, que debe tener presente la vertiente positiva o habilitante del concepto de interés local por la que el ente estatal debe intervenir para auxiliar a los entes inferiores cuando éstos no puedan alcanzar por sí mismos los fines del Estado, tal y como ha expresado nuestra jurisprudencia constitucional<sup>170</sup>.

Finalmente y como resultado de la Mesa de Diálogo instalada por esta Institución, en el mes de noviembre del año 2012, personal de esta Procuraduría en conjunto con el Ministro de Obras Públicas, señor Gerson Martínez, se constató el inicio de las obras de mitigación en el referido puente.

Como Procuraduría señalamos que si bien durante el período invernal 2012, este no generó repercusiones e impactos lamentables en la infraestructura, economía y vida de los habitantes del país, esto debe

166 [www.marn.gob.sv](http://www.marn.gob.sv)

167 PDDH. “Informe de Labores, junio 2011-mayo 2012”.

168 Ver Informe en [www.pddh.gob.sv](http://www.pddh.gob.sv)

169 PDDH. “Pronunciamiento del señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Humberto Luna, respecto de la situación de riesgo que representa el deterioro de la obra de paso: “Puente El Coro” ubicado sobre el Río Acelhuate, zona de “La Chacra”, municipio de San Salvador. Ver en [www.pddh.gob.sv](http://www.pddh.gob.sv).

170 Sala de lo Constitucional, Sentencia de Inconstitucionalidad 35-2002/38-2003/1-2004/4-2004, del veintitrés de octubre de 2007.



ser aprovechado para que las instituciones del Estado, competentes en el tema, profundicen en los mecanismos necesarios para responder de forma preventiva y no reactiva ante los fenómenos naturales –lluvias, sismos, erupciones volcánicas– que pudiesen suscitarse en el país, teniendo siempre presente la necesidad de implementar acciones encaminadas a una gestión integral del riesgo, propiciando además una cohesión comunitaria, privada y gubernamental.

En ese sentido en este periodo no se puede dejar de reconocer la labor realizada por el MOP en materia de estructura vial y trabajos en cárcavas que amenazan la integridad de las personas que viven o transitan por el lugar de formación; así como también las respuestas positivas de esa institución a las diversas recomendaciones y convocatorias a las mesas de diálogo realizadas desde PDDH, las que se instalaron para encontrar solución a los problemas que muchas comunidades han demandado.

Sin embargo, ante la situación de alta vulnerabilidad que vive el territorio nacional se demanda el fortalecimiento y apoyo financiero a este Ministerio con el objetivo que continúe realizando su trabajo en protección de la integridad de las personas y sus bienes. Pero más allá, y como medida duradera también es importante que se tomen todas las medidas para proteger y conservar el medio ambiente, así como, ordenar el territorio, desde una visión de cuenca.

## **f) Cambio Climático**

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en el mes de agosto del 2012, emitió un pronunciamiento ante la situación de sequía que enfrentó el país en la zona oriental durante la primera quincena de agosto. Lo anterior a consecuencia de los efectos del cambio climático que se perciben con mayor frecuencia e intensidad en el país.

En razón de lo anterior, esta Institución señaló<sup>171</sup> como importante que el Órgano Ejecutivo, a través de las instancias correspondientes, realizara esfuerzos para implementar la Estrategia Ambiental de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del Sector Agropecuario, Forestal y Acuícola, presentada en junio de 2012.

Por otra parte, y en el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente 2012, esta Procuraduría recalcó las observaciones realizadas por la sociedad civil en lo relativo al cambio climático, donde demandan lo inconsulto y deficiente de las propuestas presentadas al Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (PCPF por sus siglas en inglés), lo que, a criterio de la sociedad civil, harán difícil la implementación de una estrategia y plan nacional de cambio climático acorde a los compromisos internacionales adquiridos en la materia<sup>172</sup>. Como también volvió a lamentar que El Salvador aún no cuenta con un Plan Nacional para hacerle frente al Cambio Climático.

El pasado mes de Abril en el marco de conmemoración del Día Mundial de la Madre Tierra, el MARN dio a conocer la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que será base para la construcción del Plan Nacional de Cambio Climático. Si bien reconocemos la importancia de la presentación de este documento, desde la PDDH lamentamos la tardanza en su elaboración, cuando sabemos que El Salvador, en los últimos años, se ha colocado, entre los países con mayor riesgo climático en el mundo.

171 Pronunciamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, ante la situación de sequía que enfrenta el oriente del territorio nacional y su impacto en los derechos humanos de las poblaciones afectadas, San Salvador 15 de agosto de 2012.

172 Pronunciamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente 2012, San Salvador 5 de junio de 2012.

## **g) Falta de Reparación en Casos Ambientales**

Si bien, como se mencionó en el *Pronunciamiento del señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente 2012*, el 5 de junio de 2012, en lo que respecta al acceso a la justicia ambiental en abril de ese mismo año la reformas a la Ley de Medio Ambiente, que permitieron la creación formal de los Juzgados Ambientales de Primera Instancia y las Cámaras de Segunda Instancia, como entidades especializadas para facilitar el acceso a la justicia y la posibilidad jurisdiccional de decretar medidas para la restauración de los daños ambientales o las acciones compensatorias que correspondan, significó un avance positivo que, además respondía a demandas reiteradas de la sociedad civil y de esta misma institución nacional de derechos humanos, por los problemas constatados a la fecha para lograr la reparación de los daños ambientales por medio de la indemnización a las víctimas y la remediación del medio ambiente, que han permitido la impunidad en materia ambiental.

Sin embargo, a pesar de dichas reformas, durante el año 2013 tampoco fue concretizada la creación de dichas instancias y se continúa teniendo una deuda con el tema del acceso a la justicia y reparación ambiental.

### **i. Contaminación del Río San Sebastián con drenaje ácido y la ausencia de reparación ante este grave hecho**

Uno de los temas de recurrente abordaje en los últimos años, por parte de la Procuraduría, en vista de la repercusión aún incuantificable que representa, es la preocupante contaminación del Río San Sebastián, ubicado en el municipio de Santa Rosa de Lima, al nororiente del país, presuntamente provocado por la explotación minera metálica de décadas atrás y los impactos en la vida y en los ecosistemas.

El 5 de junio de 2012, en el *Pronunciamiento del señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente 2012*, la PDDH nuevamente refirió que este caso de contaminación vulnera derechos al agua, la alimentación, el medio ambiente y la vida misma de las poblaciones que viven en las riberas del río, sin que el caso sea atendido por las autoridades y se determine de manera oficial el origen de la contaminación para proceder a su reparación.

La contaminación del Río San Sebastián incluso cuenta con datos oficiales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que llevó a cabo la toma de muestras en el Río identificando “un punto de afloramiento de agua proveniente del sector utilizado por la Mina San Sebastián, en el Cerro Cociguina” en el que se ha encontrado drenaje ácido y el resultado de un análisis de laboratorio para el cianuro indica niveles que sobrepasan los estándares internacionales de calidad de agua para riego,<sup>173</sup> situación que justifica aún más la adopción de medidas urgentes para tratar el problema. Desde la PDDH continuamente se ha demandado la urgente necesidad de proveer, en un primer momento, de agua potable a las poblaciones aledañas, con el objetivo de minimizar los impactos, especialmente en la niñez.

### **ii. La falta de reparación de las víctimas de la tragedia ocurrida en el Arenal Monserrat de San Salvador**

El 3 de julio de 2012 se conmemoró el cuarto aniversario de la tragedia ocurrida en el Arenal Monserrat

<sup>173</sup> MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, “Mina San Sebastián”, 7 de septiembre de 2012, vid. [http://www.marn.gob.sv/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1527&Itemid=356](http://www.marn.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=1527&Itemid=356)

de San Salvador, en la que fallecieron 32 personas al desbordarse el río Acelhuate, por tal razón, en la fecha mencionada se emitió el *Pronunciamiento a cuatro años de los lamentables acontecimientos de la noche del tres de julio de 2008 en el Arenal Monserrat de San Salvador* de la PDDH, en el que se reconoció que las autoridades iniciaron medidas de mitigación y prevención más integrales en la zona, pero las familias de las víctimas y la víctima sobreviviente continúan sin recibirla atención debida.

Se destacó, tal como se hiciera en el Informe Especial y el resto de pronunciamientos emitidos por la Procuraduría en relación al caso, que es una obligación de las instituciones de Estado la reparación de las víctimas de violaciones a derechos humanos, atendiendo de forma proporcional a la gravedad de los daños materiales e inmateriales sufridos y previniendo futuras trasgresiones.

En ese sentido, el pronunciamiento rescató que la reparación es un mecanismo determinante para evitar la revictimización y asegurar la rehabilitación de las personas en la medida de lo posible. Por lo que, mientras este aspecto no sea atendido de manera adecuada se considera que continúan produciéndose afectaciones a las víctimas que sobrevivieron a la tragedia ocurrida cuatro años atrás en el Arenal Monserrat.

Como se ha dicho, la situación de vulnerabilidad social y ambiental del área urbana de San Salvador, así como la del resto del país, es evidente y requiere la adopción de medidas integrales e idóneas para hacer frente a tales condiciones, y superar las simples medidas paliativas y aisladas que implican el desgaste de recursos y la falta de efectividad para evitar desastres y afectaciones a los derechos humanos de la población.

Finalmente, el Pronunciamiento refirió que se esperaba que las obras iniciadas por el Ministerio de Obras Públicas en la zona del Arenal Monserrat fueran suficientes, oportunas y se tomara en cuenta a las víctimas para informarles al respecto; pero a su vez, se reiteró el llamado para que se efectúe a un acto de perdón público por las víctimas mortales, dirigido a sus familias y a la sociedad en su conjunto, por el daño irreparable producido hace cuatro años; así como respecto a la implementación de medidas para la reparación integral de las afectaciones sufridas por ellos, como se hiciera en la *Posición de seguimiento respecto al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el caso de los lamentables acontecimientos de la noche del tres de julio de 2008 en el Arenal Monserrat de San Salvador*, del mes de julio de 2011.

### **iii. Contaminación por plomo en Sitio del Niño y la ausencia de justicia ambiental**

En relación a la falta de acceso a la justicia ambiental, no puede dejar de mencionarse las dificultades en el caso de contaminación por plomo en el cantón Sitio del Niño, en el municipio de San Juan Opico, del departamento de La Libertad, en el que después del cierre de la fuente de contaminación en el año 2007, aún no se han llevado a cabo medidas integrales para la reparación del daño causado, y en el caso del proceso penal incoado, se dieron innumerables dilaciones técnicas que hicieron difícil la conclusión del mismo, hasta terminar con una sentencia penal absolutoria de los imputados señalados. Causando de esa forma un desgaste de las víctimas, de recursos humanos y técnicos del Estado, sin que pudiera determinarse a los responsables de la contaminación.<sup>174</sup>

Este caso emblemático, demuestra nuevamente la importancia de crear una instancia especializada que permita la reparación de las víctimas y daños ambientales, y más allá, la necesidad de implementar medidas de prevención y control efectivos para evitar daños ambientales que sean de imposible o difícil reparación, como suele suceder en los relativos a la materia ambiental.

<sup>174</sup> PDDH. Pronunciamiento del señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente 2012, San Salvador, 5 de junio de 2013.

## 1.4. DERECHOS DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD<sup>177</sup>



*El señor Procurador, licenciado Oscar Humberto Luna junto a un grupo de niñas y niños que asistieron a la presentación del Protocolo Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en Situaciones de Emergencia, en el Departamento de Abuachapán, el 20 de febrero de 2013.*

### a) Generalidades

Conviene formarnos una idea del contexto social en que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ) salvadoreños viven en el país. De acuerdo a cifras oficiales<sup>178</sup> para el año 2011, en los 21,041 kilómetros cuadrados de El Salvador habitaba un total de 6 millones 213 mil 730 personas, lo que implicaba una densidad poblacional de 295 habitantes por cada kilómetro cuadrado, considerada como una de las más altas en América Latina y una de las 30 más elevadas del mundo. Por área geográfica, el 62.3 % de la población reside en las zonas urbanas, mientras que el restante 37.7 % lo hace en la rural. Con relación a la población por sexo, el país cuenta con mayor proporción de mujeres (52.3 %) que de hombres (47.7 %). Al comparar la población por zona geográfica y por sexo, para el año 2011, la proporción de mujeres con respecto al total de la población es levemente mayor en el área urbana (53.3 %) que en la rural (50.7 %).

La misma fuente reporta para el 2011, un total de 1 millón 580 mil 199 hogares, de los cuales 65.3 % se encuentran en el área urbana y el 34.7 % en la rural. Los hogares con jefatura femenina representan el 34.7 % del total de hogares a nivel nacional; por área geográfica, se tiene que en lo rural el número de hogares es de 29.7 % y en lo urbano 37.5 %. Un poco más de la tercera parte de la población del país está integrada por niñas, niños y adolescentes, el 37.1 % de la población tiene menos de 18 años de edad, en términos absolutos y de acuerdo con las proyecciones de población, significa un poco más de dos millones de NNA (2,303,528).

<sup>177</sup> Elaborado por la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Niñez y Juventud, y editado por la Unidad de la Realidad Nacional.

<sup>178</sup> Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) del Ministerio de Economía: *Encuesta de Hogares y Propósitos*, 2011.



## b) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a vivir libres de violencia

Las distintas formas de violencia que sufren las NNA en El Salvador han sido parte de la vida cotidiana, hasta el punto de verse “naturalizadas” y aceptadas como método de convivencia humana, en tal sentido, obtener una definición única de violencia es muy complejo, ya que es un concepto que se expresa en diversas situaciones, que en consecuencia puede definirse desde diversos ángulos, al respecto, González y Aldana<sup>179</sup> definen la violencia como, “cualquier acción que se expresa, ya sea de manera verbal, física o social, la cual lesiona los derechos básicos de las personas y degrada su condición, lo cual, en casi todos los casos, impide la manifestación del ejercicio del derecho”.

Según la Organización de las Naciones Unidas<sup>180</sup> la violencia no sólo se refiere a la consumación de actos delictivos, sino que es conceptualizada como un proceso que acontece en diferentes ámbitos, y que cuenta con la participación de distintos actores, causas y efectos, tal es el caso de la violencia sufrida por niños y niñas a manos de las personas adultas. La Organización Mundial de la Salud<sup>181</sup> define la violencia como: “El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”.

La UDAPE afirma que la violencia contra la niñez y adolescencia<sup>182</sup> “es el maltrato ejercido contra niños, niñas y adolescentes en el ámbito familiar o extra familiar. El comportamiento del agresor puede presentarse por acción, omisión o supresión, generando una agresión leve o severa y sus causas pueden estar vinculadas con factores individuales, familiares, socioeconómicos o ambientales, donde el agresor con el fin de corregir, disciplinar, educar o imponer trabajos inadecuados y excesivos provoca un daño real o potencial, físico, mental o emocional al niño, niña o adolescente”.

La violencia por acción abarca la agresión física, la cual está referida a cualquier lesión infligida, no accidental, que produce un daño físico, enfermedad o los coloca en grave riesgo de padecerla. Puede ser el resultado de uno o dos incidentes aislados, o puede ser una situación crónica de abuso. Las lesiones incluyen trastornos reconocidos más allá de la inflamación, irritación o el enrojecimiento de la piel causada por una palmada, golpe con el puño, con el pie o con objetos.

La violencia psicológica o emocional, es definida<sup>183</sup> como cualquier acción, comportamiento u omisión intencionada que produce sufrimiento y pretende ser una medida de control, que amenaza la integridad y el desarrollo de la persona. La violencia psicológica o emocional contra la niñez es un acto de naturaleza intencionada que trata de socavar la valoración que tiene el niño, la niña o adolescente de sí mismo. Usualmente, se presenta bajo las formas de hostilidad verbal como insultos, burlas, desprecio, críticas o amenazas de abandono o bloqueo de las iniciativas infantiles, provocando graves trastornos psicológicos y perjudicando su desarrollo psíquico y emotivo.

La violencia por omisión y supresión, en la cual se encuentra la negligencia o abandono, que son formas de maltrato infantil que presentan mayores dificultades para su identificación y tienen consecuencias muy negativas en el desarrollo emocional, social e intelectual de las NNA. El abandono físico o el psicoafectivo, son expresiones de un maltrato pasivo y se manifiesta cuando las necesidades fisiológicas, cognitivas, emocionales, sociales y de autoestima de un niño, niña o adolescente no son atendidas o son suprimidas en forma temporaria o permanentemente.

179 Ver González V. y Aldana A.: *Hacia un Estado de derecho que ejerza efectivamente la protección contra toda forma de violencia*, Asunción, Paraguay, 2011.

180 Pinheiro, Paulo Sergio: *Informe mundial sobre la violencia contra los niños y las niñas*, Organización de las Naciones Unidas, 2006.

181 WHO Global Consultation on Violence and Health. *Violence: a public health priority*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1996.

182 UDAPE: *Equidad y derechos de la niñez, índice municipal de la infancia, niñez y adolescencia*, Proyecto UDAPE-UNICEF, La Paz, Bolivia, 2001.

183 Ver Fundación para la Juventud, disponible en [www.sodeju.org/tipoviolenia.htm](http://www.sodeju.org/tipoviolenia.htm)



## i. La dinámica y consecuencia de la violencia

Según Pinheiro<sup>184</sup>, el impacto de la violencia es generalmente visible, aunque sus efectos pueden diferir en relación con su naturaleza, severidad y sus repercusiones a corto y largo plazo, así por ejemplo: la exposición temprana a la violencia es de carácter crítico, porque incide negativamente en el aprendizaje y socialización de la niñez y la adolescencia; entre las repercusiones más graves están el infanticidio, castigos brutales y humillantes, trato negligente y abandono, abuso sexual y otras formas de violencia. En estas situaciones están involucrados distintos agentes de la sociedad, como pueden ser miembros y miembros de la familia, el gobierno, jueces, juezas, procuradores, fiscales, legisladores, policía u organismos de seguridad.

El mismo autor agrega que si bien parte de la violencia contra las niñas y niños es cometida por extraños, la gran mayoría de los actos violentos son ejecutados por personas que forman parte del entorno inmediato del niño o niña víctima: sus padres y la familia ampliada, el novio, novia, el cónyuge o compañero, compañera, los educadores, los compañeros de colegio y los empleadores. Esto deja en evidencia que la familia se perfila, según los datos e información encontrada, como una potencial fuente de agresiones<sup>185</sup>.

## ii. La magnitud de la violencia contra niñas, niños y adolescentes

En este apartado se hace un análisis de las estadísticas disponibles sobre las distintas formas de violencia que vulneran los derechos de la niñez y adolescencia, en particular los derechos a la vida, a la integridad personal, a una vida libre de violencia, a la educación y el de acceso a la justicia. Al respecto, independientemente de las limitaciones de registro que traspasan el tema de los sistemas de captación, procesamiento y análisis de la información, así como de los numerosos actos violentos no registrados, el presente informe hace uso de la evidencia disponible y confirma la premisa que, en El Salvador, el hecho de ser niña, niño o adolescente, significa correr el riesgo de perder la vida o, en el menor de los casos, ser víctima de otras múltiples formas de violencia. De tal manera que, sin duda, El Salvador se posiciona como uno de los países más violentos contra la niñez y la adolescencia.

En un estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud<sup>186</sup>, se examina la percepción de vulnerabilidad que tienen las y los jóvenes (15-24 años) de convertirse en víctimas de agresión. El 78.7% de los jóvenes declaró estar de acuerdo con la afirmación de que: “Las y los jóvenes tienen mayor probabilidad de ser víctimas de la violencia que los adultos”. Es claro que ciertas formas de violencia como el maltrato infantil o el atraco sexual datan de larga historia, no obstante, este informe evidencia expresiones de actos brutales que por lo general son características de países en guerra, como son las ejecuciones de adolescentes, las masacres de familias en las que asesinan niños, la persecución y el acoso policial mayoritariamente contra adolescentes varones, las desapariciones y el apareamiento de cuerpos desmembrados de adolescentes mujeres.

Las formas más frecuentes de agresiones corresponden al maltrato físico y al de tipo sexual, lesiones a la integridad y vulneración a la intimidad de NNA. Otras formas de inseguridad ciudadana que atentan contra el derecho de la niñez y adolescencia a tener una vida libre de violencia, son la percepción de temor frente a la ocurrencia generalizada de hechos delictivos vivenciados por parte de niñas, niños y adolescentes.

184 Pinheiro, Paulo Sergio: Op. Cit.

185 Un medio de comunicación social difundió la noticia de que el padre y la madre de familia fueron privados de la libertad y serán procesados por haber propinado una paliza a su hija, una niña de 12 años de edad, porque no había logrado vender \$20. Ver Flores, Ricardo: *Detienen a pareja por dar golpiza a su hija de 12 años*, La Prensa Grafica, 21.06.13, disponible en <http://www.laprensagrafica.com/detienen-a-pareja-por-dar-golpiza-a-su-hija-de-doce-años>. Último acceso 21.06.13.

186 Organización Panamericana de la Salud (OPS): *Juventud y Violencia. Los hombres y las mujeres jóvenes como agentes, como víctimas y como actores de superación de la violencia en El Salvador*, 2011.

Asimismo, es importante señalar las dificultades que enfrentan las instituciones públicas, para contar, manejar y producir un sistema de estadísticas e indicadores específicos y precisos sobre los efectos de la violencia en las niñas y niños y adolescentes desagregada, tanto por grupos de edad, sexo u otra condición. La generalidad de las instituciones del sector público no es coherente en su actuación con el principio del interés superior de la niñez, y presenta una visión adultista, cuando se trata de evaluar el avance en la reducción de la violencia social, a partir de la tregua. El ISNA y el CONNA han iniciado esfuerzos para contar con un sistema de información en el área que pueda servir para definir acciones a corto, mediano y largo plazo.

### **iii. Niñas, niños y adolescentes víctimas de la violencia homicida.**

Para introducir este apartado, es necesario traer a mención los datos de una revisión de las tasas globales de homicidios, para luego poder analizar la situación específica de NNA en el país entre el año 2011 y la actualidad, pasando por el año 2012, cuando se produce el pacto de no agresión entre pandillas y maras. En el año 2005<sup>187</sup>, la tasa de homicidios fue de 63 por cada 100 mil habitantes; para el 2006 se incrementó a una tasa de 65; luego para el 2007, bajó a 57.3; en el 2008 decreció a 51.9; y en el año 2009 se observa un repunte del fenómeno al llegar a una tasa de 71.2.

En el año 2011 la tasa fue de 70.4 y de acuerdo con el Instituto de Medicina Legal (IML) fueron un total de 4,374 homicidios, a razón de 12 asesinatos diarios<sup>188</sup>. En cuanto a las diferencias de género y específicamente la violencia contra las mujeres, es relevante señalar como también la tasa de homicidios de mujeres se duplicó de 1999 al 2009. Al respecto, en el año 1999 la tasa de homicidios de mujeres era de 7.7 por cada 100 mil habitantes, y ésta aumentó al 13.5 sobre 100, 000 habitantes para el año 2009<sup>189</sup>; esta situación aumentó levemente en el año 2010. Deben destacarse los impactos que generan la muerte de mujeres, al dejar niños, niñas y adolescentes en orfandad, debido a que los roles tradicionales asignados a las mujeres son quienes tienen las principales responsabilidades del cuidado de sus hijas e hijos.

Asimismo, el número de homicidios a escala global tiende a mostrar una baja a partir de 2012: de un promedio de 13 homicidios diarios a marzo de 2012, se redujo a 5.64 para el mes de marzo de 2013, factor asociado a la tregua. De acuerdo con los datos reportados, el número de homicidios cometidos en los últimos años contra niñas, niños y adolescentes, de edades entre los cero y 19 años, presentó la siguiente tendencia: en el 2005: 656 homicidios; en el 2006: 680 homicidios; en el 2007: 629 homicidios; en el año 2008: 572; en el año 2009: 903 homicidios y para el año 2010, 806 homicidios. Al examinar el número de homicidios para el grupo de edad de cero a 17 años, entre los años 2009 y 2012, el Ministerio de Justicia<sup>190</sup> reporta que de ese período, el año 2011 fue en el que se cometió el mayor número de homicidios: 507, y en 2012 se redujo ese número para este grupo de edad, con un total de 265 personas menores de 18 años asesinadas, lo cual implica una reducción de 242 casos, o sea el 48%.

En general, El Salvador ha mostrado una drástica reducción de homicidios en el año 2012. De un promedio de 14 homicidios diarios en el 2011, se pasó a 5.6 en el 2012 (al menos un 41%). En términos numéricos, de 4,374 homicidios reportados para el 2011 por el Instituto de Medicina Legal, se redujo a 2,571. En el año 2011, los 507 homicidios cometidos contra niños, niñas y adolescentes representaron el 11.6 % del total. Al contrastar con el año 2012, este porcentaje se reduce levemente, dado que 265 del total de 2,571 homicidios cometidos fueron cometidos contra niñas, niños y adolescentes, lo que representa el 10.3%.

187 Ver Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA): Violencia sexual infantil en El Salvador. Situación de las niñas, niños y adolescentes atendidos por el ISNA, periodo 2008-2010. El Salvador, 2012.

188 Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH): *Informe especial sobre el impacto de la violencia en los derechos de las niñas, niños y adolescentes en El Salvador*, San Salvador, El Salvador, mayo de 2013, p. 34.

189 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): *La igualdad y la equidad de género en El Salvador*, San Salvador, 2011.

190 PDDH: Op. Cit., p. 35.

Número de homicidios de la población de 0 a 17 años segmentada por sexo entre los años 2009 y 2012			
Año	Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
2009	363	85	448
2010	297	87	384
2011	406	101	507
2012	220	45	265
<b>Total periodo</b>	<b>1286</b>	<b>318</b>	<b>1604</b>
<b>Porcentaje</b>	<b>80.2%</b>	<b>19.8%</b>	<b>100%</b>

A partir de los datos proporcionados por el MJSP sobre los homicidios de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años entre los años 2009 y 2012, puede observarse en la tabla anterior que de los últimos cuatro años, es en el 2011 cuando se comete el mayor número de homicidios: 507 y esa proporción se reduce casi a la mitad para el año 2012, se presume que es producto de la tregua. Al comparar las tendencias por grupo de edad, se observa que el grupo más afectado por la violencia es la población adolescente, dado que en el 2011, el 92% de homicidios se cometieron contra adolescentes entre los 14 y los 17 años.

Para el año 2012, la proporción de homicidios disminuyó cerca de la mitad, y se mantiene la misma tendencia por grupo de edad, dado que 234 de los 265 homicidios, es decir, el 88% ocurrió contra los y las adolescentes entre los 14 y 17 años. Al comparar por sexo, se observa una relación de 80 % - 20 % entre varones y mujeres, como promedio en los últimos cuatro años: en el año 2012: varones 83% y 17% mujeres; en el 2011, con una relación de 80% - 20%; en el 2010, 77% - 23%. No obstante, debe destacarse que la proporción de homicidios de niñas y adolescentes pareciera ser mayor a la de mujeres adultas.

Con base en los datos proporcionados por las fuentes oficiales consultadas, se puede establecer una estimación sobre las tasas de homicidios de niñas, niños y adolescentes, para ello, se utilizan los datos de las proyecciones de población del año 2012. Para dicho período se estima que la tasa de homicidios fue de 41 por cada 100, 000 habitantes para el grupo de adolescentes entre los 14 y 17 años. Dado que estas son estimaciones no oficiales, es urgente que las instituciones responsables, como el MJSP en coordinación con el CONNA, pongan a disposición cifras oficiales sobre la tasa de homicidios por edad, con el fin de tener un mejor conocimiento de la problemática de la violencia homicida que afecta a las y los adolescentes, con la finalidad de tomar medidas prioritarias y específicas para prevenir, atender y erradicar dicha violación de derechos humanos.

#### iv. Femicidio de mujeres adolescentes

En el marco de la Ley Especial Integral para una vida Libre de Violencia contra las Mujeres, que entró en vigencia en enero de 2012, se establece la categoría de feminicidio, independientemente que los asesinatos de mujeres sean juzgados bajo la categoría de feminicidio, el cual se caracteriza porque se ha cometido con odio y saña en contra de una mujer por su condición de tal (por ejemplo, homicidio previo múltiples violaciones, ultrajes y vejaciones a la integridad personal: disparos en el área genital). Asimismo, se tiene la hipótesis de que muchos de los asesinatos de adolescentes mujeres se deben a su relación con las pandillas; un caso paradigmático es el de la atleta Alison Renderos, adolescente de 15 años, cuya investigación comprobó la responsabilidad de integrantes de pandillas<sup>191</sup>.

191 Para ampliar sobre este punto consultar PDDH: *Informe situacional sobre la protección de los derechos de la niñez y adolescencia en un contexto de violencia*, San Salvador, El Salvador, 26.11.12, p. 42.

De acuerdo con la opinión de un funcionario del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública<sup>192</sup> (MJSP), los homicidios presentan diferencias en razón de la edad y el sexo; en el caso de los varones, el segmento entre los 14 y 19 años es uno de los más afectados, pero en el rango entre los 20 a 24 años es el más elevado en la tasa de homicidios. En el caso de las mujeres, el rango más elevado es entre los 15 a 19 años. Frente a los asesinatos de las adolescentes es evidente la falta de medidas de protección y prevención para dar una respuesta integral a la situación específica que afecta a las adolescentes.

Por su parte, el ISDEMU<sup>193</sup> señala que del total de homicidios de mujeres en el 2011, el 27.3% corresponde al grupo de niñas entre los 10 y 19 años, lo que significa una relación de 3 por cada 10 mujeres asesinadas. En términos de comparación por sexo, uno de cuatro homicidios cometidos contra niños, niñas y adolescentes reportados por el MJSP, corresponde al sexo femenino.

## v. Niñas, niños y adolescentes como víctimas de maltrato y otras formas de violencia

Como se puede apreciar en la siguiente tabla, de acuerdo con la información proporcionada por la dirección ejecutiva del CONNA, en el año 2012, se recibieron un total 5,564 denuncias en las cuales las NNA figuraban como víctimas de violencia en las 8 Juntas de Protección de la Niñez y la Adolescencia; una cifra elevada si se toma en cuenta el poco tiempo de funcionamiento del CONNA y que no todas las Juntas de Protección comenzaron a funcionar en enero de 2012. Por su parte, el ISNA reporta que para el tercer trimestre del 2012, atendieron como institución a 246 niñas y niños que sufrieron maltrato físico, siendo el 54% niñas y el 46% niños.

Número y tipo de denuncias recibidas en las Juntas de Protección en el 2012				
Tipo de denuncia	Niñas (0-12 años)	Niños (0-12 años)	Adolescentes (13-18 años)	Total de denuncias
Denuncias por maltrato	1002	973	1600	3575
Derecho a la protección frente al abuso y explotación sexual	575	115	538	1228
Derecho a la educación	78	103	178	359
Derecho a la salud	104	108	139	351
Casos de acoso escolar	2	5	8	15
Casos de trata de personas	1	1	34	36
<b>Totales:</b>	<b>1762</b>	<b>1305</b>	<b>2497</b>	<b>5564</b>

*Fuente: Datos proporcionados por el CONNA, febrero 2013*

El maltrato físico, tanto en niñas como en niños, acontece bajo la forma de castigo corporal, y es grave por cuanto “se ha naturalizado” como parte de las prácticas correctivas al interior de los grupos familiares y escolares. El castigo físico se mantiene como un método de corrección de conductas, pero en realidad, es una forma de violencia social que ha llegado a constituirse en una práctica cultural casi considerada como inmutable: “así ha sido toda la vida y así va a seguir siendo” como lo señalan las organizaciones no gubernamentales consultadas.

El maltrato infantil físico y psicológico en la familia se atribuye a los modelos de crianza, donde aún no se ha superado el paradigma que “para corregir a un niño o niña es necesario golpearlo”. Para muchos padres y madres es “correcto” proporcionar manotazos a sus hijos, halarles las orejas o el cabello, pegarles con un cincho o “chilillo” e “hincarlos. De tal manera que, socialmente esto se asume como normal y hasta necesario.

<sup>192</sup> PDDH: Informe especial sobre el impacto de la violencia...: Ob. Cit., p. 38.

<sup>193</sup> Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU): Informe nacional: Estado y situación de la violencia contra las mujeres en El Salvador, San Salvador, El Salvador, 2012

En la preparación del Informe especial sobre el impacto de la violencia en los derechos de las niñas, niños y adolescentes, se recoge la entrevista de una persona menor de edad, víctima de maltrato en su hogar:

“Yo tenía como 7 años y yo como era bien tremendo, me salía de la casa porque mi padrastro mucho me pegaba sólo porque no hacía tal cosa, él me amarraba, me tiraba al piso, me comenzaba a dar con lazos, con cualquier cosa, una vez él estaba cocinando y me salí y me tiró una brasa me quemó la espalda, de ahí elegí salirme de la casa y me fui... después comencé andar en las calles”, (Adolescente hombre participante en grupo focal, San Salvador, 2013)<sup>194</sup>.

Una investigación desarrollada recientemente señaló que para “el 2010 ISDEMU reportó 6,320 casos de violencia contra las mujeres, mientras que para el 2011 la PGR recibió 2,984 denuncias por violencia intrafamiliar. De estos, 337 casos son de mujeres con estado civil de casada, es decir, que los golpes y los gritos han ocurrido en el seno del hogar, donde también conviven con sus hijos e hijas, quienes son afectados directamente en su salud física, mental y en su desarrollo integral”<sup>195</sup>.

## vi. Las niñas víctimas de violencia sexual: Una tendencia en ascenso

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia sexual como: “Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona, mediante coacción por otra persona (...) entre las tipologías que afectan a NNA puede identificarse el abuso sexual, el matrimonio formal o informal antes de los 18 años, la trata con fines de explotación sexual y otras (...)”<sup>196</sup>.

Los registros y las evidencias documentales coinciden en señalar que esta es una de las más graves y comunes violaciones a los derechos humanos de las NNA, tanto por la proporción, como por sus riesgos y consecuencias. La tasa de agresiones sexuales de las niñas y adolescentes mujeres, es muy similar a la de homicidios del país, con una tendencia creciente en los últimos años. Según el Instituto de Medicina Legal, se registraron 3,201 casos de agresiones sexuales en el año 2002, y esta cifra aumentó a 4,589 en el 2008<sup>197</sup>. Para el año 2010, el IML reportó 778 casos de violación en niñez menor de 14 años, lo que refleja un promedio de 2 violaciones diarias. Al desagregar por sexo, el 89.1% de las violaciones son en niñas y el resto (11.9%) ocurre en niños.

Número de casos de niñas, niños y adolescentes reportados como víctimas de violación por IML		
Población	Año	Número
Población total menor de 14 años víctimas de violación	2009	936
	2010	778
Niños menores de 14 años víctimas de violación	2009	120
	2010	85
Niñas menores de 14 años víctimas de violación	2009	816
	2010	693

Fuente: IML, datos para el 2009 y 2010.

Para el año 2012, las estadísticas proporcionadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, muestran 897 casos de denuncias de violaciones y estupro contra NNA de 0 a 17 años, correspondiendo el 86 % a niñas y el 14% a niños, lo que evidencia claramente las desigualdades de género que afectan

194 PDDH: Informe especial...: p. 42

195 Rivas Villatoro, Felipe Alexander: Primera infancia en El Salvador: Estado actual y perspectivas, San Salvador, El Salvador 2012, p. 8.

196 Luciano, D. y Padilla, K.: *Violencia sexual en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: definiciones, datos recomendados e indicadores*, 2012.

197 PDDH: Informe especial...: p. 44.



predominantemente a las niñas. El número de denuncias de violaciones en personas adultas registradas por la Policía Nacional Civil en el mismo período es de 394 casos; como puede observarse, la proporción de casos de abuso sexual en NNA se duplica frente a las personas adultas.

En la niñez, a diferencia de la adultez, el abuso sexual suele ser continuado, y en muchos de los casos, por personas vinculadas afectivamente, esta característica lleva en sí la revictimización de la niña o el niño, lo que implica un riesgo mayor de alteraciones psicopatológicas o en su desarrollo evolutivo. Algunos posibles síntomas son: problemas de sueño, consumo de drogas, culpa, vergüenza, retraimiento social, alteraciones en la esfera sexual, infecciones de transmisión sexual y en la adolescencia puede conllevar a un embarazo temprano y aborto, entre otros.

Número de denuncias de violaciones, incluido el estupro en víctimas de 0-17 años durante el año 2012			
Departamento	Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
Ahuachapán	3	32	35
Cabañas	3	34	37
Chalatenango	12	29	41
Cuscatlán	10	75	85
La Libertad	9	68	77
La Paz	10	73	83
La Unión	6	30	36
Morazan	5	48	53
San Miguel	4	68	72
San Salvador	20	97	117
San Vicente	8	58	66
Santa Ana	8	63	71
Sonsonate	4	65	69
Usulután	7	48	55
<b>Total general</b>	<b>109</b>	<b>788</b>	<b>897</b>

*Fuente: datos proporcionados por el MJSP, febrero 2013.*

Autoridades del IML señalaron que en el año 2012 hubo un total de 1,891 casos de agresiones sexuales, es decir, 136 víctimas más de las 1,755 reportadas en el 2011, lo que representaría un incremento estimado de 7.7 para la población comprendida entre los 10 y 19 años, que se ubican en el grupo de edad más vulnerable a ser víctima de algún tipo de delito sexual. En todo caso, lo que sí es evidente, es el incremento del número de víctimas de violación sexual atendidos en el 2012 con relación al 2011. Por razones de edad, las niñas y los niños mayores de 12 años, se encuentran en situación de mayor riesgo frente a la violencia sexual, ya que a esta edad, generalmente van solos a la escuela y su incursión en el espacio público los expone a todo tipo de violencia. Por condición social, las niñas, los niños y adolescentes de los sectores urbanos y semi-urbanos que residen en territorios dominados por pandillas, presentan una mayor exposición a la violencia.

Por razones de género, los grupos en mayor riesgo de violencia sexual son las niñas. La violencia sexual contra NNA tiene un claro sesgo de desigualdad de género, que coloca a las niñas y a las adolescentes como uno de los grupos mayormente vulnerados. En los casos de abuso sexual, más del 90% de los agresores sexuales son familiares del sexo masculino cercanos de los NNA: el padre, el padrastro, el abuelo, el tío, el hermano, el padrino. Las niñas con discapacidad se encuentran mayormente expuestas a ser víctimas de violencia sexual.

De acuerdo con las autoridades del ISNA y los resultados de su Sistema de Información para la Infancia (SIPI), los casos de violencia sexual representan una de las primeras cuatro razones de ingreso y atención a niñas en el ISNA. El estudio sobre violencia sexual infantil realizado por esta institución<sup>198</sup> en el 2010, refleja que en ese año el 10% de niñas y niños ingresados a la institución fue por motivos de abuso sexual; el 17% por motivo de salida ilegal del país; el 16% por negligencia o descuido, y el 13% por problemas de conducta. La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes abarca el abuso sexual (violación, acoso y agresión) y la explotación sexual comercial (pornografía infantil, la trata de personas con fines de explotación sexual y prostitución infantil).

La dirección del ISNA reporta que a inicios de 2013, el abuso sexual constituye el primer motivo de atención, donde el 90% de las víctimas son niñas. Además revela que del total de casos atendidos en el período 2008-2010, el 75% se dieron en víctimas menores de 15 años. En la siguiente tabla se visualiza los datos de niñas y niños atendidos en el ISNA en este período.

Niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual atendidos en el ISNA según tipo de violencia, acumulado 2008-2010				
Tipología	2008	2009	2010	Total
Abuso sexual	393	303	354	1050
Explotación sexual comercial	59	40	45	144
<b>Totales</b>	<b>452</b>	<b>343</b>	<b>399</b>	<b>1194</b>

*Fuente: Datos proporcionados por el ISNA.*

La respuesta del ISNA ante los casos de violencia sexual ha sido principalmente la colocación institucional (40.4%), lo cual se refiere al internamiento de las NNA en uno de sus centros de protección, o de alguna ONG adscrita, con el fin de garantizar su cuidado físico y de brindarle las atenciones médicas y psicológicas para que su desarrollo se vea normalizado. Otra de las medidas generalmente aplicadas para restituir los derechos de la niñez vulnerada es la orientación y apoyo socio familiar. Esta es una de las situaciones más difíciles, pues muchas niñas corren el riesgo de regresar a un contexto familiar revictimizante, donde el agresor permanece en el hogar.

Sobre la problemática de trata con fines de explotación sexual, no se sabe con exactitud la magnitud de la misma. Algunas organizaciones de la sociedad civil consultadas presumen el incremento de las redes de trata con fines de explotación sexual que funcionan en toda la región centroamericana, así como agresores “de cuello blanco”, razón por las que en ocasiones no se continúa con la investigación. No se tiene la suficiente claridad respecto a dónde se encuentra el impasse en el sistema judicial. Si las víctimas de violencia sexual y sus familias observan impunidad, se produce una mayor pérdida de confianza y credibilidad en el sistema.

Sumada a la gravedad de la violación a la integridad personal de las NNA, se reconoce la deficiente respuesta del sistema judicial y de salud para atender a las víctimas y asumir la restitución de sus derechos (a la información, a la asistencia, a la protección y reparación<sup>199</sup>) y el acceso a la justicia, pues la generalidad de casos quedan en la impunidad. *Según información publicada en agosto de 2010 por la FGR, se estima que cerca del 94% de los delitos sexuales que investiga dicha institución quedan impunes. Hacen faltas medidas contundentes por parte del Estado salvadoreño para contrarrestar la problemática, cualificar la investigación y erradicar la impunidad.*

198 Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA): Violencia sexual infantil en El Salvador: Situación de las niñas, niños y adolescentes atendidos por el ISNA, período 2008-2010, San Salvador, El Salvador, 2012.

199 Para una mayor ampliación consultar: Velasco, J y Martínez, M. (2012). La víctima de trata de personas y sus derechos fundamentales. Un enfoque desde la victimología.

La niñez institucionalizada representa uno de los grupos doblemente expuestos a la violencia, dadas las condiciones de su internamiento y la situación de abandono. Además de las carencias económicas de estas instituciones, el Estado no siempre les proporciona una protección que garantice su seguridad, libres de riesgos, de hostigamiento sexual, violencia física y otras formas de maltrato por personal con poca formación y sensibilización.

## **vii. Niños, niñas y adolescentes víctimas de las pandillas**

Asociado al contexto de inseguridad del país, son evidentes ciertas expresiones específicas de violencia que vulneran los derechos de la niñez y población adolescentes: las masacres, las desapariciones, la utilización de niñas y niños en extorsiones, la inseguridad y temor de reclutamiento por las pandillas. Estas situaciones tienden a ser poco documentadas en las fuentes oficiales de información, sin embargo, es reportada por las propias niñas, niños y adolescentes consultadas. De acuerdo con las estadísticas proporcionadas por el CONNA, en el 2012 se recibieron 217 denunciadas asociadas a la afectación por pandillas. No obstante, no se logró obtener información específica sobre el tipo de denuncias, lo que pone de manifiesto la falta de protocolos específicos para la recepción, registro y sistematización de este tipo de denuncias. Esto es una debilidad institucional, lo que dificulta posteriormente la producción de estadísticas e informes oficiales periódicos de la situación de violencia contra la niñez.

Aunque no esté lo suficientemente documentado, se presume que las pandillas operan con una amplia base social en la que involucran a niños y niñas. Ejemplo de ello, es el incremento de adolescentes mujeres en situación de internamiento que reporta el ISNA, en el que se señala que 10 de cada 100 internos (as) en los Centros de Inserción Social son mujeres, y en los últimos tres años esta cifra ha aumentado en un 72.5% con respecto al año 2008. En opinión del equipo de especialistas consultados de la Unidad de Justicia Juvenil de la Corte Suprema de Justicia, en los últimos ocho años se ha duplicado el procesamiento de jóvenes ante los tribunales por el delito asociado a extorsión<sup>200</sup>.

Si bien es cierto que desde marzo de 2012 a la fecha se ha evidenciado, según cifras del MJSP, una baja sensible en el número de víctimas de homicidio producto de la tregua entre los grupos de pandillas, la PDDH sentó postura sobre ese acuerdo en el sentido de que “[...] Que como Procurador, [...] siempre me he pronunciado por el pleno respeto de estos derechos [la vida, la integridad personal, la propiedad], instando al gobierno adoptar políticas públicas eficaces para enfrentar el delito y al delincuente; [...] como Procurador he denunciado que todas las políticas de seguridad han sido orientadas a la represión y nunca a la prevención, y que el ocio carcelario que viven los internos es por falta de programas de readaptación; [...] Los distintos sectores de la vida nacional debemos ser muy cautelosos sobre los motivos que conllevan a la reducción de los homicidios como consecuencia de un dialogo o acuerdo realizado bajo circunstancias no explicadas ya que muy probablemente dicho “logro” no será sostenible al estar sujeto al arbitrio de un solo sector, sin ninguna incidencia del Estado. [...] Es urgente que el Presidente de la República y su Gabinete de Seguridad aclaren a la población, de inmediato y sin excusas, los detalles ciertos de lo que ha pasado, ya que hasta ahora la información que se tiene es oscura y las acciones de quienes tienen bajo su responsabilidad el combate a la delincuencia han sido contradictorias y poco transparentes”<sup>201</sup>.

En este punto, la Representante especial del secretario general de Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, Marta Santos Pais, señaló en sus observaciones preliminares al concluir la visita oficial que realizó a El Salvador, el pasado día catorce de junio del corriente año que del 2005 al 2011 más de

200 Se estima que a partir del año 2006 se hicieron traslados en el Centro Penal de Quezaltepeque, porque se presume que desde allí se iniciaron las primeras extorsiones, factores que generaron medidas como el bloqueo de llamadas, y el traslado de reos a otros centros penales.

201 PDDH: *Posición del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos ante la situación de las pandillas y tratamiento penitenciario en El Salvador*, sin fecha.

5 mil niñas, niños y adolescentes han sido asesinados, la primera causa de muerte materna es el suicidio por el embarazo, la existencia de un nuevo factor de discriminación: la estigmatización hacia NNA por residir en zonas con elevados índices delictivos, la tasa de denuncias por violencia es baja, solamente en el 12 % de los actos punibles hay condenas; la justicia penal juvenil es muy punitiva, debe aplicarse la justicia restaurativa; hay baja inversión en la inserción social; el 40% de las NNA vive con uno solo de su padre o madre o con ninguno; se destina el 22 % del Producto Interno Bruto para temas de seguridad y apenas el 3 % para educación.

Sobre las bajas condenas por hechos delictivos se ha dicho que “La falta de una adecuada coordinación entre los fiscales y la Policía Nacional Civil y la limitada capacidad técnica de la policía para investigar los delitos y reunir pruebas se traduce en una tasa de condenas extremadamente baja, y entre la población aumenta el sentimiento generalizado de impunidad”<sup>202</sup>.

De acuerdo al ISNA, la cantidad de adolescentes infractoras ha aumentado con respecto a años anteriores, esto debido a que las adolescentes ahora forman parte de las estructuras violentas, participando en las pandillas y delitos como las extorsiones. Asimismo, esta institución reporta que el hecho de ser una niña o adolescente calificada como “bonita” o “atractiva”, de acuerdo a los preceptos estereotipados de belleza, se constituye en un factor de mayor vulnerabilidad y de riesgo para ser utilizadas en actos de extorsión o como parejas de los jefes de pandillas. Muchas veces son las mujeres las encargadas de recoger la renta o de llevar drogas en su cuerpo u otras cosas que los hombres recluidos en los penales les exigen. También se ven involucradas ancianas, abuelas o tías, cuando en las casas que incautan se encuentra drogas o armas, situación que es poco visibilizada y conocida por la población, y totalmente desatendida. Asimismo, se involucra a personas adolescentes, debido a que ellas reciben sentencias menores en caso de ser capturados y llevados a juicio.

De acuerdo con los datos proporcionados por los Juzgados de Menores y que los confirma la Unidad de Justicia Juvenil muchos adolescentes procesados en los tribunales han sido utilizados por personas adultas para el cometimiento de algunos hechos ilícitos. Las estadísticas reflejan que uno de los principales delitos que se atribuyen a las y los adolescentes en los años 2010 y 2011, es la participación en agrupaciones ilícitas, independientemente de pertenecer o no a una pandilla. Como se aprecia en las siguientes tablas, en los últimos años, los 10 delitos más cometidos por los jóvenes son los vinculados a aspectos patrimoniales y a factores de identidad de la pandilla como: amenazas, asociaciones ilícitas, transportación ilegal de arma de fuego, resistencia, posesión y tenencia de drogas, situación que facilita en gran parte el hecho de desvincular responsabilidades de personas mayores o adultas, trasladándolas a las y los adolescentes.

En materia penal juvenil, con relación a las y los adolescentes que por alguna razón están en conflicto con la Ley, se reconocen tres avances<sup>203</sup>: 1) no existe la mora judicial, es la única área dentro de todo el aparataje estatal del Órgano Judicial donde no existe, porque los jueces son muy respetuosos de los plazos, éstos plazos son expeditos, así que difícilmente se encuentran jóvenes que estén rezagados en un centro de internamiento y que no hayan recibido sentencia; 2) se han desarrollado iniciativas de especialización de jueces, fiscales en materia de justicia penal juvenil; 3) la creación de las primeras oficinas resolutorias alternativas de conflictos de la Corte Suprema de Justicia, en las que aplica el enfoque de justicia restaurativa.

202 Asamblea General de las Naciones Unidas: Informe de la Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados, Gabriela Knaul en su misión a El Salvador, 24.05.13, pár. 8 del resumen.

203 PDDH: Informe especial...: p. 52.

### Los diez principales delitos por los que adolescentes menores de 18 años de edad fueron procesados de enero a junio del 2012

Descripción del delito	Frecuencia	Adolescentes menores de 18 años procesados. Datos por sexo	
		Femenino	Masculino
Homicidio agravado	213	11	263
Posesión y tenencia	209	9	237
Extorsión	200	31	210
Robo agravado	172	8	197
Agrupaciones ilícitas	135	10	200
Lesiones	130	34	116
Resistencia	111	5	145
Amenazas	105	27	92
Tenencia, portación o conducción ilegal de armas de fuego	98	8	117
Hurto	68	13	64
<b>Total</b>	<b>1441</b>	<b>156</b>	<b>1641</b>

Fuente: datos proporcionados por los Juzgados de Menores, 2012.

Pese a que la ley establece un requisito de especialidad para los operadores que trabajan dentro del sistema penal juvenil, en opinión de las organizaciones gubernamentales, se señala una falta de especialización en algunos operadores, como es el caso de la Policía Nacional Civil y la Procuraduría General de la República, lo que ocasiona que no se le dé la atención adecuada a la población menor de 18 años con responsabilidad penal.

## c) Acciones de la PDDH en defensa de los derechos de las NNA

### i. Audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Ante el panorama de violencia, homicidios y vulneración de derechos de la población salvadoreña en general y en particular de las NNA, sin identificar ninguna acción, estrategia o táctica de parte del Estado para poner coto a esa situación, la PDDH, en agosto del año pasado y en asocio con representantes de la sociedad civil por medio de la Red para la Infancia y Adolescencia de El Salvador (RIA) y la Red Latinoamericana y Caribeña por los Derechos de la Niñez (REDLAMYC), solicitó a la honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CmIDH) una audiencia sobre la temática en referencia para el próximo período de sesiones, a celebrarse del 29 de octubre al 16 de noviembre de 2012, de conformidad a lo establecido en los artículos 62 y 66 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En dicha solicitud se expresó que:

“[L]as niñas, niños y adolescentes salvadoreños actualmente están atravesando por un período sumamente difícil debido a la violencia e inseguridad en que vive el país, a las



elevadas cifras de homicidios y que ellos y ellas son las principales víctimas de esa violencia letal. Este panorama no se ve que en el corto ni mediano plazo pueda cambiar porque no se perciben indicios claros de que la actuación del Estado sea eficiente para garantizar el derecho humano a la seguridad. De acuerdo a la Policía Nacional Civil el año 2011 cerró con 74 estudiantes asesinados, al 22 de junio de 2012, dicha fuente confirmó la muerte de 41 alumnos.

Una nueva expresión de violencia en el país es el desaparecimiento de niñas, niños y adolescentes y la ubicación posterior de sus cadáveres en cementerios clandestinos. Según información del Instituto de Medicina Legal (IML) de San Salvador, entre el 1 de enero y el 30 de abril del corriente año, se recibieron 692 avisos sobre personas desaparecidas, es decir, 6 personas en promedio diario. Otro dato relevante es que las cifras indicadas solo incluyen las denuncias del área metropolitana de San Salvador, con lo cual dicha cantidad es más bien conservadora. En 2011 el IML registró 2,076 quejas sobre personas desaparecidas, de las cuales no se sabe si fueron encontradas porque el registro no ha sido depurado. El primer trimestre de 2012 cerró con un promedio diario de 11 homicidios según las estadísticas del citado instituto, lo que arroja un total de 1,045 personas que perdieron la vida en forma violenta.

En marzo de 2012 se hizo público que el Gobierno había facilitado las condiciones para que las dos principales maras o pandillas del país (El Barrio 18 y la Mara Salvatrucha) llegaran a un acuerdo, tregua o pacto y dejaran de cometer homicidios. En dicho mes se verificó el traslado de los principales jefes de dichas agrupaciones de un centro penal de máxima seguridad a uno con medidas menos rigurosas. A partir de dicho mes el promedio diario de homicidios ha bajado, manteniéndose entre 5 y 6. Asimismo, en mayo del corriente año, líderes de los grupos mencionados indicaron que como “gesto de buena voluntad” habían decidido declarar los centros escolares como “zona de paz”, no continuar con el “reclutamiento” de estudiantes y retirar el control que ejercen en las zonas aledañas de las escuelas. Sin embargo, verificaciones en el terreno llevadas a cabo por esta Procuraduría nos permiten afirmar que el acoso escolar por parte de estos grupos continúa.

Como en su momento expresé, la reducción de los homicidios es positiva, sin embargo, queda de manifiesto la fragilidad del Estado para garantizar el derecho humano a la seguridad de la población, pues dicha leve mejoría se ha debido a una decisión unilateral de los grupos indicados y no existe garantía de que el referido acuerdo será sostenido.

Por otro lado, es evidente que las pandillas no han renunciado a la violencia para conseguir sus objetivos, pues continúan las extorsiones, las desapariciones de personas, particularmente de jóvenes menores de edad, los centros escolares siguen siendo acosados por el accionar de estas agrupaciones. La respuesta estatal a esta realidad no ha dado los resultados deseados y se ha enfocado en elevar los niveles de represión por sobre la prevención. Algunas de las medidas tomadas por el Estado han sido la designación de militares al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y en la dirección general de la Policía Nacional Civil, se han creado leyes para la proscripción de pandillas y maras, para la intervención de las comunicaciones, se elevaron las medidas de internamiento para la persona adolescente infractora, en su momento se planteó el reclutamiento obligatorio para jóvenes, etc. Todas estas medidas no han funcionado y la población salvadoreña está a merced de la delincuencia sin que el Estado haga algo para su protección.

Luego de haber informado a la honorable CmIDH sobre la situación de las NNA en el país, se planteó que el objeto de la audiencia solicitada sería analizar y evaluar si la política criminal, planes y programas

del Estado garantizan el derecho a la vida, a la integridad personal de las niñas, niños y adolescentes, a su honor, intimidad y no discriminación.

En noviembre de 2012 una delegación de esta Institución compareció ante la honorable CmIDH — en la audiencia temática concedida—y le solicitó que ordenara al Estado salvadoreño garantizar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en El Salvador.

## **ii. Posicionamiento del Lic. Oscar Humberto Luna, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, sobre la problemática de la desaparición de personas en El Salvador**

Otro de los muchos flagelos que se está incrementando y no se advierte acción idónea estatal para combatirlo es el desaparecimiento de personas, en particular de NNAJ. Desde mayo de 2012 esta Procuraduría se pronunció en el sentido que la actuación de la Policía Nacional Civil denota que es insuficiente e ineficaz para la investigación y resolución de los casos que conlleve a detener la comisión de ese tipo de delitos, que lejos de disminuir y erradicarlo va en aumento; no se ven indicios en la institución encargada de la seguridad pública salvadoreña de enfocar esfuerzos en el combate a dichas acciones delictivas, a pesar de que desde el año 2007 se ha mantenido un índice elevado de personas desaparecidas.

Para combatir eficazmente este delito es indispensable que todas las autoridades concernidas: Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República, Instituto de Medicina Legal y Órgano Judicial actúen organizadamente y de manera oportuna, destinando los recursos necesarios para resolver cada uno de los casos que han sido denunciados. Sobre todo la Policía Nacional Civil por ser la primera institución en donde acude la persona en búsqueda de apoyo. De igual manera la Fiscalía General de la República debe actuar diligentemente para que los jueces impongan las sanciones a las personas responsables de estos hechos. Es urgente que las entidades responsables brinden información cierta, oportuna y consolidada sobre el fenómeno para que la población conozca las acciones tomadas para dar respuesta a las víctimas y la sociedad en general sobre esta problemática.

Se resaltan las afectaciones al derecho a la salud mental de la población salvadoreña, pues, la práctica de desapariciones de personas genera zozobra y angustia en la familia al no gozar de su derecho a la seguridad personal, libertad y el derecho a vivir en un ambiente sin violencia. La desaparición de niños, niñas y adolescentes constituye una forma agravada del delito, lo cual genera obligaciones de especial magnitud para el Estado, pues dicho segmento de la población requiere una protección mayor, extraordinaria de la que se otorga a las personas en general por sus condiciones de vulnerabilidad.

En su oportunidad esta Procuraduría recomendó A la Fiscalía General de la República: 1. Realizar una investigación exhaustiva y eficaz del delito de desaparición forzada de personas en cualquiera de sus formas, contenido en los artículos 364, 365 y 366 del Código Penal a fin de identificar y sancionar a los responsables de estos crímenes; 2. Se cree una Unidad de Personas Desaparecidas la cual debe contar con mecanismos especializados para realizar su labor. Tales mecanismos deben contemplar al menos: 1. Un registro centralizado confiable; 2. Un sistema informático de acceso público para la búsqueda de personas desaparecidas y la identificación de personas encontradas; 3. Una red de comunicación interinstitucional entre hospitales, centros penitenciarios, celdas policiales, aduanas, resguardos, iglesias, cementerios, etc. Además, dicha oficina debe contar con: 1. Personal capacitado para la labor de búsqueda de personas desaparecidas; 2. Recursos materiales necesarios para la investigación de casos de desaparecimiento; 3. Equipos especializados en exhumación y tratamiento de cadáveres; 4. Equipos multidisciplinarios para la atención integral de los familiares de las personas desaparecidas.

A la Policía Nacional Civil se le recomendó elaborar mejores planes de la prevención de estos delitos a fin de evitar se sigan cometiendo, así como contribuir con la Fiscalía General de la República en la investigación de los mismos. Al Órgano Judicial se le recomendó que se muestre diligente en la tramitación de los casos presentados por la fiscalía procurando el resarcimiento de los daños causados a las víctimas, tomando medidas especiales de protección y aplicando la normativa nacional e internacional protectora de la niñez y adolescencia cuando los perjudicados por el delito sean personas menores de edad. Al Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia se le recomendó que diseñe programas, planes y acciones para atender esta problemática que está afectando a la niñez y adolescencia de este país; asimismo, que genere datos confiables que muestren el grado de afectación a este sector de la población. Al Órgano Ejecutivo y al Órgano Legislativo, se les recomendó: 1. Promover la firma y posterior ratificación de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; 2. Promover iniciativa de ley para tipificar y sancionar en mejor forma el delito de desaparición de persona cometido directamente por particulares.

### **iii. Recomendaciones emitidas por esta Procuraduría para combatir la violencia contra las niñas, niños y adolescentes**

Esta Procuraduría en cumplimiento de su mandato constitucional de *Formular conclusiones y recomendaciones pública o privadamente* y de *Elaborar y publicar informes*, contenido en los artículos 194 romano I, ordinales 11° y 12° de la Carta Magna, ha formulado recomendaciones a diversas autoridades encaminadas a garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes violados por el clima de violencia en que viven. De ese modo, a las distintas autoridades públicas se les ha recomendado<sup>204</sup>:

#### **Al señor presidente de la República, don Carlos Mauricio Funes Cartagena:**

1. Promover al interior del Órgano Ejecutivo la creación de estrategias articuladas e integrales entre los diferentes Ministerios y Gabinetes, para garantizar los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes como la salud, educación y el derecho a una vida digna, en cumplimiento de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y la Convención sobre los Derechos del Niño.

2. Diseñar una estrategia para asegurar la respuesta articulada del Estado salvadoreño, como puede ser la implementación de un instrumento que guíe la acción conjunta intersectorial, interinstitucional y entre gobierno local y nacional, que conjugue las distintas políticas existentes en materia de niñez, juventud, seguridad, bajo la conducción del Ejecutivo, y a partir del enfoque de derecho de las niñas, niños y adolescentes víctimas de la violencia, que no se limite únicamente en la reducción de homicidios, es decir, una apuesta estratégica acordada entre el Gabinete Económico Social, el Gabinete de Seguridad, el INJUVE, CONNA, el MINED y el sector Justicia, que operativice las leyes y políticas aprobadas en materia de juventud, adolescencia y niñez.

3. Impulsar la creación de una Política integral de prevención de la violencia contra la niñez y adolescencia, con un enfoque de derechos humanos, basada en la Convención sobre los Derechos del Niño y la doctrina de protección integral, que contribuya a erradicar las causas que generan ese fenómeno, como la pobreza, la exclusión social, la falta de acceso a salud y educación de muchas niñas, niños y adolescentes, a través de la inversión en niñez, tomando en cuenta el principio de prioridad absoluta, que contemple la situación particular de cada NNA en este contexto y sus necesidades específicas.

204 PDDH: Informe especial sobre el impacto de la violencia en los derechos de las niñas, niños y adolescentes en El Salvador, emitido el 28.05.13, p. 101

4. Reconsiderar el papel que desempeña con respecto a la tregua entre pandillas, con estricto apego al marco jurídico salvadoreño, así como establecer la rendición de cuentas a la ciudadanía con mayor transparencia, informando a la sociedad cuál fue y cuál es el papel que el GOES ha desempeñado, cuáles son los compromisos adquiridos y los próximos pasos a seguir. Como lo ha expresado anteriormente la PDDH, siempre que existan acuerdos entre un sector, es necesario que se le informe a la población cuál es el espíritu de dichos diálogos o los objetivos de estos, con el fin de que no se preste a confusiones ante la ciudadanía.

#### **Al pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia:**

5. Impulsar medidas para que jueces y juezas utilicen el protocolo indicativo de uso de las cámaras Gesell en la toma de testimonios de las niñas, niños y adolescente víctimas de delito o testigos, a fin de cumplir con el mandato legal de garantizar a las víctimas no ser confrontadas con el imputado ni ser repreguntadas, evitando la revictimización.

6. Establecer un plan de estratégico de ampliación del trabajo en la justicia restaurativa en los tribunales de justicia penal juvenil, esto como parte de la prevención terciaria de la violencia, el victimario debe asumir la responsabilidad. Se debe realizar una revisión de los marcos jurídicos existentes en el país.

#### **Al señor Ministro de Relaciones Exteriores, don Hugo Roger Bonilla:**

7. Realice las acciones de su competencia para la adhesión del Estado salvadoreño al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones y lo someta a la ratificación de la Asamblea Legislativa para mejorar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

#### **Al Misterio de Justicia y Seguridad Pública:**

8. Realizar acciones concretas dirigidas a controlar la disponibilidad formal de armas, asegurando que la venta sea bajo el estricto control gubernamental, promoviendo además la veda de armas en lugares de acceso públicos.

9. Promover ante la Asamblea Legislativa reformas a la ley de la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil, a fin de independizar dicha institución de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, lo que permitiría que la investigación de actuaciones policiales violatorias a derechos fundamentales de NNA, sea más transparente e independiente.

10. Endurecer los requisitos para la autorización de las empresas privadas de seguridad, así como para la portación y conducción de armas de fuego para el personal de estas empresas.

#### **Al señor Ministro de la Defensa Nacional, don José Atilio Benítez Parada:**

11. Crear al interior de las Fuerzas Armadas una sección, unidad, dependencia o departamento del más alto nivel posible encargado de capacitar y formar de modo permanente y continuo en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en Derechos Humanos de la Niñez y Adolescencia, a los efectivos militares de la institución que él dirige.

#### **Al señor Ministro de Hacienda, don Carlos Cáceres:**

12. Establecer una medida inmediata para aumentar en el presupuesto de la nación 2014 la inversión en niñez y adolescencia.

13. Generar un aumento en el presupuesto del MINED para el año 2014, para fortalecer líneas de programas de prevención e investigación con fondos propios.

14. Que se mejore los mecanismos de control de la evasión fiscal, de este modo aumentar la inversión directa en niñez y adolescencia.

**Al señor Ministro de Educación, don Franzi Hato Hasbún Barake:**

15. Asegurar, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, fondos propios para saber de primera mano el estado de la situación de riesgo de violencia de la población escolar, tanto dentro como fuera del centro escolar.

16. Desarrollar procesos de investigación y de estudios de líneas de base de profundización, que den cuenta de indicadores sobre la situación de violencia en la estructuras del Sistema de Educación Nacional.

17. Ampliar el enfoque de los programas de prevención de violencia más allá de los centros escolares.

18. Incrementar las partidas presupuestarias etiquetadas para la prevención de violencia, dado los pocos avances en el presupuesto de educación con respecto al PIB.

19. Gestionar un mayor presupuesto para implementar medidas que aumenten la cobertura de las niñas, niños y adolescentes que no estudian y trabajan, de forma que estén menos proclives y vulnerables al reclutamiento de las pandillas. La experiencia de proyecto de desarrollo adolescente y juvenil en formación técnica vocacional es una buena oportunidad para prevenir violencia.

20. Implementar una estrategia de política educativa más inclusiva, para los y las que están excluidos, de forma que estén menos proclives y vulnerables al reclutamiento de las pandillas. La experiencia de proyecto de desarrollo adolescente y juvenil en formación técnica vocacional es una buena oportunidad para prevenir violencia.

**A la señora Ministra de Salud Pública y Asistencia Social, doña María Isabel Rodríguez:**

21. Que en forma conjunta con el señor Ministro de Educación desarrolle y ponga en práctica un programa de salud mental y de atención psicosocial permanente, sistemático y continuo para atender a las niñas, niños y adolescentes estudiantes y a sus grupos familiares expuestos a la violencia.

**A la Dirección General de la Policía Nacional Civil:**

22. Promover un plan de capacitación para todo el personal de la Policía Nacional Civil sobre los Derechos de las NNA, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia orientado hacia el reconocimiento de NNA como sujetos de derechos y puesta en práctica de protocolos de actuación unificados sobre el trato que deben dar a las y los adolescentes.

23. Promover acciones para garantizar el acceso de las niñas, niños y adolescentes a presentar denuncias ante la Policía Nacional Civil sobre vulneraciones a sus derechos fundamentales.

**Al señor presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, don Tito Edmundo Zelada Mejía**

24. Promover capacitaciones sobre normativas referentes a derechos humanos de la niñez y adolescencia, como la CDN y LEPINA, dirigidas a jueces competentes en materia penal y de familia, a fin de que se les dote de las herramientas idóneas para aplicar el principio de interés superior del niño en sus actuaciones y evitar, de ese modo, la revictimización de niñas, niños y adolescentes.



### **Al Consejo Directivo del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia:**

25. Que en el más corto plazo posible conforme los Comité Locales de Derechos de la Niñez y Adolescencia en todos los municipios y se complete el proceso de instalación de Juntas de Protección.
26. Diseñe y ejecute un amplio programa de divulgación de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, a fin de que la población en general y especialmente niños, niñas y adolescentes, conozcan el sistema de protección de la niñez y adolescencia y acudan a él cuando se amenace o violente sus derechos.
27. Dictar las recomendaciones pertinentes a las Juntas de Protección de la Niñez y Adolescencia, como dependencias administrativas del CONNA, cuando se identifiquen inconsistencias en sus actuaciones.
28. Adopte las acciones de su competencia para diseñar e implementar el sub sistema nacional de información de indicadores de violencia contra la niñez y adolescencia y coordine con la DIGESTYC una propuesta gradual homologación de registros de información de las instituciones públicas responsables de la generación de estadísticas.
29. En vista que se está en el proceso de finalización de la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia, se recomienda realizar un proceso de validación con amplia participación de la niñez y adolescencia, con un Plan de acción de corto y mediano plazo que dé respuesta más certera a la grave problemática de violencia social, y que responda a los principales resultados encontrados en este Informe y a las recomendaciones emitidas por el Comité de los Derechos del Niño y del Informe de Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños.
30. Tome las acciones de su competencia para dar fiel cumplimiento a las recomendaciones emitidas por el Comité de los Derechos del Niño y en el Estudio de Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños.

### **A la señora presidenta de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), doña Milagro Navas:**

31. Que contribuya en forma decidida con la implementación de los Comités Locales de Derechos de la Niñez y Adolescencia de modo que en el más breve plazo sean conformados dichos organismos.

### **Al señor Fiscal General de la República, don Luis Antonio Martínez González:**

32. Realizar una investigación exhaustiva de todos los casos de asesinatos de niños, niñas y adolescentes, a fin de garantizar el derecho a la justicia y a la reparación.
33. Promover capacitaciones para todo el personal de la Fiscalía General de la República, sobre los Derechos de NNA, la Ley de Protección Integral de NNA y otras normas afines, además realizar jornadas de sensibilización sobre el reconocimiento de NNA como sujetos de derechos.
34. Aplicar protocolos de actuación para erradicar la revictimización para asegurar y monitorear la atención efectiva, reparación y restauración de las víctimas de violencia y el delito, para reparar el daño que recibió y que no sufra otras revictimizaciones en el proceso del tratamiento del delito.
35. Promover acciones al interior de la institución para garantizar el acceso de NNA a denunciar ante la Fiscalía vulneraciones a sus derechos humanos, tomando en cuenta el Principio de Interés Superior y el reconocimiento como sujetos de derechos.

36. Aumentar y mejorar las capacidades instaladas de las Unidades de Protección al Menor y la Mujer, para mejorar la investigación de los casos de violencia contra la niñez y adolescencia y con ello crear condiciones para reducir la impunidad.

37. Cumplir con la Ley de Acceso a la Información Pública, mediante la elaboración de informes anuales de rendición de cuentas a la ciudadanía sobre el estado de los casos judicializados de violencia contra la niñez: desapariciones, homicidios, violencia sexual y feminicidios de adolescentes entre otros.

38. Establecer medidas para cumplir con el tratamiento integral de las víctimas de violencia sexual y hacer cumplir su derecho a la información, asistencia, protección, reparación y participación.

Rindan informe las autoridades mencionadas, en el plazo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de este informe, sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas.

#### **d) Implementación del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia**

El pasado 26 de junio del corriente año, se cumplieron 4 años y 3 meses de haber sido aprobada la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA) que crea el Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (SINAPINA), luego de ese tiempo transcurrido es necesario que la sociedad civil —obligada a vigilar que cada una de las obligaciones señaladas en esa ley sean efectivamente cumplidas— y esta Institución, que por mandato constitucional está facultada para supervisar y fiscalizar la actuación de la administración pública frente a las personas, se pronuncie sobre los avances y limitaciones en la implementación de dicho sistema.

En septiembre de 2012 se organizó un foro-taller con diversas organizaciones no gubernamentales (ong's) que trabajan temas de niñez y adolescencia, instituciones de cuidado alternativo, representantes de Gobiernos Locales, las Unidades Juveniles de Derechos Humanos de la PDDH y niñas, niños y adolescentes de la Red Nacional de Niñez de El Salvador (RENAES), movilizadas desde diferentes departamentos del país, en el cual se hizo un balance sobre el grado de implementación y actuación del SINAPINA, con base en 6 ejes temáticos: Roles de los actores del sistema: jueces especializados de niñez y adolescencia, sociedad civil, gobiernos locales, CONNA e ISNA; definición, procesos y requisitos del registro de las ong's en el CONNA; instalación de sistemas locales y nacional de protección (comités locales de derecho, juntas de protección y Red de Atención Compartida); inversión en la implementación de la LEPINA; participación ciudadana de la niñez y adolescencia en el proceso de instalación del sistema local y nacional de protección; y, diseño y proceso de consulta de la Política de Niñez y Adolescencia, los resultados fueron los siguientes:

Se evidencia como avance, la conformación de 6 juzgados y una cámara especializada de niñez y adolescencia, el lanzamiento de la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia realizado el día 26 de junio del corriente año, la consulta realizada a la sociedad y a las niñas, niños y adolescentes para formular dicha política; la existencia del reglamento para la Red de Atención Compartida y 10 juntas de protección; resalta el hecho de que en varios Gobiernos Locales a partir de la vigencia de la LEPINA se han creado estructuras propias para que atiendan a dicho grupo poblacional y se han emitido políticas y programas municipales de protección para dicho sector. La adecuación del ISNA a los mandatos de la LEPINA.

Sobresalen como limitaciones en cuanto a la instalación del SINAPINA: la falta de conformación de 4 juntas de protección de las 14 que en principio deben funcionar, la ausencia de los comités locales de derechos, falta de desarrollo de la tipología de programas en el Reglamento de la RAC, los plazos muy cortos para el registro de las ong's y de los programas, los elevados costos económicos por las autorizaciones de las distintas oficinas públicas para que las entidades de atención operen, tales como: OPAMS, Cuerpo de Bomberos, etc.; se evidencian limitaciones financieras y de conocimiento en las municipalidades para la formación de los comités locales, escasez de recursos financieros y humanos en las juntas de protección y el poco acceso y desinformación sobre la forma en que operan estos organismos, sobresale, asimismo, la nula socialización y formación de las ong's en el Reglamento de la RAC, así como, la poca coordinación entre el ISNA y el CONNA por lo cual las entidades de atención deben registrarse en ambas dependencias.

En el balance realizado por la sociedad civil, las niñas, niños y adolescentes y representantes de municipalidades se denota que no se conoce un plan estratégico del CONNA, con metas claras y precisas para el corto, mediano y largo plazo, para la implementación del SINAPINA, el referido consejo no ha apoyado financieramente a los Gobiernos Locales y no se ha involucrado a la empresa privada. Los pocos avances en la implementación del sistema en gran parte se deben a la poca inversión pública en niñez y adolescencia, veamos algunos datos: para el ejercicio fiscal 2012, el CONNA solicitó un presupuesto de casi 6 millones y medio; sin embargo, solamente se aprobaron un poco más de 3 millones de dólares, en términos porcentuales significa un 47.13%, es decir, que el 52.47% quedó desfinanciado. Es necesario contar con un estudio sobre los costos que implica llevar a la práctica el SINAPINA, elaborado sobre una base técnica, científica y transparente.

En cuanto a las consultas para la elaboración de la política de niñez y adolescencia, como limitaciones se tuvo que no se oyó la opinión de las niñas, niños y adolescentes, sino más bien a jóvenes y adultos; los grupos fueron muy reducidos, no fueron representativos del sector que debió opinar. Las convocatorias se hicieron en horario y espacio de estudio para la niñez, lo que pudo obstaculizar su asistencia. Hay desconocimiento de la ley, lo que limitó las opiniones. La metodología no fue acorde a la edad de las personas consultadas, a su entorno y características propias, tampoco fue amigable.

Los retos identificados para que el SINAPINA funcione adecuadamente son lograr el involucramiento de todas las instituciones estatales, el establecimiento de todas las juntas de protección y de todos los comités locales de derechos en el corto plazo, contar con un sistema digital único de registro de ong's y de programas, lograr que la empresa privada se involucre en la implementación de la ley, fortalecer su divulgación, lograr un presupuesto justo, que la metodología de consulta para la revisión, modificación y revisión de la política sea adecuada según las diferentes edades de la población meta, al entorno de las NNA, que sea motivadora.

Por lo anterior, se recomienda al Consejo Directivo del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia que elabore un plan estratégico para la implementación del SINAPINA, en el cual se establezcan metas claras y precisas en el corto, mediano y largo plazo. Asimismo, se señalen las fuentes de financiamiento sobre la base de un costeo real y transparente para conocer cuánto cuesta dicho sistema; analice la posibilidad de proponer la creación de un impuesto para el financiamiento del SINAPINA y la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; desarrolle una evaluación gubernamental sobre la inversión pública en niñez y adolescencia y realice las recomendaciones que considere oportunas para que se dé cumplimiento al principio de prioridad absoluta e interés superior de las NNA bajo el enfoque de derechos humanos; requiera y lleve a cabo todas las gestiones necesarias para lograr la asignación de un porcentaje específico en el presupuesto general de la nación para la puesta en marcha de la LEPINA; que desarrolle una estrategia para lograr el involucramiento de la empresa privada en la puesta en marcha del SINAPINA; fortalezca las labores de divulgación y difusión de la LEPINA,

tanto a la población en general como en las instituciones del Estado; que realice acercamientos con las distintas estructuras municipales, tales como los Consejos de Alcaldes Departamentales para la instalación en el menor tiempo posible de los comités locales de derechos; que proceda en el menor tiempo posible a la instalación de las juntas de protección que hagan falta y de los comités locales de derechos, dotándolos de los recursos suficientes para que realicen adecuadamente sus funciones; que se consolide una sola Red de Atención Compartida, por lo tanto, debe existir coordinación entre el ISNA y el CONNA y la sociedad para evitar confusiones y duplicidad de esfuerzos; se establezca un protocolo para la supervisión de las entidades de atención por parte del CONNA y del ISNA.

Al Ministerio de Hacienda se recomienda que entregue el techo presupuestario tal y como ha sido solicitado por parte del CONNA; apoye al citado Consejo en la identificación de fuentes de financiamiento para la implementación del SINAPINA; a la hora de hacer la distribución de los techos presupuestarios aplique el principio de prioridad absoluta de la niñez y adolescencia, consagrado en la LEPINA. A la honorable Asamblea Legislativa se recomienda que a la hora de la discusión del presupuesto general de la nación, realice los ajustes necesarios con base en los principios de prioridad absoluta e interés superior de la niñez y adolescencia, para que se dote a la LEPINA de un presupuesto adecuado; adopte las medidas necesarias para monitorear el avance en la instalación del SINAPINA, tomando las acciones pertinentes cuando detecte que no haya avances significativos en su implementación; realice un estudio sobre la efectividad de la LEPINA en la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Al presidente de la República se recomienda que preste toda la colaboración en la implementación de la ley y del sistema de protección; gire las directrices pertinentes al Ministro de Hacienda para que se otorgue un presupuesto suficiente para la instalación del SINAPINA y monitoree la actuación de los ministerios: de Hacienda, Educación, Salud Pública y Asistencia Social y Justicia y Seguridad Pública en la implementación de la LEPINA, adoptando las medidas adecuadas cuando se evidencia falta de diligencia.

## **e) Niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de pobreza**

El marco jurídico salvadoreño establece que<sup>205</sup>:

### **Artículo 20. Derecho a un nivel de vida digno y adecuado**

Todas las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho de gozar de un nivel de vida adecuado en condiciones de dignidad y goce de sus derechos. El derecho a un nivel de vida digno y adecuado es esencial para un desarrollo integral desde la concepción.

Este derecho comprende:

- a) Alimentación nutritiva y balanceada bajo los requerimientos y normativas que las autoridades de salud establezcan;
- b) Vivienda digna, segura e higiénica, con servicios públicos esenciales como agua potable, alcantarillado y energía eléctrica;
- c) Vestuario adecuado al clima, limpio y suficiente para sus actividades cotidianas; y,
- d) Recreación y sano esparcimiento.

Corresponde a la madre, al padre, la familia ampliada, los representantes y responsables la garantía de este derecho conforme a sus posibilidades y medios económicos. El Estado, por medio de políticas públicas y programas, deberá asegurarles condiciones para que cumplan con esta responsabilidad.

<sup>205</sup> Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.

El mandamiento legal arriba transcrito dista mucho de ser una realidad para decenas de miles de NNAJ que hoy en día padecen de hambre, no pueden ir a la escuela, atender sus padecimientos de salud por la situación de pobreza en la que viven, lo cual se ha convertido en un círculo vicioso casi imposible de romper. Según las cifras gubernamentales “uno de cada cinco NNA vive en hogares en extrema pobreza”<sup>206</sup>. En el año 2011 la encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) reportó que en el territorio nacional un 12.2% de hogares viven en condiciones de pobreza extrema; en la zona rural aumenta al 18.4% y en la urbana desciende a 8.9%. Si a esto se suma la población que vive en situación de pobreza relativa, la proporción llega casi el 50% de la población menor de 18 años en condiciones de pobreza.

En este sentido, según informó la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO), en El Salvador uno de cada cinco niños en las zonas rurales padece de desnutrición crónica, el 12.3 % de la población salvadoreña están en condiciones de subnutrición<sup>207</sup>. El citado organismo indicó que “El único número de hambrientos aceptables en el mundo debería de ser cero; sin embargo, estamos a 1,000 días del cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) y seguimos con 49 millones de hambrientos, personas que sufren hambre, en América Latina y el Caribe”<sup>208</sup>.

En Centroamérica el 40 por ciento de la población rural padece hambre, de estos en El Salvador hay 19 por ciento, el trabajo para la erradicación del hambre continua siendo insuficiente, la satisfacción de ese derecho fundamental para muchas personas aún está lejos de satisfacerse. Por lo anterior es necesario que mediante ley formal el Estado garantice el cumplimiento del derecho a la alimentación, pues, como ha indicado la FAO “Con los estómagos vacíos, con hambre, no puede haber aprendizaje, ni igualdad de género, ni desarrollo en un país”<sup>209</sup>.

En este tema los desafíos que enfrenta la población salvadoreña son múltiples y complejos lo cual requiere que se tomen las decisiones y prioridades necesarias, por ello la FAO, desde hace varios años, está impulsando una Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria en el país. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha expresado que en El Salvador no se puede perder de vista que no hay instrumentos legales que garanticen el derecho a una alimentación adecuada, por ello se han realizados llamados a la Asamblea Legislativa para que se cree un instrumento legal que cumpla dicha función<sup>210</sup>.

Asimismo, al comparar según la jefatura de la familia, hay una leve disminución a nivel nacional en cuanto a la extrema pobreza en los hogares con jefatura femenina (10.5%), en relación con los hogares de jefatura masculina (13.1%). Esta disminución también se puede evidenciar tanto en el área rural (15.1% para hogares con jefatura femenina, y 19.8% para hogares con jefatura masculina), como en la urbana (8.6% para hogares con jefatura femenina y 9.1% para hogares con jefatura masculina). En este punto se debe indicar que para el 2012 El Salvador bajó de la posición 106 a la 107 en relación a 187 países clasificados sobre el tema que se comenta y en relación al Índice de Desarrollo Humano<sup>211</sup>. Para el año 2011, del total de personas menores de edad, un 20.3%, es decir, 1 de cada 5, residía en hogares en extrema pobreza (independientemente de su sexo), lo cual los ubica en una situación de

206 Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH): *Informe especial sobre el impacto de la violencia en los derechos de las niñas, niños y adolescentes en El Salvador*, San Salvador, El Salvador, mayo de 2013, p. 17.

207 Morán, Gloria: *FAO: con estómagos vacíos no hay desarrollo*, artículo publicado el 27.05.13, disponible en <http://www.contrapunto.com.sv/ddhh/fao-con-estomagos-vacios-no-hay-desarrollo>, último acceso 27.06.13

208 Idem.

209 Idem.

210 Idem.

211 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): *Informe sobre Desarrollo Urbano: El ascenso del Sur: Progreso humano en un mundo diverso*, 2013. El Índice de Desarrollo Humano se refleja por medio de 3 dimensiones: la posibilidad de una vida larga y saludable, el acceso al conocimiento y el logro de un estándar de vida decente. Estas dimensiones se recogen en cuatro sub indicadores: esperanza de vida, escolaridad promedio, escolaridad esperada al iniciar la escuela e ingreso nacional bruto.



mayor riesgo de vulneración a su derecho al desarrollo integral. La situación de extrema pobreza es mayor para las NNAJ que viven en zonas rurales con un 26.7%, en contraste con quienes viven en zonas urbanas, con un 15.6%. La comparación por sexo, muestra que no existen marcadas diferencias entre la población masculina y femenina menor de 18 años.

La norma indicada destaca que el desarrollo integral de la niñez está sin duda condicionado por el goce efectivo de sus derechos teniendo como eje fundamental el del nivel de vida digno y adecuado, pues le califica de “*esencial*” para el desarrollo integral desde el momento de la concepción.

#### f) El derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes

Los datos oficiales disponibles indican que en el año 2011, hubo un promedio diario de 70 niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años que dieron a luz; asimismo, cada día de ese año, 3 niñas entre los 10 y 14 años tuvieron un parto, a quienes se suman otras 69 entre 15 y 19 años. En total, en el año 2011, 24 mil 494 niñas menores de 19 años expusieron sus cuerpos a funciones para las que no estaban preparadas. Asimismo, asumieron obligaciones y estrés propios de las personas adultas; y, probablemente, truncaron aspiraciones académicas y de desarrollo personal.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MINSAL) reporta en su informe anual del año 2011, que el 23.4% (24,494) de los partos atendidos fueron en mujeres adolescentes de entre 10 y 19 años. Algunos datos sobre la situación de las adolescentes se presentan en el siguiente cuadro. Es importante señalar que las estadísticas disponibles son clasificadas para el grupo de edad entre 15 y 19 años, lo que genera dificultades para obtener información exclusivamente de personas cuya edad máxima sea 18 años, es decir, para la categoría de niña, niño y adolescente.

Algunos indicadores sobre la salud de las adolescentes
Adolescentes utilizan métodos anticonceptivos. Según la Encuesta Nacional de Salud Familiar, para el año 2008, el 9.1% de las niñas de entre 15 y 17 años utilizaban métodos anticonceptivos, en el área rural era de 8.5% y en la urbana de 9.8%.
Adolescentes en unión conyugal. La EHPM 2011 reporta que 2.8% de adolescentes entre 12 y 17 años, se encuentran o han estado en unión conyugal; en el área rural la proporción es de 3.3%, y en la urbana 2.3%. Al desagregar por sexo, para los niños es 0.8% el que ha estado en unión conyugal a nivel nacional, el 0.9% en lo rural y el 0.7% en lo urbano. A nivel nacional, el 4.9% (21,801) de las niñas ha estado en unión conyugal, dicha tasa aumenta a 6.0% en el área rural y desciende a 4.2% en la urbana.
Según EHPM 2011, 8.7 de cada 10 niñas, niños y adolescentes carece de algún tipo de cobertura de seguro médico de salud (ISSS, bienestar magisterial u otro sistema): el 87.2% de la población menor de 18 años no tiene acceso a cobertura de ningún seguro de salud, en el área rural es de 95.3% y en la urbana de 81.3%.

El sistema de salud de El Salvador es complejo, hay muchas organizaciones que ofrecen servicios a poblaciones selectas. El MINSAL ofrece servicios a un porcentaje del 75 al 80% de la población, mientras recibe el 50% de la línea presupuestaria para la salud, complementado con el Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD). El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) cubre aproximadamente el 20% de la población y se le ofrece a aquellas personas que están formalmente empleadas, incluyendo a sus familias (niños hasta la edad de 12 años), a través de pagos deducibles del sueldo.

## g) Niñas, niños, adolescentes y jóvenes migrantes

En las últimas dos décadas, una elevada proporción de la población salvadoreña y específicamente de jóvenes, con la expectativa de mejorar sus condiciones de vida y lograr la reunificación familiar, ha experimentado la necesidad de emigrar de forma indocumentada, predominantemente hacia los Estados Unidos. Es claro que se requiere mayor investigación y evidencia sobre las causas por las cuales emigran las personas jóvenes.

Al respecto se ha indicado que “Las razones fundamentales por las que estas personas [salvadoreñas, en su mayoría jóvenes en plena edad productiva] valoran emigrar giran alrededor de las dificultades económicas que enfrentan para tener una vida digna, la falta de oportunidades para poder insertarse en el mundo laboral, el deseo de ayudar a sus familias y la búsqueda de alternativas para construir un proyecto de vida digno. A estas razones habría que añadir nuevas formas de violencia e inseguridad social en las que el país se encuentra inmerso”<sup>212</sup>.

La migración irregular es percibida, desde el punto de vista de los Estados, como un fenómeno social que hay que regular por medio de leyes, es decir, como un problema de legalidad. Los Estados negocian entre sí políticas relativas a la migración que permitan mantener acuerdos geopolíticos de mayor dimensión, entre ellos los relativos a la seguridad y a macro-agendas económicas. Por su lado, los migrantes abordan el tema de la migración desde la perspectiva del derecho humano a la alimentación, al trabajo, a una vida digna y a la reunificación familiar para la consecución de oportunidades que conduzcan a ella<sup>213</sup>.

Las personas jóvenes salvadoreñas emigran con la esperanza de encontrar oportunidades de trabajo para sobrevivir y ayudar a sus familias<sup>214</sup>, sin embargo, al salir del país sufren otra exclusión: la que se origina por las condiciones laborales que le ofrecen ahí donde espera concretar sus anhelos de bienestar. Esta no es la única discriminación. Los prejuicios y la xenofobia con los que se encuentra el inmigrante le impiden relacionarse en buenos términos con la nueva comunidad donde reside. Otras desventajas se derivan del desconocimiento de la lengua, de la diferencia de costumbres y mentalidades, y de una legislación que ignora sus existencia, excepto para acosarlo y deportarlo. La vida cotidiana del inmigrante no solo es difícil, sino que transcurre embebida en la incertidumbre y la inseguridad<sup>215</sup>.

El fenómeno de la migración está afectando mayormente a las NNAJ, por los peligros que entraña el trayecto también porque son los más proclives a viajar en forma irregular; se calcula que una de cada cinco personas que emigran en Latinoamérica es NNA. En el Salvador, una gran cantidad de NNAJ se verá enfrentada de forma temprana a la disyuntiva de migrar o no migrar particularmente los hijos y las hijas de la creciente diáspora. Los datos disponibles señalan que al menos uno de cada cuatro jóvenes desea emigrar y dicha proporción se incrementa a tres de cada cuatro cuando se tienen parientes en el exterior. Si se toma en cuenta que casi dos terceras partes de los jóvenes del país tienen un pariente cercano en el exterior y que más del 50% de la población tiene 24 años o menos un considerable segmento de connacionales tienen una elevada probabilidad de terminar emigrando por la cercanía que tiene con el fenómeno mismo<sup>216</sup>.

212 Gaborit, Mauricio et al: *La esperanza viaja sin visa: jóvenes y migración indocumentada en El Salvador*, Fondo de Población de las Naciones Unidas-Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, 2012, p. 7

213 Cfr. Gaborit, Mauricio et al: Op. Cit., p. 10.

214 El número de personas que recibieron remesas durante el año pasado fue 1.2 millones (de los 6.2 millones de habitantes que la EHPM 2012 reportó para ese año) es decir, 19.82 %. En números absolutos, de acuerdo al Banco Central de Reserva de El Salvador, durante el indicado periodo el país recibió \$3,910.9 millones en remesas familiares, lo cual representa, según la misma fuente, el 16.4 % del Producto Interno Bruto. Ver: Velasco, Sury: *Unos 323,000 hogares reciben remesas*, Diario El Mundo, edición del 18.06.13, p. 19.

215 Cfr. Idem., p. 23.

216 Cfr. Idem., p. 34.

La *American Community Survey*<sup>217</sup> (encuesta sobre la comunidad estadounidense) aplicada en los Estados Unidos, reportó que para el año 2000 había 908,545 personas salvadoreñas viviendo en ese país, indistintamente de su estatus migratorio regular o irregular. Para el año 2011, esta cifra se duplicó a 1 millón 952 mil 483 de personas salvadoreñas, de las cuales, 51.5% eran de sexo femenino. Asimismo, para el 2011 la misma fuente reporta que 30.1% de la población salvadoreña residente en los Estados Unidos corresponde a niñas, niños y adolescentes, de la cual, 49.1% es de sexo femenino. De acuerdo a la EHPM 2011, el 20.7% de los hogares en el ámbito nacional reciben ayuda económica de sus familiares que residen en el exterior. En el área rural es el 24.4% de hogares los que reciben remesas, mientras que en lo urbano disminuye a 18.1%. Por otro lado, según la Dirección General de Migración y Extranjería para el año 2011 se registró un total de 16,579 personas deportadas de Estados Unidos, lo cual implica que en promedio, cada día fueron deportadas 45 personas, es decir, casi dos personas cada hora.

## h) El derecho a la educación de la niñez y la adolescencia salvadoreña

La educación es un derecho de niños, niñas y adolescentes, pero existen datos que evidencian la vulneración a este derecho. De acuerdo a la EHPM del 2011 en el país el 12.7% de la población de 10 y más años de edad no sabe leer ni escribir. Asimismo, existe una brecha entre el área rural y la urbana: en la primera la cifra de las NNA analfabetas aumenta a 20.7% y en la segunda disminuye a 8.2%. En el caso específico de las NNA entre 10 y 17 años, los datos revelan que el 1.3% no sabe leer ni escribir, lo que significa que 31,000 no tienen acceso a la educación formal, siendo el área rural la más afectada: de cada 10 NNA que no sabe leer ni escribir, 6 se encuentran en lo rural y 4 en lo urbano. Al comparar por sexo y área geográfica, en el caso específico de niños de 10 a 17 años, el 0.7% no sabe leer ni escribir, lo cual aumenta en el área rural a 1.2% y en lo urbano disminuye a 0.4%. En las niñas, es de 1.1% a nivel nacional, 1.5% en el área rural y 0.7% en la urbana.

En el año 2010 aproximadamente 178, 257 niñas, niños y adolescentes, entre 10 y 17 años no asistieron a la escuela, en el año 2011 la cifra indicada fue de 169, 209. Según la misma fuente, para el año 2010, en el ámbito nacional, un 14.8% de la población entre 10 a 17 años (86 mil 469) no asistían a un centro educativo, es decir, no estaban insertos en el sistema de educación formal; dicha cifra para el área rural fue del 20% y para el área urbana de 9.5%. Un segundo dato relevante sobre el derecho a la educación, se refiere al número de años aprobados para las personas entre 10 y 17 años, el cual supera levemente la educación primaria, con un promedio de 6.23 grados para la población de 10 o más años; 4.38 en el área rural y 7.32 en la urbana.

En El Salvador se estima que 1 de cada 3 adolescentes mujeres del área rural no estudia ni trabaja. En el país para el año 2011 el 12.2 % de adolescentes entre 14 y 17 años no trabajaba ni estudiaba. Esta situación se agudiza para el área rural, dado que aumenta a 18.2% y desciende a 8.0% en lo urbano. En el caso de los adolescentes varones a nivel nacional, el 6.7% no trabajaban ni estudiaban; 8.1% en lo rural y 5.7% en lo urbano. En el caso de las adolescentes mujeres, la situación es más desventajosa, al tener menos oportunidades de desarrollo, dado que a nivel nacional el 17.8% no estudiaba ni trabajaba asalariadamente, y al comparar por área geográfica es de 29.4% en lo rural y 10.3% en lo urbano. Se infiere que 1 de cada 3 adolescentes de la zona rural no estudia ni trabaja asalariadamente. La satisfacción del derecho a la educación para las y los adolescentes es muy precaria, lo cual se constituye en un importante factor de riesgo social para este grupo poblacional. Una investigación<sup>218</sup> desarrollada al respecto señaló que los jóvenes que ingresaban a las maras y pandillas, o que comenzaban su vida violenta y delictiva, lo hacían antes o durante los dos primeros años del tercer ciclo de educación básica (7º y 8º grado).

217 Cfr. PDDH: *Op. Cit.*, p. 19.

218 Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo (FEPADE): *Jóvenes en situación de exclusión social. Caracterización de la niñez y adolescencia de 7 a 18 años de El Salvador*, San Salvador, El Salvador, 1997.

## i) Derecho a la protección frente a la explotación laboral

El Comité Nacional para la Erradicación de las Peores Formas de Trabajo Infantil reconoció en el Día Internacional contra el Trabajo Infantil, el 12 de junio pasado, que hay un ligero incremento en casos en la edad de trabajos permitidos: de 14 a 17 años. La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples que realizó en 2012 la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) detalló que se registraron 191,599 niñas, niños y adolescentes (NNA) de cinco a 17 años que con su actividad productiva contribuyen al sostenimiento de la familia. En 2011 fueron 188,343.

Se indicó que de los 191,599, los que estaban directamente en situación de trabajo infantil en 2012 eran 163,577; mientras, en 2011 fueron 163,945, por lo que se catalogó como una reducción mínima: de un 3.3 % a un 3.0 %. Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha sido enfática en que se debe poner atención al incremento del trabajo infantil peligroso, que va de los 14 a los 17 años. Este ha incrementado de 5.7 % a 6.3 %. Para 2012 se contabilizaron 110,626 adolescentes de 14 a 17 años en trabajos peligrosos (87,898 niños y 22,728 niñas). En 2011 fueron 103,774, es decir, el año pasado hubo 6,852 casos más.

En 2012, la explicación que se dio con respecto al crecimiento que se tuvo en 2011 fue en parte la influencia de la depresión tropical 12-E; sin embargo, al consultar sobre cuáles fueron las causas del incremento el año pasado, las respuestas no fueron concretas. Humberto Centeno, Ministro de Trabajo, explicó que desde 2009 se han otorgado 4,855 permisos a adolescentes entre 14 y 17 años. “La LEPINA le permite al Ministerio de Trabajo dar permisos de trabajo a esos jóvenes y, basados en ello, hemos dado casi 5,000 permisos... Ese puede ser uno de los parámetros de por qué se ha incrementado el trabajo en adolescentes”<sup>219</sup>, dijo Centeno.

El citado funcionario explicó que en el corriente año se recibieron 2,908 solicitudes de permiso de trabajo adolescente y se otorgaron 1,618. En total fueron 1,555 niños los que llegaron a solicitar permisos y a 833 se les otorgaron; mientras, fueron 1,353 niñas las que llegaron a tramitarlo y se les concedió a 785.

El director adjunto de OIT, Leonardo Ferreira, dijo: “El trabajo infantil por debajo de los 14 años ha venido bajando y eso se debe a mejorar la parte educativa y los programas de transferencia monetaria condicional, así como los que proveen materiales educativos. Pero en el caso de los adolescentes, se debe poner más atención porque es donde se está concentrando el trabajo infantil en El Salvador”<sup>220</sup>.

Ante eso, el ministro comentó: “Con la empresa privada tenemos convenios de sacar a los niños de la peligrosidad. Pero lo que tenemos que hacer con los empresarios es buscar trabajos adecuados para jóvenes entre 14 y 17 años... debe haber más coordinación con la empresa privada, porque varios empresarios sí están necesitando jóvenes de esta edad”<sup>221</sup>.

## Conclusiones

Las cifras oficiales recogidas en el presente informe, indican que las víctimas principales de los homicidios son adolescentes varones, la tasa de homicidios de niñas y adolescentes ha crecido en los últimos años. Asimismo, las niñas y las adolescentes constituyen la mayor proporción de víctimas en los casos de violencia sexual, como el abuso y la violación sexual, que lejos de aliviarse, dicha tendencia parece ir a la alza, donde los agresores sexuales son principalmente familiares varones y miembros de pandillas, lo

219 Sosa, Byron: Retos para bajar cifras en el trabajo infantil peligroso, La Prensa Gráfica, edición del 13.06.13, p. 20, disponible en <http://www.laprensagrafica.com/retos-para-bajar-cifras-en-el-trabajo-infantil-peligroso>- último acceso 26.06.13.

220 Idem

221 Idem.

que coloca a la víctima en una situación de total desprotección de sus derechos, puesto que se asume que el lugar más seguro lo constituye la familia, pasando esta a convertirse en el lugar más peligroso.

Las distintas fuentes consultadas coinciden y ponen de manifiesto que el Estado salvadoreño tiene una deuda histórica frente a las graves formas de violencia contra niñas, niños y adolescentes que refleja niveles de deshumanización “naturalizada” históricamente, como el maltrato contra la niñez en la familia, el abuso sexual y la violencia patrimonial.

A estas expresiones de violencia se suman otras formas ligadas al contexto de inseguridad y atribuidas principalmente a integrantes de pandillas, en relación con masacres, desapariciones, cementerios clandestinos, feminicidios de adolescentes, violaciones y desmembramiento de sus cuerpos, ejecuciones, tiro de gracia, entre otras, las que constituyen vulneraciones a derechos fundamentales como la vida, la integridad personal y el derecho a ser protegidos contra toda forma de violencia.

Los resultados encontrados en el presente informe evidencian que el mayor número de víctimas de los homicidios son los adolescentes varones. No obstante, también se evidencia la creciente tendencia de homicidios de las adolescentes en los últimos años. Si a esto se suma las masacres, desapariciones, y asedio de pandillas, El Salvador puede ser considerado como uno de los Estados que más violan los derechos de la niñez y adolescencia. A partir de este informe, se ha constatado que la violencia social afecta a gran parte de la niñez de los sectores empobrecidos y con menor acceso a la educación y oportunidades de formación.

La magnitud de los niveles de violencia contra la niñez y adolescencia a los que se ha llegado no es únicamente responsabilidad de la actual gestión gubernamental, sino que constituye una espiral de violencia histórica. No obstante, frente a la gravedad de la situación, se evidencia las debilidades institucionales y del Estado en su conjunto, para dar una respuesta integral bajo la perspectiva de los derechos humanos de las víctimas para prevenir, registrar, atender, investigar y reparar; a la base de esto se encuentra un sistema que mantiene y reproduce la impunidad y la falta de acceso a la justicia.

La respuesta del Estado frente al incremento de la violencia que afecta y vulnera los derechos de las NNA, ha sido ineficaz, puesto que no se observan medidas y acciones específicas y contundentes para detener esta vulneración de derechos. En la agenda pública no se ha priorizado el derecho a una vida libre de violencia de niñas, niños y adolescentes. Pese a contar con leyes y políticas orientadas a esta población, esto en la práctica no se traduce en medidas, presupuestos, resultados y que los indicadores así lo demuestren.

El derecho de las NNAJ a tener un nivel de vida digno y adecuado, reconocido en el ordenamiento jurídico dista mucho de ser una realidad para decenas de miles de NNAJ que hoy en día sufren hambre, no pueden ir a la escuela, atender sus padecimientos de salud por la situación de pobreza en la que viven, lo cual se ha convertido en un círculo vicioso casi imposible de romper. Según las cifras gubernamentales “uno de cada cinco NNA vive en hogares en extrema pobreza.

En relación al sistema de información nacional unificado que registre la violencia hacia NNA, aún no es una realidad; las instituciones se enfrentan con dificultades en la captura, registro, procesamiento y análisis de datos de violencia. Algunas instituciones cuentan con sistemas de información obsoletos y cada una de ellas categoriza variables e indicadores de violencia mediante fichas de elaboración propia, con las cuales difícilmente se pueden establecer un conjunto mínimo de indicadores nacionales de violencia contra la niñez, esto dificulta que se le pueda dar seguimiento.



En cuanto a las recomendaciones emitidas por el Comité de Derechos del Niño con relación a la erradicación de la violencia contra la niñez y sus causas, tampoco se muestran avances de cumplimiento. En lo referente a la legislación nacional, aún no está del todo conforme con la Convención sobre los Derechos del Niño en lo referido al castigo corporal, ni al derecho a la prioridad absoluta de las NNA que se refleje en el incremento sostenido de la inversión para ese grupo de población, entre otros puntos. El abandono en esos aspectos, guarda relación con el crecimiento y consolidación de las pandillas, por cuanto, se ha constatado que la violencia social afecta a gran parte de la niñez de los sectores más empobrecidos y con menor acceso a la educación y oportunidades de formación.

La Fiscalía General de la República tiene poca cualificación técnica para la investigación del delito, aunado a ello existe nula articulación y coordinación con las demás instituciones del sector justicia y seguridad pública, lo cual produce una baja cifra de condenas, ello genera en la ciudadanía una sensación de impunidad generalizada que eleva la desconfianza en dichas autoridades.

El Estado salvadoreño al no ofrecer oportunidades de desarrollo a la población, al sentirse esta sin las posibilidades de subsistir se ve obligado a emigrar en la búsqueda de mejores derroteros que le permitan vivir dignamente. El fenómeno de la migración irregular afecta mayormente a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, lo cual le ha dado un nuevo rostro y conformación a la familia salvadoreña.

## 1.5. DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES<sup>222</sup>



*El señor Procurador, licenciado Oscar Humberto Luna en una actividad de promoción de los derechos humanos de las mujeres.*

Durante la presente gestión, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se ha pronunciado continuamente sobre las obligaciones que el Estado de El Salvador ostenta en materia de derechos humanos de las mujeres. En ese sentido, se han reconocido importantes avances tanto a nivel normativo como en la formulación y ejecución de políticas públicas con enfoque de género. Dentro del período a informar, se señala la reciente aprobación y sanción de la Ley de Partidos Políticos que contempla un porcentaje mínimo de participación para las mujeres a fin de que puedan optar a cargos de elección popular. Si bien tal decisión es un hito histórico y representa una medida de acción

<sup>222</sup> Elaborado por la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer y Familia, y editado por la Unidad de la Realidad Nacional.

positiva, los subsiguientes esfuerzos deben estar encaminados a lograr el integral cumplimiento del principio de paridad, que implica la promoción de condiciones de igualdad para mujeres y hombres en los procesos electorales. Comprende el fomento de los liderazgos femeninos, sanción a los partidos políticos que incumplan tal disposición, el tema de la financiación, entre otros aspectos<sup>223</sup>.

Asimismo, en los últimos meses se ha continuado con la ejecución de esfuerzos interinstitucionales a fin de implementar la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. En materia de políticas públicas se señala la Política Nacional de las Mujeres, la formulación del Sistema Nacional de Datos Estadísticos e Información sobre Violencia hacia las Mujeres, el Plan Nacional de Equidad e Igualdad para las Mujeres Salvadoreñas, el lanzamiento de la Política Nacional contra la Trata de Personas.

No obstante los invaluable esfuerzos ejecutados hasta el momento, el patriarcado sigue permeando las estructurales estatales, obstaculizando el ejercicio pleno de la *igualdad real* entre mujeres y hombres en los términos que refiere el artículo 3 de la Constitución de la República, las disposiciones de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres y la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. En ese orden de ideas, la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos realizada en la ciudad de Viena en 1993 reconoció por vez primera en el concierto mundial, que los derechos humanos de la mujer y la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales<sup>224</sup>. Igualmente, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en la Ciudad de Beijing en 1995, colocó en la agenda internacional la prioridad de avanzar hacia el cumplimiento de la igualdad entre los géneros definiendo dos vías para lograrlo: incorporación del enfoque de género en el quehacer estatal – *mainstreaming*- y el empoderamiento de las mujeres – *empowerment*-.

Desde esta Procuraduría, se observa con suma preocupación las diferentes expresiones misógenas que evidencian las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres, colocándolas a aquellas en situación de vulnerabilidad por su condición de género. Esto se evidencia por ejemplo, a las múltiples situaciones que enfrentan las mujeres al momento de acceder a la justicia. Desde la labor de tutela que ejerce esta Institución, se ha constatado la victimización de la que son objeto al ser cuestionadas y culpabilizadas de los hechos denunciados; por ejemplo, en procesos de violencia intrafamiliar, violencia sexual, feminicidios, posicionándolas en una situación de indefensión, haciendo que en muchas ocasiones desistan de su pretensión.

Esta Procuraduría es de la opinión que si un Estado quiere fortalecer su gobernabilidad democrática, debe incorporar el enfoque de igualdad de género en la modernización de la administración pública, especialmente del sistema judicial; caso contrario, será un estado fallido. Como Institución Nacional de Derechos Humanos compartimos el contenido de la observación 14 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer emitida al Estado salvadoreño en el sentido de *difundir el conocimiento de la aplicabilidad directa del párrafo 1 del artículo 4 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer así como la importancia de las medidas especiales de carácter temporal para la agilización del proceso encaminado al logro de la igualdad entre los géneros*”.

Ante esta coyuntura, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a través de la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer y la Familia ha realizado acciones puntuales a favor de la defensa de los derechos humanos de este grupo en situación de vulnerabilidad: 1) Presentación pública del Informe Especial sobre Acceso a la Justicia para las Mujeres en el Ámbito Laboral, Penal

223 Pronunciamiento del Señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Licenciado Oscar Humberto Luna, en el Día Nacional e Internacional de la Mujer, 8 de marzo 2013.

224 Declaración y Programa de Acción de Viena, 1993, párrafo 18.

y Familiar, 2) Elaboración del tríptico informativo “¿Cómo hacer en casos de violencia doméstica?”, 3) Presentación de pieza de correspondencia ante la Honorable Asamblea Legislativa referente al Proceso de Ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW en conjunto con las siguientes organizaciones feministas: CEMUJER, Movimiento Salvadoreño de Mujeres (MSM), ORMUSA, IMU, Prudencia Ayala, Mujeres Transformando, Colectiva Feminista, Agrupación Ciudadana; 4) Se han interpuesto buenos oficios ante el Señor Canciller de la República, Ingeniero Hugo Martínez y el Señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, Hugo Centeno a fin de lograr la suscripción y posterior ratificación del Convenio 189 sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 5) Se ha brindado acompañamiento a la Alianza para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales, espacio en el que se está formulando la propuesta de enfoque de género del anteproyecto de Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional; 6) Por segundo año consecutivo se ha coordinado el Consejo por la Igualdad y Equidad (CIE), esfuerzo desde el que se está coadyuvando a la implementación de la Ley por la Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, 7) Se han realizado verificaciones en el Hospital Nacional de Maternidad, el Hospital Primero de Mayo, a fin de constatar la situación de salud de las mujeres que requieren de servicios gineco- obstétricos, 8) Verificación en el Centro de Readaptación para Mujeres de Ilopango, en el marco del seguimiento al Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Mujeres Privadas de Libertad y las Niñas y Niños que viven con sus Madres en los Centros Penales de El Salvador así como internamente, la implementación de la Política Institucional de Equidad de Género.

Igualmente, se han emitido pronunciamientos en las siguientes fechas: a) 14 de septiembre, Día Nacional de la Igualdad Jurídica de las Mujeres, b) 25 de noviembre, Día Internacional y Nacional para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, c) Pronunciamiento en el contexto de la problemática del paro nacional del transporte público y los desalojos forzosos ocurridos en el Centro Histórico de San Salvador y otros Departamentos en el País, y los hechos de violencia que afectan a las mujeres, enero 2013, d) Pronunciamiento en el Día Nacional e Internacional de la Mujer, 8 de marzo 2013; e) Pronunciamiento en el caso de Beatriz C y Pronunciamiento en el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, 28 de mayo.

En el análisis que se presenta, se han priorizado las siguientes temáticas: Situación de la Violencia de Género contra la Mujer, Derecho al Trabajo, Derecho a la Salud, Situación de la Mujer Rural, Participación de las Mujeres en la Vida Política y Pública así como la situación de las Mujeres Privadas de Libertad.

## a) Situación de Violencia de Género

Desde los inicios de la actual gestión, esta Procuraduría ha expresado públicamente que la violencia de género tiene su asidero en la existencia de una estructura androcéntrica, misógena y de ginopia que reproduce estereotipos sexistas; es un hecho discriminatorio y por tanto, una grave violación a los derechos humanos<sup>225</sup>. Desde la Organización de las Naciones Unidas, se le ha considerado como una *pandemia mundial* y mientras no sea erradicada, será imposible alcanzar la igualdad de género en nuestras sociedades. Cifras mundiales demuestran que entre un 15% y un 76% de las mujeres sufren violencia física o sexual a lo largo de su vida. Esta violencia se produce mayoritariamente en el seno de las relaciones íntimas, pues muchas mujeres (entre un 9% y un 70%) señalan que el maltratador es su cónyuge o pareja<sup>226</sup>.

Esta Institución Nacional de Derechos Humanos comparte lo expresado por la Relatora Especial sobre

225 Pronunciamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado Oscar Humberto Luna, en el Día Nacional e Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre 2012.

226 Los hechos: la violencia contra las mujeres y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El documento puede consultarse en: [http://www.unifem.org/attachments/products/EVAW/kii\\_02\\_VAWandMDGs\\_es.pdf](http://www.unifem.org/attachments/products/EVAW/kii_02_VAWandMDGs_es.pdf)

la Violencia contra la Mujer, sus causas y consecuencias, Sra. RashidaManjoo, en el Informe elaborado en razón de su visita a El Salvador en marzo de 2010 quien manifestó que, “Los encomiables progresos logrados en los últimos cinco años en materia de legislación, políticas y programas contrastan con deficiencias notables en la investigación y el enjuiciamiento de los casos de violencia contra las mujeres y las niñas, como por ejemplo, en la inadecuada imposición de condenas. **El incumplimiento de las autoridades de sus obligaciones de prevenir, investigar, juzgar y sancionar a los responsables de la violencia de género ha contribuido a crear un ambiente de impunidad que se ha traducido en bajos niveles de confianza en el sistema de justicia** (resaltado propio)”<sup>227</sup>.

En esta coyuntura, la violencia de género no debe abordarse como una problemática de violencia social, ya que por ejemplo, las razones por las que hombres y mujeres pierden la vida no son por delincuencia común, sino por razones de género y esto se evidencia entre otras cosas, por el ensañamiento en sus cuerpos<sup>228</sup>. Debe subrayarse que el hecho de que las mujeres enfrenten mayoritariamente hechos de violencia en su casa de habitación indica que el hogar es uno de los lugares más peligrosos para las mujeres y por tanto, desvirtúa lo establecido por el patriarcado cuando por mucho tiempo este sistema ha considerado que el lugar más confiable para la mujer es el ámbito privado<sup>229</sup>.

Por tal razón, en el año 2008, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomendó al Estado de El Salvador: *“Asignar atención prioritaria a la adopción de un enfoque global para hacer frente a la violencia contra las mujeres y las niñas, teniendo presente su recomendación general No. 19 sobre la violencia contra la mujer. El Comité también pide al Estado parte que supervise la aplicación de la legislación vigente por la que se tipifica como delito la violencia contra la mujer a fin de asegurar que las mujeres y las niñas que sean víctimas de actos de violencia tengan acceso a medios de protección y recursos eficaces y que los autores de estos actos sean efectivamente enjuiciados y castigados y no gocen de impunidad. El Comité recomienda también que se imparta capacitación sobre las cuestiones de género, en particular sobre la violencia contra la mujer, a los funcionarios públicos, en particular sobre la violencia contra la mujer, a los funcionarios públicos, en particular al personal encargado del orden público, los funcionarios judiciales y los proveedores de servicios de salud para que tomen conciencia de todas las formas de violencia contra la mujer y puedan afrontarlas de manera adecuada. El Comité pide además al Estado parte que adopte medidas para modificar las actitudes sociales y culturales que son las causas fundamentales de la mayoría de las formas de violencia dirigidas contra la mujer, en particular los asesinatos motivados por prejuicios de género”*<sup>230</sup>.

Las cifras que a continuación se presentan, no evidencian la problemática real, ya que la mayoría de mujeres no denuncian a sus agresores por temor a represalias, al que dirán o inclusive porque en muchas ocasiones, el mismo sistema de justicia las victimiza y las culpa de los hechos que denuncian. Desde el mandato constitucional de velar por el irrestricto cumplimiento a los derechos humanos, esta Institución ha tenido conocimiento de la violencia psicológica que funcionarias y funcionarios ejercen contra mujeres que han enfrentado hechos de violencia intrafamiliar o sexual, recriminándolas y señalándolas como la causa de la problemática, lo cual se vuelve una revictimización para las mujeres<sup>231</sup>.

227 Organización de las Naciones Unidas. Informe de la Relatora Especial sobre Violencia contra la Mujeres, sus causas y consecuencias., Sra. RashidaManjoo, 14 de febrero de 2011, párrafo 58.

228 PDDH. Informe Especial sobre el Feminicidio, una violación a los derechos humanos de las mujeres y respuestas de las Instituciones del Estado, noviembre 2011, página 32.

229 Pronunciamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado Oscar Humberto Luna, en el Día Nacional e Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre 2012.

230 Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: El Salvador, 42º período de sesiones, párrafo 24.

231 Pronunciamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado Oscar Humberto Luna, en el Día Nacional e Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre 2012.



En ese contexto, ya sea en el ámbito público y/o privado se manifiestan los siguientes tipos de violencia<sup>232</sup>:

- (a) Violencia física: golpes, maltrato, palizas.
- (b) Violencia psicológica: insultos, críticas, humillación
- (c) Violencia sexual: acoso, tocamientos no deseados, relaciones sexuales obligadas.
- (d) Violencia patrimonial: sustracción de bienes y documentos.
- (e) Violencia económica: el agresor controla el acceso de la mujer a fuentes de ingreso.

## i. Violencia Intrafamiliar

La *violencia intrafamiliar* continúa siendo una de las causas más importantes de lesiones y muertes de mujeres. Una de las razones para que el ámbito familiar sea uno de los más inseguros para las mujeres es que es en la familia donde se establecen las primeras desigualdades de poder entre hombres y mujeres en razón de la socialización de los roles de género. Debe recordarse que este tipo de violencia se encuentra presente en todas las estructuras sociales, económicas, políticas y religiosas, no es exclusiva de un sector determinado y en muchas ocasiones puede ser la antesala al *feminicidio* en el marco del continuum de violencia.

Dado el impacto de la violencia doméstica en la vida de las mujeres, la doctrina ha definido los elementos que se presentan y que la asimilan con la *tortura*:

*“La violencia doméstica y la tortura sobre los cuerpos de mujeres comparten características que van más allá de las diferencias de escenarios en las que el derecho las ubica. Ambas incluyen generalmente un componente de violencia sexual además de la física, gatillan el mismo imaginario social que estigmatiza a priori a las víctimas y recorren las tres fases a las que hace referencia Eleonor Walker en su estudio sobre la violencia doméstica: tensiones y amenazas, violencia física —incluida la sexual—, y el arrepentimiento o luna de miel (Forcinito, 2004)”<sup>233</sup>.*

En ese contexto, para el año 2012, los datos proporcionados por la Policía Nacional Civil contabilizan un total de 2,493 casos de violencia intrafamiliar detallados a continuación:

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
212	161	180	224	222	247	220	190	214	174	217	232

*Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Policía Nacional Civil*

En el período enero – abril 2013 se registraron 1,101 casos de la siguiente manera:

ENE	FEB	MAR	ABR
294	233	283	291

*Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Policía Nacional Civil*

El detalle del grupo etario y el lugar de los hechos se muestran a continuación:

232 PDDH. *Informe Especial sobre el Feminicidio, una violación a los derechos humanos de las mujeres y respuestas de las Instituciones del Estado*, 2011, pág. 7.

233 Texto citado en: Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, División de Asuntos de Género, *Estudio de la Información sobre la Violencia contra la Mujer en América Latina y el Caribe*, 2010, pág. 16. <http://www.eclac.org/publicaciones/xml/8/38978/Serie99.pdf>



Departamento	Grupo Etareo				
	0-17	18-30	31-40	41-50	51-60
Ahuachapán	2	19	7	4	2
Cabañas	13	50	55	13	6
Chalatenango	7	30	29	12	11
<b>Cuscatlán</b>	<b>20</b>	<b>125</b>	<b>109</b>	<b>47</b>	<b>31</b>
La Libertad	7	90	73	31	13
La Paz	8	48	29	15	4
La Unión	9	17	16	6	6
Morazán	18	127	91	31	20
San Miguel	5	55	60	24	6
<b>San Salvador</b>	<b>34</b>	<b>334</b>	<b>264</b>	<b>132</b>	<b>59</b>
San Vicente	4	79	66	30	7
Santa Ana	2	12	15	5	---
Sonsonate	1	11	15	4	3
<b>Usulután</b>	<b>18</b>	<b>239</b>	<b>163</b>	<b>88</b>	<b>41</b>
<b>Total general</b>	<b>148</b>	<b>1236</b>	<b>992</b>	<b>463</b>	<b>203</b>

*Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Policía Nacional Civil*

Asimismo, el Instituto de Medicina Legal de El Salvador reporta los siguientes datos de los meses de enero – abril 2013 desglosados por grupo etareo y sexo:

Grupo de edad	Sexo		Total
	F	M	
1-4	13	12	25
5-9	14	24	38
10-14	42	19	61
15-19	94	17	111
20-24	211	27	238
25-29	219	32	251
30-34	190	42	232
35-39	119	29	148
40-44	96	26	122
45-49	57	16	73
50-54	33	11	44
55-59	17	19	36
60-64	12	10	22
65 A +	29	17	46
<b>Total general</b>	<b>1146</b>	<b>301</b>	<b>1447</b>

*Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Sección Estadística del IML.*

A esta Institución le preocupa el alto grado de víctimas de violencia intrafamiliar, que de conformidad a los datos presentados ascienden a 3,594 según información de la corporación policial. Al igual que en el Informe anual de labores junio 2011 – mayo 2012 se evidencia que el departamento con más casos registrados ha sido San Salvador (823 casos), seguido de Usulután (549 casos) y ubicándose en tercer lugar para el presente período, el departamento de Cuscatlán (332 casos). El grupo de edad mayormente afectado se encuentra en el rango de 18 – 30 años de edad. El departamento que menos casos presentó fue Sonsonate (20 casos) en comparación del período anterior que había sido el departamento de Morazán (Había reportado 25 y a la fecha de elaboración de este Informe se contabilizaron 287).

En el ejercicio del mandato constitucional de PDDH, los casos de violencia intrafamiliar que han llegado al conocimiento de esta Institución reflejan diversos aspectos de preocupación en materia de acceso a la justicia<sup>234</sup>: (a) De conformidad al tenor de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, no se permite la conciliación como etapa; sin embargo, es una etapa que de facto se continúa invocando, donde las víctimas suelen renunciar a su derecho a una vida libre de violencia en nombre de la “unión familiar”. Esto es parte del “síndrome de la mujer maltratada” donde la afectividad recobra mucha importancia; (b) En algunos juzgadores y juzgadoras persisten criterios civilistas que privilegian los derechos patrimoniales del agresor frente a los derechos humanos y al mandato de protección del Estado a las víctimas colocándolas en una mayor situación de vulnerabilidad; (c) Las medidas de protección resultan de vital importancia para evitar riesgos, no obstante la legislación de familia asume que deben otorgarse inmediatamente, en la práctica éstas son otorgadas con bastante dilación, dejando en una situación de vulnerabilidad e indefensión a las mujeres; (d) Es muy frecuente que cuando las mujeres acuden a instituciones públicas con frecuencia son revictimizadas, culpabilizadas, maltratadas, y las responsabilizan de los hechos que enfrentan, negándoles su derecho a una vida libre de violencia y discriminación; (e) Es importante también que el Estado salvadoreño cree políticas públicas para estas mujeres que han logrado salir del círculo de violencia y que deben construir y hacer realidad su “proyecto de vida”<sup>235</sup>, su realización personal.

Es imperante que el Estado salvadoreño enfoque sus esfuerzos también en el aspecto de *prevención* en los términos definidos en los artículos 7 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.

## ii. Violencia Sexual

Después de la violencia intrafamiliar, la violencia sexual es el segundo tipo de agresión más denunciada. Sus manifestaciones son múltiples: violaciones, abuso sexual, acoso sexual, la violencia sutil que sexualiza el cuerpo de la mujer y su función reproductora, entre otras formas. La desigualdad histórica que justifica la violencia de género se traduce en la cosificación del cuerpo de la mujer, entendiéndola como un “objeto sexual” de pertenencia al hombre, sobre el cual ostenta una propiedad y que controla de diversas formas. Inclusive a nivel social, se cuestiona todavía si puede existir violación dentro del matrimonio u otro tipo de relación de pareja, pues se concibe que la mujer debe estar siempre “dispuesta” para su pareja.

Entorno a la violencia sexual, el patriarcado ha establecido una serie de mitos para justificarla, validarla y perpetuarla. Desde el ámbito penal, estos delitos son conocidos como “delitos de alcoba” porque ocurren en el ámbito privado, donde no existen testigos. En la mayoría de casos, los agresores son

234 PDDH. *Informe Especial sobre Acceso a la Justicia para las Mujeres en el Ámbito Laboral, Penal y Familiar*, noviembre 2012, págs. 80 – 87.

235 Concepto invocado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el aspecto de “reparaciones” a violaciones cometidas en los términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El mismo alude a la realización integral de la persona afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, que le permiten fijarse razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas”. Véase, García Ramírez, Sergio. *Las Reparaciones en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos*, pág. 151, documento consultado en: <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2454/9.pdf>

personas conocidas, cercanas a la víctima. Es en estas circunstancias donde recobra importancia la aplicación del principio de veracidad del testimonio de la víctima ante la grave situación de vulnerabilidad y desventaja en la que ésta se encuentra.

En ese contexto, esta Institución Nacional de Derechos Humanos observa con suma preocupación el alto índice de casos que ha tenido conocimiento la Policía Nacional Civil, que para el año 2012 sumaron un total de 1,829 y en el período de enero a marzo 2013, 636 casos señalados de la siguiente forma:

Año	Violaciones	Violación en Menor Incapaz	Otras agresiones sexuales
2012	609	852	368
2013	90	323	223
<b>Total</b>	<b>699</b>	<b>1175</b>	<b>591</b>

*Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Policía Nacional Civil a la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA)*

Asimismo, el Instituto de Medicina Legal de El Salvador reporta 706 casos de violencia sexual para los meses de enero – abril 2013 desglosados por grupo etareo y sexo, siendo las mujeres las más afectadas con un total de 617 casos:

Grupo de edad	Sexo		Total
	F	M	
1-4	33	10	43
5-9	67	35	102
10-14	204	27	231
15-19	193	8	201
20-24	34	2	36
25-29	23	2	25
30-34	18	3	21
35-39	16	1	17
40-44	17	0	17
45-49	3	0	3
50-54	3	0	3
55-59	3	0	3
60-64	1	1	2
65 A +	2	0	2
<b>Total general</b>	<b>617</b>	<b>89</b>	<b>706</b>

*Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Policía Nacional Civil*

A partir de la vigencia de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE), la Procuraduría General de la República a través de las Unidades de Atención Especializadas para las Mujeres reportan para el período enero – abril 2013, la identificación de otros hechos de violencia sexual que son importantes desmitificar pues anteriormente no eran considerados de tal forma:

Hechos de Violencia Sexual	Frecuencia
Utiliza palabras obscenas	57
Hostiga (no deja dormir, revisa ropa y partes íntimas)	9
Comenta sus aventuras sexuales y acosa	13
Obliga a introducir objetos en partes íntimas	2
Obliga a ver pornografía	5
Obliga a presenciar actos sexuales	11
Obliga a tocamientos y contactos no deseados	38
Obliga a contacto sexual frente a terceros	2
Obliga a contacto sexual estando enferma	11
Obliga a tener relaciones sexuales (Violación)	95
<b>TOTAL</b>	<b>243</b>

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Procuraduría General de la República

Con base en el mandato constitucional de formular recomendaciones, esta Procuraduría ha expresado:

1. A las señoras Juezas y señores Jueces, hacer efectiva la prohibición de conciliación de los delitos establecidos en la LEIV tal como se encuentra estipulado en el artículo 58 de dicho cuerpo normativo, atendiendo los criterios establecidos por la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus causas y consecuencias, Sra. Rashida Manjoo en su Informe de Misión de Seguimiento a El Salvador, febrero 2011<sup>236</sup>.
2. Al Señor Director de la Policía Nacional Civil, a la Señora Procuradora General de la República, al Señor Fiscal General de la República, a las señoras Juezas y señores Jueces, garantizar el cumplimiento de las garantías judiciales y protección judicial a fin de combatir la impunidad y garantizar el derecho a la verdad a las víctimas y sus familiares<sup>237</sup>.
3. Al Señor Ministro de Gobernación, para que a través de la Dirección General de Espectáculos Públicos de Radio y Televisión, garantice el contenido del artículo 22.1 de la LEIV, en el sentido que los anunciantes, medios de comunicación y agencias de publicidad, no difundan contenidos sexistas contra las mujeres, fomentando la *violencia simbólica*<sup>238</sup>.

### iii. Femicidios

El feminicidio es una de las expresiones máximas de desigualdad entre hombres y mujeres, aludiendo a las muertes violentas de éstas en contextos de relaciones desiguales de poder, donde además, el Estado demuestra indiferencia ante tales hechos contribuyendo a la impunidad.

Desde un primer momento, esta Procuraduría ha sido de la opinión que con el fenómeno del feminicidio, el Estado salvadoreño debe asumir responsabilidades e implementar nuevos, adecuados y eficientes mecanismos de acción respecto a las necesidades específicas de las mujeres y contra todas las formas de violencia a las que éstas se enfrentan. Si bien no es nuestro interés afirmar que ocurren más muertes de mujeres que de hombres en El Salvador, ni que otras formas de violencia y asesinatos contra hombres y niños no tengan importancia o sean menos relevantes, sí es importante aclarar que el *feminicidio* tiene una direccionalidad asociada a relaciones de poder opresivas entre hombres y mujeres

236 Pronunciamiento del Señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Licenciado Oscar Humberto Luna, en el contexto de la problemática del paro nacional del transporte público y los desalojos forzosos ocurridos en el Centro Histórico de San Salvador y otros Departamentos en el País y los hechos de violencia que afectan a las mujeres, 15 de enero 2013.

237 Pronunciamiento del Señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Licenciado Oscar Humberto Luna, en el Día Nacional e Internacional de la Mujer, 8 de marzo 2013.

238 Ídem.

y que existe una prevalencia y riesgo mayor para mujeres que están inmersas en relaciones violentas o que quieren salir de este tipo de relaciones con compañeros violentos<sup>239</sup>.

De acuerdo a lo expresado por la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujeres, sus causas y consecuencias, Sra. Rashida Manjoo, en el Informe elaborado en razón de su visita a El Salvador en marzo 2010, "Particularmente atroz es el grado de brutalidad alcanzado en el daño infligido a las víctimas, que a veces entraña la mutilación, la tortura y la decapitación y que se ve a menudo acompañado de secuestro y violencia sexual. Más de la mitad de los asesinatos registrados presentaban características generales similares: las víctimas de edades comprendidas entre 10 y 29 años, desaparecían y luego eran encontradas asesinadas en parques públicos o en terrenos baldíos. La mayoría de estos asesinatos tuvieron lugar en San Salvador, La Libertad, Santa Ana y San Miguel<sup>240</sup>.

La información proporcionada por la Policía Nacional Civil señala a continuación el total de muertes de mujeres ocurridas en el año 2012:

Departamento	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
Ahuachapán	2		2	1		1	1		1	1	1		10
Cabañas		3	1	1	1		1		1	1	1		10
Chalatenango	2		1	1							1		5
Cuscatlán	4	3			1	1			2	2		1	14
La Libertad	4	7	5	1	1	1	1	1	4	3	3	1	32
La Paz	3	4	3	3	2	1	1					1	18
La Unión	3	1		1	1		1	1					8
Morazan		2						1				1	4
San Miguel	8	10	2		1	1	1	2	2	1		1	29
San Salvador	22	18	15	6	7	3	3	4	4	6	8	4	100
San Vicente	4		3	1	1	1	1	1	2				14
Santa Ana	11	4	3		3	2	1	2		3	1	1	31
Sonsonate	8	5	2		1	1	1	2	2	5	1	1	29
Usulután	3		1	4	2	2				1		3	16
<b>Total general</b>	<b>74</b>	<b>57</b>	<b>38</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>320</b>

*Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Policía Nacional Civil*

El detalle del grupo etario y el lugar de los hechos se muestran a continuación:

Departamento	Grupo Etareo							TOTAL
	0-17	18-30	31-40	41-50	51-60	61+	N/D	
Ahuachapán	1	3	4		1		1	10
Cabañas	1	4		1	3		1	10
Chalatenango			2	1	1		1	5
<b>Cuscatlán</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>1</b>		<b>14</b>
La Libertad	3	9	8	4	1	4	3	32

239 PDDH. *Informe Especial sobre el Feminicidio, una violación a los Derechos Humanos de las Mujeres y la respuesta de las Instituciones del Estado*, noviembre 2011, Pág. 51.

240 Organización de las Naciones Unidas. *Informe de la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus causas y consecuencias*, Sra. Rashida Manjoo, 14 de febrero de 2011, párrafo 26.



La Paz	1	9	2	5		1		18
La Unión	2	4	1			1		8
Morazán		1	1	2				4
San Miguel	3	10	10	3	1	2		29
<b>San Salvador</b>	<b>21</b>	<b>34</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>6</b>		<b>100</b>
San Vicente	3	5	2	3	1			14
Santa Ana	2	14	4	5		1	5	31
Sonsonate	2	19	3	1	2	1	1	29
<b>Usulután</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>16</b>
<b>Total general</b>	<b>45</b>	<b>122</b>	<b>60</b>	<b>35</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>320</b>

*Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Policía Nacional Civil*

En el período enero – abril 2013 se registraron 64 casos de homicidios de mujeres, de los cuales 19 asesinatos se tipificaron como Feminicidio de la siguiente manera:

Departamento	ENE	FEB	MAR	ABR	TOTAL
San Salvador	5	3	11	2	21
La Libertad	3	3	1	2	9
Chalatenango	1	3	2	2	8
Santa Ana	2	1	2	2	7
San Miguel	1		2	1	4
Usulután	1	1	2		4
Sonsonate	2			1	3
La Paz	1	1		1	3
La Unión	1		1		2
Morazán	1				1
Ahuachapán			1		1
Cabañas				1	1
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>64</b>

Departamento	ENE	FEB	MAR	ABR	TOTAL
La Libertad	2	2	1	0	5
Santa Ana	2	0	2	0	4
San Miguel	1	0	2	0	3
San Salvador	0	1	1	0	2
Sonsonate	2	0	0	0	2
Chalatenango	0	0	0	1	1
Ahuachapán	0	0	1	0	0
Morazán	1	0	0	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>19</b>

*Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Policía Nacional Civil*

Asimismo, el Instituto de Medicina Legal de El Salvador reporta 61 homicidios de mujeres en el período enero – abril 2013 de la siguiente manera:

Grupo de edad	Frecuencia	Porcentaje acumulado
10-14	3	4.9%
15-19	8	13.1%
20-24	10	16.4%
25-29	2	3.3%
30-34	9	14.8%
35-39	6	9.8%
40-44	1	1.6%
45-49	3	4.9%
50-54	4	6.6%
55-59	3	4.9%
60-64	2	3.3%
65 A +	5	8.2%
Ignorada	5	8.2%
<b>Total general</b>	<b>61</b>	<b>100%</b>

*Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Sección Estadística del IML.*

Las anteriores cifras demuestran que sí existe un patrón sistemático y que por tanto las autoridades pueden retomar estos elementos y establecer inmediatamente líneas de acción al respecto. Las notas periodísticas por ejemplo, evidencian las circunstancias particulares que rodean los feminicidios; mujeres privadas de libertad, abusadas sexualmente, torturadas, asesinadas, desmembradas y mutiladas. Por tal razón, la PDDH en consonancia con su mandato constitucional de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos, no comparte aquellos discursos que niegan el feminicidio, asociando las muertes de mujeres únicamente a las pandillas o al incremento de la delincuencia común o lo más grave aún, a contextos pasionales, ya que es una forma de invisibilizar y/o justificar tan aberrantes hechos y de seguir invisibilizando que ser mujer en este país es un riesgo<sup>241</sup>.

En reiteras ocasiones esta Procuraduría ha manifestado que la violencia física, psicológica, sexual y otras son la antesala a los *feminicidios*. Particularmente, en El Salvador ser mujer es un riesgo y esto se evidencia en las circunstancias en que se pierde la vida. El *modus operandi* y la intención de sus autores se fundamentan en el patrón sistemático de cosificar los cuerpos de las víctimas y el odio a todo aquello que las represente. Sus cuerpos son violados, torturados, desmembrados y mutilados<sup>242</sup>.

Otro aspecto que engloba el análisis del *feminicidiolo* comprende el factor impunidad. Al respecto, el *Conjunto de principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad*, entiende dicho concepto como la “Inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas<sup>243</sup>”.

241 PDDH. *Informe Especial sobre el Feminicidio, una violación a los Derechos Humanos de las Mujeres y la respuesta de las Instituciones del Estado*, noviembre 2011, Pág. 55.

242 Pronunciamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado Oscar Humberto Luna, en el Día Nacional e Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre 2012.

243 Consejo Económico y Social. Resolución E/CN.4/2005/102/Add.

En ese sentido, esta Procuraduría comparte el criterio del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención de Belém do Pará (CEVI, entidad que señala que dentro de las causas de impunidad se encuentra el limitado acceso de las mujeres a la justicia, así como los prejuicios de género durante los procesos judiciales, policiales y fiscales. Estos casos son archivados por una supuesta falta de pruebas o son sancionados como homicidios simples con penas menores donde en muchas ocasiones se aplican los atenuantes de “emoción violenta” para disminuir la responsabilidad del victimario<sup>244</sup>.

Esta Procuraduría en reiteradas ocasiones ha recomendado al Señor Fiscal General de la República, fortalecer la implementación del Protocolo de Actuación para la investigación del Femicidio a fin de garantizar la investigación de situaciones de violencia contra la mujer así como implementar la política de persecución penal en la materia<sup>245</sup>.

#### iv. Mujeres Desaparecidas

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es de la opinión que las *desapariciones de mujeres* se suman a esta innumerable lista de patrones sistemáticos de violaciones a los derechos humanos de las mujeres. La corporación policial identificó un total de 647 denuncias de mujeres desaparecidas durante el 2012, cifra que duplicó el total de asesinatos de mujeres para ese año.

Departamento	Total de denuncias	Rango de edad					
		0-12	13-17	18-25	26-35	36+	N/D
San Salvador	254	7	132	57	25	24	9
La Libertad	109	8	60	21	9	11	
Santa Ana	59	4	35	8	8	4	
Sonsonate	51	1	22	16	3	8	1
Cuscatlán	35	3	17	8	4	3	
San Miguel	30	1	12	8	2	5	2
La Paz	28	2	11	8	5	2	
San Vicente	21	5	12	4			
Morazan	15	1	3	3	2		1
<b>Usulután</b>	13	2	5	3	2	1	
Cabañas	11		3	2	1		
Chalatenango	9	1	6	2			
La Unión	7		5		2		
Ahuachapán	5	1	2	1		1	
<b>Total general</b>	<b>647</b>	<b>36</b>	<b>335</b>	<b>141</b>	<b>63</b>	<b>59</b>	<b>13</b>

*Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Policía Nacional Civil*

Del total de 647 denuncias, se hace el detalle general siguiente:

244 Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención de Belém do Pará (CEVI). *Declaración sobre el Femicidio*, 15 de agosto de 2008, párrafo 6.

245 Pronunciamiento del Señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Licenciado Oscar Humberto Luna, en el contexto de la problemática del paro nacional del transporte público y los desalojos forzosos ocurridos en el Centro Histórico de San Salvador y otros Departamentos en el País y los hechos de violencia que afectan a las mujeres, 15 de enero 2013.

Total de denuncias recibidas	Encontradas con vida	Fallecidas	Continúan desaparecidas
647	433	29	185

*Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Policía Nacional Civil*

En otras oportunidades, esta Institución Nacional de Derechos Humanos ha establecido que es precisamente en este tipo de situaciones donde el irrestricto cumplimiento al principio de *debida diligencia* recobra especial importancia ya que presupone, que el Estado a través de las entidades competentes, debe realizar todas las acciones que sean necesarias para prevenir cualquier tipo de violencia de género contra la mujer. Muchos casos que forman parte de las estadísticas, pudieron haberse prevenido si se les hubiera brindado la atención e importancia necesarias<sup>246</sup>.

En el período enero – abril 2013 se han registrado 50 casos de la siguiente manera:

Departamento	ENE	FEB	MAR	ABR	TOTAL
San Salvador	2	3	6	5	16
La Libertad	1	1	2	3	7
Santa Ana	4	0	1	2	7
Sonsonate	0	2	2	9	0
San Miguel	0	1	2	0	3
Cabañas	0	0	2	1	3
La Unión	0	0	3	0	3
La Paz	1	0	1	0	2
Cuscatlan	1	0	0	1	2
Morazan	0	0	0	1	1
San Vicente	0	0	1	0	1
Ahuachapán	0	0	0	1	1
Chalatenango	0	0	0	0	0
Usulután	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>50</b>

*Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Policía Nacional Civil*

Los rangos de edad identificados son:

Departamento	0 -17	18-30	31-40	41-50	TOTAL
San Salvador	11	3	2	0	16
La Libertad	4	2	1	0	7
Santa Ana	4	2	1	0	7
Sonsonate	2	1	0	1	4
San Miguel	2	1	0	0	3
Cabañas	2	1	0	0	3
La Unión	1	1	1	0	3

246 Pronunciamento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado Oscar Humberto Luna, en el Día Nacional e Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre 2012.

Departamento	0 -17	18-30	31-40	41-50	TOTAL
La Paz	1	1	0	0	2
Cuscatlan	1	1	0	0	2
Morazan	1	0	0	0	1
San Vicente	1	0	0	0	1
Ahuachapán	1	0	0	0	1
Chalatenango	0	0	0	0	0
Usulután	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>50</b>

*Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Policía Nacional Civil*

## b) Derecho al Empleo Digno

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha señalado en reiteradas ocasiones que, “Las precarias condiciones que la mujeres trabajadoras deben superar cada día, minimizan sus posibilidades de alcanzar una vida digna. En materia de empleo, la situación es altamente discriminatoria, no sólo en el sector privado, sino también en la administración pública: despidos injustificados, no pagos de indemnización, acoso sexual y laboral, negación de vacaciones anuales, permisos personales, discriminación por razones de embarazo, vulneración a la libertad sindical, malos tratos a mujeres sindicalistas, entre un sinnúmero de hechos violatorios que esta Defensoría ha constatado desde su labor de defender el respeto y la garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales”<sup>247</sup>.

Como es sabido, la mayoría de mujeres con bajos niveles de escolaridad se ubican en el sector informal. Las fuentes de empleo formal son especialmente en las áreas de maquila, dándose una acelerada tecnificación del capital social, la mayoría de las mujeres que se dedican a este rubro son madres solteras, jóvenes que tienen que migrar de sus localidades en busca de mejorar sus condiciones de vida, lo que muchas veces les obliga a abandonar sus estudios para incorporarse tempranamente al ámbito laboral. Dicha inserción es en condiciones desfavorables, baja remuneración, sin prestaciones sociales y cobertura de seguro social. Por lo general el empleo femenino se concentra en áreas como el comercio, hoteles, restaurantes, servicios domésticos remunerados, administración pública, servicios financieros entre otros. El modelo económico afecta más a las mujeres que a los hombres porque no les permite tener acceso/ o control de los recursos

Dentro de los derechos laborales más denunciados se encuentran:

- Acoso sexual y laboral
- Despido injusto
- No pago de indemnización, horas extras y vacaciones.
- Metas de trabajo inalcanzable
- Retenciones ilegales
- Despido de directivas sindicales
- Negación de permisos para ir a pasar consulta
- Negación de vacaciones anuales
- Despido de trabajadora embarazada
- Discriminación por embarazo.

Igual importancia merece la situación de las trabajadoras del hogar quienes realizan labores domésticas, reproductivas y de cuidado. A pesar de que el artículo 27 de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación

<sup>247</sup> Pronunciamiento del Señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Licenciado Oscar Humberto Luna, en el Día Nacional e Internacional de la Mujer, 8 de marzo 2013.



de la Discriminación contra las Mujeres (LIE) reconoce formalmente el valor económico y contribución esencial respecto del trabajo productivo, Como PDDH nos preocupa la coyuntura que enfrentan las mujeres salvadoreñas, especialmente las trabajadoras domésticas con relación al efectivo goce del derecho humano al empleo digno, en razón de la desigualdad histórica y consecuente discriminación de la que son objeto por la infravaloración otorgada a este tipo de actividades. El Trabajo doméstico siempre se ha encontrado invisibilizado pues el sistema patriarcal lo ha considerado una “labor natural” de la mujer, ocasionando lo que se conoce como “división sexual del trabajo”. El mismo ha implicado sumisión, explotación; una especie de servidumbre para las mujeres pues las confina al ámbito privado mientras que los hombres, siempre en espacios externos y en otras condiciones.

Cabe destacar que la división sexual del trabajo afecta sus posibilidades de ocio, de trabajo remunerado, su participación en la política y por tanto en el poder.

Algunas de las problemáticas que enfrentan las trabajadoras del hogar en El Salvador son:

- Violencia de género: física, psicológica, sexual, patrimonial.
- Alimentación inadecuada.
- Espacios de hacinamiento (para su descanso nocturno o diurno, si es que logran descansar).
- No les conceden los días de descanso.
- Salarios exiguos, necesidad de establecer un “salario mínimo”.
- Pago de salarios inferior a lo acordado.
- Falta de cobertura de seguridad social (Desde el 01 de junio de 2010, fecha en que se inició la inscripción de las trabajadoras domésticas, hasta mayo 2012 se habían inscrito 1,028).
- Incumplimiento de pagos por terminación del contrato.
- No les pagan el día de descanso laborado.
- Situación de hacinamiento

En ese ámbito, desde esta Institución se han realizado acciones encaminadas a promover la ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos. Este acto de buena fe del Estado salvadoreño brindaría una protección integral a los derechos humanos que debe existir para hombres y mujeres que desempeñan este tipo de labores para no ser objeto de abusos así como ningún tipo de discriminación. El artículo 3.1 del referido Convenio establece que, *Todo Estado Miembro deberá adoptar medidas para asegurar la promoción y la protección efectivas de los derechos humanos de todos los trabajadores domésticos, en conformidad con las disposiciones del presente Convenio.*

A fin de garantizar los derechos humanos de las mujeres, se ha recomendado al Ministro de Trabajo y Previsión Social, dar efectivo cumplimiento a la observación 32 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer emitidas en noviembre 2008 al Estado salvadoreño, en tanto reforzar la labor de la Unidad Especial de Género y Prevención de Actos Laborales Discriminatorios a fin de que se vigilen eficazmente las condiciones en las que laboran las mujeres, se sancione a quienes infrinjan sus derechos y no se obstaculice el acceso de las trabajadoras a la justicia<sup>248</sup>.

### c) Derecho a la Salud

En 1994, la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo puntualizó la obligación de los gobiernos de procurar que los servicios de atención primaria de salud sean económicamente más

248 Pronunciamiento del Señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Licenciado Oscar Humberto Luna, en el Día Nacional e Internacional de la Mujer, 8 de marzo 2013.

sostenibles, garantizando el acceso equitativo a dichos servicios, integrando la asistencia en planificación familiar y en salud materno infantil<sup>249</sup>. Un año después la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, reconoció el derecho a disfrutar el más alto nivel de salud física y mental, subrayando como principal obstáculo para lograrlo, la desigualdad entre mujeres y hombres y sus consecuentes efectos como la feminización de la pobreza<sup>250</sup>.

Datos comparativos del Sistema de Naciones Unidas para el Continente Americano ubican a El Salvador en la posición 89 en el *índice de desigualdad de género*<sup>251</sup>. Señalan que el gasto público en salud en el período 2007 – 2010 representó el 3.3% del PIB<sup>252</sup> y las adolescentes que son madres o están embarazadas por primera vez en el período 2004- 2010 constituyeron el 23%<sup>253</sup>.

Aunado a lo anterior, información proporcionada por el Ministerio de Salud a esta Defensoría reporta que en el año 2011, las primeras tres causas de consulta específica en mujeres en el intervalo de 25 a 59 años, atendidas en la red de establecimientos de Salud del Ministerio fueron: hipertensión esencial, infección de vías urinarias y rinofaringitis aguda. Cuadros referentes a la vaginitis aguda, la cefalea debido a tensión y lumbago no especificado se ubican en las últimas causas<sup>254</sup>. En el mismo año, para las adultas mayores las primeras tres causas fueron hipertensión esencial, diabetes mellitus no insulino dependientes (sin mención de complicación) e infección de vías urinarias (sitio no especificado). En las últimas tres causas de consulta específica se registraron el lumbago no especificado, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica no especificada y la diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso<sup>255</sup>.

En el aspecto de la mortalidad en mujeres de 25 a 59 años, las tres primeras causas registradas en la Red Nacional de Hospitales fueron: insuficiencia renal terminal, traumatismo intracraneal (no especificado) y enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) sin otra especificación<sup>256</sup>. En el caso de las mujeres adultas mayores en el mismo período se reportaron el infarto agudo de miocardio, la neumonía y la septicemia<sup>257</sup>.

Esta Defensoría comparte el criterio establecido por el Comité sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) en cuanto que, *las medidas tendientes para eliminar la discriminación contra la mujer no se considerarán apropiadas cuando un sistema de atención médica carezca de servicios para prevenir, detectar y tratar enfermedades propias de la mujer*<sup>258</sup>.

En otro sentido, en la presente gestión se ha insistido que el abordaje del derecho humano a la salud debe realizarse desde un enfoque integral, atendiendo a los requerimientos y necesidades particulares de las mujeres en las diferentes etapas del ciclo de su vida. Al respecto, esta Procuraduría se congratula por el importante esfuerzo que se está realizando desde el Ministerio de Salud con la reciente aprobación de la Política de Salud Sexual y Reproductiva<sup>259</sup> que presenta un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género; constituyéndose en un paso trascendental para garantizar información y servicios necesarios libres de prejuicios y discriminación para las mujeres de cualquier edad.

249 Informe de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, El Cairo, septiembre 1995, párrafo 8.8

250 Plataforma de Acción de Beijing, párrafo 89.

251 Organización Panamericana de la Salud, *Género, Salud y Desarrollo en las Américas*, 2012, página 5.

252 Ídem.

253 Ídem, pág. 9.

254 Información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, 31 de mayo 2012, Oficio 2012-6000-299.

79 Ídem.

256 Información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, 31 de mayo 2012, Oficio 2012-6000-299.

257 Ídem.

258 Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. *Recomendación General No. 24, "La Mujer y la Salud"*, 1999, Párrafo 11.

259 Acuerdo No. 1181, Política de Salud Sexual y Reproductiva, publicada en el Diario Oficial el 15 de agosto de 2012, tomo No. 396, número 149.

Sumando a lo anterior, no debe soslayarse el tema de violencia de género contra la mujer y su relación con el Derecho a la Salud. La violencia física, psicológica, sexual y otras manifestaciones, producen consecuencias, en la mayoría de ocasiones, irreversibles en el bienestar integral de quienes la enfrentan: desde un dolor de cabeza, intimidación, humillación, lesiones, hasta pérdida de la vida. Estos comportamientos que tienen a la base las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres han conllevado que la violencia contra mujeres y niñas sea considerada una “pandemia mundial”<sup>260</sup>. Otra temática que no puede obviarse es la feminización del VIH-SIDA. Desde 1984 – 2009 se han contabilizado 8,977 casos<sup>261</sup> de mujeres infectadas.

Respecto de la salud sexual y reproductiva, en el caso de Beatriz esta Defensoría recomendó a las autoridades del Ministerio de Salud, atender las recomendaciones del Comité CEDAW en el sentido de facilitar un diálogo nacional sobre el derecho de las mujeres a la salud reproductiva, incluyendo las consecuencias de las leyes restrictivas del aborto. En ese sentido, adoptar todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho a la vida, la salud y la integridad personal de la joven Beatriz<sup>262</sup>. También se recomendó a la honorable Asamblea Legislativa, atender las recomendaciones de los Comités de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el sentido que el Estado parte revise su legislación sobre el aborto para hacerla compatible y adecuarla con el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos<sup>263</sup>.

En ese ínterin, existen una serie de protocolos que el Ministerio de Salud aplica atendiendo a los requerimientos en el ciclo reproductivo de las mujeres: (a) Guía Técnica de Prevención y Control del Cáncer de Mama, junio 2006, (b) Guía Técnica de Prevención y Control del Cáncer de Cérvix, octubre 2007, (c) Guía Técnica para el Manejo y Control del Cáncer invasor de Cérvix, agosto 2008; (d) Guía de Atención Clínica del Climaterio y la Menopausia, septiembre 2008; (e) Lineamientos Técnicos para la atención de la mujer en el período preconcepcional, prenatal, parto, puerperio y al recién nacido, agosto 2011 y (f) Guías Clínicas de Ginecología y Obstetricia, febrero 2012.

Desde esta Procuraduría se ha recomendado a la Ministra de Salud<sup>264</sup>:

- Intensificar los esfuerzos en cuanto la atención a la prevención, detección y tratamiento de las enfermedades relacionadas con la salud reproductiva como lo es el cáncer cérvico – uterino, complicaciones del embarazo, parto y puerperio, mortalidad materna, entre otras. Se hace imprescindible contar con un nuevo Hospital de Maternidad con una infraestructura y personal que respondan al cumplimiento de los elementos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, calidad y continuidad del servicio de conformidad a la Observación General 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en cuanto al Derecho a la Salud. De igual forma, estos esfuerzos deben estar encaminados simultáneamente a promocionar y conservar la salud mental como una premisa para alcanzar el bienestar pleno.
- Atender el criterio establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en cuanto al derecho de las mujeres al acceso de información en materia reproductiva. Dicha información debe ser confiable, completa, oportuna y accesible que les permita ejercer sus

260 Mensaje de la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Bachelet, en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 23 de noviembre de 2011. Puede ser consultado en: <http://www.unwomen.org/es/2011/11/un-women-executive-director-michelle-bachelet-unveils-comprehensive-policy-agenda-to-end-violence-against-women/>

261 Ministerio de Salud de El Salvador, Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, Grupo Temático VIH/SIDA Naciones Unidas. *Fortalecimiento de la Respuesta del Sistema de Salud al VIH, Sida y las ITS en El Salvador. Informe de Evaluación*, abril 2010, Página 85.

262 Pronunciamiento del Señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado Oscar Humberto Luna en el caso de Beatriz García, 16 de abril de 2013.

263 Ídem.

264 Pronunciamiento del Señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado Oscar Humberto Luna, en el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, 28 de mayo 2013.

derechos o satisfacer sus necesidades<sup>265</sup>. Ejecutar este tipo de acciones permitirá atender el tenor del artículo 26 de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres.

También se ha recomendado al Director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social<sup>266</sup>:

- Redoblar los esfuerzos y gestiones necesarias para garantizar a las derechohabientes atención oportuna, inmediata así como un abastecimiento adecuado de los fármacos requeridos para cada patología. Además, continuar con la divulgación, implementación y cumplimiento de la “Norma de Atención Integral en Salud a la Mujer”.

## d) Situación de la Mujer Rural

Datos oficiales describen el contexto sociodemográfico de las mujeres que habitan en las zonas rurales de El Salvador. Son 1, 177,953 (51% de la población rural), es decir la mayoría de la población rural<sup>267</sup>. Las mujeres tienen una mayor representación en la población rural en comparación con los hombres, en los departamentos de La Unión y de San Miguel, aquí la mujer representa el 53% y en los departamentos de Morazán, Usulután, Cabañas y Chalatenango, las mujeres rurales están en una proporción del 52% de la población rural total<sup>268</sup>.

La mayor parte de mujeres rurales se concentra en el rango de edad de 10 a 29 años, con un total de 481.440 mujeres en ese grupo de edad, que asciende al 41% de la población femenina rural del país. El segundo grupo de edad más numeroso lo constituye la población femenina de entre 30 y 59 años que representa el 29% total<sup>269</sup>. Realizan una jornada de trabajo promedio que va desde las 15 horas a las 17 horas diarias<sup>270</sup>. Distribución de un día promedio en las mujeres rurales: 38% tiempo de trabajo en la casa, 13% trabajo productivo, 9% trabajo comunitario, 9% tiempo de dormir y 31% tiempo de descanso. Se evidencia una triple jornada de trabajo: jornada reproductiva, productiva (no solo trabajando tierras propias o en usufructo, jornaleras temporales, trabajadoras domésticas) y comunitaria.

En ese contexto patriarcal, las mujeres campesinas jefas de hogar son las responsables de garantizar la alimentación de su familia, especialmente de sus hijas e hijos. Sus ingresos son utilizados para comprar alimentos y por otra parte, son mujeres, pequeñas productoras que cuentan con parcelas en usufructo o raramente, tierras propias donde invierten, cultivan, venden sus hortalizas y lo de su venta lo destinan en seguir produciendo y en comprar alimentos para su familia. **Esta es la principal contribución de las mujeres a la soberanía alimentaria<sup>271</sup>.**

Las mujeres campesinas son **protagonistas** de la sostenibilidad del agro porque producen, invierten, comercializan. No obstante estos grandes sacrificios, son las que menos ostentan el dominio de la tierra con vocación agrícola. Datos de la EHPM señalaron que para el año 2010 únicamente el 15% de las mujeres eran dueñas de tierras, en contraste con el 85% de los hombres. Por tal razón, las mujeres no son reconocidas como Población Económicamente Activa (PEA) ni mucho menos como agropecuarias<sup>272</sup>. Las mismas cifras indican que son alrededor de 400 mil mujeres en la zona rural, mayores de 15 años,

265 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, *Acceso a la Información en Materia Reproductiva desde una Perspectiva de Derechos Humanos*, 22 de noviembre de 2011, Párrafo 26.

266 Ídem.

267 Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, Cañas Guandique, Isis *et alius*, *El Perfil de las Mujeres Rurales en El Salvador*. Tesis de Graduación para optar al grado de Licenciada en Economía, pág.52., septiembre 2012.

268 Ídem.

269 Ídem.

270 Ídem, págs. 72 y 73.

271 II Congreso Nacional de Mujeres Rurales de El Salvador, “Luchando por la Soberanía y Seguridad Alimentaria”, pág. 35, octubre 2012.

272 Ídem, pág. 38.

quienes han sido identificadas como Población Económicamente Inactiva (PEI) porque se dedican al quehacer doméstico, lo cual se traduce en la necesidad en que el Estado salvadoreño erradique las visiones sexistas de la división sexual del trabajo en el marco de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE) y su respectivo Plan Nacional para la Igualdad y Equidad de las Mujeres Salvadoreñas.

Otras inequidades que enfrentan las mujeres campesinas en nuestro país son: falta de acceso a la educación inclusiva, a un empleo digno, a una vivienda adecuada y a una vida libre de violencia, es a causa de las relaciones desiguales de poder donde ellas se sitúan en una evidente desventaja ante un sistema patriarcal que las cosifica y les niega su calidad de sujetas de derechos. Un ejemplo es la concepción universal que todavía se tiene sobre la “función natural” de la mujer en el trabajo reproductivo y doméstico. O lo que piensa sobre que nuestras mujeres campesinas e indígenas no deben involucrarse en los asuntos de sus comunidades o peor aún, que deben “naturalmente” aceptar y soportar las situaciones de violencia intrafamiliar que se les presenta. A esto se aúna un panorama de crisis alimentaria por los altos precios de los productos agropecuarios y la escasez de los mismos<sup>273</sup>, falta de acceso a los medios de producción, falta de acceso a la tierra, vulnerabilidad de las mujeres en situaciones de “desastres naturales” producto del cambio climático.

Los derechos humanos son universales, indivisibles, inalienables, todos se encuentran íntimamente relacionados. Desde la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se comparte el criterio del Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier De Shutter, en tanto garantizar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres son dos premisas esenciales para poder gozar del derecho a la alimentación<sup>274</sup>. En la medida que las mujeres no sean abordadas ni como un “sector” ni un “grupo vulnerable” sino como sujetas de derechos, se les reconozca como tal, se abandone el asistencialismo económico y realmente se empodere a la mujer con políticas públicas con enfoque de género no con proyectos puntuales que contemplan cierto tiempo. Asimismo, El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (Comité CEDAW, por sus siglas en inglés) en el año 2008 expresó al Estado salvadoreño su preocupación por los altos niveles de pobreza y exclusión social entre las mujeres salvadoreñas, **especialmente las mujeres rurales, indígenas y migrantes, así como por los obstáculos a su acceso a los derechos sociales básicos.**

Desde el mandato constitucional de esta Defensoría de formular recomendaciones, se ha instado al Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la aprobación de una política integral de gestión de riesgos que contemple el abordaje de la violencia de género contra las mujeres en situaciones de desastres<sup>275</sup>. A los Gabinetes de Gestión Departamentales, fortalecer el diálogo con sus respectivas poblaciones para que en el marco de la desarrollo local se dé prioridad a la supervisión de las políticas públicas en beneficio de las mujeres que habitan en sus territorios<sup>276</sup>.

## e) Situación de participación de las mujeres en la vida política y pública

El Derecho a la Participación Política se encuentra contemplado en el artículo 72 de la Constitución de la República. El artículo 7 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, establece la obligación de los Estados de adoptar las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y en particular garantizar a las mujeres en igualdad de condiciones a los hombres el derecho a votar y a ser elegibles, participar en la formulación de políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, ocupar cargos públicos y ejercer funciones públicas en todos los planos gubernamentales así como participar en organizaciones

<sup>273</sup> Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer (IMUD) y Red de Mujeres Protagonistas de Cambios, *Hacia una Política de Soberanía Alimentaria y Nutricional con Enfoque de Género*, 2011, Pág. 1.

<sup>274</sup> Informe presentado por el Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier De Shutter, 2012, Párrafo 49.

<sup>275</sup> Pronunciamiento del Señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Licenciado Oscar Humberto Luna, en el Día Nacional e Internacional de la Mujer, 8 de marzo 2013.

<sup>276</sup> Ídem.



y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país. En el año 1994, el Estado salvadoreño ratificó la **Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer** que básicamente establece el derecho de toda mujer a votar en todas las elecciones en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna. El Artículo 20 de la LIE regula la promoción de igualdad en el ejercicio de los derechos políticos, el artículo 21, la promoción de la igualdad en las organizaciones políticas, el artículo 22 la igualdad en los procesos electorales y el artículo 23 promoción de la participación de mujeres en órganos de dirección.

En El Salvador, las mujeres ejercen política de diversas formas, una de ellas es incidiendo en diferentes espacios de toma de decisión. Ejemplos concretos: las asociaciones de mujeres a nivel comunitario, que se organizan, definen agendas, prioridades, realizan toda una labor de interlocución con autoridades a todo nivel, son reconocidas como actoras legítimas. Producto de estas negociaciones, realizan transformaciones en sus comunidades, en sus entornos. Además, fomentan los liderazgos femeninos tan necesarios para realizar cambios a profundidad. Todo lo anterior es el ámbito social.

A nivel de funcionariado público, únicamente una Cartera Estatal tiene como titular a una mujer. En los cargos de elección popular, las mujeres representan el 27.3% en las diputaciones titulares (9 diputadas de ARENA, 13 del FMLN y 1 GANA) y de 262 Alcaldías Municipales, sólo 28 están dirigidas por mujeres<sup>277</sup>.

La información cuantitativa visibiliza que los esfuerzos realizados no son suficientes para lograr el integral involucramiento de las mujeres en la participación de la vida política y pública. Mientras persistan los argumentos que ponen en duda la capacidad de las mujeres en el ejercicio de los liderazgos, será difícil alcanzar la *igualdad real*. Es imperante eliminar las condiciones culturales que impiden que las mujeres logren obtener recursos económicos para financiar sus campañas<sup>278</sup>.

Esta Procuraduría comparte la recomendación que el Comité CEDAW emitió en el año 2008 al Estado salvadoreño en tanto, “Ejecute programas de capacitación sobre liderazgo destinados a las mujeres y lleve a cabo campañas de concienciación sobre la importancia de la participación de las mujeres en la adopción de decisiones como requisito democrático y que evalúe el efecto de esas medidas e informe al Comité de los resultados de esa evaluación”<sup>279</sup>.

## f) Situación de las Mujeres Privadas de Libertad

Esta Procuraduría ostenta el mandato constitucional de vigilar la situación de las personas privadas de libertad. En ese sentido, desde esta Procuraduría Adjunta se ha venido dando seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Mujeres Privadas de Libertad y las Niñas y Niños que viven con sus madres en los Centros Penales de El Salvador en el año 2009. Dentro del plan de trabajo de verificaciones, se señaló la visita al Centro de Readaptación de Mujeres de Ilopango, en el cual se constataron las condiciones en las que se encuentran las internas así como sus hijas e hijos.

El hacinamiento, la falta de infraestructura, la falta de atención médica, las condiciones higiénicas y de salubridad, continúan señalándose como necesidades que deben ser abordadas inmediatamente por las autoridades correspondientes. A la fecha existe un aproximado de 2,000 mujeres y 903 niñas y niños. La capacidad de albergue del lugar es de 400 personas. La Directora del lugar, licenciada Doris Rodríguez destacó como positiva la construcción del área materno infantil en Granja Penitenciaria

277 Guirola, Yolanda. *Participación Paritaria de las Mujeres en la Vida Política del País: otra deuda pendiente*, octubre 2012, Página 49.

278 Ferreira Rubio, Delia. *Financiación Política y Género en América Latina y el Caribe*, Página 22. El documento puede consultarse en: [http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1050&Itemid=289](http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&view=article&id=1050&Itemid=289)

279 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. *Observaciones finales sobre el séptimo informe presentado por el Estado*. Octubre 2008, párrafo 28.

de Izalco donde se espera trasladar a 150 niñas y niños provenientes de Quezaltepeque, Apanteos y Sensuntepeque.

Como Institución Nacional de Derechos Humanos, expresamos nuestra preocupación por las graves condiciones en que mujeres y hombres viven la privación de libertad en El Salvador. Destaca que muchas de las violaciones a derechos humanos producidas al interior de la cárcel, obedecen a factores estructurales, son el reflejo de la situación socio-económica del país, del abordaje que las políticas públicas han dado a la problemática de la seguridad y la delincuencia y a las desigualdades e inequidades entre hombres y mujeres que forman parte de la cotidianidad de la sociedad salvadoreña. En tal sentido, tales violaciones trascienden a la misma administración penitenciaria y demandan la adopción de medidas integrales por parte del Estado en su conjunto<sup>280</sup>.

No obstante, la Procuraduría también destaca que la gran mayoría de violaciones a derechos humanos de las personas privadas de libertad y, particularmente, de las mujeres, son el resultado de actuaciones propias de las autoridades y personal penitenciario, las mismas están relacionadas al trato, uso de recursos, medidas disciplinarias, acceso a trabajo, salud, educación, intimidad, igualdad, etc<sup>281</sup>.

## Conclusiones

La violencia de género constituye una flagrante violación a los derechos humanos de las mujeres. Si bien es cierto que se han ido superando las prácticas del sexismo hostil, nuevas formas como el sexismo benévolo y neo sexismo siguen permeando las estructuras estatales, cuestionando todo aquello que represente lo femenino. Como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, desapruebo cualquier hecho que transgrede los derechos y libertades fundamentales de todas las mujeres en nuestro país. Es ininteligible que más del cincuenta por ciento de la población salvadoreña se encuentre en situación de vulnerabilidad por su condición de ser mujer<sup>282</sup>.

En muchas ocasiones la violencia física, psicológica y sexual es la antesala a los feminicidios, hechos que representan la máxima expresión de desigualdad con relación a los hombres en el marco del continuum de violencia. Particularmente, en El Salvador ser mujer es un riesgo y esto se evidencia en las circunstancias en que se pierde la vida. El modus operandi y la intención de sus autores se fundamentan en el patrón sistemático de cosificar los cuerpos de las víctimas y el odio a todo aquello que las represente. Sus cuerpos son violados, torturados, desmembrados y mutilados<sup>283</sup>.

En su oportunidad, esta Procuraduría realizó un análisis entre la situación del empleo digno, transporte público y seguridad para las mujeres. Se manifestó que, “Son las mujeres las que en su mayoría utilizan el transporte público y por tal razón, el Estado salvadoreño debería modificar el abordaje y la planificación que del mismo realiza, ya que cada decisión que se toma afecta diferenciadamente la vida de mujeres y hombres. Por ejemplo, cada día, las mujeres deben lidiar con la inseguridad pública que se hace presente en el transporte colectivo en razón de las múltiples formas de violencia a la que se encuentran expuestas, especialmente la violencia sexual (violación, que otras personas les muestren sus genitales, palabras obscenas, persecución con intención de atacar sexualmente). Esto no significa que los hombres no enfrenten hechos de violencia sexual, pero los actos que afectan a las mujeres son de mayor gravedad porque involucran acciones que transgreden su integridad física o sexual. Las mujeres para garantizar su propia seguridad, deben asumir los costos que garanticen un traslado seguro a su destino: más tiempo y más dinero”<sup>284</sup>.

280 PDDH. *Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Mujeres Privadas de Libertad y las Niñas y Niños que viven con sus madres en los Centros Penales de El Salvador*, 2009, pág. 79.

281 Ídem, pág. 80.

282 Pronunciamiento del Señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Licenciado Oscar Humberto Luna, en el Día Nacional e Internacional de la Mujer, 8 de marzo 2013.

283 Ídem.

284 Pronunciamiento del Señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Licenciado Oscar Humberto Luna, en el contexto de la problemática del paro nacional del transporte público y los desalojos forzados ocurridos en el Centro Histórico de San Salvador y otros Departamentos en

El artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala el principio de progresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales a todos los Estados Partes. Dicho principio se refiere a la adopción de medidas de diverso tipo (legislativas, políticas públicas) donde los Estados utilizan el máximo de recursos disponibles para que paulatinamente se generen las condiciones de satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, lo que a su vez implica la prohibición de regresividad<sup>285</sup>

La ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra Mujer, continúa siendo una tarea pendiente de cumplir por el Estado salvadoreño. Este acto evidenciará la buena fe de las autoridades en el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres<sup>286</sup>.

## 1.6. DERECHOS ESPECÍFICOS DE OTROS GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD<sup>287</sup>



*Marcha y concentración para solicitar a la Asamblea Legislativa la pronta ratificación de las reformas constitucionales que reconocen la existencia y derechos de los pueblos indígenas.*

### a) PUEBLOS INDÍGENAS

#### i. Reforma Constitucional

En el mes de abril del año 2012, en la última sesión plenaria celebrada por la Asamblea Legislativa saliente, se aprobó la reforma constitucional que otorga el reconocimiento de la existencia y de los derechos de los pueblos indígenas de El Salvador, a través de la adhesión de un segundo inciso al artículo 63 de la Constitución.

el País y los hechos de violencia que afectan a las mujeres, 15 de enero 2013.

285 Ídem.

286 Pronunciamiento del Señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Licenciado Oscar Humberto Luna, en el Día Nacional e Internacional de la Mujer, 8 de marzo 2013.

287 Elaborado por la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y editado por la Unidad de la Realidad Nacional.

Sin embargo hasta la fecha, tal reforma constitucional no ha sido ratificada por el Órgano Legislativo, razón por la cual se han realizado ciertas acciones encaminadas a lograr dicho objetivo por parte de la Mesa Permanente de la PDDH sobre derechos de Pueblos Indígenas, tal es el caso de la marcha por el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios realizada el 11 de abril del corriente año, la que inició en el Parque Cuscatlán y finalizó con una ceremonia indígena en las afueras del Palacio Legislativo.

## **ii. Actuación de las Instituciones del Estado**

Con respecto a que los pueblos indígenas puedan contar con un referente institucional para su atención, la extinta Dirección Nacional de Pueblos Indígenas creada por la Secretaría de Inclusión Social, pasó a manos de la Dirección Nacional de Espacios Culturales de la Secretaría de la Cultura de la Presidencia, teniendo como sede la Casa de la Cultura de la Colonia Centroamérica, lo que a nuestro juicio es considerado un retroceso, pues le da al tema un enfoque más cultural y folclórico que de protección a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Por otra parte, existe un descontento manifestado públicamente por los líderes y lideresas de los pueblos y comunidades indígenas, por considerar no sentirse representados por los funcionarios o funcionarias de tal instancia, pues si bien es cierto, se han realizado algunas acciones para colocar en la agenda del Gobierno el tema indígena y la implementación de políticas públicas a su favor, éstas no han sido suficientes, considerando que en dicha institución deberían de contar con un referentes propio de los pueblos indígenas.

## **iii. Ratificación del Convenio 169 de la OIT y Elevación a Ley de la Declaración Universal de los Derechos de Pueblos Indígenas**

En cuanto al Convenio 169 de la OIT, relativo a Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, hasta la fecha no se ha firmado y ratificado el mismo, a pesar de ser una deuda a tales pueblos y una exigencia de la Organización de las Naciones Unidas. Corriendo la misma suerte la Declaración Universal de los Derechos de Pueblos Indígenas, la cual tampoco ha sido elevada a ley de la República hasta la fecha.

Sin embargo con respecto al Convenio 169 de la OIT es necesario acotar que, en fecha 14 de agosto del año 2012, el Relator Especial de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas James Anaya sostuvo una reunión en esta Institución con el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y las organizaciones que conforman la Mesa Permanente de la PDDH sobre Derechos de Pueblos Indígenas, como parte de las actividades a realizar en su estadía en El Salvador y en la que se hizo mención de la no ratificación de dicho instrumento y se expresó que tal situación sería visibilizada en el informe de su visita.

Por otra parte en fecha 14 de febrero del corriente año, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado Oscar Humberto Luna, junto a un grupo de representantes de la mesa, sostuvo en Cancillería una reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores, ingeniero Hugo Roger Martínez, cuyo objetivo fue evidenciar la importancia de la ratificación del Convenio 169 de la OIT, para los pueblos indígenas, solicitando el apoyo de tal funcionario para lograr dicho cometido.

Conforme a lo anterior, el funcionario requerido expuso que se han hecho gestiones por parte de Cancillería para lograr la firma y ratificación del Convenio citado, pues se ha pedido opinión para su aprobación a diferentes instituciones relacionadas al tema, surgiendo con esto el compromiso de



facilitar dicho proceso agilizando las respuestas pendientes de las consultas realizadas; y se estableció un canal de comunicación entre la PDDH y Cancillería para dar seguimiento a este proceso, delegando para ello a los licenciados David Morales como Director de Derechos Humanos y Jorge Jiménez como Director de Asuntos Sociales.

## **b) POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE**

En fecha 23 de noviembre del año recién pasado, se llevó a cabo la primera jornada de socialización interna con el personal de tutela y delegados departamentales del documento “Guía de Trabajo sobre Cómo Abordar un Caso de Discriminación Racial”, el cual fue elaborado por la Procuraduría Adjunta de Derechos Civiles en coordinación con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas.

Con dicho instrumento esta Procuraduría pretende asumir dentro de su marco de actuación las medidas necesarias para atender a la población afrodescendiente que se vea conculcada en sus derechos e incidir en la visibilización de dicha población, por lo anterior, era de suma importancia establecer un mecanismo a través del cual se puedan detectar aquellas actuaciones que podrían constituir un acto de discriminación racial en contra de tal población.

## **c) DERECHOS HUMANOS DE LA COMUNIDAD LGBTI**

### **i. Actuación de la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría de Inclusión Social**

Las organizaciones de la población LGBTI han expresado que existe una inconformidad y descontento con la actuación de la Secretaría de Inclusión Social, pues afirman desconocer el funcionamiento y trabajo que desempeña en la actualidad y a su favor la Dirección de Diversidad Sexual creada por la misma, ya que consideran que no se han implementado políticas públicas en su beneficio, que hay una falta de apoyo al trabajo que realizan las organizaciones miembros de la comunidad LGBTI y la falta de una rendición de cuentas por parte de dicha instancia hacia tal población.

Como resultado de los hechos antes descritos, se solicitó por parte del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos audiencia con la doctora Vanda Pignato Secretaria de Inclusión Social, la que fue dada en fecha 22 de abril del corriente año, en la que participaron representantes tanto de la PDDH como de la Mesa Permanente de ésta Procuraduría sobre los Derechos de la Población LGBTI, el Subsecretario de Inclusión Social, licenciado Carlos Urquilla, entre otros; y en la que se adoptaron una serie de acuerdos con el objetivo de lograr un trabajo en conjunto entre dicha instancia y la población LGBTI.

### **ii. Decreto Ejecutivo No. 56 “Contra la Discriminación por Orientación de Género o Sexual”**

Por otra parte, con respecto a tal decreto, hasta la fecha esta Procuraduría ha continuado recibiendo denuncias por parte de la población LGBTI, por violaciones a Derechos Humanos cometidas por las instituciones incluidas en el mismo, sobresaliendo la Policía Nacional Civil, el Cuerpo de Agentes Metropolitanos CAM, la Fuerza Armada, el Ministerio de Educación, El Registro Nacional de las Personas Naturales y la Dirección General de Centros Penales.



### iii. Proyecto de Ley de Identidad de Género

El 17 y 18 de octubre del año recién pasado, se llevó a cabo el Primer Encuentro Nacional de la población Trans, facilitado por esta Procuraduría y USAID-PASCA, que tuvo como sede la Escuela de Derechos Humanos de la PDDH, y en el que participaron diversas organizaciones y activistas independientes de dicha población, siendo el objetivo del mismo, la obtención de insumos para trabajar una propuesta de Ley de Identidad de Género, partiendo de las demandas y necesidades de dicho grupo.

### iv. Sobre los Asesinatos acaecidos en la Comunidad Trans de El Salvador

Nos referimos a los asesinatos de “Catherine”, “Tania” y “Betzaída”, todas integrantes de la población trans, que se iniciaron en la FGR a través de expedientes referencia 1453-UDV-ST2-09, 665-UDHO-SS-2009 y 841-UDHO-SOY-2009, todos por homicidio agravado. Con respecto a la actuación de la PDDH en estos casos, se han realizado diligencias de verificación de los expedientes ya citados, debido a la retardación de justicia para judicializar los procesos, ya que hasta la fecha estos se encuentran en etapa de investigación.

Finalmente, en fecha 17 de mayo del corriente año, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, en el marco de Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia, emitió un pronunciamiento haciendo referencia a los homicidios ya citados así como los sucedidos recientemente tal es el caso de “Tania Vázquez”, integrante del equipo de trabajo de COMCAVIS-Trans, “Perla Rivas”, Mónica M., René Emilio Aguirre y Soraya Hernández, a través del cual acompañó la denuncia pública hecha por las organizaciones que conforman la mesa LGBTI de esta Procuraduría e instó a las autoridades competentes a investigar tales casos.

## d) DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES

### i. Salvadoreños y salvadoreñas que migran y residen en el exterior

En la actualidad en nuestro país la migración de Sur a Norte, sigue ocupando el primer lugar en la dinámica del flujo migratorio, las causas de la migración siguen siendo la búsqueda de mejores oportunidades de trabajo, la posibilidad de concretar un proyecto de vida, la reunificación familiar o en todo caso buscar protección internacional ante la grave situación de inseguridad ciudadana en el país. Sin embargo, muy poco se ha dicho o abordado el cambio de destino de nuestros compatriotas hacia países de Europa, tales como Italia,<sup>288</sup> comunidad considerada como la colectividad de salvadoreños más grande en Europa y la tercera a nivel mundial, en razón que un importante número de connacionales se han desplazado a ese destino con el fin de poder buscar oportunidades de empleo, así como por razones de reunificación familiar, entre otras motivaciones para solventar las necesidades básicas que no han podido ser satisfechas en nuestro país.

No obstante la afirmación anterior, la ruta tradicional de nuestros migrantes hacia Estados Unidos, continúa siendo el destino de preferencia de la mayoría de personas salvadoreñas que decide abandonar el territorio nacional, por lo que los riesgos en la ruta migratoria siguen estando a la orden del día, tales como asaltos, agresiones físicas y sexuales, mutilaciones, sobornos y secuestros por grupos del crimen organizado para posterior explotación sexual y otras modalidades de Trata de Personas en perjuicio de los migrantes que transitan por los países de la ruta migratoria. Si bien en lo que corresponde al año 2012 y el presente año en curso no hay registros visibles de nuevas masacres o naufragios de personas migrantes en su paso por México.

288 Según datos demográficos de Italia del año 2007 unos 30,000 compatriotas residen en ese país. Ahora se estiman unos 45,000 salvadoreños radicados en ese país. La mayoría ubicados al Norte del país y sólo en Milán el Consulado registra a 12,200 connacionales. [www.consuladomilan.reee.gob.sv](http://www.consuladomilan.reee.gob.sv), última consulta el 7 de julio de 2013.

Especial mención merece el ataque ocurrido el primero de mayo del presente año, a migrantes en el Estado de Veracruz, México, en el que al menos 15 personas heridas dejó el ataque en el Tren a un grupo de migrantes <sup>289</sup> De acuerdo a información del Instituto Nacional de Migración (INM) los agresores iban armados con machetes y armas de fuego, y les exigían entre 100 y 300 dólares a cada uno de los por dejarlos continuar con el recorrido; ante la negativa según reportes se desató la refriega que algunos migrantes fueron lanzados desde el tren.

En cuanto a la implementación de una reforma migratoria en Estados Unidos, ha superado una prueba mayor en Estados Unidos, luego que los senadores aprobaron limitar el debate de una enmienda que incluye un refuerzo de la seguridad fronteriza con México.

El desenlace del voto procedimental sugiere que los partidarios de la Reforma Migratoria cuentan los votos necesarios para aprobar tanto la enmienda como la iniciativa de ley en su conjunto sin tener que superar un nuevo intento de bloqueo de los opositores. La enmienda prevee destinar 30 mil millones de dólares a la frontera, completar 1,126 kilómetros de bardas, así como implementar a nivel nacional el programa E-Verify, para verificar la elegibilidad laboral de los trabajadores. Asimismo, contempla el establecimiento de un sistema electrónico para monitorear la entrada y salida de las personas que entran a los Estados Unidos con visas. Los demócratas presentaron una enmienda a fin de asegurar que la iniciativa final incluye una ruta a la legalización con ciudadanía de 11 millones de inmigrantes indocumentados.

La aprobación de la enmienda luego del debate busca pavimentar el camino para un apoyo similar al proyecto de ley de reforma migratoria del Senado.

La instrumentación de esas medidas, a las que se agregan futuros procedimientos de deportación a personas con visas expiradas, la verificación de empleo, salida y entrada del país, será necesaria para que los inmigrantes indocumentados que se acojan a una legalización obtengan la residencia permanente. El presidente Barack Obama defendió el proyecto de ley de reforma migratoria en el Senado como la respuesta equilibrada que requiere el actual e ineficiente sistema.

## **ii. Migrantes No localizados**

En el curso del año 2012 y el presente 2013, algunos reportes por parte de los Consulados de El Salvador acreditados en Estados Unidos, registran hallazgos de cuerpos o restos que puedan corresponder a migrantes salvadoreños o salvadoreñas, que portan en la mayoría de ocasiones con sus documentos de identificación y que se encuentran en las morgues o funerarias particulares que están ubicadas en zonas de mayor afluencia como lo es la frontera norte de México con Estados Unidos.

Al respecto de estos hallazgos, y por la naturaleza de los casos, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos cuenta actualmente con 190 casos documentados dentro del Banco Forense de Migrantes No localizados, el cual opera sobre la base del Convenio suscrito en agosto de 2010, por esta Procuraduría y el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos(COFAMIDE) y el Equipo Argentino de Antropología Forense,( EAAF) que pretende la implementación de mecanismos de búsqueda e identificación de migrantes no localizados.

Lo anterior ha generado coordinaciones urgentes para ubicar cuerpos o restos de posibles compatriotas reportados por los Consulados. En el periodo que nos ocupa, ante esa realidad se han realizado toma de muestras en agosto, octubre y diciembre del año 2012, incluyendo la jornada de toma de muestras que se realiza cada año en el mes de septiembre realizada por personas del Equipo Argentino. En el presente año se han realizado tomas extraordinarias en enero, marzo y mayo, actividades que se desarrollan en

<sup>289</sup> Expediente SS-0270-2013; ataque a migrantes en el Tren en su paso por Veracruz.

la Escuela de Derechos Humanos, con apoyo de personal designado por el Instituto de Medicina Legal por gestiones que ha realizado el Ministerio de Relaciones Exteriores ante esa autoridad.

El Banco de Datos Forenses, desde su instauración a la fecha ha obtenido muestras de ADN de alrededor de 540 muestras por parte de las familias donantes que corresponden a un universo de 190 migrantes no localizados reportados en dicho Banco. Por otra parte, este proceso de localización ha permitido identificar de forma científica a 18 migrantes salvadoreños fallecidos, reportados como desaparecidos en la ruta, de los cuales 9 de los compatriotas ya han sido repatriados procedentes de Estados Unidos y entregados a sus familias para que les brinden cristiana sepultura según sus creencias.

Uno de los mayores retos que las autoridades salvadoreñas del Ministerio de Relaciones Exteriores poseen es la instauración de protocolos de búsqueda e identificación de migrantes que han desaparecido en su ruta hacia Estados Unidos, ello implica que los consulados cuenten con los recursos necesarios para la realización de labores de búsqueda no solamente de migrantes que se presume que han fallecido, sino la búsqueda de migrantes que podrían estar detenidos, en hospitales, en albergues para personas migrantes, etc.

Además de lo anterior se necesita la adopción de mecanismos de atención sicosocial a las familiares de migrantes que han desaparecido, y en los procesos de notificación de las identificaciones y en las repatriaciones de restos.

Otros obstáculos que se han encontrado, es la coordinación directa que hacen con los familiares las Funerarias que reciben los restos o cuerpos de connacionales, en vista que por ser estas empresas privadas, los costos de almacenamiento en Estados Unidos, son muy elevados y estos normalmente deben ser asumidos por las familias, y no pueden omitirse o eximir el pago a las funerarias, por el almacenaje durante periodos prolongados, mientras el Estado realiza las coordinaciones de repatriación. El hecho que estas empresas contacten a los familiares genera en los mismos, reacciones de incertidumbre y a la vez no se hace con las condiciones adecuadas, sino los revictimizan, al proporcionarles información sin la debida asistencia psicológica o de forma considerada.

La carencia de políticas, programas y de un fondo/rubro específico para repatriar los cuerpos o restos de compatriotas fallecidos en el exterior por diversas situaciones, y que no permite incluso a muchas familias asumir estos costos, ha generado que ante la inexistencia de recursos por parte del Estado, muchas de las identificaciones ya notificadas por el Banco de Datos Forenses u otra vía, genere un retraso prolongado e indefinido, para efectos que dichos restos sean repatriados a El Salvador y entregados a sus seres queridos.

Sin embargo, es imperioso destacar, que a pesar de la labor que realiza personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, en las repatriaciones de cuerpos o restos que se reciben en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, la carencia de mecanismos o protocolos, genera que la entrega de los restos a las familias, implique situaciones indignas para la recepción de los mismos, pues el espacio o instalación asignado por la autoridad aeroportuaria (CEPA) no reúne las condiciones adecuadas ni de privacidad para realizar este procedimiento, careciendo el personal de CEPA incluso de la sensibilidad necesaria para efectuar dichos procesos.

Por otra parte señalar, que la realización de trámites para la entrega de cuerpos, es un proceso prolongado que bien puede agilizarse si se realizan las gestiones y coordinaciones necesarias, pues en el mismo están involucradas las aerolíneas, responsables del traslado de los féretros, los personeros de CEPA encargados de la seguridad de dichas instalaciones y personal de Migración, quienes realizan el proceso de ingreso de los restos al territorio nacional. No obstante, por parte de la autoridad

Migratoria se designa actualmente al Jefe o Jefa de Turno del Aeropuerto para realizar el chequeo y autorización de ingreso de restos, para que sean entregados a las familias, pero esto se hace únicamente si el Jefe/a asignado/a por parte de Migración ha finalizado sus labores de supervisión mientras ingresan los viajeros procedentes de otros países en la Terminal Aérea, lo que genera un retraso innecesario, pues inclusive dicho funcionario no se encuentra disponible en las instalaciones donde se realiza la revisión de documentación y entrega de féretros, lo cual podría solventarse o mejorarse si hubiese una designación especial para la recepción de fallecidos en el Aeropuerto Internacional.

Como Defensor del Pueblo considero oportuno que la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, pueda considerar urgente con autoridades de la Dirección General de Migración y la Cancillería la búsqueda de un espacio digno y adecuado para la entrega de restos humanos a las familias salvadoreñas que han experimentado una tragedia de tal magnitud, que inclusive se provea a dichas instalaciones con un espacio para una capilla o similar, para que las familias puedan realizar un acto ceremonioso si así lo ameritan al momento de recibir los restos de su familiar.

### **iii. Migrantes Centroamericanos y extra regionales en El Salvador**

En cuanto a los extranjeros que ingresan a El Salvador, y que por diferentes motivos han sido interceptados por la autoridad migratoria o enviados al Centro de Atención Integral para Migrantes. Es preciso señalar que las instalaciones de dicho Albergue, cuentan con los servicios básicos, tales como: alimentación, salud e inclusive atención psicológica y el apoyo respectivo para trasladar a los extranjeros a sus Consulados, para el proceso de documentación. Sin embargo, por informes y verificaciones efectuadas, es mi deber reiterar nuevamente que en vista de contar con una Ley de Migración y Extranjería obsoleta que no responde a las exigencias actuales de la realidad internacional, genera que muchos de los casos de intercepción de extranjeros se conviertan en detenciones indefinidas, pues el proceso gubernativo de expulsión que refiere la Ley en comento, ocasiona que los migrantes permanezcan en dicho Albergue, más tiempo del que señala la Ley, contraviniendo lo estipulado en la Constitución en lo que refiere a la detención administrativa para quienes han cometido ilícito penal. Para el caso de los extranjeros interceptados por falta a la norma administrativa, esto no constituye un ilícito, sino una infracción a la norma administrativa tal como Procuraduría lo ha establecido previamente.

A ello debe agregarse, que los consulados acreditados en El Salvador de países vecinos de Centroamérica, se muestren indiferentes y reacios al momento de atender a sus connacionales, dudando de la procedencia y testimonio de la persona y mostrando descontento por el hecho que la autoridad migratoria les solicita documentarlos para realizar el proceso de expulsión. De igual forma, es preocupante que en el último año, se registren casos de extranjeros que han sido procesados por el ilícito de tráfico de personas, trata de personas, lavado de dinero, y los jueces del sistema judicial, que han atendido dichos casos, les apliquen procedimiento abreviados según lo que estipula el código procesal penal, pero los remiten con orden judicial al Albergue, generando con ello que victimarios y víctimas estén por tiempos prolongados en las mismas instalaciones, sin valorar los riesgos que ello podría implicar para los migrantes, al ser dichas personas miembros del Crimen Organizado Transnacional.

### **iv. Voto de salvadoreños y salvadoreñas desde el exterior**

La implementación del voto en el exterior fue aprobada el 24 de enero del presente año, mediante el cual los salvadoreños residentes fuera del territorio nacional tendrán la posibilidad de ejercer su derecho al sufragio para elecciones presidenciales. La Ley Especial para el ejercicio del voto desde el exterior establece que los salvadoreños ejercerían el sufragio en la modalidad postal o de voto por correspondencia. Además se hará de forma universal para todos los ciudadanos salvadoreños residentes en el extranjero. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) será el responsable de implementar el sistema

postal. Para poder ejercer el voto desde el exterior, los salvadoreños deberán completar un formulario, proporcionado por el TSE, en el que manifestarán su voluntad de ser incluidos en el padrón electoral de residentes en el exterior. Este formulario debe llegar al TSE a través de uno de los siguientes medios: presentándolo personalmente en un consulado, completándolo y enviándolo por internet o presentándolo personalmente en las oficinas del TSE en El Salvador.

Los requisitos se enfocan a contar con Documento Único de Identidad vigente y con residencia en el exterior; estar inscrito en el registro electoral y en el padrón electoral de residentes en el exterior; no haber adquirido otra nacionalidad que implique renuncia de la salvadoreña; y estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos. Sin embargo el hecho que el registro electoral no sea automático, exigía una campaña de educación pronta y oportuna dirigida a los salvadoreños en el extranjero para informarlos sobre este requisito que deben cumplir ante el ante el desafío logístico y técnico que conlleva este nuevo mecanismo, era necesaria una pronta asignación de los fondos para su implementación. Asimismo, el desarrollar mecanismos efectivos para asegurar el envío y recepción debida del paquete electoral a los salvadoreños facultados para votar, así como también asegurar la confidencialidad y manejo transparente de las papeletas recibidas por el Tribunal Supremo Electoral.

Sin embargo, con el atraso de la aprobación de la Ley y de la emisión de los fondos necesarios, no se cuenta en todos los consulados de El Salvador en todo el mundo, con la posibilidad en primer lugar de obtener DUI con residencia en el exterior para seguir en segundo lugar con los pasos siguientes de registro y padrón electoral. Solamente en varios Estados de Canadá y de Estados Unidos, se contará con esa posibilidad y por lo tanto con la oportunidad para ejercer el derecho al voto. La difusión y la habilitación de sitios informáticos que provean de la información pertinente también han sido limitadas.

En consecuencia se evidencian ejemplos en los cuales se ha tenido conocimiento que cerca de 30,000 salvadoreños que viven en Italia podrían quedarse sin votar en las elecciones presidenciales.<sup>290</sup> Los connacionales están a la espera de que se abra una oficina para emisión del Documento Único de Identidad (DUI), y con ello actualizar su dirección y poder ingresar al padrón electoral válido para votar en las elecciones del próximo año. En caso que esto se diera el tiempo es considerado insuficiente que los connacionales logren ingresar al padrón electoral, pues el plazo para ello cierra el próximo 5 de agosto.

Aunque se planificó en un inicio que el RNPN emitir el DUI entre los meses de junio y julio; la atención brindada en Estados Unidos impide que esto se cumpla como estaba previsto, y la única manera sería a través de una prórroga.

## **v. Personas solicitantes de asilo**

El Salvador constituye un país de destino para un significativo número de personas que buscan protección internacional, muchos de los solicitantes de asilo, han sido identificados dentro de los flujos migratorios mixtos donde viajan de forma indocumentada con redes de traficantes de personas. En otros casos los solicitantes de asilo tienen que recurrir al uso de documentos falsos para cruzar las fronteras y salvaguardar su vida y la de sus familiares ante temores fundados de persecución por motivos de raza, nacionalidad, religión, pertenencia a un determinado grupo social, opiniones políticas o porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado el orden público.<sup>291</sup>

<sup>290</sup> <http://www.laprensagrafica.com/peligro-voto-salvadoreno-en-italia>

<sup>291</sup> La Declaración de Cartagena del 22 de noviembre de 1984, amplía el concepto de "refugiado" debido a que incorpora además de los elementos de



Sin embargo, se han registrado casos en los cuales los traficantes de personas, han influido para tratar de desnaturalizar la figura de condición de refugiado, debido que en ocasiones han ordenado a las personas generalmente extrarregionales, que son interceptados por autoridades migratorias o policiales, para que soliciten asilo en el país. Posteriormente, mientras transcurre el proceso de determinación de la condición de refugiado, abandonan el territorio nacional y continúan con su ruta hacia otros países generalmente Estados Unidos; con ello se deja en evidencia que muchas de estas personas eran migrantes en busca de mejores condiciones de vida y no verdaderos solicitantes de asilo. Lo anterior, generó mayores dificultades para que las personas extrarregionales que si cumplen con los requisitos para solicitar asilo, sean sujetos de protección internacional por las autoridades migratorias.

En consecuencia, la identificación y posterior protección de una persona solicitante de asilo, supone grandes desafíos para las autoridades migratorias y o con las que tienen el primer contacto con estas personas en puestos fronterizos o puntos fronterizos no habilitados, como por ejemplo la Policía Nacional Civil, debido a que es obligación del Estado proporcionar y facilitar mecanismos de protección que garanticen desde el primer momento el principio de no devolución, la no detención arbitraria, el derecho a un intérprete en caso de ser necesario, el derecho a la alimentación, cuidados médicos y en caso de grupos familiares mantener la unidad de los miembros; entre otros derechos en atención a estándares internacionales establecidos en los instrumentos de protección de personas solicitantes de asilo o que han obtenido la condición de refugio tales como la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados y la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984.

Por otra parte, las principales problemáticas que enfrentan actualmente las personas solicitantes de asilo en el país, se encuentran en el proceso de reconocimiento de la condición de personas refugiadas establecido en la Ley para la Determinación de la Condición de Personas Refugiadas por medio de la Comisión para la Determinación de la condición de Personas Refugiadas, CODER, pues en dichos procedimientos no se cumplen con los plazos establecidos como parte de las garantías del debido proceso; además, tampoco se cuenta con asistencia técnica jurídica durante el mismo, ni al momento de interponer un recurso en caso de denegación de la condición de refugiado.

En otro sentido, no se han implementado sistemas nacionales de recepción y asistencia para las personas solicitantes de asilo que además tomen en cuenta la situación de vulnerabilidad en la que se pueden encontrar niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores, etc. es decir que no se cuenta con un programa integral que brinde las condiciones necesarias y la asistencia humanitaria, educación o permiso de trabajo, para que mientras se realice el procedimiento que les otorgue el reconocimiento de condición de refugio, las personas solicitantes de asilo puedan subsistir de una manera digna; la ausencia de estos programas violenta sus derechos económicos sociales y culturales, y les obliga en muchos casos a subsistir de la ayuda de personas altruistas y organizaciones que les apoyan o a dedicarse a actividades remuneradas sin tener permiso para hacerlo.

Si bien es cierto las personas solicitantes de asilo en principio, mientras se les otorga la admisión de la solicitud, permanecen en el Centro Integral de Atención a la Persona Migrante, pero luego de dicha admisión y mientras transcurre el procedimiento que establezca una resolución definitiva, son puestos en condición ambulatoria en las condiciones antes descritas. Aunque el Programa de Atención a las Personas Refugiadas de El Salvador por medio de su Oficina sede en la Iglesia Epsicopal Anglicana realiza esfuerzos de asistencia y coordinación interinstitucional, esto no es suficiente para brindar una atención integral a estas personas.

---

la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y del Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, que se considere como temor fundado de persecución los siguiente elementos: Porque la vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado el orden público.

Actualmente en el país la población a la cual se le ha reconocido por parte de la CODER, la condición de refugio asciende a 45 personas de las siguientes nacionalidades: 3 colombianos, 25 nicaragüenses, 1 iraquí, 13 hondureños, 2 Chinos y 1 de Argelia.<sup>292</sup> Es importante destacar en el caso de las personas a quienes las autoridades les han reconocido dicha condición, que la Ley para la Determinación de la Condición de Refugiado establece la opción de solicitar la adquisición de residencia permanente y la naturalización de acuerdo a la Constitución de la República y demás legislación aplicables en la materia. Sin embargo, la Ley de Extranjería vigente no comprende disposiciones específicas que faciliten de forma gratuita y ágil estos procedimientos a las personas que han obtenido el reconocimiento de la condición de refugiado, y por lo tanto tendrían que someterse a los procedimientos comunes que carecen de efectividad.

De acuerdo a estudios realizados de forma reciente, en la Región Centroamericana se mantiene como constante la migración económica/laboral por las dificultades de situación socioeconómica imperante y la búsqueda de mejores niveles de bienestar. Sin embargo, el accionar del crimen organizado, genera desplazamiento forzado al interno y externo de los países. Este último motivo se evidencia con mayor intensidad en los últimos 3 años en los países del triángulo norte centroamericano, lo que se ve reflejado en el aumento de los índices de violencia (homicidios, criminalidad, extorsiones, secuestros desapariciones) precisamente en las zonas de impacto y zonas de riesgo ante el accionar del crimen organizado.<sup>293</sup>

Podemos establecer que se hace especial énfasis en el ciclo de desplazamiento forzado de salvadoreñas y salvadoreños víctimas en condiciones de riesgo, en el que la desprotección y la persecución por parte del crimen organizado se expresa en diferentes ámbitos: las personas se ven obligadas a abandonar sus casas, salen en búsqueda de familiares a otras zonas del país, se desplazan forzosamente a otras zonas más alejadas y a menudo terminan cruzando la frontera internacional. Los Estados, Organismos Internacionales y las Organizaciones de Sociedad Civil, aún no han reconocido el desplazamiento forzado interno y externo a causa del crimen organizado como una situación real y emergente, que requiere de respuestas desde una perspectiva humanitaria y de seguridad humana, o como causa de temor fundado de persecución.

Esta situación genera a su vez impunidad y desprotección, ante la falta de políticas públicas y legislaciones nacionales y regionales, que estén acordes a los instrumentos internacionales ratificados por los países centroamericanos, y que respondan adecuadamente a las necesidades humanitarias de quienes son víctimas del desplazamiento forzado. Además de la falta de confianza de las víctimas en los sistemas de persecución del delito que considera a las instituciones encargadas insuficientes para brindarles la protección requerida y por lo tanto no todos los casos son denunciados. De acuerdo a informes estadísticos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, se reportan que hay aproximadamente 17.000 personas con la condición de refugiados y solicitantes de asilo provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua en Estados Unidos de América, Canadá y otros países de Latinoamérica y Europa. Quienes ante la falta de efectividad y protección de las autoridades encargadas de combatir el delito en los países de origen se ven en la obligación de cruzar las fronteras y solicitar protección internacional.<sup>294</sup>

292 Datos proporcionados a través del Programa de Atención a Personas Refugiadas en El Salvador implementado por Iglesia Episcopal Anglicana de El Salvador, IAES.

293 Diagnóstico "Desplazamiento Forzado y Necesidades de Protección, generadas por nuevas formas de Violencia y Criminalidad en Centroamérica", Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes – CIDEHUM a solicitud del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Mayo 2012.

294 Idem.

## **e) SITUACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS**

En cuanto a la Trata de Personas, corresponde señalar, de importante los esfuerzos realizados por el Consejo Nacional contra la Trata de Personas y la Secretaría Ejecutiva, para la elaboración de la Política Nacional contra la Trata de Personas, la que constituye un valioso aporte para todas las instancias y estructuras del Estado y la sociedad en general, en relación a combatir, erradicar y perseguir tan denigrante delito en perjuicio de mujeres, niñas, niños y jóvenes en nuestro país.

Debe considerarse que los datos de los últimos años en cuanto a la persecución del delito, ubican a nuestro país, en una categoría en la cual los esfuerzos realizados a la fecha, son insuficientes ante los diversas y creativas formas de operar de las estructuras del Crimen Organizado Transnacional, en el que no se puede omitir o desmeritar los esfuerzos que realizan las instituciones encargadas de la persecución y penalización de dicho delito. Por lo que es imperioso que el Estado agilice el mecanismo o proceso que posibilite con los recursos necesarios y acordes para el combate de dicho flagelo, contar con un modelo de atención integral, que defina y articule la ruta de atención a víctimas, la intervención psicoterapeuta integral, y que posibilite a largo plazo la restitución plena de los derechos humanos a víctimas y a personas sobrevivientes.

Lo anterior en razón que las niñas y jóvenes que llegan al Albergue especializado a cargo del Instituto Salvadoreño de Niñez y Adolescencia, se encuentran con mínimas posibilidades de ser integradas a su entorno familiar y social, inicialmente en razón de los riesgos que implica para sus vidas, pero la falta de recursos les imposibilita retomar un proyecto de vida, que les fue arrebatado por sus victimarios/as.

Un aspecto que requiere especial atención, es el abordaje de jóvenes niños niñas no acompañados que retornan vía terrestre y aérea, y del cual dado la condición de vulnerabilidad de este segmento de la población requiere una atención adecuada y especial. Sin embargo, esta Procuraduría ha constatado en la llegada de buses procedentes de México, que no hay presencia de funcionarios de instituciones que atienden el tema de niñez, ya sea del Instituto Salvadoreño de Niñez y Adolescencia (ISNA) o del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, (CONNA) bajo el argumento que una de las instituciones, ya no le compete atender estas situaciones, por ser atribución del Consejo, y este sus personeros han señalado que son únicamente un ente rector de la Política de Niñez y Adolescencia y no ejecutores de la misma.

Tal situación, ha generado que la Dirección General de Migración y Extranjería, asuma un procedimiento que no le corresponde por sus atribuciones, para realizar la entrega de niños, niñas y jóvenes que han retornado en calidad de expulsados tanto de Estados Unidos y México. Lo anterior en razón que en muchas ocasiones quienes se presentan como familiares responsables no son sus padres, sino otros parientes y hasta particulares.

## **f) DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA DE 1992 (EX BOLSONES)**

En lo que respecta a los derechos humanos de las personas de los ex bolsones, puede establecerse que la Comisión de Seguimiento, Sección El Salvador, no ha tenido el mismo nivel de incidencia para la realización de acciones conjuntas con la Comisión de Seguimiento, Sección de Honduras; la Comisión Sección El Salvador sigue efectuando sus actividades y coordinando tanto en los ámbitos de salud que es una de las áreas más destacadas por medio de FOSALUD que realiza brigadas médicas de forma

periódica en todas las zonas delimitadas por la sentencia de La Haya; además se ha continuado con la entrega de paquetes agrícolas, jornadas para el inicio de trámites para la obtención de nacionalidad.

En el ámbito de Educación se entregaron paquetes escolares. Lo anterior se realizó con el apoyo de las Alcaldías de Perquín y Arambala. La realización de consulados móviles en Nahuaterique con la coordinación y apoyo de la representación Diplomática y Consular acreditada en Honduras. Se han realizado los levantamientos de censos de agricultores en Nahuaterique, Mesetas, Carolina, Zazalapa, para determinar a quienes se les dará semilla mejorada.

Debido a las problemáticas migratorias que se generan en el puesto fronterizo de Rancho Quemado, como parte de la denominada Mesa Interinstitucional en la cual participaban la Comisión de Seguimiento, la Dirección General de Migración y Extranjería, la Dirección General de Aduanas y la Policía Nacional Civil, se impulsó la creación y aprobación de un Decreto Legislativo que contemplara disposiciones tendientes a que el control migratorio se realice por la autoridad competente como es la Dirección General de Migración y Extranjería y la Dirección General de Aduanas; el Decreto Legislativo fue denominado: “Ley para la Creación del Régimen Especial Migratorio y Trámite Aduanero”, para las personas afectadas por la sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 11 de septiembre 1992 y entró en vigencia en el presente año.

En el contenido de la Ley se destaca la implementación de un régimen de censo e identificación de todos los pobladores de la zona fronteriza, que permita facilitar los procedimientos de control migratorio. Sin embargo, el censo con el cual se cuenta actualmente de los pobladores y pobladoras no se encuentra actualizado; para ello se necesita la realización de gestión de fondos para su ejecución y se encuentra en proceso de trámite en la Comisión de Seguimiento, Sección El Salvador.

De acuerdo a monitoreos realizados por esta Procuraduría al Puesto Fronterizo de Rancho Quemado, este no cuenta aún con la instauración de las oficinas aduanales lo cual también afectaría el cumplimiento inmediato de la Ley. En el caso de la entrega de documentos para niños y niñas, adolescentes que residen en las zonas afectadas por la sentencia de La Haya se gestionan los fondos necesarios para que se emitan.

## **g) DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES**

### **i. La situación del Sistema de Pensiones**

En los últimos años, uno de los derechos fundamentales que se ha ido perfilando más claramente en la línea de la mercantilización y no en la naturaleza intrínseca de la dignidad humana, es el derecho a la seguridad social. En relación a ello y ante la reciente aprobación de las reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), mediante Decreto Legislativo N° 1036, de fecha 30 de marzo de 2012, en virtud del cual se reformaron los artículos 13, 16, 91, 223 y 223-A, esta Procuraduría junto con la Mesa de Trabajo sobre la situación de las Personas Adultas Mayores en El Salvador de la PDDH, ha venido trabajando en el análisis sobre diferentes aspectos de especial impacto en la calidad de vida de la población adulta mayor, dentro de los cuales el tema de las pensiones ha guardado una especial importancia.

Aunque la privatización del sistema de pensiones en 1998 se planteó como la alternativa para asegurar la sostenibilidad de la seguridad social en el país, ha sido claro que con la reforma no se ha avanzado significativamente en la generación de opciones reales de bienestar y calidad de vida para las personas en edad de jubilación, y tampoco se ha podido asegurar la sostenibilidad del sistema. En 2006, ya el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, había expresado su preocupación debido a que la reforma del sistema

de pensiones eliminó el principio de solidaridad del sistema y, además, porque la cobertura mínima prevista en éste no garantizaba un nivel de vida digno<sup>295</sup>.

Adicionalmente, en distintas ocasiones se han realizado modificaciones a la legislación sobre seguridad social, que han afectado a la población de forma sensible. A mediados de junio de 2004, por ejemplo, a iniciativa del Órgano Ejecutivo, se promovió la modificación de los requisitos para la jubilación, eliminando el que establecía que, después de 30 años de servicio, el trabajador o la trabajadora, podría retirarse de la vida laboral, independientemente de su edad<sup>296</sup>. Sobre la base de esta modificación, únicamente las mujeres con 55 años de edad y los hombres con 60, pueden aspirar a pensionarse, teniendo un mínimo de 25 años laborados.

A la vez, en los últimos años, la mercantilización de la seguridad social ha tenido sus principales expresiones en la insistencia de las administradoras de pensiones y de otros sectores afines por ampliar los nichos de inversión de los fondos de las y los cotizantes, de manera que se pueda hacerlo en el extranjero<sup>297</sup> y, por ende, bajo los términos especulativos que dicho mercado impone; y en la reorganización de las entidades que supervisan al sistema financiero, lo cual ha implicado modificaciones en el sistema de pensiones. A partir de agosto de 2011<sup>298</sup>, la Superintendencia de Pensiones, que era el organismo contralor del sistema previsional, pasó a formar parte de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), que tendrá una nueva ley orgánica y contará con una Superintendencia Adjunta de Pensiones encargada de la fiscalización del Sistema de Ahorros para Pensiones (SAP), el Sistema de Pensiones Público (SPP), el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) y el régimen de riesgos profesionales del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

Con respecto a la sostenibilidad del sistema, se han identificado serios problemas tanto en el Sistema de Pensiones Público (SPP) como en el IPSFA. En el caso del SPP, se optó por implementar el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales<sup>299</sup>, mecanismo que ayuda a postergar la deuda pero no la resuelve, y que estaría afectando la rentabilidad de las pensiones de las y los cotizantes al SAP, al obligar a las AFP a invertir en los Certificados de Inversión Previsionales (CIP)<sup>300</sup>. En el caso del IPSFA, se están estudiando diferentes propuestas de reformas en cuanto al aumento de la edad de jubilación, el incremento del porcentaje de cotización, entre otras, con la finalidad de que el sistema de pensiones de la Fuerza Armada no colapse<sup>301</sup>.

295 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto. Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (E/C.12/SLV/CO/2), 2006, Pág. 3.

296 Decreto N° 347, del 15 de junio de 2004, publicado en el Diario Oficial N° 128, Tomo 364, del 9 de julio de 2004.

297 Novellino, R. (2013). Diagnóstico del Sistema de Pensiones en El Salvador y formulación de propuestas de mejora y aseguramiento de su sostenibilidad. San Salvador: ASAFONDOS. (Disponible en <http://www.asafondos.org.sv/imagenes/files/DIAGNOSTICO%20PENSIONES.pdf>; ASAFONDOS (2008). Limitantes en el Régimen de Inversiones de los Fondos de Pensiones Salvadoreños y su Impacto. Documento recuperado de <http://www.asafondos.org.sv/vpublicaciones.asp?id=91>

298 De acuerdo a la Ley 592/2011 de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero (LSRSF).

299 Con el objetivo de aliviar la carga fiscal que representaba la deuda previsional, en septiembre de 2006, se aprobó la Ley 98/2006 del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (LFOP), mediante la cual el Estado, logró separar de su presupuesto anual el pago de las pensiones.

300 Valencia, M. (2013, 10 de abril). Trabajadores demandan a Estado por uso de ahorros de pensiones. El Diario de Hoy. Documento recuperado de [http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota\\_completa.asp?idCat=47861&idArt=7809837](http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7809837).

301 López, K. (2012, 16 de julio). Sistema de Pensiones FA cambiará en 2013. La Prensa Gráfica. Documento recuperado de <http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/273230-sistema-de-pensiones-fa-cambiara-en-2013>.



Por otro lado, es importante reiterar que para esta Procuraduría es causa de mucha preocupación el hecho de que los montos de las pensiones mínimas de vejez e invalidez en el SAP continúan siendo insuficientes para garantizar un nivel de vida adecuado<sup>302</sup>.

En este mismo orden de ideas, también ha sido motivo de preocupación conocer que, de acuerdo a los medios de comunicación, recientemente el señor Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, en una reunión con la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, planteó como una de las posibles medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, la derogatoria del Decreto Legislativo N° 100<sup>303</sup>, cuyo objetivo sería que más de 130 mil personas, entre actuales y futuros jubilados con el nuevo sistema previsional, reciban pensión de acuerdo con lo que hayan reunido en sus cuentas individuales y no de carácter vitalicia<sup>304</sup>.

Finalmente, es importante destacar como un logro muy positivo de la administración gubernamental la implementación del programa de pensiones no contributivas denominado de “Pensión Básica Universal”. Con todo, se debe enfatizar en la necesidad de continuar ampliando progresivamente la cobertura de este programa, para que llegue a ser verdaderamente universal y no focalizado, como se ha hecho hasta el momento. En este sentido, el Estado debe disponer de los mecanismos y recursos financieros, institucionales y legales para que esta iniciativa del Órgano Ejecutivo, se convierta en un derecho a una pensión universal, que cubra a toda la población adulta mayor, es decir, mayores de 60 años que se encuentran fuera de los sistemas de seguridad, y no solamente a personas mayores de 70 años.

## ii. El derecho a la salud integral de las personas adultas mayores

La salud es un derecho universal, es decir, que todas las personas incluidas las adultas y los adultos mayores, gozan del mismo. Este derecho fundamental se plasma en el Capítulo IV –Artículos del 10 al 13 de la Ley de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor.

La salud, desde una perspectiva gerontológica, debe de percibirse y tratarse de forma integral, en tanto se preocupa y fomenta el aspecto físico, mental, psicológico, social y espiritual. En esta línea, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como: *“un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no meramente como la ausencia de enfermedades o padecimientos”*<sup>305</sup>.

La salud integral es responsabilidad del Estado, de sus respectivas instituciones y de las propias personas. De esta manera, El Estado debe garantizar entornos y medios que favorezcan y promuevan la salud de la población, considerando las particularidades, necesidades, e intereses durante el proceso de envejecimiento, es decir, en las etapas de la niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez.

En esta línea, es importante señalar que a través de la “Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe<sup>306</sup>” (2012), el gobierno de El Salvador, junto a otros países, se ha comprometido a promover este derecho, elaborar y ejecutar políticas de salud integral con perspectiva gerontológica, implementar programas de capacitación, entre otros, buscando mejorar la salud integral de las personas adultas mayores.

302 Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), artículo 145.

303 Reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. Decreto Legislativo N° 100, del 23 de septiembre de 2006.

304 Molina, K. (2013, 1 de julio) “Hacienda analiza eliminar las pensiones de por vida en AFO”, [http://www.wlsalvador.com/mwedh/nota/nota\\_completa.asp?idCat=47673&idArt=8008017](http://www.wlsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=8008017).

305 OMS citado del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, 2002, pág. 25.

306 Adoptada en la Tercera Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento en América Latina y el Caribe. San José de Costa Rica, del 8 al 11 de mayo de 2012.

Por otra parte, es importante que las personas asuman el autocuidado y adquieran un compromiso, siendo responsables de su salud y procurando estilos de vida saludables, encaminados a la construcción individual y social de un envejecimiento activo<sup>307</sup>.

La promoción del envejecimiento activo contribuye a la salud integral y al bienestar de las personas adultas mayores, puesto que permite construir y mantener buenas prácticas durante el ciclo de la vida humana. Para ello, es importante la prevención y la promoción, lo que significa, que a lo largo de la vida las personas deben tener y realizar buenas prácticas; por ejemplo, comer nutritivamente, hacer ejercicio, dormir bien, participar en grupos, defender sus derechos; así como prevenir las enfermedades y asumir con la mejor actitud los cambios que se enfrentan a lo largo de los años.

Por lo tanto, el envejecimiento activo fomenta la salud integral, y es un deber del Estado garantizar este derecho y una responsabilidad de la sociedad civil exigirlo y trasladarlo a sus prácticas cotidianas. De ahí, que en materia de salud integral debe de existir una corresponsabilidad entre los diferentes sectores que integran la sociedad.

Además, es importante que el tema de los derechos humanos de las personas adultas mayores sea promovido y socializado con este grupo de la población, con el objetivo de contribuir en el empoderamiento de este colectivo que día a día incrementa.

### **iii. Funcionamiento del Consejo Nacional de Atención Integral a los Programas de los Adultos Mayores (CONAIPAM)**

Como ya lo han reconocido ésta Procuraduría, y las organizaciones de personas adultas mayores que conforman la Mesa de Trabajo sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores en El Salvador<sup>308</sup>, la reactivación del funcionamiento del CONAIPAM, en septiembre de 2009, por la Primera Dama de la República y Secretaria de Inclusión Social (SIS), Doctora Vanda Guiomar Pignato, generó la esperanza entre la población adulta mayor de construir bases sólidas para la instauración de una fuerte institucionalidad de protección de derechos y una adecuada política nacional que aborde las diferentes reivindicaciones de las personas adultas mayores.

Casi cuatro años han transcurrido desde su reactivación, tiempo suficiente para tener resultados concretos sobre el funcionamiento del actual sistema formal de protección de las y los adultos mayores, en la implementación de políticas y programas en beneficio de este sector tan vulnerable de la población adulta mayor. En este sentido, se pueden destacar como los logros principales de este esfuerzo:

1. Creación de la Dirección de la Persona Adulta Mayor al interior de la Secretaría de Inclusión Social.
2. Desarrollo de dos Diplomados en Gerontología Social y la convocatoria de un tercero, con lo que se busca fortalecer las competencias técnico-profesionales del recurso humano en El Salvador para la atención de personas adultas mayores.
3. Iniciativa del Estado Salvadoreño en la creación de una Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, discutida en el seno de la Organización de

<sup>307</sup> La OMS define envejecimiento activo como “el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen [...] incluyendo aquellas personas frágiles, discapacitadas [sic] o que necesitan asistencia”. OMS (2002). *Envejecimiento Activo: un marco político*, p. 79.

<sup>308</sup> “Posición de la Mesa Permanente sobre la Situación de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en El Salvador de la PDDH, sobre el funcionamiento del Consejo Nacional de Atención Integral a los Programas de los Adultos Mayores (CONAIPAM)”, 12 de septiembre de 2012.

Naciones Unidas (ONU) y la participación en reunión regional que trabaja en la Convención que se someterá a aprobación dentro de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

4. Implementación y ampliación del programa denominado “Pensión Básica Universal” (PBU).

Pese a estos importantes avances, los esfuerzos todavía se muestran muy débiles y, por ende, los resultados alcanzados siguen siendo exigüos. A continuación se detallan algunas de las principales deudas que tiene el Estado salvadoreño en esta materia:

1. No se ha actualizado la Política de Atención Integral a la Persona Adulta Mayor y su respectivo Plan de Acción.
2. Falta de fortalecimiento de programas dirigidos a la población adulta mayor. No se cuenta con un adecuado financiamiento público para la inversión de políticas y programas a favor de esta población.
3. Falta de difusión y un mayor impulso a las reformas a la Ley de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor.
4. Mayor fomento de la participación activa de las personas adultas mayores en los debates locales y nacionales de política social y de desarrollo, y otros temas de interés para las y los adultos mayores.
5. No se han creado los mecanismos jurídicos e institucionales idóneos para coordinar apropiadamente los esfuerzos que deben implementarse para garantizar a la población adulta mayor sus garantías y derechos humanos.

#### **iv. Consideraciones generales sobre la situación de las personas adultas mayores**

Las personas adultas mayores conforman un sector de la población, que por las propias condiciones sociales del país, se incluye dentro de las poblaciones denominadas vulnerables, por el hecho de que se encuentran expuestas, por edad, condición laboral y situación familiar a diferentes presiones y afecciones, como la falta o baja liquidez de ingresos económicos, problemas recurrentes de salud e incluso abandono familiar.

La situación que muestra el grado de marginalidad, exclusión y de vulnerabilidad en que se encuentra este grupo poblacional es mayormente angustiante, cuando se analiza lo relativo a la seguridad social, pues los adultos mayores que no tienen la oportunidad de cotizar al régimen de pensiones, ven agravada su situación a esa edad.

El Salvador cuenta con una Ley de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor, ha ratificado convenios en materia de derechos humanos y ha participado en las Asambleas Mundiales sobre el Envejecimiento, sin embargo, la voluntad del Estado, no se ha traducido en políticas concretas de protección y beneficios para la población adulta mayor.

Si bien se han realizado esfuerzos para desarrollar procesos que posibiliten el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas adultas mayores, buscando disminuir los riesgos de exclusión, implementando medidas importantes que favorecen a las personas adultas mayores principalmente de la población que vive en pobreza y del área rural, aún subsisten problemas de fondo en la creación de políticas públicas dirigidas para este sector de la población.

En ese sentido, la PDDH considera importante el continuar señalando los siguientes retos en materia de derechos de la población adulta mayor:

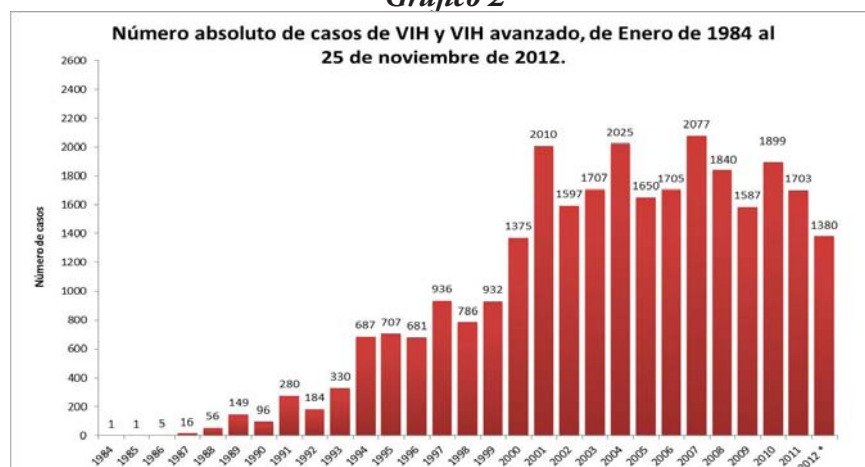
1. La promoción, protección y divulgación de los derechos humanos de las y los Adultos Mayores.
2. La revisión integral del funcionamiento del actual Sistema Previsional, tanto del Sistema Público de Pensiones (SPP) como el Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), bajo un enfoque de derecho, y no sólo desde la perspectiva de la estabilidad macroeconómica o de la sostenibilidad de las finanzas públicas.
3. La aprobación del Proyecto de Reformas a la Ley de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor.
4. Afrontar el fenómeno del envejecimiento y los problemas de la vejez mediante la creación y potenciación de políticas, programas y proyectos de prevención, atención y protección que mejoren la calidad de vida de las adultas y los adultos mayores.
5. Garantizar el acceso de la población adulta mayor a los servicios y atención de salud, vivienda, transporte, educación y seguridad social, que contribuyan a mejorar su estado físico, mental, emocional y económico.
6. La creación de una institución autónoma, encargada directamente de la persona adulta mayor, con atribuciones y soportes financieros debidamente determinados, que permitiría una verdadera protección de las y los adultos mayores en toda la amplia gama de sus derechos, logrando también con ello, una unificación y sistematización de los esfuerzos institucionales del Estado, la familia y la sociedad en su conjunto.

A manera de conclusión, la situación de la vigencia y respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales de la población adulta mayor, presenta marcadas privaciones a la dignidad humana, que más que a su falta de reconocimiento jurídico, se deben a la ausencia o deficiencia de las políticas estatales y no estatales de atención, por lo que es recomendable de manera inmediata, la transformación de la institucionalidad encargada de implementar los esfuerzos de protección, a fin de encaminarse a mejores estándares en las condiciones de vida de las personas adultas mayores que habitan en el territorio nacional.

## h) DERECHOS DE LAS PERSONAS CON VIH/sida

Hasta el 25 de Noviembre de 2012, el Ministerio de Salud a través del Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA, reporta un acumulado de casos desde 1984 de 29,083, reduciéndose el promedio de casos diarios detectados de cinco en 2011, a cuatro en 2012 (Gráfico 2). Aunque esta reducción es muy importante, todavía no se puede afirmar que la epidemia se está conteniendo o que hay una marcada tendencia a la baja, ya que esto solo se podrá establecer después de varios años de presentada la misma tendencia:

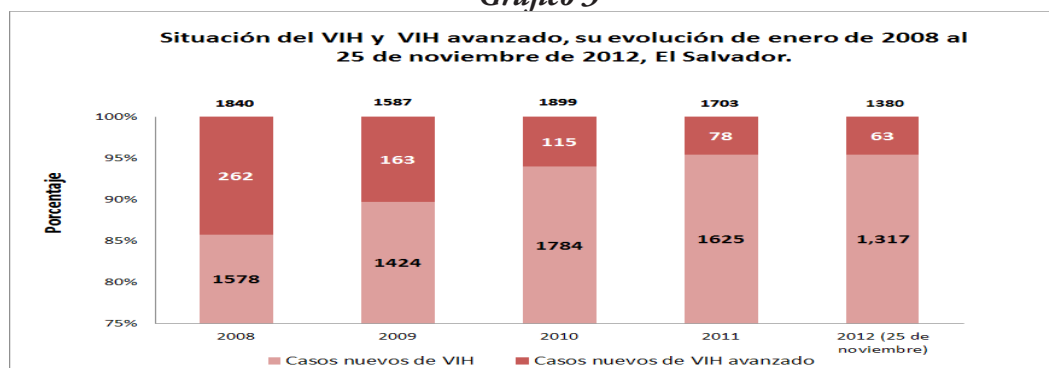
**Gráfico 2**



Fuente: Ministerio de Salud. Información VIH acumulada 1984-2011. SUMEVE, Noviembre 2012.

Con todo, es conveniente destacar que en los últimos años ha ido en disminución la detección tardía de los nuevos casos (Gráfico 3), lo que influye en un mejor pronóstico en la vida de las personas. Este importante logro es el resultado de una serie de factores muy positivos en los esfuerzos desarrollados por el Estado en la respuesta ante el VIH, como por ejemplo el aumento del número de pruebas de detección realizadas (Gráfico 4), de forma voluntaria y con la pre y post consejería.

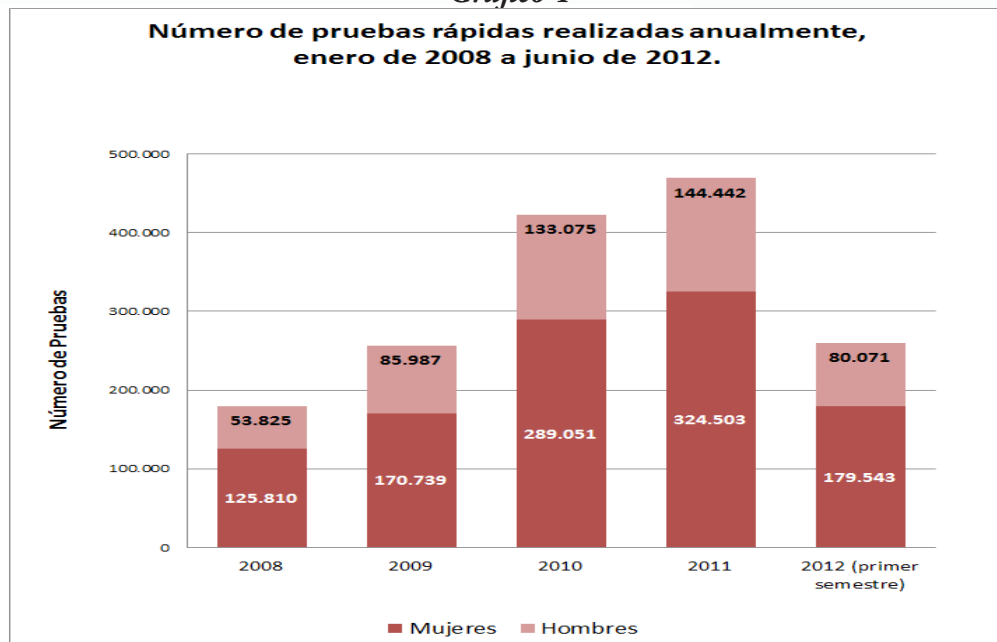
**Gráfico 3**



Fuente: Ministerio de Salud. Información VIH acumulada 1984-2011. SUMEVE, Noviembre 2012.



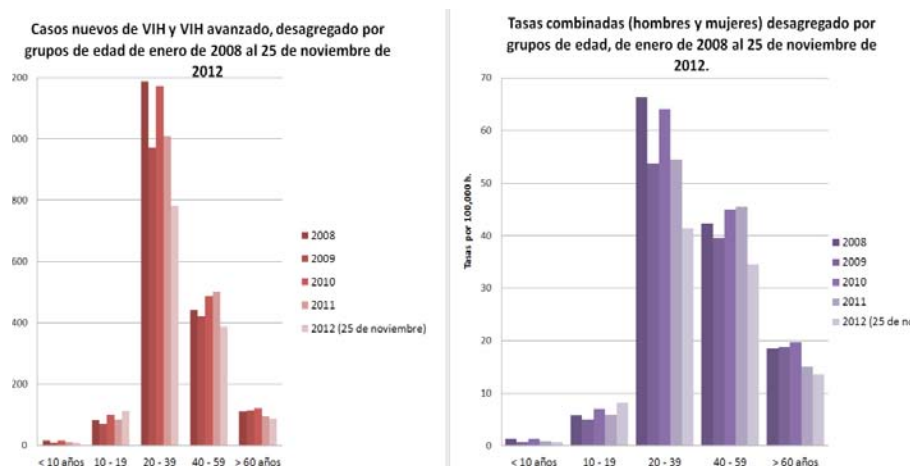
**Gráfico 4**



Fuente: Ministerio de Salud. Información VIH acumulada 1984-2011. SUMEVE, Noviembre 2012.

Con relación a los casos de VIH en los diferentes grupos de edad (Gráfico 5), en el mismo período, puede evidenciarse que el grupo más afectado es el de 20 a 39 años, seguido del grupo de 40 a 59 años, mayores de 60 años, y adolescentes de 10 a 19 años. Algo sobre lo que se debe llamar la atención son los mayores riesgos que existen actualmente en cuanto al contagio en la población adulta mayor, dada la popularidad de los medicamentos para la disfunción eréctil. Por cuestiones culturales, es difícil el abordaje de la prevención y atención en esta población, y deben buscarse estrategias innovadoras para lograr una efectiva intervención; como por ejemplo, que en los instructivos que acompañan este tipo de medicamentos, se incluyan mensajes de prevención de la infección, así como preservativos masculinos.

**Gráfico 5**

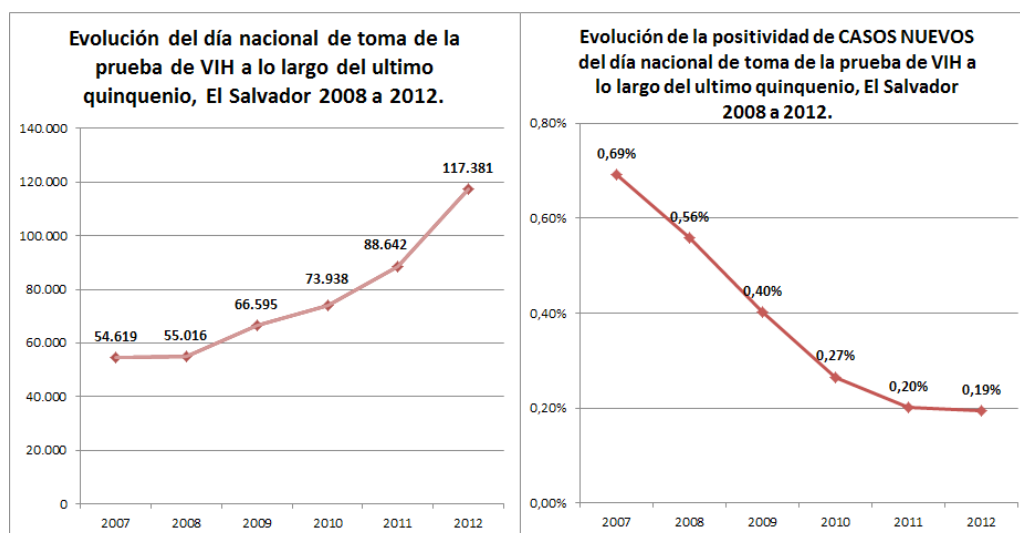


Fuente: Ministerio de Salud. Información VIH acumulada 1984-2011. SUMEVE, Noviembre 2012.

Otro aspecto que cabe destacarse es que con el aumento de pruebas realizadas en el llamado “Día Nacional de la prueba de VIH”, el número de casos positivos ha disminuido en la población en general, por lo que al parecer hay una posible tendencia a la baja de nuevas infecciones. Pero como se mencionó anteriormente, esto solo quedará demostrado después de que en varios años se muestre la misma tendencia.

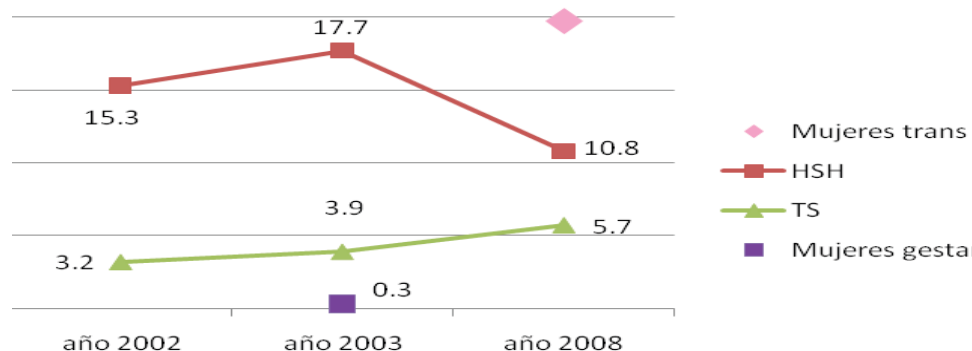
Sin embargo, en contraste con lo que sucede con la población en general, en grupos específicos que tradicionalmente han sido sujetos de constantes violaciones a sus derechos fundamentales, la prevalencia es muy alta, considerándose que están en una situación de epidemia de suma gravedad. Para ilustrar esta situación, los gráficos 6 y 7 detallan las tendencias entre el año 2008 al 2012:

**Gráfico 6**



Fuente: Ministerio de Salud. Información VIH acumulada 1984-2011. SUMEVE, Noviembre 2012.

**Gráfico 7**  
*Prevalencia de VIH en distintas poblaciones por año en la ciudad de San Salvador, El Salvador, 2001 – 2008*



HSH: Hombres que tienen sexo con hombres

TS: Trabajadoras sexuales

Fuente: Base de Datos y Referencias para una Estrategia basada en evidencia. El Salvador, 2010

Por otra parte, a través de las denuncias recibidas, entrevistas a personas con VIH, actores clave y visitas a grupos de personas con VIH, esta Procuraduría ha recopilado evidencia de que persisten las violaciones a los derechos humanos de esta población. El estigma y la discriminación sigue siendo una de las causas de estas violaciones, tanto en la red de salud, como situaciones relativas al trabajo, educación, seguros, comunidades, entre otros. Es decir que persisten los distintos problemas que han sido señalados en años anteriores por esta Procuraduría:

- Los protocolos de atención a personas con VIH del Ministerio de Salud y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, aún no se han actualizado, ni armonizado entre sí, por lo que es urgente realizar la revisión y armonización de estas herramientas técnicas, para que las personas que dejan de ser cotizantes del ISSS, continúen sin interrupción su tratamiento en los hospitales del MINSAL o viceversa.
- Las Personas con VIH experimentan dificultades en el acceso a los servicios de atención y Tratamiento antirretroviral en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, debido a que está concentrado en solo dos hospitales a nivel Nacional. Se han comprobado los efectos favorables de descentralizar la atención en VIH, por lo que las autoridades del ISSS deben estudiar esta posibilidad.
- Según los reportes de salud, aún existe un número significativo de embarazadas que no asisten al control prenatal, ya sea que por factores culturales o por la dificultad en llegar hacia ellos.
- Persisten los obstáculos para la atención de las personas privadas de libertad con VIH, ya que es frecuente que pierdan sus citas a controles médicos, y que las autoridades lo justifiquen aduciendo falta de personal de custodios o de transporte. También se han reportado dificultades en el acceso al tratamiento antirretroviral, o en el tratamiento de infecciones oportunistas. Asimismo, son pocos los centros penitenciarios que proporcionan preservativos durante la visita íntima, y no hay acceso a los mismos dentro del recinto penitenciario.
- Se ha presentado un desabastecimiento sistemático de reactivos para carga Viral y CD4 en el presente periodo, tanto en la red de hospitales del Ministerio de Salud como en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, aunque en los informes de avance de país no se reconoce esta situación.
- No hay evidencia de que en el presente periodo se haya hecho una ampliación de la Profilaxis post exposición. Aún no se tiene conocimiento de su uso en establecimientos fuera del área de competencia del Ministerio de Salud (donde solo existe para accidentes laborales) como por ejemplo la Policía Nacional Civil o el Instituto de Medicina Legal.
- En el hospital de referencia para mujeres embarazadas aún no se realiza una investigación exhaustiva de los casos de mujeres menores de 16 años que posiblemente han sido víctimas de abuso sexual.
- Se ha mejorado el soporte a la adhesión al tratamiento, pero se tiende a “culpabilizar” a la persona con VIH por alguna recaída en su salud, sin tomar en consideración las condiciones del entorno de la persona que están dificultando su adhesión, como la falta de empleo, un lugar digno donde habitar, uso y abuso de sustancias, entre otras. Además, no hay un soporte adecuado en salud mental a personas con VIH, especialmente para prevenir nuevas infecciones.
- Aún no hay garantías que permitan un acceso adecuado a un sistema de protección social a las personas con VIH, sus familiares y allegados para mitigar el impacto de la infección a nivel individual, familiar y comunitario.

- Mediante el acuerdo 1336 del Ministerio de Salud, relativo a Norma Técnica para Establecimientos que Manipulan Cadáveres, se ha realizado la actualización de las normas de bioseguridad en cuanto al manejo de cadáveres, pero esto no garantiza su armonización con el Código de Salud para garantizar la no discriminación de las personas con VIH que fallecen por diversas causas, ocasionando que persista en la discriminación de las personas con VIH aun después de su fallecimiento.
- Es necesaria la revisión de las políticas de crédito de las instituciones de apoyo a la adquisición de vivienda de interés social, ya que los seguros obligatorios continúan siendo un obstáculo para las personas con VIH. Esta situación persiste, limitando el acceso al crédito de vivienda en el Fondo Social para la Vivienda.
- Esta Procuraduría ha tenido conocimiento de actos que puede ser discriminatorios en el ámbito de la empresa privada. Por ejemplo, se ha tenido conocimiento de que algunas empresas están solicitando a sus empleados/das o candidatos/tas la prueba de VIH por otros medios no explícitos, como la prueba del polígrafo. Esta situación se ha hecho de conocimiento de la unidad especializada del Ministerio de trabajo, donde se tramitan denuncias por discriminación.
- Continúa vigente la Ley de prevención y control de la infección provocada por el Virus de inmunodeficiencia humana y su reglamento, instrumentos que contienen algunas deficiencias que pueden fomentar la discriminación hacia las personas con VIH.
- Actualmente, no hay una garantía para las personas con VIH en cuanto al resarcimiento de daños cuando han sido víctimas de actos discriminatorios. La ley de VIH, estipula sanciones de carácter administrativo, pero no se refiere a la compensación por el daño recibido de parte de las instituciones o funcionarios responsables.
- En materia de acceso a medicamentos, persiste en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, la solicitud de presentación de testigos para aprobar la entrega de tratamiento antirretroviral a quien ya los necesita de acuerdo al criterio médico. Esto representa un obstáculo para el derecho a recibir una atención integral y la confidencialidad.
- Uno de los principales obstáculos para una respuesta efectiva al VIH, lo constituyen las múltiples formas de discriminación que transgreden los derechos de miles de personas y obstruyen las acciones para la prevención de nuevas infecciones, la atención de las personas con VIH y la reducción del impacto de la epidemia.
- Es necesario que las instituciones gubernamentales emitan o actualicen sus políticas y programas para erradicar la discriminación en los lugares de trabajo, con el propósito de asegurar la protección y promoción de los derechos humanos de sus trabajadores/as en relación con el VIH (incluidos los derechos laborales) y de las poblaciones que atienden.
- Hace falta desarrollar procesos educativos sobre los derechos humanos relacionados con el VIH, desde una perspectiva más práctica y centrada en la movilización de actitudes contra el estigma y la discriminación. La educación debe enseñar a las personas cuáles son sus derechos y cómo exigirlos, y el Estado debe asegurar los mecanismos legales para satisfacer esas demandas.
- Es urgente aumentar los esfuerzos para educar a la población en general, a través estrategias innovadoras que permitan difundir de mejor manera la información sobre las formas de transmisión de la infección por el VIH. Las acciones deben dirigirse especialmente a la población de mujeres y

hombres jóvenes entre 15 y 24 años, ya que solamente el 27% de este grupo identifica correctamente las formas de prevenir la transmisión sexual del VIH.

- Aunque aparentemente hay una reducción de las nuevas infecciones en la población en general, al revisar el grupo de 15 a 24 años, nos encontramos que ha aumentado el número de nuevas infecciones, por lo que es necesario direccionar esfuerzos a este segmento poblacional, ya que en esta edad es la que se encuentra en proceso la construcción del proyecto de vida, es económicamente productiva, sexualmente activa y con poca percepción de riesgo.
- Es alarmante que la cobertura para la terapia antirretroviral sea únicamente del 64.8%. Por tanto, es necesario revisar las causas de esta significativa brecha en la cobertura, ya que este es un servicio íntimamente ligado al derecho a la vida. Aunque se debe reconocer que el cálculo está basado en proyecciones, es urgente hacer esfuerzos para contar con un dato lo más cercano a la realidad, de tal manera que sirva como herramienta para mejorar la cobertura.

## **i) DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

### **i. Contexto general de los derechos de las personas con discapacidad**

El Informe Mundial sobre la Discapacidad (2011) de la Organización Mundial de la Salud, refleja que más de mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad. En promedio, según este reporte, las personas con discapacidad y las familias con un miembro con discapacidad tienen mayores tasas de privaciones -como inseguridad alimentaria, condiciones deficientes de vivienda, falta de acceso a agua potable y salubridad, acceso deficiente a atención de salud- y poseen menos bienes que las personas y familias sin una discapacidad. En tal sentido, considera dicho informe, que la discapacidad es una prioridad en materia de derechos humanos y de desarrollo.

En El Salvador existen diferentes situaciones que pueden potenciar en la población el adquirir alguna discapacidad, si se toma como base los altos índices de violencia social en nuestra sociedad, los accidentes de tránsito, la situación de migración de compatriotas a otros países, la falta de tratamiento de algunas enfermedades y sobre todo la pobreza de gran parte de la población principalmente en el área rural; sin embargo y pese a lo apremiante que resulta contar con datos estadísticos que reflejen las condiciones en que viven las personas con discapacidad en El Salvador, aún no se cuenta con un registro actualizado sobre la proporción de la población con discapacidad. La más reciente información oficial con la que se cuenta en nuestro país es la presentada en el VI Censo de Población y V de Vivienda, realizada en el mes de mayo de 2007 a nivel nacional por la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC). Para ese entonces, se reflejaba que en El Salvador vivían 235,302 personas con discapacidad, de una población total que a la fecha del Censo totalizaba 5,744,133 personas, resultando un porcentaje del 4.1% de la población. Dicha cifra resulta discordante con el Informe Mundial sobre la Discapacidad que estima que en países en condiciones de subdesarrollo y de post guerra como el caso de El Salvador, existe un mínimo del 10% de población con discapacidad que puede extenderse hasta un 13%; no obstante, esa información en nuestro país no está actualizada.

### **ii. Avances en atención a los derechos humanos de las personas con discapacidad**

En el último año se han venido implementando algunos avances importantes en cuanto al cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, esfuerzos que no pueden dejar de reconocerse respecto del accionar de las instituciones públicas. Entre estos se destacan los siguientes:



- El Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad – CONAIPD – está compuesto por catorce concejales miembros, de los cuales siete pertenecen a instituciones gubernamentales y siete son representantes de organizaciones de y para personas con discapacidad y a su vez son representantes de las mismas tanto en el Pleno como en el Comité Técnico. Ello ha permitido coordinar esfuerzos de las diferentes instancias gubernamentales junto a las organizaciones de y para personas con discapacidad, a fin de trabajar de manera conjunta para promover, proteger y asegurar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad evitando que sean otras personas quienes tomen decisiones que les atañen directamente a las personas con discapacidad.

De igual manera, es destacable que en el último año el CONAIPD registró un aumento en la asignación financiera; sin embargo, ello no se ha evidenciado en un fortalecimiento institucional cualitativo que permita atender oportuna, adecuada e integralmente las demandas de las personas con discapacidad respecto de sus derechos humanos.

- La apertura y compromiso con la temática por parte del Ministerio de Salud, impulsado a través de la reforma del sector salud que ha incluido a fisioterapeutas dentro del personal de los Equipos Comunitarios de Salud Familiar y Especializados (ECOS) de esa entidad de Salud. A través de tal atención se permite que las personas que hacen uso de los ECOS puedan recibir servicios de rehabilitación más cerca de sus lugares de residencia.
- Los esfuerzos en el tema de accesibilidad, con la instalación de rampas y baldosas táctiles en algunos lugares públicos por parte del Ministerio de Obras Públicas, así como la reciente instalación y funcionamiento, de un importante número de semáforos audibles que contribuirán a la seguridad en el tránsito de personas con discapacidades visuales.
- De igual manera, resulta valioso que el Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad haya firmado recientemente convenios con el Registro Nacional de Personas Naturales – RNPN – que enviará trimestralmente datos de registro sobre el número de personas con discapacidad que han solicitado el Documento Único de Identidad; así como también con el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local – FISDL – para el trabajo en el componente de sensibilización a través de la capacitación en el tema de discapacidad, así como en el de la normativa técnica de accesibilidad.
- A través de las reformas a la Ley de Protección al Consumidor, vigentes desde febrero de este año, se reconocen los derechos de las y los consumidores y usuarios con discapacidad, por lo que a través de la disposición adicionada se promociona la sensibilización, estudio e información de consumo de las personas con discapacidad, particularmente el acceso a los bienes y servicios que brinda la Administración Pública.

### **iii. Principales dificultades para el pleno goce de los derechos de las personas con discapacidad**

- El Estado salvadoreño, al ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, impuso una reserva genérica a este importante instrumento. Dicha reserva afecta una serie de derechos humanos y libertades fundamentales que la Convención busca proteger y garantizar a las personas con discapacidad. Al respecto, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y las distintas organizaciones de y para personas con discapacidad han solicitado en distintas ocasiones al Estado salvadoreño que la reserva sea retirada urgentemente, por considerarla atentatoria de derechos y en contra de los principios rectores de la misma Convención.

Recientemente, las organizaciones que integran la Mesa Permanente de Personas con Discapacidad de la PDDH han requerido formalmente a la actual administración del Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, iniciar las gestiones internas y del derecho internacional para retirar la reserva. Para tal finalidad se sostuvo una reunión de trabajo en la que el señor Canciller, Hugo Martínez, tuvo a bien retomar la solicitud y asumió el compromiso de conjuntar esfuerzos para tal finalidad a partir del trabajo conjunto entre las entidades del Estado vinculadas y esta Procuraduría.

- Por otra parte, uno de los principales obstáculos en cuanto a la garantía y cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad es la falta de presupuestos específicos de las distintas instituciones del Estado –gubernamentales y autónomas– destinados a la atención directa de las mismas, a partir de las atribuciones propias de cada institución y del deber de garantía que les corresponde.
- El CONAIPD creado a través de Decreto Ejecutivo, aún cuando ha sido modificado a favor de la inclusión de las organizaciones representantes de y para personas con discapacidad, continúa siendo un ente dependiente financieramente de la Presidencia de la República, lo que implica encontrarse limitado de cierta manera por la falta de autonomía presupuestaria.

Es así como es urgente reformar la naturaleza de esta entidad, mediante Decreto Legislativo, como ente rector autónomo tanto en lo político como en lo presupuestario.

- Para el avance sustancial de los derechos de las personas con discapacidad es imprescindible considerar que son las barreras actitudinales las que violentan gravemente a las personas con discapacidad. Y es que por parte de la sociedad en general, la discriminación se sigue percibiendo en el diario vivir hacia esta población y pese a que se han realizado algunas iniciativas al respecto, existe un tipo de discriminación fomentada incluso desde el mismo ordenamiento jurídico salvadoreño, ya que en el mismo existen disposiciones de índole discriminatorio, al referirse a personas con discapacidad con terminología denigrante y sobre todo la restricción de derechos que esta normativa impulsa hacia las personas con discapacidad.

De tal manera, puede afirmarse que el cumplimiento efectivo de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la adecuación de la normativa interna a la luz de los derechos humanos contenidos en este instrumento, en términos generales, continúa siendo materia pendiente para el Estado.

- Otra práctica de discriminación recurrente la encontramos en el ámbito educativo, debido a que persiste la vulneración del derecho a la educación por parte algunos centros escolares públicos y privados, en el sentido de negar la matrícula escolar a estudiantes, por el simple hecho de tener alguna discapacidad, o en consecuencia se obliga a padres, madres o familiares a permanecer dentro de las aulas para el cuidado de sus hijas o hijos. Aunado a ello, se puede afirmar que la mayoría de los centros de estudio no cuentan con instalaciones que garanticen la accesibilidad para el ingreso y desplazamiento al interior de los mismos para todas las personas en igualdad de condiciones. Esta situación crítica persiste aún cuando existe una Política de Educación Inclusiva, implementada desde finales del año 2010 por el Ministerio de Educación.

Aún persiste la falta de un censo que refleje cuántos niños y jóvenes con discapacidad viven en el país y cuántos de ellos están inscritos en el sistema educativo.

- La falta de accesibilidad arquitectónica y comunicacional sigue siendo otra de las principales barreras para el acceso a la educación, a la salud y otros derechos. El sistema de transporte

público no cuenta con unidades accesibles para personas con discapacidad, lo cual se convierte en un factor altamente limitante para el pleno disfrute de los derechos de las mismas.

- En el aspecto de accesibilidad comunicacional, pese a lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en los establecimientos de salud, no se ha contemplado la figura del intérprete para personas sordas que hacen uso del Sistema Nacional de Salud, lo que restringe la intimidad y confianza paciente-médico que debe existir, e incluso puede derivar en maltrato, discriminación e incluso en casos extremos en mala praxis médica ante la falta de comunicación entre el personal de salud y la persona con discapacidad auditiva.
- Finalmente, es importante recalcar que la inexistencia de un censo que refleje datos realistas y actualizados acerca de las condiciones económicas y sociales de las personas con discapacidad puede llegar a limitar la creación y eficacia de políticas, programas o proyectos en beneficio de estas (aún y cuando esto en lo absoluto puede utilizarse como una justificación para que en la actualidad no sean implementadas acciones a favor del colectivo con discapacidad).

#### **iv. De la progresividad de los derechos de las personas con discapacidad: desafíos urgentes**

- Como antes se expresó, uno de los principales retos que el Estado salvadoreño tiene está en impulsar la realización del cambio actitudinal sobre la percepción de la discapacidad, no sólo por la ciudadanía en general, sino particularmente por los funcionarios y servidores públicos, por lo que se debe actuar para erradicar todas las formas de discriminación hacia las personas con discapacidad.
- En este sentido, se debe propiciar urgentemente pasar de los paradigmas asistencialistas o médicos al enfoque de derechos humanos, y para esto se vuelve imprescindible la creación y ejecución de programas integrales de sensibilización sobre la temática de discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, para la toma de conciencia. Sin embargo, tales procesos no pueden ser exitosos sin contar con el apoyo de las personas con discapacidad y sus respectivas organizaciones.
- El Estado salvadoreño está en la obligación de garantizar y respetar los derechos de las personas con discapacidad, por lo que se considera de gran importancia concretar el levantamiento de la reserva realizada a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte del Estado de El Salvador, así como la adecuación a la misma del marco constitucional y legal del país, para que sea conforme con el espíritu humanista de la Convención.
- Deberá ser una prioridad para el Estado que los servicios de salud de la red pública y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) –clínicas, hospitales bancos de sangre-, atiendan debidamente y sin discriminación a las personas con discapacidad. Para ello es urgente que se realicen las adecuaciones y ajustes razonables en función de sus necesidades individuales, para posibilitar la calidad y accesibilidad en la atención; así como también no puede esperarse más a que los centros de salud en general sean dotados con guías, lectores e intérpretes de lengua de señas, conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para una adecuada efectividad en la comunicación entre el médico y la persona con discapacidad, a fin de que ésta cuente con la información oportuna y amplia sobre su atención en salud.
- La designación de presupuestos específicos por mandato de ley en los diferentes ministerios, gobiernos municipales e instituciones autónomas, que permitan realizar acciones para la plena inclusión de las personas con discapacidad.

- La realización del levantamiento de un censo o registro de personas con discapacidad a nivel nacional, que no se limite a lo cuantitativo, sino que permita la caracterización de las personas con discapacidad, sus condiciones de vida y sus necesidades más urgentes.
- Adoptar las medidas necesarias para la efectiva accesibilidad en instituciones públicas y privadas. Precisamente, en la coyuntura actual en la que está en boga la modernización del transporte público a través del Sistema de Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS), es preciso que las autoridades del MOPTVDU retomen de inmediato la consulta con las personas con discapacidad, para que esa “modernización” garantice el acceso al transporte a través del diseño universal y accesible, cesándose la marginación histórica de este servicio público en perjuicio del colectivo con discapacidad, particularmente a las personas con discapacidades sensoriales –sordas y ciegas- y a las personas usuarias de sillas de ruedas y otras ayudas técnicas.
- De igual forma es preciso erradicar las barreras arquitectónicas, comunicacionales, pero principalmente las actitudinales hacia las personas con discapacidad, implementando la normativa del diseño universal. Así como contemplar en las políticas habitacionales la realización de los ajustes razonables en los espacios y acondicionamientos a favor las personas con discapacidad, sin detrimento de la asequibilidad, a fin de que se establezcan normas que aseguren viviendas con condiciones de accesibilidad para esta población.
- Es preciso ampliar la cobertura, adecuar la currícula y la infraestructura a las necesidades de las y los estudiantes con discapacidad, para incluirles en el sistema educativo formal. Así también fomentar y divulgar la enseñanza de la lengua de señas salvadoreña, lo cual debería derivar de la ejecución plena de la Política de Educación Inclusiva y así asegurar que los centros de estudio cesen la práctica de discriminar en el acceso a la educación por motivos de discapacidad.
- El contar con acceso a la información a través del sistema braille es fundamental para las personas ciegas, así como la asistencia de intérpretes para las personas sordas, particularmente para la atención en salud eficiente y a los costos, vencimiento y otros datos relevantes en cuanto a tratamientos médicos –medicinas, terapias, entre otros-. De la misma forma debería ser prioritario establecer mecanismos que brinden la mayor amplitud del acceso a la información sobre salud sexual y reproductiva para las personas con discapacidad, entre otros.
- La garantía y protección del ejercicio de los derechos políticos de las personas con discapacidad, en vísperas de un nuevo evento electoral, particularmente el derecho al voto, no puede dilatarse más. Las instancias competentes deben tomar las medidas administrativas, además de las legislativas, inmediatas y eficaces para que todos los centros de votación tengan las condiciones adecuadas de accesibilidad para la plena participación de personas con discapacidad en los procesos electorales.
- La existencia de un CONAIPD, no suple la falta de designación formal de la institución o conjunto de instituciones independientes que, junto a las organizaciones de y para personas con discapacidad, deberán promover, vigilar y asegurar la efectiva aplicación y cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En tal sentido es que debe ser establecido dicho mecanismo de supervisión, conforme a lo que la Convención referida determina al respecto.



*El señor Procurador, licenciado Oscar Humberto Luna en una actividad en la que explica las funciones constitucionales y legales de la PDDH.*



## II. PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL



## II. PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos vela para que el funcionamiento de la administración pública se realice en el debido cumplimiento de los procedimientos legales y especialmente atendiendo el respeto y la garantía de los derechos humanos. Su existencia constituye un recurso fundamental para recordar al Estado que sus actuaciones tienen límites frente a la dignidad humana, y que al sobrepasarlos estaría afectando el Estado Democrático de Derecho.

El fundamento constitucional y legal de la Procuraduría se encuentra en la Constitución de la República, ubicada dentro del Ministerio Público<sup>1</sup> y, en correspondencia a ello, creada mediante el Decreto Legislativo ciento ochenta y tres del día veinte de febrero del año de mil novecientos noventa y dos<sup>2</sup>.

La figura institucional del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos tiene la misión fundamental de velar por el respeto y garantía a los derechos humanos de la población del país; esta función constitucional convierte a esta institución como ente controlador de las actuaciones de las autoridades del Estado en relación a la persona y la sociedad. Al garantizar la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales contribuye a la construcción de bases sólidas para una cultura del reconocimiento y respeto de la dignidad humana y de un proceso efectivo del desarrollo progresivo de las personas y del país.

### 2.1. Mandato constitucional y legal

El presente cuadro ilustra las funciones constitucionales y legales del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador:

▪ Constitución de la República:

<b>Cuadro N° 1</b> <b>Funciones constitucionales</b> <b>Artículo 194, Romano I de la Constitución de la República</b>	
1º.	Velar por el respeto y la garantía a los derechos humanos;
2º.	Investigar, de oficio o por denuncia que hubiere recibido, casos de violaciones a los derechos humanos;
3º.	Asistir a las presuntas víctimas de violaciones a los derechos humanos;
4º.	Promover recursos judiciales o administrativos para la protección de los derechos humanos;
5º.	Vigilar la situación de las personas privadas de su libertad. Será notificado de todo arresto y cuidará que sean respetados los límites legales de la detención administrativa;
6º.	Practicar inspecciones, donde lo estime necesario, en orden a asegurar el respeto a los derechos humanos;
7º.	Supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas;
8º.	Promover reformas ante los Órganos del estado para el progreso de los derechos humanos;

<sup>1</sup> Artículos 191, 192 y 194 romano I Constitución.

<sup>2</sup> Publicado en el Diario Oficial 45, tomo 314 del 6 de marzo de 1992

9º.	Emitir reformas ante los Órganos del estado para el progreso de los derechos humanos;
10º.	Promover y proponer las medidas que estime necesarias en orden a prevenir violaciones a los derechos humanos;
11º.	Formular conclusiones y recomendaciones públicas o privadamente;
12º.	Elaborar y publicar informes;
13º.	Desarrollar un programa permanente de actividades de promoción sobre el conocimiento y respeto de los derechos humanos;
14º.	Las demás que le atribuyen la Constitución o la ley.

▪ Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos:

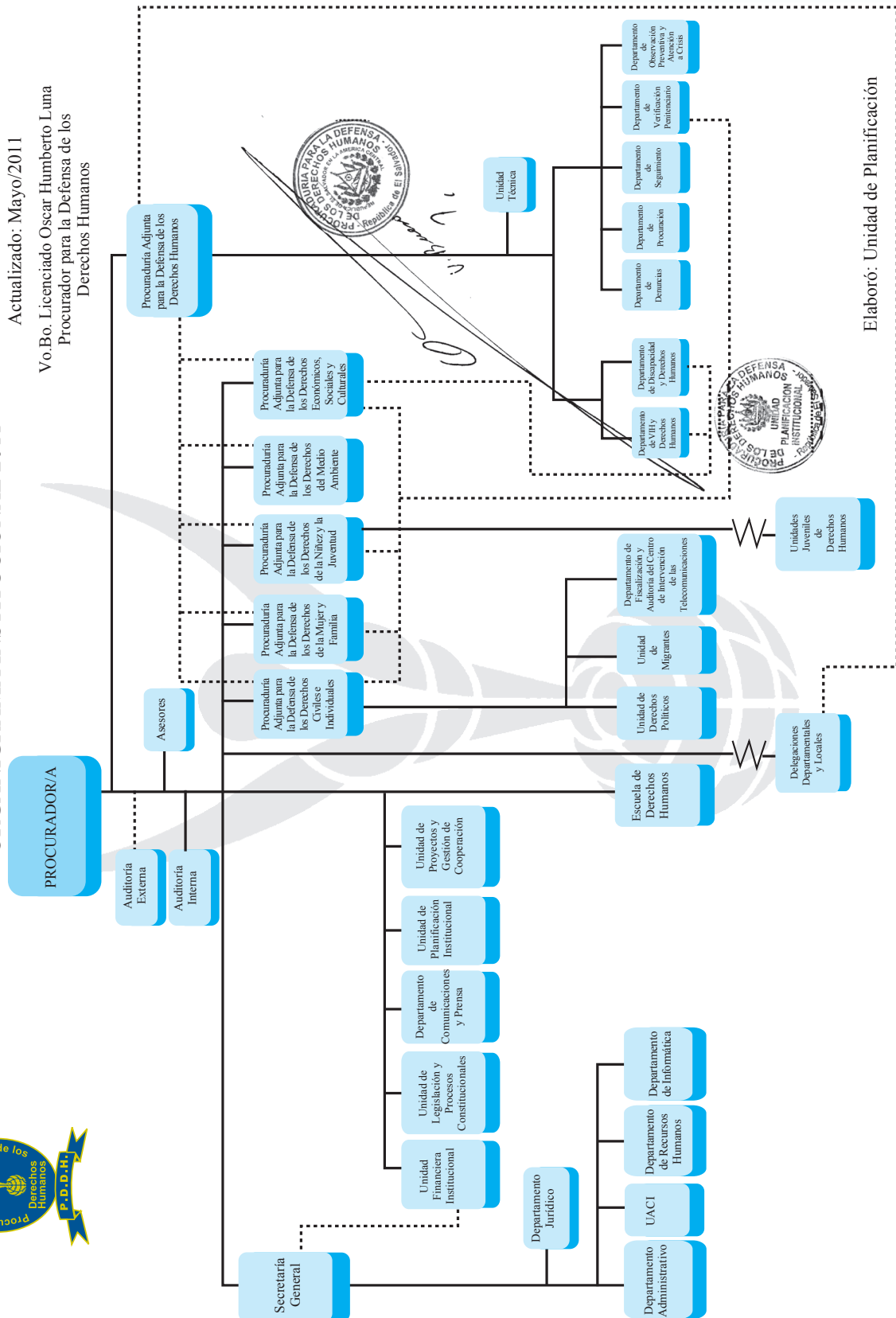
<b>Cuadro N° 2</b> <b>Atribuciones legales</b> <b>Artículos 11 y 12 de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos</b>	
1º	Velar por el estricto cumplimiento de los procedimientos y plazos legales en los distintos recursos que hubiere promovido o en las acciones judiciales en que se interesare;
2º	Velar por el respeto a las garantías del debido proceso y evitar la incomunicación de los detenidos;
3º	Llevar un registro centralizado de personas privadas de su libertad y de centros autorizados de detención;
4º	Presentar propuestas de anteproyectos de leyes para el avance de los derechos humanos en el país;
5º	Promover la firma, ratificación o adhesión a tratados internacionales sobre derechos humanos;
6º	Emitir resoluciones de censura pública contra los responsables materiales o intelectuales de violaciones a los derechos humanos;
7º	Procurar la conciliación entre las personas cuyos derechos han sido vulnerados y las autoridades o funcionarios señalados como presuntos responsables, cuando la naturaleza del caso lo permita;
8º	Crear, fomentar y desarrollar nexos de comunicación y cooperación con organismos de promoción y defensa de los derechos humanos, gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales y con los diversos sectores de la vida nacional;
9º	Emitir el reglamento para la aplicación de la presente ley y los reglamentos internos que fueren necesarios;
10º	Nombrar, remover, conceder licencias y aceptar renunciaciones a los funcionarios y empleados de la institución;
11º	Elaborar el proyecto de presupuesto anual y remitirlo a la instancia correspondiente; y
12º	Las demás que le atribuyan la Constitución o la Ley.

## 2.2. Estructura organizativa

A continuación se presenta el organigrama vigente hasta esta fecha de publicación del Informe de Labores de junio 2012 a mayo de 2013.

Actualizado: Mayo/2011

Vo.Bo. Licenciado Oscar Humberto Luna  
Procurador para la Defensa de los  
Derechos Humanos



## 2.3. Personal de la institución

El personal constituye la fortaleza de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para alcanzar su misión, visión y metas propuestas. En ese sentido en el período de junio de 2012 a mayo de 2013, se ha preocupado por especializar aún más a su personal técnico, administrativo, operativo y ejecutivo con el objetivo de cumplir debidamente los procedimientos de funcionamiento y protección, para dar fiel y adecuado cumplimiento al mandato de velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos. A continuación, el total de personal contratado a la fecha en esta institución.

El total del personal contratado es de 443 personas, de las cuales 208 son mujeres y 235 hombres. Por régimen laboral, 32 personas están por contrato y 411 personas por el régimen de Ley de Salario.

Cuadro N° 3 Distribución de plazas por régimen salarial y sexo			
Régimen laboral	Sexo		Total
	Femenino	Masculino	
Ley de salario	191	220	411
Contrato	17	15	32
<b>Totales</b>	<b>208</b>	<b>235</b>	<b>443</b>

*Fuente: Departamento de Recursos Humanos, PDDH*

De cuatrocientos cuarenta y tres personas empleadas, ocho se contrataron en este período, de las cuales cinco son mujeres y tres hombres, como puede apreciarse en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 4 Nuevas contrataciones por sexo 1 de junio de 2012 al 31 de mayo de 2013	
Mujeres	5
Hombres	3
<b>Totales</b>	<b>8</b>

*Fuente: Departamento de Recursos Humanos, PDDH*

De acuerdo a la distribución del personal por el tipo de actividad y sexo se obtiene que el personal ejecutivo se concentran 24 mujeres y 35 hombres, es decir 59 personas, correspondiente al 13.3 % del total de todo el personal; el personal técnico lo componen 187 personas, de los cuales 107 son mujeres y 80 hombres. El personal administrativo 93 personas, de las cuales 69 son mujeres y 24 hombres. Véase el cuadro siguiente

<b>Cuadro N° 5</b> <b>Distribución de plazas por actividad y sexo</b>			
<b>Clasificación por actividad</b>	<b>Sexo</b>		<b>Total</b>
	<b>Femenino</b>	<b>Masculino</b>	
Ejecutivo	24	35	59
Técnico	107	80	187
Administrativo	69	24	93
Operativo	9	95	104
<b>Totales</b>	<b>209</b>	<b>234</b>	<b>443</b>

*Fuente: Departamento de Recursos Humanos, PDDH.*





*Personal institucional en un evento conmemorativo de los veinte años de creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.*



## III. PLAN DE TRABAJO 2012-2013

### III. PLAN DE TRABAJO 2012-2013

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para orientar el ejercicio de su mandato constitucional y legal de velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos, se apoya en una planificación estratégica que contiene las apuestas y los compromisos institucionales para satisfacer las demandas de promoción y protección de los derechos humanos de la población salvadoreña.

De acuerdo al artículo 25 de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas de esta Procuraduría, les corresponde al titular y su equipo gerencial y de jefaturas, establecer la planificación estratégica y un mecanismo de revisión periódica de su cumplimiento, en coordinación con la Unidad de Planificación Institucional; de esta manera, se cuenta con una planificación en cuatro niveles, que se detalla a continuación:

- a) Plan Estratégico Institucional (PEI 2011-2014)<sup>1</sup>, el cual contiene los objetivos, proyectos y metas de mediano plazo, es decir para el cuatrienio 2011-2014;
- b) Plan Operativo Anual (POA-2012<sup>2</sup> y POA-2013<sup>3</sup>), contiene los proyectos y metas estratégicas establecidas en el PEI 2011-2014, correspondiente a los años 2012 y 2013;
- c) Planes por Áreas de Gestión (PAG-2012 y PAG-2013), que contienen los planes de cada una de las unidades organizativas institucionales, los cuales contienen los proyectos estratégicos en los planes anuales mencionados, así como las acciones rutinarias y obligatorias de importancia para el quehacer institucional y para el logro de sus objetivos; y
- d) Revisión, seguimiento y evaluación periódica de todos los planes.

En los siguientes párrafos se presenta el pensamiento estratégico desglosado por la misión, la visión y los valores institucionales. Posteriormente, se presenta en cuadros, los objetivos, las estrategias específicas y los resultados alcanzados de los programas y los proyectos institucionales ejecutados en el período. La sistematización de información y el consolidado estadístico de los logros alcanzados en las actividades rutinarias pero de importancia para los objetivos institucionales, se presentará en el capítulo quinto.

1 Entró en vigencia en la fecha de emisión del Acuerdo Institucional N° 017 del 21 de enero de 2011.

2 Entró en vigencia en la fecha de emisión del Acuerdo Institucional N° 258 del 23 de diciembre de 2011.

3 Aprobado en enero de 2013.

### 3.1. Pensamiento Estratégico

#### Misión

*“Somos una institución de rango constitucional con el mandato de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales, a través de la protección, promoción y educación de los mismos, para contribuir con el reconocimiento de la dignidad humana y desarrollar el Estado Democrático de Derecho”.*

#### Visión

*“Ser la institución del Estado de mayor credibilidad con un amplio reconocimiento de la población y las autoridades a las que dirige su acción en materia de derechos humanos”.*

#### Valores institucionales

Ahora bien, esa visión y misión elaborada con responsabilidad, comprende unos valores de los cuales se debe dar cuenta institucionalmente en la labor cotidiana. Estos valores son los siguientes:

*Dignidad: Respeto y trato humano hacia los demás.*

*Justicia: Igualdad y rectitud en el desempeño.*

*Equidad: Atención con eficiencia y sin distinción.*

*Solidaridad: Trabajar en equipo e identificados con los demás.*

### 3.2. Exposición de los objetivos, las estrategias y las metas cumplidas en el período

Las apuestas institucionales establecidas en el PEI 2011-2014, están determinadas en cinco áreas estratégicas, a saber:

- *AE1: Protección de los Derechos Humanos;*
- *AE2: Análisis e Incidencia de Políticas Públicas, Normas y Prácticas del Estado;*
- *AE3: Promoción y Educación en Derechos Humanos;*
- *AE4: Acciones y Relaciones Externas; y*
- *AE5: Fortalecimiento Institucional.*

En cada una de estas áreas se han identificado programas, proyectos y actividades que harán posible alcanzar los objetivos institucionales definidos. El PEI 2011-2014 contiene 34 proyectos estratégicos y 61 indicadores de resultados o metas, en sus cinco líneas de trabajo. El actual Plan Operativo 2013, incorpora nuevas apuestas estratégicas de la planificación del año pasado, haciendo un total de 42 proyectos y 63 indicadores de resultados, que constituyen la base de verificación del seguimiento a los resultados obtenidos.

A continuación se presentan los objetivos, las estrategias y las metas cumplidas por cada área estratégica institucional.



**CUADRO N° 6**  
**AREA ESTRATÉGICA 1: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS**

**Objetivo estratégico:** Coadyuvar a que las Instituciones del Estado respeten y garanticen los Derechos Humanos y las libertades fundamentales.

**Estrategias Específicas:** Mejorar la respuesta en la atención de casos en las diferentes fases; estandarizar y potenciar los mecanismos de los derechos humanos; fortalecimiento de los niveles de coordinación y comunicación internos en el manejo de casos; activación de mecanismos jurisdiccionales; y acercamiento de los servicios de protección a nivel local y comunitario.

N°	Nombre del Proyecto	Responsable directo	Indicador	Resultados obtenidos	Nivel de ejecución (%)
<b>1.1B</b>	Diseño e implementación de nuevos mecanismos para fortalecer el nivel de respuesta a las presuntas violaciones.	Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Humanos	Estudio elaborado y mecanismos implementados	Se realizó un nuevo diagnóstico sobre la situación del área de tutela y se presentaron nuevas propuestas de acciones al señor Procurador para fortalecer el nivel de respuesta al público.	20% (el porcentaje de ejecución para este año era de 25%)
<b>1.3 B</b>	Implementación de la Política de Derechos Humanos de personas viviendo con VIH-SIDA.	Departamento VIH y Derechos Humanos	Política implementada	a) 3 capacitaciones al personal por parte del Departamento de VIH y Derechos Humanos en coordinación con la Escuela de Derechos Humanos; b) Participación del personal en el Día de la solidaridad a las personas con VIH (15 de mayo); c) Participación en vigilia solidaria realizada el primero de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA; d) Diseño, elaboración y colocación de banner alusivo al tema; e) Distribución y portación de listón rojo alusivo al día; f) Distribución de preservativos al personal de la institución que lo solicitó; y g) Participación en actividad “cartas al cielo” por las personas fallecidas a causa del SIDA.	75%
<b>1.4</b>	Implementar la Política Institucional de Género en los mecanismos de protección a derechos humanos.	Procuraduría Adjunta para la Defensa de la Mujer y Familia	Política implementada	En el mes de septiembre de 2012, se realizó el Módulo denominado: “Curso Introductorio a la Política Institucional de Equidad de Género”. Comprendió conocimientos básicos sobre Teoría de Género y socialización de la referida Política. Se elaboró material de apoyo con lecturas seleccionadas y sus respectivas guías de lectura. Se desarrollaron 8 jornadas de capacitación de 8 horas cada una. La población beneficiada fue de 52 hombres y 55 Mujeres. Participó personal del área administrativa así como jurídica de las oficinas centrales y delegaciones de la zona paracentral. Asimismo, se remitió propuesta de conformación del Comité de enlace de la Política Institucional de Equidad de Género de la PDDH, a fin de aprobar la integración del mismo. La propuesta consta de una lista de 30 personas de diferentes zonas y unidades organizativas de PDDH bajo la coordinación de la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer y la Familia.	40%

**CUADRO N° 6**  
**AREA ESTRATÉGICA 1: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS**

<b>Objetivo estratégico:</b> Coadyuvar a que las Instituciones del Estado respeten y garanticen los Derechos Humanos y las libertades fundamentales.				
<b>Estrategias Específicas:</b> Mejorar la respuesta en la atención de casos en las diferentes fases; estandarizar y potenciar los mecanismos de los derechos humanos; fortalecimiento de los niveles de coordinación y comunicación internos en el manejo de casos; activación de mecanismos jurisdiccionales; y acercamiento de los servicios de protección a nivel local y comunitario.				
<b>N°</b>	<b>Nombre del Proyecto</b>	<b>Responsable directo</b>	<b>Indicador</b>	<b>Nivel de ejecución (%)</b>
<b>1.5</b>	Implementar un mecanismo de coordinación con el Sistema de Protección de Derechos Humanos para el establecimiento de directrices y criterios institucionales en el tratamiento de casos ambientales y de gestión de riesgo.	Procuraduría Adjunta para la Defensa del Derecho al Medio Ambiente	Mecanismo implementado y reuniones de coordinación	100%
<b>1.6</b>	Estudio de la problemática que deviene de violación al derecho humano al medio ambiente para la actuación de las instancias nacionales e internacionales para la activación de la protección de los derechos conculcados	Procuraduría Adjunta para la Defensa del Derecho al Medio Ambiente	Informe divulgado	100%



### CUADRO N° 6 AREA ESTRATÉGICA 1: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

<b>Objetivo estratégico:</b> Coadyuvar a que las Instituciones del Estado respeten y garanticen los Derechos Humanos y las libertades fundamentales.				
<b>Estrategias Específicas:</b> Mejorar la respuesta en la atención de casos en las diferentes fases; estandarizar y potenciar los mecanismos de los derechos humanos; fortalecimiento de los niveles de coordinación y comunicación internos en el manejo de casos; activación de mecanismos jurisdiccionales; y acercamiento de los servicios de protección a nivel local y comunitario.				
N°	Nombre del Proyecto	Responsable directo	Indicador	Nivel de ejecución (%)
1.9	Identificación e implementación de estrategias de atención a víctimas y la elaboración del Protocolo de Atención.	Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos	Protocolo elaborado e implementado	50%

Fuente: elaborado a partir de los insumos institucionales, Unidad de la Realidad Nacional

### CUADRO N° 7

### AREA ESTRATÉGICA 2: ANÁLISIS E INCIDENCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, NORMAS Y PRÁCTICAS DEL ESTADO

<b>Objetivo estratégico:</b> Demandar un comportamiento estatal respetuoso de la dignidad humana, para que las instituciones del Estado cumplan las obligaciones establecidas en la Constitución de la República y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.				
<b>Estrategias Específicas:</b> Proponer cambios en el comportamiento estatal en materia de derechos humanos y fomentar buenas prácticas estatales, a través del comportamiento de agentes del Estado para la erradicación de conductas violatorias de derechos humanos.				
N°	Nombre del Proyecto	Responsable directo	Indicador	Nivel de ejecución (%)
2.2	Programa de Observación y Verificación Electoral	Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Civiles e Individuales	Revisión de instrumentos y capacitaciones realizadas	85%

Se publicó el Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Políticos, en el marco de las Elecciones Legislativas y Municipales del 2012. Se elaboró el pronunciamiento público sobre la necesidad de prevenir actividades de propaganda electoral ilegal. También se le ha dado seguimiento a casos relacionados a situaciones provenientes del evento electoral, se han sostenido reuniones con el TSE, encargados de proyección social de universidades privadas, capacitaciones al personal técnico sobre la Ley Especial para el Ejercicio del Voto desde el Exterior y participación en el Diplomado Superior en Derecho Electoral, coordinado por el TSE y la UES.

CUADRO N° 7

## AREA ESTRATÉGICA 2: ANÁLISIS E INCIDENCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, NORMAS Y PRÁCTICAS DEL ESTADO

**Objetivo estratégico:** Demandar un comportamiento estatal respetuoso de la dignidad humana, para que las instituciones del Estado cumplan las obligaciones establecidas en la Constitución de la República y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

**Estrategias Específicas:** Proponer cambios en el comportamiento estatal en materia de derechos humanos y fomentar buenas prácticas estatales, a través del comportamiento de agentes del Estado para la erradicación de conductas violatorias de derechos humanos.

N°	Nombre del Proyecto	Responsable directo	Indicador	Resultados obtenidos	Nivel de ejecución (%)
2.3	Estudio de factibilidad de creación de un programa observatorio de los derechos humanos	Unidad de la Realidad Nacional	Programa implementado, Protocolo y cartas de entendimiento	Se elaboraron los términos de referencia para la contratación de una consultoría que le correspondió diseñar y elaborar un "Observatorio de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos de la PDDH". La empresa que se le asignó los servicios fue FESPAD quien presentó un plan de trabajo; un diagnóstico de políticas públicas, legislación e información estadística en materia de seguridad ciudadana; un estudio de los instrumentos internacionales, jurisprudencia y doctrina relacionados con los temas de seguridad ciudadana; una propuesta de indicadores de estructura, progreso y resultado, siguiendo la metodología de la ACNUDH; instrumentos de medición y lista de contactos interinstitucionales que incluya, entre otros, fichas de información, tablas, encuestas y cuestionarios; un mecanismo de sistematización y consolidado de datos e información, que esté sustentado en un software o plataforma electrónica que permita crear bases de datos, estadísticas y gráficas; y una propuesta de una página web de consulta, que contenga los resultados del seguimiento a los indicadores y otros estudios relacionados.	75%
2.4	Estudio de creación e inclusión en el observatorio, del tema de derechos laborales de las mujeres	Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer y Familia	Estudio elaborado y diseño aprobado	Asimismo, se encuentra en la etapa de revisión final el "Protocolo de funcionamiento del Observatorio de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos", que pretende ser una guía práctica para implementar los procedimientos adecuados para la obtención de información oportuna, la construcción de análisis pertinentes, la elaboración de sugerencias, recomendaciones o mandatos, e incluso la activación de mecanismos de protección de los derechos humanos de la PDDH.	50%
2.6 B	Desarrollar e implementar mecanismos para fortalecer la capacidad de acompañamiento a Instituciones estatales para el fomento de las buenas prácticas de gobierno.	Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos	Mecanismo desarrollados	Fondos aprobados por ONU MUJERES. Esperando firma de Convenio y desembolso.	20% (meta para el período era de 40%)

CUADRO N° 7

AREA ESTRATÉGICA 2: ANÁLISIS E INCIDENCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, NORMAS Y PRÁCTICAS DEL ESTADO

**Objetivo estratégico:** Demandar un comportamiento estatal respetuoso de la dignidad humana, para que las instituciones del Estado cumplan las obligaciones establecidas en la Constitución de la República y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

**Estrategias Específicas:** Proponer cambios en el comportamiento estatal en materia de derechos humanos y fomentar buenas prácticas estatales, a través del comportamiento de agentes del Estado para la erradicación de conductas violatorias de derechos humanos.

Nº	Nombre del Proyecto	Responsable directo	Indicador	Resultados obtenidos	Nivel de ejecución (%)
2.8	Construcción de propuestas de incidencia desde las mesas permanentes	Procuradurías adjuntas específicas	Propuestas elaboradas:	La PADESC elaboró dos propuestas de incidencia, una desde la mesa de personas adultas mayores y otras desde la mesa por la soberanía alimentaria.	100%
				<p>La PADMA elaboró propuestas de incidencia junto con las mesas permanentes a su cargo, sobre la elaboración de pronunciamientos públicos, como por ejemplo el relacionado con la ratificación de las reformas constitucionales respecto del derecho a la alimentación y al agua, asimismo la presentación del informe sobre minería metálica y la situación del país, el cual fue presentado ante la CIDH, la opinión sobre el proyecto de ley especial para la suspensión de los procedimientos administrativos relacionados con los proyectos de exploración y explotación de minería metálica a nivel nacional.</p> <p>La PADMF elaboró una pieza de correspondencia, el 26 de Noviembre de 2012, referente al Proceso de Ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW, presentado por la PDDH y Organizaciones de Mujeres. Se ha trabajado en la propuesta de incorporación del enfoque de género a la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. En ese sentido se ha incidido en el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN) y en la Comisión Agropecuaria de la Asamblea Legislativa. Ha solicitado audiencia a la Comisión Agropecuaria de la Asamblea Legislativa, a fin de conocer su trabajo con relación a la aprobación de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional y la reactivación integral del sector nacional de pequeños productores y pequeñas productoras de alimentos. Se solicitó que se convoque a las organizaciones de la Mesa por la Seguridad Alimentaria para tomar en cuenta su opinión y sean parte del Comité Técnico, además que incorpore el enfoque de género, para lo cual se ofreció el acompañamiento técnico.</p> <p>La PADMF coordina el espacio del Consejo por la Igualdad y la Equidad (CIE). El Plan de trabajo de este año está enfocado en la implementación de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE) y la Ley Especial Integral para una vida Libre de Violencia para las Mujeres, (LEIV). En ese contexto, se han sostenido varias reuniones con la Presidenta de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMUERES), Licda. Milagro Navas, Alcaldesa Municipal de Antiguo Cuscatlán. A fin de conocer cómo los Concejos Municipales han ido gestionando la creación y funcionamiento de las Unidades de Género. Antes de estas gestiones, COMURES había informado que 102 alcaldías ya contaban con las respectivas unidades; después de la realización de estas gestiones, la Presidenta de COMURES informó que de las 262 alcaldías a nivel nacional, únicamente 15 están pendientes de instalar las Unidades de Género.</p> <p>La PADNJ, junto con la Mesa de Niñez, Adolescencia y Juventud, acordó realizar un foro, taller o conversatorio en el cual se analizará la actuación de las Juntas de Protección, denominado “Avances y limitaciones en la implementación del Sistema de protección de la niñez y adolescencia” mediante el cual se generó un espacio de reflexión y análisis entre distintas organizaciones no gubernamentales y los gobiernos locales sobre los avances y limitaciones en la implementación del referido sistema.</p> <p>Este evento sirvió para compilar insumos que se plasmaron en el “Posicionamiento del Lic. Oscar Humberto Luna, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y la Mesa de la Niñez, Adolescencia y Juventud sobre la implementación del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia”. También, se elaboró el “Pronunciamiento del Lic. Oscar Humberto Luna, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y la Mesa de la Niñez, Adolescencia y Juventud con ocasión de conmemorarse en el país, el 1 de octubre: “EL DÍA DE LA NIÑA Y EL NIÑO”.</p>	

## CUADRO N° 7

## AREA ESTRATÉGICA 2: ANÁLISIS E INCIDENCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, NORMAS Y PRÁCTICAS DEL ESTADO

**Objetivo estratégico:** Demandar un comportamiento estatal respetuoso de la dignidad humana, para que las instituciones del Estado cumplan las obligaciones establecidas en la Constitución de la República y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

**Estrategias Específicas:** Proponer cambios en el comportamiento estatal en materia de derechos humanos y fomentar buenas prácticas estatales, a través del comportamiento de agentes del Estado para la erradicación de conductas violatorias de derechos humanos.

Nº	Nombre del Proyecto	Responsable directo	Indicador	Resultados obtenidos	Nivel de ejecución (%)
2.9	Monitorear e incidir en la actividad legislativa, inversión pública y políticas públicas	Procuradurías adjuntas específicas	<u>Documentos elaborados:</u>  La PADESC elaboró cuatro documentos y se han realizado distintas acciones para incidir en legislación y políticas públicas sobre derecho a alimentación, derecho al agua, derechos de las personas con VIH, derechos de las personas adultas mayores.  La PADMA elaboró seis documentos con la finalidad de incidir en la actividad legislativas y políticas públicas, a saber: “Informe a la Asamblea Legislativa respecto al estado de la Mesa de Diálogo entre la Alcaldía Municipal de San Salvador y el Ministerio de Obras Públicas”, del 13 de julio de 2012, el “Pronunciamiento del Procurador ante la situación de sequía que enfrentó el oriente del país y su impacto en los derechos humanos de las poblaciones afectadas”, del 15 de agosto de 2012, el “Pronunciamiento respecto de la ratificación de las reformas constitucionales sobre el derecho a la alimentación y al agua”, del 3 de octubre de 2012, la “Opinión sobre el proyecto de ley especial para la suspensión de los procedimientos administrativos relacionados con la minería metálica”, del 15 de octubre de 2012, el “Comunicado del Procurador ante la demanda de amparo admitida por la Sala de lo Constitucional de la CSJ en el caso de contaminación por plomo en el cantón Sitio del Niño”, del 31 de octubre de 2012, y la “Posición de la PDDH respecto a la ratificación del Protocolo de Nagoya”, del 22 de noviembre de 2012. Asimismo, lanzó una campaña publicitaria para incidir en la actividad legislativa por una pronta ratificación constitucional del derecho al agua y la aprobación de la ley general del agua. Por otra parte se elaboró una serie de documentos relacionados con el derecho al agua y a la alimentación.  La PADNJ elaboró una solicitud a la honorable Asamblea Legislativa que el presupuesto general de la nación respete los derechos de las NNA a la prioridad absoluta e interés superior a fin de que la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia tenga el recurso financiero adecuado; asimismo que adopte las acciones de su competencia para monitorear la implementación del Sistema Nacional de Protección de la Niñez y Adolescencia. También, los días 6 y 7 de junio de 2012, en asocio con la Red para la Infancia y Adolescencia se organizó el Taller “Inversión en niñez y adolescencia con enfoque de derecho”, mediante el cual se hicieron llamados públicos para elevar la inversión en dicha área.	100%	

Fuente: elaborado a partir de los insumos institucionales, Unidad de la Realidad Nacional

**CUADRO N° 8**  
**AREA ESTRATÉGICA 3: PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS**

<b>Objetivo estratégico:</b> Educar, promover y divulgar el conocimiento y acciones de incidencia sobre los Derechos Humanos, para su apropiación por la población, con miras a generar cultura de respeto y garantía en el Estado.					
<b>Estrategias Específicas:</b> Fortalecer la educación y promoción en derechos humanos de los diferentes sectores; socialización sistemática de las resoluciones, informes especiales y otros documentos que fortalezcan la generación del conocimiento de la labor institucional; suscripción de Convenios con Universidades, Gobiernos locales y ONG; e incorporar la perspectiva de género en la educación y promoción de derechos humanos.					
<b>N°</b>	<b>Nombre del Proyecto</b>	<b>Responsable directo</b>	<b>Indicador</b>	<b>Resultados obtenidos</b>	<b>Nivel de ejecución (%)</b>
<b>3.2 B</b>	Elaboración del programa de formación de agentes multiplicadores en derechos humanos, externos e internos	Unidad de Educación	Programa ejecutado y divulgado	Se han desarrollado 5 jornadas de capacitación para un grupo de 27 personas que se desenvuelven como promotores de derechos humanos en distintos lugares e instituciones, con énfasis módulos de planificación de derechos humanos, orientaciones sobre metodologías y principios básicos de los derechos humanos. Se les ha dotado de lecturas especializadas para la enseñanza de los derechos humanos, con el objetivo que se fortalezcan sus capacidades y puedan ayudar a sus comunidades.	85%
<b>3.5</b>	Formular el Programa de Promoción y Cultura de los Derechos Humanos	Unidad de Cultura y Promoción	Programa elaborado y ejecutado	El Programa fue elaborado y se encuentra en fase de revisión; asimismo se encuentra pendiente la gestión de recursos para garantizar su ejecución.	50%
<b>3.6</b>	Investigación, desarrollo y difusión de la memoria histórica	Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Humanos	Sala de exhibición de memoria histórica funcionando	La PADH solicitó al Jefe del Departamento de Proyectos que gestione fondos para una consultoría que elabore una política institucional sobre memoria histórica. También, redactó un documento base para la política que serviría insumo a la consultoría. Se diseñó la Sala, pero no se logró el montaje debido a la falta de recursos para compra del equipo y local adecuado. Se giró instrucciones a efecto de que se gestionen fondos para instarla la Sala de Exhibición.	50%

*Fuente: elaborado a partir de los insumos institucionales, Unidad de la Realidad Nacional*



**CUADRO N° 9**  
**AREA ESTRATÉGICA 4: ACCIONES Y RELACIONES EXTERNAS**

<p><b>Objetivo estratégico:</b> Coadyuvar la sostenibilidad de los espacios de interacción y vinculación con las instituciones del Estado, la sociedad civil y actores internacionales involucrados en la protección y promoción de los Derechos Humanos, así como nuevos escenarios.</p> <p><b>Estrategias Específicas:</b> Promoción del cumplimiento de los compromisos derivados de los convenios y otros instrumentos de cooperación suscritos; fortalecimiento mecanismos de interacción entre la PDDH y diferentes sectores vinculados con la protección y promoción de los derechos humanos; e incrementar la gestión de cooperación técnica y financiera.</p>					
N°	Nombre del Proyecto	Responsable directo	Indicador	Resultados obtenidos	Nivel de ejecución (%)
4.5	Sistematizar y fortalecer los mecanismos de relación con los organismos internacionales de protección y promoción de los derechos humanos.	Procuraduría Adjunta	Mecanismos sistematizados y fortalecidos	La PADH gestionó en el Comité Técnico Presupuestario para crear el Departamento de Relaciones Internacionales. También solicitó a las procuradurías adjuntas específicas los datos para sistematizar la relación con organismos internacionales, como los siguientes: nómina de las instituciones u organismos con los cuales se relaciona cada procuraduría adjunta, nombre de contacto, materia o temática objeto de la relación, logros obtenidos, propuesta de estrategia para fortalecer dicha relación y propuesta de otras instituciones con las cuales deba establecerse relación. También, giró directrices para que en el nuevo sistema informático se incluya un módulo para registrar información relacionada, las directrices se han dado en reuniones de la comisión encargada de redactar los términos de referencia para contratar el diseño de un nuevo sistema informático que integre todas las acciones que realiza la PDDH.	50%

*Fuente: elaborado a partir de los insumos institucionales, Unidad de la Realidad Nacional*

## CUADRO N° 10

### AREA ESTRATÉGICA 5: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

<p><b>Objetivo estratégico:</b> Consolidar institucionalmente a la PDDH, mediante el fortalecimiento de todas las áreas y procesos claves en el ejercicio de sus atribuciones, encaminadas al logro de la eficiencia y eficacia de todo su trabajo.</p> <p><b>Estrategias Específicas:</b> Fortalecer la gestión y administración de los recursos con eficiencia; promover acciones que fortalezcan la identificación institucional y compromiso del personal; modernizar la estructura, procesos y sistemas institucionales; desarrollar mecanismos de comunicación estratégica interna y externa; y modernización del marco legal e institucional.</p>					
N°	Nombre del Proyecto	Responsable directo	Indicador	Resultados obtenidos	Nivel de ejecución (%)
5.1	Diseño e implementación de un sistema integrado de gestión de recursos humanos	Departamento de Recursos Humanos	Sistema diseñado	Se elaboró los términos de referencia para la contratación de una consultoría que le corresponderá diseñar e implementar el sistema integrado de gestión de recursos humanos.	100%
5.2	Elaboración de manuales administrativos, manual de organización, manual de descripción de puestos, manual de procedimientos de la PDDH	Departamento de Recursos Humanos	Manuales elaborados	Se elaboraron las siguientes propuestas: Manual de Inducción, Política de Capacitación y Manual de Organización y Puestos.	100%
5.3 B	Diseño e implementación de un programa de capacitación orientado hacia el reforzamiento de competencias, la identificación institucional, y los diferentes aspectos comportamentales que contribuyan al logro de los objetivos institucionales y el mantenimiento de un clima laboral saludable.	Departamento de Recursos Humanos	Programa implementado	En el período se continuaron realizando capacitaciones al personal administrativo y técnico, entre las que se destacan: 12 sesiones de Cultura de Paz y Derechos Humanos y 6 sesiones de Liderazgo.	100%
5.5	Estudio de modernización y reorganización de la PDDH	Unidad de Planificación	Estudio elaborado	El referido estudio se encuentra en fase de análisis y revisión del marco legal por parte del Departamento Jurídico de la PDDH.	60%
5.6	Proyección financiera plurianual	Unidad Financiera Institucional	Proyección financiera realizada	Se han realizado acciones para alcanzar un presupuesto acorde a las necesidades institucionales.	100%
5.7	Diseño e implementación de un Programa de Comunicación Estratégica, interno y externo (Implementación de un canal de internet)	Departamento de Comunicaciones y Prensa	Programa diseñado e implementado	Se cuenta con un canal en <i>Youtube</i> , el cual es soporte para la difusión del trabajo institucional para lo que se difunde a través de la página web, la cuenta de <i>Facebook</i> y <i>Twitter</i> .	100%

Fuente: elaborado a partir de los insumos institucionales, Unidad de la Realidad Nacional

muchas gracias

observación o comentario, puede  
correo electrónico: desc@pddh.gob.sv



*El señor Procurador, licenciado Oscar Humberto Luna en la presentación del Tercer Informe Especial del Estado de los Derechos Humanos, documento elaborado gracias a la cooperación externa.*



# IV. ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2012-2013



## IV. ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2012-2013

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para cumplir con su mandato constitucional, recibió los recursos financieros comprendidos en un presupuesto anual, que junto al Presupuesto General de la Nación, fue preparado por el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, luego ésta cartera de Estado lo presenta a la honorable Asamblea Legislativa para ser estudiado, modificado y finalmente aprobado. Para el ejercicio fiscal del 2013, la PDDH recibió ocho millones novecientos mil dólares, \$8,900,000.00.

Del proceso político por el cual la Procuraduría recibió la asignación presupuestaria para este período del Informe (como los anteriores), se infiere que el quehacer de protección de los derechos humanos está mediado por la realidad política hegemónica en un momento y proceso político del país. Han sido las autoridades políticas quienes han determinado las prioridades y los temas de interés nacional que deben ser financiados. Dicha actuación política de distribuir los recursos del Estado, tanto del Órgano Ejecutivo que diseña la propuesta de presupuesto como el Órgano Legislativo que la aprueba, previo análisis, en principio se encuentra regida por las directrices generales que emanan de la Constitución de la República y de las leyes.

De esta manera, el sustento legal para exigir la debida asignación presupuestaria, es la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que en su artículo 19 prescribe, que “la Procuraduría tendrá un presupuesto especial” y de acuerdo al artículo 21 “podrá adquirir los bienes necesarios para el cumplimiento de los fines de la institución y contratar los servicios que considere convenientes”.

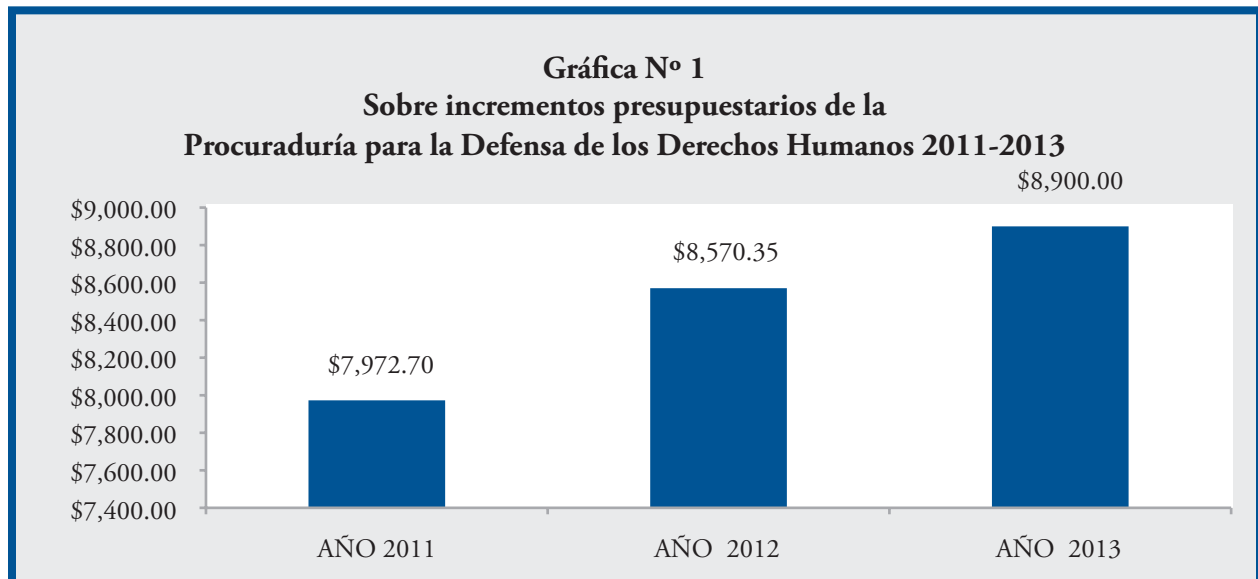
En ese contexto anterior, cabe señalar que con el paso del tiempo, la misión de velar y garantizar con eficacia los derechos humanos, está rodeada de antiguos problemas de falta de recursos y carencias que cada vez se hacen sentir, y de nuevas necesidades que requieren de una mayor asignación financiera. Por caso, debe considerarse que en los últimos años, la realidad nacional ha sido cambiante, crítica, compleja y acompañada de un crecimiento demográfico, de una crisis de seguridad, una crisis económica y una constante expansión de la violencia.

En este marco contextual, es comprensible que hayan surgido nuevas necesidades de la sociedad en materia de derechos humanos, asimismo que se hayan generado necesidades al seno de la Procuraduría. Ha de considerarse también, que esta institución nacional de derechos humanos viene arrastrando problemas y carencias ya existentes desde los tiempos de su fundación. Por ejemplo, la falta de un edificio propio, el vacío de estudios administrativos y de protección científicos, la falta de inversión en el sistema informático institucional, y en la especialización del personal, entre otros.

A esta situación de muchas necesidades, se suma el hecho que año con año, se elevan los costes de bienes y servicios. Sin embargo, las autoridades gubernamentales no han decidido incrementar

razonablemente el presupuesto de esta Procuraduría, bajo el argumento de que el país experimenta un lento crecimiento económico que no enriquece la hacienda pública.

Debe reconocerse que en los últimos años, se ha incrementado el presupuesto asignado a la PDDH, como puede apreciarse en el siguiente gráfico:



*Fuente: datos de la Unidad Financiera Institucional de PDDH*

En el año 2011, se le asignó siete millones novecientos setenta y dos mil setecientos dólares: \$7,972,700.00; en el año 2012 se incrementó a \$ 8,570,345.00, y para este período 2013, nuevamente se incrementó a ocho millones novecientos mil dólares: \$ 8, 900,000.00. Entre el año 2011 al 2013, hubo un incremento de: \$ 927, 300.00, casi un millón de dólares. Con esta realidad, algunos funcionarios del Ministerio de Hacienda, se resisten a que esta Procuraduría, sea objeto de un presupuesto razonable en congruencia lo que limita su misión constitucional. Pero tal resistencia de las autoridades, incluso de la Asamblea Legislativa, sin duda deja fuera del análisis, importantes factores señalados anteriormente, que explican y justifican la sistemática solicitud de una mayor asignación de recursos cada año.

De esta manera, el incremento financiero de casi un millón de dólares para esta Procuraduría, entre el año 2011 y el 2013, no satisfizo de manera alguna las necesidades institucionales antiguas ni mucho menos los problemas y carencias surgidas en la historia reciente. No se han resuelto las nuevas y complejas peticiones de una atención más especializada y permanente de sectores sociales víctimas cuyos casos de violación de sus derechos humanos han requerido y necesitan aún ser resueltos en instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También es urgente impulsar nuevas unidades y departamentos dentro de la Procuraduría para que atienda a sectores sociales vulnerables. Será difícil dar respuestas a los problemas de derechos humanos en los tiempos actuales mientras no se destine a esta institución un presupuesto digno.



Como se expuso en el Informe de Labores 2011-2012<sup>1</sup>, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, mediante el Subcomité de Acreditación del Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, en la Observación General 2.6 Recursos suficientes, observó que: “Los recursos suficientes deberían garantizar, de un modo razonable, que la organización [PDDH] logre mejorar su funcionamiento y el cumplimiento de su mandato de forma gradual y progresiva”. Es una convicción institucional, que las autoridades políticas puedan atender los dictados de la Constitución y de las leyes así como las observaciones de organismos internacionales de derechos humanos, y doten a esta institución de los medios para velar por los derechos humanos de una manera adecuada.

## 4.1. Asignación y ejecución presupuestaria

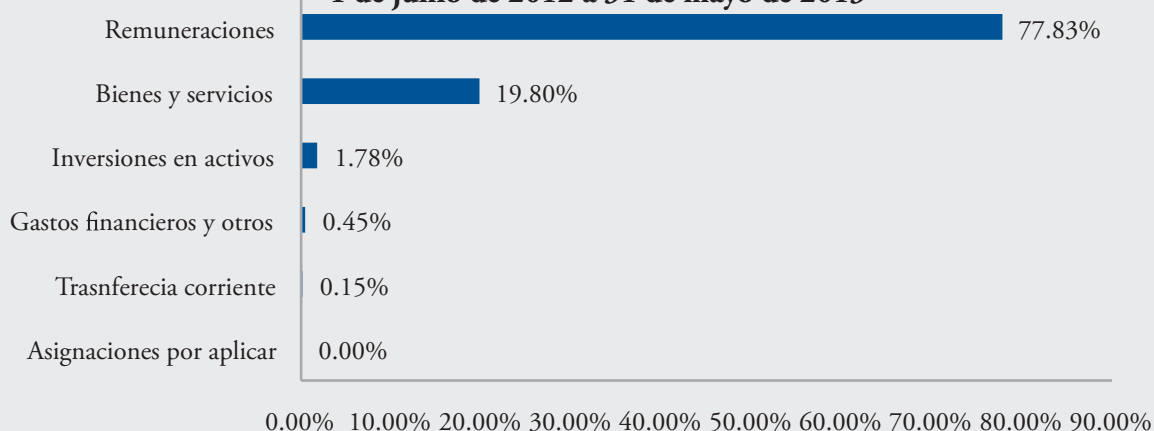
Sobre la asignación presupuestaria, para el presente ejercicio fiscal que se informa, 2012-2013, el rubro de Remuneraciones ha sido de los más importantes en cuanto al volumen al significar el 77.83% del total del presupuesto asignado, seguido por rubro de Bienes y Servicios que representa el 19.80% de las asignaciones. Gastos financieros y otros, tuvo una distribución del 0.45%. Mientras que un 0.15 de la asignación presupuestaria fue destinada para el rubro de Transferencias Corrientes. La inversión en el rubro de Activos Fijos representó el 1.78%. Véase la siguiente tabla sobre la distribución de la asignación presupuestaria institucional y véase el gráfico respectivo

<b>Cuadro N° 11</b> <b>Distribución de la asignación presupuestaria</b> <b>1 de junio de 2012 a 31 de mayo de 2013</b>							
CONCEPTO	Dirección superior	Administración General	Unidad Financiera Institucional	Monitoreo y protección de los derechos humanos	Educación promoción e investigación derechos humanos	TOTAL	Porcentajes
Remuneraciones	\$1,164,949.21	\$ 1,417,308.85	\$ 255,149.60	\$ 3,570,194.51	\$ 377,471.55	\$ 6785,073.72	77.83%
Bienes y servicios	\$ 500,748.59	\$ 542,834.95	\$ 12,168.81	\$ 554,336.91	\$ 115,538.93	\$ 1725,628.19	19.80%
Gastos financieros y otros	\$ 25.00	\$ 38,872.35				\$ 38,897.35	0.45%
Transferencias corrientes	\$ 11,000.00	\$ 1,658.50		\$ -		\$ 12,658.50	0.15%
Inversiones en activos fijos	\$ 124,733.33	\$ 8,639.74	\$ 3,625.00	\$ 14,500.00	\$ 3,625.00	\$ 155,123.07	1.78%
Total	\$1,801,456.13	\$ 2,009,314.39	\$ 270,943.41	\$ 4,139,031.42	\$ 496,635.48	\$ 8,717,380.83	100.00%
<b>Porcentajes</b>	<b>20 %</b>	<b>23 %</b>	<b>3.1 %</b>	<b>47.5 %</b>	<b>5.70 %</b>	<b>100 %</b>	

*Fuente: datos de la Unidad Financiera Institucional de PDDH*

1 PDDH, Informe de Labores junio 2011 mayo 2012, Pag. 181.

**Gráfica N° 2**  
**Distribución de la asignación presupuestaria institucional**  
**1 de junio de 2012 a 31 de mayo de 2013**



*Fuente: datos de la Unidad Financiera Institucional de PDDH*

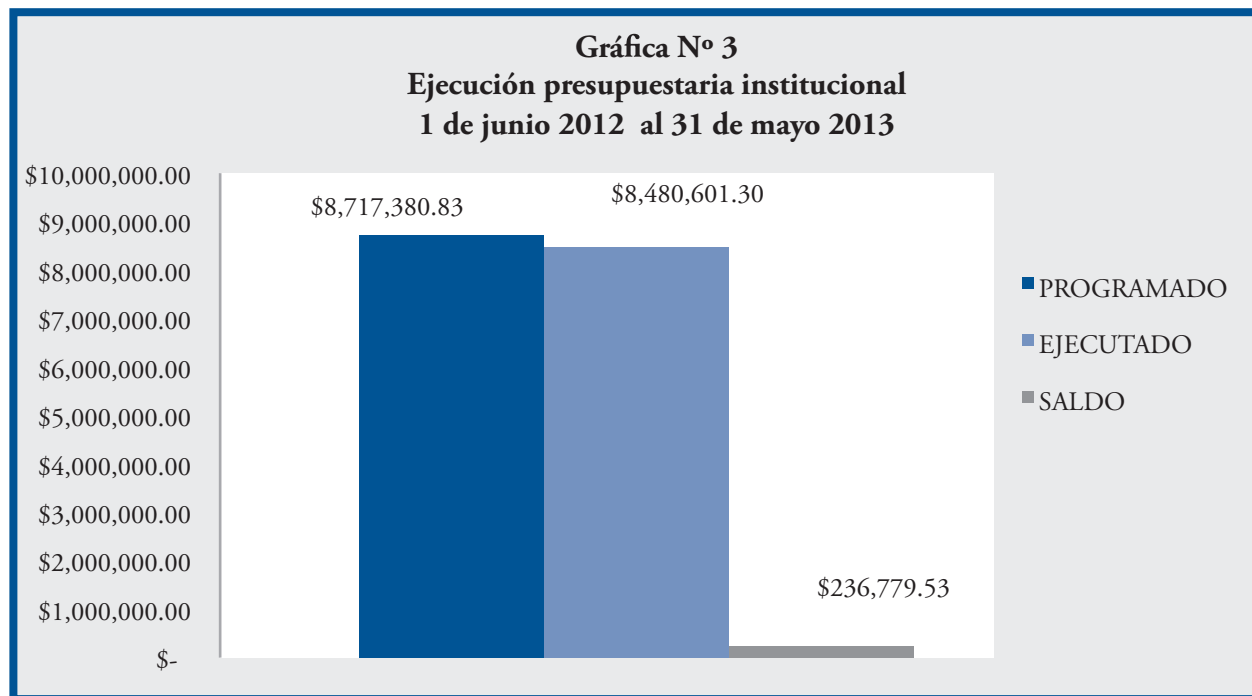
Según los datos proporcionados por la Unidad Financiera Institucional, UFI de PDDH, esta institución del Estado es una de las más eficientes en cuanto a la ejecución del presupuesto. Como puede apreciarse en la siguiente tabla:

**Cuadro N° 12**  
**Distribución de ejecución presupuestaria institucional**  
**1 de junio de 2012 a 31 de mayo de 2013**

RUBRO	CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
51	Remuneraciones	\$ 6,785,073.72	\$ 6,616,860.77	\$ 68,212.95
54	Bienes y servicios	\$ 1,725,628.19	\$ 1,657,360.24	\$ 68,267.95
55	Gastos financieros y otros	\$ 38,897.35	\$ 38,881.69	\$ 15.66
56	Transferencias corrientes	\$ 12,658.50	\$ 12,658.50	\$ -
61	Inversiones en activos fijos	\$ 155,123.07	\$ 154,840.10	\$ 282.97
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ 8,717,380.83</b>	<b>\$ 8,480,601.30</b>	<b>\$ 236,779.53</b>

*Fuente: datos de la Unidad Financiera Institucional de PDDH*

Los fondos programados para cubrir los costos de remuneraciones, bienes y servicios, gastos financieros y otros, transferencias corrientes, inversiones en activos fijos y asignaciones por aplicar, fueron \$8,717,380.83, de los cuales se han ejecutado \$8,480,601.30, representando el 97.28%. Al respecto véase el siguiente gráfico:



*Fuente: datos de la Unidad Financiera Institucional de PDDH*

## 4.2. Cooperación externa y gestiones de compra y contrataciones

Como se planteó en el apartado de la Asignación y Ejecución Presupuestaria de este mismo Informe de Labores, la PDDH no cuenta con los recursos razonables que le habiliten plenamente a responder con eficacia y eficiencia a las distintas demandas de atención. Realidad que ha sido paliada en un grado mínimo, a través de la Cooperación Externa. Suelen ser embajadas, agencias, organizaciones sociales, fundaciones que donan ayudas financieras para impulsar proyectos sobre temas muy específicos. Esta Procuraduría agradece a todas estas organizaciones solidarias y preocupadas por los derechos humanos en nuestro país.

En el período de reporte, se desarrollaron 5 proyectos financiados por la Cooperación Externa, con un monto global de ciento diez mil quinientos ochenta y dos con catorce centavos, \$ 110,582.14. Véase a continuación la descripción de dichos proyectos:

- *Promoción del Derecho a una Alimentación adecuada en El Salvador*

Presupuesto total asignado: \$17,835.00. Coordinador de Proyecto: Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, PADESC. Organismo Cooperante: OXFAM AMERICA. Objetivo General del Proyecto: Contribuir a la consolidación del proceso de reforma del marco nacional y constitucional sobre el derecho a una alimentación adecuada, a través de propuestas legislativas y del abordaje situacional del derecho a la alimentación en nuestro país.

- *Protegiendo a la niñez con enfoque de derecho en situación de emergencia principalmente en comunidades afectadas por la Depresión Tropical 12E*

Presupuesto total asignado: \$ 19,957.14. Coordinador de Proyecto: Procuraduría Adjunta de los Derechos de la Niñez, la Juventud y la Adolescencia, PADNJA. Organismo Cooperante: UNICEF. Objetivo General del Proyecto: Proteger los derechos y libertades fundamentales de los NNAJ afectados por la tormenta 12E.

- *Asistencia técnica para fortalecer el proceso de tutela de los Derechos Humanos de las Personas con VIH en la Procuraduría para Defensa de los Derechos Humanos.*

Presupuesto total asignado: \$ 36,640.00. Coordinador de Proyecto: Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, PADESC. Organismo Cooperante: PNUD. Objetivo General del Proyecto: Fortalecer las acciones para el abordaje preventivo, la no determinación y abogancia del VIH/SIDA.

- *Informe Especial sobre el impacto de la violencia en la protección de los Derechos Humanos en la Niñez y Adolescencia en El Salvador*

Presupuesto total asignado: \$ 26,000.00. Coordinador de Proyecto: Procuraduría Adjunta de los Derechos de la Niñez, la Juventud y la Adolescencia, PADNJA. Organismo Cooperante: UNICEF. Objetivo General: Determinar las causas que producen la violencia en sus diferentes manifestaciones contra las niñas, niños y adolescentes a fin de proponer las medidas adecuadas para su atención prevención.

- *Diseño de Política Interna de Atención Niños, Niñas y Adolescentes en la PDDH*

Presupuesto total asignado: \$ 10,150.00. Coordinador de Proyecto: Procuraduría Adjunta de los Derechos de la Niñez, la Juventud y la Adolescencia, PADNJA. Organismo Cooperante: Fundación Privada INTERVIDA. Objetivo General del Proyecto: Contar con un estudio sobre la respuesta de la PDDH en la atención de Niñez y Adolescencia que conlleve a la elaboración de una Política Interna para este sector que establezca las líneas generales de actuación para brindar una atención a las niñas, niños y adolescentes acorde a los estándares nacionales e internacionales y formulada sobre la base de tres pilares fundamentales: un enfoque de derecho, de género y de la doctrina de protección integral.

Relacionado a la cooperación externa y los proyectos institucionales, se tiene información de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, UACI, reportando las siguientes gestiones en el período del presente Informe. Véase el siguiente cuadro.

**Cuadro N° 13**  
**Gestiones de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales**  
**relacionados con la Cooperación Externa**  
**1 de junio 2012 al 31 de mayo 2013**

	<b>Libre gestión</b>	<b>Licitación Pública</b>	<b>Total gestiones</b>	<b>Porcentajes tipo de fondos</b>
Fondos Públicos	275	6	281	88.6%
Fondos de la Cooperación Externa Unicef Oxfam América Intervida	36	0	36	11.4%
Total	311	6	317	100%
<b>Porcentaje Tipo de Gestión</b>	<b>98.1%</b>	<b>1.9%</b>		

*Fuente: datos de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional de PDDH*

Durante el presente período, la UACI reportó 317 gestiones de compras y contrataciones. Por el tipo de gestiones, se tiene que por libre gestión se realizó 311 acciones, de las cuales 36 estaban relacionadas con fondos y proyectos de la Cooperación Externa en concreto de UNICEF, INTERVIDA, OXFAM AMÉRICA. La UACI sólo realizó 6 gestiones por la vía de la Licitación Pública, con fondos públicos. En total, las gestiones por libre gestión representó el 98.1% del total de gestiones para adquirir o contratar servicios para la defensa de los derechos humanos. La gestión de licitación pública sólo representó el 1.9%.

Los fondos de la cooperación externa financió el 11.4% equivalente a \$ 110,582.14, de las gestiones de compras realizadas durante el período de informe. Mientras que los fondos públicos representó el 88.6% de financiamiento de las gestiones de compras y adquisiciones.





*El señor Procurador, licenciado Oscar Humberto Luna en el evento de presentación del Protocolo Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en Situaciones de Emergencia.*



# V. LOGROS PRINCIPALES POR ÁREAS ESTRATÉGICAS

## V. LOGROS PRINCIPALES POR ÁREAS ESTRATÉGICAS

En este apartado se destacan los principales logros institucionales alcanzados en el período que comprende éste Informe Anual, que se encuentran en función de las cinco áreas estratégicas de la planificación institucional presentadas en el capítulo anterior. El objetivo del capítulo es comentar la ejecución de proyectos, mostrar datos estadísticos de las actividades rutinarias y el número de población beneficiada de los servicios prestados por esta Procuraduría.

En la primera área referente a la *protección de los derechos humanos* se presentan los resultados del funcionamiento del Sistema de Protección de los Derechos Humanos de esta Procuraduría. En particular, se muestra el trámite que se le ha dado a los hechos y las situaciones que ha conocido, y los resultados de las diligencias hasta la determinación de la responsabilidad de las instituciones públicas señaladas. En este sentido, para facilitar la interpretación de los datos, se realiza un análisis desglosado por derecho humano e institución pública. En casos excepcionales, como la atención de grupos o temáticas específicas, medidas cautelares, censuras públicas, incumplimiento de recomendaciones, entre otras, se citan casos más relevantes o instituciones individualmente consideradas.

Debido a la ampliación de los servicios institucionales hacia la atención de problemáticas actuales que afectan los derechos humanos de la población salvadoreña, comentados en anteriores informes anuales, una novedad para este período, es la creación de un sub acápite de actividades de atención especial a grupos en situación de vulnerabilidad y temas específicos. La Procuraduría con esta modificación pretende posicionar en primera línea, la incidencia en la resolución de problemáticas sobre temas y derechos específicos de grupos en situación de vulnerabilidad.

En la segunda área de *análisis e incidencia de políticas públicas, normas y prácticas del Estado*, se presentan datos e información relacionada con actividades de obtención, verificación y utilización de informaciones para atender problemas de derechos humanos y prevenir su violación en el futuro. En concreto, se consolidan verificaciones a instituciones públicas, mediaciones, pronunciamientos, opiniones técnicas, informes especiales y situacionales, observación electoral, monitoreo del sistema nacional de salud, entre otros. Posteriormente, el área de *promoción y educación en derechos humanos*, se muestran datos consolidados de actividades educativas, promoción, seguimiento, medios de comunicación, así como los sectores y la población beneficiada por dichos servicios.

Luego, el área de *acciones y relaciones externas*, se destaca la construcción de propuestas y posicionamientos públicos de las mesas temáticas de trabajo, la suscripción de convenios con organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales nacionales, asistencia a eventos organizados por diversas instituciones y otras acciones de colaboración, entre otros. Finalmente, se presenta el área de *fortalecimiento institucional*, donde se describen los proyectos ejecutados que tienen que ver con el desarrollo de la institución, como la creación de nuevas dependencias institucionales, capacitaciones impartidas al personal institucional, elaboración de protocolos y acuerdos institucionales, certificación de documentos, revisión de la normativa interna, entre otras.



## 5.1. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS



*El señor Procurador, licenciado Oscar Humberto Luna firma acuerdos con representantes de la sociedad civil para la solución de problemas sociales.*

En este período se reportaron logros importantes en el área de protección de los derechos humanos, correspondiente al Plan Estratégico Institucional 2011-2014, los cuales se orientaron en general a: mejorar la respuesta institucional en la atención de casos y situaciones; elaborar políticas internas para el abordaje de temáticas específicas; elaborar estudios para activar mecanismos de protección nacionales e internacionales de derechos humanos; e implementar estrategias de atención a víctimas.

A continuación, se presentan los resultados de las actividades rutinarias pero indispensables para alcanzar los objetivos de protección derechos humanos, de acuerdo al funcionamiento de los mecanismos, procedimientos y acciones que forman parte del Sistema de Protección de Derechos Humanos de la PDDH, en las que participan las siguientes unidades organizativas: Departamento de Denuncias; Departamento de Procuración; Departamento de Seguimiento; Departamento de Verificación Penitenciaria e Internamiento de Menores; Departamento de Verificación y Observación Preventiva; Departamento de VIH y Derechos Humanos; Departamento de Personas con Discapacidad y Derechos Humanos; Unidad Técnica del Despacho; Unidad de Control de Procedimientos; Unidad de Migrantes; Unidad de la Realidad Nacional; Delegaciones Departamentales y Locales; Procuradurías Adjuntas Específicas; Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Humanos; y Despacho del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos.

## a) Tramitación de casos de presuntas violaciones a derechos humanos



*La figura institucional del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos le corresponde velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos.*

De acuerdo a la obligación legal de rendir anualmente a la Asamblea Legislativa un informe en el que se detalle las actuaciones en la protección de los derechos humanos, artículo 49 de la Ley de la PDDH, se presenta un detalle consolidado de las acciones ejercidas en el mecanismo de tramitación de casos de presuntas violaciones a derechos humanos, que forma parte del Sistema de Protección de los Derechos Humanos de la PDDH, en el período que comprende el presente Informe Anual.

Los resultados se obtienen de dos fuentes principales, el primero por los reportes automáticos generados por el “Sistema Informático Integrado de Gestión (SIIG)”, que contiene una base de datos sobre denuncias admitidas y resoluciones iniciales y finales que son filtrados en consolidados a nivel nacional, departamental y municipal. Y en segundo lugar, los informes de actividades realizadas por las unidades operativas del Sistema de Protección. En los siguientes párrafos, se presentarán análisis sobre el trámite de expedientes abiertos y archivados en el período del 1 de junio de 2012 al 31 de mayo de 2013.

En el siguiente cuadro, se presenta un consolidado nacional sobre la cantidad de denuncias recibidas en orden numérico descendente respecto al número de denuncias admitidas, luego se analizarán las modalidades de atención y los tipos de resoluciones de acuerdo a las variables de análisis que brinda el SIIG. Se advierte, que la cantidad de expedientes o casos no concuerdan con la cantidad de derechos e instituciones, porque cada expediente o caso puede contener más de una víctima señalada, más de un derecho humano presuntamente afectado y más de una autoridad señalada o recomendada.

**Cuadro N° 14**  
**Reporte de orientaciones y trámite de expedientes a nivel nacional**  
**1 de junio de 2012 al 31 de mayo de 2013**

Delegación	Orientaciones Legales	Denuncias Admitidas	Con Oficio	Resolución Inicial	Resolución Final	Archivo	Buenos Oficios	Censura Pública	Medida Cautelar
Ahuachapán	455	148	205	18	22	7	3	0	1
Cabañas	165	69	133	22	19	0	0	0	2
Chalatenango	353	76	82	27	72	0	0	0	0
Cuscatlán	721	82	116	15	9	0	0	0	0
La Libertad	621	109	39	103	30	0	0	0	0
La Paz	406	278	528	8	61	0	0	0	0
La Unión	358	154	271	13	27	4	7	0	1
Morazán	377	111	141	11	43	0	0	0	0
San Miguel	570	301	534	15	60	0	0	0	0
San Salvador	553	462	32	229	9	10	2	0	2
San Vicente	388	157	137	52	11	0	0	0	0
Santa Ana	703	368	520	31	4	0	0	0	0
Sonsonate	655	131	256	12	83	0	0	0	0
Usulután	856	220	550	46	89	0	0	0	1
Santa Rosa de Lima	312	108	214	11	17	0	0	0	0
Apopa	505	62	21	35	42	0	0	0	0
Soyapango	390	135	135	31	16	0	0	0	0
Metapán	264	85	129	33	65	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>8,652</b>	<b>3,056</b>	<b>4,043</b>	<b>712</b>	<b>679</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>7</b>

*Fuente: Informes de actividades de las delegaciones departamentales y locales, así como reportes del Sistema Informático Integrado de Gestión*

## **i. Orientaciones legales**

La figura de la orientación legal se encuentra regulada en los artículos 194, romano I, ordinal 3º de la Constitución; artículos 11, ordinal 3º y 26 ordinal 3º de la Ley de la PDDH; 6 y 18 letra a) del Reglamento para la Aplicación de Procedimientos del Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (en adelante, “Reglamento para la Aplicación de Procedimientos”)<sup>1</sup>.

Esta modalidad de atención se aplica cuando los hechos denunciados no son competencia de la institución, pero se estima necesario asesorar a las personas usuarias sobre la activación oportuna de instancias administrativas o jurisdiccionales. Esta facultad legal puede llevar incluso, según la naturaleza de la orientación, a buscar una comunicación directa con las autoridades señaladas por medio de oficio, a fin de que éstas adopten las medidas de su competencia e informen sobre las mismas.

En este período, el personal jurídico atendió a nivel nacional a 11,708 casos, de los cuales 8,652 correspondieron a orientaciones legales y 3,056 a denuncias admitidas, aproximadamente el 74% y el 26%, respectivamente. En relación al período anterior, se experimentó una disminución de 2,087 casos, de los cuales 1,292 pertenecieron a orientaciones legales y 795 a denuncias. Lo anterior, estarían indicando que las orientaciones legales continúan siendo una de las principales actividades institucionales de prevención de violaciones a los derechos humanos.

<sup>1</sup> Publicado en el Diario Oficial número 32, del 16 de febrero de 2010, tomo N° 386, páginas 167 a la 187.



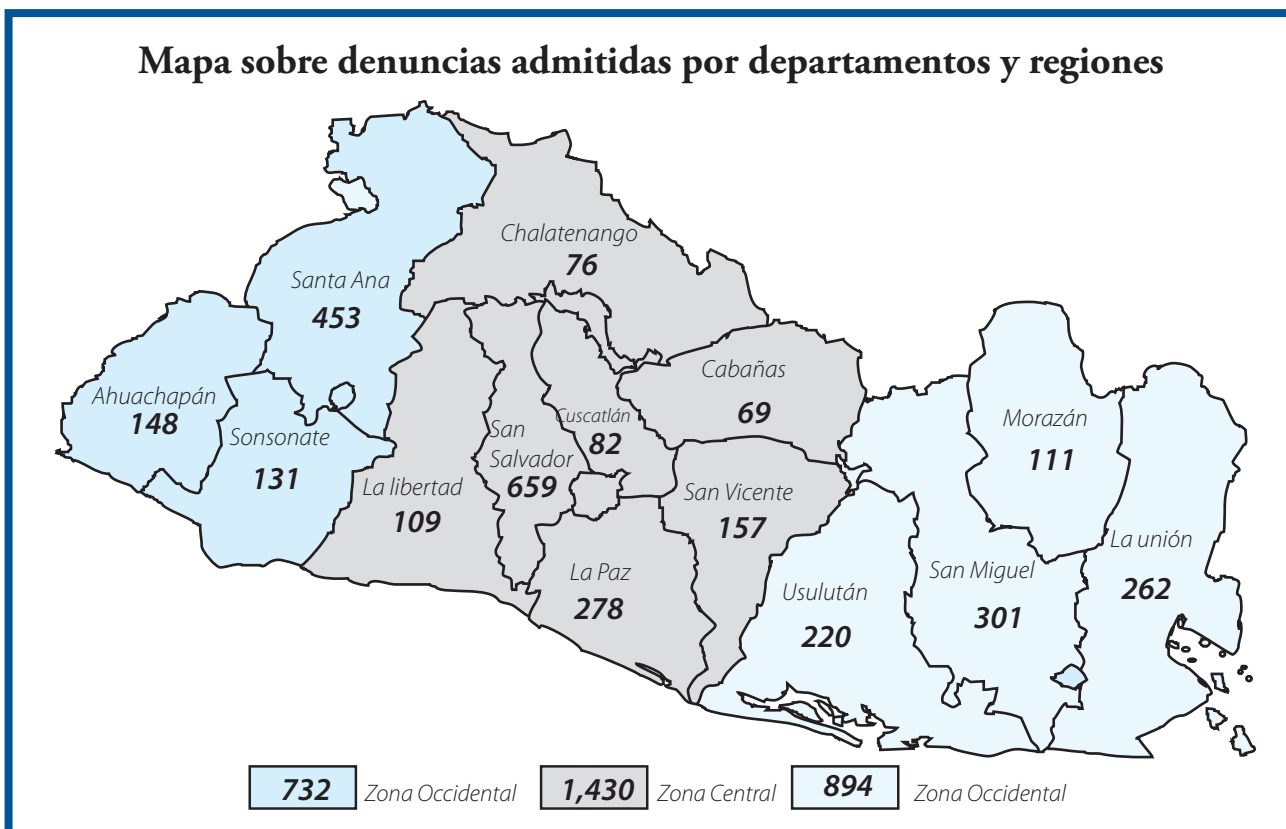
## ii. Denuncias admitidas

La fase inicial del mecanismo de protección se encuentra regulada en los artículos del 4 al 31 del Reglamento para la Aplicación de Procedimientos. Comienza con la apertura de casos mediante denuncia o de manera oficiosa sobre hechos que impliquen presuntas afectaciones a derechos humanos, incluyendo un examen preliminar, el pronunciamiento inicial y otras comunicaciones oficiales.

En este período, a nivel nacional se admitieron 3,056 denuncias, de las cuales 2,827 fueron interpuestas de manera personal, telefónica, carta, electrónica y fax; y 229 por oficio, ya sea por medio de informes, monitoreo de medios de comunicación y aviso.

El perfil de las personas denunciantes y las víctimas continuaron repitiendo la misma caracterización de años anteriores. En la mayoría hombres, duplicando los casos donde fueron mujeres; la naturaleza de los casos presentados o iniciados por oficios en su mayoría fue de naturaleza individual; de acuerdo al rango de edad, la mayoría de las víctimas se ubicaron entre las edades de 0 a 18 años, es decir, referido principalmente a la población infantil, niños y niñas, y adolescentes, seguido del grupo entre 25 a 60 años; en el caso de los denunciantes, diferente a la anterior relación se ubicó preferentemente en el rango de 25 a 60 años. Respecto a su profesión u ocupación, en la mayoría de los casos fueron estudiantes, amas de casas, empleados, agricultores, jornaleros, comerciantes y abogados.

A nivel geográfico, el siguiente mapa presenta la distribución de denuncias admitidas por las diecisiete delegaciones departamentales y locales, así como las de sede central por medio de los Departamentos de Tutela, Procuradurías Adjuntas Específicas, Departamento de Verificación Penitenciaria, Departamento de Observación Preventiva y Atención de Crisis, Unidad de Migrantes, Unidad de Derechos Políticos y personal jurídico de turno.



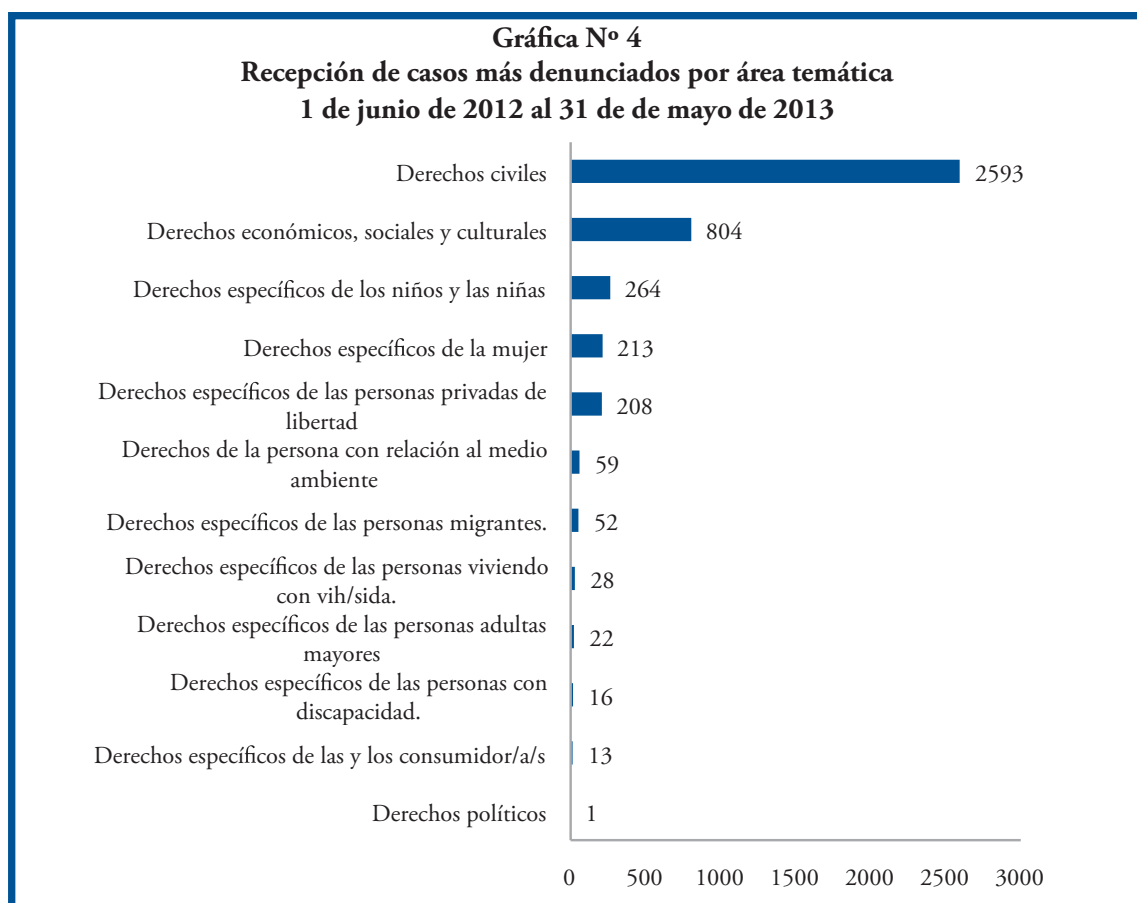
*Fuente: Reporte SIIG y Delegaciones Departamentales y Locales*

El anterior mapa visualiza el número de denuncias admitidas por zonas y departamentos. A nivel nacional, la zona central del país concentra la mayor cantidad de denuncias con 1,430. El Departamento de San Salvador se ubica con el mayor número de denuncias con 659 casos que incluyen los resultados obtenidos de las Delegaciones Locales de los Municipios de Soyapango y Apopa, que reportaron 135 y 62 respectivamente.

Luego, la zona oriental con 894, visualizando el trabajo de la Delegación Local de Santa Rosa de Lima, ubicada en el Departamento de La Unión, reportando en este período 108 denuncias. Finalmente, la zona occidental con 732, destacando el trabajo de otras de las Delegaciones Locales para este mismo período, ubicada en el Municipio de Metapán, Departamento de Santa Ana, reportando para este período 85 denuncias.

#### ■ *Derechos humanos más denunciados*

En este período, respecto a la clasificación de derechos humanos y libertades fundamentales, se ubicaron nuevamente con la mayoría de denuncias los derechos civiles con 2,593, seguido de los derechos económicos, sociales y culturales con 804; derechos específicos de los niños, niñas y adolescentes con 264; derechos específicos de la mujer con 213; de las personas privadas de libertad con 208; derechos de la persona con relación al medio ambiente con 59; derechos de las personas migrantes con 52; derechos de las personas viviendo con VIH/SIDA con 28; derechos de las personas adultas mayores con 22; derechos de las personas con discapacidad con 16; derechos de las personas consumidoras con 13; y los derechos políticos con 1. A continuación, se presentan en una gráfica los anteriores datos.



*Fuente: Reporte de denuncias SIIG*

A nivel particular, se reportaron más denuncias sobre los derechos humanos tradicionalmente denunciados y el escalonamiento de algunos derechos a las primeras posiciones. Tal como se presenta en la siguiente gráfica, el derecho a la integridad personal se ubica como el más señalado con 635 denuncias admitidas; luego el derecho al debido proceso administrativo se ubica en el segundo lugar manteniendo su posición del año pasado, pero reportando un aumento de denuncias con 539; el derecho al trabajo con 405, el derecho de acceso a la justicia con 363, la seguridad personal con 294; el derecho a la salud con 224; a la libertad personal con 208; derecho a un debido proceso judicial con 154; derecho de petición con 149 y derecho de propiedad con 135; entre otros.

A continuación, se presenta en una gráfica los datos mencionados anteriormente, cabe indicar que esta lista de derechos humanos no se agota, pero por motivos de espacio solamente se relacionan los que reportan mayor frecuencia en la recepción de denuncias.



*Fuente: Reporte de denuncias SIIG*

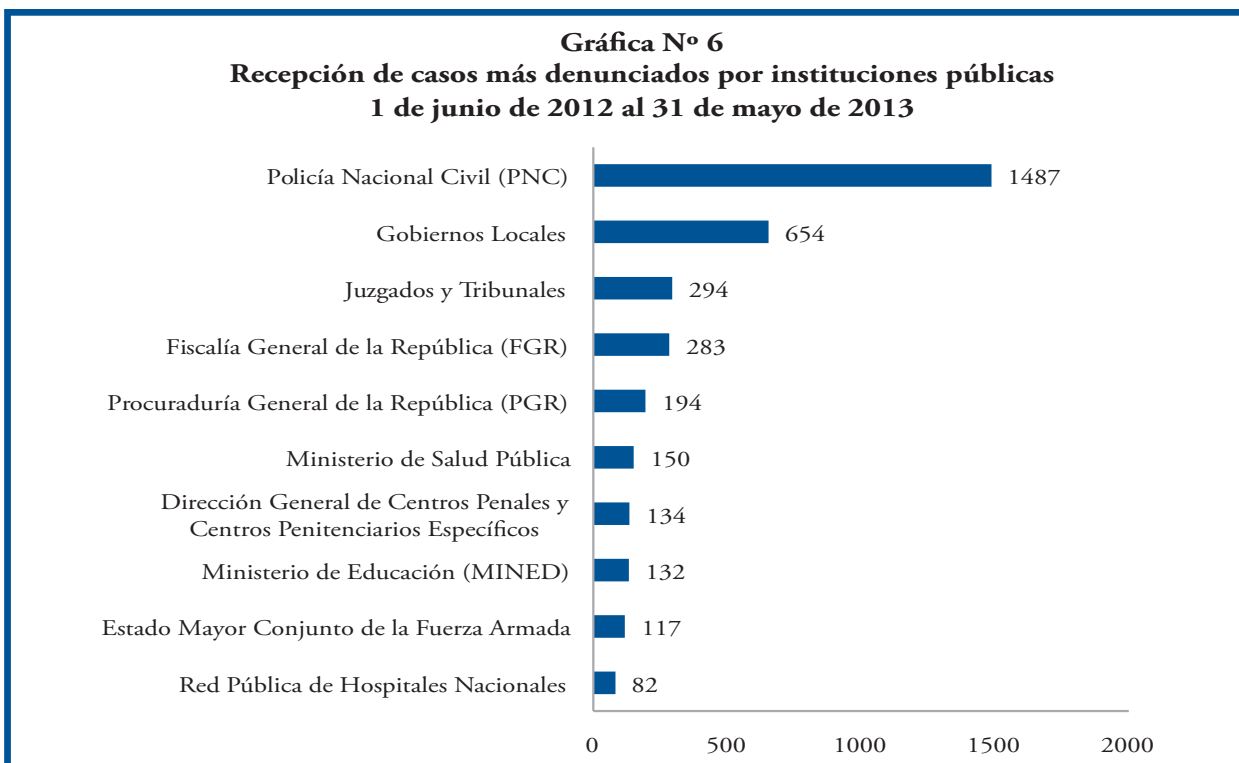
En la recepción de casos se identifican uno o varios hechos violatorios, a continuación se enuncian los hechos de los primeros cinco derechos de la gráfica anterior. Respecto al derecho a la integridad personal ubicado como el principal derecho denunciado, casi la mayoría de casos son atribuidos a los hechos violatorios de malos tratos con 443; uso desproporcionado de la fuerza con 60; tratos crueles, inhumanos o degradantes con 44; tortura con 15. En el caso del derecho a un debido proceso administrativo fue denunciado por inobservancia de los principios de legalidad y seguridad jurídica con 136, inobservancia del derecho de audiencia con 96, del derecho de defensa con 80, transparencia con 60, celeridad procesal con 37, inobservancia del principio de igualdad y no discriminación con 26, eficacia procesal con 15; entre otros.

Asimismo, el derecho al trabajo por actos ilegales o atentatorios contra la estabilidad laboral con 208; denegación de prestaciones o derechos laborales con 36; discriminación laboral con 35; tolerancia estatal ante despidos ilegales con 26, entre otros. El derecho de acceso a la justicia por omisiones o negligencia de funcionarios o agentes del Estado frente a la reclamación de una persona para la protección de derechos con 206; negligencia o retardación injustificada en la investigación por parte de las instituciones competentes con 55; por dilaciones indebidas para juzgar y hacer cumplir lo juzgado con 17; denegación de asistencia legal gratuita para la reclamación de derechos ante tribunal competente con 12 y denegación indebida del acceso a la justicia constitucional y administrativa con 11.

El derecho a la seguridad personal por persecuciones o indagaciones ilegales con 148; intimidación con 102 y coacción con 31.

### ■ *Instituciones estatales más denunciadas*

Por otro lado, al observar el reporte por institución denunciada, el sistema refleja que la institución que más ha sido señalada como presunta violadora de derechos humanos sigue siendo la Policía Nacional Civil (PNC) con 1,487; seguido de los Gobiernos locales con 654; los juzgados y Tribunales con 294; la Fiscalía General de la República (FGR) con 283; la Procuraduría General de la República (PGR) con 194; el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con 150; la Dirección General de Centros Penales y Centros Penitenciarios Específicos con 134; el Ministerio de Educación (MINED) con 132; el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada con 117 y la Red Pública de Hospitales Nacionales con 82, los cuales se presentan en la siguiente gráfica.



*Fuente: Reporte de denuncias SIIG*

Esta Procuraduría acumuló gran cantidad de denuncias por presuntas violaciones a los derechos civiles, tal como se ha mencionado anteriormente; esta tendencia se observa también a nivel de instituciones públicas denunciadas. A continuación, se hace el desglose de las tres instituciones con mayor nivel de denuncias por hechos violatorios.

En primer lugar, se ubica la Policía Nacional Civil con 1,487 denuncias, de las cuales 361 fueron por malos tratos; 126 por persecuciones o indagaciones ilegales; 100 por allanamiento de morada; 101 por detención arbitraria; 81 por intimidación; 51 por detención ilegal; 46 por uso desproporcionado de la fuerza; 48 por tratos crueles, inhumanos o degradantes; 34 por inobservancia del principio de legalidad y seguridad jurídica y 31 por actos ilegales o arbitrarios que restringen o afectan el derecho a la propiedad, entre otros.

En segundo lugar, se posicionan para este período, los Gobiernos locales con 654, en particular, se recibieron 86 denuncias por estabilidad laboral; 65 por inobservancia del derecho de audiencia; 56 por inobservancia del principio de legalidad y seguridad jurídica; 41 por inobservancia del derecho de defensa; 34 por actos ilegales o arbitrarios que restringen o afectan el derecho de propiedad; 23 por dilaciones injustificadas en la tramitación y respuesta de solicitud; 20 por inobservancia del principio de transparencia; 17 por malos tratos; 17 por tolerancia estatal ante despidos ilegales y 11 respuesta carente de fundamentación o incongruente con lo solicitado.

En tercer lugar, se ubican los juzgados y tribunales con 294 denuncias que tienen que ver en gran medida con inobservancia del derecho a un juez imparcial con 21 casos; inobservancia del derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas con 20 casos; omisiones o negligencia de funcionarios o agentes del Estados frente a la reclamación de unan persona para la protección de derechos con 20 casos; inobservancia del derecho a una resolución fundada o motivada con 17 casos; dilaciones indebidas para juzgar y hacer cumplir lo juzgado con 13 casos; detenciones ilegales con 12 casos; inobservancia del derecho de toda persona a ser tratada con igualdad ante los tribunales con 11 casos; inobservancia del principio de legalidad y retroactividad de la ley penal favorable con 11 casos; actos ilegales o atentatorios contra la estabilidad laboral con 8 casos y dilación injustificada en la tramitación y respuesta de la solicitud con 6 casos; entre otras.

### **iii. Resoluciones iniciales**

En la fase inicial del mecanismo de protección de derechos humanos, luego de la apertura de los casos, se emite un pronunciamiento, el cual puede consistir en una resolución u otro tipo de comunicación. En este caso, nos referimos a las resoluciones iniciales que tienen por objetivo solicitar información a las autoridades públicas denunciadas y ejercer acciones de protección cuando se estime necesario y oportuno.

La resolución inicial contiene las siguientes acciones: declara la admisibilidad del caso, salvo aquellos iniciados de oficio; solicita informe a las autoridades señaladas sobre los hechos y las medidas adoptadas; solicita informes o cooperación a otras autoridades o instituciones; dicta recomendaciones y medidas adecuadas a las autoridades señaladas para promover la investigación de los hechos; promueve el cese de la presunta violación denunciada, previene daños graves e irreparables para la presunta víctima y activa el cumplimiento de los deberes del Estado; recomienda la reparación integral del daño causado; e informa sobre los hechos a otras autoridades competentes para la adopción de medidas.

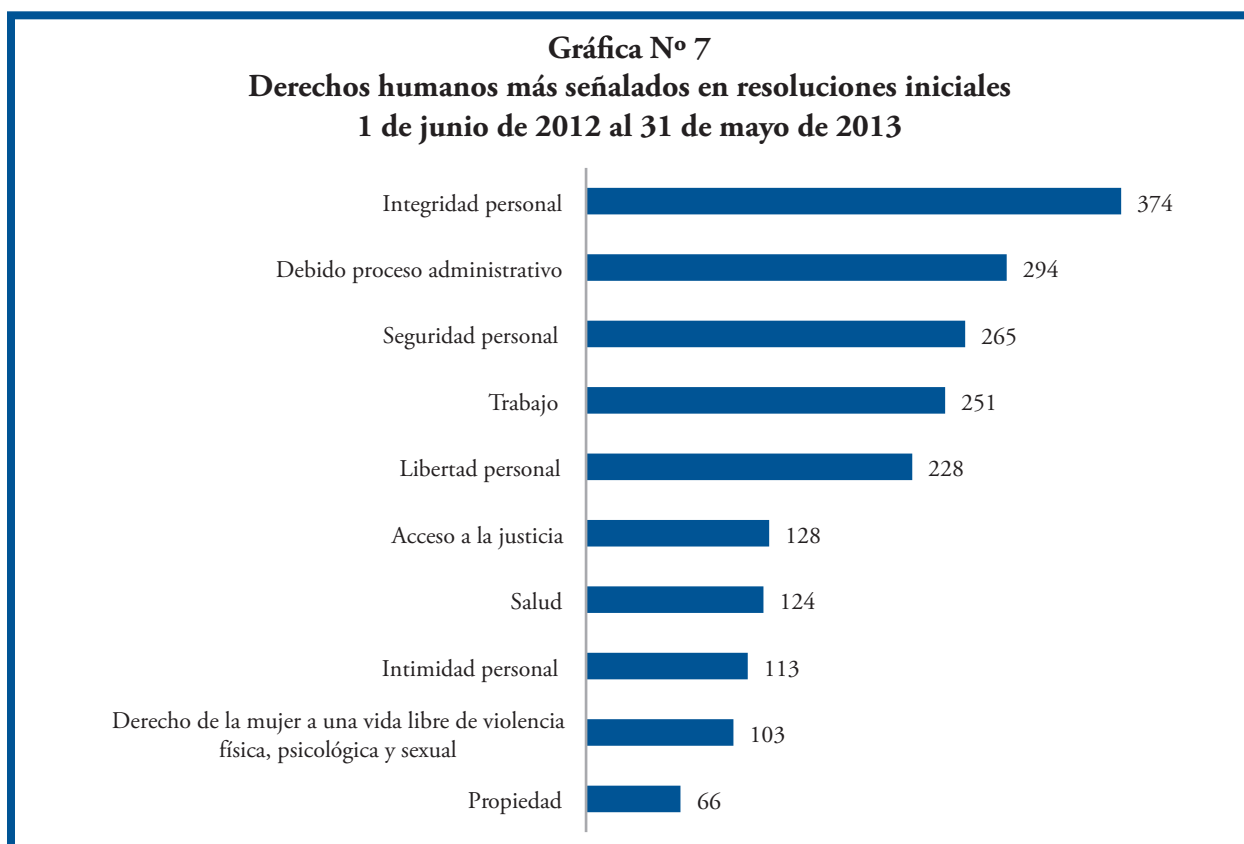


En este período, se emitieron 677 resoluciones iniciales, lo que permite afirmar que se experimentó una disminución de 243 resoluciones, es decir, un 26.41% en relación al período inmediato anterior. El análisis estadístico puede realizarse a través de dos variables principales: por derecho humano presuntamente afectado y por institución pública recomendada y notificada.

■ *Derechos humanos más señalados en resoluciones iniciales*

El derecho a la integridad personal continúa siendo el derecho más señalado en resoluciones iniciales con 374 casos; seguido del derecho al debido proceso administrativo con 294; derecho a la seguridad personal con 265; derecho al trabajo con 251; derecho a la libertad personal 228; derecho al acceso a la justicia con 128; derecho a la salud con 124; derecho a la intimidad 113; derecho de la mujer a una vida libre de violencia física, psicológica y sexual con 103; entre otros.

A continuación se presentan en una gráfica, los derechos humanos presuntamente más vulnerados a partir de resoluciones iniciales, se advierte que la frecuencia de recomendaciones y notificaciones por derecho humano, no corresponde con el total de resoluciones iniciales, debido a que en cada expediente puede existir más de un señalamiento de presuntas violaciones a derechos humanos.



*Fuente: Datos proporcionados por el Departamento de Seguimiento, PDDH*

En el período, el área temática que reportó mayor frecuencia en la elaboración de resoluciones iniciales fueron los *derechos civiles*. Entre los hechos violatorios más destacados se encuentran: malos tratos; tratos crueles inhumanos o degradantes; uso desproporcionado de la fuerza; allanamiento de morada o registros de manera ilegal o arbitraria; detención arbitraria e ilegal; coacción e intimidación; persecuciones o indagaciones policiales; omisión o negligencia de funcionarios o agentes del Estado frente a la reclamación de una persona para la protección de sus derechos; negligencia en la investigación

por parte de instituciones competentes; dilaciones indebidas en la tramitación de los recursos legalmente establecidos; entre otros.

En segundo lugar, se ubican los *derechos económicos, sociales y culturales*, entre los hechos violatorios más destacados se encuentran: actos ilegales atentatorios contra la estabilidad laboral; denegación de prestaciones o derechos laborales; denegación de atención médica; desabastecimiento de medicamentos; falta de insumos para la realización de intervenciones quirúrgicas en los centros de salud; negligencia en la atención médica; inadecuado funcionamiento de los centros de salud; inexistencia de condiciones higiénicas que permitan el restablecimiento de la salud y consecuentemente el derecho a la vida; denegación arbitraria de matrícula; obstrucción, restricción o negación de la enseñanza primaria básica; omisión del Estado para promover progresivamente el acceso a servicios básicos; entre otras.

En tercer lugar, se ubican los *derechos específicos de niñez y adolescencia*, los hechos violatorios más destacados se encuentran: tratos crueles, inhumanos o degradantes; malos tratos; detención ilegal y arbitraria; carencia total o parcial de construcciones o instalaciones accesibles para personas con discapacidad; omisión del Estado para asegurar el goce adecuado de petición de alimentos; entre otros.

En cuarto lugar, se ubican los *derechos específicos de las mujeres*, los hechos violatorios más destacados se encuentran: maltrato físico, psicológico o moral ejercido por agentes públicos prevaleciendo de sus prerrogativas; malos tratos; realización de registros indebidos; omisión o negligencia estatal para la protección de la mujer en centros especiales; persecuciones e indagaciones ilegales; actos ilegales o atentatorios contra la estabilidad laboral; acoso laboral ejercido en los centros de trabajo; tratos crueles, inhumanos o degradantes; uso desproporcionado de la fuerza; entre otros.

En quinto lugar, se ubican los *derechos específicos de las personas privadas de libertad*, más destacados se encuentran: condiciones inadecuadas de saneamiento que afectan la salud; condiciones inadecuadas para guardar detención provisional; negligencia u omisión del Estado ante abusos, descuido o maltrato ocurrida en el seno familiar, centros públicos o privados responsables de su cuidado personal; denegación de atención médica; omisión de adoptar medidas para dotar de medicamentos especiales o esenciales; falta de atención médica adecuada y suficiente ante enfermedades oportunistas; omisión o negligencia para su traslado a un centro hospitalario; inobservancia del derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; denegación o restricciones ilegales o arbitrarias para recibir visitas de familiares; registros indebidos e indecorosos a sus visitantes; entre otros.

En sexto lugar, se ubican los *derechos de la persona con relación al medio ambiente*, entre los hechos violatorios más destacados se encuentran: omisión o negligencia para regular actividades que producen contaminación electromagnética; omisión del Estado para prevenir y reducir la contaminación del medio ambiente; autorización para construcción de obras particulares de infra estructura que tienen como resultado la destrucción, deterioro o degradación del medio ambiente y afectaciones a otros derechos individuales o de la colectividad; contaminación de suelo y aire; contaminación en lugares cercanos a núcleos urbanos y áreas de trabajo y afectaciones a otros derechos individuales o de la colectividad; impedir u omitir la consulta en proyectos que impactan sobre el medio ambiente; omisión o negligencia en la investigación y sanción por incumplimiento de las normas y ambientales; entre otros.

En séptimo lugar, se ubican los *derechos específicos de las personas adultas mayores*, entre los hechos violatorios más destacados se encuentran: retraso excesivo en el trámite y resolución de pensiones; suspensión ilegal del trámite de pensiones o beneficios de seguridad social; actos atentatorios contra la estabilidad laboral de los trabajadores públicos y privados; denegación ilegal o arbitraria de beneficios laborales; dilación injustificada para la realización de intervenciones quirúrgicas; entre otros.

En octavo lugar, se ubican los *derechos específicos de las personas viviendo con VIH*, los hechos violatorios más destacados se encuentran: ausencia o deficiencia de acciones para la disminución del riesgo y la atención de la enfermedad en centros especiales; falta de atención médica adecuada y suficiente ante enfermedades oportunistas; denegación o trato discriminatorio en el acceso a servicios de salud; falta de continuidad en tratamientos específicos para el restablecimiento y conservación de la salud; omisión de adoptar medidas para dotar a las personas privadas de libertad de medicamentos especiales o esenciales; malos tratos en el ámbito laboral; omisión o negligencia del Estado para brindar a la mujer atención integral en salud tratamiento adecuado y oportuno; trato discriminatorio en el acceso a servicios de salud; uso y manejo inadecuado de información relacionada con el diagnóstico de la enfermedad; entre otras.

En noveno lugar, se ubican los *derechos específicos de las personas con discapacidad*, los hechos violatorios más destacados se encuentran: malos tratos, discriminación por condición de discapacidad; denegación ilegal o arbitraria de los beneficios o prestaciones de seguridad social; omisión de establecer acciones afirmativas razonables para garantizar el ejercicio de los derechos y garantías en su lugar de trabajo en igualdad de condiciones con los demás; ausencia de planes para que las personas con discapacidad puedan tener acceso a un proyecto de vivienda digna conforme a sus necesidades específicas y sus habilidades especiales; carencia total o parcial de material y equipo necesario para la enseñanza, así como material o equipo especializado para el tratamiento o rehabilitación de personas con discapacidad; omisión o negligencia del Estado en el ámbito escolar que permitan la accesibilidad al auxilio de intérprete de lenguaje requerido en función de una discapacidad; entre otros.

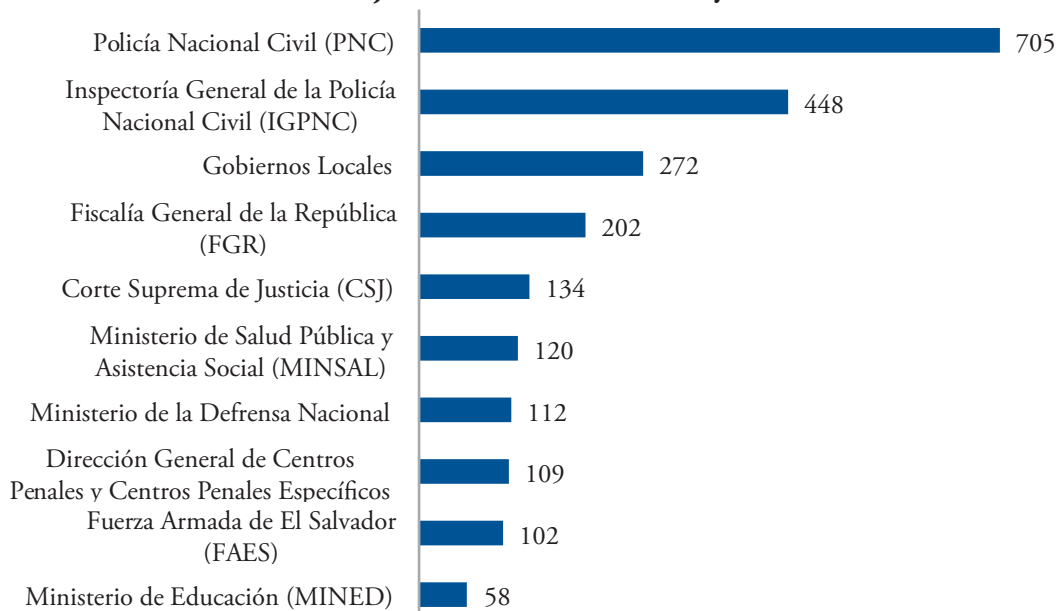
En décimo lugar, se ubican los *derechos específicos de las personas migrantes*, los hechos violatorios más destacados se encuentran: derecho de las personas migrantes a ser tratados de manera digna y sin discriminación; y omisión del Estado de realizar todas las acciones a su alcance para prevenir, investigar y sancionar todo tipo de maltrato, abuso o explotación cometidos por un agente de autoridad o particulares contra personas extranjeras.

#### ■ *Instituciones estatales más señaladas y notificadas en resoluciones iniciales*

En cuanto a las instituciones estatales que han sido señaladas como presuntas violadoras a derechos humanos, la Policía Nacional Civil se ubicó en el primer lugar con 705; seguida de la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil con 448; Gobiernos locales con 272; Fiscalía General de la República con 202; la Corte Suprema de Justicia con 134; el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con 120; el Ministerio de la Defensa Nacional con 112; Dirección General de Centros Penales; la Dirección General de Centros Penales y Centros Penitenciarios Específicos con 109; la Fuerza Armada de El Salvador con 102 entre otras.

Se advierte que en la siguiente gráfica, la frecuencia de los señalamientos sobre las instituciones públicas que presuntamente han cometido violaciones a los derechos humanos, no corresponde con el total de resoluciones iniciales, debido a que en cada expediente pueden existir más de un señalamiento a una o varias instituciones.

**Gráfica N° 8**  
**Instituciones públicas más recomendadas y notificadas en resoluciones**  
**iniciales 1 de junio de 2012 al 31 de mayo de 2013**



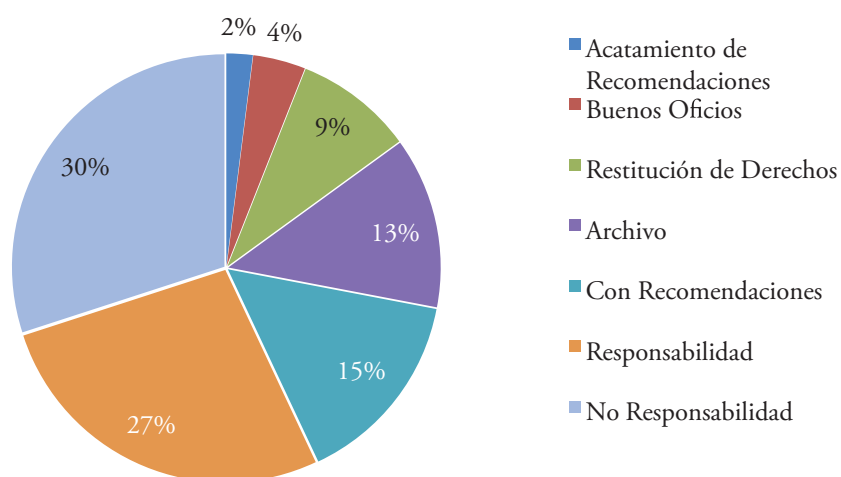
*Fuente: Datos proporcionados por el Departamento de Seguimiento, PDDH*

#### iv. Resoluciones finales

La resolución final es un pronunciamiento que se emite en la fase de investigación en la que se declara la responsabilidad o no responsabilidad por violación a derechos humanos, ya sea por el incumplimiento del deber de respeto o garantía, la restitución del derecho por la gestión de buenos oficios, el acatamiento o incumplimiento de las recomendaciones iniciales emitidas, la inobservancia a la Ley de la Procuraduría o el archivo del caso. Lo anterior no limita las posibilidades declarativas y resolutivas, ni impide activar las demás facultades constitucionales y legales de esta Institución para una efectiva protección de los derechos humanos y libertades fundamentales.

Dentro del período analizado, la cantidad de resoluciones finales firmadas y notificadas a las autoridades señaladas, víctimas y denunciantes asciende a 833 resoluciones. De las cuales, el 30% fueron resoluciones de no responsabilidad; 27% resoluciones de responsabilidad; 15% con recomendaciones; 13% de archivo; 9% de restitución de derecho; 4% de buenos oficios; y 2% de acatamiento de recomendaciones.

**Gráfico N° 9**  
**Tipo de resolución final emitida**



*Fuente: Reporte del Departamento de Seguimiento, PDDH*

A continuación, se presenta en un cuadro, las actividades de investigación realizadas por el Departamento de Procuración en el período analizado, por tipo de diligencias de investigación y derechos específicos, es de aclarar que en una resolución final se pueden realizar diferentes tipos de diligencias de investigación.

<b>Cuadro N° 15</b> <b>Diligencias de investigación por derechos específicos en el Departamento de San Salvador</b> <b>1 de junio de 2012 al 31 de mayo de 2013</b>									
Nombre de la Institución/Diligencia de investigación	Entrevistas	Estudio de expedientes administrativos	Estudio de expedientes judiciales	Inspecciones	Oficios	Reuniones	Verificación de audiencias	Verificación <i>in situ</i>	Total
Derechos civiles y políticos	201	190	21	0	23	0	5	2	<b>442</b>
Derechos de la niñez y adolescencia	61	128	7	0	8	1	0	4	<b>209</b>
Derecho a la protección del medio ambiente	73	47	15	0	15	0	23	36	<b>209</b>
Derechos económicos, sociales y culturales	152	5	1	1	37	1	0	1	<b>198</b>
Derechos humanos de las mujeres	45	23	10	2	21	0	0	0	<b>101</b>



<b>Cuadro N° 15</b> <b>Diligencias de investigación por derechos específicos en el Departamento de San Salvador</b> <b>1 de junio de 2012 al 31 de mayo de 2013</b>									
Nombre de la Institución/Diligencia de investigación	Entrevistas	Estudio de expedientes administrativos	Estudio de expedientes judiciales	Inspecciones	Oficios	Reuniones	Verificación de audiencias	Verificación <i>in situ</i>	Total
Derechos específicos de las personas privadas de libertad	2	2	0	0	2	0	0	0	4
Derechos específicos de las personas viviendo con VIH/SIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Derechos de las personas con discapacidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Derechos de la Comunidad LGBTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>534</b>	<b>395</b>	<b>54</b>	<b>3</b>	<b>104</b>	<b>2</b>	<b>28</b>	<b>43</b>	<b>1163</b>

*Fuente: Reporte Departamento de Procuración y Procuradurías Adjuntas Específicas.*

En el cuadro anterior, se observa que de las 1,163 diligencias de investigación a instituciones estatales señaladas como presuntas violaciones a derechos humanos, los derechos civiles y políticos aglutinan el mayor número de diligencias con 442, seguido de los derechos de la niñez y adolescencia y el derecho al medio ambiente con 209 cada uno, los derechos económicos, sociales y culturales con 198, y los derechos específicos de la mujer con 101. Asimismo, las entrevistas ocupan el primer lugar en las acciones de investigación con 534, seguido de los estudios de expedientes administrativos con 395, oficios con 104, estudio de expedientes judiciales con 54, verificaciones *in situ* con 43, verificaciones de audiencias con 28 e inspecciones con 3.

A continuación, el detalle de verificaciones realizadas a instituciones públicas en este período.

<b>Cuadro N° 16</b> <b>Verificaciones a instituciones públicas en el Departamento de San Salvador</b> <b>1 de junio de 2012 al 31 de mayo de 2013</b>									
Nombre de la Institución/Diligencia de investigación	Entrevistas	Estudio de expedientes administrativos	Estudio de expedientes judiciales	Inspecciones	Oficios	Reuniones	Verificación de audiencias	Verificación <i>in situ</i>	Total
PNC	119	170	0	0	18	0	4	6	317
JUZGADOS	43	0	49	0	16	0	8	1	117
FGR	48	40	2	0	16	0	4	0	110

**Cuadro N° 16**  
**Verificaciones a instituciones públicas en el Departamento de San Salvador**  
**1 de junio de 2012 al 31 de mayo de 2013**

Nombre de la Institución/Diligencia de investigación	Entrevistas	Estudio de expedientes administrativos	Estudio de expedientes judiciales	Inspecciones	Oficios	Reuniones	Verificación de audiencias	Verificación <i>in situ</i>	Total
INSPECTORÍA GENERAL DE LA PNC	37	54	5	0	1	0	10	0	107
PGR	28	27	0	0	3	0	0	0	58
MINSAL	32	1	0	0	4	0	0	3	40
MESA DE LA DEFENSA NACIONAL	10	18	0	0	0	0	0	0	28
ISSS	19	0	0	0	5	0	0	0	24
ALCALDÍAS	14	5	0	0	3	0	0	1	23
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	8	8	2	0	2	0	2	0	22
ISTA	12	8	0	0	0	0	0	0	20
UES	11	8	0	0	0	0	0	0	19
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	6	6	1	1	2	1	0	0	17
ANDA	12	1	0	0	1	0	0	0	14
MINISTERIO RR. EE.	10	4	0	0	0	0	0	0	14
DGCP	4	4	0	0	1	0	0	0	9
ISNA	4	3	0	0	1	0	0	1	9
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	6	0	0	0	2	0	0	0	8
SIGET	0	0	0	0	0	0	0	8	8
CENTRO PENITENCIARIO LA ESPERANZA	4	4	0	0	0	0	0	0	8
SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO	2	0	0	0	4	0	0	0	6
TRIBUNAL DE INVESTIGACIONES PNC	2	4	0	0	0	0	0	0	6
MOP	3	2	0	0	0	0	0	0	5
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	5	0	0	0	0	0	0	0	5
TRIBUNAL DE APELACIONES PNC	2	3	0	0	0	0	0	0	5

**Cuadro N° 16**  
**Verificaciones a instituciones públicas en el Departamento de San Salvador**  
**1 de junio de 2012 al 31 de mayo de 2013**

Nombre de la Institución/Diligencia de investigación	Entrevistas	Estudio de expedientes administrativos	Estudio de expedientes judiciales	Inspecciones	Oficios	Reuniones	Verificación de audiencias	Verificación <i>in situ</i>	Total
CENTRO DE INSERCIÓN DE MENORES TONACATEPEQUE	0	4	0	0	1	0	0	0	5
DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR	2	0	0	0	2	0	0	0	4
TRIBUNAL DE LA CARRERA DOCENTE	3	1	0	0	0	0	0	0	4
RNPN	2	2	0	0	0	0	0	0	4
FAES	1	2	0	0	0	0	0	0	3
HOSPITAL NACIONAL ROSALES	2	0	0	0	1	0	0	0	3
ASAMBLEA LEGISLATIVA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
CIUDAD MUJER LA LIBERTAD	0	0	0	2	0	0	0	0	2
VMT	2	0	0	0	0	0	0	0	2
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	1	0	0	0	1	0	0	0	2
JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA	1	0	0	0	1	0	0	0	2
ISRI	1	0	0	0	1	0	0	0	2
ANSP	0	2	0	0	0	0	0	0	2
FONDO DE LISIADOS DE GUERRA	1	1	0	0	0	0	0	0	2
JUNTA DE LA CARRERA DOCENTE	0	1	0	0	1	0	0	0	2
IPSFA	1	0	0	0	0	0	0	0	1
FSV	1	0	0	0	0	0	0	0	1
CNR	1	0	0	0	0	0	0	0	1
TRIBUNAL DISCIPLINARIO PNC	1	0	0	0	0	0	0	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>463</b>	<b>386</b>	<b>58</b>	<b>3</b>	<b>87</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>20</b>	<b>1046</b>

*Fuente: Reporte de verificaciones a instituciones públicas, Departamento de Procuración, PDDH*

El anterior cuadro refleja que la mayoría de las diligencias de investigación se encuentran dirigidas a las instituciones públicas más denunciadas y señaladas por medio de resoluciones iniciales. De esta manera, se posiciona nuevamente como la principal entidad estatal más investigada a la Policía Nacional Civil con 317 diligencias; seguido de los Juzgados con 117; la Fiscalía General de la República con 110; la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil con 107; la Procuraduría General de la República con 58; el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con 40; entre otras.

A continuación se destacan algunos casos atendidos por las procuradurías adjuntas específicas ante diferentes instancias públicas solicitando información e instando a la adopción de medidas para proteger o garantizar los derechos humanos.

*La Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales*, realizó gestiones para atender diferentes problemáticas, entre ellas: intervención a través de la mediación en problemas que afectaron los derechos laborales y libertades sindicales, tales como el reclamo de indemnizaciones y prestaciones laborales, apoyo a negociaciones del contrato colectivo y suspensión de salarios; problemas en el servicio de salud pública, tales como el desabastecimiento de medicamentos, negligencia médica y no indemnización, falta de atención hospitalaria y disponibilidad de medicamentos para pacientes hemofílicos; prestación del servicio de agua potable en comunidades acompañando a movimientos ciudadanos en la solicitud ante las autoridades correspondientes para ejecutar proyectos de agua en comunidades, y problemas sobre la legalidad y administración del abastecimiento del agua; reuniones de seguimiento con representantes de transportistas para tratar diferentes asuntos que afectaron al sector transporte; casos de personas adultas mayores que reclamaron la protección de sus derechos a consecuencia del abandono familiar, cobros excesivos de servicios públicos y dificultades en el cobro de pensiones; problemas en el servicio de seguridad social por supuestas afectaciones al derecho de recibir la cuota patronal de previsión social y otros beneficios; atención a personas que sufren de la amenaza o se encuentran desalojadas; casos de personas con VIH con problemas de acceso al derecho a la vivienda; reuniones y seguimiento a los casos de desalojo de las ventas informales de la Alcaldía de San Salvador y Sonsonate.

*La Procuraduría Adjunta para la Defensa del Derecho del Medio Ambiente*, realizó gestiones para atender casos relacionados con diferentes problemáticas ambientales y de riesgo de desastre a nivel nacional, entre las que se mencionan: revisión de procedimientos en atención a la inadecuada atención de denuncias en materia ambiental, específicamente en casos o situaciones donde se presume una posible contaminación electromagnética a consecuencia de la instalación de una serie de antenas de telefonía celular a nivel nacional; se estableció una serie de criterios y lineamientos institucionales para la atención de casos relacionados con la protección del medio ambiente y de gestión de riesgo de desastre, se giraron directrices para la verificación y atención de casos o situaciones de emergencia a nivel nacional a consecuencia de las lluvias, en ese sentido se elaboró una guía de atención el cual fue distribuido a nivel nacional; acompañamiento y conducción a una serie de casos emblemáticos, entre ellos, el caso de Baterías Record, la situación de riesgo a consecuencia del deterioro del “Puente El Coro”, ubicado en la zona de “La Chacra”, municipio y departamento de San Salvador, el caso de la Presa Hidroeléctrica “El Chaparral”, los problemas de contaminación a consecuencia de la minería metálica, específicamente el caso de la mina “Cerro Blanco”, ubicada en el municipio de Jutiapa, Guatemala, el caso de la construcción de bordas a lo largo del cauce del Río Paz a consecuencia de los desbordamientos del mismo en la zona de San Francisco Menéndez en el Municipio y departamento de Ahuachapán, la problemática generada a consecuencia de la construcción de un Hiper Paiz en la zona

de “La Gloria”, en el municipio de Mejicanos, la problemática del relleno sanitario que se pretende construir en el municipio y departamento de Ahuachapán.

*La Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer y Familia*, interpuso sus buenos oficios ante instituciones públicas que les corresponden velar por los derechos de las mujeres, en casos de violencia intrafamiliar y violencia psicológica; acciones de protección a favor de los derechos de las mujeres, tales como la apertura de expedientes en casos de salud; derecho de acceso a la justicia; de petición; al derecho a la intimidad por divulgación de información privada; derecho de vivienda; violación a una vida libre de violencia física, psicológica y sexual; protección de su integridad física y psíquica; al debido proceso administrativo entre otros. Además se acompañó a las víctimas a las respectivas audiencias de Violencia Intrafamiliar; incumplimiento de los Deberes de Asistencia Económica y por el supuesto delito de Homicidio Agravado en perjuicio de un ser humano en formación

*La Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Niñez y Juventud*, realizó gestiones para atender casos en el que se protegieron los derechos de la niñez y juventud, tales como el establecimiento de criterios y lineamientos para la atención adecuada, como el caso que se brindó apoyo junto con la Delegación Local de Santa Rosa de Lima a 169 estudiantes del Centro Escolar Pasaquinita de La Unión, que se encontraban en una situación de vulneración de derechos humanos; además se han atendido a varias personas que buscan protección de sus derechos a las que se les ha orientado oportunamente. En este punto destaca la entrevista realizada a parientes de Alisson Renderos, la atleta vicentina desaparecida que posteriormente encontraron fallecida; se coordinó con el Departamento de Procuración la verificación del proceso de amparo en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia iniciado a favor de los hermanos Cepero Sandoval por la señora Meliá de María Villeda, para completar insumos para la elaboración de resolución final; se realizó reunión de trabajo con funcionarios del ISRI, en la cual los padres, madres y representantes de las niñas, niños y adolescentes no videntes plantearon directamente a la señora presidenta del ISRI, a su equipo y a los representantes del MINED y MINSAL la problemática, los acuerdos de esta reunión se consignaron en un acta; se estableció apoyo técnico para la formulación de propuestas girando directrices necesarias a las Delegaciones Departamentales y Locales para monitorear el funcionamiento del Plan Interinstitucional de Prevención de la Violencia Escolar 2012.

*La Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Civiles e Individuales*, solicitó la intervención de la UTE, para que brindaran la protección de víctimas y testigos en un caso, una de ellas mujer y menor de edad y de la Fiscalía General de la República en el mismo caso; intervención en otros casos y como ejemplo el del ex director de Hommies Unidos, para su incorporación al programa de protección a través de oficio; esta Procuraduría Adjunta tuvo un rol importante a través de pronunciamientos públicos sobre la crisis institucional derivada del conflicto entre la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional, por las sentencias emitidas por esta última donde se declararon inconstitucionales los nombramientos de magistrados y magistradas para la Corte Suprema de Justicia, de las llamadas generaciones de 2006 y 2012, además del nombramiento del licenciado Astor Escalante como Fiscal General de la República.

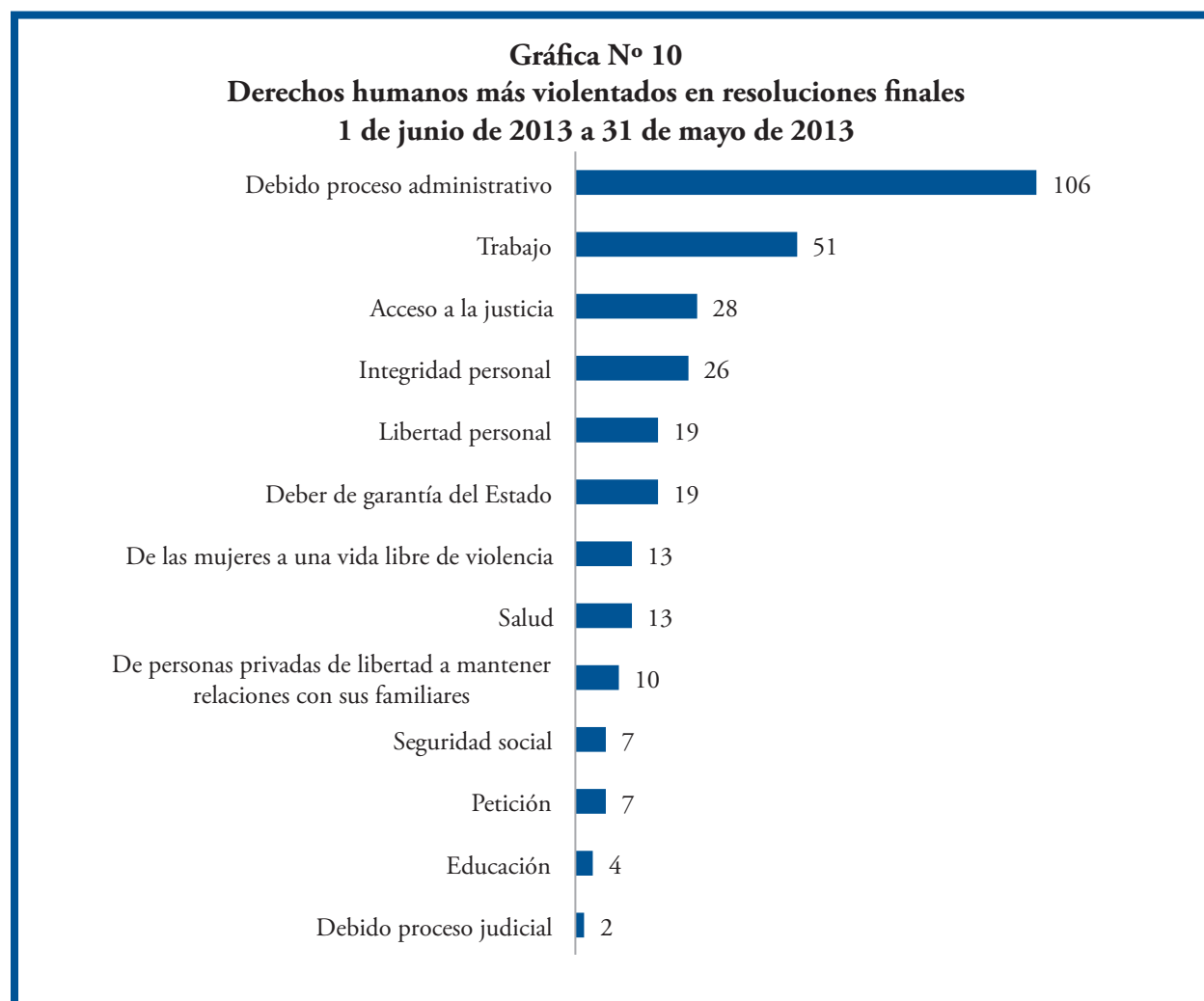
A continuación, se muestra el detalle estadístico por derecho humano y por institución pública mayormente señalada con responsabilidad, por considerar que son los señalamientos de mayor gravedad.



### ■ *Derechos humanos más violentados en resoluciones finales*

El resultado de las investigaciones y el consolidado de declaraciones de responsabilidad pública por violaciones a los derechos humanos en las resoluciones finales, ubicaron al derecho al debido proceso administrativo como el principal derecho más violentado con 106 declaraciones de responsabilidad, seguido del derecho al trabajo con 51; el derecho al acceso a la justicia con 28; el derecho a la integridad personal con 26; el derecho a la libertad personal con 19; el deber estatal de garantía con 19; el derecho de las mujeres a una vida libre sin violencia con 13; el derecho a la salud con 13; el derecho de las personas privadas de libertad a mantener relaciones con sus familiares con 10; entre otros.

A continuación, se presenta en una gráfica la frecuencia de los derechos humanos que fueron más violentados durante el período que comprende este informe.



*Fuente: Datos proporcionados por el Departamento de Seguimiento, PDDH.*

■ *Instituciones públicas mayormente señaladas con responsabilidad en resoluciones finales.*

En el período, la Policía Nacional Civil se posicionó como la primera instancia que fue mayormente señalada con responsabilidad en resoluciones finales, con 76 casos; seguido de la Corte Suprema de Justicia con 42; los Gobiernos Locales con 37; el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública con 29; la Dirección General de Centros Penales con 29; la Fuerza Armada de El Salvador con 29; el Ministerio de la Defensa Nacional con 23; la Fiscalía General de la República con 14; Dirección General de Migración y Extranjería con 13; el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con 13; Academia Nacional de Seguridad Pública con 12; la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil con 11; el Ministerio de Educación con 11; Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano con 11, entre otros. A continuación, se presenta la siguiente gráfica con los datos relacionados anteriormente.



*Fuente: Datos proporcionados por el Departamento de Seguimiento, PDDH*

## ■ *Función revisora de proyectos de resolución*

La función revisora se define como un mecanismo de control de calidad que tiene como objetivo verificar que los proyectos se encuentren redactados formal y sustancialmente aptos para la firma del Procurador o Procuradora o de quien realice sus funciones. De acuerdo a la reglamentación interna, los proyectos pueden ser revisados o corregidos de conformidad con las directrices emanadas del titular o las Procuradurías Adjuntas, por la Unidad Técnica o persona delegada para tal efecto.

En el caso de los proyectos de resolución, el señor Procurador ha delegado a la Unidad Técnica del Despacho (UTD) la revisión de los proyectos elaborados por las diferentes dependencias operativas del Sistema de Protección de Derechos Humanos. En el período que comprende este informe, la UTD recibió en total 1,088 proyectos de resolución, de los cuales se trabajaron 1,052 y se enviaron a firma del señor Procurador 1,059. Este último dato, se desglosa de la siguiente manera: 447 resoluciones iniciales y 612 resoluciones finales, entre las que se encuentran resoluciones de archivo, buenos oficios, revisión, restitución y rectificaciones.

### **v. Seguimiento a las recomendaciones emitidas en resoluciones finales e informes especiales**

En la fase de seguimiento se verifica el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en resoluciones finales, posicionamientos públicos, informes especiales y situacionales u otro tipo de pronunciamiento. Excepcionalmente, el seguimiento incluye las recomendaciones emitidas en resoluciones iniciales, en el caso se haya comprobado en esta etapa la violación a derechos humanos.

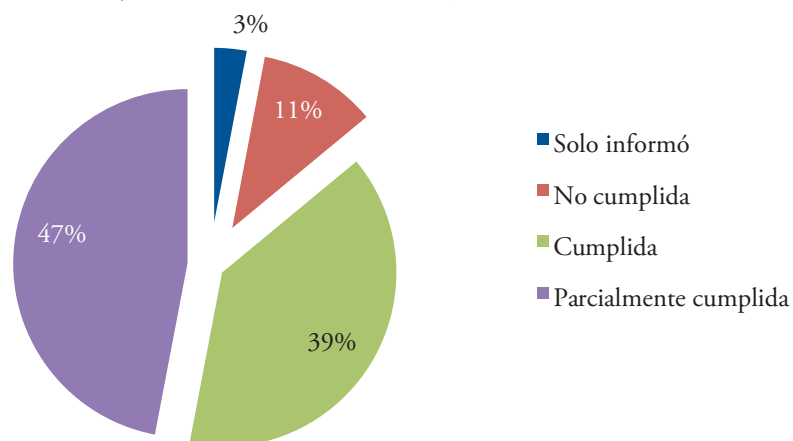
En la labor de verificación participan el Departamento de Seguimiento en San Salvador y las Delegaciones Departamentales y Locales en su comprensión territorial, quienes realizan las siguientes acciones: solicitar informes; entrevistar denunciantes, víctimas, funcionarias y funcionarios o agentes del Estado; verificar procesos judiciales o administrativos; realizar inspecciones; y todas aquellas que se consideren necesarias para verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas.

El resultado de estas acciones se traduce en el grado de cumplimiento de las recomendaciones dictadas por esta Procuraduría, desglosadas en cuatro categorías, a saber: cumplimiento, no cumplimiento, parcialmente cumplida y emisión de informes.

Así, en el período que comprende este Informe, se constató el cumplimiento de 66 recomendaciones; el no cumplimiento de 19; el cumplimiento parcial de 80; y 06 casos donde solamente se informó de lo actuado<sup>2</sup>. En la siguiente gráfica se presenta la proporción de los distintos grados de acatamiento:

<sup>2</sup> Véase el detalle en el apartado a anexos.

**Gráfica N° 12**  
**Grado de acatamiento de recomendaciones en resoluciones finales**  
**1 de junio de 2012 a 31 de mayo de 2013**



*Fuente: Datos proporcionados por el Departamento de Seguimiento, PDDH*

A continuación, se presenta en un cuadro, las respuestas a las recomendaciones de las principales autoridades públicas recomendadas y notificadas.

<b>Cuadro N° 17</b> <b>Grado de acatamiento de recomendaciones en resoluciones finales por instituciones públicas</b> <b>mayormente señaladas</b> <b>1 de junio de 2012 al 31 de mayo de 2013</b>				
<b>Autoridad recomendada</b>	<b>Cumplida</b>	<b>No cumplida</b>	<b>Parcialmente cumplida</b>	<b>Sólo Informe</b>
Inspección General de la Policía Nacional Civil	15	0	13	1
Policía Nacional Civil	6	3	4	0
Fiscalía General de la República	7	2	8	1
Ministerio de Defensa	5	1	6	0
Corte Suprema de Justicia	5	0	3	0
Gobiernos Locales	4	1	1	0
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	1	3	1
Dirección General de Centros Penales	0	1	4	0
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>9</b>	<b>42</b>	<b>3</b>

*Fuente: Datos proporcionados por el Departamento de Seguimiento, PDDH*

El anterior cuadro, refleja que en su mayoría, las instituciones estatales cumplen con las recomendaciones dictadas por esta Procuraduría. Sin embargo, se observa que hay una frecuencia importante respecto a las recomendaciones parcialmente cumplidas, es decir, hay una cierta tendencia de las autoridades señaladas de no adoptar todas las medidas necesarias para acatar las recomendaciones emitidas. También, fueron pocas las instituciones que incumplieron las recomendaciones, entre ellas: la Policía Nacional Civil (2), la Fiscalía General de la República (3), entre otras<sup>3</sup>.

En cuanto al seguimiento a otro tipo de pronunciamientos públicos, se verificó el cumplimiento de recomendaciones en un informe especial y un pronunciamiento. La tendencia de la actuación estatal fue de cumplimiento a los señalamientos emitidos. A continuación el detalle:

- Informe Situacional sobre el Embarazo en Adolescentes y su impacto en el Derecho a la Educación: dos recomendaciones parcialmente cumplidas por el Ministerio de Educación (MINED) y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Niñez y la Adolescencia (ISNA);
  - Pronunciamiento respecto de la situación de riesgo que representa el deterioro de la obra de paso: “Puente el Coro”, ubicado sobre el Río Acelhuate, zona de “La Chacra”, municipio de San Salvador: dos recomendaciones parcialmente cumplidas por la Alcaldía Municipal de San Salvador y el Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP).
- *Incumplimiento de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos*

El seguimiento a las recomendaciones también evidenció el incumplimiento de las obligaciones de colaboración de las instituciones públicas a la labor de protección de derechos humanos realizada por esta Procuraduría. En este sentido, se observaron entidades públicas que obstaculizaron la labor institucional, ya sea no enviando informes solicitados ni colaborando con las acciones de protección promovidas por esta Institución. Así, en el período que abarca este informe, se emitieron un total de 66 resoluciones de responsabilidad.

<b>Cuadro N° 18</b> <b>Reporte de resoluciones finales firmadas de responsabilidad en las que</b> <b>se señaló el incumplimiento a la Ley de la PDDH</b> <b>1 de junio de 2012 al 31 de mayo de 2013</b>		
<b>N°</b>	<b>Autoridad</b>	<b>Frecuencia</b>
1	Inspectoría General de la PNC	12
2	Inspectoría General de la Fuerza Armada	3
3	Alcaldía Municipal de Sonsonate	2
4	Alcaldía Municipal de Acajutla, Sonsonate	2
5	Dirección de la Secretaría de Inclusión Social	1
6	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Región Occidental	1
7	Gerencia de Áreas Naturales protegidas del MARN	1

3 Véase el detalle en el apartado de anexos.



**Cuadro N° 18**  
**Reporte de resoluciones finales firmadas de responsabilidad en las que**  
**se señaló el incumplimiento a la Ley de la PDDH**  
**1 de junio de 2012 al 31 de mayo de 2013**

N°	Autoridad	Frecuencia
8	Dirección General de la Policía Nacional Civil	1
9	Delegación de la Policía Nacional Civil, Ciudad Delgado	1
10	Delegación de la Policía Nacional Civil, Usulután	1
11	Delegación de la Policía Nacional Civil, Morazán	1
12	Dirección de la Unidad de Salud de Apopa	1
13	Coordinación del Sistema Básico Integral de Salud, Norte de San Salvador, del Ministerio de Salud	1
14	Hospital Nacional San Pedro, Usulután	1
15	Coordinación de Saneamiento Ambiental del Hospital Nacional de Jiquilisco, Usulután, del Ministerio de Salud	1
16	Sección Traslado de Reos y Menores, Corte Suprema de Justicia	1
17	Sección de Investigación Profesional de la Corte Suprema de Justicia	1
18	Comisión del Servicio Civil de la Corte Suprema de Justicia	1
19	Dirección del Instituto de Medicina Legal “Dr. Roberto Masferrer”	1
20	Juzgado Especializado de Instrucción Santa Ana	1
21	Juzgado de Menores, Chalatenango	1
22	Fiscalía General de la República	1
23	Fiscalía General de la República, oficina de Soyapango	1
24	Fiscalía General de la República, oficina de Ahuachapán	1
25	Concejo Municipal de la Alcaldía de Soyapango	1
26	Alcaldía Municipal de Dolores, Cabañas	1
27	Alcaldía Municipal de Ahuachapán	1
28	Alcaldía Municipal de Usulután	1
29	Concejo Municipal de Usulután	1
30	Alcaldía Municipal de Chalatenango	1
31	Concejo Municipal de Chalatenango	1
32	Cuerpo de Agentes Municipales de Chalatenango	1
33	Alcaldía Municipal de Concepción Quezaltepeque, Chalatenango	1
34	Alcaldía Municipal de Guatajiagua, Morazán	1
35	Dirección Nacional de la Academia Nacional de Seguridad Pública	1
<b>Total</b>		<b>51</b>

*Fuente: Datos proporcionados por el Departamento de Seguimiento, PDDH*

## vi. Medidas cautelares

La facultad de emitir medidas cautelares se encuentra regulada en el artículo 36 de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Dichas medidas se aplican en casos o situaciones de extrema gravedad o urgencia, con la finalidad de evitar que se consuman daños irreparables a la dignidad de las personas. En la doctrina institucional, también son denominadas como “garantías cuasi jurisdiccionales de carácter preventivo”, que no prejuzgan la investigación y la declaración de responsabilidad en la resolución final<sup>4</sup>.

Para este período, se emitieron 5 resoluciones con medidas cautelares dirigidas a diversas autoridades públicas que evitaron la consumación de daños irreparables en casos o situaciones relacionados con los siguientes derechos:

- Derecho a la vivienda y de acceso a la justicia;
- Derecho a la vida e integridad de las personas;
- Derecho a la vivienda y de acceso a la justicia;
- Derecho a la vida e integridad personal;
- Derecho a la vivienda y derecho a un debido proceso administrativo;

A continuación, se presentan breves comentarios sobre dichas resoluciones emitidas.

Medida cautelar emitida para evitar que se consuman daños irreparables a la vivienda y al debido proceso judicial de familias que habitan en el Caserío Barra de Santiago, Cantón del mismo nombre, de la Villa de Jujutla, departamento de Ahuachapán. Expediente: AH-0037-2008, del 26 de julio de 2012.

El Juez de lo Civil de Ahuachapán, doctor Julio César Flores, emitió resolución en el expediente 403-DIV-07 en la que ordena dársele cumplimiento al fallo de la Sentencia Definitiva dictada en el Juicio Civil Ordinario Reivindicatorio, comisionando al señor Juez de Paz de Jujutla, licenciado Ángel Ernesto Henríquez Méndez, quien llevaría a cabo la desocupación del inmueble objeto del litigio; por lo que, reprogramó la realización del lanzamiento para el día treinta y uno de julio de dos mil doce.

Esta Procuraduría en el ejercicio de sus facultades legales emitió las siguientes medidas cautelares al Juez de lo Civil de Ahuachapán:

- Suspender la diligencia programada para treinta y uno de julio de dos mil doce, por el Juzgado de Paz de Jujutla, departamento de Ahuachapán, para evitar que se consumen daños irreparables a las personas y concederles un tiempo prudencial en el que las instituciones del Gobierno Central así como del Gobierno Local, en el marco de sus competencias, puedan encontrar alternativas de solución en el presente caso, con lo que también se estaría previniendo además graves afectaciones a los derechos humanos de las familias sujetas al lanzamiento.

<sup>4</sup> Resolución de medidas cautelares, Expediente CA-0025-2011.

Medidas cautelares emitidas para evitar que se consuman daños irreparables a la vida e integridad de las personas que forman parte de una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos. Expediente: SS-0353-2012, del 9 de agosto de 2012.

Mediante denuncia escrita esta Procuraduría tuvo conocimiento que el señor José Ramón Villalta, Director Ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia (ISD) recibió correo electrónico titulado “Vendidos (...)”, en el que se expresaron amenazas en contra suya y de otros miembros de la misma organización, entre ellos la señora Iliana Segovia, subdirectora, René Landaverde, coordinador de reforma política y Carlos Meléndez, coordinador de región, de la lectura del referido mensaje se puede inferir que las personas mencionadas han sido vigiladas, ya que se mencionan rutas, actividades y detalles de sus labores cotidianas, lo que denota que podrían encontrarse en una verdadera situación de vulnerabilidad.

Esta Procuraduría en el ejercicio de sus facultades legales emitió las siguientes medidas cautelares:

- Al entonces Director General de la Policía Nacional Civil, General de División Francisco Ramón Salinas que adopte de inmediato las acciones de su competencia que estimará necesarias, de común acuerdo con las presuntas víctimas, en orden a garantizar dichos derechos.
- Al entonces Fiscal General de la República, Romeo Benjamín Barahona Meléndez y al referido Director de la PNC, que con carácter de urgente, investiguen de manera imparcial, exhaustiva y efectiva las amenazas hechas en contra de los señores José Ramón Villalta, René Landaverde Hernández, Carlos Meléndez y la señora Iliana Segovia, miembros de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), a efecto que sea posible identificar a los responsables, juzgarlos y sancionarlos según el marco legal vigente.

Medida cautelar emitida para evitar que se consuman daños irreparables a la vivienda y al debido proceso judicial de familias que habitan en los Caseríos del Cantón La Leona, municipio de Intipucá, departamento de La Unión. Expediente: LU-0143-2012, del 23 de agosto de 2012.

Mediante oficio número 214 de fecha trece de agosto de dos mil doce, girado por la Jueza de Paz de Intipucá, licenciada Ingrid Liseth Barrios Castillo, en la que ordena hacer efectivo el desalojo del inmueble de manera voluntaria, en un plazo de ocho días, de lo contrario, se advierte que se procederá al desalojo mediante el uso de la fuerza pública.

Esta Procuraduría en el ejercicio de sus facultades legales emitió la siguiente medida cautelar a la Jueza de Paz de Intipucá, departamento de La Unión:

- Suspender la cualquier diligencia judicial programada, encaminada a realizar desalojos forzosos, en perjuicio de los habitantes de los caseríos del Cantón La Leona, municipio de Intipucá que a la fecha se les haya realizado audiencia de sentencia, así como de quienes está pendiente la mencionada diligencia judicial, para evitar la consumación de violación de derechos humanos y por existir una propuesta en proceso de ejecución, proveniente del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria ISTA, que dará mediante un proceso administrativo legal, una solución al problema de las personas que actualmente habitan el inmueble del que se les pretende desalojar.

Medida cautelar emitida para evitar que se consuman daños irreparables a la vida e integridad personal en perjuicio del Pbro. Antonio Rodríguez López Tercero. Expediente: SS-0431-2012.

A través de comunicado la Procuraduría tuvo conocimiento que la noche del cinco de septiembre de dos mil doce, fue avisado de un plan para asesinarlo por algunos grupos que no identificó, y al siguiente día pudo corroborar tal amenaza por fuentes que calificó como fidedignas, las cuales tampoco identificó, pero señaló que provenían de “varias inteligencias”. Agregó que “el grupo” al que le encargaron el plan de su asesinato, es decir, los que cobrarían y ejecutarían el hecho, se negaron a hacerlo y trasladaron la información a las autoridades, quienes la hicieron del conocimiento de algunas de sus amistades para que le avisaran.

Esta Procuraduría en el ejercicio de sus facultades legales emitió las siguientes medidas cautelares:

- Al entonces Director General de la Policía Nacional Civil, General de División Francisco Ramón Salinas Rivera, que adopte de inmediato todas las acciones de su competencia que estime necesarias, de común acuerdo con la presunta víctima, en orden a garantizar dichos derechos.
- Al entonces Fiscal General de la República, Romeo Benjamín Barahona Meléndez y al referido Director de la PNC, que con carácter de urgente, investiguen de manera imparcial, exhaustiva y efectiva la existencia de un plan de asesinato en contra del Pbro. Antonio Rodríguez López Tercero, Director del Servicio Social Pasionista, a efecto que sea posible identificar a los responsables, juzgarlos y sancionarlos según el marco legal vigente.

Medida cautelar emitida para evitar que se consuman daños irreparables a la vivienda y al debido proceso administrativo de diecinueve familias que habitan en El Cantón El Jícaro, Caserío El Espino del municipio de Jucuarán, en el Departamento de Usulután. Expediente: US-0180-2013, del 4 de enero de 2013.

Las víctimas conformadas por diecinueve familias fueron notificadas que según resolución emitida por el Juez Quinto de lo Mercantil, licenciado José María Estrada Álvarez, en el expediente número 310-EM-04, en la que adjudicó en pago a favor de Corporación T.S., Sociedad Anónima de Capital Variable, el inmueble que habitaban las mencionadas familias, por lo que consecuentemente se giró oficio de provisión al Juez de Paz de Jucuarán, licenciado Cecilio Reyes Díaz, para proceder a la entrega material del inmueble referido, quien giró oficio programando el lanzamiento para el día nueve de enero de dos mil doce, haciendo uso de la fuerza pública, advirtiendo la intervención de la Unidad de Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional Civil.

Esta Procuraduría en el ejercicio de sus facultades legales emitió las siguientes medidas cautelares al Juez Quinto de lo Mercantil:

- Suspender la diligencia programada para el nueve de enero de dos mil trece, por el Juzgado de Paz de Jucuarán, departamento de Usulután, para evitar que se consumen daños irreparables a las personas y concederles un tiempo prudencial en el que las instituciones del Gobierno Central así como del Gobierno Local, en el marco de sus competencias, puedan encontrar alternativas de solución en el presente caso, con lo que también se estaría previniendo además graves afectaciones a los derechos humanos de las familias sujetas al lanzamiento.



## b) Vigilancia de la situación de las personas privadas de libertad



*La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos realiza verificaciones a los centros de detención para corroborar las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad.*

Toda persona detenida, sin distinción de edad, tiene derecho a vivir en condiciones de detención en las que se respete sus derechos y es el Estado quien debe de garantizar el derecho a la vida, a la integridad personal y al respeto de su dignidad humana; es así como la PDDH, se encarga de vigilar la situación de las personas que se encuentran cumpliendo una pena privativa de libertad, le corresponde a ser notificado todo arresto y a cuidar que sean respetados los límites legales de la detención administrativa, de acuerdo a los artículos 194, romano I, ordinal 5º y 6º de la Constitución de la República; 11 ordinal 5º y 12 ordinal 3º y del 40 al 44 de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

La PDDH, tiene la potestad para ingresar sin previo aviso al centro de penitenciario, cárcel o cualquier lugar público donde se presume que se encuentra una persona privada de su libertad, a fin de garantizar el respeto de sus derechos; además le faculta para entrevistar a personas detenidas, sin interferencias y en forma privada.

Asimismo, se mantiene en vigilancia de la situación de las personas privadas de libertad se encuentra constituida como un mecanismo de protección dentro del Sistema de Protección de los Derechos Humanos. Este mecanismo que se concretiza en llevar un monitoreo periódico y realizar verificaciones, tiene por finalidad supervisar y vigilar las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad, así como realizar acciones dirigidas a corroborar, en un caso o situación particular, la existencia o no de violaciones a los derechos humanos de las mismas.



En este período 2012 – 2013, que comprende el presente Informe la Procuraduría ha realizado monitoreos y verificaciones permanentes en los diferentes centros penales, bartolinas policiales, centros hospitalarios, instalaciones militares, centros de reeducación para menores, resguardos u otros lugares en los que se encuentren personas privadas de libertad o sometidas a medidas de colocación institucional, juzgados de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena, consejos criminológicos, oficinas de traslado de reos y de todas aquellas instancias relacionadas con el sistema penitenciario en todo el territorio nacional. Teniendo como resultado lo siguiente:

<b>Cuadro N° 19</b> <b>Verificaciones a instituciones estatales responsables de las personas privadas de libertad</b> <b>1 de junio de 2012 al 31 de mayo de 2013</b>							
Delegaciones	Centros penitenciarios	Centros de internamiento para menores infractores	Centros de Resguardo y detención Administrativa y Bartolinas	Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena	Pabellones de reos en hospitales	Otras Instituciones Públicas Visitadas	Total
San Salvador**	97	8	106	8	20	13	252
San Miguel	25	0	80	3	0	17	125
Chalatenango	34	0	89	0	0	0	123
Soyapango*	26	6	90	0	0	0	122
Usulután	25	0	57	8	0	12	102
Cabañas	17	39	30	1	0	3	90
La Paz	10	0	74	0	0	0	84
Cuscatlán	27	0	33	7	0	3	70
La Unión	23	0	42	0	0	0	65
San Vicente	19	0	31	5	0	0	55
Santa Ana	27	0	23	0	0	0	50
Apopa*	4	10	36	0	0	0	50
Morazán	19	0	26	0	0	0	45
Ahuachapán	0	4	37	0	0	0	41
La Libertad	2	0	34	2	0	0	38
Sonsonate	10	0	28	0	0	0	38
Metapán*	12	0	7	0	0	5	24
Santa Rosa de Lima*	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>377</b>	<b>67</b>	<b>823</b>	<b>34</b>	<b>20</b>	<b>53</b>	<b>1374</b>

*Fuente: Datos proporcionados por las Delegaciones Departamentales y Locales\* y el Departamento de Verificación Penitenciaria e Internamiento de Menores\*\**

El anterior cuadro refleja, que durante éste período se realizaron un total de 1,374 verificaciones a las diferentes instituciones responsables de las personas privadas de libertad. La mayor parte de

verificaciones realizadas a nivel nacional fueron los Centros de Resguardo o Detención Administrativa son 823 visitas, seguido de los Centros Penitenciarios con 377, luego los Centros de Internamiento para Menores Infractores con 67. En la sede central de San Salvador se acumula la mayor cantidad de verificaciones con 252, seguido de la Delegación Departamental de San Miguel con 125 y luego la Delegación Departamental de Chalatenango con 123 verificaciones. El número de verificaciones por recintos penitenciarios se presentan a continuación:

## i. Centros Penitenciarios

Según el artículo 19 de la Ley Penitenciaria, la Dirección General de Centros Penales tiene a su cargo la Dirección de la Política Penitenciaria que le fije el Ministerio de Gobernación, de conformidad a los principios que la rigen; así como la organización, funcionamiento y control administrativo de los centros penitenciarios, esta Ley surge por mandato Constitucional, artículo 27 en el inciso tercero de la Constitución de la República de El Salvador, señala que el Estado organizará los centros penitenciarios con el objeto de corregir las conductas delictivas, así como educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación social y la prevención de los delitos.

Cuya finalidad es brindar al condenado, por medio de la ejecución de la pena, las condiciones favorables para su desarrollo personal, que le permitan una armónica integración a la vida social al momento de recobrar su libertad. Es así como todas las decisiones y acciones efectuadas por la administración deben de ir encaminadas al cumplimiento de su objetivo.

En este contexto, ésta Procuraduría, se mantiene constantemente vigilando las acciones públicas en los diversos recintos penitenciarios a nivel nacional. El sistema penitenciario cuenta con 21 Centros y 4 Pabellones de reos en hospitales, clasificados según su función establecida en el artículo 68 de la Ley Penitenciaria, en el siguiente cuadro se detalla la frecuencia de las verificaciones realizadas:

Cuadro N° 20		
Verificaciones realizadas por clasificación de centros penitenciarios		
Tipo	Nombre	Frecuencia
<b>Centros Preventivos</b>	La Unión	27
	Sonsonate	6
	Jucuapa	19
	Cojutepeque	19
<b>Centros de cumplimiento de penas</b>	Usulután	26
	Sensuntepeque	12
	Santa Ana	6

<b>Cuadro N° 20</b>		
<b>Verificaciones realizadas por clasificación de centros penitenciarios</b>		
<b>Tipo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Centros Mixtos</b>	Centro de Readaptación para Mujeres-Ilopango (Soyapango)	37
	Apanteos (Santa Ana)	40
	Centro Penitenciario “La Esperanza” (San Salvador)	35
	San Vicente	22
	Chalatenango	37
	Quezaltepeque (La Libertad)	3
	Metapán	15
	San Miguel	22
	Ciudad Barrios (San Miguel)	9
	Izalco (Sonsonate)	3
<b>Centros de Seguridad</b>	Zacatecoluca (La Paz)	15
	San Francisco Gotera (Morazán)	20
<b>Centros Abiertos</b>	Fase Semi libertad del Centro de Readaptación para Mujeres de Ilopango	1
	Fase Semi libertad Anexo a la Penitenciaría Central “La Esperanza”	1
<b>Pabellones de reos en hospitales</b>	Hospital Nacional Rosales (San Salvador)	9
	Hospital Nacional Psiquiátrico de Soyapango - San Salvador	10
	Hospital Policlínico Arce (ISSS)	1
<b>Granjas Penitenciarias</b>	Santa Ana	1
<b>Total</b>		<b>393</b>

*Fuente: Datos proporcionados por las Delegaciones Departamentales y Locales y el Departamento de Verificación Penitenciaria e Internamiento de Menores*

El anterior cuadro muestra que los Centros Mixtos acumulan la mayor cantidad de verificaciones, seguidamente los Centros Preventivos y luego los Centros de Cumplimiento de Penas. Específicamente el Centro Mixto de Apanteos de Santa Ana recibió 40 verificaciones, que contabiliza la mayor cantidad de diligencias, luego el Centro Mixto de Chalatenango contabiliza 37 visitas, así como el Centro de Readaptación para Mujeres-Ilopango (Soyapango) también realizó 37 visitas.

Como resultado del monitoreo constante que realiza la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a nivel nacional se ha evidenciando las diferentes situaciones que afectan a los internos y las internas, a través de entrevistas efectuadas a la población, en las que denuncian lo siguiente:

hacinamiento en las celdas, mal estado y carencia de colchonetas, mala dieta alimenticia, carencia de asistencia médica, falta de asistencia jurídica, daños en las estructuras de las instalaciones, problemas en las citas médicas, malos tratos efectuados por los custodios, registros indecorosos a los familiares de los internos.

La Procuraduría está constantemente monitoreando los Centros Penitenciarios en cuanto a la intervención del ejército, monitoreo de condiciones de salud y físicas en las que están expuestas las personas privadas de libertad, ya que un porcentaje de ellos padece de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, tuberculosis, diferentes tipos de cáncer etc. Además, existe carencia de medicación especializada en los casos de personas internas portadoras de VIH/SIDA.

Además se detectó la existencia de factores de riesgo para la salud de los internos como la abundancia de moscas y zancudos por la presencia de aguas estancadas, que son posibles focos de enfermedades, tal es el caso de el Centro de Cumplimiento de Penas de San Francisco Gotera, Morazán en donde se constató que en uno de sus sectores había una cañería dañada lo que permitió que se estancara el agua, generando la proliferación de zancudos y contaminación del ambiental, lo que ocasionó problemas de salud entre los internos de éste Centro.

La Procuraduría realiza monitoreos en los pabellones de los Hospitales Rosales y Psiquiátrico para verificar las condiciones en las que permanecen los internos y las internas que son trasladados a estos resguardos, se comprueba si están siendo atendidos por el personal médico. Al mismo tiempo se efectuaron gestiones con el tutor de la Granja Penitenciaria de Santa Ana la asistencia médica para los internos.

Durante las constantes visitas que se realizan a éstos centros, hemos constatado las condiciones alimentarias y de salud en que se encuentran las internas con sus hijos lactantes en el Centro de Readaptación de Mujeres de Ilopango, también se ha contado con la participación de reuniones en la Mesa de la Esperanza, que promueve la disminución de las condiciones de encierro. Además se verificó la existencia de denuncia de acoso sexual en una interna por parte de uno de los empleados penitenciarios, en el Centro Penal de Ciudad Barrios; de igual manera se ha investigado el caso de malos tratos que son objeto las personas que ingresan a la visita íntima en el Centro Preventivo de La Unión.

En el mismo Centro se comprobó hacinamiento en la población interna, la Procuraduría para disminuir tal efecto propone la creación de más Centros Penitenciarios con una infraestructura adecuada. Asimismo, en aras de dar respuesta a los niveles de sobrepoblación promover la resocialización: tratamiento penitenciario, cumplimiento de la pena en etapas progresivas, acceso a los beneficios penitenciarios, entre otros; debe promoverse el estudio de alternativas para que mujeres y hombres adultas y adultos mayores y con enfermedades terminales, sean beneficiados/as con mecanismos de extinción de la pena como la conmutación y el indulto.

## **ii. Centros de internamientos para menores infractores**

Según el Art. 3 de la Ley Penal Juvenil prescribe que los principios orientadores de la justicia juvenil que son: la protección integral del menor, su interés superior, el respeto a sus derechos humanos, su

formación integral y la reinserción en su familia y en la sociedad, en ese contexto la Procuraduría para la Defensa de los Derechos humanos es la encargada, de velar por el respeto de los derechos humanos de los las personas menores de edad privados y privadas de libertad en los diferentes centros de internamiento, por lo que toda persona detenida, sin distinción de edad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad.

En ese contexto la Procuraduría en su monitoreo contante que realiza en el afán de verificar la situación en la que se encuentran los internos y las internas. En el período reportado, esta Procuraduría realizó un total de 71 verificaciones a los Centros de Internamiento, asistió a cinco Centros de Reeducción y un Centro Alternativo para jóvenes infractores de la Ley Penal, a nivel nacional. A continuación, se presenta el detalle de estas dependencias y la frecuencia de las visitas:

<b>Cuadro N° 21</b>		
<b>Verificaciones realizadas a centros de internamiento: reeducación y alternativos para jóvenes infractores de la Ley Penal 1 de junio de 2012 al 31 de mayo de 2013</b>		
<b>Tipo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Centros de Reeducción</b>	Centro de Menores “Sendero de Libertad” de Ilobasco (Ilobasco - Cabañas)	<b>34</b>
	Centro de Menores de Tonacatepeque (Apopa)	<b>6</b>
	Centro de Menores “El Espino” de Ahuachapán	<b>5</b>
	Centro de Reinserción Femenina de Ilopango (Soyapango - San Salvador)	<b>8</b>
	Centro Intermedio de Tonacatepeque	<b>11</b>
<b>Centros Alternativos para jóvenes infractores de la Ley Penal</b>	Centro Alternativo de jóvenes infractores de Ilobasco (Ilobasco-Cabañas)	<b>7</b>
<b>Total</b>		<b>71</b>

*Fuente: Datos proporcionados por las Delegaciones Departamentales y Locales y el Departamento de Verificación Penitenciaria e Internamiento de Menores*

En el período reportado, la Procuraduría realizó la mayor parte de las verificaciones en el Centro de Menores “Sendero de Libertad” de Ilobasco en Cabañas con 34 verificaciones, seguido del Centro Intermedio de Tonacatepeque con 11, luego el Centro de Reinserción Femenina de Ilopango, con 8 y el Centro Alternativo de Jóvenes Infractores de Ilobasco en Cabañas con 7 visitas realizadas.

Durante el monitoreo constante que se realizó en este período se concentró en: la observación de procedimientos de requisas, monitoreo general de funcionamiento de los centros donde se adquiere el conocimiento del limitado espacio físico que poseen, el recurso humano necesario para la seguridad, el recurso material, las condiciones de las infraestructuras, el estar vigilante del respeto de los derechos del interno y la interna, las verificaciones de estado de salud de jóvenes; además se realizan visitas con el objeto de conocer de la existencia de jóvenes viviendo con el VIH y si reciben su tratamiento adecuado.

Se efectuaron visitas rutinarias, con el objeto de verificar la situación de los internos y las internas en cuanto al cumplimiento de sus derechos como personas privadas de libertad. Teniendo como



resultados de las gestiones la queja generalizada por malos tratos, hacinamiento, mal estado y carencia de colchonetas, servicios sanitarios en mal dañados, poco acercamiento de juzgados de ejecución de medidas, carencia de programas educativos, talleres, falta los servicios básicos, se observó deficiente atención médica, daños en las infraestructuras. Asimismo se nos informó la inconformidad sobre la alimentación, por lo que se realizaron gestiones para que los internos y las internas reciban una alimentación digna. También la Procuraduría estuvo presente en las gestiones para mejorar las condiciones de limpieza en el área de los dormitorios, ya que se detectó que varios jóvenes están surgiendo con enfermedades producidas por hongos en la piel y presencia de ácaros.

Entre las principales temáticas surgidas en este período es el tema de la seguridad en los centros de internamiento, ya que en el Centro de Inserción Social “Sendero de Libertad” efectuó verificación debido a la fuga de unos internos, por lo que la Procuraduría recomendó a las autoridades competentes adoptar medidas pertinentes, encaminadas a superar la vulnerabilidad del Centro, y prevenir hechos como el antes ocurrido. En este mismo hubo quejas de registros indecorosos por parte de los registradores y las registradoras de éste Centro, debido a ello se les cuestiono por la práctica inadecuada del registro.

Asimismo en el Centro Intermedio de Tonacatepeque, se obtienen quejas de malos tratos cometidos por elementos de la Sección de Traslados de Reos, durante la movilización de internos a sede judicial. En éste mismo Centro se realizó un monitoreo por estado de emergencia a partir del hallazgo de un túnel, se decretó estado de emergencia y se constató la actuación de las autoridades del referido Centro, en lo atinente al manejo de la seguridad de los jóvenes

La Procuraduría recomendó una asistencia médica oportuna a los internos y las internas, mejorar la dieta alimenticia, monitorear constantemente la práctica de registros, especialmente en las personas adultas mayores, mujeres embarazadas, niños y niñas. Así como también un mayor control y supervisión de los diversos sectores dentro de los centros, ya que la carencia de éstos facilita la comisión de atentados en contra de la población reclusa, tal como el hecho ocurrido en el Centro de Inserción Social de Menores de Tonacatepeque, hecho en el cual resultó asesinado en el sector II un joven, por la misma población interna. Otra de las recomendaciones de la Procuraduría fue la de mejorar el desarrollo de los programas de resocialización para los internos en los Centros de Internamiento; crear programas educativos y talleres; optimizar las relaciones con los jueces de ejecución de medidas al menor ya que éstos no les brindan la atención necesaria a los jóvenes bajo su jurisdicción generando en ellos desconfianza y apatía hacia el sistema judicial.

### **iii. Centros de resguardo de detención administrativa y bartolinas**

En el período que corresponde al presente informe, esta Procuraduría realizó importantes gestiones de verificación en cuanto a requisas rutinarias, mal trato físico por agentes de PNC, permanencia prolongada de personas detenidas en bartolinas, habiendo orden judicial de traslado a los Centros Penales, falta de establecimiento de horarios para la visita de familiares, atención médica y asistencia legal.

Al efectuar monitoreos rutinarios se comprueba que en gran porcentaje de estos centros de resguardo carece de agua potable, y de iluminación, adecuados servicios sanitarios, se evidencia la falta de óptimas condiciones ambientales, de colchonetas, utensilios para el aseo personal, alimentos y espacio físico. Debido al hacinamiento ésta población se encuentra sufriendo de enfermedades infecciosas como, hongos, diarreas, gripe, presencia de ácaros. Además estos focos de infección son producidos por daños en las estructuras de los Centros, como el caso del Centro Detención Administrativa de la Subdelegación Policial de Cojutepeque, en donde se encontraba una cañería rota de agua ubicado en la celda número 2, lo que ha causado que los internos estén padeciendo de dolores estomacales y diarreas.

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos licenciado Oscar Humberto Luna, hizo acto de presencia en las Bartolinas de Monserrat, para la presentación de contenedores (celdas Móviles) que funcionarán en esa Unidad Policial, poseen una capacidad para 12 personas, esto se presenta como una alternativa ante la problemática del hacinamiento, en el que se encuentran estos Centros a nivel nacional. Como Procuraduría se nos ha pedido la intervención para encontrar una alternativa a la problemática del hacinamiento, ya que debido a ello los internos que se están padeciendo de enfermedades a causa de este problema.

La Procuraduría esta en constante verificación de la existencia de adultos mayores y menores de edad en las bartolinas, así como también brindando las investigaciones correspondientes a las personas que son objeto de golpes por agentes de la PNC, recomendándoles el respeto a los derechos de las personas privadas de libertad desde el momento de su detención. Además se gestiona en las Bartolinas de la Delegación de la Unión que la señora Vanesa del Carmen Castillo pudiera amamantar a su bebé.

Por otro lado la saturación de los detenidos implica conflictos en los centros, ya que el limitado recurso humano con el que se cuenta, la seguridad prestada a las bartolinas es mínima, y las infraestructuras están diseñadas con un espacio muy reducido, y las cantidades de detenidos y detenidas que alberga va en aumento, debido a esta problemática en las bartolinas propició, la fuga de un reo en las Bartolinas de Ciudad Futura.

<b>Cuadro N° 22</b> <b>Estadística de Consultas Atendidas en los Centros Penitenciarios, Centros de Reeducción y Centros Alternativos para menores infractores</b> <b>1 de junio de 2012 al 31 de mayo de 2013</b>			
<b>Tipo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Consultas Atendidas por los médicos</b>	<b>Consultas atendidas por enfermería</b>
<b>Centros Preventivos</b>	La Unión	2269	2793
	Sonsonate	2372	3578
	Jucuapa	2496	6207

<b>Centros de cumplimiento de penas</b>	Sensuntepeque	1705	9614
	Santa Ana	3680	5383
	Usulután	1328	3734
<b>Centros Mixtos</b>	Chalatenango	2229	5524
	Cojutepeque	3795	28655
	Quezaltepeque (La Libertad)	4311	9592
	Centro de Readaptación para Mujeres-Ilopango (Soyapango)	11373	21789
	Centro Penitenciario “La Esperanza” (San Salvador)	12038	21112
	San Vicente	7521	47006
	Apanteos (Santa Ana)	9562	3914
	Ciudad Barrios (San Miguel)	6623	10968
	Metapán	1020	1828
	Izalco (Sonsonate)	4210	4117
	San Miguel	4371	54827
<b>Centros de seguridad</b>	San Francisco Gotera (Morazán)	1246	2792
<b>Total</b>		<b>82,149</b>	<b>243,433</b>

*Fuente: Datos proporcionados por las Delegaciones Departamentales y Locales y el Departamento de Verificación Penitenciaria e Internamiento de Menores*

Con el objeto de garantizar el cumplimiento del derecho a la salud de las personas privadas de libertad el Departamento de Verificación Penitenciaria e Internamiento de menores efectúa un monitoreo constante de los unidades médicas de los Centros Penitenciarios, reportado un cuadro estadístico mensual de las Consultas Atendidas en los Centros Penitenciarios. En el anterior cuadro se presenta un consolidado de las frecuencias con que se atendió a la población reclusa, mostrando que el Centro Mixto Centro Penitenciario “La Esperanza” (San Salvador) con un total de 12,038 consultas, seguido del Centro de Readaptación para Mujeres-Ilopango (Soyapango) con 11,373 y luego el Centro Mixto de Apanteos (Santa Ana) con 9,562 consultas. En el Centro de San Miguel se atendieron 54,827 consultas por el personal de enfermería, seguidamente el Centro Mixto de San Vicente con 47,006 y el Centro Mixto de Cojutepeque con 28,655 consultas.

### c) Activación de mecanismos de protección de derechos humanos



*Organizaciones de mujeres solicitaron al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Lic. Oscar Humberto Luna, pronunciarse sobre el derecho a la vida de una joven que corre el riesgo de muerte al continuar su embarazo, debido a complicaciones en su estado de salud*

A nivel nacional se presentó informe *amicus curiae* ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el proceso de amparo número 310-2013, iniciado a favor de una joven cuya vida estaba en peligro por el embarazo de un feto anencefálico (sin cerebro), el 15 de mayo de 2013.

En el período que comprende este informe, también se tuvo participación y presentó un Informe sobre la Minería Metálica y las potenciales vulneraciones a los derechos humanos en la población salvadoreña, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizada el 31 de octubre del 2012, en Washington, DC, Estados Unidos.

Asimismo, se presentó el Informe especial sobre el impacto de la violencia en los derechos de las niñas, niños y adolescentes en El Salvador, con su respectivo resumen ejecutivo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizada el 4 de noviembre del 2012, en Washington, DC, Estados Unidos; además, la PDDH invitó y organizó la visita oficial de la doctora Rosa María Ortiz, Relatora de la Niñez y Adolescencia y de país y Comisionada Interamericana de Derechos Humanos a quien se le presentó el Informe especial sobre el impacto de la violencia en los derechos de las niñas, niños y adolescentes en El Salvador.

También se presentó el Informe sobre Panorama Nacional, Actuación de la Defensoría y Recomendaciones, para el Capítulo El Salvador del X Informe sobre Derechos Humanos de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), relativo a Derechos Culturales, el 5 de septiembre de 2012. Así como, el Informe Alternativo El Salvador 2008-2013 (para Lista de Cuestiones) “A cinco años de entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, presentado al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, elaborado en conjunto con organizaciones sociales.



## d) Atención de personas vulnerables o en situación de vulnerabilidad



*El señor Procurador, licenciado Oscar Humberto Luna participa como Presidente Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas del Conflicto Armado Interno en el reencuentro de una persona que fue víctima del fenómeno de la desaparición forzada.*

Es un mecanismo de protección de derechos humanos regulado en el Reglamento de Aplicación de Procedimientos, y que considera como personas vulnerables o en situación de vulnerabilidad, a aquellas personas que individual o colectivamente se encuentran en desventaja en el goce de cualesquiera de sus derechos humanos, en razón del sexo, edad, religión, nacionalidad, discapacidad, estado familiar, estado de salud, idioma, pertenencia a un pueblo originario, situación de privación de libertad, orientación sexual, opinión política, posición económica y cualquier condición social.

En los últimos años el Señor Procurador ha decidido crear varios departamentos y unidades especializadas que brindan apoyo técnico y colaboración sobre temáticas que tienen que ver con estos sectores poblacionales excluidos del desarrollo. Entre las funciones que les corresponden se encuentran: atender con prontitud las solicitudes para participar en las diferentes fases de la tramitación de expedientes; brindar acompañamiento a las víctimas, debiendo realizar las acciones inmediatas de protección que procedan, tales como la gestión de buenos oficios; monitoreo permanente de hechos y situaciones relacionadas con su área de trabajo; monitoreo interno y control centralizado de los expedientes abiertos a nivel nacional sobre las temáticas de sus respectivas áreas y elaborar reportes periódicos; y presentación de recomendaciones o propuestas para la mejora de los mecanismos de protección y promoción de los derechos humanos.

A continuación, se presentan las principales acciones de protección específicas a personas vulnerables o en situación de vulnerabilidad.



## **i. Atención a personas con VIH**

Desde octubre de 2010, la PDDH cuenta con el Departamento de VIH y Derechos Humanos, instancia comprometida en la atención de los derechos de las personas con VIH, y que busca contribuir con el cambio de los paradigmas sociales, disminuir el estigma y la discriminación y apoyar en la prevención de la expansión del virus y las fatales consecuencias que genera la exclusión social de este sector de población en situación de vulnerabilidad.

En el período, la referida dependencia especializada brindó asistencia técnica a las delegaciones departamentales y locales que lo solicitaron, sobre 14 denuncias relacionadas con el tema de VIH. Asimismo, participó en reuniones con representantes de instancias públicas que les corresponden velar por los derechos de este sector, para tratar y resolver diversas hechos y situaciones denunciadas ante esta Procuraduría, tales como: desabastecimientos de medicamentos para prevenir tuberculosis en personas con VIH; situación de las personas privadas de libertad con VIH y sus familias; equipos de salud que brindan atención en centros penales; negación de créditos para vivienda personas con VIH; situación de las mujeres lesbianas detenidas en Cárcel de Mujeres; revisión y reformulación del nuevo anteproyecto de Ley de VIH; entre otras.

Se destaca también, las visitas en hospitales nacionales para verificar la situación de las personas con VIH, en particular, en los hospitales de La Unión, Chalatenango, ISSS Oncología, Rosales, ISSS 1 de Mayo, San Rafael. Y la elaboración de un proyecto para el fortalecimiento del Departamento de VIH y Derechos Humanos por parte de PNUD/Fondo Global, denominado: “Asistencia técnica para fortalecer el proceso de tutela de los Derechos Humanos de las Personas con VIH en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador para el período Octubre 2011-Diciembre 2013”.

Por otro lado, el referido Departamento en coordinación con la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incidieron en el fortalecimiento del sistema de protección de derechos humanos y el personal institucional, a través de: asistencias técnicas; capacitaciones sobre la transmisión del virus, marco jurídico aplicable y derechos laborales; la formulación de una política interna para el abordaje integral del VIH en la PDDH; elaboración de un informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas con VIH en El Salvador; y gestiones para llevar a cabo un Diálogo Nacional sobre VIH y Derechos Humanos en El Salvador, en conjunto con el PNUD.

## **ii. Atención a personas con discapacidad**

El Departamento de Personas con Discapacidad y Derechos Humanos inició formalmente sus labores a partir del 28 de septiembre de 2011, desde ese momento, le ha correspondido dar seguimiento a las acciones de las instancias públicas que tienen por función garantizar los derechos de las personas con discapacidad.

Entre las acciones más relevantes realizadas por este departamento se encuentran: la coordinación del grupo de trabajo de revisión y reformulación de la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad; la Coordinación del Comité de Elaboración del Informe Alternativo de

la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; y la Elaboración y Ejecución del Plan de Trabajo de la Mesa permanente de Personas con Discapacidad.

Este Departamento ha continuado activo en cuanto a la coordinación de la Mesa Permanente de Derechos de las Personas con Discapacidad, realizando reuniones de trabajo mensuales para dar seguimiento al Plan de Trabajo de este organismo.

Además, ha tenido participación como observador en el Comité Técnico del Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad (CONAIPD), y ha participado en reuniones con madres, padres y familiares de personas con discapacidad usuarias del Centro Escolar de Ciegos “Eugenia viuda de Dueñas” y autoridades del ISNA, MINED, MISAL, coordinada por la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Niñez y la Juventud.

### **iii. Atención a personas migrantes y sus familiares**

La Unidad de Migrantes dependencia adscrita a la Procuraduría Adjunta de Derechos Civiles e Individuales, atendió en el período: 38 orientaciones legales, 51 expedientes de diversas naturaleza migratoria; Informe de Diagnóstico Monitoreo a Fronteras 2012, elaborado en conjunto con el Programa de Atención de Personas Refugiadas de El Salvador (PARES).

En el marco del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional para la creación de mecanismos de intercambio de información sobre migrantes no localizados y cuerpos no identificados entre el Vice ministerio de Salvadoreños en el Exterior, Equipo Argentino de Antropólogos Forenses (EAAF), Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos y PDDH, se realizaron las siguientes acciones:

Tomas de muestras de sangre a familiares de migrantes no localizados en ocasión del caso de la masacre en Cadereyta, Nuevo León, México, realizada el 21 y 23 de junio de 2012. Además, se hicieron varias jornadas de tomas de muestra de ADN y entrevistas a familiares de migrantes no localizados conteniendo antecedentes y datos *ante mortem*, en atención a Acuerdo de cooperación interinstitucional para la creación de mecanismos de búsqueda de migrantes no localizados, realizadas en la PDDH (del 15 al 21 de agosto de agosto de 2012; del 24 al 26 de octubre de 2012; del 7 al 9 de enero, 6 de marzo y del 15 al 17 de mayo del 2013).

Se tomaron 109 muestras de familiares y entrevistas sobre antecedentes y datos *ante mortem*, las cuales forman parte del Banco Forense de Migrantes no localizados de la PDDH. La organización de dichas actividades consistió en brindar transporte a las familias de las personas migrantes no localizadas; gestión de espacios y adecuación de los mismos para la toma de muestras; coordinación con equipo de médicos forenses para que presenciaran la toma de muestras; coordinación con COFAMIDE para la atención de familiares en el proceso de toma de muestras; elaboración de actas notariales; verificación del proceso en cada uno de los casos; y acompañamiento a las familias en la notificaciones del equipo EAAF que se realizan de forma alterna en el periodo de toma de muestras.

En el período, se realizaron notificaciones a familiares sobre los restos humanos identificados por medio de cotejo de ADN de las muestras y otros datos antropológicos forenses proporcionados por

los familiares. También, se verificó y se acompañó a las familias en los procesos de entrega de restos; participación en reuniones de seguimiento a casos en que el lugar inicial de búsqueda es en Estados Unidos; casos posiblemente vinculados a masacres en México; casos posiblemente vinculados a naufragios o víctimas de trata de persona en Guatemala; gestiones solicitando información a autoridades con fines de búsqueda; revisión de actas notariales sobre el procedimiento de toma de muestras.

La Procuraduría Adjunta de Derechos Civiles e Individuales también coordinó la realización de un monitoreo por los puntos fronterizos del país para verificar que en los procedimientos y prácticas de las autoridades migratorias y de la Policía Nacional Civil, se garanticen los derechos de las personas solicitantes de refugio. Dicho monitoreo fue llevado a cabo por la Unidad de Migrantes, personal de la PADCI y PARES, el informe que resume los hallazgos del monitoreo se encuentra actualmente en revisión.

Finalmente, se participó en reuniones con CONMIGRANTES en fechas 14 de marzo, 25 de abril, 16 de mayo de 2013, para finalizar la revisión del Plan Estratégico de acuerdo a insumos enviados por las instituciones, y presentación de acciones a realizar por el Vice Ministerio de Salvadoreños en el Exterior; además, se hizo énfasis en la destinación de fondos de CONMIGRANTES para solventar repatriaciones de migrantes identificados.

#### **iv. Atención a salvadoreños y salvadoreñas que viven en los ex bolsones**

Esta Procuraduría, por medio de la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Civiles e Individuales ha realizado gestiones ante el Presidente de la Comisión de Seguimiento Sección El Salvador del Ministerio de Relaciones Exteriores y ante el Director Ejecutivo del Centro Nacional de Registros solicitando colaboración para que se proporcionen bases de datos de registros de propiedad de salvadoreños que viven en los ex bolsones; así como también ante el Comisionado de Derechos Humanos de Honduras para que se proporcionen títulos de propiedad en Honduras.

Se le ha dado acompañamiento al proceso de consulta del Proyecto de Ley para la Determinación de Procesos de Comercialización de Bienes y Productos y Tránsito de los habitantes de los ex bolsones, así como también se ha dado seguimiento a casos de afectaciones a la propiedad de los habitantes de Mesetas.

En el periodo de agosto y diciembre de 2012, así como también los días 8 y 20 de marzo de 2013, se sostuvieron reuniones ordinarias con la Comisión de Seguimiento para tratar aspectos de la Ley Especial de Creación del Régimen de Identificación Migratorio y Aduanero aplicable a las personas afectadas por la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 11 de septiembre de 1992.

Especial énfasis hay que hacer sobre las reuniones organizadas por la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Civiles e Individuales con los Delegados y Delegadas Departamentales y Locales de Chalatenango, Santa Rosa de Lima, San Miguel y Morazán, así como también con representantes de la Comisión de Seguimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, para tratar puntos de preocupación en las zonas afectadas en cuanto a procedimientos efectuados por la Fuerza Armada en el tránsito y comercialización de productos. En estas reuniones se abordaron casos concretos y se acordó la realización de capacitaciones para funcionarios de estas zonas.

## **v. Atención a periodistas y profesionales de la comunicación**

La Procuraduría, por medio de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Civiles e Individuales, ha sostenido diversas reuniones con los representantes de organizaciones sociales, ARPAS, FESPAD, UCA, para tratar temas relacionados a derecho a la comunicación, libertad de expresión, derecho de rectificación o respuesta, la necesidad de una ley de comunicación social, todos los temas están relacionados y han llevado a la conformación de un Colectivo Pro Democratización de la Comunicación, y el trabajo orientado a la definición de un plan de trabajo común y la identificación de actividades prioritarias a realizar.

Entre las acciones más destacadas se encuentran: presentación pública de denuncias de parte de las organizaciones ARPAS, FESPAD, UCA, respecto de la concentración en la asignación de frecuencias en el espacio radioeléctrico; actividad de fortalecimiento de capacidades técnicas dirigido a personal de la PDDH sobre el tema de democratización de medios.

En relación con los temas que se desarrollan en el Colectivo, desde la Procuraduría Adjunta de Derechos Civiles e Individuales se elaboraron los siguientes documentos: Opinión del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado Oscar Humberto Luna, sobre el proyecto de “Ley para el ejercicio del derecho de rectificación o respuesta” cinco de abril de dos mil trece; Pronunciamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Licenciado Oscar Humberto Luna, en el día mundial de la Libertad de Prensa. 2 mayo de 2013 y Posición del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado Oscar Humberto Luna, sobre el proceso de transición digital terrestre. 14 de mayo de dos mil trece.

## **vi. Atención a personas víctimas del conflicto armado**

Desde la Procuraduría Adjunta de Derechos Civiles e Individuales se ha continuado girando indicaciones sobre el tratamiento a casos relacionados con la memoria histórica: Estas directrices van encaminadas a la realización de diferentes acciones, tales como: el seguimiento del desarrollo del proceso judicial en el caso de la Masacre del Río Sumpul; diligencias coordinadas con el IDHUCA y miembros de la familia Dalton para iniciar de forma preliminar las acciones para identificar el lugar en donde fueron enterrados los restos de Roque Dalton y otra persona más; la emisión de una opinión ilustrativa a la Dirección General del Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación, sobre los estatutos de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM); y, finalmente, en el mes de agosto de 2012 esta Procuraduría dio acompañamiento de la solicitud que promueven organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema de memoria histórica. En esa ocasión, la Procuraduría solicitó a la Asamblea Legislativa que declare el día 30 de agosto de cada año como “Día Nacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada en El Salvador”.

## **e) Otras acciones relacionadas**

### **i. Revisión de procedimientos específicos para la tramitación de denuncias**

Las procuradurías adjuntas específicas revisaron en el período algunos de los procedimientos específicos para la tramitación de denuncias, en particular se han dictado directrices para atender las situaciones siguientes: elaboración y propuesta de atención a víctimas y grupos vulnerables a efecto de que sirva como insumo de un protocolo institucional de atención a víctimas; atención a consultas sobre el seguimiento a problemáticas específicas, principalmente a casos laborales, de salud, vivienda, entre otros; evaluación en la atención de denuncias en materia ambiental; evaluación para establecer una mejor coordinación en el trabajo y tramitación de expedientes en materia de niñez y juventud.

### **ii. Revisión y actualización de la tipología de violaciones a derechos humanos**

También, en el período se revisó la tipología de violaciones a derechos humanos, de tal manera que se analizó dicha tipología en relación a la calificación de casos de instalación de antenas de telefonía celular a nivel nacional. Desde la Procuraduría Adjunta para la Protección del Derecho al Medio Ambiente se proporcionaron insumos para la elaboración del “Protocolo de Atención de Víctimas y Grupos Vulnerables”, a fin de tener una mejor aplicación del Manual de Calificación de Violaciones a Derechos Humanos con Enfoque de Género.

### **iii. Establecimiento de criterios y lineamientos para la atención adecuada de casos y situaciones individuales**

En el período se giraron las siguientes directrices para la atención de casos y situaciones: monitoreo de la situación de personas privadas de libertad y solicitud de informe a la Dirección General de Centros Penales sobre el traslado de 950 privados de libertad de bartolinas a centros penales; definición de lineamientos generales sobre procedimientos institucionales a partir del abordaje de casos o situaciones específicas conocidas; lineamientos institucionales para la atención de casos relacionados con la protección del medio ambiente y de gestión de riesgo de desastre o de emergencia nacional; directrices para la atención adecuada de casos relacionados con instalación de antenas de telefonía celular a nivel nacional, así como por la construcción de pequeñas represas en diferentes puntos del país, también se establecieron criterios y lineamientos para el trámite y seguimiento de casos o denuncias ambientales y de gestión de riesgos de desastres como por minería metálica, contaminación transfronteriza, entre otros.

### **iv. Apoyo al Despacho del Señor Procurador en el manejo de casos y situaciones**

En el período, las procuradurías adjuntas específicas brindaron apoyos al despacho del Señor Procurador para el manejo de casos y situaciones, tales como: la atención de personas provenientes de comunidades del Distrito 6 de San Salvador por situaciones calificadas como arbitrarias por parte de la PNC tales como allanamientos y detenciones de jóvenes; se atendió denuncia un grupo de



oficiales de la PNC por el proceso de ascenso a subinspectores. Por otra parte, se han atendido 47 casos vinculados a problemáticas relativas al área laboral y libertades sindicales, desalojos, seguridad social y salud. También, se han realizado acompañamientos y conducciones de casos emblemáticos como el de Baterías Record, la situación de riesgo a consecuencia del deterioro del puente “La Chacra”, el caso de la presa hidroeléctrica “El Chaparral”, los problemas de contaminación a consecuencia de la minería metálica, en específico el caso de la mina “Cerro Blanco” ubicada en Jutiapa, Guatemala, el caso de la construcción de bordas a lo largo del cauce del río Paz a consecuencia de los desbordamientos del mismo en la zona de San Francisco Menéndez, Ahuachapán, así como también la problemática del relleno sanitario que se pretende construir en ese mismo departamento.

Es importante señalar también el acompañamiento que se ha hecho a la sociedad civil para impulsar la ratificación de las reformas constitucionales respecto del reconocimiento del derecho humano al agua, así como la aprobación de la Ley General de Agua.

#### **v. Impulso y apoyo técnico para la formulación de propuestas**

Las procuradurías adjuntas específicas impulsaron y apoyaron técnicamente la elaboración de documentos y asuntos logísticos relacionados a visitas de Relatores Especiales de la Organización de Naciones Unidas: a) Relatora Especial para los Pueblos Indígenas, b) Relatora Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados. También se preparó una actualización del informe rendido en el año 2009 al grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas, denominado “Seguimiento a las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias”.

Por otra parte, las Procuradurías Adjuntas específicas en conjunto presentaron una propuesta de coordinación con los Departamentos del área de Tutela de la PDDH a fin de fortalecer los mecanismos de atención y tramitación de casos en relación a la protección de los derechos humanos. Por otra parte, se presentaron insumos para la reforma del Reglamento de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en aras de lograr una mejor atención y respuesta a las denuncias presentadas en la institución.

#### **vi. Acciones de coordinación realizadas respecto de la instalación y funcionamiento del Centro de Intervención de las Telecomunicaciones**

Esta Procuraduría remitió observaciones al proyecto de Protocolo entre la Fiscalía General de la República y esta institución para el desarrollo de las funciones de Fiscalización y Auditoría en el Centro de Investigación de las Telecomunicaciones (oficio DFACIT/002/2013). Además, se han sostenido reuniones de trabajo con personal asignado al DFACIT para dar continuidad al trabajo de ese departamento en preparación de organizar su funcionamiento.

#### **vii. Observatorio Electoral**

En este período, se continuó con el Programa de Observación y Verificación Electoral, en el que participa la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Civiles e Individuales, la Unidad de Derechos Políticos y la Unidad de la Realidad Nacional. Entre los resultados más importantes se

encuentra la publicación del Informe sobre la situación de los derechos políticos en el marco de las elecciones legislativas y municipales celebradas el 11 de marzo de 2012. El referido documento será presentado en un evento público a principios del mes de julio del presente año.

Asimismo, se le ha dado seguimiento a casos relacionados a situaciones provenientes del pasado evento electoral, como girar indicaciones en casos específico; girando directrices generales para el tratamiento de los expedientes relacionados al tema electoral o de derechos políticos, o bien girando indicaciones directas de trabajo a la Unidad de Derechos Políticos. También se elaboró un pronunciamiento público sobre la necesidad de prevenir actividades de propaganda electoral ilegal, de fecha 19 de septiembre de 2012.

La Unidad de Derechos Políticos realizó varias actividades de seguimiento y de preparación para las próximas elecciones presidenciales del 2014, de acuerdo a su planificación estratégica, entre las que se destacan: monitoreo al proceso de emisión y renovación de Documento Único de Identidad (DUI); seguimiento a la depuración de los padrones electorales, al proceso de voto residencial y voto desde el exterior y el desarrollo del calendario electoral; implementación del plan de verificación y observación electoral 2013-2014; sistematización de las prácticas democráticas al interior de los partidos políticos con parámetros de inclusión o exclusión de sectores o grupos; coordinación con organismos y movimientos sociales, la Iglesia y otras entidades de carácter educativo, para su participación en el Observatorio Electoral.

Finalmente, se realizó una capacitación de fortalecimiento técnico a personas funcionarias y personal institucional sobre la Ley Especial para el Ejercicio del Voto desde el Exterior por parte del Tribunal Supremo Electoral en preparación a la observación del voto desde el exterior. Además, la coordinación con el TSE y la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador, para que personal institucional participara en el Primer Diplomado Superior en Derecho Electoral.

#### **viii. Acuerdo de cooperación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)**

Durante el período, esta Procuraduría realizó diversas gestiones con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), con la finalidad de aprobar un acuerdo de cooperación entre ambas instituciones.

Se llevaron a cabo reuniones entre varias dependencias de la PDDH y representantes de ACNUR para tratar aspectos técnicos, administrativos y financieros sobre el acuerdo de cooperación para la realización de un estudio de contexto de país sobre la situación de seguridad y violencia, el cual pueda servir como documento directriz para los Estados al momento de considerar criterios para otorgar la condición de refugiado a personas salvadoreñas en el exterior. En estos momentos, la propuesta se encuentra en fase de revisión para, posteriormente, iniciar en la elaboración del referido estudio.

## 5.2. ANÁLISIS E INCIDENCIA: POLÍTICAS, NORMAS Y PRÁCTICAS DEL ESTADO



*El señor Procurador, licenciado Oscar Humberto Luna participa en las actividades de las organizaciones de pueblos indígenas en las que exigen la ratificación de la reforma constitucional sobre el reconocimiento de sus derechos humanos.*

El área estratégica de análisis e incidencia de políticas, normas y prácticas del Estado tiene como objetivo promover el comportamiento estatal respetuoso de la dignidad humana, exigiendo a las instituciones del Estado que cumplan las obligaciones contenidas en la Constitución y en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

En definitiva, se trata de una actividad de obtención, verificación y utilización inmediata de información para atender problemas de derechos humanos y prevenir su violación en el futuro. Las estrategias que se utilizan son: monitoreo permanente de las tendencias del entorno relacionadas con la vigencia de los derechos humanos; producción de posicionamientos y propuestas para promover un comportamiento estatal respetuoso de la dignidad humana; y fomento de buenas prácticas de gobierno, por medio del acompañamiento de personas funcionarias públicas para la erradicación de conductas violatorias de derechos humanos.

Para lograr lo anterior se realizan diversas actividades a nivel nacional para obtener información sobre incidentes; también, se hace observación de diversos acontecimientos de interés nacional tales como las elecciones, procesos judiciales y manifestaciones; la verificación y observación de las actuaciones de las autoridades involucradas en las crisis de sectores vulnerables; el monitoreo de la realidad nacional, entre otros. Se incluyen, además, diligencias de buenos oficios para obtener información, procurar soluciones y otras medidas inmediatas. De esta forma, la Procuraduría se configura como la institución que por mandato constitucional protege a las personas frente a todo tipo de actividad estatal que ponga en riesgo los derechos humanos.

A continuación, se presenta el detalle de las actividades rutinarias que se encuentran relacionadas con el cumplimiento de los objetivos de este eje estratégico.



## a) Informes especiales y situacionales



*El señor Procurador, licenciado Oscar Humberto Luna en el evento de presentación del Informe Especial sobre el impacto de la violencia en los derechos de las niñas, niños y adolescentes en El Salvador.*

La ley de la PDDH establece en sus artículos 42 y 43 que al advertirse una práctica sistemática de violación a los derechos humanos o en casos y situaciones que revistan especial gravedad o trascendencia nacional, sin perjuicio de la resolución sobre los hechos individuales, deberá adoptar cualquiera de las medidas adicionales siguientes: hará las investigaciones necesarias para determinar la naturaleza y las causas de la violación; elaborará y publicará un informe especial sobre el resultado de la investigación, las conclusiones y sus recomendaciones; y establecerá los mecanismos correspondientes para vigilar el cumplimiento de sus recomendaciones.

De esta forma, el Reglamento para la Aplicación de Procedimientos establece en el artículo 39 que los informes especiales y situacionales tendrán la finalidad de verificar la existencia de prácticas, políticas públicas y normas violatorias de los derechos humanos y libertades fundamentales, en orden a promover medidas para erradicar o eliminar sus causas, así como prevenir violaciones a los mismos y propiciar las condiciones para su eficaz ejercicio. Estos informes podrán elaborarse a partir de la información que se obtenga de los casos individuales, verificaciones o monitoreos situacionales y del monitoreo y análisis de la realidad nacional. La coordinación y elaboración de los informes especiales y situacionales corresponde a las Procuradurías Adjuntas Específicas, en las materias propias de la temática que les corresponde abordar.

En ese marco, en virtud de sus facultades constitucionales y legales, durante el período comprendido para la elaboración del presente documento, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, realizó 9 informes sobre situaciones generales y específicas relacionadas con el goce y disfrute de los derechos humanos. A continuación se presenta el detalle por áreas temáticas:

**Cuadro N° 23**  
**Informes especiales y situacionales**  
**1 de junio de 2012 al 31 de mayo de 2013**

Área Temática	Total Documentos
Derechos civiles	2
Derechos económicos, sociales y culturales	2
Derechos humanos de las mujeres	1
Derecho a la protección ambiental	2
Derechos de la niñez, adolescencia y juventud	2
<b>Total</b>	<b>9</b>

*Fuente: Datos proporcionados por las Procuradurías Adjuntas Específicas.*

## **i. Derechos civiles**

En marzo de 2013, la Unidad de la Realidad Nacional preparó el *Informe sobre la situación de los Derechos Políticos en el Marco de las Elecciones Legislativas y Municipales celebradas el 11 de marzo de 2012*. El propósito del Informe es evaluar las medidas específicas plasmadas en los Acuerdos de Paz y contrastarlas con los resultados de la verificación internacional, investigaciones de organizaciones sociales, observaciones y recomendaciones de organismos internacionales y los señalamientos de esta Procuraduría. El análisis que se realiza es a partir de un enfoque de derechos, es decir, desde las obligaciones jurídicas reconocidas en el texto constitucional y los tratados internacionales en materia de derechos humanos; asimismo se auxilia de las ciencias políticas, en la identificación de los tipos de transiciones hacia la democracia y las transformaciones de la nueva institucionalidad, entre otros aspectos.

Por otra parte, en el tema migrantes se elaboró el *Informe de Diagnóstico y Monitoreo a Puestos Fronterizos*, elaborado en conjunto con el Programa de Atención de Personas Refugiadas de El Salvador (PARES), el cual está en la fase de reproducción.

## **ii. Derechos económicos, sociales y culturales**

En julio de 2012 se elaboró el *Análisis situacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Derechos de Personas Adultas Mayores, Derechos de Personas con VIH y Derechos de Personas con Discapacidad*, el cual fue incorporado en el Informe de Labores Junio 2011 a Mayo 2012.

En diciembre de 2012, se elaboró el *Tercer Informe sobre el estado del derecho a una alimentación adecuada en El Salvador*. Este informe toma como punto de partida la verificación del seguimiento a las recomendaciones emitidas en los dos informes anteriores del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos sobre el Estado del Derecho a una Alimentación Adecuada en El Salvador, publicados en 2007 y 2010. En esta ocasión, este informe se concentra en la situación el derecho a la alimentación en el país entre los años 2010 y 2012 y en él se detallan: un resumen de los principales instrumentos nacionales e internacionales que contienen disposiciones relacionadas a este derecho; el panorama



general y perspectiva de la situación del derecho a la alimentación en la región centroamericana; se examina la situación del derecho a la alimentación en El Salvador; se hace un análisis y evolución reciente de las variables y factores que inciden en la disponibilidad y el acceso a los alimentos para la población salvadoreña; y, finalmente, se realiza un análisis general de la política social impulsada por el Estado para atender la problemática de la inseguridad alimentaria en el país.

### **iii. Derechos humanos de las mujeres**

En noviembre de 2012, la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer y Familia elaboró el *Informe Especial sobre Acceso a la Justicia para las Mujeres en el ámbito Laboral, Penal y Familiar*. Este informe priorizó las áreas penal, familiar y laboral por ser los ámbitos de mayor incidencia en la tutela de los derechos humanos de las mujeres; con el mismo, se da a conocer la ruta crítica que las mujeres atraviesan al momento de acceder a la justicia, y pretende aportar desde el rol contralor a la efectiva tutela de los derechos humanos de las mujeres. Es necesario tener en mente que si un Estado quiere fortalecer su gobernabilidad democrática, es necesario que incorpore el enfoque de igualdad de género en la modernización de la administración pública, especialmente del sistema judicial.

### **iv. Derecho a la protección del medio ambiente**

En octubre de 2012, la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos del Medio Ambiente elaboró y presentó el *Informe sobre la minería metálica y los derechos humanos en la República de El Salvador*, en el marco de la Audiencia General que se celebró durante el 146° Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, D.C., Estados Unidos de América.

El 10 de enero de 2013, la misma Procuraduría Adjunta emitió el *Informe Especial sobre el Proyecto Minero “Cerro Blanco” y las Potenciales Vulneraciones a Derechos Humanos en la Población Salvadoreña*.

### **v. Derechos de la niñez, adolescencia y juventud**

La Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Niñez y Juventud emitió en octubre de 2012 el *Informe especial sobre el impacto de la violencia en los derechos de las niñas, niños y adolescentes en El Salvador*, en el que se menciona la necesidad de que el Estado salvadoreño adopte estrategias amplias que no se limiten a las medidas penales, sino que hagan frente a la raíz del problema de la violencia y el delito entre los adolescentes, sea que formen parte o no de pandillas; medidas para mejorar el acceso a la educación, instalaciones laborales, recreativas y deportivas; programas de reintegración para las personas menores de edad que se encuentran en centros de inserción social, todo en consonancia con lo recomendado por el Comité de Derechos del Niño al Estado salvadoreño.

En noviembre de 2012 emitió el *Informe situacional sobre la protección de los derechos de la niñez y adolescencia en un contexto de violencia*, en el cual se hace un bosquejo sobre la situación actual por la que atraviesa la niñez y adolescencia salvadoreña, afectación a los derechos, desde su derecho a ser protegida de la violencia y, posteriormente, se analizan las acciones más evidentes de la Administración Pública para garantizar el referido derecho a la persona menor de edad, en la cual se señala el pato o tregua entre pandillas.

## b) Opiniones sobre Proyectos de Ley, Posicionamientos sobre Normativas y Propuestas de Reforma de Ley



*El señor Procurador, licenciado Oscar Humberto Luna junto con representantes de la Mesa por la Soberanía Alimentaria exigen a la Asamblea Legislativa la ratificación de las reformas constitucionales del derecho a la alimentación adecuada y el derecho al agua.*

La realización de estas actividades encuentra su fundamento en los artículos 11 y 12 de la ley de la PDDH, cuando establece como atribuciones del Procurador: “Promover reformas ante los Órganos del Estado para el progreso de los Derechos Humanos; así como la de “emitir opiniones sobre proyectos de leyes que afecten el ejercicio de los Derechos Humanos y presentar propuestas de anteproyectos de leyes para el avance de los derechos humanos en el país”<sup>1</sup>.

Por su parte, el Reglamento para la Aplicación de Procedimientos establece que “en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, el Procurador o Procuradora o quien realice sus funciones podrá emitir opinión sobre los anteproyectos, proyectos de ley o de políticas públicas, a fin de promover y proponer las medidas que estime necesarias para prevenir violaciones a derechos humanos y garantizar el pleno goce de los mismos”<sup>2</sup>.

En el presente período, se emitieron un total de 7 opiniones sobre proyectos de ley, posicionamientos sobre normativas y propuesta de reforma de ley. A continuación se presenta el detalle por área temática:

<sup>1</sup> Art 11 y 12 de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

<sup>2</sup> Arts. 83-86 del Reglamento para la Aplicación de los Procedimientos del Sistema de Protección de los Derechos Humanos.

<b>Cuadro N° 24</b> <b>Opiniones sobre proyectos de ley, posicionamientos sobre normativas y propuestas de reforma de ley</b> <b>por área temática</b> <b>1 de junio de 2012 al 31 de mayo de 2013</b>	
<b>Área Temática</b>	<b>Total Documentos</b>
Derechos económicos, sociales y culturales	<b>1</b>
Derecho a la protección ambiental	<b>4</b>
Derechos civiles	<b>1</b>
Derechos de la niñez, adolescencia y juventud	<b>1</b>
<b>Total</b>	<b>7</b>

*Fuente: Datos proporcionados por las Procuradurías Adjuntas Específicas.*

A continuación, se detallan los diversos documentos relacionados con el análisis del ordenamiento jurídico desde el planteamiento de los derechos humanos, en el período correspondiente al presente informe:

#### **i. Derechos civiles y políticos**

- Opinión del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado Oscar Humberto Luna, sobre el proyecto de “Ley para el ejercicio del derecho de rectificación o respuesta”, 5 de abril de 2013.

#### **ii. Derechos económicos, sociales y culturales**

- Opinión sobre propuesta de reforma al Código Municipal respecto al ordenamiento del comercio en los espacios públicos, 14 de noviembre de 2012.

#### **iii. Derecho a la protección del medio ambiente**

- Posición de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos respecto al a Ratificación del “Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización”, 22 de noviembre de 2012.
- Opinión sobre el Proyecto de Ley Especial para la Suspensión de los Procedimientos Administrativos relacionados a Proyectos de Exploración y Explotación de Minería Metálica presentado ante la Asamblea Legislativa por los Ministerios de Economía y Medio Ambiente y Recursos Naturales.
- Pronunciamiento del Señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado Oscar Humberto Luna, el Foro del Agua y organizaciones sociales a favor del derecho a la alimentación, en torno a la ratificación de la reforma constitucional para el reconocimiento de los derechos al agua y a la alimentación, 3 de octubre de 2012.
- Comunicado del Señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado Oscar Humberto Luna, ante la demanda de amparo admitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el caso de contaminación por Plomo en el Sitio del Niño, 31 de octubre de 2012.

#### **iv. Derechos humanos de la niñez, adolescencia y juventud**

- Opinión sobre el anteproyecto de la propuesta de Ley de respuesta integral a la epidemia del VIH/Sida El Salvador, junio de 2012.



## c) Posicionamientos públicos



*El señor Procurador, licenciado Oscar Humberto Luna se pronuncia en el Día internacional contra la homofobia, lesbofobia y transfobia, el 17 de mayo de 2013.*

El posicionamiento público, se refiere a un tipo de pronunciamiento que puede ser emitido por el Procurador, o persona funcionaria delegada para tal efecto, en relación a temáticas específicas, situaciones de especial interés para la institución, fechas conmemorativas de los derechos humanos, entre otros.

Durante el período que informa el presente documento, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos emitió un total de 39 pronunciamientos de este tipo, referidos a las distintas materias de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales. A continuación el detalle:

<b>Cuadro N° 25</b> <b>Pronunciamientos por área temática</b> <b>1 de junio de 2012 al 31 de mayo de 2013</b>	
<b>Área Temática</b>	<b>Total Documentos</b>
Derechos civiles y políticos	<b>8</b>
Derechos económicos, sociales y culturales	<b>12</b>
Derechos humanos de la niñez y adolescencia	<b>5</b>
Derechos humanos de las mujeres	<b>4</b>
Derecho a la protección ambiental	<b>10</b>
<b>Total</b>	<b>39</b>

*Fuente: Datos proporcionados por las Procuradurías Adjuntas Específicas y la Unidad de la Realidad Nacional, PDDH*

A continuación se detallan los diversos documentos relacionados con la posición de la PDDH relacionada con temáticas específicas, en el período correspondiente al presente informe:

### **i. Derechos civiles y políticos**

- Comunicado de Prensa del Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Equipo Argentino de Antropología Forense, como instituciones que ejercen labores de coordinación para la búsqueda e identificación de migrantes no localizados, ante la opinión pública y la población en general expresan su preocupación por el incremento de hechos de violencia y ataques sistemáticos a la vida, a la libertad y a la integridad de las personas migrantes que viajan indocumentadas por México, los cuales se encuentran vinculados a la delincuencia organizada. Junio de 2012.
- Comunicado: Ante los nuevos acontecimientos ocurridos como consecuencia del conflicto entre la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 29 de junio de 2012.
- Pronunciamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado Oscar Humberto Luna, ante la crisis de institucionalidad democrática en El Salvador. 30 de julio de 2012
- Pronunciamiento de los Pueblos Originarios de El Salvador, Miembros de la Mesa Permanente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre Derechos de Pueblos Indígenas, con Motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. 9 de agosto de 2012.
- Pronunciamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Licenciado Oscar Humberto Luna, sobre la necesidad de prevenir actividades de propaganda electoral ilegal. 19 de septiembre de 2012.
- Pronunciamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Licenciado Oscar Humberto Luna, ante las amenazas en contra de la labor periodística. 24 de enero de 2013.
- Pronunciamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Licenciado Oscar Humberto Luna, en el día mundial de la Libertad de Prensa. 2 mayo de 2013.
- Pronunciamiento del licenciado Oscar Humberto Luna, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, ante los homicidios contra personas LGBTI en El Salvador, en el marco de del Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia. 17 de mayo de 2013.

### **ii. Derechos económicos, sociales y culturales**

- Pronunciamiento ante la crisis de institucionalidad democrática en El Salvador, 30 de julio de 2012.
- Pronunciamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, ante la situación de sequía que enfrenta el oriente del territorio nacional y su impacto en los derechos humanos de las poblaciones afectadas, 15 de agosto de 2012.
- Pronunciamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, sobre la afectación al derecho a la salud de la población salvadoreña por los elevados casos de dengue y su impacto en la niñez y adolescencia, 21 de septiembre de 2012.
- Pronunciamiento del señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, el Foro del Agua y organizaciones sociales a favor del derecho a la alimentación, en torno a la ratificación



de la reforma constitucional para el reconocimiento de los derechos al agua y a la alimentación, 3 de octubre de 2012.

- Pronunciamiento público del señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, sobre el desalojo forzoso y masivo de puestos del comercio informal en el centro capitalino, ejecutado por la Alcaldía Municipal de San Salvador los días 26 y 27 de octubre de 2012; 29 de octubre de 2012.
- Mensaje con motivo del Día del Sindicalismo en El Salvador, 31 de octubre de 2012.
- Pronunciamiento del señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en torno a la ratificación del préstamo orientado al fortalecimiento del sistema de salud pública, 20 de noviembre de 2012.
- Pronunciamiento del señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos ante los despidos realizados a partir del uno de noviembre de 2012, por la Alcaldía Municipal de Mejicanos, 20 de diciembre de 2012.
- Balance sobre la situación de los derechos humanos a 21 años de los Acuerdos de Paz, 16 de enero de 2013.
- Pronunciamiento del Señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y la Mesa Permanente sobre los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, sobre la actual situación de la persona adulta mayor en El Salvador, 28 de enero de 2013.
- Pronunciamiento del Señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, en torno a la aplicación de la Ley de Medicamentos, dentro del marco de la celebración del Día Mundial de la Salud, 11 de abril de 2013.
- Mensaje del señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en el marco del Día Internacional del Trabajo 2013.

### **iii. Derecho a la protección del medio ambiente**

- Informe a la Asamblea Legislativa respecto al estado de la Mesa de Negociación entre la Alcaldía Municipal de San Salvador y Ministerio de Obras Públicas en relación a la reparación del “Puente El Coro”.
- Pronunciamiento a cuatro años de los lamentables acontecimientos de la noche del tres de julio de 2008 en el Arenal Monserrat de San Salvador, 3 de julio de 2012.
- Pronunciamiento del señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente 2012.
- Pronunciamiento del Señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Humberto Luna, respecto de la situación de riesgo que representa el deterioro de la obra de paso: “Puente El Coro” ubicado sobre el río Acelhuate, zona de “La Chacra”, municipio de San Salvador, 8 de octubre de 2012.
- Comunicado de prensa sobre el Pronunciamiento del Señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Humberto Luna, respecto de la situación de riesgo que representa el deterioro de la obra de paso: “Puente El Coro” ubicado sobre el río Acelhuate, zona de “La Chacra”, municipio de San Salvador, 8 de octubre de 2012.
- Comunicado de Prensa del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en la presentación del informe especial sobre el proyecto minero Cerro Blanco y las potenciales vulneraciones a los derechos humanos de la población salvadoreña, 10 de enero de 2013.
- Comunicado de Prensa del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, presenta a

la Mesa Permanente para la Defensa del Derecho al Medio Ambiente de la PDDH, el informe especial sobre el proyecto minero “Cerro Blanco”, 31 de enero de 2013.

- Pronunciamiento de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en el marco del Día Mundial del Agua 2013, 22 de marzo de 2013.
- Comunicado de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, 22 de abril de 2013.
- Pronunciamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en el Marco del Día Mundial del Medio Ambiente 2013, 5 de junio de 2013.

#### **iv. Derechos humanos de la niñez, adolescencia y juventud**

- Opinión de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la propuesta de *Convenio centroamericano para la prevención y el combate de los delitos de explotación sexual comercial y trata de niñas, niños y adolescentes en Centroamérica y República Dominicana*, 27 de agosto de 2012.
- Posicionamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos ante el elevado número de niños, niñas y adolescentes víctimas de homicidios en El Salvador, 23 de julio de 2012.
- Pronunciamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en el marco de la celebración del “Día internacional de la juventud”, 12 de agosto de 2012.
- Posicionamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y la Mesa de la Niñez, Adolescencia y Juventud, sobre la implementación del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, 11 de septiembre de 2012.
- Pronunciamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y la Mesa de la Niñez, Adolescencia y Juventud, con ocasión de conmemorarse en el país, el 1 de octubre: “El día de la niña y el niño”, 1 de octubre de 2012.

#### **v. Derechos humanos de las mujeres**

- Pronunciamiento en el contexto de la problemática del reciente paro nacional del transporte público y los desalojos forzosos ocurridos en el Centro Histórico de San Salvador y otros Departamentos en el País, y los hechos de violencia que afectan a las mujeres, 15 de enero 2013.
- Pronunciamiento en el Día Nacional e Internacional de la Mujer, 8 de marzo 2013.
- Pronunciamiento en el caso de Beatriz García, 16 de abril 2013.
- Pronunciamiento en el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, 28 de mayo 2013.

## d) Observación preventiva, buenos oficios y mediaciones



*El señor Procurador, licenciado Oscar Humberto Luna realiza una verificación, luego del desalojo forzado de puestos de ventas informales en el centro de San Salvador.*

Durante el período que comprende al presente informe, la PDDH realizó a nivel nacional un total de **1,538 acciones de protección** relacionadas con la observación preventiva, diligencias de buenos oficios y mediaciones. El departamento que reporta mayor cantidad de diligencias es San Salvador (343), seguido por Chalatenango (164), la delegación local de Santa Rosa de Lima (153) y la delegación local de Apopa (127). Las actividades mayormente realizadas son las preventivas (1210); seguidas de las mediaciones (405) y los buenos oficios (346). El detalle se presenta en el siguiente cuadro:

<b>Cuadro N° 26</b> <b>Detalle de diligencias de observación preventiva realizadas y atención a crisis</b> <b>1 de junio de 2012 al 31 de mayo de 2013</b>				
<b>Unidad</b>	<b>Observación preventiva</b>	<b>Buenos Oficios</b>	<b>Mediaciones</b>	<b>Total</b>
San Salvador	145	16	245	<b>406</b>
La Libertad	0	0	0	<b>0</b>
Soyapango*	0	42	35	<b>77</b>
Apopa*	43	78	6	<b>127</b>
Usulután	31	39	13	<b>83</b>
Cuscatlán	54	6	20	<b>80</b>
Santa Rosa de Lima*	96	30	27	<b>153</b>
Ahuachapán	50	31	17	<b>98</b>
San Miguel	10	3	3	<b>16</b>
Santa Ana	28	14	3	<b>45</b>

<b>Cuadro N° 26</b> <b>Detalle de diligencias de observación preventiva realizadas y atención a crisis</b> <b>1 de junio de 2012 al 31 de mayo de 2013</b>				
<b>Unidad</b>	<b>Observación preventiva</b>	<b>Buenos Oficios</b>	<b>Mediaciones</b>	<b>Total</b>
Metapán*	39	25	1	<b>65</b>
La Paz	69	4	9	<b>82</b>
San Vicente	11	23	17	<b>51</b>
Morazán	9	6	7	<b>22</b>
Chalatenango	137	27	-	<b>164</b>
La Unión	32	13	7	<b>52</b>
Cabañas	29	4	29	<b>62</b>
Sonsonate	15	0	3	<b>18</b>
<b>Total</b>	<b>798</b>	<b>361</b>	<b>442</b>	<b>1601</b>

*Fuente: Reportes de las Delegaciones Departamentales y Locales\*, PDDH.*

## **i. Observación preventiva y atención de crisis**

La observación preventiva y atención de crisis es un mecanismo de protección que tiene por objeto, prevenir violaciones a derechos humanos y atender situaciones de crisis o conflictos a nivel local, regional o nacional; sean éstos económicos-sociales, penitenciarios, ambientales o de otra naturaleza, que puedan desembocar en vulneraciones a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, entre ellas, movilizaciones, protestas y concentraciones colectivas en lugares públicos o privados; amotinamientos o riñas en centros de detención, toma de edificios públicos o privados, y crisis derivadas de la confrontación o conflictos surgidos entre colectividades y autoridades públicas<sup>3</sup>.

Según lo establecido en el Reglamento para la Aplicación de Procedimientos la observación preventiva y atención de crisis comprende la aplicación técnica de los diferentes métodos alternos de solución de conflictos, tales como el diálogo, la negociación, la conciliación y la mediación, desde la estricta perspectiva de los derechos humanos y del mandato constitucional y legal del Procurador o Procuradora; promoviéndose en todo momento, la prevención o solución de las diferentes problemáticas atendidas<sup>4</sup>.

En el período que comprende al presente informe, la PDDH realizó 798 diligencias relacionadas con la observación preventiva y atención de crisis. Para el presente caso, el departamento de San Salvador presenta la mayor cantidad de acciones (145); seguido por Chalatenango (137); de la Delegación de Santa Rosa de Lima (96); La Paz (69); Cuscatlán (54); Ahuachapán (50); Delegación Local de Metapán (39) y La Unión (32).

<sup>3</sup> Art. 61 del Reglamento para la Aplicación de los Procedimientos del Sistema de Protección de los Derechos Humanos

<sup>4</sup> Art. 63 del Reglamento.

Asimismo, se reporta que la temática de los procesos administrativos y judiciales prevaleció en este tipo de actividad (33%), seguida por la temática de salud (15%), actividades laborales (14%), actividades relacionadas con la temática municipal (7%), y la situación de las personas que se dedican al comercio informal, quienes enfrentaron casos de desalojo en diferentes municipios del país las cuales representan el (6%) de las diligencias de observación preventiva realizadas por esta Procuraduría. A continuación se presenta el detalle:



*Fuente: Datos proporcionados por Delegaciones Departamentales y Locales y Departamento de Observación Preventiva*

## ii. Interposición de buenos oficios

Los buenos oficios, son las gestiones que el Procurador o Procuradora, quien realice sus funciones, o quien tuviere delegación para ello realizan a petición de la presunta víctima o denunciante con la anuencia de aquella, ante la autoridad denunciada o competente, con el objetivo de restituir o reparar integralmente y de manera inmediata los derechos presuntamente afectados. La interposición de buenos oficios es procedente siempre que la gestión no implique un menoscabo a otros derechos de la presunta víctima o de otras personas afectadas.

Durante el período que corresponde al presente informe, esta Procuraduría realizó un total de 361 diligencias de buenos oficios ante distintas autoridades públicas. De la cantidad realizada para este período, el departamento que reporta mas acciones de buenos oficios es la delegación local de Apopa



(78), seguido por la delegación local de Soyapango (42) de Usulután (39), seguido por Ahuachapán (31), la delegación local de Santa Rosa de Lima (30); Chalatenango (27); seguido por la delegación local de Metapán (25), y San Vicente (23).

Por otro lado, la problemática más destacada ha sido en relación con el debido proceso administrativo y judicial en el 38% de los casos; seguido por los derechos humanos a la salud en 12% de los casos, los cuales están referidos a la gestión de atención médica oportuna, ubicación de personas detenidas, ingreso de alimentos, entre otros. Asimismo, la interposición de buenos oficios en los temas municipal y en lo relacionado a las ventas informales representan, cada uno, el 9% de los casos, seguido de los derechos laborales con el 6%, y el derecho a la educación con el 3%. A continuación se presenta el detalle:



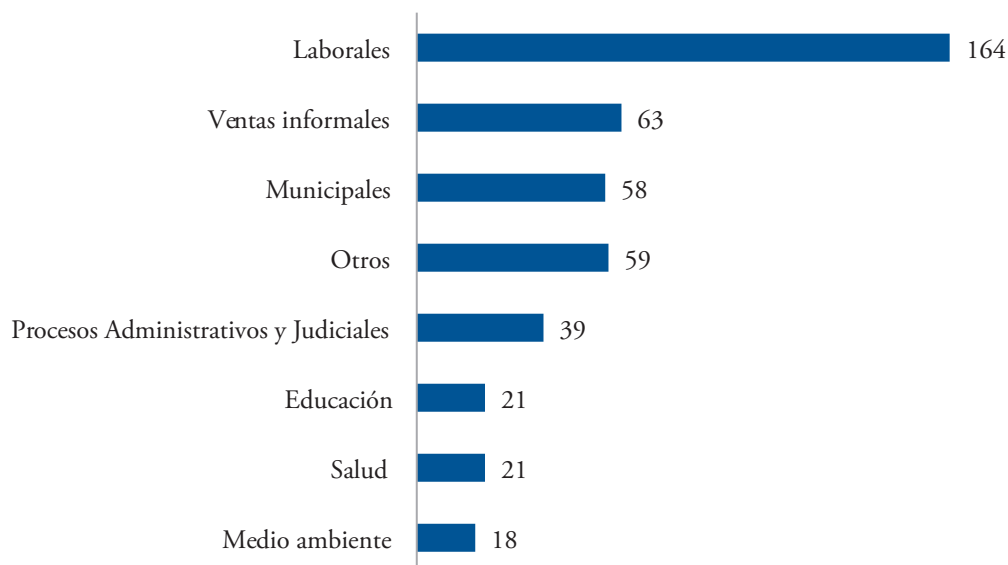
*Fuente: Datos proporcionados por Delegaciones Departamentales y Locales y Departamento de Observación Preventiva*

### iii. Mediaciones

El Reglamento para la Aplicación de Procedimientos establece que la mediación es un mecanismo potestativo que tiene como objetivo buscar la solución negociada de un conflicto, generalmente de naturaleza colectiva. La mediación es especialmente impulsada por la Procuraduría para facilitar la comunicación y el entendimiento entre las partes en conflicto, quienes deciden y proponen las condiciones para resolverlo (Art. 20).

Es por ello, que la labor de mediación, representa para la PDDH una actividad de primer orden, en el marco de su interés por propiciar el ejercicio del diálogo y las soluciones democráticas en el país. En ese sentido, entre el 1 de junio de 2012 y el 31 de mayo de 2013, esta Procuraduría realizó un total de 442 mediaciones a nivel nacional. El departamento que reporta mayor cantidad de mediaciones realizadas es San Salvador (245); seguido de la delegación local de Soyapango (35), Cabañas (29); la delegación local de Santa Rosa de Lima (27), y Cuscatlán (20). En el presente caso, la mayoría de mediaciones se encuentran relacionadas con el tema laboral (37%); seguidas de la situación generada por los desalojos de las personas vendedoras en distintos municipios del país (14%), y aquellas relacionadas con la temática municipal (13%). El siguiente cuadro establece el detalle:

**Gráfico N° 15**  
**Detalle de mediaciones realizadas según naturaleza**  
**1 de junio de 2012 a 31 de mayo de 2013**



*Fuente: Datos proporcionados por Delegaciones Departamentales y Locales y Departamento de Observación Preventiva*

## e) Programa de Observatorio de los Derechos Humanos



En el período, la Unidad de la Realidad Nacional presentó un *Estudio de factibilidad para la creación de un Programa de Observatorio de los Derechos Humanos*, proyecto correspondiente al área de Análisis e Incidencia de Políticas, Normas y Prácticas del Estado, del Plan Estratégico Institucional 2011-2014.

El estudio fundamenta la necesidad de adoptar un enfoque de investigación en derechos humanos que articule el análisis

jurídico con estadísticas e indicadores. El observatorio pretende constituirse en una herramienta de seguimiento y evaluación de la estrategia pública para atender problemáticas relevantes a la luz del cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos. Para tal efecto, se ha elaborado un breve diagnóstico de los derechos y sujetos más vulnerados, además de la posición institucional frente a las problemáticas que la ciudadanía ha señalado como más preocupantes.

A partir de este análisis, la estrategia de observación se aplicará inicialmente a dos temas importantes: la seguridad ciudadana y la seguridad alimentaria y nutricional. El abordaje de estas temáticas partirá del análisis de la situación de grupos sociales en situación de vulnerabilidad como mujeres, niñez y adolescencia, diversidad sexual, entre otros, de tal manera que exista una conexión entre problemáticas generales con problemáticas específicas. Posteriormente, la estrategia se ampliará a otras áreas, analizando el contenido y el alcance de otros derechos en un período de tres años.

Hasta la fecha de la redacción de este Informe, se han elaborado los términos de referencia para la contratación de una consultoría que le correspondió diseñar y elaborar un “Observatorio de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos de la PDDH”. La empresa que se le asignó los servicios fue FESPAD quien presentó un plan de trabajo; un diagnóstico de políticas públicas, legislación e información estadística en materia de seguridad ciudadana; un estudio de los instrumentos internacionales, jurisprudencia y doctrina relacionados con los temas de seguridad ciudadana; una propuesta de indicadores de estructura, progreso y resultado, siguiendo la metodología de la ACNUDH; instrumentos de medición y lista de contactos interinstitucionales que incluya, entre otros, fichas de información, tablas, encuestas y cuestionarios; un mecanismo de sistematización y consolidado de datos e información, que esté sustentado en un software o plataforma electrónica que permita crear bases de datos, estadísticas y gráficas; y una propuesta de una página web de consulta, que contenga los resultados del seguimiento a los indicadores y otros estudios relacionados.

Asimismo, se encuentra en la etapa de revisión final el “Protocolo de funcionamiento del Observatorio de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos”, que pretende ser una guía práctica para implementar los procedimientos adecuados para la obtención de información oportuna, la construcción de análisis pertinentes, la elaboración de sugerencias, recomendaciones o mandatos, e incluso la activación de mecanismos de protección de los derechos humanos de la PDDH

### 5.3. PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS



*Finalización de un curso de derechos humanos del Programa de Ciudadanía, en las instalaciones de la Escuela de Derechos Humanos.*

El área estratégica de promoción y educación en derechos humanos, tiene como objetivo educar, promover y divulgar el conocimiento y acciones de incidencia sobre los derechos humanos, para su apropiación por la población, con miras a generar cultura de respeto y garantía en el Estado. Las estrategias específicas que se han propuesto son cuatro: fortalecer la educación y promoción en derechos humanos en diferentes sectores; socialización sistemática de las resoluciones, informes especiales y otros documentos que fortalezcan la generación del conocimiento de la labor institucional; suscripción de convenios con universidades, gobiernos locales y organizaciones sociales; e incorporar la perspectiva de género en la educación y promoción de derechos humanos.

En el presente período que se informa, la promoción y educación en derechos humanos ha sido una labor prioritaria y necesaria cumplida según la disponibilidad de recursos humanos técnicos y financieros. Ha sido una labor concordante con el mandato constitucional del señor Procurador, a quien se le atribuye la responsabilidad de desarrollar “un programa permanente de actividades de promoción sobre el conocimiento y el respeto de los derechos humanos”, que prescribe el numeral 13° del artículo 194 en el romano I de la Constitución de la República. En este numeral, la educación y promoción son acciones que tienen el objetivo de que se conozcan los derechos humanos para que se respeten debidamente. Por un lado, estas acciones contribuyen a una labor preventiva de violaciones, pero a la vez, son parte de una sólida educación humana que configura un futuro más digno.

En el artículo 55 de la Constitución de la República, se considera que los fines de la educación son: “lograr el desarrollo integral de la personalidad en su dimensión espiritual, moral y social; contribuir

a la construcción de una sociedad democrática más próspera, justa y humana; inculcar el respeto a los derechos humanos (...). Todos estos aspectos están en sintonía con la Declaración Universal de Derechos Humanos, particularmente con el artículo 26 numeral segundo donde señala que: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales”.

La promoción y educación en derechos humanos que se ha desarrollado en este año de labor, justamente han estado orientadas por el reconocimiento y respeto del espíritu profundo de dignidad y humanidad que se aspira cultivar cada vez más en el país y se anhela que caracterice y consolide poco a poco un Estado Democrático de Derecho y favorezca una nueva cultura de convivencia social de derechos humanos. De ahí la importancia de dar a conocer el mandato de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y las funciones y atribuciones del Titular; el divulgar el catálogo de derechos que pertenecen a la humanidad, para que todas las personas los titule, goce y proteja. De esta forma se ha apostado a que las personas comprendan que esta Procuraduría es un apoyo en este proceso de apropiación y exigencia del respeto justo de los derechos.

Se ha procurado instalar en la conciencia social y personal de quienes han sido beneficiadas y beneficiados con estas acciones, una actitud de actuación ante una violación de derechos humanos, donde las personas puedan identificar, denunciar y especialmente puedan prevenirla para lograr su no reincidencia. La Procuraduría ha mantenido el ideal de contribuir a transformar aquellas realidades del país que conculcan derechos. Dicha transformación sólo será posible al educar y promover los derechos humanos en, desde y para las personas, con especial dedicación a la juventud.

### **a) Datos estadísticos a nivel nacional**

A nivel nacional, las actividades de educación de derechos humanos que ha ejecutado la PDDH, han sido las siguientes: talleres, cursos, panel forum, diplomados, materiales pedagógicos, y otras actividades, que pretenden dejar un contenido formal de los derechos humanos, comprensible y asimilable en la conciencia de las personas que han participado en la educación.

Por otra parte, a nivel nacional las actividades de promoción más desarrolladas han sido las siguientes: foros, seminarios, ferias, festivales, conferencias, conversatorios, participación en medios de comunicación social, divulgación de informes especiales y situacionales, celebración de días conmemorativos, reuniones de seguimiento, acompañamiento a comunidades, promoción del mandato del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, y actividades de difusión y recuperación de la memoria histórica.

Las distintas actividades específicas de promoción y educación en derechos humanos, se han planificado para responder a diferentes grupos sociales metas, los cuales se han priorizado a partir de diferentes rasgos y características como la edad, si estudia, si es líder/liderazgo comunitario, entre otras características. La configuración de grupos sociales, permite también generar estadísticas para planificar futuras acciones. Las distintas actividades de promoción y educación en derechos humanos se orientaron a atender los grupos sociales siguientes:



**Cuadro N° 27**  
**Sectores sociales beneficiados por las actividades de promoción y educación en derechos humanos**

1.- Sector educativo formal	Básica Media Superior
2.- Servidores públicos	Docentes Personal de salud Policías Militares Municipales Otros
3.- Organizaciones sociales	Sindicatos ONG's Gremios Comunidades Colectivos Movimientos
4.- Grupos en situación de vulnerabilidad	Personas adultas mayores Personas con discapacidad Personas con VIH Pueblos indígenas Comunidad LGBTI Víctimas del conflicto armado Otros
5.- Otros sectores beneficiados	

Sobre el análisis nacional, se concluye que se han realizado un total de 4,157 actividades de educación y promoción. Beneficiando a 66,175 personas. En las actividades estrictamente de educación, se han atendido 37,624 personas, y del total de actividades de educación éstas representan el 65.86 %, mientras que las actividades de promoción fueron el 34.14%, beneficiándose a 28,551. A nivel nacional, se generaron 15,359 unidades de material educativo, de promoción y difusión de los derechos humanos.

El universo de personas beneficiadas a nivel nacional fue de 66,175 de las cuales el 55.8% son del género femenino (36,925); los jóvenes y estudiantes representan el 62%, siendo el grupo etáreo prioritario y mayoritario en las actividades de educación y de promoción. La población adulta beneficiada representa el 38%, del cual 30% son del grupo de funcionarios o servidores públicos citados en un cuadro anterior, y el 8% son adultos de organizaciones sociales. A continuación, se presenta la tabla con los datos nacionales.

**Cuadro N° 28**  
**Actividades de promoción y educación a nivel nacional**

	Educación		Promoción		Materiales	Totales de actividades y personas beneficiadas	
	Actividades	Personas beneficiadas	Actividades	Personas beneficiadas	Cantidad de materiales	Total de actividades	Total personas beneficiadas
<b>I. Delegaciones locales</b>							
Apopa	75	2320	32	1925	n/d	107	4245
Metapán	40	1334	41	1181	300	81	2515
Santa Rosa de Lima	9	174	138	929	n/d	147	1103
Soyapango	40	1244	29	1428	n/d	69	2672
<b>II. Delegaciones departamentales</b>							
Ahuachapán	189	4235	169	4161	1860	358	8396
Cabañas	8	400	15	291	n/d	23	691
Chalatenango	13	n/d	47	1324	n/d	60	1324
Cuscatlán	31	141	12	516	n/d	43	657
La Libertad	69	1053	103	n/d	n/d	172	1053
La Paz	63	1600	65	2600	n/d	128	4200
La Unión	95	3189	101	1739	149	196	4928
Morazán	82	3353	30	3885	15	112	7238
Santa Ana	33	167	102	3185	n/d	135	3352
San Miguel	84	3064	79	250	n/d	163	3314
San Vicente	82	5214	34	724	n/d	116	5938
Sonsonate	94	1170	31	n/d	n/d	125	1170
Usulután	122	2031	139	749	9	261	2780
<b>III. Sede Central y Escuela de Derechos Humanos</b>							
Unidad de educación	229	3732	n/d	n/d	n/d	229	3732
Unidad de cultura y promoción	n/d	n/d	38	3664	n/d	38	3664
Biblioteca institucional	1204	1035	n/d	n/d	n/d	1204	1035
Unidades Juveniles	87	2168	n/d	n/d	n/d	87	2168
Depto. de Comunicaciones	n/d	n/d	93	n/d	14000	93	n/d
Unidad Realidad Nacional	18	n/d	n/d	n/d	9	18	n/d

**Cuadro N° 28**  
**Actividades de promoción y educación a nivel nacional**

	Educación		Promoción		Materiales	Totales de actividades y personas beneficiadas	
	Actividades	Personas beneficiadas	Actividades	Personas beneficiadas	Cantidad de materiales	Total de actividades	Total personas beneficiadas
<b>IV. Procurador y Procuradurías Adjuntas</b>							
Procurador y Procurador Adjunto	21	n/d	26	n/d	n/d	47	n/d
Procuradurías adjuntas	50	n/d	95	n/d	17	145	n/d
<b>Totales</b>	<b>2,738</b>	<b>37,624</b>	<b>1,419</b>	<b>28,551</b>	<b>15,359</b>	<b>4,157</b>	<b>66,175</b>
<b>Porcentajes actividades</b>	<b>65.86%</b>		<b>34.14%</b>			<b>100%</b>	
<b>Porcentajes Por personas</b>		<b>56.86%</b>		<b>43.14%</b>			

*Fuente: reporte de actividades dependencias, PDDH.*

Las entidades que han realizado directamente las actividades de educación y promoción durante este período han sido: las delegaciones locales y departamentales; los diferentes departamentos de la sede central en San Salvador como: la Escuela de Derechos Humanos que comprende a las unidades de Educación, Cultura y Promoción, Realidad Nacional, Biblioteca Institucional. Además, se consideran las Unidades Juveniles, el Departamento de Comunicaciones. También, se presentan las actividades realizadas por el Procurador y las Procuradurías Adjuntas.

## b) Delegaciones Locales

**Cuadro N° 29**  
**Actividades de promoción y educación en las delegaciones locales**

	Educación		Promoción		Materiales	Totales de actividades y personas beneficiadas	
	Actividades	Personas beneficiadas	Actividades	Personas beneficiadas	Cantidad de materiales	Total de actividades	Total personas beneficiadas
Apopa	75	2320	32	1925	n/d	107	4245
Metapán	40	1334	41	1181	300	81	2515
Santa Rosa de Lima	9	174	138	929	n/d	147	1103
Soyapango	40	1244	29	1428	n/d	69	2672
<b>Totales</b>	<b>164</b>	<b>5,072</b>	<b>240</b>	<b>5,463</b>	<b>300</b>	<b>404</b>	<b>10,535</b>
<b>Porcentajes actividades</b>						<b>9.74%</b>	

*Fuente: Reporte de actividades dependencias, PDDH.*

Las cuatro delegaciones locales, Apopa, Metapán, Santa Rosa de Lima y Soyapango, tienen como rasgo común que son urbes muy pobladas y urbanizadas. Pese a limitación de personal y recursos financieros,

han logrado realizar el 9.74 % del total de las actividades de educación y promoción, atendiendo a 10,535 personas, en su mayoría estudiantes, jóvenes, mujeres y servidores públicos.

### c) Delegaciones Departamentales

Cuadro N° 30 Actividades de promoción y educación en las delegaciones departamentales							
	Educación		Promoción		Materiales	Totales de actividades y personas beneficiadas	
	Actividades	Personas beneficiadas	Actividades	Personas beneficiadas	Cantidad de materiales	Total de actividades	Total personas beneficiadas
Ahuachapán	189	4235	169	4161	1860	358	8396
Cabañas	8	400	15	291	n/d	23	691
Chalatenango	13	n/d	47	1324	n/d	60	1324
Cuscatlán	31	141	12	516	n/d	43	657
La Libertad	69	1053	103	n/d	n/d	172	1053
La Paz	63	1600	65	2600	n/d	128	4200
La Unión	95	3189	101	1739	149	196	4928
Morazán	82	3353	30	3885	15	112	7238
Santa Ana	33	167	102	3185	n/d	135	3352
San Miguel	84	3064	79	250	n/d	163	3314
San Vicente	82	5214	34	724	n/d	116	5938
Sonsonate	94	1170	31	n/d	n/d	125	1170
Usulután	122	2031	139	749	9	261	2780
<b>Totales</b>	<b>965</b>	<b>25,617</b>	<b>927</b>	<b>19,424</b>	<b>2,033</b>	<b>1,892</b>	<b>45,041</b>
<b>Porcentajes actividades</b>						<b>45.51%</b>	

Fuente: Reporte de actividades dependencias, PDDH.

Las trece delegaciones departamentales han atendido a 45,041 personas, mediante la ejecución de 1,892 actividades, que representa el 45.51% del universo de las actividades de educación y promoción (4,157). La mayoría de las delegaciones requieren de más personal y recursos para ir generando más experiencia y atención a la población. Guardan coordinación con la Escuela de Derechos Humanos y con las unidades juveniles y con instituciones de la sociedad civil, situación que les permite establecer la agenda de los derechos humanos a nivel local.

## d) Escuela de Derechos Humanos y Departamentos de la Sede Central

<b>Cuadro N° 31</b> <b>Actividades de promoción y educación en la Escuela de Derechos Humanos y los Departamentos de la Sede Central</b>							
	Educación		Promoción		Materiales	Totales de actividades y personas beneficiadas	
	Actividades	Personas beneficiadas	Actividades	Personas beneficiadas	Cantidad de materiales	Total de actividades	Total personas beneficiadas
Unidad de educación	229	3732	n/d	n/d	n/d	229	3732
Unidad de cultura y promoción	n/d	n/d	38	3664	n/d	38	3664
Biblioteca institucional	1204	1035	n/d	n/d	n/d	1204	1035
Unidades Juveniles	87	2168	n/d	n/d	n/d	87	2168
Depto. de Comunicaciones	n/d	n/d	93	n/d	14000	93	n/d
Unidad Realidad Nacional	18	n/d	n/d	n/d	9	18	n/d
<b>Totales</b>	<b>1,538</b>	<b>6,935</b>	<b>131</b>	<b>3,664</b>	<b>14,009</b>	<b>1,669</b>	<b>10,599</b>
<b>Porcentajes actividades</b>						<b>40.15%</b>	

La Escuela de Derechos Humanos es el referente institucional en materia de educación y promoción en derechos humanos. En principio coordina apoyo a las distintas dependencias al interior de la PDDH y también responde a solicitudes que le realiza la sociedad. Comprende las unidades de Educación, Cultura y Promoción, la Realidad Nacional y la Biblioteca Institucional. Además de estas dependencias, se plantean las actividades realizadas por las Unidades Juveniles y el Departamento de Comunicaciones.

En conjunto, la Escuela de Derechos Humanos y los departamentos o dependencias de la sede central en San Salvador, han beneficiando a 10,599 personas, a través de 1,669 actividades realizadas, que representa el 40.15% del total de 4,157 implementadas a nivel nacional.

### i. Dirección de la Escuela de Derechos Humanos

La Dirección de la Escuela de Derechos Humanos promovió la suscripción de cinco convenios con universidades e instituciones públicas, con el propósito de lograr las condiciones óptimas de bienestar y espacios de desarrollo integral en proyectos o programas, así como la creación y funcionamiento de canales de enlaces directos. De esta manera, el 24 de julio, 7 de septiembre y 22 de noviembre del 2012, se firmaron convenios de cooperación con vigencia de un año con las siguientes universidades privadas: Universidad Panamericana de El Salvador, Universidad Modular Abierta de El Salvador, Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer de El Salvador, respectivamente. También el 26 de febrero del 2013 se firmó un convenio con la Universidad Tecnológica.

Se destaca el convenio de capacitación con el Ministerio de la Defensa Nacional, el 6 de febrero del 2013, con el objeto de dar cumplimiento a una parte de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador, del 25



de octubre del 2012, en particular el Capítulo IX, letra C, número 4, que se refiere a las garantías de no repetición y que obliga al Estado salvadoreño a la capacitación de la Fuerza Armada de la República de El Salvador (FAES) en la implementación de programas o cursos permanentes y obligatorios sobre derechos humanos, incluyendo la perspectiva de género y niñez, dirigidos a todos los niveles jerárquicos de la FAES.

Con este convenio la PDDH, a través de su Escuela de Derechos Humanos, se compromete a fortalecer la formación de los miembros de la Fuerza Armada de El Salvador, a través de la capacitación constante y continua en dicha materia, a efecto de incidir positivamente en el accionar de las presentes y futuras generaciones de profesionales militares y de las filas castrenses. Por su parte, la FAES adquirió el compromiso de brindar todas las facilidades para que sus elementos reciban las capacitaciones así como mantener un seguimiento en torno a las aplicaciones de lo que aprenderán en la vía de mejorar el trabajo que realizan, apegados siempre al respeto de las garantías fundamentales de la población.

## **ii. Unidad de Educación**

La Unidad de Educación ha implementado prioritariamente jornadas de seguimiento, cursos, seminarios, conversatorios, talleres, conferencias. Ha reproducido textos como la Declaración de los Derechos Humanos, la política institucional de género de PDDH, el Reglamento del sistema de protección de derechos humanos, normas del derecho a la educación, folleto de las obligaciones del Estado con los derechos humanos, folleto para prevenir la tortura. Realizó 229 actividades de educación y benefició 3,732 personas. Se destaca la ejecución de los siguientes programas:

### ■ *Programa de educación en derechos humanos en el área de educación formal*

En coordinación con el Servicio Social Pasionista se desarrolló el curso-taller sobre derechos humanos y educación durante los días 8 y 10 de enero de 2013, en el curso se estudió la legislación relacionada con el respeto y garantía del derecho a la educación, asistieron 7 docentes. El día 17 de enero del 2013, se desarrolló una jornada de capacitación para 7 docentes (mujeres) de la Escuela de Educación Especial del Municipio de Metapán, con el objetivo de sensibilizar y fortalecerles en la formulación, ejecución y monitoreo de programas dirigidos a niñez y adolescencia.

Además, se han realizado actividades de revisión de los programas de educación del sistema nacional educativo; revisión de las cartillas de alfabetización en derechos humanos que la institución elaboró en años recientes, esto con el propósito de actualizarlas y verificar si contenían enfoque de género y de protección integral a la niñez y adolescencia.

El 1 de febrero del 2013, se inició un curso en temáticas específicas de derechos humanos en coordinación con la Universidad Panamericana Centro Regional Ahuachapán, dirigido a 30 personas entre personal administrativo, catedráticos y catedráticas de la Universidad, funcionarias y funcionarios públicos y privados de diversas instituciones del Departamento de Ahuachapán.

En el mes de abril se ejecutaron 2 jornadas en el Colegio Theodor Mommsen del municipio de Santo Tomás, el 24 de abril estuvieron alumnos de tercer ciclo y el día 26 maestros y maestras del referido colegio, la temática que se desarrolló fue derechos humanos y LEPINA.

### ■ *Programa de educación en derechos humanos dirigido a la ciudadanía*

Uno de los objetivos de este programa es desarrollar procesos de formación dirigidos a la población en general como herramienta para la defensa y protección de sus derechos, implementando metodologías

participativas para la multiplicación de los contenidos. En el mes de enero del 2013, se desarrolló el curso *derechos humanos de las personas adultas mayores* en jornadas de 4 horas los días 8, 15, 16, 22 y 23 de enero, participaron 15 hombres y 18 mujeres.

En febrero del 2013, se ejecutó el taller *derechos humanos y memoria histórica* realizando un proceso de reflexión, valorando la importancia de “no olvidar” las graves violaciones a derechos humanos, asistieron 19 hombres y 31 mujeres. Durante el mes de marzo, se desarrolló el curso “derechos humanos de las mujeres”, asistieron 8 hombres y 51 mujeres; dado que el grupo fue numeroso se subdividió en 2, las fechas de su realización fueron 6, 13, 14, 15, 18, 19, 20 y 21 de marzo. Las personas que asistieron a estos cursos se comprometieron a multiplicar sus conocimientos, y producto de ello realizaron 39 actividades a las que asistieron 726 personas.

Además se dictó un taller para 7 mujeres y 6 hombres que laboran en la Fundación Salvadoreña para la lucha contra el SIDA “María Lorena” CONTRASIDA; en la ciudad de Metapán se realizó una jornada de capacitación para 8 hombres y 22 mujeres pensionadas, en el salón de usos múltiples del ISSS de dicha ciudad. En Ciudad Delgado se desarrolló jornada el sábado 9 de febrero para 15 mujeres.

#### ■ *Programa de capacitación en derechos humanos para funcionarios públicos*

Se resalta el *Curso de Derechos Humanos y de Derecho al Debido Proceso para personal jurídico de la Fuerza Armada de El Salvador*, por su participación en las tareas de seguridad ciudadana. Durante el período, se desarrollaron jornadas de capacitación con las fuerzas de tarea conjunta de la Fuerza Armada que prestan funciones de seguridad pública de los Comandos Zeus y Marte. Posteriormente, se impartieron otras tres jornadas de capacitación, esta vez dirigido al personal jurídico de la Fuerza Armada, quienes forman parte de las distintas unidades operacionales que tienen a su cargo la asesoría jurídica, sustanciación de procesos administrativos sancionatorios y la capacitación de personal de tropa. Estos cursos se impartieron a un aproximado de 200 personas entre personal de tropa, oficiales y personal jurídico.

Se buscó incidir para que los capacitados y capacitadas aplicaran en su labor cotidiana el concepto y características de los derechos humanos, así como también que aprendieran a identificar las obligaciones internacionales que tiene el Estado salvadoreño en materia de derechos humanos. Asimismo, se abordaron temas relativos al análisis de las reglas y niveles para el uso de la fuerza y de las armas de fuego; el trato debido a reclusos y la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El tema del debido proceso legal y administrativo se abordó con el objetivo de que aprendieran a identificar y aplicar los requisitos esenciales al momento de realizar los procesos administrativos sancionatorios dentro de la Fuerza Armada. En general, las temáticas abordadas en estos cursos versaron sobre el concepto y característica de los derechos humanos; las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos; el uso de la fuerza y los derechos humanos; la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; el derecho al debido proceso legal y administrativo y el derecho internacional humanitario: métodos y medios de guerra y la protección de personas en Conflicto Armado Internacional (CAI) y en Conflicto Armado No Internacional (CANI).

También, se destaca el *Curso sobre Derechos Humanos dirigido a personal docente de los Centros Escolares del Sistema Penitenciario en coordinación con la Dirección General de Centros Penales*, en seguimiento al cumplimiento del convenio de cooperación firmado en diciembre de 2007, con el fin de unir esfuerzos para la promoción de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Se desarrollaron cursos-

talleres en cuatro momentos, en los que se atendieron 19 centros escolares del Sistema Penitenciario y a un total de 120 docentes de estos mismos centros. Las jornadas fueron programadas los meses de mayo y junio del 2012, y se organizaron según zona geográfica (zonas oriental, occidental, paracentral y central).

En el mes de enero del 2013, se realizaron 3 seminarios de 4 horas de duración para personal de Unidades de Salud del área metropolitana, a los que asistieron 24 hombres, 78 mujeres entre Directores, Jefas de servicios de Enfermería. El contenido del seminarios fue examinar las obligaciones del Estado en relación con el derecho a la salud haciendo énfasis en el componente de calidad y calidez que debe realizarse hacia la ciudadanía cuando asiste a los servicios de salud.

#### ■ *Programa de capacitación para el personal de la institución*

Con este programa de capacitación se pretende fortalecer los conocimientos y competencias del personal institucional; se han desarrollado 10 jornadas de capacitación sobre “normas de convivencia y cultura de paz”, con el propósito de prevenir acciones y conductas que provoquen riesgos psicosociales, tal como lo señala la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo. Asimismo, se coordinan capacitaciones técnicas jurídicas con la Escuela de Capacitación Judicial, en especial en temas de la Ley de Protección Integral para la Niñez y Adolescencia, Derecho Laboral, Derechos de la Mujer y Medio Ambiente.

#### ■ *Programa de formación de agentes multiplicadores*

Pretende desarrollar un proceso de capacitación de formadores en derechos humanos, especialmente dirigido a personal institucional con funciones de promoción y educación en derechos humanos.

En el período, el programa se ha centrado en dos acciones: el desarrollo de dos de seis módulos de capacitación: “Planificación de la Acción Educativa” y “Metodologías Educativas en Derechos Humanos”, dirigidos a personal institucional y facilitados por especialistas externos. Ambas actividades constituyen la antesala para iniciar la etapa de conformación de los grupos para Agentes Multiplicadores externos, que según el PAM estarán integrados por 20 personas, según el perfil elaborado por cada Delegación Departamental y Local, así como tres grupos de 20 personas que serán atendidas por la Unidad de Educación.

De esta manera, se han desarrollado 5 jornadas de capacitación para un grupo de 27 personas que se desenvuelven como promotores de derechos humanos en distintos lugares e instituciones, con énfasis módulos de planificación de derechos humanos, orientaciones sobre metodologías y principios básicos de los derechos humanos. Se les ha dotado de lecturas especializadas para la enseñanza de los derechos humanos, con el objetivo que se fortalezcan sus capacidades y puedan ayudar a sus comunidades.

Asimismo, se han realizado otras actividades de difusión como ferias en donde la institución ha participado con la presentación de publicaciones como informes anuales, informes especiales, y otros materiales escritos y audiovisuales, y entrega de trípticos, afiches, hojas volantes, revistas, entre otros materiales. Estas acciones se continuaran desarrollando 3 veces al mes visitando municipios alejados de las cabeceras departamentales con el propósito de divulgar el mandato del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos.

Cabe destacar el inicio, en el mes de abril del 2013, de un proyecto de difusión del mandato institucional, consistente en visitas a diferentes municipios del país, especialmente en aquellos alejados

de las cabeceras departamentales y en consecuencia con poco acceso a información sobre el quehacer de PDDH, el primer municipio visitado fue Chiltiupán en el Departamento de La Libertad.

### iii. Unidad de Cultura y Promoción

La Unidad de Cultura y Promoción de los Derechos Humanos ejecutó 38 acciones de promoción masiva, atendiendo a 3,664 personas. Asistieron a ferias, festivales, universidades y centros escolares para promocionar los derechos humanos. Se destaca la ejecución de los siguientes programas:

- *Promoción del mandato del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos*

Con el propósito de que la población salvadoreña en general y servidores públicos en particular, conozcan, practiquen y den observancia a los compromisos con los derechos humanos, así como la manera de hacerlos efectivos a través de la activación de los mecanismos de protección, en particular los que ofrece la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

En este período, se llevaron a cabo conjuntamente con las autoridades de Centros Educativos del Ministerio de Educación y dependencias institucionales, 43 actividades educativas, en las que se dieron a conocer el mandato constitucional y aspectos básicos de derechos humanos, información bibliográfica y promoción de los derechos humanos. Se atendieron a 5,207 personas entre estudiantes de educación básica, media y ciudadanía de instituciones gubernamentales y no gubernamentales.

- *Organización de actividades conmemorativas en materia de derechos humanos*

En el marco de organizar foros, seminarios y jornadas de interés en las áreas conexas con los derechos humanos, la Unidad de Cultura y Promoción organizó en este período 4 actividades conmemorativas: Vigésimo aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador; Día Internacional para el Derecho a la Verdad; Día Mundial de la Salud; Día Nacional del Defensor y Defensora de los Derechos Humanos. Se tuvo la participación de varias organizaciones sociales, instituciones públicas, organismos internacionales, entre otros.

- *Diseño, producción y distribución de materiales educativos de derechos humanos*

En el período se han elaborado 28 materiales educativos, estos son: once carteleras; siete hojas volantes; dos folletos; tres brochure; un juego de brochures sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos, este contiene el texto oficial, lenguaje corriente e imágenes en los 30 artículos de la Declaración; un banner; una pancarta; un diseño para trabajar y dibujar los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos; diseño de material didáctico para las capacitaciones de la Comisión de Ética Gubernamental de la PDDH (juego de 17 figuras para hacer dinámica de parejas); búsqueda y fotocopiado de material relacionado con pronunciamientos y resoluciones de derechos humanos.

### iv. Unidad de la Realidad Nacional

En el período de rendición de cuentas desarrolló sus funciones de participar en la elaboración de documentos de análisis, sistematizar las actividades institucionales y realizar acciones de investigación en materia de derechos humanos. Elaboró y publicó los siguientes documentos: Informe Especial sobre la situación de los derechos humanos a la luz de los Acuerdos de Paz de El Salvador; el Informe sobre la Situación de los Derechos Políticos en el marco de las Elecciones Legislativas y Municipales celebradas el 11 de marzo de 2012; el Estado de los Derechos Humanos en El Salvador, 2012; dos números de la Revista de la Escuela de Derechos Humanos que difunde el análisis de la realidad nacional y los

resultados de las acciones de educación, promoción, difusión e investigación; seis libros compilatorios de doctrina institucional sobre pronunciamientos públicos, mensajes, opiniones, informes especiales y situacionales, y resoluciones emblemáticas; y la sistematización y redacción del Informe Anual de Labores 2012-2013.

Asimismo, ha impulsado el área de investigación dando seguimiento al proyecto institucional del Observatorio de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos; también ha contado con una participación destacada en el proyecto de ACNUR para elaborar un estudio denominado “Análisis de Contexto-Derechos Humanos y Situación de Grupos con necesidades específicas de protección en El Salvador”, el cual será insumo fundamental para que los países receptores evalúen objetivamente las solicitudes de asilo u otras formas de protección internacional, que son recibidas por parte de personas salvadoreñas debido al desplazamiento forzado por la inseguridad ciudadana y extrema violencia generada por las nuevas formas de crimen organizado que actualmente afecta al país.

#### **v. Biblioteca Institucional**

La Biblioteca presta una atención personalizada. Cada persona que atiende es una actividad de educación. Realizó 1,204 acciones, beneficiando a 1,035 personas. Además, ha cosechado importantes logros como: la elaboración de 1,167 fichas catalográficas, restauración de 100 documentos de hemeroteca, ofreció a las personas usuarias una videoteca, entre otras. Además, continúa con el proceso de autorización de la biblioteca institucional.

Se destaca la realización de Ferias del Libro en Derechos Humanos, que tiene por objetivo acercar los servicios que ofrece la Biblioteca a la comunidad en general. En el período, se realizaron tres ferias del libro en el Parque del Municipio de San Martín; en el Parque del Municipio de Ilopango; y en el Mercado Municipal del Municipio de San Marcos. Fueron beneficiadas 358 personas, entre ellas 200 mujeres y 158 hombres.

En dichas actividades se establecieron coordinaciones con diferentes instituciones públicas y municipales, con el apoyo de otras dependencias institucionales, para promover la actividad y el uso de la Unidad Móvil de la PDDH. Se realizaron talleres infantiles de pintura sobre derechos humanos, cuenta cuentos para niños y niñas, donación de diversidad de materiales educativos e informativos de interés para la población en general.

#### **vi. Unidades Juveniles de Difusión**

Las Unidades Juveniles han presentado como logros sobresalientes el efecto multiplicador de los derechos humanos de la niñez y la juventud. Se han incentivado las redes de intercambio de experiencias entre los y las personas integrantes de las distintas unidades juveniles del país. Se implementó la controlaría juvenil, y la incidencia ante las autoridades. La presencia de 300 jóvenes en el espacio de las unidades juveniles es una contribución directa a la participación de esta población con las políticas públicas. Ejecutaron 87 actividades importantes con las cuales beneficiaron a 2,168 jóvenes.

#### **vii. Departamento de Comunicaciones y Prensa**

El Departamento de Comunicaciones contribuyó a la promoción y difusión de los derechos humanos. Generó 14,000 ejemplares de la revista el Defensor del Pueblo y un número especial en diciembre de 2012, han traslado información de las actividades de la PDDH a la prensa escrita, radial y televisada. Acompañó al Procurador y demás autoridades en las actividades que organiza la PDDH, divulgando información valiosa. Han mantenido y actualizan la página web institucional así como ha establecido las relaciones con los medios de comunicación masiva.



## e) Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y Procuradurías Adjuntas Específicas

Cuadro N° 32 Actividades de promoción y educación del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y las Procuradurías Adjuntas Específicas							
	Educación		Promoción		Materiales	Totales de actividades y personas beneficiadas	
	Actividades	Personas beneficiadas	Actividades	Personas beneficiadas	Cantidad de materiales	Total de actividades	Total personas beneficiadas
Procurador y Procurador Adjunto	21	n/d	26	n/d	n/d	47	n/d
Procuradurías adjuntas	50	n/d	95	n/d	17	145	n/d
<b>Totales</b>	<b>71</b>	<b>n/d</b>	<b>121</b>	<b>n/d</b>	<b>17</b>	<b>192</b>	<b>n/d</b>
<b>Porcentajes actividades</b>						<b>4.61%</b>	

Fuente: Reporte de actividades dependencias, PDDH.

El señor Procurador y las procuradurías adjuntas específicas han realizado 71 actividades de educación y 121 de promoción. En total, han ejecutado 192 acciones. Estas actividades tienen un fuerte influjo en las personas que han recibido la capacitación, por cuanto la figura y el contacto con las autoridades de la PDDH, transmiten con fuerza y claridad la naturaleza de la institución y de sus cargos, dando a comprender la necesidad de resguardar y garantizar los derechos humanos y su dignidad.

Se destaca la presentación del libro Curso de Derechos Humanos “Doctrina y Reflexiones”, a estudiantes de educación media y superior de diferentes institutos, colegios y universidades, así como también a personas asistentes en eventos organizados por entidades estatales. La obra constituye una herramienta pedagógica dirigida a personas formadoras en materia de derechos humanos, inspirada en la necesidad de promover una cultura de respeto de la dignidad humana.

## 5.4. ACCIONES Y RELACIONES EXTERNAS



*El señor Procurador, licenciado Oscar Humberto Luna en la firma de un Convenio con el Ministerio de Defensa Nacional para recibir capacitaciones en materia de derechos humanos, actividad que se enmarca en el cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs El Salvador.*

El área de acciones y relaciones externas tiene como objetivo estratégico la consolidación de los espacios de interacción y vinculación con las instituciones del Estado, la sociedad civil y actores internacionales involucrados en la protección y promoción de los derechos humanos. Se han formulado diferentes estrategias tales como la suscripción de convenios, la promoción de mecanismos de participación de diversos sectores sociales en la protección de los derechos humanos y fortalecer las funciones institucionales de gestión de cooperación.

Esta actividad se fundamenta en lo establecido en el Reglamento para la Aplicación de Procedimientos, el cual dispone que en virtud de la relación que existe entre el Sistema de Protección de Derechos Humanos y los diferentes sectores vinculados con temáticas específicas a los derechos humanos, la Procuraduría puede mantener comunicación y cooperación con diversos organismos a través de dichas actividades.

## a) Mesas temáticas de trabajo



*El señor Procurador, licenciado Oscar Humberto Luna en el lanzamiento de la Mesa de la Soberanía Alimentaria conformada por doscientas organizaciones sociales.*

La adopción de las Mesas Temáticas de Trabajo, es uno de las estrategias impulsadas por la Procuraduría para promover la participación de los diferentes sectores de la sociedad civil e instituciones públicas, con el objetivo de propiciar una mayor coordinación en lo relativo a la protección de los derechos humanos a través de la construcción de propuestas, posicionamientos públicos, entre otros.

Durante el período, a través de las procuradurías adjuntas específicas se ha promovido la conformación de 10 Mesas Temáticas de Trabajo en las distintas áreas de protección de los derechos humanos, realizando a nivel nacional, reuniones con los distintos sectores y organizaciones que componen dichos espacios. A continuación, se presenta el listado de organizaciones e instituciones que componen dichas mesas temáticas y los logros alcanzados.

### i. Mesa Penitenciaria Interinstitucional<sup>1</sup>

La Mesa Penitenciaria Institucional se encuentra bajo la responsabilidad de la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Civiles e Individuales, está compuesta por 8 organizaciones cuyo trabajo está vinculado con el seguimiento a la situación de las personas privadas de libertad.

<sup>1</sup> Información contenida en la página electrónica de la PDDH <http://www.pddh.gob.sv/menurel/menumesas/92-mesa-penitenciaria-interinstitucional>  
Última visita 25 de junio de 2012

Cuadro N° 33 Mesa Penitenciaria Interinstitucional	
<b>Responsable:</b> <i>Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Civiles e Individuales</i>	
1	Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD)
2	Asociación de ex internos penitenciarios de El Salvador (AEIPES)
3	Fundación Ideas para la Paz
4	Confraternidad Carcelaria de El Salvador
5	Corte Suprema de Justicia
6	Colectivo Herbert Amaya
7	Universidad de El Salvador
8	Homies Unidos de El Salvador
<b>Total</b>	<b>8 organizaciones</b>

En el período realizó diversas reuniones para plantear una nueva reestructuración de trabajo e invitar a participar a organizaciones sociales de derechos humanos para trabajar de forma conjunta en el tema penitenciario.

## ii. Mesa Permanente de Género

La Mesa Permanente de Género está formada por nueve organizaciones, y se encuentra bajo la responsabilidad de la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer y la Familia.

Cuadro N° 34 Mesa Permanente de Género	
<b>Responsable:</b> <i>Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer y la Familia.</i>	
1	Movimiento de Mujeres Centroamericanas en Acción (MUCA)
2	Coordinadora Nacional de la Mujer Salvadoreña (CONAMUS)
3	Mujeres Transformando (MT)
4	Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera” CEMUJER
5	Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer (IMU)
6	Patronato pro integración de la Mujer en el Desarrollo (PIMUDE)
7	Asociación para la Autodeterminación y Desarrollo de las Mujeres Salvadoreñas (AMS)
8	Movimiento Salvadoreño de Mujeres (MSM)
9	Mesa Sindical de Trabajadoras de la Maquila (MSTM)
<b>Total</b>	<b>9 organizaciones</b>

Desde este espacio se ha impulsado una coordinación especial con el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU); además de organizar acciones concretas tales como la elaboración de la Plataforma de Derechos Humanos de las Mujeres, acompañamiento en pronunciamientos,



entregas de piezas de correspondencia a la Asamblea Legislativa, coordinación de eventos públicos, talleres, validación de informes especiales elaborados por la Adjunta específica, entre otros<sup>2</sup>.

### iii. Mesa Permanente de Personas Adultas Mayores

Esta mesa de trabajo se encuentra conformada por 10 organizaciones y bajo la coordinación de la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

<b>Cuadro N° 35</b>	
<b>Mesa Permanente de Personas Adultas Mayores</b>	
<b>Responsable:</b> <i>Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales</i>	
1	ANES
2	Asociación Salvadoreña de Empleados Públicos Pensionados (ASEPI)
3	Asociación de Trabajadores Jubilados y Pensionados de El Salvador (ASOTRAJUPDES)
4	Asociación Nacional de Empleados Jubilados de Telecomunicaciones (ANJUPTTEL)
5	Asociación Nacional de Pensionados del Instituto Salvadoreño del Seguro social (ANPISSS)
6	Comisión Mixta Independiente
7	Comité Rescate de Pensiones
8	Fundación Salvadoreña para la Tercera Edad (FUSATE)
9	Pensionados Centro Judicial
10	Sindicato de Trabajadores de la Salud (SITRASALUD)
<b>Total</b>	<b>10 Organizaciones</b>

Entre sus principales actividades y logros para el presente período se encuentran: envío de comunicaciones al Departamento de Programas a Pensionados del ISSS y FUSATE para ponerse a disposición en labores de difusión de los derechos humanos de las personas adultas mayores; desarrollo de actividades formativas sobre derechos de adultos mayores a personas externas; conmemoración por el mes de la persona adulta mayor; jornada conjunta de reflexión y trabajo sobre la situación de la población adulta mayor en El Salvador; elaboración del Plan de Trabajo 2013; conferencia de prensa para presentar el “Pronunciamento del Señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y la Mesa Permanente sobre los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, sobre la actual situación de la persona adulta mayor en El Salvador”; reunión con el Diputado Juan Carlos Mendoza Portillo, Presidente de la Comisión de Defensa de la Asamblea Legislativa, para impulsar proyectos de reforma que mejoren el bienestar de las personas adultas mayores en el país; discusión de propuestas de reforma a la Ley de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor, presentadas a la Comisión de Familia, la Niñez, Adolescencia y Adulto Mayor; reunión de trabajo con la Directora de la Persona Adulta Mayor Ad honorem de la Secretaría de Inclusión Social (SIS), para seguimiento al proyecto de reformas a la Ley de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor presentado a la Asamblea Legislativa, y para conocer sobre el funcionamiento del CONAIPAM; y reiteración de petición de reunión a la Comisión Legislativa de la Familia, la Niñez, Adolescencia y Adulto Mayor para promover la discusión del Anteproyecto de Reformas a la Ley, pieza de correspondencia presentada a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa el 23 de abril de 2009.

2 Información contenida en la página electrónica de la PDDH. <http://www.pddh.gob.sv/menurel/menumesas/89-mesa-permanente-de-genero>. Última visita 25 de junio de 2012.



#### iv. Mesa Permanente de Personas con Discapacidad<sup>3</sup>

Este espacio de trabajo, también se encuentra coordinado por la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y está formado por 36 organizaciones e instituciones.

<b>Cuadro N° 36</b>	
<b>Mesa Permanente de Personas con Discapacidad</b>	
<b>Responsable:</b> <i>Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales</i>	
1	Asociación Salvadoreña del Deporte sobre Silla de Ruedas. (ASADECIR)
2	Asociación Salvadoreña de Familiares y amigos de personas que padecen Esquizofrenia y otros Desordenes Mentales (ASFAE)
3	Asociación Salvadoreña de Sordos (ASS)
4	Coordinador del Programa de Personas con Discapacidad del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiable.(CESTA)
5	Comunidades Unidas de Usulután (COMUS)
6	Fundación Manos Mágicas (FMM)
7	Instituto Especializado de Educación Superior El Espíritu Santo (IEESES)
8	Red de Sobrevivientes de Minas Explosivas y Amputadas de El Salvador (LSN)
9	Promotora de la Organización de Discapacitados de El Salvador (PODES)
10	Universidad Francisco Gavidia (UFG)
11	Asociación Coordinadora de Comunidades Indígenas de El Salvador (ACCEIS)
12	Asociación de Lisiados de la Fuerza Armada de El Salvador (ALFAES)
13	Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador (ALGES)
14	ARCAS
15	Asociación Salvadoreña de Lisiados y Discapacitados (ASALDIG)
16	Asociación Cooperativa de Producción Artesanal de no Videntes Santa Lucia R.L. (ACOPASANTAL)
17	Asociación Cooperativa del Grupo Independiente Por Rehabilitación Integral (ACOGIPRI)
18	Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud Mental (ACISAM)
19	Asociación de Ciegos de El Salvador (ASCES)
20	Asociación de Padres y Familiares de Hijos/as con Discapacidad (Los Angelitos)
21	Asociación de Personas con Discapacidad de el Salvador (APDIES)
22	Asociación Nacional de Ciegos Salvadoreños (ANCIESAL)
23	Asociación Pro-Personas con Discapacidad de Cojutepeque (APRODISCO)
24	Asociación Protectora del Sordo Salvadoreño (APSSAL)
25	Asociación Salvadoreña de Rehabilitación (ASARE)
26	ASociación Pro-Hogar de Parálisis Cerebral Callejas Montalvo (HOPAC)
27	Caritas de El Salvador
28	Catholics Relief Service.
29	Centro de Recursos Centroamericanos CARECEN Internacional El Salvador
30	Consultora Independiente Licda. Maritza Melara
31	FAMA
32	Fundación Club de Amigos Especiales a Distancia de El Salvador (FUNCAEDES)
33	Justicia y Paz
34	MAIS

3 Información contenida en la página electrónica de la PDDH. <http://www.pddh.gob.sv/menurel/menumesas/88-mesa-permanente-de-personas-con-discapacidad> . Última visita 25 de junio de 2012

Cuadro N° 36	
Mesa Permanente de Personas con Discapacidad	
<b>Responsable:</b> <i>Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales</i>	
35	Movimiento CUXCATÁN
36	Universidad Evangélica de El Salvador (UES)
<b>Total</b>	<b>36 organizaciones</b>

Entre sus logros principales para el presente período se destacan: elaboración del pronunciamiento relativo al cuarto aniversario de la vigencia de la convención; coordinación del evento de Conmemoración del Día Internacional de Personas con Discapacidad; elaboración del mensaje con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad; propuesta y conformación de un grupo de trabajo con el fin de que se redacte y presente un documento de reformas para la Ley de Equiparación de Oportunidades; acto de conmemoración sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad; elaboración del Informe Alternativo El Salvador 2008-2013, “A cinco años de entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, presentado al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas; participación en la 9a Sesión del Comité de los Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (12 al 19 de abril, Ginebra, Suiza); y elaboración del pronunciamiento público “Observancia y cumplimiento de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, a cinco años de su entrada en vigor”, del 3 de mayo del presente año.

#### v. Mesa Permanente de Salud<sup>4</sup>

La Mesa Permanente de Salud, trabaja en coordinación con 15 organizaciones y se encuentra bajo la responsabilidad de la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Cuadro N° 37	
Mesa Permanente de Salud	
<b>Responsable:</b> <i>Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales</i>	
1	ANDHISSS
2	Asociación Atlacatl “Vivo Positivo”.
3	Asociación Salvadoreña Promotora de Salud (ASPS)
4	Caritas de El Salvador
5	Centro para la Defensa del Consumidor (CDC)
6	Colegio Médico de El Salvador
7	Comisión Arquidiocesana para la Pastoral de Salud.
8	Fundación Maquilishuat (FUMA)
9	Fundación Red de Sobrevivientes
10	Médicos Salvadoreños para la Responsabilidad Social
11	Programa de Salud de la Alcaldía de San Salvador.
12	Programa de Salud Integral del Sínodo Luterano

<sup>4</sup> Información contenida en la página electrónica de la PDDH. <http://www.pddh.gob.sv/menurel/menumesas/86-mesa-permanente-de-salud> . Última visita 25 de junio de 2012.

<b>Cuadro N° 37</b>	
<b>Mesa Permanente de Salud</b>	
<b>Responsable:</b> <i>Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales</i>	
1	ANDHISSS
13	Sindicato de Médicos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS)
14	Sindicato General de Empleados de la Salud (SIGESAL)
15	Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”.
<b>Total</b>	<b>15 organizaciones</b>

## vi. Mesa Permanente de Niñez, Adolescencia y Juventud

Este espacio de participación conjunta entre la PDDH y las organizaciones que trabajan el tema de niñez y juventud, se encuentra a cargo de la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Niñez y Juventud y se encuentra conformado por 10 organizaciones.

<b>Cuadro N° 38</b>	
<b>Mesa Permanente de Niñez, Adolescencia y Juventud</b>	
<b>Responsable:</b> <i>Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Niñez y Juventud</i>	
1	Asociación Pro búsqueda de niñas y niños desaparecidos (Pro Búsqueda)
2	Intervida (C)
3	Visión Mundial
4	Unidades Juveniles-PDDH
5	Red para la Infancia y la Adolescencia (RIA)
6	Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD)
7	Ayuda en Acción
8	CARE
9	Save the Children (C)
10	Plan Internacional (C)
<b>Total</b>	<b>10 organizaciones</b>

*Las marcas con la letra “C” tiene la calidad de cooperantes*

En las reuniones sostenidas se trataron diferentes temas entre los que destacaron: análisis del contexto social de la niñez, adolescencia y juventud; análisis de los avances y dificultades en la instalación del sistema y rol desempeñado por el ISNA y CONNA, posibles recomendaciones; rol de las instituciones que integran la mesa y su relación con el ISNA y el CONNA; y acciones estratégicas a desarrollar en el ámbito de inversión financiera que contribuyan a la instalación del sistema de protección. Asimismo, se elaboraron pronunciamientos públicos sobre el avance en la instalación del Sistema Nacional de Protección de la Niñez y Adolescencia y con ocasión de “celebrarse” el “Día de la niña, niño y adolescente en El Salvador”. En este espacio se ha discutido sobre el funcionamiento de las Juntas de Protección de la Niñez y Adolescencia. Se ha acordado elaborar un pronunciamiento sobre la labor que desarrollan dichos organismos administrativos.

## vii. Mesa Permanente sobre derechos de los Pueblos Indígenas

Esta mesa permanente está formada por 28 organizaciones que trabajan por mejorar las condiciones y el reconocimiento de los pueblos indígenas en El Salvador, se encuentra coordinada desde la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Civiles e Individuales.

Cuadro N° 39	
Mesa Permanente sobre Derechos de los Pueblos Indígenas	
<b>Responsable:</b> <i>Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Civiles e Individuales.</i>	
1	Asociación de Desarrollo Comunal de Santo Domingo de Guzmán (ADESCOIN)
2	Asociación Para la Recuperación de la Cultura Autóctona Salvadoreña (ARCAS)
3	Asociación de Desarrollo Comunal Cantón Sabana Grande ADESCOG
4	Asociación Indígena de Juayúa
5	Comunidad Indígena la COMARCA de Nahulingo
6	<i>Asociación de Desarrollo Comunal Indígena</i> Nahuat Pipil (ADCINP)
7	Fundación Feliciano Ama de Izalco (FAMA)
8	Asociación Integral para el desarrollo Indígena (ASDEIS)
9	Asociación Comunal Indígena Nahuat Salvadoreña (ACOINS)
10	Asociación Nacional Indígena Tierra Sagrada (ANITISA)
11	Asociación de Pueblos indígenas Mayas de Cuscatlán (APIMAYCU)
12	Movimiento Indígena de El Salvador (MIES)
13	Alcaldía del Común de Izalco
14	<i>Asociación</i> Pasos del Jaguar
15	Asociación ATUNAL de Izalco.
16	Asociación Cultural Ecológica de Panchimalco (ACEIS)
17	Asociación de Artesanos de El Salvador (ITZAMA)
18	Intercomunal Indígena de Santo Tomás
19	Movimiento Autóctono Indígena Salvadoreño (MAIS)
20	Grupo Espiritual “TEPECTUNAL”.
21	Asociación Democrática de Trabajadores Agropecuarios Indígenas Salvadoreños (ADTAIS)
22	Asociación Comunal Lenca de Guatajiagua (ACOLGUA)
23	Artistas Para la Revivificación de la Cultura Original (ARCO)
25	Organización de Artesanos de los Planes de Renderos (OAP-CI)
26	Comisión de Derechos Humanos y Derechos de Pueblos Indígenas de El Salvador (CODEHUINESAL)
27	Cooperativa La Unión, Santiago Texacuango
28	Asociación de profesionales materno infantil de El Salvador.
<b>Total</b>	<b>28 organizaciones</b>

En el presente período, ha realizado las siguientes actividades: revisión del plan de trabajo; reunión con Canciller de la República, señor Hugo Martínez, para dar seguimiento al tema de la aprobación

del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT; y concentración y marcha a Asamblea Legislativa para exigir la ratificación de la reforma constitucional.

### **viii. Mesa Permanente sobre derechos humanos de la Comunidad LGBTTTI**

El objetivo general de la mesa es el de incidir para que la población de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero travestís e intersexuales tengan acceso al pleno goce de sus derechos humanos, además de llevar a cabo otras acciones tales como; analizar la situación de la población LGBTTTI en nuestro país, establecer e implementar los procesos de sensibilización para los funcionarios encargados de la administración de justicia hacia dicha población, sentar las bases para la elaboración de una ley para la erradicación de cualquier forma de discriminación, entre otras. Se encuentra conformada por las siguientes organizaciones sociales e instituciones:

<b>Cuadro N° 40</b>	
<b>Mesa Permanente sobre derechos humanos de la Comunidad LGBTTTI</b>	
<b>Responsable:</b> <i>Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Civiles e Individuales.</i>	
1	Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano ASPIDH – ARCOIRIS
2	Fraternidad Sin Fronteras
3	Asociación Salvadoreña de Lesbianas Progresistas ASLESPRO
4	Colectivo Alejandría ES
5	Licenciado Nicolás Roger Rodríguez Vásquez, suplente Edwin Ernesto de Paz <a href="http://elsalvadorg.com">elsalvadorg.com</a>
6	Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con VIH en El Salvador (COMCAVIS Trans)
7	Asociación Panamericana de Mercadeo Social El Salvador (PASMO)
8	Iglesia Comunitaria Metropolitana Misericordia (ICM)
9	Activista en Incidencia y Derechos Humanos LGBTI
10	Activista Lesbico-feminista
11	Asociación entre Amigos
12	Pastoral de Inclusión LGBTI de la Iglesia Anglicana
13	Edwin Alberto Hernández Aguilar, Activista y Asesor Independiente
14	Ana Cisneros, Activista Independiente
15	Wendy Castillo, Activista Independiente
16	Gays sin fronteras
<b>Total</b>	<b>16 organizaciones</b>

Entre las actividades y logros más destacados para el presente periodo se encuentran: revisión de las actividades a realizar durante el año 2013 que se encuentran en el Plan de trabajo; revisión de los lineamientos técnicos de participación ciudadana del Ministerio de Salud incluyendo su instrumento de denuncia; solicitud de Audiencia a la Secretaria de Inclusión Social, Dra. Vanda Pignato; planificación



de la revisión de los marcos políticos y legales sobre violencia de género, sexual y VIH; organización de Conversatorio sobre temática Población LGBTI y Migrantes en conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones; acuerdos entre Secretaría de Inclusión Social, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer Y Mesa LGBTI de PDDH; propuesta de recurso de inconstitucionalidad; y pronunciamiento en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia.

## ix. Mesa Permanente sobre la Soberanía Alimentaria

Esta Mesa de Trabajo fue creada el 9 de abril de 2012, con el objetivo de incidir para que la población salvadoreña tenga garantizada el derecho humano a la soberanía alimentaria lo cual es fundamental para una vida digna. Esta mesa impulsará procesos de sensibilización entre la población para el conocimiento de estos derechos, así como gestiones de cabildeo para la aprobación de una Ley de la Soberanía Alimentaria.

Cuadro N° 41	
Mesa Permanente sobre Soberanía Alimentaria	
<b>Responsable:</b> Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.	
1	Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio
2	Unidad Ecológica Salvadoreña
3	Centro para la Defensa del Consumidor
4	Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo
5	Red Uniendo Manos
6	Alianza por la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres Rurales
<b>Total</b>	<b>200 organizaciones</b>

Entre las actividades y logros más destacados para el presente periodo se encuentran: conferencia de prensa con los medios de comunicación para el evento de lanzamiento de la Mesa por la Soberanía Alimentaria; campaña en redes sociales para promover el reconocimiento y cumplimiento del derecho a la alimentación en el país; concentración masiva en las afueras de la Asamblea Legislativa para solicitar la ratificación de la reforma constitucional que reconoce el derecho a la alimentación y el derecho al agua, aprobación de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional y Ley General de Aguas; reunión con el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para intercambiar experiencias de trabajo en materia del derecho a la alimentación; reunión con la Comisión Agropecuaria de la Asamblea Legislativa para presentar las propuestas en torno a la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional; asistencia a sesión plenaria de la Asamblea Legislativa en la que se discutió la ratificación de la reforma al art.69 de la Constitución de la República; organización del Foro Nacional “Los desafíos para avanzar hacia la Soberanía Alimentaria en El Salvador”; participación en la primera convocatoria de reunión realizada por la Comisión Agropecuaria de la Asamblea Legislativa para la Comisión Interinstitucional que trabajará en el proyecto de Ley de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional; plan de trabajo para 2013, orientado a promover la ratificación de la reforma constitucional que reconoce el derecho a la alimentación y el derecho al agua; la aprobación de la ley de soberanía alimentaria; la aprobación de la ley general de agua; y la adopción de una política pública nacional de soberanía alimentaria; distintas actividades de sensibilización y concientización sobre la importancia del derecho a la alimentación.

## b) Convenios suscritos



*El señor Procurador, licenciado Oscar Humberto Luna en la firma de un convenio de coordinación entre las otras dos instituciones públicas que conforman el Ministerio Público.*

En el ejercicio de su mandato constitucional y legal de velar por el respeto y protección de los derechos humanos, esta Procuraduría ha impulsado la suscripción de convenios con diferentes organismos de la sociedad civil e instituciones públicas cuyas actividades y atribuciones se relacionan con las temáticas abordadas por esta institución. En ese sentido, durante el presente período, se suscribieron nueve Convenios, los cuales se detallan a continuación:

### i. Fiscalía General de la República y Procuraduría General de la República

Tiene como objetivo establecer en principio, acuerdos y normas claras de cooperación y colaboración en el desempeño de sus funciones con la finalidad de mejorar sustancialmente la calidad del servicio dado a la sociedad salvadoreña y contribuir con la consolidación del Estado de Derecho.

### ii. Fuerza Armada de El Salvador

Con el propósito de fortalecer la formación en derechos humanos de los miembros de la FAES, a través de la capacitación constante y continua en dicha materia de tal manera que si incida positivamente en el accionar de las presentes y futuras generaciones de profesionales militares.

### iii. Universidad Tecnológica de El Salvador

Con el fin de ejecutar proyectos enfocados a la divulgación, promoción y defensa de los derechos de las personas y mejor aún, si estos van a favor de la juventud universitaria, lo cual facilitara acercar oportunidades de progreso y mejora en la calidad de estudio de los futuros profesionales egresados de la UTEC.

#### **iv. Registro Nacional de Personas Naturales y Comisión Nacional de Búsqueda de Niños, Niñas y Adolescentes**

Con el objetivo de desarrollar relaciones interinstitucionales para fortalecer el Programa Búsqueda y Reencuentro de Personas y coordinar en los procesos de investigación de ambas instituciones.

#### **v. Universidad Panamericana de El Salvador**

Con el fin de ejecutar proyectos enfocados a la divulgación, promoción y defensa de los derechos de las personas y mejor aún, si estos van a favor de la juventud universitaria, lo cual facilitara acercar oportunidades de progreso y mejora en la calidad de estudio de los futuros profesionales egresados de la UPES.

#### **vi. Universidad Modular Abierta de El Salvador**

Con el fin de ejecutar proyectos enfocados a la divulgación, promoción y defensa de los derechos de las personas y mejor aún, si estos van a favor de la juventud universitaria, lo cual facilitara acercar oportunidades de progreso y mejora en la calidad de estudio de los futuros profesionales egresados de la UMA.

#### **vii. Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer**

Con el fin de ejecutar proyectos enfocados a la divulgación, promoción y defensa de los derechos de las personas y mejor aún, si estos van a favor de la juventud universitaria, lo cual facilitara acercar oportunidades de progreso y mejora en la calidad de estudio de los futuros profesionales egresados de la USAM.

#### **viii. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México**

Con el propósito de fortalecer el proyecto de Red de Promoción y Protección de las Defensorías de Centroamérica y la Comisión de Derechos Humanos de Distrito Federal de la República de México.

### c) Asistencia a eventos organizados por diversas instituciones y otras acciones de colaboración



*El señor Procurador, licenciado Oscar Humberto Luna en una actividad organizada por la Cancillería de la República.*

En el periodo que comprende al presente Informe, se tuvo participación en diversos eventos de organizaciones e instituciones relacionadas con la temática de derechos humanos, registrando asistencias a conferencias, talleres, foros y otras actividades externas. A nivel internacional se registraron un total de 29 asistencias a eventos internacionales entre los que destaca la participación del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y otros funcionarios en las siguientes actividades nacionales e internacionales.

Entre las que se destacaron: XLVI Sesión del Consejo Centroamericano de Procuradores. Del 19 al 20 de marzo de 2013 en la ciudad de Panamá. En su calidad de Presidente del CCPDH; Reunión Extraordinaria de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) sobre “Experiencia en El Salvador en torno al Derecho de la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas.” Del 25 al 26 de abril de 2013 en Lima, Perú; 26ª. Reunión General del Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales de Promoción Y protección de los Derechos Humanos (CIC). Del 6 al 8 de mayo de 2013 en Ginebra, Suiza; Encuentro Internacional de Defensorías, organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal México, 5 y 6 de noviembre de 2012; XLVI Sesión del Consejo Centroamericano de Procuradores (CCPDH) (desarrollada en coordinación con el Departamento de VIH y Derechos Humanos, y con apoyo de Health Focus). Ciudad de Panamá. 19 y 20 de marzo de 2013; Taller Regional “Integración de los Derechos Humanos en la Planificación Estratégica Nacional”, organizado por ONUSIDA. Quito, Ecuador 8 al 11 de abril de 2013; y 9a

Sesión del Comité de los Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Ginebra, Suiza. 12 al 19 d abril de 2013.

Por otro lado, a nivel nacional se asistió a varias actividades organizadas por distintas organizaciones sociales e instituciones públicas, tales como: acto público en la Plaza Salvador del Mundo, con Motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Del 9 de agosto de 2012; marcha de las organizaciones que componen la Mesa Permanente de la PDDH sobre Derechos de Pueblos Indígenas, en pro de la ratificación de la reforma constitucional ya aprobada; Taller de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para la elaboración de Protocolo de Manejo de Conflictos; Foro-Taller sobre Avances y Limitaciones en la Implementación del Sistema de Protección de la Niñez y la Adolescencia; Conferencia sobre “Empoderamiento de adolescentes y jóvenes en el contexto del VIH para la promoción y defensa de sus derechos sexuales y reproductivos, con énfasis en la equidad de género”; Evento organizado por Asociación de Periodistas de El Salvador sobre Protección de Periodistas con participación de Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y de Expresión; Evento organizado por FUNDAUNGO sobre proyecto de Ley de Partidos Políticos; Evento organizado por FESPAD sobre “Ideas para la Paz: la tregua, oportunidades y desafíos”; Evento sobre Día Mundial contra la Pena de Muerte; Celebración de Día del Activista de derechos Humanos; entre otros.

Asimismo, se presentó y entregó el libro Curso de Derechos Humanos “Doctrinas y Reflexiones” obra del señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado Oscar Humberto Luna, el cual ha sido distribuido en todo el país para impulsar el conocimiento y fundamentos de los derechos humanos. También, se realizaron otras actividades de colaboración entre las que se destacan ponencias a diversas organizaciones e instituciones públicas sobre diversos temas relacionados con el quehacer de la Procuraduría y la situación de los derechos humanos a nivel nacional. Así como la presentación de la producción jurídica institucional, recepción de solicitudes de constancias hechas por personas funcionarias o particulares en relación al registro sobre expedientes relacionados con violaciones a derechos humanos; entre otras.



**d) Reuniones sostenidas con autoridades públicas, representantes de organismos internacionales, organizaciones sociales, entre otros.**



*El señor Procurador, licenciado Oscar Humberto Luna en reunión con representantes de instituciones públicas y organismos internacionales.*

Finalmente, en seguimiento a su mandato constitucional de velar por el respeto de los derechos humanos de la población salvadoreña, esta Procuraduría también ha desplegado su actuación de promoción y protección de derechos humanos por medio de la convocatoria a reuniones a funcionarios y funcionarias públicas, representantes de organizaciones sociales y organismos internacionales, entre otros, para tratar sobre casos que requieren de una inmediata respuesta institucional.

Entre estos funcionarios y funcionarias de instituciones se encuentran las siguientes: Secretaría de Asuntos de Vulnerabilidad de la Presidencia de la República, Comisión Nacional de Búsqueda de NNA Desaparecidos en el Conflicto Armado, Comisión Evaluadora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Alcalde de San Martín, autoridades del Ministerio de Educación, Comunidades de Intipuca, Secretario Técnico de la Presidencia de la República, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, Fiscal General de la República, Ministro de Justicia y Seguridad Pública, entre otros y otras.

## 5.5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



*Reunión de representantes del señor Procurador y el Sindicato de Empleados y Empleadas de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (SEPRODEHES), en la discusión de las cláusulas del Contrato Colectivo de la PDDH.*

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a partir de su planificación estratégica, aspira a fortalecer las áreas y los procesos claves en el ejercicio de sus atribuciones, a fin de lograr la eficiencia y la eficacia laboral. Para alcanzarlo cuenta con varias estrategias específicas: fortalecer la gestión y administración de los recursos con eficiencia; promover acciones que fortalezcan la identificación institucional y compromiso del personal; modernizar la estructura, procesos y sistemas institucionales; desarrollar mecanismos de comunicación estratégica interna y externa; y modernización del marco legal e institucional.

Las unidades institucionales que les corresponde cumplir con las actividades vinculadas a esta área estratégica son: Secretaría General, Departamento de Recursos Humanos, Departamento Administrativo, Departamento de Informática, Departamento Jurídico, Departamento de Comunicación y Prensa, Unidad de Proyectos y Gestión de Cooperación, Unidad de Planificación Institucional y Unidad de Acceso a la Información Pública. A continuación, el resumen de las actividades y logros alcanzados por dichas unidades organizativas en el período que comprende este informe.

## a) Secretaría General

Los principales esfuerzos realizados por la Secretaría General para impulsar el fortalecimiento institucional, fueron los siguientes:

<b>Cuadro N° 42</b> <b>Actividades y logros alcanzados en fortalecimiento institucional reportados por la Secretaría General</b> <b>1 de junio 2012 al 31 mayo de 2013</b>		
No	Actividades	Logros alcanzados
1	<u>Revisión de Manuales e Instructivos institucionales:</u> Reglamento de Viáticos (Acuerdo N°11-2013); Instructivo de asignación de números celulares (Acuerdo N°26-2013); Instructivo de asistencia, puntualidad y permanencia de personal de la PDDH (Acuerdo N°58-2013); Instructivo para la coordinación y apoyo de las Procuradurías Adjuntas específicas al Sistema de Protección de los Derechos Humanos (Acuerdo N°56-2013); Reglamento de Organización y Funciones de la PDDH (Acuerdo N°57-2013); y Reglamento de adquisición y pago de bienes y servicios (Acuerdo N°55-2012).	Revisión completa
2	<u>Participación en diferentes comités y comisiones institucionales:</u> Comisión de elaboración del Laudo Arbitral con carácter de Contrato Colectivo de Trabajo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Sindicato de Empleadas y Empleados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; y actualmente en la Comisión especial de Seguimiento a éste. De igual manera, se participa en el Comité Técnico Presupuestario Institucional y en la Comisión de Servicio Civil.	Participación permanente
3	Elaboración de Acuerdos Institucionales, así como 191 certificaciones de expedientes oficiales.	162
4	Certificación de expedientes oficiales	191
5	Realización de reuniones de coordinación con las jefaturas administrativas y financieras de la institución.	Permanente
6	<u>Autorización para la realización de horas sociales</u> por parte de estudiantes de Centros Escolares y Universidades. Estas actividades están respaldadas a través de convenios de cooperación ratificados por el titular (entre junio 2012 -mayo 2013, se han suscrito 3 convenios)	Realizado
7	<u>Apoyo y coordinación para la realización de eventos institucionales tales como:</u> a) Conmemoración del 64° Aniversario de la Aprobación y Proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; b) Día de la Niñez; c) Asamblea General de personal Institucional; d) Retos y Desafíos de los Derechos Humanos a 21 años de los Acuerdos de Paz.	Realizado
8	Visitas a Delegaciones Departamentales	Realizado
9	<u>Atención y apoyo a las necesidades presentadas por las unidades, dependencias o delegaciones,</u> tales como: a) Remodelación y adecuación de las instalaciones de la Clínica Institucional; b) Elaboración de agendas ejecutivas y calendarios institucionales; c) Compra de hojas y sobres membretados; d) Elaboración de capas de vinil, para entrega al personal institucional; e) Compra de banderas nacionales e institucionales que fueron ubicadas en Delegaciones y áreas específicas de sede central; f) Elaboración de chalecos institucionales para personal jurídico y técnico; g) Compra de pines con logo de la PDDH y placas de reconocimiento por el XX Aniversario de la creación de la PDDH.	Realizado

*Fuente: Secretaría General, PDDH.*

### Otras actividades destacadas:

En cuanto al proyecto sobre el Estudio de Creación e Implementación de un Sistema para el Manejo y Resguardo de Expediente del Sistema de Protección; como fortalecimiento institucional, ha sido reprogramado para el último semestre del año en curso, así como el proyecto sobre el diseño e implementación de una política de seguridad institucional, la cual será realizada con todas las unidades de la institución.

## **b) Departamento de Recursos Humanos**

Parte del esfuerzo por optimizar la calidad del servicio a las personas usuarias, en el marco del fortalecimiento institucional, se impartieron al personal quince capacitaciones en diversas temáticas. Algunas capacitaciones respondieron a solicitudes directas de sectores de empleadas y empleados de la Procuraduría, orientadas hacia el reforzamiento de competencias, la identificación institucional y los diferentes aspectos de comportamiento que contribuyan al logro de los objetivos institucionales y el mantenimiento de un clima laboral saludable.

En el período de informe, con las capacitaciones se beneficiaron 385 personas. De este grupo de personas, 170 fueron hombres (109 del sector técnico y 61 del sector administrativo) y 215 mujeres (113 del sector técnico y 92 del sector administrativo)

<b>Cuadro N° 43</b>		
<b>Capacitaciones para el personal institucional</b>		
<b>1 de junio 2012 al 31 mayo de 2013</b>		
<b>No</b>	<b>Nombre de la capacitación</b>	<b>Beneficiarios</b>
1	Sobre violencia intrafamiliar	Personal Institucional
2	Cultura de Paz y Derechos Humanos	Personal Institucional
3	Liderazgo	Personal Institucional
4	Charlas sobre estilos de vida saludables	Personal Institucional
5	Técnicas de redacción	Personal Institucional
6	Charla sobre Alcoholismo	Personal Institucional

*Fuente: Departamento de Recursos Humanos, PDDH.*

### Otras actividades destacadas:

- Diseño e implementación de un Sistema Integrado de Gestión de Recursos Humanos
- Elaboración de Manuales Administrativos (Manual de Organización, Manual de Descripción de Puestos, Manual de Procedimientos de la PDDH)
- Diseño e implementación de un programa de capacitación orientado hacia el reforzamiento de competencias, la identificación institucional y los diferentes aspectos que contribuyan al logro de los objetivos institucionales y el mantenimiento de un clima laboral saludable.

### c) Departamento Administrativo

A continuación se presenta en un cuadro los planes y acciones más importantes que fueron alcanzadas en este período por el Departamento Administrativo.

<b>Cuadro N° 44</b> <b>Actividades y logros alcanzados en fortalecimiento institucional reportados</b> <b>por el Departamento Administrativo</b> <b>1 de junio 2012 al 31 mayo de 2013</b>		
<b>No</b>	<b>Planes/acciones</b>	<b>Logros obtenidos</b>
1	Administrar contratos de servicios de proveedores externos prestados a la Institución.	Contratos administrados y supervisados.
2	Que las unidades de la institución, puedan según las capacidades institucionales, contar con los servicios de transporte que requieran.	Servicio brindado
3	Registrar, controlar y proteger los activos fijos de la institución	Acción cumplida
4	Garantizar el suministro de combustible a la flota de vehículos institucionales haciendo uso racional del recurso	Suministro garantizado.
5	Resguardar en Archivo General, la documentación física que sea necesario proteger y entregarla oportunamente a las instancias que la soliciten.	Acción cumplida.
6	Solicitar, recibir, resguardar y distribuir equitativamente los materiales utilizados para el funcionamiento de la institución por medio de Almacén de Suministros.	Acción cumplida.
7	Gestionar el buen funcionamiento de la flota vehicular de la institución a través de un plan de mantenimiento preventivo y correctivo.	Plan ejecutado.
8	Proporcionar los servicios de mantenimiento general de la institución.	Mantenimiento brindado.
9	Coordinar, dentro de las capacidades instaladas, la adecuada prestación del servicio de seguridad institucional.	Seguridad brindada.
10	Participación en diferentes comités y comisiones institucionales: Comité de Presupuesto Institucional 2013; Comisión Especial revisora del Contrato Colectivo de Trabajo de la PDDH; Comité de Seguridad e Higiene Ocupacional; y Comisión de Bienestar Laboral Institucional.	Participación permanente
11	Se atendieron diversas reuniones de trabajo a petición del Sindicato de Trabajadores de la institución, con el objeto de contribuir a favorecer la resolución de dificultades en el seguimiento del trabajo.	Participación permanente

*Fuente: Departamento Administrativo, PDDH.*



### Otras actividades destacadas:

En coordinación con la Secretaría General se realizaron gestiones de mejoras en los edificios, las cuales generaron una economía a la Institución, pues los propietarios asumieron los costos de todos los trabajos. Se realizaron remodelaciones en las áreas de recepción de dos edificios, se construyó una caseta de sistema mixto para personal de vigilancia y se han realizado gestiones para proceder a la mejora del área que ocupa el Departamento de Denuncias y de un área para la toma de alimentos del personal de Tutela. Asimismo, se gestionaron con otras entidades como el Ministerio de Obras Públicas, la atención del problema de cárcavas en zona del edificio de la Escuela de Derechos Humanos, así como la sustitución total de tubería de aguas lluvias y negras. Con el apoyo de diversas dependencias se concluyeron las gestiones para el cambio de las Delegaciones Departamentales de Ahuachapán y La Unión, así como la Delegación Local de Apopa.

## **d) Departamento Jurídico**

Durante el período de este informe, el Departamento Jurídico presentó las siguientes actividades principales:

<b>Cuadro N° 45</b> <b>Actividades y logros alcanzados en fortalecimiento institucional reportados</b> <b>por el Departamento Jurídico</b> <b>1 de junio 2012 al 31 mayo de 2013</b>		
<b>No</b>	<b>Planes/acciones</b>	<b>Logros obtenidos</b>
1	Elaboración de contratos	26
2	Elaboración de opiniones jurídicas	8
3	Procedimientos de deducción de responsabilidades administrativas	10

*Fuente: Departamento Jurídico, PDDH.*

## **e) Departamento de Comunicaciones y Prensa**

Durante el período en mención el Departamento de Comunicaciones y Prensa presentó los siguientes logros:

<b>Cuadro N° 46</b> <b>Actividades y logros alcanzados en fortalecimiento institucional reportados</b> <b>por el Departamento de Comunicaciones y Prensa</b> <b>1 de junio 2012 al 31 mayo de 2013</b>		
<b>No</b>	<b>Planes/acciones</b>	<b>Logros obtenidos</b>
1	Conferencias de Prensa	17
2	Campañas sobre ratificación constitucional de Derecho al Agua	Realizada
3	Revistas mensuales El Defensor del Pueblo	12
4	Acompañamientos al Señor Procurador a eventos organizados por la institución y por otras instituciones públicas y privadas	Actividad permanente

<b>Cuadro N° 46</b> <b>Actividades y logros alcanzados en fortalecimiento institucional reportados</b> <b>por el Departamento de Comunicaciones y Prensa</b> <b>1 de junio 2012 al 31 mayo de 2013</b>		
<b>No</b>	<b>Planes/acciones</b>	<b>Logros obtenidos</b>
5	Convocatoria y acompañamiento en la presentación de posicionamientos y pronunciamientos realizados por el señor Procurador ante los Medios de Comunicación	Actividad permanente
6	Acompañamiento en procesos de Mediación realizados por el señor Procurador	Actividad permanente
7	Elaboración de archivo institucional de audio, video y fotografía	Archivo elaborado
8	Envío de información en audio y video a medios de comunicación	Actividad permanente
9	Mantenimiento de red permanente de difusión de las actividades de la PDDH a través de corresponsales de prensa en todo el país	Actividad permanente
10	Acompañamiento a entrevistas en programas de televisión y radiales	Actividad permanente
11	Mantenimiento de página web institucional	Actividad permanente

*Fuente: Departamento de Comunicaciones, PDDH.*

## f) Departamento de Informática

Durante el período, el Departamento de Informática reportó los siguientes logros:

<b>Cuadro N° 47</b> <b>Actividades y logros alcanzados en fortalecimiento institucional reportados</b> <b>por el Departamento de Informática</b> <b>1 de junio 2012 al 31 mayo de 2013</b>		
<b>N°</b>	<b>Planes/acciones</b>	<b>Logros alcanzados</b>
1	<b>Plan Maestro de Desarrollo Informático</b>	Uno de los objetivos del plan maestro es dotar a la institución de herramientas adecuadas para el desempeño de las labores, por lo que se ha realizado un estudio del estado del equipo informático y su desempeño. Como resultado, se ha realizado el recambio de los equipos obsoletos con más de 7 años de antigüedad, mediante la adquisición e instalación de 167 computadoras de escritorio. Al inicio del período, sólo una pequeña parte de los equipos informáticos (28%) se encontraba dentro del rango de vida útil de 6 años, y aunque se realizaron procesos de mantenimiento preventivo y correctivo para alargar la vida útil del resto, debido a su edad y capacidad, tanto los equipos como los programas ya no ofrecían el desempeño requerido por la institución. Con estas adquisiciones, aseguramos que ahora más del 65% de los equipos institucionales se encuentran en perfecto estado de funcionamiento, con programas actualizados. La perspectiva a corto plazo es renovar completamente todo el parque informático para asegurar una atención debida en todos los niveles, con equipos que no sobrepasen una vida útil aproximada de 6 años.

<b>Cuadro N° 47</b> <b>Actividades y logros alcanzados en fortalecimiento institucional reportados</b> <b>por el Departamento de Informática</b> <b>1 de junio 2012 al 31 mayo de 2013</b>		
<b>N°</b>	<b>Planes/acciones</b>	<b>Logros alcanzados</b>
2	<b>Implementación de Sistema de gestión del departamento de Informática</b>	<p>Otro componente importante del mencionado plan maestro, es la modernización del departamento de Informática, dotándolo de herramientas acordes a las realidades actuales y la consecuente agilización de sus procesos internos, sobre todo teniendo en consideración el poco personal destinado a estas labores. En este sentido, se ha implementado un nuevo sistema de gestión del departamento, que automatiza varios procesos, como la gestión de asistencias técnicas, la gestión de la documentación técnica e insumos de los equipos en funcionamiento, la gestión de los diversos contratos, el control del inventario del parque informático, entre otros. Este último proceso es el que más tiempo absorbe de las actividades del departamento, al requerir la presencia de los técnicos de forma periódica para actualizar la ubicación y el estado de los equipos. Con la herramienta implementada, se automatiza el proceso por completo, mediante la utilización de un pequeño programa que realiza la toma de inventario en cada equipo y la centraliza en un solo repositorio, de manera que se facilita el análisis de la información enviada por cada equipo. Esto brindará la oportunidad de agilizar los servicios relacionados, como mantenimiento preventivo y correctivo, recambio periódico y permitirá la implementación de políticas de mantenimiento predictivo, a fin de asegurar una atención sin interrupciones a nuestros usuarios.</p>
3	<b>Capacitación al personal del departamento en el uso del sistema de gestión del departamento de informática</b>	<p>La implantación de la nueva plataforma de gestión, ha requerido capacitación y supervisión continua, dada su complejidad y al cambio de paradigma de gestión que tradicionalmente se ha utilizado en el departamento. Por esta razón se han efectuado diversas reuniones de trabajo para asegurar el correcto uso de la herramienta y para agilizar aquellos procesos que dificultan las labores institucionales, como el mantenimiento correctivo y preventivo.</p>

<b>Cuadro N° 47</b> <b>Actividades y logros alcanzados en fortalecimiento institucional reportados</b> <b>por el Departamento de Informática</b> <b>1 de junio 2012 al 31 mayo de 2013</b>		
<b>N°</b>	<b>Planes/acciones</b>	<b>Logros alcanzados</b>
4	<b>Elaboración de la especificación técnica del Sistema Informático Integrado de Gestión versión 2.0</b>	El Sistema Informático Integrado de Gestión (SIIG), el cual sistematiza la mayor parte de los procesos cotidianos realizados en la institución, ha sido uno de los avances más valiosos en el desarrollo de nuestras actividades. No obstante, con más de seis años de funcionamiento, ha finalizado la vida útil prevista, por lo que es necesario una revisión de los procesos a los que da soporte y una mejora sustancial en su desempeño. Por esta razón, se conformó una comisión para realizar un levantamiento de los procesos actuales, tanto los ya en funcionamiento en el sistema, como aquellos que no lo están, para proceder a la elaboración de un pliego de términos de referencia para la contratación del diseño e implementación de un sistema para reemplazar al ya mencionado SIIG. Como resultado, la comisión estableció una serie de recomendaciones para incorporarlas a las especificaciones técnicas por solicitar y realizó una descripción general de los procesos institucionales. Con esta información como base primordial, se han elaborado las especificaciones técnicas para la contratación del futuro Sistema Informático de Gestión Institucional, previsto a realizarse en el segundo semestre de 2013.

## g) Unidad de Planificación Institucional

En el período del informe se realizaron las siguientes acciones:

<b>Cuadro N° 48</b> <b>Actividades y logros alcanzados en fortalecimiento institucional reportados</b> <b>por la Unidad de Planificación Institucional</b> <b>1 de junio 2012 al 31 mayo de 2013</b>		
<b>No</b>	<b>Planes/acciones</b>	<b>Logros obtenidos</b>
1	Coordinación de la formulación de Plan Operativo Anual (POA) institucional 2014	Actividad realizada
2	Coordinación de la formulación de los Planes por Área de Gestión (PAG) 2014	Actividad realizada
3	Elaboración de evaluación y seguimiento a Planes por Área de Gestión (SPAG)	Actividad realizada
4	Elaboración y presentación del Plan Anual Operativo 2014. Preliminar	Actividad realizada
5	Consolidado de Planes por Áreas de Gestión 2013	Actividad realizada
6	Seguimiento de Planes operativos 2012 período julio – diciembre	Actividad realizada
7	Seguimiento de Planes operativos 2013 periodo enero-junio	Actividad realizada

<b>Cuadro N° 48</b> <b>Actividades y logros alcanzados en fortalecimiento institucional reportados</b> <b>por la Unidad de Planificación Institucional</b> <b>1 de junio 2012 al 31 mayo de 2013</b>		
<b>No</b>	<b>Planes/acciones</b>	<b>Logros obtenidos</b>
8	Seguimiento de Plan Estratégico Institucional 2011-2014; concerniente a lo actuado en el año 2012	Actividad realizada
9	Determinación de proyectos y necesidades presupuestarias 2014	Actividad realizada
10	Asistencia a reuniones de Comité Presupuestario	Actividad realizada

*Fuente: Unidad de Planificación Institucional, PDDH*

## h) Unidad de Proyectos y Gestión de Cooperación

A través de la Unidad de Proyectos y Gestión de Cooperación se perfilan algunas iniciativas que están consideradas para el fortalecimiento de las capacidades institucionales. En el período del informe se realizaron las siguientes gestiones:

<b>Cuadro N° 49</b> <b>Actividades y logros alcanzados en fortalecimiento institucional reportados</b> <b>por la Unidad de Proyectos y Gestión de Cooperación</b> <b>1 de junio 2012 al 31 mayo de 2013</b>		
<b>No</b>	<b>Nombre del Proyecto</b>	<b>Organismo cooperante</b>
1	Promoción del Derecho a una Alimentación Adecuada en El Salvador (Seguimiento)	OXFAM AMERICA
2	Protegiendo a la niñez con enfoque de derecho en situación de emergencia principalmente en comunidades afectadas por la Depresión Tropical 12-E (Seguimiento)	UNICEF
3	Asistencia técnica para fortalecer el proceso de tutela de los Derechos Humanos de Personas con VIH-SIDA en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (Seguimiento)	PNUD
4	Informe Especial sobre el Impacto de la Violencia en la Protección de los Derechos Humanos en la Niñez y Adolescencia de El Salvador	UNICEF
5	Diseño de Política Interna de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos	Fundación Privada INTERVIDA

*Fuente: Unidad de Proyectos Institucional, PDDH.*

## i) Unidad de Acceso a la Información Pública

La Unidad de Acceso a la Información Pública de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos le corresponde sistematizar la información institucional, a través de la recopilación y



actualización de datos provenientes de las diferentes unidades o departamentos que la conforman, con el fin de garantizar el derecho de acceso de toda persona a la información y contribuir con la transparencia de las actuaciones de esta institución.

En el período de enero a junio del presente año, se han recibido 13 solicitudes, las cuales han sido presentadas de manera electrónica y personal, la mayoría de las solicitudes se han referido a datos estadísticos acerca de denuncias recibidas e instituciones públicas mayormente denunciadas como la Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, Alcaldías Municipales, e información con relación a datos e información financiera.

Se puede mencionar como una actividad destacada en el período, la participación en el mes de mayo del presente año, en la Feria de la Ley de Acceso a la Información Pública, organizada por la Subsecretaría de Transparencia y Anti corrupción, la cual se llevo a cabo en la Plaza General Gerardo Barrios, donde se presentó el trabajo realizado con relación a la transparencia y la difusión de la Ley.

En los próximos meses la Unidad continuará brindando capacitaciones sobre la precitada normativa y su reglamento, al personal institucional en coordinación con la Escuela de Derechos Humanos y FESPAD, además de temas relacionados a la transparencia pública. Asimismo, tiene previsto la creación de un sistema de archivo y guía de organización en coordinación con el Archivo General y el Departamento Administrativo; y el envío de los resultados de las solicitudes recibidas al Instituto de Acceso a la Información Pública, así como un informe de sus actividades realizadas.

## j) Procuradurías adjuntas específicas

### *Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos del Medio Ambiente*

En el período del informe la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos del Medio Ambiente, realizó las siguientes acciones:

<b>Cuadro N° 50</b> <b>Actividades y logros alcanzados en fortalecimiento institucional reportados</b> <b>por la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos del Medio Ambiente</b> <b>1 de junio 2012 al 31 mayo de 2013</b>		
<b>No.</b>	<b>Gestión realizada</b>	<b>Resultados obtenidos</b>
1	Capacitación a personal de la PDDH	Fortalecimiento del personal en relación al Sistema Interamericano de Derechos Humanos
2	Capacitación a personal de la PDDH	Fortalecimiento del personal de la PDDH en la atención de casos relacionados a la instalación de antenas de telefonía celular

<b>Cuadro N° 50</b> <b>Actividades y logros alcanzados en fortalecimiento institucional reportados por la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos del Medio Ambiente 1 de junio 2012 al 31 mayo de 2013</b>		
<b>No.</b>	<b>Gestión realizada</b>	<b>Resultados obtenidos</b>
3	Capacitación a personal de la PADMA	Fortalecimiento de las capacidades técnicas del personal de la PADMA en energía sostenible
4	Establecimiento de lineamientos y directrices	Facilitar la calificación y análisis de casos de denuncias por contaminación electromagnética
5	Reunión con Departamentos del Sistema de Protección de la PDDH	Establecimiento de criterio para la atención de casos donde se presumen vulneraciones al derecho humano al medio ambiente

*Fuente: Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos del Medio Ambiente, PDDH*

*Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Niñez y Juventud*

En el período del informe la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Niñez y Juventud, realizó las siguientes acciones:

<b>Cuadro N° 51</b> <b>Actividades y logros alcanzados en fortalecimiento institucional reportados por la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Niñez y Juventud 1 de junio 2012 al 31 mayo de 2013</b>		
<b>No.</b>	<b>Gestión realizada</b>	<b>Resultados obtenidos</b>
1	En asocio con la Red para la Infancia y Adolescencia se organizó el Taller “Inversión en niñez y adolescencia con enfoque de derecho”.	En dicha actividad participó un número significativo de jurídicas, jurídicos y delegados departamentales y locales quienes recibieron la formación en esa temática

<b>Cuadro N° 51</b> <b>Actividades y logros alcanzados en fortalecimiento institucional reportados</b> <b>por la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Niñez y Juventud</b> <b>1 de junio 2012 al 31 mayo de 2013</b>		
<b>No.</b>	<b>Gestión realizada</b>	<b>Resultados obtenidos</b>
2	Presentación pública, en San Salvador, Ahuachapán y Usulután del Protocolo de actuación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en situaciones de emergencia.	La herramienta indicada constituye una herramienta de trabajo que fortalecerá la capacidad de respuesta de la PDDH. El citado protocolo se distribuyó a todas las dependencias de la Institución.

*Fuente: Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Niñez y Juventud, PDDH*

*Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales*

En el período del informe la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, realizó las siguientes acciones:

<b>Cuadro N° 52</b> <b>Actividades y logros alcanzados en fortalecimiento institucional reportados</b> <b>por la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y</b> <b>Culturales</b> <b>1 de junio 2012 al 31 mayo de 2013</b>		
<b>No.</b>	<b>Gestión realizada</b>	<b>Resultados obtenidos</b>
1	Elaboración de Propuesta sobre un Curso Básico de Lenguaje de Señas Salvadoreñas (LESSA) para ser impartido a personal de la PDDH.	Las propuestas elaboradas sirvieron como insumo para el desarrollo del curso para personal de la institución. Una persona de la PADESC participó y completó el curso.
2	Participación en Diplomado sobre Gerontología organizado por la Secretaría de Inclusión Social.	Fortalecimiento de las capacidades de jurídica encargada del trabajo con la Mesa de Personas Adultas Mayores.
3	Participación en proceso de negociación y seguimiento del Contrato Colectivo	Se logró establecer acuerdos durante la negociación, lo cual llevó a la firma del Contrato Colectivo y su implementación
4	Evaluación del PAG 2012 y 2013 de la PADESC, para el período de enero a junio y luego de junio a diciembre de 2012	Se evaluó el cumplimiento de las actividades planificadas para el primer semestre de 2012.

<b>Cuadro N° 52</b> <b>Actividades y logros alcanzados en fortalecimiento institucional reportados</b> <b>por la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y</b> <b>Culturales</b> <b>1 de junio 2012 al 31 mayo de 2013</b>		
<b>No.</b>	<b>Gestión realizada</b>	<b>Resultados obtenidos</b>
5	Elaboración del PAG 2013 de la PADESC.	Se definió el plan operativo de la PADESC para 2013.
6	Participación en Curso Virtual de Derecho a la Salud y Actividad Parlamentaria en América Latina – 2013, impartido por la OPS.	Fortalecimiento de las capacidades de jurídica del equipo de la PADESC, en materia del derecho a la salud y actividad legislativa
7	Participación en Curso de Formación de capacitadores en Derecho a la Alimentación Adecuada (DAA), impartido por FAO.	Fortalecimiento de capacidades de técnico del equipo de la PADESC para el desarrollo de actividades formativas en materia del derecho a una alimentación adecuada.
8	Participación en capacitación sobre la Ley de Ética Gubernamental, organizada por la Comisión de Ética Gubernamental de la PDDH.	Sensibilización y formación al equipo de la PADESC sobre ética gubernamental y sobre el contenido de la Ley de Ética Gubernamental.

*Fuente: Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PDDH*

*Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Civiles e Individuales*

En el período del informe la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Civiles y Políticos, realizó las siguientes acciones:

<b>Cuadro N° 53</b> <b>Actividades y logros alcanzados en fortalecimiento institucional reportados</b> <b>por la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Civiles y Políticos</b> <b>1 de junio 2012 al 31 mayo de 2013</b>		
<b>No.</b>	<b>Gestión realizada</b>	<b>Resultados obtenidos</b>
1	Solicitud para que se habiliten atribuciones en el SIIG al coordinador de Migrantes, memo PADCI/512/12	Actividad realizada
2	Manejo de situaciones delicadas para evitar que se ponga en riesgo la imagen de la institución	Actividad realizada
3	Plan por Áreas de Gestión 2013	Actividad realizada
4	Elección de Comité de Seguridad e Higiene Ocupacional	Actividad realizada
5	Reunión sobre Cambio Climático	Actividad realizada

<b>Cuadro N° 53</b> <b>Actividades y logros alcanzados en fortalecimiento institucional reportados</b> <b>por la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Civiles y Políticos</b> <b>1 de junio 2012 al 31 mayo de 2013</b>		
<b>No.</b>	<b>Gestión realizada</b>	<b>Resultados obtenidos</b>
6	Se integró comité para proponer reformas al SIIG y términos de referencia para consultoría sobre nuevo sistema informático	Actividad realizada
7	Panel forum “El defensor y defensora de los derechos humanos, logros y desafíos en la defensa de los derechos humanos en El Salvador” en ocasión de participar junto a ONG’s en el día del defensor de derechos humanos en el país	Actividad realizada
8	Capacitación sobre la Ley de ética, impartida por la Comisión de Ética de la PDDH	Actividad realizada

*Fuente: Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Civiles y Políticos, PDDH*





# VI. RESUMEN DE ACTIVIDADES PRINCIPALES: SEDE CENTRAL Y DELEGACIONES DEPARTAMENTALES Y LOCALES



## 6.1. SEDE CENTRAL

### AUTORIDADES Y JEFATURAS



Sentados, de izquierda a derecha: Lic. Roberto Antonio Velasco Carpio, Licda. Mirna del Carmen Rojas, Lic. Antonio Aguilar Martínez, Lic. Oscar Humberto Luna, Licda. Raquel Caballero de Guevara, Lic. Walter Gerardo Alegría, Licda. Ana Georgina Ramos de Villalta.

Segunda fila, de izquierda a derecha: Sr. Carlos de Jesús García Santamaría, Sr. Carlos Ramírez Flores, Licda. Rosa Elena Ramos Mendoza, Licda. Reynelda del Carmen Ábrego de Orellana, Lic. Wilfredo Hernández Calderón, Licda. Blanca Lina Ramírez, Licda. Cecilia Graciela Castillo de Ramos, Licda. Sandra Lorena Cornejo de Leonor, Licda. Glenda Alicia Vaquerano Cruz, Licda. Geraldina Zaldaña, Ing. Carlos Mártir Monroy, Lic. José Arnoldo Castro.

Tercera fila, de izquierda a derecha: Sr. Pedro Antonio Carpio Iraheta, Ing. Jaime Ernesto Argueta, Lic. Orsy Melvin Quintanilla, Lic. Oliver Román López Serrano, Lic. Héctor Alexander Escobar, Lic. William Ernesto Espino Gaytán, Lic. Carlos Solórzano Padilla, Sr. Tony Edgar Melchor, Lic. Óscar Avid Hernández, Ing. Sergio Manolo Padilla, Lic. Alexander Kellman, Sr. Ricardo Antonio Rodríguez, Lic. Luis Heriberto Marroquín, Lic. Pedro Antonio Castellón Ortega, Lic. Pablo Leiva Portillo, Lic. César Monterrosa.

<b>Lic. Oscar Humberto Luna</b> Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Tel. 2520-4303	<b>Lcda. Ana Georgina Ramos de Villalta</b> Procuradora Adjunta de los Derechos de la Niñez y la Juventud. Tel. 2520-4343
<b>Licda. Mirna del Carmen Rojas</b> Procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos Humanos. Tel. 2520-4340	<b>Licda. Raquel Caballero de Guevara</b> Procuradora Adjunta para los Derechos de la Mujer y Familia. Tel. 2520-4349
<b>Lic. Antonio Aguilar Martínez</b> Procurador Adjunto para la Defensa de Derechos Económicos y Sociales. Tel. 2520-4353	<b>Licda. Mirna del Carmen Rojas</b> Secretaria General Ad Honorem Tel. 2520-4310
<b>Licda. Gricelda Mercedes Guardado de Ramírez</b> Procurador Adjunto para la Defensa de Derechos Civiles e Individuales. Tel. 2520-4350	<b>Lic. Roberto Antonio Velasco Carpio</b> Director de la Escuela de Derechos Humanos. Tel. 2524-6913
<b>Licda. Yanira del Carmen Cortéz Estévez</b> Procuradora Adjunta para la Defensa del Derecho al Medio Ambiente Tel. 2520-4342	

<b>Lic. José Arnoldo Castro</b> Auditor Interno Tel. 2520-3423	<b>Lic. Roberto Antonio Velasco Carpio</b> Jefe del Departamento Administrativo Ad Honorem Tel. 2520-3408
<b>Licda. Reynelda Abrego de Orellana</b> Jefa del Departamento de Seguimiento Tel. 2529-5345 y 2529-5328	<b>Lic. Carlos de Jesús García Santamaría</b> Jefe de Sección Transporte Tel. 2221-2891
<b>Licda. Lorena del Carmen Torres Alfaro</b> Jefe del Departamento de Denuncias Tel. 2529-5310 y 2529-5344	<b>Ricardo Antonio Rodríguez</b> Jefe de Sección Almacén de Suministros Tel: 2520-4364
<b>Licda. Rosa Elena Ramos Mendoza</b> Jefa de Verificación Penitenciaria e Internamiento de Menores. Tel. 2529-5303	<b>Pedro Antonio Carpio Iraheta</b> Supervisor de Seguridad Tel: 2520-4358
<b>Lic. Héctor Alexander Escobar</b> Jefe del Departamento de Procuración Tels. 2529-5320 y 2529-5321	<b>Tony Edgar Melchor Ardón</b> Encargado de Sección de Archivo General Tel: 2520-4361
<b>Lic. Wilfredo Hernández Calderón</b> Coordinador de Unidad Técnica Tels. 2529-5307	<b>Carlos Ramírez Flores</b> Encargado de Sección de Taller Tel. 2221-2892
<b>Lic. Juan Eli Martínez</b> Control de Procedimientos Tel. 2529-5334 y 2529-5338	<b>Lic. Pedro Antonio Castellón Ortega</b> Jefe de Sección Mantenimiento y Servicios Generales. Tel. 2221-2892 ext. 15 y 16

<b>Lic. José Antonio Pérez Castillo</b> Jefe del Departamento de Verificación y Observación Preventiva y atención a Crisis Tel 2520-3414	<b>Licda. Bety Margarita Díaz de Morales</b> Jefa de Sección de Combustible Tel. 2520-3412
<b>Lic. Pablo Leiva Portillo</b> Coordinador de Derechos Políticos Tel. 2524-6905	<b>Sra. Nora Elda Valentina Rosales de Menéndez</b> Jefa de Sección Activo Fijo Tel. 2520-3419
<b>Ing. Jaime Ernesto Argueta</b> Departamento de VIH y Derechos Humanos Tel. 2524-6918	<b>Licda. Esther Elizabeth Acosta de Córdova</b> Departamento Jurídico Tel. 2520-3408
<b>Licda. Heidy Barrios Zamora</b> Departamento de Discapacidad y Derechos Humanos. Tel: 2524-6914	<b>Licda. Cecilia Graciela Castillo de Ramos</b> Jefa de Recursos Humanos Tel. 2520-3402
<b>Lic. William Espino Gaitán</b> Jefe de Unidad de Migrantes Tel. 2524-6921	<b>Lic. Abelino Chicas Rodríguez</b> Jefe de Proyectos y Gestión de Cooperación Tel. 2520-4358
<b>Lic. Carlos Joaquín Solórzano Padilla</b> Coordinador de Unidades Juveniles de Derechos Humanos. Tel. 2520-3415	<b>Ing. Mirna Victoria Nieto Aguilar</b> Jefa de Planificación Institucional Tel: 2520-3431
<b>Lic. Luís Heriberto Marroquín</b> Jefe de Unidad Financiera Institucional Tel. 2520-4339	<b>Lic. Sergio Manolo Padilla Funes</b> Coordinador del Departamento de Informática Tel. 2529-5332
<b>Ing. Carlos Mártir Monroy</b> Jefe de Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional. Tels. 2520-4320	<b>Lic. César Monterrosa</b> Jefe del Departamento de Comunicaciones y Prensa. Tels. 2520-4305 y 2520-4306
<b>Licda. Mercedes Beatriz Larín de Tepaz</b> Contadora Institucional Tel. 2520-4337	<b>Lic. Orsy Melvin Quintanilla Campos</b> Coordinador de Unidad de Educación Tel. 2524-6907
<b>Licda. Sandra Lorena Cornejo de Leonor</b> Tesorera Institucional Tel. 2520-4326	<b>Licda. Blanca Lina Ramírez</b> Encargada de la Biblioteca Institucional Tel. 2520-3404 y 2520-3425
<b>Lic. Xenia María del Pilar Castro de Valle</b> Jefa de Presupuesto Tel: 2520-4330	<b>Licda. Glenda Alicia Vaquerano Cruz</b> Jefa de la Unidad de la Realidad Nacional Tel. 2524-6902



a) Consolidado general<sup>1</sup>

I. Protección de los derechos humanos								
▪ Reporte de orientaciones y trámite de expedientes								
Departamento	Orientaciones legales	Denuncias admitidas	Oficios	Resoluciones iniciales	Resoluciones finales	Archivo	Buenos oficios	Medida cautelar
San Salvador	553	462	32	229	9	10	2	2
▪ Verificaciones a instituciones estatales responsables de las personas privadas de libertad								
Departamento	Centros penitenciarios	Centros de internamiento para menores infractores	Centros de resguardo detención administrativa	Jueces de Ejecución Penitenciaria	Pabellones de reos en hospitales	Otras Instituciones Públicas Visitadas	Total	
San Salvador	97	8	106	8	20	13	252	
▪ Verificaciones a instituciones públicas por naturaleza de derecho humano								
Departamento	Derechos Civiles y Políticos	Derechos Económicos, Sociales y Culturales	Derechos de las Mujeres	Derechos de la Niñez y Juventud		Derecho al Medio Ambiente	Total	
San Salvador	446	198	101	209		209	1,163	

II. Análisis e incidencia políticas, normas y prácticas del Estado				
Departamento	Mediaciones	Diligencias de Buenos Oficios	Diligencias de Observación Preventiva	Total de Actividades
San Salvador	245	16	145	506

III. Promoción y educación en derechos humanos	
Personas Beneficiadas	66,175

<sup>1</sup> Estos datos se encuentran consolidados a partir de los reportes generados por el Sistema Informático Integrado de Gestión y los proporcionados por Departamentos, Unidades y Procuradurías Adjuntas Específicas.

## b) Consolidado Escuela de Derechos Humanos



Personas sentadas de izquierda a derecha: Silvia Carolina Madrid Cartagena, María Esmeralda Mejía, Licda. Glenda Alicia Vaquerano Cruz, Lic. Roberto Antonio Velasco Carpio, Lic. Oscar Humberto Luna, Ana Cristina Cosme Cárcamo, Licda. Araceli Carías Novoa, y Lilián Noemí Zaldívar Morales.

Personas de pie, de izquierda a derecha: Lic. Carlos Eduardo Aquino, Erick Renato Romero, Lic. Oliver Román López Serrano, Oscar Avid Hernández, Orsy Melvin Quintanilla, Licda. Blanca Lina Ramírez, Lic. Jesús Gonzalo Contreras, Esmeralda Muñoz de Galdámez y Luisa de Jesús Aguilar.

### i. Dirección de la Escuela de Derechos Humanos

Dirección de la Escuela de Derechos Humanos	
Proyectos	Resultados
Diseñar e implementar una política de educación, capacitación, investigación, asesoramiento técnico y la promoción y difusión en derechos humanos.	Política diseñada e implementándose
Gestionar la suscripción de convenios o cartas de entendimiento entre Procuraduría, Universidades, ONG's y Gobiernos Locales para el desarrollo y ejecución de programas de educación y difusión de derechos humanos	Cinco convenios suscritos en el período del informe anual

**ii. Unidad de Educación**

<b>Unidad de Educación</b>	
<b>Actividades principales</b>	<b>Frecuencia</b>
Seminarios-taller	15
Cursos y capacitaciones	30
Conferencias y charlas	5
Jornadas de seguimiento	6
Otras actividades	11
<b>Total</b>	<b>67</b>

<b>Total de personas beneficiadas por sexo</b>	
Mujeres	574
Hombres	744
<b>Total</b>	<b>1,318</b>

**iii. Unidad de Cultura y Promoción**

<b>Unidad de Cultura y Promoción</b>	
<b>Actividades principales</b>	<b>Frecuencia</b>
Campañas de información pública y sensibilización en derechos humanos	38
Producción de afiches, hojas volantes, cuadernos, entre otros	28
Actividades de difusión de los derechos humanos	43
Actividades conmemorativas	4
<b>Total</b>	<b>113</b>

**iv. Unidad de la Realidad Nacional**

<b>Unidad de la Realidad Nacional</b>	
<b>Proyectos y principales actividades</b>	<b>Resultados</b>
Informe Especial sobre la situación de los derechos humanos a la luz de los Acuerdos de Paz en El Salvador	Informe publicado
Informe sobre la Situación de los Derechos Políticos en el marco de las Elecciones Legislativas y Municipales celebradas el 11 de marzo de 2012	Informe publicado
Informe sobre el Estado de los Derechos Humanos en El Salvador 2012	Documento publicado
Dos números de la Revista de la Escuela de Derechos Humanos	Documentos entregados
Estudio de factibilidad programa de observatorio de los derechos humanos	Estudio entregado
Seis libros compilatorios de doctrina institucional sobre pronunciamientos públicos, mensajes, opiniones; informes especiales y situacionales; y de resoluciones emblemáticas	Documentos publicados

Unidad de la Realidad Nacional	
Proyectos y principales actividades	Resultados
Informe Anual de Labores 2012-2013	Informe entregado
Proyecto institucional del Observatorio de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos	Impulso en el área de investigación y seguimiento
Proyecto de ACNUR para la elaboración del estudio “Análisis de Contexto – Derechos Humanos y Situación de Grupos con necesidades específicas de protección en El Salvador”	Apoyo

## v. Biblioteca institucional

Personas que visitan la Biblioteca Institucional	
Personas	Frecuencia
Universitarios	99
Personal de la PDDH	82
Centros escolares	338
Profesionales	4
Investigadores	22
Otros	490
<b>Total</b>	<b>1,035</b>

Total de personas visitantes por sexo	
Mujeres	616
Hombres	419
<b>Total</b>	<b>1,035</b>

## c) Consolidado por Procuradurías Adjuntas Específicas<sup>2</sup>

### i. Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Civiles e Individuales

- Análisis e Incidencia (de Políticas, Normas y Prácticas del Estado)

Documento	Total
Informes especiales y situacionales	2
Opiniones sobre Proyectos de Ley , Posicionamientos sobre Normativas y Propuestas de Reforma de Ley	1
Pronunciamientos públicos	8
Mediaciones	1
Otros	1
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>

<sup>2</sup> Los datos relativos a la protección de los derechos humanos se encuentran consolidados en el apartado de la sede central.

- Relaciones y Acciones Externas

Actividades	Total
Mesas permanentes	11
Organización de eventos (Foros, Seminarios, Conferencias, etc.)	3
Asistencia a eventos organizados por otras instituciones (Capacitaciones, Charlas, Foros, Seminarios, etc.)	18
Asistencia y participación a eventos internacionales	2
Entrevistas en Medios de Comunicación	1
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>

- Promoción y Educación en Derechos Humanos

Actividades	Personas Beneficiadas
0	N/D

## ii. Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Niñez y la Juventud

- Análisis e Incidencia (de Políticas, Normas y Prácticas del Estado)

Documento	Total
Informes especiales y situacionales	2
Opiniones sobre Proyectos de Ley , Posicionamientos sobre Normativas y Propuestas de Reforma de Ley	1
Pronunciamientos públicos	5
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>

- Relaciones y Acciones Externas

Actividades	Total
Mesas permanentes	6
Organización de eventos (Foros, Seminarios, Conferencias, etc.)	7
Asistencia a eventos organizados por otras instituciones (Capacitaciones, Charlas, Foros, Seminarios, etc.)	2
Asistencia y participación a eventos internacionales	3
Entrevistas en Medios de Comunicación	2
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>

- Promoción y Educación en Derechos Humanos

Actividades	Personas Beneficiadas
0	0



### iii. Procuraduría Adjunta para la Defensa de Derecho Humano al Medio Ambiente

- Análisis e Incidencia (de Políticas, Normas y Prácticas del Estado)

Documento	Total
Informes Especiales y Situacionales	2
Pronunciamientos públicos	10
Opiniones sobre Proyectos de Ley , Posicionamientos sobre Normativas y Propuestas de Reforma de Ley	4
Mediaciones	5
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

- Relaciones y Acciones Externas

Actividades	Total
Mesas permanentes	4
Organización de eventos (Foros, Seminarios, Conferencias, etc.)	11
Asistencia a eventos organizados por otras instituciones (Capacitaciones, Charlas, Foros, Seminarios, etc.)	5
Asistencia y participación a eventos internacionales	3
Participación en calidad de observador ante instancias públicas	3
Entrevistas en Medios de Comunicación	9
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>

- Promoción y Educación en Derechos Humanos

Actividades	Personas Beneficiadas
12	N/D

#### iv. Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales

- Análisis e Incidencia (de Políticas, Normas y Prácticas del Estado)

Documento	Total
Informes especiales y situacionales	2
Opiniones sobre Proyectos de Ley, Posicionamientos sobre Normativas y Propuestas de Reforma de Ley	1
Pronunciamientos públicos	12
Mediaciones	31
<b>TOTAL</b>	<b>46</b>

- Relaciones y Acciones Externas

Actividades	Total
Mesas permanentes	62
Organización de eventos (Foros, Seminarios, Conferencias, etc.)	8
Asistencia a eventos organizados por otras instituciones (Capacitaciones, Charlas, Foros, Seminarios, etc.)	45
Reuniones con funcionarios públicos, organismos internacionales y sociedad civil	4
Participación en calidad de observador ante instancias públicas	5
Asistencia y participación a eventos internacionales	5
Entrevistas en Medios de Comunicación	6
<b>TOTAL</b>	<b>135</b>

- Promoción y Educación en Derechos Humanos

Actividades	Personas Beneficiadas
27	N/D

## v. Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer y la Familia

### ■ Análisis e Incidencia (de Políticas, Normas y Prácticas del Estado)

Documento	Total
Informes especiales y situacionales	1
Opiniones sobre Proyectos de Ley, Posicionamientos sobre Normativas y Propuestas de Reforma de Ley	0
Pronunciamientos públicos	4
Mediaciones	0
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>

### ■ Relaciones y Acciones Externas

Actividades	Total
Mesas permanentes	5
Organización de eventos (Foros, Seminarios, Conferencias, etc.)	1
Convenios suscritos	
Asistencia a eventos organizados por otras instituciones (capacitaciones, charlas, foros, seminarios, etc.)	60
Reuniones con funcionarios públicos, organismos internacionales y sociedad civil	6
Entrevistas en medios de comunicación	17
<b>TOTAL</b>	<b>89</b>

### ■ Promoción y Educación en Derechos Humanos

Actividades	Personas Beneficiadas
8	N/D

## 6.2. DELEGACIONES LOCALES



## Delegación Local de Apopa



Sentadas de izquierda a derecha: Cecilia Araley Henríquez, Ordenanza y Carla Noemy Arévalo Chavez, Secretaria. De pie, de izquierda a derecha: José Audberto Morales Pineda, Motorista, Gustavo Adolfo Rivas Reina (Delegado Local) y Guillermo Antonio García Bernabé, jurídico.





Lic. Gustavo Adolfo Rivas  
Delegado Local de Apopa<sup>3</sup>

▪ **Protección de los Derechos Humanos**

Delegación/Acciones de protección	Orientaciones legales	Denuncias admitidas	Oficios	Resoluciones iniciales	Resoluciones finales
Apopa	505	62	21	69	42

▪ **Verificación en las instituciones responsables de las personas privadas de libertad**

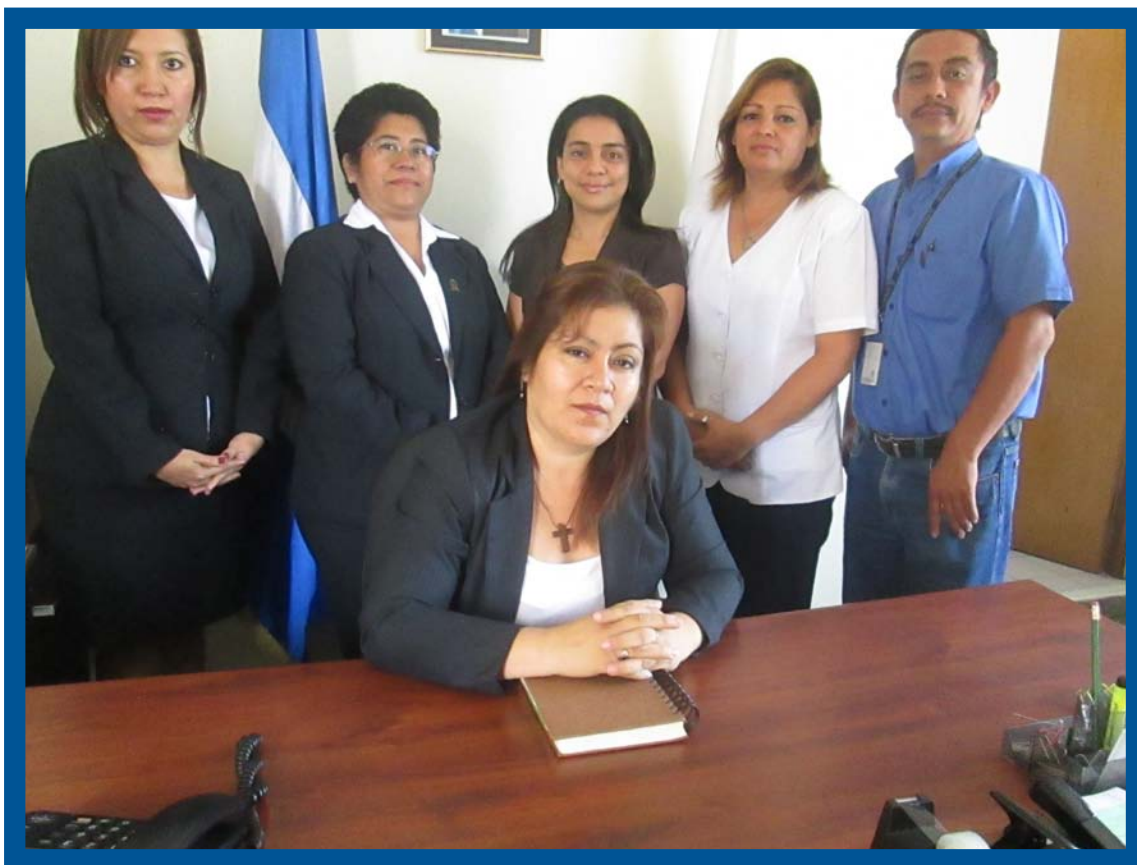
Delegación	Centros penitenciarios	Centros de internamiento para menores infractores	Centros de resguardo detención administrativa	Total
Apopa	4	10	36	50

▪ **Análisis e Incidencia (de Políticas, Normas y Prácticas del Estado) y actividades de Promoción y educación de Derechos Humanos**

Análisis e Incidencia				Promoción y Educación	
Delegación	Mediaciones	Diligencias de Buenos Oficios	Diligencias de Observación Preventiva	Total de Actividades	Personas Beneficiadas
Apopa	6	78	43	107	4245

<sup>3</sup> Es el representante del Procurador con sede en el municipio de Apopa, encargado de velar por el respeto, promoción y difusión de los derechos humanos y de supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas en su circunscripción territorial, la cual comprende los municipios de Apopa, Guazapa, Tonacatepeque, Aguilar y El Paisnal, del departamento de San Salvador. Ubicación: Avenida Norberto Gamero, No. 17, El Cocal, Apopa, San Salvador. Tel. 2216-1797 y telefax 2216-1791. Correo electrónico: apopa@pddh.gob.sv.

## Delegación Local de Soyapango



De pie de izquierda derecha: Roxana Arely Cortez, Patricia Arely Osorio, Ana Yasmín Dinarte Santamaría, Marta de Jesús Cruz Rivera y Luís Ivan Zalaya Velis. Sentada Cecilia del Carmen López



Licda. Cecilia del Carmen López  
Delegada Local de Soyapango<sup>4</sup>

▪ **Protección de los Derechos Humanos**

Delegación/Acciones de protección	Orientaciones legales	Denuncias admitidas	Oficios	Resoluciones iniciales	Resoluciones finales
Soyapango	390	135	135	31	16

▪ **Verificación en las instituciones responsables de las personas privadas de libertad**

Delegación	Centros penitenciarios	Centros de internamiento para menores infractores	Centros de resguardo detención administrativa	Total
Soyapango	26	6	90	122

▪ **Análisis e Incidencia (de Políticas, Normas y Prácticas del Estado) y actividades de Promoción y educación de Derechos Humanos**

Análisis e Incidencia				Promoción y Educación	
Delegación	Mediaciones	Diligencias de Buenos Oficios	Diligencias de Observación Preventiva	Total de Actividades	Personas Beneficiadas
Soyapango	35	42	0	69	2,672

<sup>4</sup> Es la representante del Procurador con sede en el municipio de Soyapango, quien se encarga de velar por el respeto, promoción y difusión de los derechos humanos y de supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas en circunscripción territorial, la cual comprende los municipios de Soyapango, Ilopango y San Martín, del departamento de San Salvador. Ubicación: Urbanización Las Arboledas, Pje. 3F N° 28, Soyapango, San Salvador. Tel. 2277-0479 y telefax 2277-2275. Correo electrónico: soyapango@pddh.gop.sv.

## Delegación Local de Metapán



Sentados de izquierda a derecha: Oscar Mauricio García y José Rodolfo González Mejía. De pie de izquierda a derecha: Verónica Lissette Driotez de Medrano; Mireya Tobar Vanegas, (Delegada); Alma Yanira Arrué de Clavel.



Licda. Mireya Tobar Vanegas  
Delegada Local de Metapán<sup>5</sup>

▪ **Protección de los Derechos Humanos**

Delegación/Acciones de protección	Orientaciones legales	Denuncias admitidas	Oficios	Resoluciones iniciales	Resoluciones finales
Metapán	264	85	129	33	65

▪ **Verificación en las instituciones responsables de las personas privadas de libertad**

Delegación	Centros penitenciarios	Centros de resguardo detención administrativa	Otras Instituciones Públicas Visitadas	Total
Metapán	12	7	5	46

▪ **Análisis e Incidencia (de Políticas, Normas y Prácticas del Estado) y actividades de Promoción y educación de Derechos Humanos**

Análisis e Incidencia				Promoción y Educación	
Delegación	Mediaciones	Diligencias de Buenos Oficios	Diligencias de Observación Preventiva	Total de Actividades	Personas Beneficiadas
Metapán	1	25	39	81	2,515

<sup>5</sup> Es la representante del Procurador con sede en el municipio de Metapán, encargada de velar por el respeto, promoción y difusión de los derechos humanos y de supervisar la actuación de la administración pública. Su competencia comprende los municipios de Metapán, Masahuat y Guachipilín, del departamento de Santa Ana. Ubicación: 8ª. Av. Norte, entre 1ª. y 3ª. Calle Ote., Barrio Nuevo, N° 18-B Metapán, Santa Ana. Tel. 2402-3342 y telefax 2402-3343. Correo electrónico: metapan@pddh.gob.sv.



## Delegación Local de Santa Rosa de Lima



De pie, derecha a izquierda: Lic. Andrés Zúniga Orellana, Delegado Local; Carlos Efraín Benavides, Motorista; Lic. Mauricio Edgardo Flores Gonzales, Jurídico. Sentadas: izquierda a derecha: Vanessa Yanett Cardona Claros, Secretaria; Claribel Raneé Valiente de Ramos, Servicios Generales.



Lic. Andrés Zúniga Orellana  
Delegado Local de Santa Rosa de Lima<sup>6</sup>

▪ **Protección de los Derechos Humanos**

Delegación/ Acciones de protección	Orientaciones legales	Denuncias admitidas	Oficios	Resoluciones iniciales	Resoluciones finales	Archivo	Buenos oficios	Medida cautelar
Santa Rosa de Lima	312	108	214	11	17	0	0	0

▪ **Análisis e Incidencia (de Políticas, Normas y Prácticas del Estado) y actividades de Promoción y educación de Derechos Humanos**

Análisis e Incidencia				Promoción y Educación	
Delegación	Mediaciones	Diligencias de Buenos Oficios	Diligencias de Observación Preventiva	Total de Actividades	Personas Beneficiadas
Santa Rosa de Lima	27	30	96	147	1,103

<sup>6</sup> Es el representante del Procurador con sede en el municipio de Santa Rosa de Lima, encargado de velar por el respeto, promoción y difusión de los derechos humanos y de supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas en su circunscripción territorial, la cual comprende los municipios de Santa Rosa de Lima, Pasaquina, Nueva Esparta, Polorós, Anamorós y Lislique del departamento de La Unión. Ubicación: 4ª. Av. Norte y calle al Tiangue, Barrio Las Delicias, Santa Rosa de Lima, La Unión. Tel. 2641-4076 y telefax 2641-4125. Correo electrónico: santarosadelima@pddh.gob.sv.

## 6.3 DEGACIONES DEPARTAMENTALES

### Delegación Departamental de Ahuachapán



Sentadas de Izquierda a derecha: Clarisa Guadalupe Ramos, Carmen Elena Romero, Zuleyma Jocabedh Góchez López (delgada departamental), Josefa Antonia Vania de Farfán, Imelda Haldeé Menéndez Alvarado. Primera fila, de pie de izquierda a derecha: José Mario Zavaleta, Hugo Nelson Escobar Arévalo, José David Castillo, Iris Yesenia Solís, Víctor Hugo Hernández, Donald Enrique Cabezas Ganuza, Segunda fila: Carlos Alberto Colocho.





Licda. Zuleyma Jocabedh Góchez López  
Delegada Departamental de Ahuachapán<sup>7</sup>

▪ **Protección de los Derechos Humanos**

Delegación/ Acciones de protección	Orientaciones legales	Denuncias admitidas	Oficios	Resoluciones iniciales	Resoluciones finales	Archivo	Buenos oficios	Medida Cautelar
Ahuachapán	455	148	205	18	22	7	3	1

▪ **Verificación en las instituciones responsables de las personas privadas de libertad**

Delegación	Centros de internamiento para menores infractores	Centros de resguardo detención administrativa	Total
Ahuachapán	4	37	41

▪ **Análisis e Incidencia (de Políticas, Normas y Prácticas del Estado) y actividades de Promoción y educación de Derechos Humanos**

Análisis e Incidencia				Promoción y Educación	
Delegación	Mediaciones	Diligencias de Buenos Oficios	Diligencias de Observación Preventiva	Total de Actividades	Personas Beneficiadas
Ahuachapán	17	31	50	358	8,396

<sup>7</sup> Es la representante del Procurador en el departamento de Ahuachapán, encargado de velar por el respeto, promoción y difusión de los derechos humanos y de supervisar la actuación de la administración pública en su circunscripción territorial. Ubicación: 3ª Avenida Sur, Barrio San José No. 3-6, Ahuachapán. Tel. 2413-4516 y telefax 2443-1536. Correo electrónico: ahuachapan@pddh.gob.sv.

## Delegación Departamental de Santa Ana



Sentadas de izquierda a derecha: Laura Medina de Moreno, Cecilia Alfaro, Ernestina González, Esperanza Yanira Díaz, Rosa María Sifontes y Clelia de Rodríguez. De pie: Francisco Peñate, Rolando González, Henry Zaldívar, Adrián Ramírez y Víctor Cáceres.





Licda. Esperanza Yanira Díaz  
Delegada Departamental de Santa Ana<sup>8</sup>

▪ **Protección de los Derechos Humanos**

Delegación/Acciones de protección	Orientaciones legales	Denuncias admitidas	Oficios	Resoluciones iniciales	Resoluciones finales
Santa Ana	703	368	520	31	4

▪ **Verificación en las instituciones responsables de las personas privadas de libertad**

Delegación	Centros penitenciarios	Centros de resguardo detención administrativa	Total
Santa Ana	27	23	50

▪ **Análisis e Incidencia (de Políticas, Normas y Prácticas del Estado) y actividades de Promoción y educación de Derechos Humanos**

Análisis e Incidencia				Promoción y Educación	
Delegación	Mediaciones	Diligencias de Buenos Oficios	Diligencias de Observación Preventiva	Total de Actividades	Personas Beneficiadas
Santa Ana	3	14	28	135	3,352

<sup>8</sup> Es la representante del Procurador en el departamento de Santa Ana, encargada de velar por el respeto, promoción y difusión de los derechos humanos y de supervisar la actuación de la administración pública en su circunscripción territorial. Ubicación: 10ª. Av. Sur, entre 23ª y 25ª C. Pte. No. 46, Santa Ana. Tel. 2440-2023, 2440-1979, telefax: 2440-5874. Correo electrónico: santaana@pddh.gob.sv

## Delegación Departamental de Sonsonate



De pie, izquierda a derecha: Lic. Samuel Ernesto Padilla Martínez, (Jurídico), Dr. Jorge Alberto Ramírez Rauda (Médico Forense), Sr. Adán Humberto Osorio (Vigilante) y Sr. Andrés Comayagua Rodríguez (Vigilante). Sentados de izquierda a Derecha: Licda. Karen Raquel Jiménez de Rodríguez (Jurídica), Lic. Oscar Wilfredo Olivares (Delegado Departamental) y Yajaira Carolina López de Ramos (Secretaria). Ausentes: Licda. Ana Delmy Castro de Castro (Educatra), Sr. Feliciano Esteban Reyes Calderón (motorista), Sr. Edgar Federico Martínez (Encargado de Servicios Generales).



Lic. Oscar Wilfredo Olivares  
Delegado Departamental de Sonsonate<sup>9</sup>

▪ **Protección de los Derechos Humanos**

Delegación/Acciones de protección	Orientaciones legales	Denuncias admitidas	Oficios	Resoluciones iniciales	Resoluciones finales
Sonsonate	655	131	256	12	83

▪ **Verificación en las instituciones responsables de las personas privadas de libertad**

Delegación	Centros penitenciarios	Centros de resguardo detención administrativa	Total
Sonsonate	10	28	38

▪ **Análisis e Incidencia (de Políticas, Normas y Prácticas del Estado) y actividades de Promoción y educación de Derechos Humanos**

Análisis e Incidencia				Promoción y Educación	
Delegación	Mediaciones	Diligencias de Buenos Oficios	Diligencias de Observación Preventiva	Total de Actividades	Personas Beneficiadas
Sonsonate	3	0	15	125	1,170

<sup>9</sup> Es el representante del Procurador en el departamento de Sonsonate, encargada de velar por el respeto, promoción y difusión de los derechos humanos y de supervisar la actuación de la administración pública en su circunscripción territorial. Ubicación: Lotificación Totota Pte., Calle "A", Pol. H, Lote No. 235 y 236, Carretera a Acajutla, Sonsonate. Tel. 2451-1507 y telefax 2451-1592 y Correo electrónico: sonsonate@pddh.gob.sv

## Delegación Departamental de La Libertad



Primera fila, de izquierda a derecha: Freddy Antonio Arévalo, Licda. Edith Roxana Vásquez de Martínez, Sonia Margarita Martínez, Licda. Ascención Villatoro, Lic. Eduardo Barahona Colorado, Lic. Rafael Antonio Aquino (Delegado Departamental). Segunda Fila, de izquierda a derecha: Francisco Orlando Corea, Gerardo Alfonso Romero Solís, Lic. José Alfonso Flores, Lic. Erick Rooney Olivares Callejas, Pablo Guillén.





Rafael Antonio Aquino López  
Delegado Departamental de La Libertad<sup>10</sup>

▪ **Protección de los Derechos Humanos**

Delegación/Acciones de protección	Orientaciones legales	Denuncias admitidas	Oficios	Resoluciones iniciales	Resoluciones finales
La Libertad	621	109	39	103	30

▪ **Verificación en las instituciones responsables de las personas privadas de libertad**

Delegación	Centros penitenciarios	Centros de resguardo detención administrativa	Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena	Total
La Libertad	2	34	2	38

▪ **Análisis e Incidencia (de Políticas, Normas y Prácticas del Estado) y actividades de Promoción y educación de Derechos Humanos**

Análisis e Incidencia				Promoción y Educación	
Delegación	Mediaciones	Diligencias de Buenos Oficios	Diligencias de Observación Preventiva	Total de Actividades	Personas Beneficiadas
La Libertad	20	38	61	172	1,053

<sup>10</sup> Es el representante del Procurador en el Departamento de La Libertad, encargado de velar por el respeto, promoción y difusión de los derechos humanos y de supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas en su circunscripción territorial. Ubicación: 5ª. Av. Nte. No. 1-2ª, Santa Tecla. La Libertad. Tel. 2288-9308 y 2288-9309, telefax , 2228-0451. Correo electrónico: lalibertad@pddh.gob.sv.



## Delegación Departamental de La Paz



De izquierda a derecha es el siguiente: Sentados: William Salvador Zaldaña Zavaleta, Geremías Rodríguez Hernández, Rhina Guadalupe Palomo Lovo, Licda. Francisca Estela Montoya Chacón, Oscar Antonio Córdova; De pie: Lic. Mario Alfredo Ramírez Coca, José Carlos Torres González, Felipe Alexander Rauda, Lic. Juan Pablo Cuéllar Guerrero (Delegado), Lic. Salvador Zavaleta Mena, Lic. José Humberto Portillo Martínez.



Lic. Juan Pablo Cuéllar  
Delegado departamental de La Paz<sup>11</sup>

▪ **Protección de los Derechos Humanos**

Delegación/Acciones de protección	Orientaciones legales	Denuncias admitidas	Oficios	Resoluciones iniciales	Resoluciones finales
La Paz	406	278	528	8	61

▪ **Verificación en las instituciones responsables de las personas privadas de libertad**

Delegación	Centros penitenciarios	Centros de internamiento para menores infractores	Total
La Paz	10	74	84

▪ **Análisis e Incidencia (de Políticas, Normas y Prácticas del Estado) y actividades de Promoción y educación de Derechos Humanos**

Análisis e Incidencia				Promoción y Educación	
Delegación	Mediaciones	Diligencias de Buenos Oficios	Diligencias de Observación Preventiva	Total de Actividades	Personas Beneficiadas
La Paz	9	4	69	128	4,200

<sup>11</sup> Es el representante del Procurador en el departamento de La Paz encargada de velar por el respeto, promoción y difusión de los derechos humanos y de supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas en su circunscripción territorial. Ubicación: 5ª. Av. Norte No. 2-A, Barrio Candelaria, Zacatecoluca, La Paz. Tel. 2334-4561 y 2334-0658. Correo electrónico: lapaz@pddh.gob.sv

## Delegación Departamental de San Vicente



Personas sentadas, de izquierda a derecha: Sara Emilia Bonilla de Mejía, Adrián Díaz Rivas (Delegado Departamental), Xenia Merino de Jacinto. De pie, de izquierda a derecha: René Adonay Jovel Campos, Eulises Elías Barahona, Mario Antonio Villegas, Miguel Antonio Bonilla, Ricardo Ernesto Morales, Santos Mercedes González.



Lic. Adrián Díaz Rivas  
Delegado Departamental de San Vicente<sup>12</sup>

▪ **Protección de los Derechos Humanos**

Delegación/Acciones de protección	Orientaciones legales	Denuncias admitidas	Oficios	Resoluciones iniciales	Resoluciones finales
San Vicente	388	157	137	52	11

▪ **Verificación en las instituciones responsables de las personas privadas de libertad**

Delegación	Centros penitenciarios	Centros de resguardo detención administrativa	Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena	Total
San Vicente	19	31	5	55

▪ **Análisis e Incidencia (de Políticas, Normas y Prácticas del Estado) y actividades de Promoción y educación de Derechos Humanos**

Análisis e Incidencia				Promoción y Educación	
Delegación	Mediaciones	Diligencias de Buenos Oficios	Diligencias de Observación Preventiva	Total de Actividades	Personas Beneficiadas
San Vicente	17	23	11	116	5,938

<sup>12</sup> Es el representante del Procurador en el departamento de San Vicente encargado de velar por el respeto, promoción y difusión de los derechos humanos y de supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas en su circunscripción territorial. Ubicación: Calle Primero de Julio y 4ª Avenida Norte No. 18-A, Barrio El Santuario, San Vicente. Tel. 2393-1017 y 2393-1342, telefax 2393-0428. Correo electrónico: sanvicente@pddh.gob.sv



## Delegación Departamental de Cabañas



Sentados, de izquierda a derecha, María Rita Martínez de Ramírez, Lic Carlos Alberto Martell Brizuela (Delegado Departamental), Daisy Corina Hernández Orellana, Lic. Orlando Antonio Orellana Cortez. De la misma manera. De pie José Mario Laínez Gámez, Lic. José Antonio Gámez Zelaya, Carlos Ernesto Torrento Machado y José Manuel Gutiérrez Guillén





Lic. Carlos Alberto Martell Brizuela  
Delegado Departamental de Cabañas<sup>13</sup>

▪ **Protección de los Derechos Humanos**

Delegación/ Acciones de protección	Orientaciones legales	Denuncias admitidas	Oficios	Resoluciones iniciales	Resoluciones finales
Cabañas	165	69	133	22	19

▪ **Verificación en las instituciones responsables de las personas privadas de libertad**

Delegación	Centros penitenciarios	Centros de internamiento para menores infractores	Centros de resguardo detención administrativa	Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena	Otras Instituciones Públicas Visitadas	Total
Cabañas	17	39	30	1	3	90

▪ **Análisis e Incidencia (de Políticas, Normas y Prácticas del Estado) y actividades de Promoción y educación de Derechos Humanos**

Análisis e Incidencia				Promoción y Educación	
Delegación	Mediaciones	Diligencias de Buenos Oficios	Diligencias de Observación Preventiva	Total de Actividades	Personas Beneficiadas
Cabañas	29	4	29	23	691

<sup>13</sup> Es el representante del Procurador en el departamento de Cabañas encargado de velar por el respeto, promoción y difusión de los derechos humanos y de supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas en su circunscripción territorial. Ubicación: 3ª. Av. Norte, No.13, Barrio San Antonio, Sensuntepeque, Cabañas. Tel. 2382-0869 y telefax 2382-3165. Correo electrónico: cabanas@pddh.gob.sv

## Delegación Departamental de Chalatenango



Primera fila de derecha a izquierda Dr. Félix Antonio Orellana Alvarenga (Médico), Licda. Lissette Carolina Recinos Argueta (Jurídica), Sra. Victoria Lilian Pérez (Secretaria), Francésca Orellana Liévano (Colaboradora Jurídica); 2a. Fila. de derecha a izquierda, Jesús Orlando Alas Beltrán (Vigilante), José Mauricio Mejía Deras (Motorista), Lic. William Orlando Franco Palma (Jurídico) y Lic. Ulises Rivas Sánchez (Delegado Departamental).



Lic. Jesús Ulises Rivas  
Delegado Departamental de Chalatenango<sup>14</sup>

▪ **Protección de los Derechos Humanos**

Delegación/Acciones de protección	Orientaciones legales	Denuncias admitidas	Oficios	Resoluciones iniciales	Resoluciones finales
Chalatenango	353	76	82	27	72

▪ **Verificación en las instituciones responsables de las personas privadas de libertad**

Delegación	Centros penitenciarios	Centros de resguardo detención administrativa	Total
Chalatenango	34	89	123

▪ **Análisis e Incidencia (de Políticas, Normas y Prácticas del Estado) y actividades de Promoción y educación de Derechos Humanos**

Análisis e Incidencia				Promoción y Educación	
Delegación	Mediaciones	Diligencias de Buenos Oficios	Diligencias de Observación Preventiva	Total de Actividades	Personas Beneficiadas
Chalatenango	-	27	137	60	1,324

<sup>14</sup> Es el representante del Procurador en el Departamento de Chalatenango, encargado de velar por el respeto, promoción y difusión de los derechos humanos y de supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas en su circunscripción territorial. Ubicación: Final calle San Martín, Barrio Las Flores, casa número 19, Chalatenango, ex local de CAESS, Chalatenango. Tel. 2301-0754 y telefax 2301-2352. Correo electrónico: chalatenango@pddh.gob.sv

## Delegación Departamental de Cuscatlán



De pie de izquierda a derecha: Alex óseas Ayala, Luís Alcides Mejía Moreno, Arístides Funes Gómez, Miguel Ángel Mejía, Alex Daniel Pérez Zavala. Sentados de izquierda a derecha: Ana María Delgado Orellana, Carlos Enrique Rodríguez Quezada, (Delegado Departamental), Verónica Cristina Hernández y María Rosalva Alvarado de Cruz.



Lic. Carlos Enrique Rodríguez Quezada  
Delegado Departamental de Cuscatlán<sup>15</sup>

▪ **Protección de los Derechos Humanos**

Delegación/Acciones de protección	Orientaciones legales	Denuncias admitidas	Oficios	Resoluciones iniciales	Resoluciones finales
Cuscatlán	721	82	116	15	9

▪ **Verificación en las instituciones responsables de las personas privadas de libertad**

Delegación	Centros penitenciarios	Centros de internamiento para menores infractores	Centros de resguardo detención administrativa	Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena	Otras Instituciones Públicas Visitadas	Total
Cuscatlán	17	39	30	1	3	90

▪ **Análisis e Incidencia (de Políticas, Normas y Prácticas del Estado) y actividades de Promoción y educación de Derechos Humanos**

Análisis e Incidencia				Promoción y Educación	
Delegación	Mediaciones	Diligencias de Buenos Oficios	Diligencias de Observación Preventiva	Total de Actividades	Personas Beneficiadas
Cuscatlán	20	6	54	43	657

<sup>15</sup> Es el representante del Procurador en el departamento de Cuscatlán encargado de velar por el respeto, promoción y difusión de los derechos humanos y de supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas en su circunscripción territorial. Ubicación: Calle José Francisco López No. 21, Barrio El Centro, Cojutepeque, Cuscatlán. Tel. 2372-2546 y telefax 2372-6115. Correo electrónico: cuscatlan@pddh.gob.sv



## Delegación Departamental de Usulután



Sentados de izquierda a derecha: Ana Cecilia Ramírez, Oscar Arturo Díaz, Ana Milagro Guevara de Medrano (Delegada Departamental), Wilber Edenilson Flores, Heinar Efraín Herrera. De pie, de izquierda a derecha: Blanca Lidia Chicas, María de los Ángeles Rivera, Griselda María Benavides de Rodríguez, José Abel Mejía, Filomena Aguirre de Cárdenas, Azucena Martínez Rivera.



Licda. Ana Milagro Guevara de Medrano  
Delegada Departamental de Usulután<sup>16</sup>

▪ **Protección de los Derechos Humanos**

Delegación/ Acciones de protección	Orientaciones legales	Denuncias admitidas	Oficios	Resoluciones iniciales	Resoluciones finales	Medida cautelar
Usulután	856	220	550	46	89	1

▪ **Verificación en las instituciones responsables de las personas privadas de libertad**

Delegación	Centros penitenciarios	Centros de resguardo detención administrativa	Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena	Otras Instituciones Públicas Visitadas	Total
Usulután	25	57	8	12	102

▪ **Análisis e Incidencia (de Políticas, Normas y Prácticas del Estado) y actividades de Promoción y educación de Derechos Humanos**

Análisis e Incidencia				Promoción y Educación	
Delegación	Mediaciones	Diligencias de Buenos Oficios	Diligencias de Observación Preventiva	Total de Actividades	Personas Beneficiadas
Usulután	13	39	31	261	2,780

<sup>16</sup> Es la representante del Procurador en el departamento de Usulután encargada de velar por el respeto, promoción y difusión de los derechos humanos y de supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas en su circunscripción territorial. Ubicación: 4ª. Av. Sur No. 15, Barrio El Calvario, Usulután. Tel. 2662-3549 y 2624-9029, telefax 2662-3464. Correo electrónico: usulután@pddh.gob.sv

## Delegación Departamental de San Miguel



De pie, de izquierda a derecha: José Mauricio Torres Argueta, Modesto Pineda Medrano, Ovidio Orlando Rodríguez, José Roberto Cárdenas Vargas, Carlos Argueta Hernández y Fernando Arnoldo Martínez. Sentados, de izquierda a derecha: Margarita Mercedes Ulloa Zúniga, Gladis Edubina Benítez de Ramos, Rubén Flores Chavarría, Gertrudis Ernestina Reyes Reyes y Yanira Guatemala Martínez. No aparece: José Luis Castro Rivera.



Lic. Rubén Flores Chavarría  
Delegado Departamento de San Miguel<sup>17</sup>

▪ **Protección de los Derechos Humanos**

Delegación/ Acciones de protección	Orientaciones legales	Denuncias admitidas	Oficios	Resoluciones iniciales	Resoluciones finales
San Miguel	570	301	534	15	60

▪ **Verificación en las instituciones responsables de las personas privadas de libertad**

Delegación	Centros penitenciarios	Centros de resguardo detención administrativa	Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena	Otras Instituciones Públicas Visitadas	Total
San Miguel	25	80	3	17	125

▪ **Análisis e Incidencia (de Políticas, Normas y Prácticas del Estado) y actividades de Promoción y educación de Derechos Humanos**

Análisis e Incidencia				Promoción y Educación	
Delegación	Mediaciones	Diligencias de Buenos Oficios	Diligencias de Observación Preventiva	Total de Actividades	Personas Beneficiadas
San Miguel	3	3	10	163	3,314

<sup>17</sup> Es el representante del Procurador en el departamento de San Miguel encargado de velar por el respeto, promoción y difusión de los derechos humanos y de supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas en su circunscripción territorial. Ubicación: 10ª. Calle Poniente No. 802, Apto. B y 601-C, Barrio San Felipe, San Miguel Tel. 2660-7189 y 2661-6674, telefax 2661-6673. Correo electrónico: sanmiguel@pddh.gob.sv.



## Delegación Departamental de Morazán



Sentados de izquierda a derecha: Lorena Margarita Gómez Guerrero (Jurídica), María Edilda Velásquez de Guevara (Secretaria), Lic. Moisés Roberto Penado Parada (Delegado Departamental), Erlinda Aracely Jiménez de Quintanilla (Jurídica), Rosa Iveth Amaya Argueta (Educatora). De pie: mismo orden: Miguel Ángel Quinteros (Ordenanza), Nicolás Orlando Canelo Hernández (Médico Forense), Henry Bladimir Hernández Salmerón (Citador), Juan Raúl González Cruz (Vigilante), Marcos Vásquez (Motorista).





Lic. Moisés Roberto Penado Parada  
Delegado Departamental de Morazán<sup>18</sup>

▪ **Protección de los Derechos Humanos**

Delegación/Acciones de protección	Orientaciones legales	Denuncias admitidas	Oficios	Resoluciones iniciales	Resoluciones finales
Morazán	377	111	141	11	43

▪ **Verificación en las instituciones responsables de las personas privadas de libertad**

Delegación	Centros penitenciarios	Centros de resguardo detención administrativa (Bartolinas)	Total
Morazán	19	26	45

▪ **Análisis e Incidencia (de Políticas, Normas y Prácticas del Estado) y actividades de Promoción y educación de Derechos Humanos**

Análisis e Incidencia				Promoción y Educación	
Delegación	Mediaciones	Diligencias de Buenos Oficios	Diligencias de Observación Preventiva	Total de Actividades	Personas Beneficiadas
Morazán	7	6	9	112	7,238

<sup>18</sup> Es el representante del Procurador en el departamento de Morazán encargado de velar por el respeto, promoción y difusión de los derechos humanos y de supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas en su circunscripción territorial. Ubicación: Av. San Francisco, Barrio La Soledad No. 8, San Francisco Gotera, Morazán. Tel. 2654-1498 y telefax 2654-1492. Correo electrónico: morazan@pddh.gob.sv

## Delegación Departamental de La Unión



Sentados de izquierda a derecha: Licenciada Vilma Dolores Ventura Lazo, Trabajadora Social, Licenciada Edith Haydee Rodríguez de Bonilla, jurídica Licenciado Roberto Martínez Díaz (Delegado), María Concepción Reyes de Reyes, secretaria. De pie: de izquierda a derecha: José Alfredo Escobar, Vigilante, José Germán Sosa, Jurídico, Miguel Ángel Benavides Reyes, Motorista, Cesar Benedetto Sánchez, Citador, Oscar Manuel Fermán Canales, ordenanza



Lic. Roberto Martínez Díaz  
Delegado Departamental de La Unión<sup>19</sup>

▪ **Protección de los Derechos Humanos**

Delegación/ Acciones de protección	Orientaciones legales	Denuncias admitidas	Oficios	Resoluciones iniciales	Resoluciones finales	Archivo	Buenos oficios	Medida cautelar
La Unión	358	154	271	13	27	4	7	1

▪ **Verificación en las instituciones responsables de las personas privadas de libertad**

Delegación	Centros penitenciarios	Centros de resguardo detención administrativa (Bartolinas)	Total
La Unión	23	42	65

▪ **Análisis e Incidencia (de Políticas, Normas y Prácticas del Estado) y actividades de Promoción y educación de Derechos Humanos**

Análisis e Incidencia				Promoción y Educación	
Delegación	Mediaciones	Diligencias de Buenos Oficios	Diligencias de Observación Preventiva	Total de Actividades	Personas Beneficiadas
La Unión	7	13	32	196	4,928

<sup>19</sup> Es el representante del Procurador en el departamento de La Unión encargado de velar por el respeto, promoción y difusión de los derechos humanos y de supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas en su circunscripción territorial. Ubicación: Final 2ª. Calle Oriente y 7ª. Av. Sur, Barrio Concepción, La Unión. Tel. 2604-4531 y telefax 2604-1436. Correo electrónico: launion@pddh.gob.sv.



## **VII. ANALISIS SITUACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS A NIVEL LOCAL Y DEPARTAMENTAL**





## VII. ANALISIS SITUACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS A NIVEL LOCAL Y DEPARTAMENTAL

### ▪ Delegación Local de Apopa

En el área de los **derechos civiles** la inseguridad ciudadana por el fenómeno de las pandillas, la delincuencia y los altos niveles de violencia, afectan los derechos a la integridad personal, seguridad personal y libertad personal como consecuencia de maltrato, capturas y persecución policial y militar, en municipios de Apopa y Tonacatepeque.

La Delegación Local ha sostenido reuniones de trabajo Reuniones con Jefe Policial de Región y el Comandante Militar, en las que se abordó la problemática sobre procedimientos de intervención y realizaron propuesta de capacitación al personal policial y militar y de conformación de mesas locales de participación comunitaria.

Como logros obtenidos se encuentra la Capacitación impartida a personal militar, la reducción de frecuencia de la detención bajo la figura de la resistencia, agilización de la asistencia legal de tipo penal, de parte de la Procuraduría General de la República, la mejoría de las relaciones institucionales con la PNC y PGR Apopa, el fomento de la cultura de diálogo en las comunidades, para el abordaje de problemáticas colectivas, como mecanismo alternativo de resolución de conflictos; obteniendo como resultado el incremento del nivel de confianza en la Institución, mediante la solución expedita de dificultades u obstáculos al ejercicio de derechos fundamentales, a través de la interposición de buenos oficios, información de expediente, solicitud de atención de caso, acompañamiento, entre otros.

En el área de **derechos económicos, sociales y culturales**, la principal problemática es la violación del derecho al trabajo por despido ilegal o traslado arbitrario por parte de la Alcaldía Municipal de Apopa, como consecuencia de las pasadas elecciones municipales y la obstaculización del derecho de acceso a la justicia y al debido proceso por parte de la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de la República, ambas oficinas de Apopa.

En esta área la Delegación Local ha sostenido reuniones de mediación, orientadas a la restitución de la estabilidad laboral o pago íntegro de las prestaciones laborales; apertura de expedientes por violación a los derechos descritos; notificación oportuna de resoluciones; solicitud de revisión y anulación de traslados; acompañamiento a trabajadoras afectadas para la interposición de denuncia en otras instancias; reuniones bilaterales con la Fiscalía General de la República y la Procuraduría General de la República, autoridades denunciadas por las relativas dilaciones e irregularidades advertidas; Revisión de expedientes fiscales y administrativos y el envío de Oficios requiriendo atención prioritaria.

A través del trabajo realizado se ha logrado obtener un compromiso de parte de Fiscalía General de la República y la Procuraduría General de la República oficinas de Apopa, de adoptar medidas para el impulso de los procesos y/o diligencias cuestionadas y la revisión de presupuesto municipal para proceder al pago de prestaciones laborales.

La Delegación Local a través del acompañamiento institucional ha propiciado que los casos de despido en el ámbito municipal, se tramiten con mayor agilidad, obteniéndose como resultado, el pago de indemnizaciones entre el 60 y 95%, sumado a la cancelación de salarios caídos y adeudados, así como vacaciones y aguinaldos proporcionales.

En el área de los **derechos humanos de las mujeres**, la violación del derecho al trabajo por despido ilegal o traslado arbitrario por parte de la Alcaldía Municipal de Apopa; la obstaculización del derecho de acceso a la justicia y al debido proceso por parte de la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de la República oficina de Apopa.

Vale destacar que lo establecido anteriormente para el apartado de derechos económicos, sociales y culturales, es aplicable al presente espacio por haber sido la Mujer, el grupo afectado por la violación de los derechos expuestos.

En el caso de la FGR, la afectación se dio en el contexto de la falta de tramitación de denuncia por desaparición de hijo; en la Procuraduría General de la República lo fue por la falta de tramitación de expediente relativo a cuota alimenticia. Las acciones y logros previamente establecidos, se proyectan por igual a este escenario.

En el área de los **derechos de la niñez y adolescencia**, las violaciones más denunciadas han sido malos tratos, detenciones, persecución ilegal y arbitraria y/o registros indebidos, por parte de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, en los municipios de Apopa y Tonacatepeque; la vulneración del derecho a la identidad personal, por la carencia de documentos personales.

La Delegación Local ha implementado la apertura de expedientes por denuncia o de oficio; visita domiciliar para la recolección de elementos de información para la robustez de la denuncia; gestión de atención en salud y salud mental; además se han sostenido reuniones con colectivos, sobre la inconformidad ante el actuar policial/militar en contra de jóvenes, con jefaturas policiales y comandante militar, con directores y directoras de centros escolares en las que se abordó la problemática desde una perspectiva general; Propuesta de capacitación a comunidades, PNC y FAES, en relación a los derechos de la niñez y juventud; Propuesta de conformación de mesas de participación ciudadana en materia de seguridad y las charlas impartidas en materia de derechos de niñez y juventud a padres y madres de familia.

Los logros obtenidos se evidencian en la reorientación de la actuación policial/militar; la eliminación del registro militar a visitantes del Centro de Inserción Social e Intermedio de Tonacatepeque; capacitación a personal militar realizada; compromiso de mejorar la supervisión del personal operativo; la apertura de la comunicación interinstitucional; la coordinación para el diseño de un programa de capacitación permanente para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; coordinación con Distritos Educativos en materia de responsabilidad compartida, sobre el tema del derecho a la identidad y documentación de los niños y niñas.

Se han establecido enlaces con la Junta de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia, sobre la necesidad de acompañar y promocionar la LEPINA en la región, a través de las y los asesores pedagógicos de la zona norte, en aras de concientizar a padres y madres de familia sobre el cumplimiento del derecho a la identidad de niñas y niños.

En el área de los **derechos de las personas privadas de libertad**, las principales problemáticas son las violaciones al derecho a ser reclusos en centros penitenciarios y a ser tratado con dignidad, por hacinamiento, retrasos en traslados, malos tratos, trato cruel, restricción de la visita, falta de atención en salud.

La Delegación Local realiza verificación en bartolinas y ha coordinado de manera inmediata con jefaturas policiales para el cese de violaciones a derechos humanos, para el ingreso discrecional de visitantes, en gestiones de traslado a centros penales y monitoreo de procesos de traslado colectivo a

centros penales; reunión con jefe de región, referente a procedimientos de requisita atentatorios contra derechos humanos, realizados en bartolinas; coordinación con director de SIBASI Norte, para la atención en salud de las y los detenidos en bartolinas y con la encargada del Centro de Atención de Emergencias de Apopa, para la atención en salud de las y los detenidos en bartolinas PNC Apopa; comunicación y enlace con la Unidad Penitencia de Derechos Humanos de la Dirección General de Centros Penales, a efecto de requerir apoyo para el traslado de detenidos en bartolinas.

Los logros obtenidos son los siguientes: Cambio de Jefatura de Subdelegación de Aguilares, en las que se suscitaban los problemas de requisas y maltrato al detenido y detenida; atención en salud periódica semanal, para detenidos/detenidas en bartolinas de región; reducción relativa del nivel de hacinamiento (entiéndase que a pesar de generar traslados y disminuir el hacinamiento, ocurre que la población detenida vuelve a crecer al poco tiempo, generándose de nuevo el problema); permiso de visita una vez por semana; chequeos médicos semanales a iniciativa policial y se presentó la propuesta de incorporación de personal médico de planta para bartolinas.

### ▪ ***Delegación Local de Soyapango***

En el área de **derechos civiles**, las violaciones más denunciadas son al derecho humano a la vida, libertad personal, seguridad personal e integridad personal de adultos, jóvenes y menores de edad; la Delegación Local realizó acciones inmediatas de verificación, entrevistas y envío de oficios a las autoridades señaladas como presuntas responsables, y se iniciaron los expedientes correspondientes.

En el área de los **derechos económicos, sociales y culturales**, en el período que comprende este informe se verificó afectaciones de los derechos humanos al trabajo, educación, salud, por negligencias médicas tanto en el Hospital Nacional General y Psiquiátrico de Soyapango, como en la Unidad de Salud de San Martín y Unidad Médica Lamatepec del ISSS; Se realizaron acciones inmediatas de verificación, entrevistas y envío de oficios a las autoridades señaladas como presuntas responsables, y se iniciaron los expedientes correspondientes.

En materia de **protección ambiental**, se verificaron las situaciones ambientales en la zona de Ilopango y Soyapango, así como situaciones de contaminación ambiental y las situaciones de riesgo en diferentes comunidades como Lotificación el Sauce y el Limón en Soyapango; se inició expediente por contaminación ambiental y se realizaron las gestiones pertinentes, en la municipalidad de Soyapango, PNC y Unidad de Salud correspondiente.

En el área de **derechos humanos de las mujeres**, Se ha dado seguimiento a problemáticas denunciadas por afectaciones a derechos de la mujer, sobre todo en Cárcel de Mujeres y el Centro de Inserción Femenino de Ilopango; se realizaron acciones inmediatas de verificación, entrevistas y envío de oficios a las autoridades señaladas como presuntas responsables y se iniciaron los expedientes correspondientes.

En el área de los **derechos de la niñez y adolescencia**, se verificaron problemáticas que afectan a menores de edad, sobre todo por malos tratos de maestros en diferentes centros escolares, así como de menores en conflicto con la ley; por lo que se realizaron acciones inmediatas de verificación, entrevistas y envío de oficios a las autoridades señaladas como presuntas responsables, y se iniciaron los expedientes correspondientes

Respecto a los **derechos de las personas privadas de libertad**, se realizó verificaciones en Bartolinas Policiales, Cárcel de Mujeres y Centro de Inserción Femenino de Ilopango; de las cuales se realizaron acciones inmediatas de verificación, entrevistas y envío de oficios a las autoridades señaladas como presuntas responsables e inició de los expedientes correspondientes.

### ▪ **Delegación Local de Metapán**

En el área de los **derechos políticos**, las Alcaldías Municipales de Metapán y Masahuat tienden a discriminar por razones ideológicas partidarias. (Favoreciendo y priorizando en proyectos municipales a sus simpatizantes); los casos que han sido denunciados ante ésta Delegación Local se tramitaron por la vía de Buenos Oficios directamente con los Alcaldes Municipales.

En el área de los **derechos civiles**, en éste periodo se recibieron denuncias de acoso por parte de agentes de la Sección de Investigación de la Subdelegación Policial de Metapán, en el sentido de obligar a declarar como testigos claves; intimidaciones por parte de agentes de la PNC y elementos de la Fuerza Armada al momento de efectuar registros preventivos y se recibieron denuncias reiteradas por malos tratos a los usuarios y las usuarias por Empleados titulares de las Unidades de Derechos Reales y Personales y Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República.

Se iniciaron los expedientes y se han remitido los casos a la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil; a las instancias disciplinarias y a la Procuraduría General de la República, en los cuales se han realizado las diligencias correspondientes.

En el área de los **derechos económicos, sociales y culturales**, se han conocido sobre traslados arbitrarios de todo el personal de la Policía Nacional Civil de las Subdelegaciones de Metapán y Frontera Anguiatú y de los Municipios de Masahuat, Santa Rosa Guachipilín y Texistepeque; además, sobre casos de familias ocupantes de inmuebles privados y públicos, por falta de una vivienda digna y sobre vulneración de derechos de la niñez y adolescencia, en cuanto a los delitos relativos a la libertad sexual por instancia Judicial; además, se evidencia dilación en el otorgamiento de historial laboral por autoridades correspondientes y cobros excesivos en el servicio de agua potable.

Se han realizado diferentes diligencias, de inspecciones *in situ*, mediaciones y se han señalado a las instancias correspondientes; además, se iniciaron los expedientes y se realizaron diligencias a fin de evitar violaciones a los derechos laborales y familiares.

En el área del **derecho a la protección del medioambiente**, se han verificado los riesgos de las Comunidades en las riveras de la Lagunita de Güija y las Colonias urbanas en las riberas del río San José, que aún persisten y la mala calidad del recurso hídrico, el suministro y cobros excesivos del servicio.

Ante las gestiones de ésta Delegación Local, se juramentó el Comité Municipal de Protección Civil, se ha dado acompañamiento y asesoría en la formulación de Planes exigidos por la Dirección General del COEN y se iniciaron esfuerzos en conjunto con el Consejo Consultivo de contraloría social para los derechos de las mujeres del Municipio de Metapán., para activar las instancias correspondientes y buscar una respuesta.

En materia de **derechos humanos de las mujeres**, se presentaron casos de discriminación y malos tratos hacia la mujer por parte de funcionarios y empleados públicos del Área Judicial y Procuraduría General de la República; Ante la falta de reconocimiento de los derechos por parte de las mujeres, no hay cultura de denuncia de las violaciones que se comenten en su contra y por parte de la Directora del Instituto Nacional Benjamín Estrada Valiente de la ciudad de Metapán, se tuvo conocimiento sobre la existencia de casos de violencia de género.

Se han iniciado los respectivos expedientes y se han remitido a las instancias pertinentes; a la vez se brindó acompañamiento y asesoría a los Consejos Consultivos de Contraloría Social para los Derechos de las Mujeres, creados por ISDEMU en Metapán, Santa Rosa Guachipilín y Masahuat; se inició

trabajo de educación en derechos humanos, LEPINA y Violencia de Género con los y las docentes del Instituto Nacional Benjamín Estrada Valiente de la ciudad de Metapán.

Los casos de violencia contra la mujer que son denunciados ante ésta Procuraduría son remitidos a ISDEMU y/o PGR. La Municipalidad creó la Unidad Municipal de Género, sin los recursos económicos y de personal idóneo. Ante lo cual se brinda orientación y asesoría sobre casos que son denunciados.

También, en el área de **derechos de la niñez y adolescencia**, se presentan casos de dilación en los trámites administrativos en los procesos de cuotas alimenticias por parte de la Procuraduría General de la República y Fiscalía General de la República; sobre delitos de agresiones sexuales en contra de Niños, Niñas y Adolescentes, que son invisibilizados por la falta de denuncia de las víctimas y sobre la vulneración de derechos de la niñez y adolescencia, en cuanto a los delitos relativos a la libertad sexual por instancia Judicial; además se ha tenido conocimiento sobre casos de maltrato de niños y niñas por parte de sus familiares y/o representantes.

Como acciones inmediatas la Delegación Local ha iniciado expedientes y se les ha dado seguimiento realizando acciones inmediatas, a fin de que el derecho sea restituido. En el caso de las violaciones de derechos de los niños y niñas han sido remitidos a la Junta de Protección o a la Procuraduría General de la República.

En materia de los **derechos de las personas privadas de libertad**, se ha constatado en el Centro Penal de Metapán que han realizado las Mesas de la Esperanza, en donde los representantes de los internos exponen su quejas e inquietudes, persistiendo los problemas en cuanto a la falta de propuestas, hacinamiento y alimentación entre otros; además, se mantiene la queja que la bartolina policial no reúne las condiciones mínimas para albergar a los detenidos y se mantienen un constante hacinamiento de personas procesadas en la etapa de instrucción.

Ante el hacinamiento de las Bartolinas, se realizaron gestiones de buenos oficios con autoridades locales para efectos de ser trasladados los procesados a los Centros Penales; se han realizado monitoreos permanentes en Bartolinas policiales para verificar las condiciones de los detenidos, realizando diligencias de buenos oficios ante la Unidad de Salud y el Jefe de la Subdelegación Policial.

Esta Delegación Local, ha dado seguimiento a las Mesas de la Esperanza, logrando en coordinación con la Dirección del Centro Penal de Metapán, que dos veces por semana llegara un equipo itinerante para que realizara estudio de las propuestas.

En materia de **derecho de personas viviendo con Vih/Sida**, la delegación local da seguimiento al Proyecto “Empoderamiento de Adolescentes y Jóvenes en el contexto del VIH para la promoción y Defensa de sus Derechos Sexuales y Reproductivos, con énfasis en la equidad de género”, financiado por UNFPA/ONUSIDA, por los y las miembros de la Unidad Juvenil de esta Delegación.

Finalmente, se ha constatado que en el área de los **derechos humanos de los migrantes**, algunas personas son violentadas en sus derechos como migrantes al momento de pasar por la Frontera Anguiatú y la falta de levantamiento de oficio por parte de Migración de restricciones migratorias establecidas en procesos y en algunos casos por homónimo, que no les permite a las personas salir del país.

La Delegación Local ha realizado diligencias de buenos oficios, para solucionar la problemática planteada y se han iniciado expedientes y se han realizado diligencias inmediatas.



### ▪ **Delegación Local de Santa Rosa de Lima**

En materia de **derechos civiles**, se observó la afectación al derecho a la vida por ejecución arbitraria por parte de agentes de la Policía Nacional Civil de la Subdelegación de Anamorós, y al derecho de reunión por restricciones ilegales o Arbitrarias a la libre reunión de grupos sociales para la defensa de sus derechos e intereses; a la libertad personal por detención arbitraria a la integridad personal, afectación al derecho a un debido proceso judicial y administrativo y al derecho de petición.

La delegación local inició los expedientes correspondientes, a los cuales se le han realizado las diligencias pertinentes.

En materia de **derechos económicos, sociales y culturales**, se han presentado violaciones al trabajo por despedidos por parte de la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Lima; desalojo y decomiso de Mercancía a vendedores informales en su mayoría de nacionalidad nicaragüense, por parte de Policía Municipal de Santa Rosa de Lima; obstrucción de salidas o accesibilidad a viviendas y centros comerciales ubicados en la 1ª Avenida Norte Barrio el Calvario de Santa Rosa de Lima; Tolerancia Estatal ante condiciones indignas de trabajo en perjuicio de agentes de la Policía Nacional Civil, que prestan seguridad en el sector conocido como La chatarrera.

Además, al derecho a la vivienda y propiedad en perjuicio de habitantes que tienen instalar sus viviendas en un extremo de la Calle los Cubos, salida a Cantón Pasquinita, sector conocido como Caserío la Ceiba, a quienes el Arquitecto Edgar Odir Torres Araniva, Jefe de Registro y Control Tributario de la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Lima, sin ningún procedimiento previo notifico a los habitantes de referido sector que les daba plazo de 72 horas para que desalojar las parcelas donde tienen instaladas sus viviendas, plazo que posteriormente lo redujo a 24 horas.

Afectación al derecho a la vivienda y a la propiedad por parte de la Empresa TERRASALROMERO, como responsable de la construcción de la Carretera Longitudinal del Norte Tramos Lislique Anamorós, Corinto Lislique, por Delegación de (FOMILENIO), en perjuicio de habitantes de los cantones Las Huertas, Cedros, Jurisdicción de Anamorós, Agua Fría, Cantón Las Pilas caserío los Ruíces, Cantón Higueras Jurisdicción de Lislique; además, se verifico el paro de labores y cierre de Frontera El Amatillo, por parte del Sindicato de Empleados del Ministerio de Hacienda.

Derecho a la educación y seguridad por suspensión de clases en el Centro Escolar del Cantón Pasaquinita J/ de Santa Rosa de Lima, por parte del personal docente, originada dicha actitud porque el personal era víctima de extorsiones y amenazas de atentar en contra de sus vida y denegación Arbitraria de Matricula en el Centro Escolar Barrio Las Delicias de Santa Rosa de Lima.

En todos los casos anteriormente descritos la Delegación Local realizó las acciones pertinentes, el inicio de los expedientes y las diligencias de investigación correspondientes.

En el área del **derecho a la protección del medioambiente**, se presentaron problemas de la Contaminación del río San Sebastián de Santa Rosa de Lima, como consecuencia de la explotación de las minas de San Sebastián, y permanencia en el sector de la explotación, de dos contenedores que en su interior al parecer se encontraban químicos. Se inició el expediente respectivo, la activación de las instancias correspondientes y la práctica de diligencias necesarias.

En el área de los **derechos de las mujeres**, se presentan violaciones al derecho al trabajo sin discriminación, por indiferencia en la protección de los derechos humanos de las mujeres, la delegación local ha activado las instancias que corresponden, el inició de expedientes y las diligencias necesarias en los casos planteados.

En el área de los **derechos de la niñez y adolescencia**, se constata la violación al derecho al nombre y a la identidad por restricciones para la inscripción en el Registro del Estado Familiar; a recibir dirección y cuidado de los padres, salvo cuando sea para la protección de su interés superior por separación de los niños, niñas de sus padres por considerar que estos no son actos para el cuidado personal de su hijo, sin haber agotado otras alternativas familiares; y derecho de recibir pensión alimenticia. En los cuales se realizó la respectiva.

▪ **Delegación Departamental de Sonsonate**

En el área de los **derechos civiles**, se ha observado de manera reiterada el hacinamiento en las bartolinas de ese departamento de Sonsonate, así como en los centros penales. La Delegación ha dado seguimiento a la situación a efecto de proponer una posible solución a dicha problemática; se ha enviado requerimientos a los diferentes jueces, al jefe de la Delegación de la Policía Nacional Civil y al Directos General de Centros Penales.

En el área de los **derechos económicos, sociales y culturales**, se ha evidenciado la situación de vendedores ambulantes en el Municipio de Sonsonate que fueron asignados al lugar llamado Mega Plaza. La Delegación ya emitió resolución con recomendaciones para Alcalde y este no acató las mismas, se ha dado seguimiento y realizado las diligencias pertinentes.

En el área del **derecho a la protección del medioambiente**, la Delegación tuvo conocimiento de la construcción de la Represa Hidroeléctrica en Juayua; el botadero a cielo abierto en lugar conocido como Salinas de Ayacachapa. Se ha mantenido un monitoreo a la situación pero la construcción de la represa en jurisdicción de Juayua, continua con supuesto aval del MARN; el botadero a cielo abierto recibe desechos de diferentes municipios que pagan por botar su basura en dicho lugar, no obstante MARN tiene conocimiento y no toma acciones al respecto.

En el área de los **derechos de la niñez y adolescencia**, se evidencia la persistencia de la explotación infantil; niños en los semáforos, niño oliendo pega, pidiendo dinero. La Delegación ha realizado requerimientos a las instituciones que tienen que ver con el tema, sin que a la fecha exista solución real alguna.

En el área de las **personas privadas de libertad**, la delegación departamental realiza monitoreo y se ha logrado constatar que el hacinamiento tanto en las bartolinas policiales como en los centros penales del departamento, es una violación reiterada. Se ha requerido a jueces enviar reos a quienes se les ha decretado instrucción con detención a los diferentes centros penales.

En materia de **derechos de personas viviendo con Vih/Sida**, la Delegación evidenció que una persona privada de libertad viviendo con Vih/Sida recibe un tratamiento no completo. Para el caso la Delegación ha tenido una verificación permanente sobre los mismos y se tiene información de parte del centro penal de la situación de salud de la persona con dicho padecimiento.

▪ **Delegación Departamental de La Libertad**

En el área de los **derechos civiles**, se ha observado de manera reiterada que el derecho a la integridad personal, la libertad personal, la integridad personal, son los principales problemas en el departamento. La delegación ha realizado recomendaciones a las autoridades del departamento a fin de tomar medidas al respecto, en reiteradas ocasiones.

En el área de los **derechos económicos, sociales y culturales**, se han evidenciado casos de desalojo dado la ejecución de proyectos de modernización del departamento y en otros casos por el problema de vivienda. La delegación ha mediado entre las partes alcanzándose logros favorables, así como acompañamiento de las comunidades en las diferentes actividades desarrolladas.

Sobre el área del **derecho a la protección del medioambiente**, la delegación tuvo conocimiento que existen una serie de zonas vulnerables en el departamento, aunque después de los últimos eventos de alguna manera las medidas tomadas han dado algunos avances, excepto en el caso de Baterías Record. Las acciones más relevantes que realizó la delegación fueron destinadas a atender el caso de Baterías Record, desde la asistencia a las víctimas de la contaminación, acompañamiento a las actividades de las diferentes instancias que trabajan en función de resolver los problemas de la población afectada.

Con respecto al área de los **derechos humanos de las mujeres**, se ha identificado que el maltrato físico y verbal de los elementos de la Policía Nacional Civil realizados tanto en allanamientos, como en detenciones; otra vulneración identificada es la discriminación de las mujeres en las instituciones públicas. La delegación ha realizado una serie de recomendaciones en las resoluciones emitidas ya sean iniciales, finales o de buenos oficios.

En el área de los **derechos de la niñez y adolescencia**, se evidencia la reiteración de violaciones de maltrato físico y verbal por parte de agentes de la Policía Nacional Civil tanto en allanamientos y detenciones, lo que es más grave es que se persigue a jóvenes solo por el simple hecho de serlo. La delegación ha realizado una serie de recomendaciones en las resoluciones emitidas ya sean iniciales, finales y de buenos oficios.

En el área de las **personas privadas de libertad**, el departamento de La Libertad, no dista mucho de la realidad que acaece a nivel del territorio nacional; en las bartolinas de la Policía Nacional Civil se mantienen las condiciones inhumanas provocadas por el hacinamiento, al igual que en el Centro Penal de Quezaltepeque, así también se han dado muchos casos de abuso contra las personas, sobre todo en el momento de la captura. La delegación ha hecho una serie de recomendaciones a través de las resoluciones iniciales, finales o de buenos oficios, de igual manera se ha informado, para el caso que refiere a la Policía Nacional Civil, al inspector institucional; y para el caso del Centro Penal, se ha realizado verificaciones *in situ* para ver las condiciones de los internos las cuales se denota un mejoramiento paulatino, la problemática disminuyó con el retiro de la Fuerza Armada como parte de la seguridad del centro.

En materia de **derechos de personas víctimas del conflicto armado**, se ha tenido conocimiento de casos esporádicos, sobre todo de personas que aspiran a inscribirse para obtener beneficios legales. Como mecanismos de acción la delegación ha realizado contacto con autoridades de FOPROLID para que se les dé la atención requerida y de ser posible se les ayude a realizar su trámite para su incorporación al referido fondo.

#### ▪ ***Delegación Departamental de La Paz***

En el área de **derechos civiles**, la problemática más evidente la constituyen las violaciones que realizan personal de la Policía Nacional Civil, referidas a los derechos a la libertad e integridad personal, siendo la institución mayormente denunciada, y los derechos cuya vulneración es más denunciada; al respecto se han realizado las acciones de tutela establecidas para ésta Procuraduría, iniciándose los expedientes respectivos; sin embargo, la gran limitante existente, es que pese a las acciones realizadas, dentro de las que se encuentran resoluciones de responsabilidad, procesos disciplinarios condenatorios, existe una arraigada cultura de abuso de poder en la Institución Policial, que debe ser tratada estructuralmente.

Es importante mencionar, que otra de las grandes quejas respecto al cumplimiento de los derechos humanos de los habitantes del Departamento de La Paz, por parte de la corporación policial, la constituyen las deplorables e inhumanas condiciones en las que se encuentran las bartolinas, en las que ante el colapso del sistema penitenciario nacional, la policía se ha visto obligada a asumir una función-resguardo de personas en detención- para la que no cuenta con recursos humanos, financieros y materiales suficientes, lo que se ha transformado en prácticas sistemáticas que restringen, limitan y han resultado más lesivas para los privados de libertad, que las que abundantemente han sido evidenciadas por esta Procuraduría, en el sistema penitenciario.

Respecto a los **derechos económicos, sociales y culturales**, las quejas comunes existentes han sido las referidas a actos atentatorios a la estabilidad laboral, por parte de algunas Municipalidades e incluso instituciones públicas que atentan contra los servidores públicos obviando sus derechos; de igual forma han existido quejas sobre trámites administrativos en el ISTA, señalando limitaciones para que las personas puedan disponer de su bienes, comenzando con retrasos en la entrega de los documentos que amparen la propiedad. Como en el resto de casos, se han iniciado los expedientes correspondientes, y en su gran mayoría, este proceso, ha ayudado a solventar las problemáticas planteadas.

Respecto del **derecho a la protección del medioambiente**, el caso más relevante lo constituye el identificado con la referencia LP-0075-2013, referida a catorce toneladas de tóxicos -entre ellas el toxafeno- ubicadas en el cantón Loma de Gallo, del municipio de San Luís Talpa, de este Departamento. Refieren los habitantes de la zona, que los mismos cuentan con décadas en la zona, que aunque actualmente se encuentran embodegados, las emanaciones de los mismos, y los daños que la exposición a la que estuvieron sometidos, ha provocado problemas en la salud de los habitantes. Este expediente se ha iniciado en el mes de mayo, por lo que hasta el momento se han activado las instancias correspondientes, dentro de las que se encuentra el MARN y la FGR, para que realice las acciones necesarias a efectos de prevenir mayores afectaciones a los pobladores.

En el área de **derechos humanos de las mujeres**, si bien la problemática de la violencia institucional hacia las mujeres por parte de elementos de la Policía Nacional Civil continúa siendo representativa en el departamento, merece importante señalar el expediente LP 0099 2013 iniciado contra funcionarias judiciales de Departamento, ante la denuncia realizada por ISDEMU, en el que se menciona la limitación de acceso a medidas de protección a las víctimas de violencia contra la mujer por parte de las mencionadas funcionarias; en ambas situaciones se han iniciado los procesos de investigación correspondiente.

De forma complementaria, también es importante señalar que debido a la relevancia de este grupo poblacional, la Delegación Departamental en un esfuerzo interinstitucional junto a ISDEMU, PGR, Asamblea Legislativa, otras instituciones públicas, y ONG's como Las Dignas, Las Mélidas e Intervida, se conmemoró durante el mes de Marzo, el día internacional de la mujer, actividad que contó con desfiles, exposiciones, danzas, y un foro en el que se discutió la situación de las mujeres en la actualidad.

Finalmente en el área de **derechos de la niñez y adolescencia**, al igual que las mujeres, la violencia por parte de la Policía Nacional Civil hacia menores de edad, también reporta estadísticas significativas para esta Delegación. Dentro de las innovaciones al trámite usual en este tipo de casos, se encuentra la activación de la recién fundada Junta de Protección para la Niñez y Adolescencia con sede en San Vicente, cuyo trabajo también ha tenido un impacto positivo a nivel local, al posicionarse como otra instancia que vela por el respeto de los derechos de la niñez y adolescencia.

Un caso particular lo ocupa el expediente LP 0055 2013, en el que se señala que el Centro Escolar Anastasio Aquino, de este Departamento, contaba con una infraestructura inconclusa, lo que ponía

en peligro a la comunidad educativa del mismo, conformada por niñas, niños y adolescentes, y que afectaba su proceso educativo, al estarse brindando en instalaciones inadecuadas; en dicho caso se ha activado al Ministro de Educación, quién se comprometió a verificar la pronta solución del caso.

Durante el período dos casos son los más relevantes en **materia de atención de crisis**, la primera, ocurrida al inicio del corriente año, referida a la protesta realizada por excombatientes en la autopista que conduce al Aeropuerto Internacional, ubicado en Comalapa, hechos en los que hubo un enfrentamiento por parte de los manifestantes y los elementos de la Policía Nacional Civil, la Procuraduría inició la investigación correspondiente, con la referencia LP-0003-2013, a fin de que con los elementos verificados, pudiera establecerse si hubo en ese caso, uso excesivo de la fuerza.

El segundo de los expedientes, lo ocupa el LP-0017-2013, referido a problemas respecto al reconocimiento de una Asociación Comunal, conformada por vendedoras y vendedores del mercado municipal de Olocuilta y la Alcaldía Municipal de dicha localidad, entre otros conflictos existente entre dichos actores; dentro de las acciones realizadas se encuentran varias cesiones de mediación, en las que finalmente se logró el establecimiento de un espacio de diálogo entre las partes, que ha servido para dar continuidad a la discusión de los demás problemas existentes.

#### ▪ ***Delegación Departamental de San Vicente***

En el área de **derechos civiles**, se identifican como principales problemas sigue siendo los señalamientos a la Policía Nacional Civil los que prevalecen señalándose violaciones a la integridad libertad y seguridad personal teniendo un señalamiento particular sobre tortura en el municipio de Tecoluca. La Delegación ha dado inicio a los expedientes correspondientes, se han solicitado los informes a los presuntos responsables y se está dando seguimiento a los casos individualizados.

En el área de **derechos económicos, sociales y culturales**, se tuvo atención particular en casos de estabilidad laboral en los municipios donde hubo cambios de gobierno. Se abrieron los expedientes y se realizaron las intervenciones acordes con el mandato.

Respecto a los **derechos de las mujeres**, se ha dado la atención especializada a los casos de violencia en contra de mujeres y se ha trabajado en la promoción de ellas y se ha abordado la temática de la no discriminación. Se ha dado el trámite a los casos y la capacitación en los momentos oportunos.

En el área de **derechos de la niñez y adolescencia**, se ha trabajado de forma conjunta con la Junta de Protección de esta Departamento a efecto de brindar protección integral a la niñez y adolescencia de acuerdo con lo que establece la LEPINA. La delegación ha dado seguimiento a la casticista y se ha dado capacitación a diversos sectores sobre la temática

En el área de los **derechos de las personas privadas de libertad**, se ha dado seguimiento a los diversos casos y situaciones que se presentan en la Penitenciaría y en la Bartolinas de este municipio brindando respuesta a cada una de las situaciones que se plantean. La delegación mantiene una atención situacional y casuística a los privados de libertad.

Finalmente en el área de **derecho de las personas viviendo con Vih/Sida**, la delegación mantiene atención a personas viviendo con VIH desde el ámbito preventivo y casuístico. Se forma parte de la Red departamental de VIH a efecto de mantener actualizada la información y tener un canal de atención directa cuando se presenten los casos concretos.



### ■ *Delegación Departamental de Cabañas*

En el área de **derechos civiles**, se ha observado un clima de temor e incertidumbre que impide a la gente ejercer plenamente sus derechos y libertades y cuya causa viene dada por la generalización de conductas violentas y prácticas delictivas. Las políticas implementadas por el Gobierno deben de ser más efectivas para combatir esta problemática.

En cuanto a los **derechos económicos, sociales y culturales**, se han visto más el acceso al trabajo, problema de vivienda en el sector rural, acceso a agua de calidad, a la educación superior, a la salud de primer nivel y a acceso a energía eléctrica, entre otros. El Estado juntamente con las Alcaldías debe de implementar políticas públicas encaminadas a mejorar la calidad de vida de los y las salvadoreñas, principalmente las del interior del país.

Con respecto a los **derechos a la protección del medioambiente**, la delegación departamental ha identificado a la explotación minera, la tala indiscriminada de árboles, la destrucción de mantos acuíferos y bosques a consecuencia de la construcción de la carretera Longitudinal del Norte y la contaminación de Río Titihuapa. Se valora que el Estado salvadoreño debe de acercarse más a las comunidades con el objeto de dar a conocer políticas públicas que no puedan dañar el medio ambiente.

Sobre los **derechos humanos de las mujeres**, la delegación departamental recibió varias denuncias sobre la discriminación laboral en el sector público. Se debe de implementar jornadas de capacitaciones a fin de hacer conciencia sobre la discriminación hacia las mujeres y erradicarlo.

En el área de los **derechos de la niñez y adolescencia**, los principales obstáculos son el acceso a la educación, a la salud y la explotación infantil (laboral y sexual). El Estado salvadoreño debe adoptar políticas más efectivas para combatir la explotación de la niñez, debe crear políticas de acceso a la educación en lugares donde solo primaria existe, en la zona rural y darle cumplimiento a lo que establece la LEPINA.

Es preocupante la situación de los **derechos de las personas privadas de libertad**, se experimenta hacinamiento, infraestructura inadecuada, mala alimentación y falta de agua potable en el Centro Penal de Sensuntepeque, hacinamiento en las Bartolinas de la Policía Nacional Civil. La delegación ha recomendado al gobierno central a través de la Dirección General de Centros Penales y el ISNA que deben crear condiciones mínimas para solucionar tales deficiencias.

En el área de los **derechos de las personas viviendo con Vih/Sida**, la delegación ha identificado a personas privadas de libertad viviendo con Vih/Sida. Como grupo vulnerable, la Dirección General de Centros Penales debe de realizar acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad con VIH.

Finalmente, en el área de los **derechos de las personas migrantes**, la delegación ha identificado la falta de información o campañas para prevenir la migración hacia los Estados Unidos, donde se indiquen los riesgos en el camino. El Estado, debe de implementar campañas de información sobre los riesgos que corren las personas que viajan hacia los Estados Unidos.

### ■ *Delegación Departamental de Usulután*

Respecto de los **derechos civiles**, en este departamento, el derecho a la integridad personal, la libertad personal, la seguridad personal entre otros continúan siendo aquellos derechos más demandados de

atención y garantía por parte de las autoridades. Existe un alto índice de delincuencia, con resultados de muertes violentas, extorsiones, entre otros. Así también, la denuncia reiterada por procedimientos policiales que atentan contra el derecho a la integridad personal, situación en la que también se incrementa, con la participación de la fuerza armada en tareas de seguridad pública.

La delegación realiza acciones de verificaciones, investigaciones y recomendaciones para las autoridades responsables de garantizar estos derechos a la población del departamento de Usulután.

En el área de **derechos económicos, sociales y culturales**, el acceso a la propiedad y a la vivienda siguen siendo una de la principales problemáticas del departamento, ante ello las amenazas de desalojos que muchas familias deben afrontar por la falta de garantía del inmueble en el que residen. Muchos de los casos, provienen de asentamientos humanos, que a consecuencia del pasado conflicto armado, fueron formados, algunos se vieron beneficiados con adjudicación del inmueble por parte del ISTA, sin embargo otros procesos de transferencia no avanzaron, o nunca se iniciaron, por tanto hoy en día, cada vez es más el colectivo de personas que afronta problemas de desalojo por esa causa.

La delegación inició investigación, desarrollando acciones de mediación y gestiones que permitieron la participación de las distintas instituciones que pueden brindar una solución a la problemática.

En el área del **derecho a la protección del medio ambiente**, el departamento de Usulután, es uno de los cuales se ve muy afectado durante la época de invierno, donde la población se encuentra vulnerable durante las lluvias, afrontando inundaciones, derrumbes, desborde de ríos, entre otros, ello obliga a la población a abandonar sus viviendas, pérdida de cultivos, etc.

La delegación ha emitido informes y recomendaciones a instituciones responsables de la garantía de los derechos eventualmente afectados a consecuencia de estas problemáticas. En la actualidad se ha instalado una Mesa de Diálogo con instituciones como CEL, ISTA, Alcaldía de Jiquilisco, Organizaciones No Gubernamentales, y organizaciones de pobladores de la zona, con el fin de dar seguimiento a los planes de prevención en las situaciones de riesgo que se presentan. Cabe mencionar también, que ya se cuenta con un edificio en la zona diseñado para el funcionamiento de Albergue, cuyas instalaciones ya fueron verificadas por las instituciones y organizaciones que participan en la mesa de diálogo.

Respecto de los **derechos de las mujeres**, la violencia contra la mujer sigue siendo una problemática del departamento, ya que existe un índice alto de adolescentes embarazadas, madres solteras que deben iniciar trámites para demandar a los padres de sus hijos, procedimientos tanto administrativos como judiciales que en algunos casos resultan ineficaces para la solución de la condición de pobreza en que viven muchas mujeres y sus hijos, de modo que se vuelve necesarias políticas públicas que busquen prevenir los embarazos en adolescentes y erradicar la irresponsabilidad de los padres, así como el acceso a empleos o medios para obtener ingresos económicos que permita cubrir las necesidades básicas del hogar.

La delegación trabaja estos casos a través de verificaciones, investigación, y recomendaciones como acciones inmediatas para la atención de la problemática. Además realizan jornadas de sensibilización con organizaciones civiles sobre el tema.

En el área de **derechos de la niñez y adolescencia**, existen situaciones que visualizan la afectación de los derechos de la niñez, tal como la falta de documentos de identidad, los servicios de salud inaccesible para algunas zonas, la participación real y efectiva del ejercicio de sus derechos; como también, la inseguridad, cada vez más son los jóvenes víctimas de delitos, implicados en hechos delictivos, que evidencia la afectación de derechos fundamentales.

La delegación trabaja en la difusión de los derechos de la niñez y adolescencia, concretamente en centros escolares, comunidades y en instituciones públicas que tienen corresponsabilidad de garantizar estos derechos

Respecto a los **derechos de las personas privadas de libertad**, la delegación ha identificado que existe un marcado hacinamiento en bartolinas policiales, con el agravante que no se cuentan con mecanismos institucionales para garantizar derechos de privados de libertad fuera del término de inquirir; como cambio de ropa, alimentación, asistencia médica, visita familiar, ingreso de objetos para aseo personal, entre otros.

Por otra parte, en los centros penitenciarios, cada vez es más el número de internos que se quejan no solo del hacinamiento, sino la falta de acceso a los servicios médicos oportunos, ya que algunos internos, con tratamientos médicos por enfermedades crónicas se les hace difícil su traslado a un centro hospitalario para el control de la misma, o cuando se trata de un traslado de emergencia.

Desde la delegación se han realizado gestiones de manera individualizada, y por lo recurrente e indeterminado de la problemática se consideró necesario realizar gestiones con SIBASI, Policía Nacional Civil para buscar alternativas que permitan el acceso a estos derechos. Realizándose en este periodo una campaña de salud la cual se realizará una cada mes.

Para el caso de los privados de libertad de centros penales, se han realizados gestiones directas, con recomendaciones concretas para que los internos tengan acceso a los tratamientos médicos, algunos casos son atendidos oportunamente, sin embargo existen otros en que la excusa reiterada continúa siendo la falta de transporte, un problema que deberían brindarle más atención por parte de las autoridades penitenciarias.

Finalmente, a los **derechos de las personas viviendo con Vih/Sida**, se destaca la discriminación por el desconocimiento que este sector sufre de la sociedad civil. Sin embargo, en la actualidad reciben una atención adecuada en las en la Unidad de VIH del Hospital Nacional San Pedro de Usulután, donde cuentan con un médico neumólogo internista, y otros profesionales idóneos para su atención. Durante verificaciones se ha entrevistado al grupo de personas que integran el programa y manifiestan su satisfacción con la atención que se les brinda; sin embargo, esta institución mantiene un monitoreo constante en el área.

#### ▪ ***Delegación Departamental de San Miguel***

En el área de los **derechos civiles**, la delegación ha identificado que se Continúa el hacinamiento e insalubridad en los bartolinas de la Policía Nacional Civil de la ciudad de San Miguel; por lo que se mantiene un constante monitoreo y emisión de recomendaciones para superar la problemática además se sostienen reuniones con autoridades policiales.

Con respecto al área de los **derechos económicos, sociales y culturales**, se visualizó la poca atención del gobierno central a los afectados por la sequía; además, sindicalistas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y del Hospital Nacional, se quejan constantemente de mala atención a los usuarios y afectación a sus derechos como sindicalistas.

La delegación como mecanismos de protección para la primera problemática planteada promovió reunión en coordinación con la Procuraduría Adjunta de Derechos Económicos, Sociales y Culturales con diputados y afectados; además de utilizar los acompañamientos, las mediaciones, y la apertura de expedientes.

En el área del **derecho a la protección del medio ambiente**, representantes de distintas colonias, barrios y cantones del municipio de San Miguel se quejan de la instalación de antenas para celular en

sus comunidades sin que se les consulte previamente. Se realizaron acompañamientos, mediaciones y apertura de expedientes.

En el área de los **derechos humanos de las mujeres**, continúan las quejas por parte de muchas mujeres que no se les da atención debida en sus demandas por alimentos. La delegación activa los mecanismos de protección a través de la apertura de expedientes, diligencias y buenos oficios para la atención de la problemática planteada.

Respecto de los **derechos de la niñez y adolescencia**, el resguardo municipal no reúne las condiciones para albergar a niños y niñas, especialmente a las adolescentes. La delegación mantiene un constante monitoreo y dicta recomendaciones para mejorar las condiciones actuales.

En el área de **derechos de las personas privadas de libertad**, los internos del centro penal de ciudad Barrios y de San Miguel, que tienen padecimientos de salud, se quejaron de no recibir la debida atención médica adecuada. La delegación realizó apertura de expedientes, verificaciones constantes de seguimiento y dicta recomendaciones que coadyuven a manejar de manera efectiva la problemática.

Con respecto al área de los **derechos de las personas viviendo con Vih/Sida**, se denuncia la falta de medicamentos en la red de salud pública en la zona oriental. Se inició el respectivo expediente de investigación y se emitieron recomendaciones necesarias para la atención inmediata.

#### ▪ ***Delegación Departamental de Morazán***

En el área de **derechos políticos**, durante este período se mantiene vigente la inmadurez política por parte algunos alcaldes, ejerciendo actos arbitrarios contra empleados que no están de acuerdo con su postura o ideología política, ejemplo de ello es el despido por parte del Alcalde de Jocoaitique, departamento de Morazán, contra empleados y empleadas, lo que evidencia que se mantiene una polarización desde las pasadas elecciones.

La delegación ha iniciado con la denuncias y se han activado las instancias a fin de evitar vulneraciones a derechos humanos

En el área de **derechos civiles**, el derecho más vulnerado es la integridad personal por malos tratos y la libertad personal, cometidos por agentes de la Policía Nacional Civil. La poca efectividad para proteger el derecho a la seguridad de las personas, genera desconfianza para con las autoridades policiales.

La delegación ha impartido capacitaciones sobre los derechos civiles a funcionarios y autoridades del Estado; asimismo, se han admitido denuncias por abusos de autoridad y violaciones a derechos civiles, lo que ha permitido que se activen las instancias para investigar los hechos de acuerdo a sus competencias con el fin de deducir responsabilidades.

En el área de **derechos económicos, sociales y culturales**, sigue siendo un problema el abastecimiento de agua en algunas comunidades, no teniendo acceso a dicho servicio; la no suficiencia de algunos medicamentos en las Unidades de Salud, el desempleo en la zona, genera poco desarrollo e incremento en la pobreza. La delegación ha mantenido reuniones con la Comisión de Protección Civil en donde se le da seguimiento a los problemas mencionados y las acciones medidas que se adoptan; asimismo, se mantienen verificaciones a las Unidades de Salud en donde se imparten charlas sobre derechos humanos y salud a los usuarios, usuarias y personal de la misma.

Respecto al **derecho a la protección al medio ambiente**, la principal problemática que existe es la

deforestación en la zona, lo que afecta a los mantos acuíferos y el acceso al agua en algunas comunidades. La delegación ha impartido charlas a comunidades sobre el derecho al medio ambiente; además se han sostenido reuniones con la Comisión de Protección Civil en donde también se abordaron estos temas.

En el área de **derechos humanos de las mujeres**, el principal problema que existe es la violencia intrafamiliar y violencia doméstica, es el delito que más detenciones genera por parte de la Policía Nacional Civil, y se refleja en los procesos llevados en el Juzgado de Familia de San Francisco Gotera, departamento de Morazán, siendo la mujer la más afectada del grupo familiar; Así mismos son pocas las mujeres que ocupan cargos públicos, existiendo muchas madres solteras, lo que se refleja con el incremento por demanda de cuota alimenticia interpuesta en la Procuraduría General de la República (PGR), y pocas oportunidades de empleo.

Para minimizar y contrarrestar el efecto de la violencia intrafamiliar o violencia doméstica, la delegación ha realizado charlas y capacitaciones a diferentes sectores y comunidades.

En el área de **derechos de la niñez y adolescencia**, se ha logrado identificar que la falta de oportunidades para acceder al estudio superior de los jóvenes, deserción escolar de niños y niñas, desintegración familiar por diversas causas afectan el desarrollo de los niños y niñas y adolescentes, violencia y abandono de niñas y niños. La delegación ha apoyado al CONNA a través de la participación en capacitaciones y charlas con la Unidad Juvenil, además se han brindado capacitaciones en coordinación con PREPAZ en diferentes comunidades y centros Escolares sobre la LEPINA.

En el área de **derechos de las personas privadas de libertad**, se identifica como principal problema el hacinamiento en el Centro de Cumplimiento de Penas, de San Francisco Gotera, por sobrepoblación, igual situación se da en las Bartolinas de la Policía Nacional Civil de San Francisco Gotera, Morazán. Las condiciones de los Centros de Detención mencionados no son adecuados; y se ha visualizado una disminución de las denuncias por malos tratos a familiares que visitan a los detenidos en el Centro de Cumplimientos de Penas de San Francisco Gotera, por los registros efectuados al ingreso al mismo.

La delegación realiza verificaciones constantes al Centro de Cumplimiento de Penas y a las Bartolinas de la Policía Nacional Civil, ubicados en San Francisco Gotera, y a las Bartolinas en donde mantienen detenidas a las mujeres que son detenidas o capturadas, ubicadas en la Subdelegación de la Policía Nacional Civil.

Respecto a los **derechos de los pueblos indígenas**, los Pueblos originarios siguen siendo invisibilizados en la zona, esto se demuestra en la política del Estado y la importancia que se le da a este sector. La delegación mantiene la realización de charlas sobre los Derechos de los Pueblos Originarios, con las comunidades para que conozcan sus derechos.

En el área de **derechos de las personas viviendo con Vih/Sida**, se constata que todavía existe un porcentaje de discriminación por parte de algunas personas contra los pacientes que portan esta enfermedad, principalmente por desconocimiento o ignorancia, afectando en sus relaciones personales e incluso familiares, manteniéndose muchas veces en el anonimato por temor a que se le condene a una muerte social. La delegación ha realizado charlas sobre sensibilización en el tema de VIH-SIDA a diferentes sectores y Centros Escolares; asimismo, realiza verificaciones a la atención que se les brinda a las personas que son portadores de la enfermedad, las cuales reciben su atención y tratamiento en el Hospital Nacional de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán.



En el área de los **derechos de las personas migrantes**, los habitantes y ciudadanos salvadoreños que fueron afectados por el fallo de la Corte Internacional de Justicia con sede en la Haya, residentes en Nahuaterique, Honduras, han expresado su preocupación por el abandono y pocos proyectos de desarrollo llevados a cabo en la zona por los gobiernos tanto de El Salvador como de Honduras y la inseguridad jurídica que les genera sobre sus tierras. Asimismo los jóvenes siguen optando por emigrar hacia Estados Unidos por falta de oportunidades en el Departamento. La delegación realiza verificaciones de la situación de los pobladores salvadoreños que residen en Nahuaterique, Honduras.

Con respecto a los **derechos de las víctimas del conflicto armado**, Se ha logrado reconocer violaciones por parte del Estado, por lo cual se ha llegado a pedir perdón por los mismos, como es el Caso del Perdón manifestado a los familiares de las víctimas de la masacre en el Caserío El Mozote, Municipio de Meanguera, Departamento de Morazán, que aunque dicha acción no fue ejecutada durante el período que se informa, se mantienen expectativas por los familiares de las víctimas de las promesas y ofrecimientos del Presidente de la República que se hicieron en ese momento. La delegación mantiene seguimiento de las promesas y ofrecimientos que se les hicieron a los familiares de las víctimas de la masacre en el caserío El Mozote.

#### ▪ ***Delegación Departamental de La Unión***

Los **derechos civiles**, más afectados identificados en los municipios que territorialmente esta delegación conoce, los más vulnerados son la integridad personal, la libertad personal y la seguridad personal. De conformidad a lo establecido en los Arts. 24 y 25 de la Ley que rige esta Procuraduría, se han iniciado los respectivos expedientes, a fin de realizar las investigaciones correspondientes

En el área de **derechos económicos, sociales y culturales**, los derechos más vulnerados son el derecho al trabajo, a la salud, al acceso a la tierra y al agua. De conformidad a lo establecido en los Arts. 24 y 25 de la Ley que rige esta Procuraduría, se han iniciado los respectivos expedientes, a fin de realizar las investigaciones necesarias para brindar la atención que se requiere; en el caso del acceso a la tierra y al agua la delegación ha realizado atención a crisis, investigación de los hechos y acompañamiento a las víctimas.

En el área de los **derechos de las mujeres**, la principal problemática identificada es la violencia intrafamiliar, la actuación arbitraria por parte de agentes de la Policía Nacional Civil, en coartarles el derecho a la libertad y en algunas ocasiones son objeto de malos tratos. La delegación departamental, ha impartido permanentemente capacitaciones y charlas, en relación a los Derechos de la Mujer, a sectores femeninos de las diferentes comunidades del departamento, a fin de incidir en la creación de una cultura de denuncia contra estas agresiones y discriminaciones; además, de haber iniciado las denuncias correspondientes que se presentan sobre la actuación arbitraria de la Policía Nacional Civil.

Los **derechos de la niñez y adolescencia**, se ha identificado como problema la falta de resguardo para los adolescentes localizados en el departamento. Durante las verificaciones que se realizan, se está pendiente que éstos sean enviados a San Miguel.

Respecto a los **derechos de las personas privadas de libertad**, es recurrente el hacinamiento en el Centro Preventivo y Bartolinas de la Policía Nacional Civil, así como las condiciones de insalubridad en que se encuentra las Bartolinas. La delegación realiza verificaciones permanentes.

Los **derechos de las personas viviendo con Vih/Sida**, los más vulnerados son el derecho al trabajo y a la salud. La delegación de conformidad a lo establecido en los Arts. 24 y 25 de la Ley que rige esta

Procuraduría, se han iniciado los respectivos expedientes, a fin de realizar las investigaciones al respecto. Finalmente, los **derechos de las personas migrantes**, La principal problemática es la desintegración familiar. La delegación sostiene jornadas de charlas para las comunidades que se han visto más influenciadas por este fenómeno, con el fin de incidir en los posibles migrantes.

### ▪ ***Delegación Departamental de Santa Ana***

Respecto a los **derechos civiles**, persisten las denuncias por violaciones al derecho humano a la integridad personal en contra de agentes de la Policía Nacional Civil y los Agentes Municipales, y en menor número contra la Fuerza Armada. La delegación ha establecido planes de capacitación al personal policial, militar y municipal, sobre dignidad humana, derechos humanos y Código de Conducta para Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

En el área de los **derechos económicos, sociales y culturales**, el derecho humano al trabajo se ha visto amenazado por el ordenamiento de las ventas informales en el centro de la ciudad implementado por la municipalidad. La delegación ha realizado gestiones a fin de que se les brinde otra alternativa, se logró que vendedoras en las aceras en el centro fueran ubicadas en el interior del mercado, y a otro grupo ubicado en las afueras del centro comercial metrocentro se les modificaran sus puestos para no obstaculizar a los peatones y parada de buses.

En el área del **derecho a la protección del medio ambiente**, se admitió denuncia por contaminación sónica, ocasionada por el dueño de un negocio que utiliza aparato de sonido a alto volumen en horas de la madrugada. Asimismo, por la extracción de tierra que ocasiona daños a la salud de los habitantes de la zona por la polvareda que produce. La delegación realizó gestiones con la Alcaldía Municipal para que verificaran el sonido y la hora en que se realizaba.

En el área de los **derechos humanos de las mujeres**, existe expediente contra funcionario del ISTA de Santa Ana por maltrato verbal hacia una lidereza que reclamaba sus derechos. También se está denigrando a las mujeres usuarias de redes sociales, en donde se les expone con comentarios misóginos. Despidos de mujeres en la Alcaldía Municipal de Santa Ana. Por otro lado, se ha tenido conocimiento por los oficios de personas detenidas que jueces y elementos de la Policía Nacional Civil envían a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que ya están aplicando la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.

La delegación en los casos anteriormente planteados solicitó al Presidente del ISTA investigar los hechos. En medios de comunicación se orientó a las mujeres víctimas de las redes sociales, acudir a la Fiscalía General de la República a interponer las respectivas denuncias. En la misma ya se tramitan expedientes para investigar los despidos.

Respecto de los **derechos de la niñez y adolescencia**, se ha detectado incremento en los casos de adolescentes desaparecidos; pero también, las detenciones de jóvenes por delitos de carácter sexual, drogas, uso de armas de fuego, asociaciones ilícitas y extorsión. El caso más grave, la detención de un niño de 12 años por intentar introducir un teléfono celular al Centro Penal Apanteos. La delegación le está dando trámite a las denuncias presentadas y realizando las acciones necesarias.

En el área de **derechos de las personas privadas de libertad**, se han incrementados los casos por violación al derecho humano a la salud en el Centro Penal Apanteos, ya que el personal médico y de enfermería no es suficiente para atender a toda la población interna. También han existido casos de fallecimientos en circunstancias no establecidas. Se destaca la implementación de programa Yo Cambio, que prácticamente está funcionando en todos los recintos del Centro, a fin de evitar el ocio carcelario, lo en consecuencia reduce los enfrentamientos entre internos y contra el personal de seguridad. La

delegación ha realizado verificaciones, para que se practiquen exámenes médicos para recomendar al personal médico del Centro se brinde la asistencia médica necesaria, pese a los escasos recursos del Centro. Se han tomado denuncias.

▪ ***Delegación Departamental de Ahuachapán***

Respecto a los **derechos civiles**, siguen siendo los más denunciados, las afectaciones al derecho a la integridad personal por uso excesivo de la fuerza y malos tratos, seguido por posibles afectaciones al debido proceso administrativo, al derecho de petición, al debido proceso judicial, a la libertad personal, a las garantías del debido proceso legal, sobre presuntas afectaciones al derecho a la vida, a la libertad personal; y a la intimidad, honor y reputación, en las cuales se presume responsabilidad de elementos de la Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República y Jueces.

A todas las denuncias recibidas se les ha dado trámite, a efecto de investigar la veracidad de los hechos denunciados, requiriendo a las autoridades denunciadas informe sobre lo actuado al respecto, con la finalidad de valorar la continuidad de la investigación y conclusión del caso según corresponda. Asimismo de forma oportuna se han dictado las recomendaciones pertinentes a las instituciones competentes a efecto de garantizar el deber de respeto y garantía de estos hechos.

La Policía Nacional Civil, a través de las actividades de prevención que desarrolla a nivel departamental, contempla acciones de control y monitoreo del comportamiento de elementos de la corporación policial a nivel departamental en el cumplimiento de atribuciones institucionales; sin embargo en las acciones de coordinación interinstitucional con Oficina Fiscal de Ahuachapán, se sigue observando debilidad para la prevención del delito; y los Jueces y Magistrados de igual manera mantienen un trabajo independiente e imparcial al respecto, se observa un incremento de denuncia por parte de Defensores Públicos de la Procuraduría General de la República en contra de actuaciones de Jefes Policiales por no permitir entrevista privada a personas detenidas en termino administrativo y de inquirir.

Con respecto a los **derechos económicos, sociales y culturales**, se encuentra una reiterada denuncia a las afectaciones al derecho a la propiedad, al trabajo, a la salud, al acceso al agua, a la seguridad social, al nivel de vida adecuado, a la vivienda, libertad sindical y constitución y protección a la familia, al acceso a agua potable, vivienda y educación.

Sobre los hechos denunciados se ha requerido a las autoridades denunciadas la información correspondiente sobre lo actuado al respecto, asimismo se ha verificado los procedimientos y la legalidad de los mismos, y se han activado las instituciones competentes a efecto de dar respuesta a las peticiones de las personas denunciantes. Por otro lado se ha promovido el conocimiento de estos derechos para ir incrementado el nivel de denuncia de la población ante el desconocimiento que estos derechos también pueden ser violentados y que existen mecanismos de denuncia e instancias competentes para su reivindicación o restitución.

Por parte de las instituciones locales gubernamentales se continua observando muy limitadas acciones que den respuesta local a fin de garantizar el acceso universal a servicios de salud comunitaria y seguridad social, en relación al derecho fundamental al trabajo, se ha incrementado la denuncia colectiva por parte de empleados de la Oficina Departamental del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Ahuachapán, por actos atentatorios a la estabilidad laboral por parte de Jefaturas de dicho ministerio. En relación al derecho a la propiedad, se ha logrado por la vía de buenos oficios, reubicación de 8 familias de Caserío El Limón, Barra de Santiago, municipio de Jujutla afectadas por Sentencia Judicial pronunciada por el Juzgado de lo Civil de Ahuachapán.

En el área del **derecho a la protección del medio ambiente**, las denuncias más reiteradas son vinculadas a la protección y a la protección y conservación de la biodiversidad, a presuntas afectaciones a derechos de las personas en relación a garantizar un ambiente sano que se encuentran íntimamente vinculadas a posibles afectaciones a nuestras cuencas hidrográficas de la zona occidental.

Por tratarse de temas vinculados a afectaciones colectivas, se ha impulsado en primer lugar requerir a las autoridades competentes informe sobre sus actuaciones o permisos extendidos en torno a estas situaciones. La delegación ha identificado el caso más relevante que se destaca, es la oposición de habitantes de los alrededores del Relleno Sanitario ubicado en Cantón Las Chinamas de Ahuachapán, por la cercanía a las viviendas de los residentes del lugar y el temor de contaminación de mantos acuíferos y de ríos cercanos al mismo.

En el área de los **derechos humanos de las mujeres**, las denuncias más frecuentes son las vinculadas a una vida libre de violencia física, psicológica y sexual, al trabajo sin discriminación, al acceso a la justicia sin discriminación; a la protección a su integridad, a la salud, al acceso a beneficios de seguridad social y al acceso a la justicia a víctimas de violencia intrafamiliar.

Es preocupante la indiferencia y omisiones ante las denuncias vinculadas a violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, este tipo de denuncia se ha incrementado en virtud de la respuesta deficiente a nivel institucional local en Ahuachapán, y por los Juzgados de Paz, y por la falta de funcionamiento de la Junta Departamental y Juntas Locales de Protección de la Niñez y Adolescencia, por lo que el gran desafío ha sido requerir a las autoridades competentes respuesta eficaz y oportuna al respecto y supervisar constantemente los tramites que se dan a las denuncias de violencia contra mujeres, dándoles acompañamiento y supervisión directa en los procesos vinculados a esta temática específica. Se ha impulsado alianzas con OXFAM AMERICA, Unidad Municipal de la Mujer, ISDEMU y UPAN como sociedad civil universitaria con la finalidad de seguir supervisando el comportamiento estatal en este tema y la respuesta institucional a nivel local.

Por otra parte, las víctimas de violencia intrafamiliar siguen siendo las mujeres, por lo que los obstáculos en el acceso a la justicia penal y familiar, siguen siendo los grandes desafíos de las presuntas víctimas de este flagelo, en materia de violencia a las niñas y adolescentes, igualmente, el sistema de protección integral recién se ha implementado en este departamento con la apertura de la Junta de Protección de la NNA de Ahuachapán, pero sigue pendiente la juramentación de los Comités Locales de Protección de las NNA en los 12 municipios del departamento, destacándose con avance en la instalación del mismo únicamente el municipio de San Francisco Menéndez.

Respecto de los **derechos de la niñez y adolescencia**, se identificó denuncias por la falta de protección y prevención contra todo tipo de abuso y explotación, derecho a la salud, a no ser abusado, descuido o maltratado por las personas responsables de su cuidado, a la educación, incluida la formación y orientación profesional; a la supervivencia y desarrollo, al nombre e identidad, recibir pensión de alimentos, adolescente privado de libertad a permanecer en lugares diferentes a los destinados para adultos y a ser llevado sin demora ante Juez competente.

La delegación continúa impartiendo jornadas educativas sobre derechos y deberes de las NNA contenidos en LEPINA; y "Juventud y Migración" a Adolescentes y jóvenes; asimismo, se está fortaleciendo capacidades de actores claves en el departamento en el ámbito educativo superior universitarios y funcionarias/os de las diferentes instituciones con presencia en el departamento en temas vinculados a derechos específicos de NNA con la finalidad que sean agentes multiplicadores en los diferentes espacios de actuación de los mismos.

En esta temática, a las denuncias recibidas se les ha dado el trámite correspondientes a fin de auditar y supervisar el nivel de respeto y garantía a este derecho, y en los casos necesarios de reivindicar o reparar afectaciones identificadas promoviendo acciones de acuerdo a las competencias de las instituciones que conforman el sistema de protección local y regional, en todo caso los primeros requeridos han sido la Oficina Departamental de la Procuraduría General de la República, y Junta de Protección de la Niñez y Adolescencia de Santa Ana- por ser la única a nivel regional con competencia hasta la fecha, por la mora en la conformación de la Junta Departamental de Protección de la Niñez y Adolescencia en Ahuachapán, mucho menos a nivel de los municipios.

En el área de **derechos de las personas privadas de libertad**, se ha verificado que las bartolinas ubicadas en sedes policiales, en los municipios de Apaneca, Ataco, Ahuachapán, Turín, Atiquizaya, San Lorenzo, Cantón Plataneros-Guaymango no reúnen las condiciones en infraestructura idóneas para dar un trato con respeto a la dignidad de las personas, las mismas carecen de lo más básico para los cuidados personales y necesidades fisiológicas del ser humano, como tampoco con servicio de alimentación, no obstante se encontraron en varios monitoreos realizadas personas privadas de libertad en esas condiciones con más de 6 días de detención por estar en espera de traslado al centro penal correspondiente ante la falta de capacidad de la sección de Traslado de reos de la Región Occidental.

De forma oportuna en cada monitoreo se dictan recomendaciones a la persona que se encuentre a cargo de la bartolina a fin de garantizar en forma oportuna el acceso a satisfacer necesidades básicas y fisiológicas de las personas privadas de libertad, de encontrarse hechos que revistes especial tratamiento se han iniciado denuncias y se les ha dado el trámite de ley correspondiente de acuerdo a los procedimientos de tutela según lo establece la Ley y Reglamento de la PDDH.

En relación al Centro de Reinserción Social el Espino, se ha observado un mejor trato a la población interna, tal es el caso que en este período no existen denuncias reportadas sobre hechos de afectaciones al interior del centro por parte de personal o la administración del mismo.

Con respecto a los **derechos de las personas con discapacidad**, se ha logrado identificar afectaciones a los derechos a la salud, a la educación y al trabajo sin discriminación. Prácticamente son temas nuevos en el quehacer de la sociedad de los 12 municipios de Ahuachapán, en San Francisco Menéndez, es el único municipio que se destaca el esfuerzo por la sociedad civil organizada de promover los Derechos de Personas con Capacidades Especiales, a efecto de ir gradualmente promoviendo el respeto y garantía a sus derechos humanos y el cumplimiento de la normativa específica (Ley de Equiparación de Oportunidades).

Finalmente en el área de los **derechos de las personas adultas mayores**, la delegación ve positivo el esfuerzo realizado por la Alcaldía de Ahuachapán, al crear la Unidad del Adulto Mayor, a fin de dar respuesta a grupos más vulnerables del municipio ( de índole asistencialista). Sigue siendo una elevada aspiración que se dicten ordenanzas municipales que beneficie a estos grupos de la población, y que reconozcan sus derechos, de cara a la progresividad de la vigencia y goce pleno de sus derechos específicos.

#### ▪ ***Delegación Departamental de Chalatenango***

En el área de los **derechos civiles**, la delegación ha evidenciado hacinamiento de reos tanto en el Centro Penal como en las bartolinas de la Policía Nacional Civil. Por lo que mantiene una verificación y monitoreo constante de la situación de los privados de libertad, se hacen recomendaciones a nivel local pero las mismas no son eficaces por el elevado número de detenciones y porque la solución no es



a nivel local sino que se debe gestionar en la Dirección General de Centros Penales y ante el Director de la PNC.

En el área de los **derechos económicos, sociales y culturales**, se observó que debido al cambio de gobierno los médicos que pertenecen al partido político contrario son reubicados lo que genera rivalidades entre el personal médico que afecta el derecho a la salud de los usuarios.

Con respecto al **derecho a la protección del medio ambiente**, se ha identificado que en el embalse del Cerrón Grande es objeto de contaminación con minerales pesados como plomo, arsénio y otros, que afectan toda la vida acuática, flora y demás especies de los lugares aledaños. Mucha gente vive de la explotación de la tilapia, es decir los consumen y los comercializan contaminados, lo que podría provocar en un futuro enfermedades como la insuficiencia renal, etc.

En el área de los **derechos humanos de las mujeres** y de los **derechos de la niñez y adolescencia**, el problema identificado es que no hay respeto de sus derechos para estos grupos vulnerables. Por lo que la delegación departamental, al diagnosticar que la población que domina el departamento es rural ha impulsado charlas en las que se da a conocer este tipo de derechos y la importancia de protegerlos.

En el área de **derechos de las personas privadas de libertad**, se ha identificado que tanto en las Bartolinas de la Policía Nacional Civil como en el Centro Penal de Chalatenango se dan problemas serios de insalubridad, hacinamiento, negación de visitas familiares de los detenidos, los sanitarios colapsan y les dan permisos de utilización de sanitarios restringidos únicamente por la mañana y tarde en el caso de la Policía Nacional Civil. Las botellas de plástico que utilizan para tomar agua están sucias y con malos olores, situación que afecta en la salud de los detenidos. La delegación departamental, ha realizado reuniones de trabajo con algunos mandos superiores en los cuales existieron compromisos de no reincidir en estos aspectos, argumentando que se debe a la escasez del Recurso Humano. Sobre la restricción de los permisos a familiares se debe a todos los antecedentes que se poseen de los detenidos, aunque aducen que si les entregan los alimentos que les llevan sus familiares. Existe incumplimiento notorio de parte de las autoridades de la Policía Nacional Civil porque estos no acatan lo legalmente establecido en todas las leyes aplicables. En el centro penal el problema de maltrato a reos y familiares se ha incrementado por presencia de elementos de la Fuerza Armada.



ANEXOS

# ANEXOS

## 1. Datos Estadísticos Generales

<b>Consolidado Estadístico General</b> <b>1 de Junio de 2012 al 31 de Mayo de 2013</b>		
<b>Documento</b>	<b>Dato Estadístico</b>	<b>Expedientes Resueltos</b>
Denuncias admitidas	3,023	n/d
Informes especiales y situacionales	9	n/d
Opiniones sobre proyectos de ley, posicionamientos sobre normativas y propuesta de reforma de ley	7	n/d
Pronunciamientos públicos	39	n/d
Resoluciones Iniciales	677	680
Resoluciones Finales	833	864
Oficios	60	58
Resoluciones de Revisión	13	13
Medidas Cautelares	3	3
Resoluciones de Rectificación	1	1
Resoluciones de Modificación	1	1

*Fuente: Reporte del Departamento de Seguimiento, PDDH.*

## 2. Consolidados Estadísticos por Resoluciones Iniciales<sup>1</sup>

Detalle de las diez instituciones públicas más recomendadas y notificadas, por derecho humano y hecho violatorio presuntamente afectado		
1 de junio 2012 al 31 de mayo de 2013		
Derecho humano presuntamente afectado	Hecho violatorio	Frecuencia en que se ha recomendado y notificado
<b>I. POLICÍA NACIONAL CIVIL</b>		
Trabajo	Actos ilegales o arbitrarios atentatorios contra la estabilidad laboral	11
Acceso a la justicia en relación directa con el derecho de las personas a la igualdad y no discriminación	Omisiones o negligencia de funcionarios o agentes del Estado frente a la reclamación de una persona para la protección de derechos	4
Derecho de las personas privadas de libertad a no ser restringidas en el goce de sus derechos en grado mayor que lo señalado por la ley o la condena	Condiciones inadecuadas para guardar detención provisional	4
Derecho de las personas privadas de libertad a no ser restringidas en el goce de sus derechos en grado mayor que lo señalado por la ley o la condena	Restricciones arbitrarias de cualquiera de los derechos que no estén limitados por la ley o la condena	4
Derecho de las personas privadas de libertad de acceso a la salud sin discriminación	Omisión de adoptar medidas para dotar a las personas privadas de libertad de medicamentos especiales o su traslado a un centro hospitalario	3
Seguridad Personal	Coacción	6
	Intimidación	37
Intimidad Personal	Allanamiento de morada y registros de manera ilegal o arbitraria	6
Libertad de Tránsito	Restricciones ilegales o arbitrarias a la libertad de circulación y cambio forzado de domicilio o residencia	5
Debido Proceso Administrativo	Inobservancia del principio de legalidad	4
Intimidad	Allanamiento de morada y/o registros de manera ilegal o arbitraria	11
Derecho al voto	Obstaculización para ejercer el sufragio	4
	Restricciones ilegales o arbitrarias para ejercer el sufragio	3

<sup>1</sup> En el cuadro se muestra el detalle de las Resoluciones Iniciales emitidas durante el período de 2012 a mayo 2013, se encuentra la institución o autoridad presuntamente denunciada, así como otras instituciones o autoridades recomendadas y que se contemplan dentro de la Resolución Inicial, lo que conlleva a que en una misma Resolución, puede aparecer una institución o autoridad presuntamente responsable y otra u otras recomendadas; asimismo, se establece la frecuencia con que se ha notificado cada derecho a las instituciones o autoridades presuntamente denunciadas o recomendadas. Este dato refleja la labor realizada por Notificaciones.

Detalle de las diez instituciones públicas más recomendadas y notificadas, por derecho humano y hecho violatorio presuntamente afectado		
1 de junio 2012 al 31 de mayo de 2013		
Derecho humano presuntamente afectado	Hecho violatorio	Frecuencia en que se ha recomendado y notificado
Acceso a la justicia	Omisiones o negligencia de funcionarios o agentes del Estado frente a la reclamación de una persona para la protección de derechos	3
Integridad Personal	Uso desproporcionado de la fuerza	12
Libertad personal	Detención ilegal o arbitraria	73
Libertad Personal	Detención Arbitraria	37
Propiedad	Actos arbitrarios que restringen o afectan el derecho a la propiedad	10
Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia física, psicológica y sexual	Maltrato físico, psicológico o moral ejercido por agentes del Estado prevariándose de sus prerrogativas	16
Propiedad	Actos ilegales o arbitrarios que restringen o afectan el derecho a la propiedad	6
Seguridad Personal	Persecuciones o indagaciones ilegales	56
Vida	Tentativa de ejecución extralegal	4
Libertad personal	Detención ilegal	11
Intimidad	Allanamiento de morada o registros de manera ilegal o arbitraria	13
Derecho de la mujer a una vida libre de violencia física, psicológica o sexual	Maltrato físico y psicológico o moral ejercido por agentes del Estado prevariándose de sus prerrogativas	6
Derecho de los niños, niñas y adolescentes a permanecer en lugares diferentes de los destinados para adultos	Permanencia junto con adultos durante la detención administrativa	5
Integridad Personal	Malos Tratos	113
	Tratos crueles inhumanos o degradantes	52
Derecho de las niñas, niños y adolescentes a la propia imagen	Captura de imágenes para su eventual incorporación a un registro determinado	6
Propia imagen	Captura de imágenes para su eventual incorporación a un registro determinado	11
Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia física, psicológica y sexual	Maltrato físico y psicológico ejercido por agentes del Estado prevariándose de sus prerrogativas	16
Derecho de la mujer a la protección de su integridad	Falta de protección estatal en procesos de investigación y sanción de actos denigrantes o que atenten contra la mujer	3



<b>Detalle de las diez instituciones públicas más recomendadas y notificadas, por derecho humano y hecho violatorio presuntamente afectado</b>		
<b>1 de junio 2012 al 31 de mayo de 2013</b>		
<b>Derecho humano presuntamente afectado</b>	<b>Hecho violatorio</b>	<b>Frecuencia en que se ha recomendado y notificado</b>
Derecho de privados de libertad a la salud y tratamientos diferenciados	Omisión o negligencia para su traslado a un centro hospitalario	5
Seguridad Personal	Persecuciones ilegales o arbitrarias	8
Integridad personal	Uso indebido de armas de fuego	3
Vida	Amenazas a muerte	7
Intimidad	Allanamiento ilegal de morada y/o registros de manera ilegal o arbitraria	11
	Incorporación ilegal de datos personales a un registro determinado	4
Derechos específicos de la mujer, niñez y juventud a la protección contra toda forma de violencia		5
Propia imagen	Captura de imagen para su eventual incorporación a un registro determinado	4
Acceso a la Justicia	Omisión o negligencia de funcionarios o agentes del Estado frente a la reclamación de una persona para la protección de sus derechos	4
Derecho de los niños, niñas y jóvenes a una vida libre de violencia física, psicológica y sexual	Maltrato físico, psicológico o moral ejercido por agentes del Estado prevaleciendo de sus prerrogativas	3
Otros derechos		99
<b>TOTAL</b>		<b>708</b>
<b>II. INSPECTORÍA GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL</b>		
Vida	Tentativa de ejecución extralegal	2
	Amenazas a muerte	3
	Ejecución Extralegal	3
Integridad Personal	Uso desproporcionado de la fuerza	12
	Tratos Crueles, inhumanos y degradantes	17
	Malos Tratos	60
	Uso indebido de arma de fuego	3
Seguridad Personal	Coacción	3
	Intimidación	25
	Persecuciones o indagaciones ilegales o arbitrarias	24

Detalle de las diez instituciones públicas más recomendadas y notificadas, por derecho humano y hecho violatorio presuntamente afectado		
1 de junio 2012 al 31 de mayo de 2013		
Derecho humano presuntamente afectado	Hecho violatorio	Frecuencia en que se ha recomendado y notificado
Libertad Personal	Detención Ilegal o Arbitraria	42
	Detención ilegal	3
	Detención Arbitraria	20
Libertad de Tránsito	Restricciones ilegales o arbitrarias a la libertad de circulación y cambio forzado de domicilio o residencia	3
Intimidad Personal	Allanamiento de morada y registros de manera ilegal o arbitraria	33
	Eventual incorporación ilegal de datos personales e imágenes a un registro determinado	6
Derechos de la niñez y juventud a la protección contra toda forma de violencia	Tratos crueles inhumanos o degradantes	17
Derecho de la mujer a una vida libre de violencia física, psicológica y sexual	Maltrato físico, psicológico o moral ejercido por agentes del Estado	16
Propiedad	Actos ilegales o atentatorios que restringen o afectan el derecho a la propiedad	8
Derecho de la mujer a su propia imagen	Captura de imagen para su eventual incorporación a un registro determinado	3
Derecho de la mujer a la protección de su integridad	Falta de protección estatal en procesos de investigación y sanción de actos denigrantes o que atenten contra la mujer	3
	Afectación o abusos relacionados con la condición de género	4
Trabajo	Actos ilegales o arbitrarios atentatorios contra la estabilidad laboral	3
Derecho de los niños, niñas y adolescentes a la seguridad personal	Persecuciones o indagaciones ilegales	3
Derecho de los niños, niñas y jóvenes a no ser trasladados/as o retenidos/as ilícitamente	Detención Ilegal o Arbitraria	19
Derecho de los niños, niñas y adolescentes a la integridad personal	Malos Tratos	15

Detalle de las diez instituciones públicas más recomendadas y notificadas, por derecho humano y hecho violatorio presuntamente afectado		
1 de junio 2012 al 31 de mayo de 2013		
Derecho humano presuntamente afectado	Hecho violatorio	Frecuencia en que se ha recomendado y notificado
Derecho de la mujer a la propia imagen	Captura de imágenes para su eventual incorporación a un registro determinado	16
Acceso a la Justicia	Omisión o negligencia de funcionarios o agentes del Estado frente a la reclamación de una persona para la protección de sus derechos	4
Propiedad	Actos ilegales o arbitrarios que restringen o afectan el derecho a la propiedad	3
Seguridad Personal	Persecuciones o indagaciones ilegales	16
Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia física, psicológica y sexual	Maltrato físico y psicológico o moral ejercido por agentes del Estado prevaleciéndose de sus prerrogativas	7
Otros derechos		52
<b>TOTAL</b>		<b>448</b>
III. FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		
Vida	Ejecución extralegal, sumaria o arbitraria	3
	Amenazas a muerte	2
Derecho de la mujer a una vida libre de violencia física, psicológica y sexual	Maltrato físico, psicológico o moral ejercido por agentes del Estado prevaleciéndose de sus prerrogativas	3
Derecho de los niños, niñas y adolescentes a la no desaparición	Desaparición forzada y negativa a investigar la desaparición	2
Seguridad Personal	Incumplimiento de los beneficios del Programa de Protección de Víctimas y Testigos	2
	Persecuciones o indagaciones ilegales	5
	Intimidación	4
	Coacción e intimidación	4
Derecho de las niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos a que se tomen medidas especiales para su protección a fin de evitar los efectos perniciosos del proceso		2
Acceso a la justicia	Omisiones o negligencia de funcionarios o agentes del Estado frente a la reclamación de una persona para la protección de derechos	48
	Negligencia retardación injustificada en la investigación	23

Detalle de las diez instituciones públicas más recomendadas y notificadas, por derecho humano y hecho violatorio presuntamente afectado		
1 de junio 2012 al 31 de mayo de 2013		
Derecho humano presuntamente afectado	Hecho violatorio	Frecuencia en que se ha recomendado y notificado
Trabajo	Actos ilegales atentatorios contra la estabilidad laboral	4
Libertad Personal	Detención Arbitraria	7
	Detención ilegal	3
Integridad Personal	Malos Tratos	14
	Uso indebido de armas de fuego	4
	Uso desproporcionado de la fuerza	2
	Tratos Cruels, inhumanos y degradantes	3
Honor	Imputaciones falsas que lesionen la integridad moral	4
Petición	Dilación injustificada en la tramitación y respuesta de la solicitud	6
Debido Proceso Administrativo	Inobservancia del principio de legalidad	2
	Inobservancia del principio de seguridad jurídica	2
	Inobservancia del Principio de Transparencia	2
	Inobservancia del derecho de audiencia y defensa	3
Propiedad	Actos ilegales o arbitrarios que restringen o afectan el derecho a la propiedad	3
Debido Proceso Judicial	Inobservancia del principio de presunción de inocencia	3
Salud	Negligencia Médica	2
Intimidad	Allanamiento de morada y/ o registros de manera ilegal o arbitraria	2
Derecho de las niñas, niños y adolescentes a no recibir tratos crueles, inhumanos o degradantes	Tratos Cruels, inhumanos y degradantes	2
Derecho de los niños, niñas y adolescentes a no ser trasladados/as o retenido/a ilícitamente	Detención ilegal o arbitraria	2
Otros derechos		34

Detalle de las diez instituciones públicas más recomendadas y notificadas, por derecho humano y hecho violatorio presuntamente afectado		
1 de junio 2012 al 31 de mayo de 2013		
Derecho humano presuntamente afectado	Hecho violatorio	Frecuencia en que se ha recomendado y notificado
TOTAL		202
IV. GOBIERNOS LOCALES		
Derecho a ser informado y participar en las decisiones que afectan el medio ambiente	Impedir u omitir la consulta en proyectos que impactan sobre el medio ambiente	2
	Restricciones o limitaciones para acceder o recibir información sobre medio ambiente o los efectos que pueda ocasionar la ejecución de proyectos particulares	2
Derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado	Tolerancia estatal frente al abuso o maltrato de personas con discapacidad	2
Integridad Personal	Malos tratos	4
Derecho a la vida e integridad personal	Omisión de prevenir o mitigar riesgos por desastres naturales	2
Medio ambiente sano	Omisión o negligencia para regular actividades que provoquen contaminación electromagnética	2
Salud	Omisión del Estado para prevenir y reducir la contaminación del medio ambiente	5
Propiedad	Actos ilegales o arbitrarios que restringen o afectan el derecho a la propiedad	8
Acceso a la Justicia	Omisión o negligencia del Estado frente a la reclamación de una persona para la protección de derechos	3
Petición	Dilación injustificada en la tramitación y respuesta de la solicitud	12
Trabajo	Actos ilegales o atentatorios contra la estabilidad laboral	55
	Despido Ilegal	2
	Denegación de derechos laborales	2
	Discriminación laboral en razón de la edad	2



Detalle de las diez instituciones públicas más recomendadas y notificadas, por derecho humano y hecho violatorio presuntamente afectado		
1 de junio 2012 al 31 de mayo de 2013		
Derecho humano presuntamente afectado	Hecho violatorio	Frecuencia en que se ha recomendado y notificado
Debido Proceso Administrativo	Inobservancia del derecho de audiencia	39
	Inobservancia del derecho de defensa	44
	Inobservancia del principio de legalidad	13
	Inobservancia del principio de seguridad jurídica	11
	Faltas al principio de transparencia	3
	Omisión o negligencia de funcionarios o agentes del Estado frente a la reclamación de una persona para la protección de sus derechos	2
	Inobservancia del principio de igualdad	2
	Inobservancia del principio de no discriminación	2
	Inobservancia del principio de imparcialidad	2
Derecho humano a la protección del medio ambiente	Omisión o negligencia para regular actividades que provoquen contaminación electromagnética	3
	Restricciones o limitaciones para acceder o recibir información sobre el medio ambiente o los efectos que pueda ocasionar la ejecución de proyectos	2
	Omisión o negligencia para regular actividades que producen contaminación sónica	2
Derecho de la mujer a una vida libre de violencia física, psicológica y sexual	Maltrato físico, psicológico o moral ejercido por agentes del Estado prevaleciendo de sus prerrogativas	3
	Actos ilegales o arbitrarios atentatorios contra la estabilidad laboral a través de la violencia institucional	2
Igualdad	Trato inequitativo por tráfico de influencias	2
Libertades Sindicales	Actos ilegales o atentatorios contra la estabilidad laboral	4
Otros derechos		33
<b>TOTAL</b>		<b>272</b>
<b>V. MINISTERIO DE SALUD Y PREVISIÓN SOCIAL, MINSAL</b>		
Vida		2
	Amenazas de muerte	2
Derecho de las personas privadas de libertad al acceso a la salud	Omisión de adoptar medidas para dotar a las personas privadas de libertad de medicamentos especiales o esenciales	3

Detalle de las diez instituciones públicas más recomendadas y notificadas, por derecho humano y hecho violatorio presuntamente afectado		
1 de junio 2012 al 31 de mayo de 2013		
Derecho humano presuntamente afectado	Hecho violatorio	Frecuencia en que se ha recomendado y notificado
Salud	Negligencia Médica	8
		2
	Omisión del Estado para prevenir y reducir la contaminación del medio ambiente	2
	Falta de continuidad en tratamientos específicos para el restablecimiento y conservación de la salud	2
	Inadecuada infraestructura, equipo y funcionamiento de los centros de salud	2
Derecho de la mujer a la salud	Ocultar, tergiversar información fundamental para la protección de la salud o para el tratamiento de enfermedades que afectan a las mujeres	2
	Omisión o negligencia del Estado para reducir los riesgos asociados a la maternidad y mortalidad	4
	Esterilización forzada a causa del VIH	3
Derecho de la mujer a ser tratada de manera digna y sin discriminación	Victimización por estigma a causa del VIH	2
Derecho de la mujer a una vida libre de violencia física, psicológica y sexual	Maltrato físico, psicológico o moral ejercido por agentes del Estado prevariándose de sus prerrogativas	2
Derecho de la mujer a la salud por negligencia médica	Ocultar o tergiversar información fundamental para la protección de la salud o para el tratamiento de enfermedades que afectan las mujeres	2
Derecho de la mujer al trabajo sin discriminación	Acoso laboral ejercido en los centros de trabajo	2
Debido Proceso Administrativo	Inobservancia del derecho de audiencia	8
	Inobservancia del derecho de defensa	8
Derecho de las personas con VIH/SIDA a la salud	Falta de atención médica adecuada y suficiente ante enfermedades oportunistas	2
	Desabastecimiento de medicamentos de la terapia antiretroviral y otros necesarios para las infecciones oportunistas	2
Petición	Incumplimiento de la obligación de hacer saber lo resuelto	3
Derecho de los niños y niñas a la salud	Descuido en la aplicación de una vacuna	2
Derecho de niñas, niños y adolescentes a la supervivencia y al desarrollo		2

Detalle de las diez instituciones públicas más recomendadas y notificadas, por derecho humano y hecho violatorio presuntamente afectado		
1 de junio 2012 al 31 de mayo de 2013		
Derecho humano presuntamente afectado	Hecho violatorio	Frecuencia en que se ha recomendado y notificado
Salud de las niñas y niños con VIH	Discriminación para acceder a los servicios de salud	2
Trabajo	Denegación de prestaciones o derechos laborales	3
	Despido por la condición de VIH	2
	Actos ilegales o atentatorios contra la estabilidad laboral	20
	Actos ilegales o arbitrarios atentatorios contra la estabilidad laboral	4
Derecho a las personas con discapacidad a la salud	Abandono de paciente	3
Protección del medio ambiente	Omisión o negligencia en la investigación y sanción por incumplimiento de las normas ambientales	2
Acceso a la justicia	Omisiones o negligencia de funcionarios o agentes del Estado frente a la reclamación de una persona para la protección de derechos.	2
Otros derechos		15
<b>TOTAL</b>		<b>120</b>
VI. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA		
Trabajo	Actos ilegales arbitrarios atentatorios contra la estabilidad laboral	8
Debido Proceso Judicial	Inobservancia del derecho a ser Juzgado sin dilaciones indebidas	7
	Inobservancia del principio non bis ídem	2
Derecho de las personas privadas de libertad al debido proceso judicial	Inobservancia del derecho a ser Juzgado sin dilaciones indebidas	3
	Incumplimiento de las garantías procesales	2
Garantías del debido proceso judicial	Inobservancia de los principios de legalidad y seguridad jurídica	3
Debido proceso administrativo	Inobservancia al derecho de audiencia	2
	Inobservancia del derecho de defensa	2
	Inobservancia del principio de legalidad	2
	Inobservancia del principio de seguridad jurídica	2
	Inobservancia del Principio de Transparencia	4

<b>Detalle de las diez instituciones públicas más recomendadas y notificadas, por derecho humano y hecho violatorio presuntamente afectado</b>		
<b>1 de junio 2012 al 31 de mayo de 2013</b>		
<b>Derecho humano presuntamente afectado</b>	<b>Hecho violatorio</b>	<b>Frecuencia en que se ha recomendado y notificado</b>
Derecho de las personas privadas de libertad a un debido proceso	Inobservancia del derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas en cuanto a la falta de traslado oportuno a las audiencias judiciales programadas	3
Derecho a una vida libre de violencia física, psicológica y sexual	Afectación a los derechos de la mujer por medio de acoso o abuso sexual ejercido por agentes del Estado, prevariándose de sus prerrogativas	2
Acceso a la justicia	Dilaciones indebidas en la admisión y tramitación de recursos legalmente establecidos	3
Acceso a la Justicia	Omisión o negligencia de funcionarios o agentes del Estado frente a la reclamación de una persona para la protección de sus derechos	3
Derecho de las personas privadas de libertad a la salud sin discriminación	Condiciones inadecuadas de saneamiento que afectan a la salud	2
Derecho de las personas privadas de libertad a no ser restringidas en el goce de sus derechos en grado mayor que lo señalado por la ley o la condena	Condiciones inadecuadas para guardar detención provisional	2
Derecho a la salud sin discriminación	Omisión o negligencia para su traslado a un centro hospitalario	3
Debido Proceso Legal	Inobservancia del principio de legalidad	3
Interés Superior del niño, niña y adolescente	Decisiones contrarias al Interés Superior de la Niñez al no asegurarse de las condiciones de vida que llevarían los niños	4
Libertad personal	Detención ilegal	2
Libertad Personal	Detención Arbitraria	2
Propiedad	Actos ilegales y arbitrarios que restringen o afectan el derecho a la propiedad	2
Derecho de los adolescentes a una administración de justicia diferente al régimen de adultos	Aplicación de procedimientos que no están contemplados en la ley penal especial y sin las garantías que exige su condición	2
Derecho de los adolescentes a permanecer en lugares diferentes de los destinados para adultos	Permanencia en centros de detención creados para adultos	2
Derecho de los niños, niñas y adolescentes a una protección especial	Interpretación, aplicación en integración de toda norma y en la toma de decisiones judiciales y administrativas se dé cumplimiento al principio de interés superior	2
Otros derechos		60



Detalle de las diez instituciones públicas más recomendadas y notificadas, por derecho humano y hecho violatorio presuntamente afectado		
1 de junio 2012 al 31 de mayo de 2013		
Derecho humano presuntamente afectado	Hecho violatorio	Frecuencia en que se ha recomendado y notificado
<b>TOTAL</b>		<b>134</b>
<b>VII. MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL</b>		
Vida	Ejecución Extralegal	1
Integridad Personal	Malos Tratos	16
	Tratos Crueles, inhumanos y degradantes	3
Libertad Personal	Detención ilegal o Arbitraria	8
Intimidad Personal	Registros indebidos e indecorosos	3
Derecho de los niños, niñas y jóvenes a no recibir tratos crueles, inhumanos o degradantes	Tratos Crueles, inhumanos y degradantes	4
Derecho de los niños, niñas y adolescentes a la integridad personal	Malos Tratos	3
Derecho de los niños, niñas y adolescentes a la seguridad personal	Coacción e intimidación	3
	Persecuciones o indagaciones ilegales	3
Derecho de la mujer a una vida libre de violencia física, psicológica y sexual	Maltrato físico, psicológico o moral ejercido por agentes del Estado prevaleciendo de sus prerrogativas	5
Derecho de la mujer a la dignidad e intimidad	Realización de registros indebidos e indecorosos	5
Derecho de las personas privadas de libertad a mantener contacto con sus familiares	Registros indebidos o abusivos que atentan contra la dignidad de la persona visitante	3
Seguridad Personal	Intimidación	9
Propiedad	Actos arbitrarios que restringen o afectan el derecho a la propiedad	3
Derecho a la no desaparición forzada de las personas		1
Otros derechos		42
<b>TOTAL</b>		<b>112</b>
<b>VIII. DIRECCIÓN DE CENTROS PENALES Y CENTROS PENITENCIARIOS</b>		
Derecho de las personas privadas de libertad a la vida	Omisión de las autoridades penitenciarias de adoptar medidas necesarias para proteger el derecho a la vida	4
Derecho de las personas privadas de libertad a no ser restringidas en el goce de sus derechos en grado mayor que lo señalado por la ley o la condena	Restricciones arbitrarias de cualquiera de los derechos que no estén limitados por la ley o la condena	10
	Condiciones inadecuadas para guardar detención provisional	4



<b>Detalle de las diez instituciones públicas más recomendadas y notificadas, por derecho humano y hecho violatorio presuntamente afectado</b>		
<b>1 de junio 2012 al 31 de mayo de 2013</b>		
<b>Derecho humano presuntamente afectado</b>	<b>Hecho violatorio</b>	<b>Frecuencia en que se ha recomendado y notificado</b>
Derecho de las personas privadas de libertad a la salud sin discriminación	Condiciones inadecuadas de saneamiento que afectan a la salud	2
	Denegación de Atención Médica	3
Derecho de las personas privadas de libertad a la salud sin discriminación	Omisión de adoptar medidas para dotar a las personas privadas de libertad de medicamentos especiales o esenciales	3
	Omisión o negligencia para su traslado a un centro hospitalario	5
Trabajo	Actos ilegales o atentatorios contra la estabilidad laboral	8
Debido Proceso Administrativo	Inobservancia del derecho de audiencia	8
	Inobservancia del principio de legalidad	3
	Inobservancia del derecho de defensa	8
Derecho de las personas privadas de libertad a ser tratadas humanamente y con el debido respeto a la integridad personal	Tratos Crueles, inhumanos y degradantes	3
Derecho de la mujer a una vida libre de violencia física, psicológica o sexual	Maltrato físico, psicológico o moral ejercido por agentes del Estado prevaleciendo de sus prerrogativas	3
Derecho de las personas privadas de libertad a mantener contacto con sus familiares	Denegación arbitraria o restricciones para recibir visita íntima	2
	Registros indebidos o abusivos que atentan contra la dignidad de la persona visitante	11
Derecho de las personas privadas de libertad de acceso a la salud sin discriminación	Omisión o negligencia para su traslado a un centro hospitalario	4
Otros derechos		62
<b>TOTAL</b>		<b>143</b>
<b>IX. MINISTERIO DE EDUCACIÓN</b>		
Derechos de las niñas, niños y adolescentes a la seguridad jurídica	Inobservancia del principio de legalidad	3
Interés Superior de la Niñez		3
Derechos de las niñas, niños y adolescentes a la educación incluida la formación y orientación profesional	Omisión del Estado para asegurar la continuidad y calidad de la educación en centros de enseñanza privados y públicos	4
	Expulsión ilegal o arbitraria	3

Detalle de las diez instituciones públicas más recomendadas y notificadas, por derecho humano y hecho violatorio presuntamente afectado		
1 de junio 2012 al 31 de mayo de 2013		
Derecho humano presuntamente afectado	Hecho violatorio	Frecuencia en que se ha recomendado y notificado
Derecho de los niños, niñas y adolescentes a no ser abusados, descuidado o maltratados por las personas responsables de su cuidado personal	Abusos, descuidos o maltrato cometidos en instituciones públicas	2
Educación	Expulsiones ilegales o arbitrarias de centros públicos de educación	2
	Inadecuada infraestructura y seguridad en los centros de educación	3
	Restricciones indebidas para la obtención de grados académicos	3
	Discriminación para acceder a la educación	4
	Cobros indebidos	4
Trabajo	Actos ilegales o arbitrarios atentatorios contra la estabilidad laboral	12
Debido Proceso Administrativo	Inobservancia al derecho de defensa	2
	Inobservancia del derecho de audiencia	2
	Inobservancia del principio de legalidad	2
	Inobservancia del principio de seguridad jurídica	2
Otros derechos		7
<b>TOTAL</b>		<b>58</b>
X. FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR		
Trabajo	Denegación de prestaciones o derechos laborales	4
	Actos ilegales o atentatorios contra la estabilidad laboral	3
Derecho de los niños, niñas y adolescentes a la seguridad personal	Coacción e intimidación	3
	Persecuciones o indagaciones ilegales	4
Derecho de los niños, niñas y adolescentes a la integridad personal	Malos tratos	10
	Tratos crueles, inhumanos o degradantes	7
Derecho de los niños, niñas y adolescentes a no ser trasladados o retenidos ilícitamente	Detención arbitraria	5
Derecho de las mujeres a la intimidad	Realización de registros indebido e indecorosos	4
Seguridad personal	Intimidación	11
	Persecuciones ilegales o arbitrarias	9
Integridad personal	Malos tratos	26

Detalle de las diez instituciones públicas más recomendadas y notificadas, por derecho humano y hecho violatorio presuntamente afectado		
1 de junio 2012 al 31 de mayo de 2013		
Derecho humano presuntamente afectado	Hecho violatorio	Frecuencia en que se ha recomendado y notificado
Vida	Ejecución Extralegal	1
Libertad Personal	Detención ilegal o Arbitraria	9
	Detención ilegal	4
Debido proceso administrativo	Inobservancia del derecho de audiencia	3
	Inobservancia del derecho de defensa	5
A no ser trasladados o retenidos ilícitamente	Detención ilegal o arbitraria	3
Propia imagen	Captura de imágenes para su eventual incorporación a un registro determinado	3
Otros derechos		35
<b>TOTAL</b>		<b>149</b>

Fuente: Reporte del Departamento de Seguimiento, PDDH.

### 3. Consolidados estadísticos por Resoluciones Finales<sup>2</sup>

Consolidado de resoluciones finales firmadas con detalle de institución señalada y recomendada, y cómo se resolvió							
1 de junio de 2012 al 31 de mayo de 2013							
ÓRGANO EJECUTIVO							
INSTITUCIÓN	Tipo de resolución emitida						
	R	NR	A	BO	AR	CR	RD
<b>I. Policía Nacional Civil</b>	76	223	76	0	3	46	9
<b>II. Ministerio De La Defensa Nacional</b>	52	45	6	0	0	13	6
<b>III. Dirección General de Centros Penales</b>	29	29	19	9	2	15	13
<b>IV. Ministerio de Justicia y Seguridad Pública</b>	29	0	0	0	0	6	1
<b>V. Ministerio de Salud</b>	13	44	5	5	1	20	9
<b>VI. Dirección General de Migración y Extranjería</b>	13	0	1	0	0	0	0

<sup>2</sup> **Abreviaturas:**  
**R** Responsabilidad  
**NR** No Responsabilidad  
**A** Archivo  
**BO** Buenos Oficios  
**AR** Acatamiento de Recomendaciones  
**CR** Con Recomendaciones  
**RD** Restitución de Derecho

VII. Ministerio de Educación	11	11	12	9	0	9	7
VIII. Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano	11	6	1	0	0	2	3
IX. Inspectoría General de la PNC	11	3	1	0	4	15	3
X. Ministerio de Economía	3	6	0	0	0	0	1
XI. Presidencia de la República	3	1	0	0	0	3	0
XII. Ministerio de Relaciones Exteriores	3	0	0	2	0	0	0
XIII. Ministerio de Gobernación	2	2	0	0	0	0	1
XIV. Ministerio de Trabajo y Previsión Social	2	0	1	0	0	1	2
XV. Ministerio de Hacienda	0	5	0	0	0	0	0
XVI. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales	0	0	1	0	0	0	0
XVII. Ministerio de Agricultura y Ganadería	0	1	0	0	0	0	0
<b>Total Dependencias Órgano Ejecutivo</b>	<b>258</b>	<b>376</b>	<b>123</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>130</b>	<b>55</b>

Fuente: Reporte del Departamento de Seguimiento, PDDH.

Consolidado de resoluciones finales firmadas con detalle de institución señalada y recomendada, y cómo se resolvió							
1 de junio de 2012 al 31 de mayo de 2013							
ÓRGANO LEGISLATIVO							
TOTAL ÓRGANO LEGISLATIVO	Tipo de resolución emitida						
	R	NR	A	BO	AR	CR	RD
<b>TOTAL</b>	0	2	0	0	0	0	0

Fuente: Reporte del Departamento de Seguimiento, PDDH.

Consolidado de resoluciones finales firmadas con detalle de institución señalada y recomendada, y cómo se resolvió							
1 de junio de 2012 al 31 de mayo de 2013							
ÓRGANO JUDICIAL							
TOTAL ÓRGANO JUDICIAL	Tipo de resolución emitida						
	R	NR	A	BO	AR	CR	RD
<b>TOTAL</b>	42	56	21	2	5	28	12

Fuente: Reporte del Departamento de Seguimiento, PDDH.

Consolidado de resoluciones finales firmadas con detalle de institución señalada y recomendada, y cómo se resolvió							
1 de junio de 2012 al 31 de mayo de 2013							
MINISTERIO PÚBLICO							
INSTITUCIÓN	Tipo de resolución emitida						
	R	NR	A	BO	AR	CR	RD
I. Fiscalía General de la República	14	31	10	0	2	22	3
II. Procuraduría General de la República	7	25	10	1	0	6	2
<b>TOTAL INSTITUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO</b>	21	56	20	1	2	28	5

Fuente: Reporte del Departamento de Seguimiento, PDDH.

Consolidado de resoluciones finales firmadas con detalle de institución señalada y recomendada, y cómo se resolvió							
1 de junio de 2012 al 31 de mayo de 2013							
GOBIERNOS LOCALES	Tipo de resolución emitida						
	R	NR	A	BO	AR	CR	RD
<b>TOTAL GOBIERNOS LOCALES</b>	37	75	25	14	6	17	12

Fuente: Reporte del Departamento de Seguimiento, PDDH.

Consolidado de resoluciones finales firmadas con detalle de institución señalada y recomendada, y cómo se resolvió							
1 de junio de 2012 al 31 de mayo de 2013							
INSTITUCIONES AUTÓNOMAS							
INSTITUCIÓN	Tipo de resolución emitida						
	R	NR	A	BO	AR	CR	RD
I. Instituto Salvadoreño Del Seguro Social	4	22	1	4	2	3	10
II. Superintendencia del Sistema Financiero	2	0	0	0	0	0	0
III. Superintendencia de Pensiones	2	0	0	0	0	1	0
IV. Instituto Nacional de los Empleados Públicos (Inpep)	0	2	0	0	0	0	0
V. Junta de Vigilancia de la Profesión Médica (Jvpm)	1	0	0	0	0	2	0
VI. Universidad de El Salvador (UES)	5	0	0	0	0	0	0
VII. Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0	5	6	2	2	3	7



VIII. Administración Descentralizada Intermunicipal del Manejo de Aguas de San Vicente, Santa Clara y Apastepeque (ADIMASSA)	0	2	3	0	0	0	0
IX. Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero (FOSAFFI)	0	1	0	0	0	0	0
X. Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO)	0	3	0	0	0	1	0
XI. Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP)	12	3	0	0	0	0	0
XII. Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL)	0	0	1	0	0	0	0
XIII. Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)	0	1	0	0	0	0	3
XIV. Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0	5	1	0	0	1	1
XV. Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET)	0	2	0	0	0	0	0
XVI. Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Energía	0	1	0	0	0	0	1
XVII. Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado (FOPROLYD)	0	3	0	0	0	0	0
XVIII. Instituto Nacional de los Deportes (INDES)	0	0	0	0	0	0	2
XIX. Junta de la Carrera Docente	2	0	1	0	0	0	0
XX. Bienestar Magisterial	3	0	0	0	0	0	0
XXI. Junta de Vigilancia de la Profesión de Enfermería	3	1	0	0	0	0	0
XXII. Instituto Salvadoreño de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA)	4	3	0	0	0	6	0
XXIII. Defensoría del Consumidor	0	2	2	1	0	0	3
XXIV. Tribunal del Servicio Civil	0	3	0	0	0	0	0
XXV. Centro Nacional de Registros (CNR)	3	0	0	0	0	3	0
XXVI. Registro Nacional de la Persona Natural (RNPN)	6	2	2	3	0	6	0
XXVII. Asociación de Desarrollo Comunitario (ADESCO)	0	0	0	0	0	1	0
XXVIII. Tribunal Supremo Electoral (TSE)	0	3	0	0	0	2	0
XXIX. Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA)	1	0	2	1	0	0	0
<b>TOTAL INSTITUCIONES AUTÓNOMAS</b>	<b>48</b>	<b>64</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>29</b>	<b>27</b>

Fuente: Reporte del Departamento de Seguimiento, PDDH.

## 4. Seguimiento al grado de acatamiento de recomendaciones en Resoluciones Finales

Seguimiento al grado de acatamiento de recomendaciones en Resoluciones Finales 1 de junio de 2012 al 31 de mayo de 2013				
INSTITUCIÓN SEÑALADA	Grado de acatamiento			
	Cumplida	No cumplida	Parcialmente cumplida	Sólo informó
I. ÓRGANO EJECUTIVO				
Ministerio de Educación			5	
Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada		1		
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	2	1	6	1
Ministerio de la Defensa Nacional	6	1	7	
Dirección General de Centros Penales y Centros Penitenciarios	1	3	7	
Policía Nacional Civil	10	3	5	
Inspectoría General de la Policía Nacional Civil	15		13	1
Dirección General de Migración y Extranjería			1	
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública	1	2		
Viceministerio de Hacienda	1			
Ministerio de Relaciones Exteriores			1	
Ministerio de Obras Públicas			1	
Secretaría de la Cultura de la Presidencia de la República			1	
Secretaría de Inclusión Social			1	
Viceministerio de Transporte			1	
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>	<b>11</b>	<b>49</b>	<b>2</b>

Fuente: Reporte del Departamento de Seguimiento, PDDH.

Seguimiento al grado de acatamiento de recomendaciones en Resoluciones Finales 1 de junio de 2012 al 31 de mayo de 2013				
INSTITUCIÓN SEÑALADA	Grado de acatamiento			
	Cumplida	No cumplida	Parcialmente cumplida	Sólo informó
II. ÓRGANO JUDICIAL				
Corte Suprema de Justicia (CSJ)	6	1	2	
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Seguimiento al grado de acatamiento de recomendaciones en Resoluciones Finales 1 de junio de 2012 al 31 de mayo de 2013				
INSTITUCIÓN SEÑALADA	Grado de acatamiento			
	Cumplida	No cumplida	Parcialmente cumplida	Sólo informó
III. MINISTERIO PÚBLICO				
Fiscalía General de la República (FGR)	10	2	8	1
Procuraduría General de la República (PGR)	3		2	
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>1</b>
Seguimiento al grado de acatamiento de recomendaciones en Resoluciones Finales 1 de junio de 2012 al 31 de mayo de 2013				
INSTITUCIÓN SEÑALADA	Grado de acatamiento			
	Cumplida	No cumplida	Parcialmente cumplida	Sólo informó
IV. GOBIERNOS LOCALES				
Alcaldía Municipal de San Salvador	2		1	
Alcaldía Municipal de Apopa	2			
Cuerpo de Agentes Metropolitanos de la Alcaldía Municipal de San Salvador	1			
Alcaldía Municipal de Ilopango	1			
Alcaldía Municipal de San Martín		1		
Cuerpo de Agentes Metropolitanos de la Alcaldía Municipal de Soyapango			1	
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	

Seguimiento al grado de acatamiento de recomendaciones en Resoluciones Finales 1 de junio de 2012 al 31 de mayo de 2013				
INSTITUCIÓN SEÑALADA	Grado de acatamiento			
	Cumplida	No cumplida	Parcialmente cumplida	Sólo informó
V. INSTITUCIONES AUTÓNOMAS				
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	3		4	
Junta de Vigilancia de la Profesión Médica (JVPM)			5	2
Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSEA)		1		
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA)			8	
Centro Nacional de Registros (CNR)		1		
Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ)	1			
Junta de la Carrera Docente				1
Bienestar Magisterial	1			
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)		1		
Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)		1		
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>3</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>66</b>	<b>19</b>	<b>80</b>	<b>6</b>

Fuente: Reporte del Departamento de Seguimiento, PDDH.









Tengo el agrado de presentar a la Honorable Asamblea Legislativa el sexto Informe Anual de Labores, de mi gestión realizada del 1 de junio de 2012 al 31 de mayo de 2013, en cumplimiento del artículo 131, numeral 36 de la Constitución de la República, en el que se rinde cuentas del ejercicio del mandato constitucional y legal de velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos y supervisar las actuaciones de la administración pública frente a los particulares, así como dar a conocer la posición institucional frente a los problemas que afectan el bienestar y la dignidad de la población salvadoreña, en especial la de los grupos en situación de vulnerabilidad, y que, por tanto, requieren de acciones concretas para su pronta solución; por tanto, constituye un aporte valioso para evidenciar el desempeño de las entidades públicas, y encauzar su compromiso con el respeto y la garantía de los derechos humanos.

En el transcurso del período, continuamos con la implementación del Plan Estratégico Institucional 2011-2014, enfocado en cinco áreas: protección de los derechos humanos; análisis e incidencia de políticas públicas, normas y prácticas públicas; promoción y educación en derechos humanos; acciones y relaciones externas; y fortalecimiento institucional; las cuales se materializan en los Planes Anuales Operativos del 2012 y 2013, a través de un conjunto de acciones, indicadores de desempeño y metas para la atención de denuncias ciudadanas, así como mediante diversas actividades que se consideran importantes para cumplir con el mandato constitucional y legal.

Refrendó mi convicción de seguir colaborando con todas las instituciones públicas y privadas, así como con las organizaciones de la sociedad civil, para que juntos podamos construir una realidad en la que prevalezca la dignidad de las personas, el acceso efectivo al goce de los derechos humanos, las condiciones de igualdad y justicia que permitan el desarrollo de todos los sectores sociales y la cultura de la legalidad y respeto irrestricto de los derechos humanos.

***Lic. Oscar Humberto Luna***

Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos

*Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos  
5a. Calle Poniente y 9a. Avenida Norte # 535, San Salvador, El Salvador  
[www.pddh.gob.sv](http://www.pddh.gob.sv)  
Teléfono y Fax: (503) 2520-4344 y (503) 2520-4363.*